República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA
SALA CIVIL

Magistrado Ponente: Iván Darío Zuluaga Cardona

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Proceso	Verbal – Acción de protección al consumidor
Demandante	Marcos Pimienta Betancur y otros
Demandado	Fundación CODERISE en Liquidación
Radicado	110013199 001 2022 05088 01
Instancia	Segunda
Decisión	Admite recurso de apelación

1. Se admite en el efecto devolutivo el recurso de apelación interpuesto la sociedad demandada, contra la sentencia proferida el 31 de octubre de 2023 por la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, en el radicado en referencia.

2. Tramitar el presente asunto en segunda instancia atendiendo el procedimiento previsto en el artículo 12 del Ley 2213 de 2022[1].

3. Ejecutoriado este auto, el extremo apelante deberá sustentar el recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes, en la dirección de correo electrónico: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

4. De la sustentación presentada oportunamente, por secretaría, córrase traslado por el término de cinco (5) días a la parte contraria.

[1] De conformidad con lo previsto en el inciso 2º del artículo 40 de la Ley 153 de 1887 modificado por el artículo 624 del C.G.P. "(…) los recursos interpuestos (…) se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos (…)".

5. En caso de no sustentarse oportunamente el recurso será declarado desierto.

6. Advertir que, de conformidad con lo previsto por el inciso 4 del artículo 109 del C.G.P., los memoriales, incluidos los mensajes de datos, se entenderán presentados oportunamente si son recibidos antes del cierre del despacho del día en que vence el término, es decir, antes de la cinco de la tarde (5:00 p.m.).

7. Por economía procesal y para evitar la pérdida automática de competencia, de una vez se ordena prorrogar el término para fallar este asunto por seis (6) meses más, contados a partir del día siguiente al vencimiento del término inicial.

NOTIFÍQUESE

Firma Electrónica
IVÁN DARÍO ZULUAGA CARDONA
Magistrado

Firmado Por:
Ivan Dario Zuluaga Cardona
Magistrado
Sala 010 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **559a4f66aad0ca1138efd3a7b756603a3b9575aa88ac508c33f691abbcf9480e**
Documento generado en 29/02/2024 02:12:00 p. m.

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.
SALA CIVIL

Bogotá, D.C., veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro.

Proceso:	**Ejecutivo**
Demandante:	**Edith Trujillo Portela**
Demandado:	**Patricia Posada Palomares**
Radicación:	**11001310305020210046802**
Procedencia:	**Juzgado 50 Civil del Circuito de Bogotá**
Asunto:	**Apelación sentencia**
AI-023/24	

Se resuelve sobre la solicitud de práctica de pruebas elevada en esta instancia.

<u>Antecedentes</u>

1. Los señores Edith Trujillo Portela, Luis Ignacio Bastidas Paz y Mario Fernando León Trujillo presentaron demanda ejecutiva en contra de la señora Patricia Posada Palomares, para obtener el pago de la obligación contenida en una letra de cambio.

2. El 14 de octubre de 2021 se libró la orden de apremio.

3. Enterada la demandada, contestó la demanda y en su libelo pidió como prueba que, por intermedio del Instituto de Medicina Legal, se "*(...) designe internamente un perito experto en pruebas grafológicas y dactilares con miras a que establezca la autenticidad de la firma y la huella dactilar colocada en la letra de cambio usada en este proceso ejecutivo y, poder concluir si la autora es la ejecutada*"[1].

4. La solicitud probatoria se decretó en auto del 12 de julio de 2023; pero, en audiencia del 29 de noviembre siguiente, la juez de primera instancia prescindió de ella al considerar que el medio de convicción era impertinente, ya que la

[1] **Folio 4, PDF 15ExcepcionesMerito20220817, C01Principal, PrimeraInstancia.**

demandada al absolver su interrogatorio reconoció que sí suscribió el título valor. Contra esa determinación se promovieron los remedios ordinarios y, al resolverlos, se mantuvo incólume la providencia cuestionada.

5. Agotado el trámite propio del proceso ejecutivo, en sentencia de 29 de noviembre de 2023 se declararon no probadas las excepciones de mérito, la tacha de falsedad y, por lo tanto, se ordenó seguir con la ejecución en la forma prevista en el mandamiento de pago.

6. Por ser contrario a sus intereses, el extremo ejecutado promovió recurso de apelación contra el fallo de primera instancia. El 15 de enero último se admitió a la alzada.

7. En el término de la ejecutoria, el apelante solicitó[2]:

> Como apoderado de la ejecutada ***PATRICIA POSADA PALOMARES***, de conformidad con el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo, en forma respetuosa solicito ordenar la continuidad con la práctica de la prueba pericial ordenada por el *a quo* al Instituto de Medicina Legal, en lo referente a la autenticidad del contenido de la letra de cambio base de la presente ejecución, toda vez que la misma fue desconocida oportunamente por nosotros, debido a que la poderdante únicamente firmó la letra de cambio por $10.000.000oo y no $210.000.000oo, como se hizo figurar por los ejecutantes en el proceso, después de haberse agregado con minúscula las palabra "dos" e igualmente el número "2".

Consideraciones

El régimen probatorio en el ordenamiento nacional está reglado en sus oportunidades para solicitar, practicar y contradecir los elementos de juicio, sin que el juez o las partes le sea permitido soslayar su observancia. Ello por virtud del principio de preclusión o eventualidad que direcciona el trámite procesal.

2. El legislador previó un límite para allegar o solicitar pruebas, el cual está determinado en los artículos 173 y 327 de la Ley 1564 de 2012.

3. En relación con la petición de pruebas en segunda instancia, el legislador estableció la oportunidad y los requisitos que deben cumplirse para que proceda su decreto.

---

[2] **PDF 07Sustentacion, CuadernoTribunal.**

Así, conforme el artículo 327 *ibídem*, solo pueden solicitarse en el término de la ejecutoria del auto que admite la apelación de la sentencia, siempre y cuando se encuentre en cualquiera de los siguientes casos: (i) cuando todas las partes las pidan de común acuerdo; (ii) cuando decretadas en la primera instancia no se practicaron por culpa no imputable a la parte que las solicitó; (iii) cuando versen sobre hechos ocurridos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia; (iv) cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en la primera instancia por fuerza mayor, caso fortuito, o por obra de la parte contraria y (v) cuando pretendan desvirtuar los documentos de que trata el ordinal anterior.

4. En el *sub lite*, si bien la petición fue radicada oportunamente, improcedente es el decreto de la experticia requerida por el demandado.

4.1. Claro resulta, que la prueba solo fue pedida por uno de los extremos del litigio, no versa sobre hechos ocurridos luego de que feneciera la oportunidad probatoria y tampoco es de naturaleza documental.

4.2. Ahora, el medio de convicción cuya práctica aquí se depreca, fue decretado en la primera instancia y, en efecto, no se practicó; empero, ello obedeció a que tras recaudar los interrogatorios se estimó su impertinencia por cuanto la finalidad para la que había invocado: desconocer la autoría del instrumento cambiario, la desvirtuó la misma ejecutada, quien reconoció haber firmado la letra de cambio.

5. Así, denota esta Colegiatura que la probanza que se pide, como viene de verse, fue solicitada ante la primera instancia y, aunque lo que aquí se suplica es que se dé continuidad a su práctica, lo es bajo el argumento de desconocer "*(...) la autenticidad del contenido de la letra de cambio, base de la ejecución (...)*".

A efectos de verificar la pertinencia de la prueba deprecada, es necesario evaluarla de cara a las excepciones propuestas, denominadas, "*inexistencia de la obligación* ejecutada", "*cobro de lo no* debido", "usura", "*pago total de la obligación*", "*innominada o genérica*", "*la letra de cambio aparece creada en plena pandemia cuando nadie se podía movilizar por las calles*", "*ausencia de firma de letra en blanco*", "*mala fe*", "*perjuicios para imponerse en la sentencia*", "*pérdida y/o reducción de intereses*" y "*falsificación y/o alteración de la firma de la ejecutada y contenido de la letra*" última que a continuación se reproduce:

FALSIFICACIÓN Y/O ALTERACIÓN DE LA FIRMA DE LA EJECUTADA Y CONTENIDO DE LA LETRA

Acorde con el dicho de mi poderdante, ella recuerda haber firmado la letra de cambio por el capital que se acepta existió pero que ya fue cancelado, por la suma de $50.000.000oo, pero nunca por lo cobrado, o sea, que la cuantía de los $210.000.000oo más los intereses sólo ha sido una creación de los ejecutantes que tendrán que demostrar cómo procedieron para llegar a esta suma.

¿Qué pudo haber sucedido? Bueno, le corresponderá a los ejecutantes probar que no han incurrido en ninguna ilegalidad o aprovechamiento; sin embargo, probaremos lo que aquí estamos afirmando por ser coherente con la verdad.

De este modo, mi cliente manifiesta que tanto *la firma como la huella dactilar que aparecen en la letra de cambio no son de su autoría.*

Además, que fue enfática en indicar que al firmar la letra de cambio no dejó espacios en blanco:

AUSENCIA DE FIRMA DE LETRA EN BLANCO

Mi mandante jamás firmó una letra en blanco, por lo cual, los ejecutantes no podrán afirmar que procedieron a llenarla, lo que se cae de su peso porque era esencial la carta de instrucciones que, por supuesto no existe, como no podía existir porque el crédito es artificial.

Ante ese escenario, se advierte que la pericia para los fines perseguidos, no guarda relación con la defensa antes propuesta, pues, aunque el título valor se tildó de espurio al asegurar que la huella y firma allí plasmadas no eran de autoría de la ejecutada, sucede que ante esta Corporación se da un giro a la estrategia defensiva, y se alega que lo que no corresponde es el contenido del cartular, cuando la suscripción de este ya fue reconocida por la misma encartada.

Y es que, como se hizo remembranza en el numeral 3° del acápite precedente, el concepto experto se requirió para que

IV. PRUEBAS DE LA EJECUTADA

Peritaje

Con base en el artículo 234 del CGP, sírvase solicitar los servicios del Instituto de Medicina Legal, a efecto de que designe internamente un perito experto en pruebas grafológicas y dactilares con miras a que establezca la autenticidad de la firma y la huella dactilar colocada en la letra de cambio usada en este proceso ejecutivo y, poder concluir si la autora es la ejecutada; en consecuencia, ruego poder oficiar. Además, por ser este documento fundamental para la decisión acorde al artículo 272, inciso 4º del CGP, que advierte *"la verificación de autenticidad también procederá de oficio cuando el juez considere que el documento es fundamental para su decisión".*

En ese sentido fue decretada la prueba en auto del 12 de julio de 2023:

> **Dictamen pericial:** Para su práctica, el demandado deberá aportarla conforme lo exige el artículo 227 de CGP, cuyo objeto será la realización de un cotejo grafológico y dactiloscópico, que establezca la autenticidad de la firma y la huella dactilar colocada en la letra de cambio insertada en este proceso ejecutivo y, poder concluir, si la autora es la ejecutada.

Es indiscutible que el objeto de la pericia era establecer *"la autenticidad de la firma y la huella dactilar colocada en la letra de cambio",* lo que, se itera, la señora Posada Palomares ya admitió. Resultando innecesario "continuar con la práctica" de la prueba; y en todo caso, inviable, proceder con ella para un objetivo distinto de aquel para el que se decretó.

6. Conforme a lo anterior, es posible concluir que la probanza solicitada ante esta Sede:

6.1. Es notoriamente impertinente porque en las excepciones de mérito no se planteó nada sobre el contenido de la letra de cambio; aunque se dijo que la obligación era inexistente porque la deuda inicial era de $50'.000.000, ningún reproche se hizo sobre la alteración del contenido del título, que por demás dijo haber firmado lleno por completo.

6.2. Es manifiestamente superflua ya que al estar plenamente aceptado por la ejecutada que sí firmó el instrumento base de la ejecución, emerge inútil acudir a un profesional para que tras su análisis experto concluya lo que ya está suficientemente probado y que, por lo tanto, no es materia de debate.

6.3. Con todo es inadmisible que, según la conveniencia de la parte, esta transforme sus argumentos defensivos ante el fracaso de los propuestos, cuando lo cierto es que la oportunidad para establecer las razones que se constituyen como el baluarte para la salvaguarda de los intereses de su defendida, se concreta desde la contestación de la demanda.

7. En conclusión, no hay lugar a decretar los medios de convicción pedidos, pues como ya se expuso la probanza no cumple con los requisitos intrínsecos; en otras palabras, sobra, por no ser idónea y no ofrecer utilidad alguna al proceso.

Decisión

Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., Sala Civil de Decisión RESUELVE:

1. NEGAR el decreto de la prueba solicitada en esta instancia por el apoderado de la parte demandada.

2. Por Secretaría, contrólense los términos concedidos en auto precedente.

Notifíquese,

RUTH ELENA GALVIS VERGARA
Magistrada

Firmado Por:
Ruth Elena Galvis Vergara
Magistrada
Sala Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **d8b4fb6daa97340fbd6dad0c752ab7c2d78d3bdd0398150e0376c4c6cc10fc00**
Documento generado en 29/02/2024 01:02:57 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ - SALA CIVIL

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

Radicación 110013103049 2021 00237 01

Por encontrarse legalmente procedente, el Despacho dispone:

Admitir en el efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 31 de enero 2024[1], por el Juzgado 49 Civil del Circuito de Bogotá, D.C.

Una vez cobre ejecutoria esta providencia, regrese al Despacho para lo que corresponda.

NOTIFÍQUESE.

[1] Hora 2:13:44 Archivo *"061AudienciaSentencia*" del "*01CuadernoPrincipal"*

Firmado Por:

Clara Ines Marquez Bulla

Magistrada

Sala 003 Civil

Tribunal Superior De Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **f1cd611c3d32f9953ce0d79e1e6f29964b3a8d003cdc5061869791e29f12aee5**

Documento generado en 29/02/2024 08:12:00 a. m.

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA SÉPTIMA CIVIL DE DECISIÓN

Bogotá, D.C., veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro

11001 3103 046 2021 00262 01

Ref. proceso verbal de Diana Alejandra Aramendiz Pava frente a la Cooperativa de Transportes Velotax Ltda. (y otra)

Como quiera que la Cooperativa de Transportes Velotax Ltda. no sustentó su recurso de apelación en la oportunidad que consagra el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022 (que se computó a partir de la ejecutoria del auto de 15 de diciembre de 2023, mediante el cual se admitió el recurso), el suscrito Magistrado DECLARA DESIERTA esa alzada, que fue interpuesta contra la sentencia de primera instancia.

Lo anterior, en atención a las previsiones del inciso final del artículo 322 del C. G. del P., por cuya virtud, "**el juez de segunda instancia declarará desierto el recurso de apelación contra una sentencia que no hubiere sido sustentado**".

En firme este proveído, reingrese el expediente al despacho para continuar con el trámite del recurso de apelación que impetró Zurich Colombia Seguros S.A.

Notifíquese y cúmplase

ÓSCAR FERNANDO YAYA PEÑA
Magistrado

Firmado Por:
Oscar Fernando Yaya Peña
Magistrado
Sala 011 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,

conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ac7cf21816432416ceedfb3f59b6ba8e422a2524e8cbebca4a3d484370155c7d**

Documento generado en 29/02/2024 02:24:28 p. m.

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA
SALA CIVIL

Magistrado Ponente: Iván Darío Zuluaga Cardona

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Proceso	Verbal – Nulidad absoluta de contrato de compraventa de bien inmueble
Demandante	William MaldonadoParís, Edilma Maldonado París, Beatriz Maldonado París y RodrigoAzriel Maldonado París
Demandado	Edgar Augusto Ríos Chacón como agente liquidador de Simah Ltda., Banco de Occidente S.A. y Ecatherine Ferer Mora
Radicado	110013103 042 2021 00286 02
Instancia	Segunda
Decisión	Resuelve solicitud de adición

ASUNTO

Se resuelve la solicitud de adición presentada por los demandantes Edilma y RodrigoAzriel Maldonado París, respecto del auto del 05 de febrero de 2024 que resolvió los pedidos de nulidad planteados contra las sentencias de primera y segunda instancia.

ANTECEDENTES

1. En proveído del 05 de febrero de 2024 fueron denegadas las solicitudes de nulidad formuladas por los demandantes contra las decisiones de fondo de primera y

segunda instancia; oportunidad en la que también se condenó en costas a los proponentes[1].

2. El apoderado de los codemandantes Edilma y RodrigoAzriel Maldonado París solicitó la adición de lo resuelto, en procura de un pronunciamiento complementario sobre[2]:

> "*1) la capacidad dada la ineficacia, y por tanto, ausencia de obligatoriedad de la designación – agente liquidador – condición jurídica en que concurre - el vendedor en la escritura pública - objeto de petición de nulidad absoluta, irregularidad configurativa de una extralimitación en el ejercicio de funciones públicas tanto del nominador como del – agente distrital - particular en ejercicio públicas, asunto que por orden legal se encuentra asignado a la jurisdicción contenciosa administrativa, 2) la omisión al deber legal impuesto al operador judicial de imprimir el trámite que legalmente corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada, pues se asumió competencia en contra evidencia del fenómeno de la ineficacia en la designación – agente liquidador – condición jurídica con que comparece el vendedor de la unidad inmobiliaria, y controvertida desde el inicio en el escrito de la demanda".*

CONSIDERACIONES

1. Para que proceda la figura impulsada, regulada en el artículo 287 del Código General del Proceso, debe de tratarse de una omisión en la resolución de un punto crucial que debió serlo en determinado proveído; sin que toda falta que se le endilgue al juzgador pueda llevar a la complementación, sino que únicamente lo son aquellos aspectos que debían ser objeto de obligatoria consideración. Sobre la materia ha referido el Alto Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria[3]:

> *"Sobre la misma, esta Corporación ha explicado que "para la complementación del fallo se requiere que se haya omitido un extremo de la litis o un punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento obligatorio", de donde se extrae que "no es cualquier inconformidad de las partes la que puede ser aducida a fin de lograr la aclaración o adición del proveído sino, justamente, alguno de los motivos específicamente señalados en las normas precitadas"[4].*
>
> *Parejamente se ha afirmado por la Sala, que la complementación del fallo no es procedente para "incorporar informaciones o razonamientos adicionales en una sentencia, sino que busca la resolución de algún puntal del conflicto que la autoridad judicial pasó por alto al momento*

[1] Cuaderno de segunda instancia, archivo 39.
[2] Ibidem, archivo 41.
[3] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Providencia AC796-2022. MP. Dr. Álvaro Fernando García Restrepo.
[4] CSJ AC781-2014.

de emitir su providencia"[5]*. No es, por lo mismo, el escenario para disquisiciones o profundizaciones redundantes, y que no se enmarcan dentro de lo que por ley es indispensable u obligatorio señalar."*

2. Se puntualiza que, al interior del auto contendido quedaron expuestos los argumentos que llevaron al rechazo de lo protestado por la parte; sin tratarse la figura impulsada (de adición), de un medio de impugnación y menos aún, para alcanzar en este estadio del litigio una variación del talante que se insiste, de falta de jurisdicción.

Así, las desavenencias resaltadas por el extremo se enfocan de forma clara y directa en atacar los razonamientos que soportan la determinación y a insistir en lo que fue motivo del memorial de nulidad; no sobra decir, al no compartir el criterio del funcionario de segundo grado; más no enmarcan lo que en realidad previó el legislador para integrar lo que de manera obligatoria debía ser objeto de pronunciamiento y no lo fue.

En los anteriores términos, se pasa a negar lo pedido al no hallarse un vacío en el interlocutorio dictado de forzoso pronunciamiento.

3. Por último se recuerda a las partes el contenido del numeral 2, del artículo 43 del Código General del Proceso, que direcciona como poderes de ordenación e instrucción el rechazar "*cualquier solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación manifiesta*"; más cuando, ya se dictó sentencia de segunda instancia, misma que no admite en su contra ningún recurso ordinario.

Por lo expuesto, el suscrito Magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,

RESUELVE

Primero. Negar la solicitud de adición de la providencia emitida el 05 de febrero de 2024, en el asunto de la referencia.

[5] CSJ AC AC4209-2021

Segundo. Devolver el expediente a la autoridad de origen, una vez ejecutoriada esta providencia.

NOTIFÍQUESE,

Firma Electrónica

IVÁN DARÍO ZULUAGA CARDONA

Magistrado

Firmado Por:
Ivan Dario Zuluaga Cardona
Magistrado
Sala 010 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **daa7dc0b61e3be2f91d7bd33134c068fbbe99fa3a2dbf8f49f9f6d2b2650e5e1**
Documento generado en 29/02/2024 01:58:59 p. m.

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA DE DECISIÓN CIVIL

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Proceso	Verbal – Nulidad absoluta de contrato de compraventa de bien inmueble
Demandante	William MaldonadoParís, Edilma Maldonado París, Beatriz Maldonado París y RodrigoAzriel Maldonado París
Demandado	Edgar Augusto Ríos Chacón como agente liquidador de Simah Ltda., Banco de Occidente S.A. y Ecatherine Ferer Mora
Radicado	110013103 042 2021 00286 02
Instancia	Segunda
Decisión	Rechaza nulidad

ASUNTO

Se pasa a resolver lo pertinente en atención a la solicitud de nulidad impetrada por los codemandantes William y Beatriz Maldonado París, contra el auto del 05 de febrero de 2024, que dirimió los pedidos de nulidad de las sentencias de primera y segunda instancia.

ANTECEDENTES

1. En interlocutorio del 05 de febrero de 2024 fueron denegadas las solicitudes de nulidad formuladas por los demandantes contra las decisiones de

fondo de primera y segunda instancia; oportunidad en la que también se condenó en costas a los proponentes[1].

2. Reseñó el interesado en el nuevo escrito de nulidad que, al estar involucrada la sentencia de segunda instancia dentro de lo pedido y decidido, debió resolverse el medio propuesto por la Sala de Decisión y no por el magistrado sustanciador[2].

CONSIDERACIONES

1. En el particular debe de recordarse que, a tono con el inciso 4º del artículo 135 del Código General del Proceso, el funcionario judicial debe rechazar de plano el pedimento de nulidad cuando *"se funde en causal distinta de las determinadas en este capítulo o en hechos que pudieron alegarse como excepciones previas, o la que se proponga después de saneada o por quien carezca de legitimación"*.

En materia civil, rige el principio de la taxatividad o especificidad, en virtud del cual *"el proceso es nulo en todo o en parte sólo por las causales expresamente determinadas en la ley lo cual pone de presente que a pesar de la existencia de vicios graves en la actuación, no habrá lugar a la invalidez, si no existe un texto legal que expresamente la consagre como motivo de anulación*"[3].

2. En el concreto, lo alegado como nulidad no tiene origen en ninguno de los preceptos estatuidos en el artículo 133 del C.G.P., y tampoco se avizora que, tal sanción se imponga en norma especial; más cuando el extremo no manifestó una fuente legal que apoyara su inconformidad.

Seguido debe valorarse que, el artículo 35 de la codificación procesal aplicable especifica que, corresponde a las salas de decisión dictar las sentencias y los autos que decidan "*la apelación contra el que rechace el incidente de liquidación de*

[1] Cuaderno de segunda instancia, archivo 39.
[2] Ibidem, archivo 40.
[3] Fernando Canosa Torrado. Las Nulidades en el Código General del Proceso. Ediciones Doctrina y Ley. Séptima Edición. 2017. Pág. 18.

perjuicios de condena impuesta en abstracto o el que rechace la oposición a la diligencia de entrega o resuelva sobre ella", y seguido, que, *"[el] magistrado sustanciador dictará los demás autos que no correspondan a la sala de decisión."*

Estos mandatos tornan evidente el estar ante una decisión de ponente y no de sala, al no encajar la nulidad refutada en ninguno de los temas anteriores; ni en el previsto en el inciso segundo del artículo 332 *ejusdem*.

3. Así las cosas, hay lugar a denegar de entrada lo propuesto.

Por lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,

RESUELVE

Primero. Rechazar de plano la solicitud de nulidad formulada por los codemandantes William y Beatriz Maldonado París; bajo las razones antes señaladas.

Segundo. No condenar en costas a la parte, al no evidenciarse causadas con esta actuación.

Tercero. Devolver el expediente a la autoridad de origen, una vez ejecutoriada esta providencia.

NOTIFÍQUESE

Firma Electrónica

IVÁN DARÍO ZULUAGA CARDONA

Magistrado

Ivan Dario Zuluaga Cardona

Firmado Por:

Magistrado

Sala 010 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **d80828451c34bd6f0a4923b86359f404c7d12cae04a7d4c70a6c0e720b2f68db**

Documento generado en 29/02/2024 02:02:50 p. m.

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.

Sala Civil de Decisión

Magistrada Sustanciadora

SANDRA CECILIA RODRÍGUEZ ESLAVA

CLASE DE PROCESO	Verbal
DEMANDANTE	La Previsora S.A. Compañía de Seguros
DEMANDADO	Nelcy Cuellar Ibáñez
RADICADO	11001 31 03 041 2021 00270 01
PROVIDENCIA	Sentencia 07
DECISIÓN	**REVOCA**
DISCUTIDO Y APROBADO	veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
FECHA	Veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia de 31 de julio de 2023, proferida por el Juzgado Cuarenta y Uno Civil de Circuito de esta ciudad, conforme a lo previsto en la Ley 2213 de 2022.

I. ANTECEDENTES

La entidad actora solicitó declarar a Nelcy Cuellar Ibáñez civilmente responsable por el pago que aquella realizó a la Contraloría General de la República en cumplimiento al fallo de responsabilidad fiscal No. 001., emitido dentro del asunto bajo el consecutivo de radicado 2014-03582. En consecuencia, deprecó condenar a la convocada a reintegrarle la suma $298.416.404, con intereses moratorios liquidados a la tasa máxima permitida legalmente[1].

Fundamento fáctico: Como sustento de tales pretensiones, en resumen, relató:

[1] Folio 5 del archivo "*02EscritoDemanda.pdf"* de la carpeta "*01CuadernoPrincipal"* de "*PrimeraInstancia".*

La Previsora S.A., en desarrollo del encargo fiduciario No. 955 de 2008, suscrito con el Ministerio de Educación Nacional, el 3 de marzo de 2011 celebró con la entidad Diócesis de Mocoa -Sibundoy, el Convenio 405-61-11, para la atención del servicio formativo a 5796 estudiantes matriculados en diferentes instituciones pedagógicas rurales de los municipios del departamento del Putumayo. Además, la enjuiciada era la interventora del aludido pacto y para el cumplimiento del tratado, adquirió la póliza No 3000985.

Agregó que, a través del proveído 001 de 21 de febrero de 2018, la Contraloría General de la República declaró fiscalmente responsables a los comentados negociantes y a la actora, como tercera garante, condenándolos a todos a pagar, en forma solidaria, el *quantum* de $847.136.684, decisión confirmada en sede de recurso de reposición.

En atención a la aludida determinación, procedió a hacer efectivos los contratos de seguros y consecuentemente, realizó un pago por valor de $734.036.073. Posteriormente, intimó a la convocada con el fin de solicitar el reintegro de lo cancelado, sin obtener fruto alguno.

Añadió que el 22 de octubre de 2019, instauró demanda ejecutiva contra la Diócesis de Mocoa -Sibundoy-, cuyo soporte báculo de la acción fue un pagaré otorgado por tal entidad, como garantía de la póliza No 3000046; empero, dicho litigió terminó por acuerdo de transacción celebrado el 15 de noviembre siguiente con la ejecutada, por $435.619.669, motivo por el cual se le declaró a paz y salvo[2].

Actuación procesal: Mediante auto de 8 de julio de 2021[3], se admitió a trámite el asunto, ordenó correr traslado, así como la intimación de ley a la demandada, acto procesal que se surtió bajo las previsiones del artículo 8 de la Ley 2213 de 2022, resultando silente la convocada, conforme se advirtió en providencia de 25 de enero postrero[4].

---

[2] Folios 3 a 5 del archivo "*02EscritoDemanda.pdf", ibidem.*
[3] Archivo "*05AutoAdmisorio.pdf", ibidem.*
[4] Archivo "*24AutoNotificacion.pdf", ibidem.*

Sentencia impugnada: La *a quo* negó las pretensiones, al encontrar insatisfechos los presupuestos axiológicos de la acción de subrogación legal, en especial, el pago de la indemnización, toda vez que no existía certeza de la retribución realizada por la actora en cumplimiento al fallo de responsabilidad fiscal, comoquiera que en los hechos narrados en el libelo introductor, aseveró haber cancelado $734.036.073, empero, en el soporte de consignación del Banco Popular, que se arrimó para dar credibilidad a tal afirmación, se observa un depósito por $748.515.688,81; es más, los datos registrados en tal medio de convicción, no concuerdan con el fallo condenatorio.

Agregó además que era imposible entrar a estudiar la responsabilidad de la acusada, ante la incertidumbre del resultado del recurso de alzada interpuesto contra la decisión emitida dentro del asunto fiscal[5].

Apelación: El extremo actor impugnó el comentado veredicto. Así, en la oportunidad para formular sus reparos[6] y, luego al sustentar la alzada[7], expuso que la juzgadora no interpretó adecuadamente la demanda, por cuanto en el presente caso, se buscaba el recobro de los dineros que legalmente pagó en cumplimiento a la condena de responsabilidad fiscal impuesta a la acusada, en virtud de la efectividad de la póliza de seguros para el acatamiento del contrato 405-61-11, conforme se lo faculta el artículo 1096 del Código de Comercio, demostrando cabalmente la subrogación legal que le da derecho a la condena rogada.

<u>Pronunciamiento de la demandada</u>: En el término de traslado, la misma guardó silencio.

II. PROBLEMA JURÍDICO

En el caso *sub examine,* se torna pertinente entrar a analizar, en primer lugar, si la *iudex* realizó una indebida interpretación de la demanda, como

[5] Archivo "*26SentenciaPrimeraInstanciaa.pdf", ibidem.*
[6] Archivo "*27RecursoApelacion.pdf", ibidem.*
[7] Archivo "*06SustentaApelacion.pdf"* de la carpeta "*CuadernoTribunal".*

lo alega la apelante y segundo, si le asiste razón a la sociedad recurrente en sus reparos planteados, relacionados con la demostración de los presupuestos axiológicos para la prosperidad de la acción de subrogación legal impetrada.

III. CONSIDERACIONES

1. Para dar respuesta al primer cuestionamiento, ha de decirse que, la interpretación de la demanda es un imperativo legal, cuando en ella hay una obscuridad, confusión o falta de claridad en su redacción; sin embargo, el juzgador al momento de acometer ese análisis, puede terminar "*tergiversando -en forma evidente- el contenido y alcances de esa pieza procesal, alterando también la caracterización del conflicto, y su subsunción en las normas sustanciales pertinentes*"[8].

Sobre la materia, la Corte Suprema de Justicia, ha decantado:

> "*(…) cuando el resultado de tan significativa labor hermenéutica no refleja fielmente lo reclamado en la demanda, en particular si el fallo incorpora, antojadizamente, la percepción del juez sobre la dimensión y naturaleza de los hechos y pretensiones, '…como ocurre cuando tergiversa de modo evidente su texto, o lo hace decir lo que no expresa o, también cuando cercena su real contenido (…)', 'el sentenciador incurre en yerro de facto, pues no se puede olvidar que la demanda, no solo constituye una pieza con la cual se inicia el proceso, sino que a la vez asume el carácter de elemento o medio de convicción' (G. J. Tomo LXVII, 434; CXLII, pág. 200) (Sent. Cas. Civ. De 22 de agosto de 1989), equivoco denunciable en casación, al amparo de la causal primera del artículo 368 ídem (hoy numeral 2º del artículo 336 del Código General del Proceso), pues la violación de la ley proviene de error de hecho en la apreciación de la demanda, error in iudicando, que ruega la confrontación de su texto con aquello que de ella dedujo en tribunal al fin de establecer si procede su quiebre, conforme al artículo 374 ibídem. A este propósito, 'no se puede olvidar que la demanda, no solo constituye una pieza con la cual se inicia el proceso, sino que a la vez asume el carácter de elemento o medio de convicción' (G. J. Tomo LXVII, 434; CXLII, pág. 200)' (Casación Civil de 22 de agosto de 1989)' (Sent. Cas. Civ. No. 084 de 27 de agosto de 2008), y como tal, puede ser indebidamente apreciada o interpretada por el Tribunal, caso en el cual, la vulneración de la ley sustancia, la existencia del yerro fáctico, su naturaleza*

[8] Corte Suprema de Justicia, Sentencia SC3840-2020.

manifiesta u ostensible e incidencia en la providencia recurrida, se determinará contrastando, cotejando o confrontando las consideraciones especificas de la decisión con el escrito introductor. En efecto, 'para que se configure el error en la interpretación de la demanda, es necesario como lo exige la ley, que 'sea manifiesto', ostensible o protuberante,' prístino y evidente, 'es decir que salte a la vista de la simple lectura de la demanda, pues la actividad de interpretación solamente es atacable en casación 'cuando fuere notoria y evidentemente errónea, lo que no se daría cuando entre varias interpretaciones razonables y lógicamente posibles, el Tribunal ha elegido alguna de ellas, pues es el resultado del ejercicio adecuado de su función jurisdiccional' (sentencias del 7 de abril de 1989 y del 28 de febrero de 1992, sin publicar)' (CCXXV, 2ª parte, p. 185; énfasis de ésta Sala)"[9]

2. En línea con lo expuesto, al observar en el *sub judice* el escrito de demanda presentado por el vocero judicial de la demandante, por la forma en que se formuló el petitum, se advierte que trata de una acción de subrogación legal:

"1. *Que se declare la responsabilidad civil en cabeza de la señora NELCY CUELLAR IBAÑEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.769.295, en su calidad de Interventora en el contrato No. 405-61-11 del 03 de marzo de 2011, mismo sobre el cual se dicto Fallo Con Responsabilidad Fiscal No. 001, a título de culpa grave y en forma solidaria, dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 2014-03582.*
2. Que en virtud de lo anterior se le condene a la devolución de la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE. ($298.416.404), a LA PREVISORA S.A., con ocasión al perjuicio declarado en el fallo ya mencionado, cifra que equivale al valor restante del pago realizado en el acuerdo de transacción celebrado con LA DIOCESIS DE MOCOA-SIBUNDOY, que ya fue mencionado anteriormente en ellos hechos y en el cual no participo la acá demandada"[10]

Y en los hechos relacionados para apoyar esas súplicas, se indicó que la actora en cumplimiento al evocado fallo fiscal procedió a hacer efectivas las pólizas contratadas por la convocada Nelcy Cuellar Ibáñez y la entidad Diócesis de Mocoa -Sibundoy; consecuentemente, efectuó el pago de la

[9] Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 19 de septiembre de 2009, Rad. 2003-00318-01, reiterada en la SC2354-2021.
[10] Folio 5 del archivo "*02EscritoDemanda.pdf*" de la carpeta "*01CuadernoPrincipal*" de "*PrimeraInstancia*".

condena; además, el 11 de septiembre de 2019, intimó a la demandada sobre el respectivo recobro.

Es más, en los fundamentos legales que invocó la accionante, se constata que se hizo alusión a la previsión legal del artículo 1096 del Estatuto Mercantil, así como a la clase de responsabilidad deprecada, cánones 2341 y 2343 del Código Civil.

Por ende, no cabe duda de que la voluntad de la promotora era adelantar la acción de subrogación en contra de la señora Cuellar Ibáñez y, bajo tal directriz la funcionaria judicial de instancia abordó el presente caso, conforme se observa nítidamente en las consideraciones del veredicto opugnado, luego el reproche de la indebida interpretación de la censura, carece de fundamentos fácticos y jurídicos para su prosperidad.

3. Aclarado lo anterior, memórese que el canon 1096 del C. de Co., establece que: "*[e]l asegurador que pague una indemnización se subrogará, por ministerio de la ley y hasta la concurrencia de su importe, en los derechos del aseguro contra las personas responsables del siniestro. Pero éstas podrán oponer al asegurador las mismas excepciones que pudieron hacer valer contra el damnificado".*

La aludida institución sitúa al asegurador en el lugar del beneficiario y lo faculta para obtener del responsable del siniestro el abono o reembolso que remuneró por concepto del seguro. Todo hasta la concurrencia del respectivo importe.

A su vez, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, frente a la figura jurídica en comento, dispone en su regla 203, numeral 3, que "*por el hecho de pagar el seguro la entidad aseguradora se subroga en los derechos de la entidad o persona asegurada contra la persona cuyo manejo o cumplimiento estaba garantizado, con todos sus privilegios y accesorios".*

Ahora bien, para lograr el éxito de la pretensión subrogatoria formulada por el extremo actor, este debe demostrar la concurrencia de los presupuestos que desde tiempo atrás ha decantado la jurisprudencia nacional[11], cuales son: **a)** la existencia de un contrato de seguro del cual emanó la obligación de resarcir, toda vez que "*la subrogación asegurativa sólo encuentra su origen legal en el contrato de seguro*"[12]; **b)** que en virtud del referido negocio jurídico se haya realizado un pago válido de la indemnización, con el fiel respeto de las condiciones generales y particulares de lo pactado, siendo necesario además "*aportar la prueba del monto del perjuicio sufrido por el asegurado*", como quiera que "*con la sola demostración de haberse pagado el seguro, no queda demostrado el quantum del daño resarcible a cargo del responsable del siniestro*"[13], y; **c)** que el daño ya indemnizado, en virtud del contrato de seguro, sea imputable a la responsabilidad de persona diferente al asegurado, surgiendo para éste una acción de responsabilidad civil de naturaleza contractual o extracontractual, según exista o no una relación de tipo negocial entre el tercero y el asegurado.

Al respecto, el órgano de cierre de la especialidad civil puntualizó:

> *"1. Es incuestionable que la subrogación, como forma al alcance del asegurador para obtener el recaudo de las sumas de dinero que con ocasión de un siniestro, plenamente demostrado, atendiera por efectos del contrato de seguro celebrado con el asegurado, se sujeta a la demostración plena de determinados requisitos que la ley mercantil subraya.*
>
> *Tal como la consagra el artículo 1096 del Código de Comercio, la subrogación se produce ope legis, porque dicha norma, fundada en principios de equidad, permite adelantar las acciones encaminadas a obtener el reembolso de lo que se pagara al asegurado por efectos de la realización del riesgo cubierto por la póliza, y autoriza, por consiguiente, reclamar del causante del daño el monto de la reparación efectivamente pagada.*
>
> *En virtud a esa figura y como de siempre lo ha comprendido la jurisprudencia, la compañía aseguradora que ha indemnizado el siniestro ocupa, ipso jure, el lugar del asegurado frente al tercero responsable de su*

[11] Corte Suprema de Justicia, Sentencia SC11822-2015.
[12] J. Efrén Ossa G., Teoría General del Seguro. El contrato. Bogotá. Temis. 1991. Pág. 191.
[13] C.S.J. Sentencia de marzo 17 de 1981.

pérdida patrimonial.

Aunque del texto del artículo 1096 mercantil aparentemente dimana un único requisito para el buen suceso de las pretensiones del asegurador, consistente en que hubiere efectuado el pago de la indemnización, la doctrina, con apego a la noción en que descansa la figura, han destacado que es necesario acreditar los siguientes requisitos: ***a) La existencia de un contrato de seguro; b) el pago válido en virtud a ese convenio; c) que el daño ocasionado por el tercero sea de los amparados por la póliza y d) que acaecido el siniestro nazca para la compañía aseguradora una acción contra el responsable.****"*[14]*.* (Destacado propio).

4. Aplicadas las precedentes nociones al *sub lite,* se tiene por probado el primero de los aludidos elementos, toda vez que se constata la existencia de la póliza de cumplimiento a favor de entidades estatales No. 3000985[15], expedida el 11 de marzo de 2011, en la que figuró como tomador Nelcy Cuellar Ibáñez y asegurado Fiduciaria La Previsora S.A., con un valor respaldado de $8.003.291, vigente entre el 1 de marzo y año en mención, hasta el mismo día y mes de 2012, donde se lee que tiene una cobertura por "*cumplimiento del contrato"* y "*calidad del servicio"* y, en cuyo objeto del seguro se pactó: "*amparar los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista /afianzado en virtud del contrato por prestación de servicios No. 405-59-11 de fecha 01 de marzo de 2011 celebrado entre las partes, y relacionado con el objeto: prestar servicios profesionales al Ministerio de Educación Nacional en calidad de administradora temporal del servicio educativo en el departamento de Putumayo, en desarrollo de la medida correctiva de asunción temporal de la competencia para la administración del servicio educativo en el departamento de Putumayo".*

5. Ahora, en lo que concierne relativo al efectivo pago de la indemnización, exigencia que a consideración de la *a quo* no se probó, advierte la Sala que contrario a lo sostenido por la funcionaria judicial, este presupuesto se demostró, conforme se pasa a exponer:

[14] Corte Suprema de Justicia, Sentencia SC11822-2015.
[15] Folios 70 a 75 del archivo "*02EscritoDemanda.pdf".*

5.1. El extremo actor aportó copia del proveído 001 de 11 de mayo de 2018[16], a través del cual la Contraloría General de la República, dentro del expediente No. 2014-03582, declaró la responsabilidad fiscal, a título de culpa grave, de la sociedad Diócesis de Mocoa -Sibundoy, la aquí contendiente y la actora, esta última como tercera garante, por el incumplimiento del contrato No. 405-61-11 de 3 de marzo de 2011, condenándolas al pago en forma solidaria, por concepto de daño patrimonial, de la suma de $847.136.684.

5.2. Asimismo, se observa copia del comprobante para recaudo empresarial emitido por la aludida entidad bancaria, que da cuenta de una consignación por $748.515.688[17], efectuada el 28 de febrero de 2019, a favor de la cuenta No. 050-00119-7.

5.3. Conforme a los aludidos medios de convicción, para esta Colegiatura emerge diáfano que el referido pago obedeció a la condena fiscal sustentada en la ocurrencia de una culpa grave imputada a la demandada y la evocada persona jurídica; actuación en la que fue igualmente declarara civilmente responsable la compañía actora.

5.4. De otro lado, si bien en el hecho sexto del libelo introductor, se indicó que para dar fe de la evocada retribución se anexaba "*el cheque No. C3042465 dirigido al Tesoro Nacional",* sin que exista reproducción de tal instrumento, ello no significa que no pueda conferírsele validez probatoria al comprobante de recaudo que obra dentro del *dossier,* toda vez que en el mismo se plasmó: (i) entidad recaudadora: el Tesoro Nacional, (ii) consignante: La Previsora S.A. Compañía de Seguros; (iii) forma de consignación: cheque.

5.5. Aunado, nótese que la evocada transacción se realizó mediante convenio, es decir, a través un código único de identificación establecido entre una empresa y el banco receptor, el cual está vinculado a la

[16] Folios 76 a 119 del archivo "*02EscritoDemanda.pdf".*
[17] Folios 154 y 155, *ejúsdem.*

información clave de la primera entidad, como su número de identificación tributaria (NIT), nombre oficial, tipo de cuenta, ya sea de ahorros o corriente donde se reciben los pagos, entre otros. Luego, por el hecho de no haberse indicado los dígitos del producto financiero en el comprobante de pago, ello no significa que el mismo no se realizó a favor del Tesoro Nacional.

5.6. Súmese a lo expuesto que, el artículo 244 del C.G.P., en su inciso segundo, señala "*los documentos públicos y privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso".* De modo que, el aludido legajo se presume auténtico y por ello ostenta fuerza demostrativa, en tanto el mismo no fue reargüido de falso, ni mucho menos desconocido por la convocada.

5.7. Además, pasó por alto la *iudex* la misiva de referencia "*Siniestro 21026-19-11-02/20593-19-33-02"*[18]*,* remitida por la promotora a la convocada, a través de la cual se le intimó para el pago del valor cancelado en cumplimiento de la aludida decisión de responsabilidad fiscal, comunicación en donde se le contextualizó sobre un desembolso por $748.515.688, debido a los "*intereses generados a raíz de la mora en que se encuentra usted…".*

5.8. De otra parte, a tono con la falta de certeza del tan memorado fallo condenatorio, comoquiera que si bien es cierto que contra el mismo los investigados presentaron recurso de reposición y subsidiario de apelación, resuelto el primero mediante auto No. 105 de 11 de mayo de 2018[19], manteniendo la providencia censurada y la consecuente concesión del de alzada, sin que exista probanza de lo decidido en segunda instancia, también lo es que no está acreditado que esa determinación se hubiese

[18] Folio 158, *ejúsdem.*
[19] Folios 120 a 153, *ejúsdem.*

derrumbado; además, al tratarse de un acto administrativo, el mismo goza de presunción de legalidad[20] y validez, sin que esté demostrado que esa actuación pública sea ilegítima o se haya invalidado o, por lo menos no existe elemento de convicción que permita arribar a otra conclusión, luego ostenta mérito probatorio. Más aún, cuando la convocada resultó silente frente a este asunto, correspondiéndole a este extremo de la lid asumir la carga probatoria a voces del artículo 167 del C.G.P.

6. En lo atinente al tercer presupuesto, se entiende por este que "…*el daño ya indemnizado, en virtud del contrato de seguro, sea imputable a la responsabilidad de una persona distinta del asegurado, es decir, que dé lugar a una acción de responsabilidad civil por parte de éste, la que puede ser de naturaleza contractual o extracontractual, según exista o no una relación de tipo negocial entre el tercero y el asegurado"*[21].

6.1. En ese orden, según la póliza No. 3000985[22], una de las coberturas era el "*cumplimiento del contrato",* aclarándose al respecto "*se amparan los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista /afianzado en virtud del contrato por prestaciones de servicios No. 405-59-11 de fecha 01 de marzo de 2011, celebrado entre las partes, y relacionado con el objeto: Prestar servicios profesionales al departamento de Putumayo, en desarrollo de la medida correctiva de asunción temporal de la competencia para la administración del servicio educativo en el departamento de putumayo".*

6.2. De modo que, de lo anterior se colige que Nelcy Cuellar Ibáñez, en su calidad de interventora, al tomar el aludido seguro tenía la obligación de procurar el acatamiento del pacto estatal No. 405-59-11 de fecha 01 de marzo de 2011, lo cual no aconteció, de acuerdo a la condena fiscal

[20] Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en sentencia de tutela, ha precisado que: "…' *por tratarse de actos administrativos, el debate acerca de su legalidad cumple suscitarlo ante los Jueces Contencioso Administrativos competentes, a través de las acciones previstas en el Código Contencioso Administrativo, de acuerdo con las circunstancias y particularidades que, a juicio del interesado, experimentó la situación que generó lo resuelto por la administración y que es materia de inconformidad, a fin de generar las determinaciones con las cuales se obtenga el restablecimiento del derecho…'".* (Sentencia STC, 9 dic.2011, rad. 00330-01, reiterada en CSJ STC, 13 jul. 2012, rad. 00153-01, STC5401-2023, entre otras.
[21] Corte Suprema de Justicia, Sentencia SC11822-2015.
[22] Folios 70 a 75 del archivo "*02EscritoDemanda.pdf".*

solidaria impartida por la Contraloría General de la República. Máxime, cuando no se acreditó por parte de la enjuiciada un hecho que pudiera eximirla de la responsabilidad endilgada, ni tampoco que hubiera sido exonerada del incumplimiento por el ente fiscal, circunstancia que, de paso, permite tener por probada la relación de causalidad entre el daño y la infracción contractual.

7. Colofón de lo hasta aquí expuesto, al evidenciarse el cumplimiento de los elementos axiológicos de la acción de subrogación contenida en el artículo 1096 del Código de Comercio, resulta innegable que la demandada se encuentra compelida a reembolsar la suma de dinero que la actora sufragó.

8. En ese orden de ideas, en lo atinente al monto de la reparación, el canon 1079 del Estatuto Mercantil, señala que: "*el asegurador no estará obligado a responder sino hasta la concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de los dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074".* A su vez, el precepto 1096 de la misma obra, previene: "*el asegurador que pague una indemnización se subrogará, por ministerio de la ley y hasta concurrencia de su importe, en los derechos del asegurado contra las personas responsables del siniestro(…)".*

8.1. Al efecto, cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia ha explicado, que "***esta acción permite al asegurador que cancela el valor resarcitorio, subrogarse en los derechos del asegurado para reclamar al responsable del hecho funesto lo efectivamente pagado****. La institución sitúa al asegurador en el lugar del beneficiario.* ***Lo faculta para obtener del responsable del siniestro el abono o reembolso de lo que remuneró por concepto del seguro****, bien a título singular, ya en conjunto con el reasegurador.* ***Todo, hasta concurrencia del respectivo importe****. El origen del derecho a la subrogación es derivado, ergo, ajeno de sustantividad y autonomía. La entidad aseguradora, en consecuencia, adquiere el mismo derecho que antes del pago residía en la órbita patrimonial del asegurado-damnificado"*[23]*.* (Resaltado de la Sala).

[23] Corte Suprema de Justicia, Sentencia SC3273-2020.

8.2. En el presente caso, el extremo actor solicitó el reintegro de la suma de $298.416.404, aclarando que tal cifra "*equivale al valor restante del pago realizado en el acuerdo de transacción celebrado con La Diócesis de Mocoa -Sibundoy";* sin embargo, advierte esta Colegiatura que, si bien es cierto que la convocante realizó un pago por $847.136.684, dentro del asunto de responsabilidad fiscal, como se explicó líneas atrás, no menos lo es que en la póliza No 3000985 convenida por la demandada y la compañía de seguro, en ejercicio de su libertad contractual, se estipuló como valor asegurado por el amparo de "cumplimiento de contrato", el guarismo de $8.003.291, sin deducible, *quantum* que deberá ordenarse sufragar a la demandada, por ser hasta ese monto la concurrencia del respectivo importe.

Más aún, cuando en el ordinal segundo de la parte resolutiva del proveído 001 de 21 de febrero de 2018, proferido por la Contraloría General de la República, se dispuso:

> "*Declarar TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLES a la siguiente Compañía aseguradora, incorporando al presente FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL, las correspondientes pólizas por las que fueron vinculadas al presente proceso:*
> • *LA PREVISORA S.A. identificada con NIT 860.002.400-2 según pólizas números:*
> *(…)*
> *-3000985 de 11 de marzo de 2011 con la que se ampara el cumplimiento del contrato de prestación de servicios profesionales No. 405-59-11 celebrado entre la Sociedad Fiduciaria La Previsora (FIDUPREVISORA) y la señora NELCY CUÉLLAR IBÁÑEZ cuyo objeto fue prestar los servicios profesionales como Administradora Temporal del Servicio educativo para el Departamento del Putumayo. Vigencia desde el 01-03-2011 hasta el 12-03-2012. Amparo por el que se llama: Cumplimiento del Contrato 405-59-11, suma asegurada: $8.003.291, no se pactó deducible"*[24] (Resaltado fuera de texto).

[24] Folios 116 y 177 del archivo "*02EscritoDemanda.pdf".*

8.3. Lo anterior para resaltar que en la aludida providencia se declaró tercera responsable a la demandante, hasta el monto de la cifra asegurada, de modo que, el pago se debió limitar a dicho tope y por ello, ese importe es al que se debe circunscribir la subrogación legal de la actora, sin que sea necesario entrar a estudiar el contrato de transacción arrimado, toda vez que desborda lo pactado en la póliza génesis de la subrogación aquí reclamada.

8.4. Por consiguiente, por ser procedente se actualizará la aludida suma de dinero, conforme lo precisó la Corporación de cierre de esta especialidad en sentencia SC11822-2015: *"(…) no se puede negar la corrección monetaria de la suma que debe cancelar el tercero al asegurador que ejerce la acción subrogatoria, so capa de una interpretación literal del artículo 1096 del Código de Comercio, pues tal suerte de entendimiento aisla la disposición del contexto normativo en que ella se encuentra y, en general, del conjunto de normas civiles y comerciales que gobiernan la materia, pasando por alto, como bien lo aseveró el togado Celso, que 'es antijurídico juzgar o dictaminar en vista de alguna pequeña parte de la ley, sin haberla examinado detenidamente en su totalidad'".*

Indexación que se realizará conforme al índice de precios al consumidor, según la fórmula:

VP=VH X IPC FINAL / PC INICIAL

Donde,

VP= valor presente
VH= valor histórico
IPC FINAL= IPC a corte de enero de 2024, es 132,55
IPC INICIAL= IPC de febrero de 2019, data en que se realizó el pago de la condena de responsabilidad fiscal, es 101,10

8.5. Entonces, el monto actualizado es de $10.492.939,88 que la parte demandada deberá pagarle a la promotora dentro de los 10 días siguientes a la notificación de este pronunciamiento, so pena de causarse intereses legales del 6% anual (art. 1617 C.C.).

9. En síntesis, se revocará el fallo opugnado y de consiguiente, se accederá a las pretensiones del extremo actor, al estar demostrado los presupuestos axiológicos de la acción de subrogación legal prevista en el canon 1096 del C. Co, por lo que se intimará a la demandada al pago debidamente indexado a favor de La Previsora S.A. Compañía de Seguros.

Se condenará en costas de las dos instancias a la convocada (numeral 1, regla 365 C.G.P.).

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, **en nombre la República de Colombia y por Autoridad de la Ley, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Quinta Civil de Decisión**,

RESUELVE

PRIMERO: **REVOCAR** la sentencia proferida el 31 de julio de 2023, proferida por el Juzgado Cuarenta y Uno Civil de Circuito de Bogotá.

SEGUNDO: **DECLARAR** que La Previsora S.A. Compañía de Seguros se subrogó legalmente en la acción de responsabilidad fiscal adelantada por la Contraloría General de la República en contra de la demandada Nelcy Cuellar Ibáñez. En consecuencia, esta última deberá pagar a la primera, dentro de los 10 días siguientes a la notificación de este pronunciamiento, so pena de que se causen intereses legales del 6% anual (art. 1617 C.C.), la suma de $10.492.939,88, rubro debidamente indexado hasta la fecha en que se profiere esta decisión.

TERCERO: **CONDENAR** en costas de las dos instancias a la intimada. Para efectos de su liquidación, la Magistrada Sustanciadora fija como agencias en derecho en esta sede la suma de $1.500.000,oo.

CUARTO: En su oportunidad, devuélvase el expediente al estrado judicial de origen.

NOTIFÍQUESE

SANDRA CECILIA RODRÍGUEZ ESLAVA
Magistrada

CLARA INÉS MÁRQUEZ BULLA
Magistrada

ÁNGELA MARÍA PELÁEZ ARENAS
Magistrada

Firmado Por:

Sandra Cecilia Rodriguez Eslava
Magistrada
Sala Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Clara Ines Marquez Bulla
Magistrada
Sala 003 Civil
Tribunal Superior De Bogotá D.C.,

Angela Maria Pelaez Arenas
Magistrada
Sala 009 Civil
Tribunal Superior De Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **df3c863bbf7d7f04b6118fc631f8de3f8c0009f5236992407fb81b398b76b959**
Documento generado en 29/02/2024 04:45:31 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA
SALA CIVIL

Magistrado Ponente: Iván Darío Zuluaga Cardona

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Proceso	Ejecutivo
Demandante	Ludinet S.A.S.
Demandados	Felguera I.H.I. S.A.U. -Sucursal Colombia
Radicado	110013103 041 2023 00251 01
Instancia	Segunda
Decisión	Resuelve recurso de apelación auto

Se decide la apelación formulada por la demandante contra el auto de 15 de junio de 2023 proferido por el Juzgado 41 Civil del Circuito de esta ciudad, por medio del cual se negó el mandamiento de pago en el asunto en referencia.

I. ANTECEDENTES

1. Ludinet S.A.S. promovió demanda ejecutiva en contra de Felguera I.H.I. S.A.U. -Sucursal Colombia, con fundamento en los siguientes hechos:

i) Entre las partes se celebraron actividades comerciales, razón por la cual contrajo obligaciones respaldadas mediante las facturas electrónicas de venta FELD47, FELD51, FELD54 y FELD55, las que cumplen con los requisitos señalados en los cánones 621 y 771 del Código de Comercio y fueron aceptadas por la ejecutada.

ii) Añadió que ha requerido el pago de la obligación en varias oportunidades, pero la demandada ha hecho caso omiso, pese a su intención de lograr un acuerdo.

2. A partir de lo anterior, solicitó librar mandamiento ejecutivo por: *a)* $136.873.662, $121.956.976, $58.949.462 y $26.682.387 correspondiente al capital de las facturas electrónicas en mención; y *b)* los intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley, desde la causación y hasta que se pueda verificar el pago de la obligación[1].

3. El juez de primer grado negó el mandamiento de pago. En sustento concluyó que los documentos aportados no cumplen con el presupuesto del literal f) del art. 617 del Estatuto Tributario, exigencia relevante según lo señalado en el precepto 774 del Código de Comercio, ya que de su revisión los artículos vendidos o servicios prestados, no corresponden al objeto del contrato suscrito entre las partes, por cuanto hacen referencia al AUI, que comprende los gastos de administración, imprevistos y utilidades, conceptos que nada tienen que ver con la naturaleza de la factura de venta (15 jun. 2023)[2].

4. Inconforme la actora interpuso reposición y en subsidio apelación. En fundamento manifestó que, las facturas electrónicas de venta cumplen con los requisitos legales, y se basan en lo consagrado en el contrato No. 42 suscrito con la demandada.

Afirmó que los códigos descritos en el título valor, se señalaron de acuerdo con la parametrización interna del Software contable de la sociedad, por tanto, los tres últimos identificados como AIU-02, AIU-03 y AIU 04 son informativos para el deudor, porque discriminan la administración, la utilidad y el imprevisto; los que resultan útiles para calcular el IVA según el régimen tributario AIU que permite al deudor verificar la liquidación correcta del impuesto.

Agregó que las facturas tienen certificación de existencia de acuerdo con los eventos registrados por la Dian[3].

5. La *a quo* confirmó la negativa. Para sustentar su determinación consideró

[1] Pdf No. 001 C1
[2] Pdf No. 04 C1
[3] Pdf No. 05 C1.

que de la revisión del contrato celebrado entre las partes se observa que tiene por objeto la realización del servicio de alivios térmicos, precalentamiento y prueba de dureza en el proyecto Felguero IHI S.A. Sucursal de Colombia y del estudio de las facturas no se concluye que los conceptos de "*Costos Directos", "administración", "imprevistos"* y "*utilidad"* se identifiquen con tales actividades, pues el negocio jurídico corresponde a las propias del ejercicio profesional de ingeniería a cargo de la demandante, mientras que los conceptos descritos en las facturas obedecen a obligaciones tributarias que cualquier empresa puede tener.

Además, en el contrato aportado tampoco se estipuló que la demandada se hubiera obligado a cancelar los citados conceptos.

De otro lado, enfatizó en que los términos AIU-01, AIU-02, AIU-03 y AIU-04 son códigos internos utilizados para fines tributarios, por lo que, son diferentes a la actividad contractual objeto del convenio, las cuales en nada se relacionan con lo previsto en el literal f) del art. 617 del Estatuto Tributario, acorde con el canon 774 del Código de Comercio.

Por último, precisó que los requisitos tendientes a registrar los diversos eventos en el Radian, no lo exime de acatar los presupuestos esenciales que impone la normatividad que regula estos títulos (14 ag. 2023)[4].

II. **CONSIDERACIONES**

1. De entrada se advierte que el pronunciamiento censurado, será confirmado, tal y como pasa verse.

2. Recuérdese que el art. 772 del Código de Comercio enseña que la "*factura es un título valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio.* ***No podrá librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios***

[4] Pdf No. 07 C1.

efectivamente prestados en virtud de un contrato verbal o escrito" (negrillas y subrayados añadidos).

3. Sobre este título ha precisado la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que:

> *"No hay duda de que el juez al examinar los requisitos de la factura como título valor* ***debe indagar por la entrega de las mercancías vendidas o la prestación de los servicios incorporados en ella. Aunque el inciso final del artículo 774 del estatuto mercantil, modificado por el 3° de la Ley 1231 de 2008, establece que '[l]a omisión de requisitos adicionales que establezcan normas distintas a las señaladas en el presente artículo, no afectará la calidad de título valor de las facturas', 5 Apelación auto 11001 31 03 034 2022 00198 01 una lectura armónica de los artículos 772 y 773 de la misma obra y el Decreto 3327 de 2009, permite deducir además, de las exigencias allí contempladas, que el 'beneficiario de la mercancía o de los servicios, las recibió'. (…).***
>
> *En aras de cumplir con ese cometido, en el artículo de la Ley 1231, que modificó el 773 del Código de Comercio, contempló el mecanismo de la "aceptación de las facturas", previendo allí las condiciones que deben operar para que se entienda que las "facturas libradas corresponden a bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados en virtud de un contrato verbal o escrito" (Art. 772 C. Co) y, por tanto, puedan gozar de los privilegios derivados de un «título valor», esto es, "legitimar el derecho literal y autónomo que en ellas se incorpora" (Art.619 ibídem)"*[5].

De forma posterior, esa misma Corporación unificó el criterio sobre los requisitos de la factura electrónica como título valor, conforme con los siguientes lineamientos:

"*i) La factura electrónica de venta como título valor es un mensaje de datos que representa una operación de compra de bienes o servicios. Para su formación debe cumplir unos requisitos esenciales, unos de forma, correspondientes a su expedición, y otros sustanciales, relativos a su constitución como instrumento cambiario, como se desprende del estatuto mercantil, del Decreto 1154 de 2020 y de la legislación tributaria".*

[5] Sentencia de tutela STC-7273 de 11 de septiembre de 2020 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. M.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque

ii) Debe ser expedida, previa validación de la DIAN, y entregada al adquirente por medios físicos o electrónicos.

iii) Los requisitos sustanciales son la mención del derecho incorporado en el título, la firma de su creador -vendedor o prestador del servicio, la fecha de vencimiento, el recibido de la factura (fecha, datos o firma de quien recibe), el recibido de la mercancía o de la prestación del servicio, y su aceptación, la cual puede ser expresa o tácita, dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la mercancía. La expresa se realiza mediante mensaje electrónico remitido al emisor, a través del sistema de facturación. Si la aceptación fue tácita y el emisor de la factura pudo generarla en el sistema de facturación, se aportará la evidencia de esa circunstancia.

iv) Para demostrar la expedición de la factura previa validación de la DIAN, al igual que los requisitos sustanciales señalados, puede valerse del formato electrónico de generación de la factura- XML- y el *"documento validado por la DIAN»*, en sus nativos digitales, la representación gráfica de la factura, y el *"certificado de existencia y trazabilidad de la factura electrónica de venta como título valor en el RADIAN"*, esto último, en caso de que la factura haya sido registrada allí.

v) El registro de la factura electrónica de venta ante el RADIAN no es un requisito para que sea un título valor, es una condición para su circulación, y, por ende, cuando se ha materializado, determina la legitimación para ejercer la acción cambiaria, por tanto, si el creador de la factura es quien reclama el pago, no debe exigirse esto[6].

4. Conforme a lo reseñado la factura es un título que comprueba la existencia de un crédito de una suma de dinero, debida por el suministro de mercaderías o una prestación de servicios, por tanto, en este documento sólo pueden incorporarse derechos de crédito por contratos de compraventa y

[6] Sentencia de tutela STC-11618 de 27 de octubre de 2023 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. M.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque

prestación de servicios cumplidos. Razón por la que no se pueden establecer otra clase de obligaciones. Además, al emitirse para respaldar convenios como los citados, es necesario el cumplimiento de la prestación a cargo del emisor.

5. Bajo este contexto, cuando se emplea con propósitos diferentes, no es viable librar el mandamiento ejecutivo, ya que así lo enseña el citado inc. 2º del art. 772 del C.Co. Esta circunstancia cobra mayor contundencia si se toma en consideración lo señalado en el canon 615 del Estatuto Tributario y el precepto 1.6.1.4.1. del Decreto 1625 de 2016, normas que disponen que estarán obligados a expedir factura o documento equivalente todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a éstas, o enajenen bienes producto de la actividad agrícola o ganadera, con independencia de su calidad de contribuyentes o no del impuesto sobre las ventas, al igual que los importadores, los prestadores de servicios y en las ventas a consumidores finales. Las operaciones objeto de facturación obedecen a la venta de bienes y prestación de servicios, por tanto, las normas vigentes exigen que sólo se facturen este tipo de actos.

6. De acuerdo con lo indicado, en este caso las facturas y las representaciones gráficas aportadas como base de la ejecución señalan en la descripción de forma textual como concepto de cobro los siguientes[7]:

Cliente: FELGUERA IHI S.A. Sucursal de Colombia
NIT: 900574705
Dirección: carrera 11B 97 56 oficina 201 edificio apice, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 110221
Teléfono: 7449642
Email: facturas.colombia@durofelguera.com

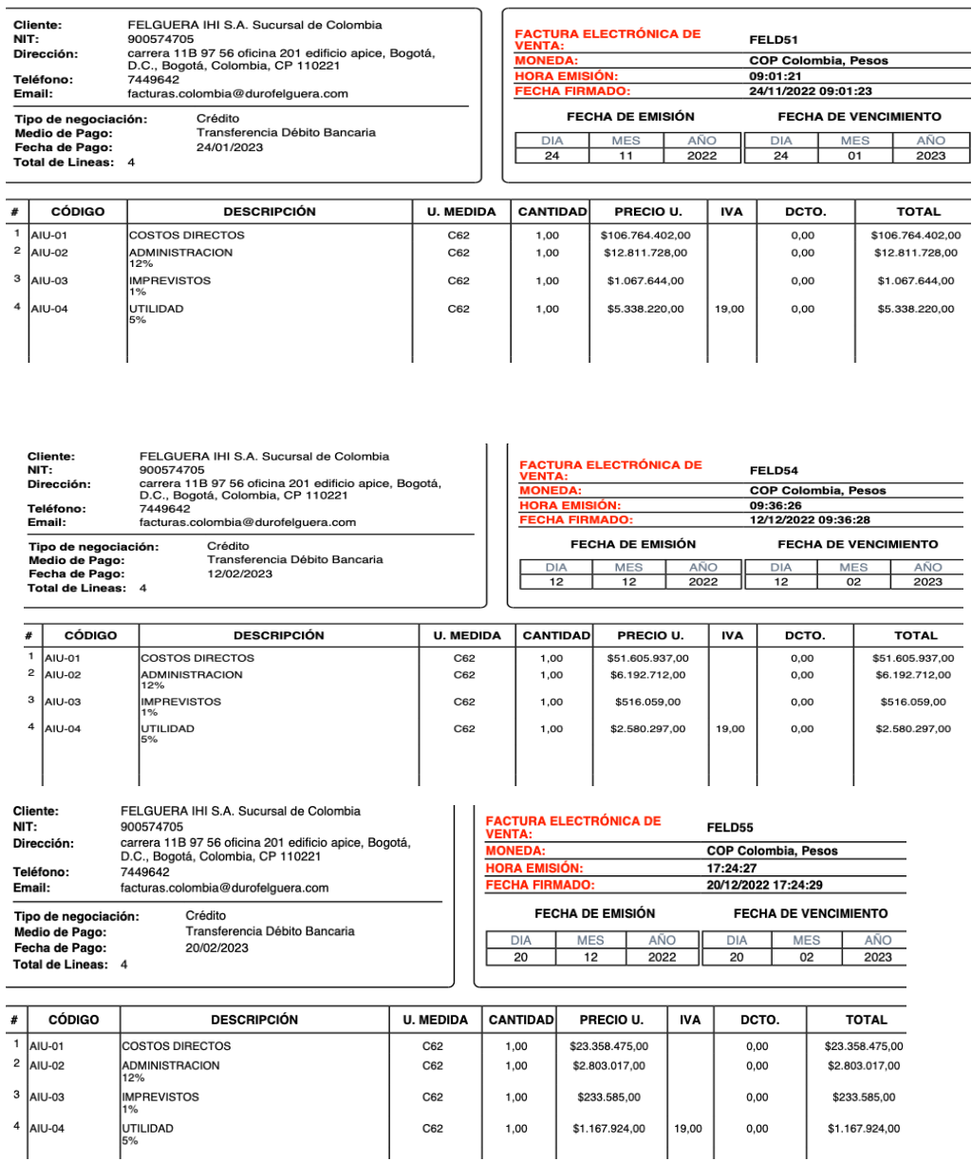
Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 19/12/2022
Total de Lineas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FELD47
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 08:43:08
FECHA FIRMADO: 19/10/2022 08:43:09

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
19	10	2022	19	12	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	AIU-01	COSTOS DIRECTOS	C62	1,00	$119.822.869,00		0,00	$119.822.869,00
2	AIU-02	ADMINISTRACION 12%	C62	1,00	$14.378.744,00		0,00	$14.378.744,00
3	AIU-03	IMPREVISTOS 1%	C62	1,00	$1.198.229,00		0,00	$1.198.229,00
4	AIU-04	UTILIDAD 5%	C62	1,00	$5.991.143,00	19,00	0,00	$5.991.143,00

[7] Las facturas aportadas son la FELD47, FELD 51, FELD54 y FELD55 y obran a folios 25 a 96 del Pdf No. 01 C1



Cliente: FELGUERA IHI S.A. Sucursal de Colombia
NIT: 900574705
Dirección: carrera 11B 97 56 oficina 201 edificio apice, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 110221
Teléfono: 7449642
Email: facturas.colombia@durofelguera.com

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 24/01/2023
Total de Lineas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FELD51
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 09:01:21
FECHA FIRMADO: 24/11/2022 09:01:23

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
24	11	2022	24	01	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	AIU-01	COSTOS DIRECTOS	C62	1,00	$106.764.402,00		0,00	$106.764.402,00
2	AIU-02	ADMINISTRACION 12%	C62	1,00	$12.811.728,00		0,00	$12.811.728,00
3	AIU-03	IMPREVISTOS 1%	C62	1,00	$1.067.644,00		0,00	$1.067.644,00
4	AIU-04	UTILIDAD 5%	C62	1,00	$5.338.220,00	19,00	0,00	$5.338.220,00

Cliente: FELGUERA IHI S.A. Sucursal de Colombia
NIT: 900574705
Dirección: carrera 11B 97 56 oficina 201 edificio apice, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 110221
Teléfono: 7449642
Email: facturas.colombia@durofelguera.com

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 12/02/2023
Total de Lineas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FELD54
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 09:36:26
FECHA FIRMADO: 12/12/2022 09:36:28

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
12	12	2022	12	02	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	AIU-01	COSTOS DIRECTOS	C62	1,00	$51.605.937,00		0,00	$51.605.937,00
2	AIU-02	ADMINISTRACION 12%	C62	1,00	$6.192.712,00		0,00	$6.192.712,00
3	AIU-03	IMPREVISTOS 1%	C62	1,00	$516.059,00		0,00	$516.059,00
4	AIU-04	UTILIDAD 5%	C62	1,00	$2.580.297,00	19,00	0,00	$2.580.297,00

Cliente: FELGUERA IHI S.A. Sucursal de Colombia
NIT: 900574705
Dirección: carrera 11B 97 56 oficina 201 edificio apice, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 110221
Teléfono: 7449642
Email: facturas.colombia@durofelguera.com

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 20/02/2023
Total de Lineas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FELD55
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 17:24:27
FECHA FIRMADO: 20/12/2022 17:24:29

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	12	2022	20	02	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	AIU-01	COSTOS DIRECTOS	C62	1,00	$23.358.475,00		0,00	$23.358.475,00
2	AIU-02	ADMINISTRACION 12%	C62	1,00	$2.803.017,00		0,00	$2.803.017,00
3	AIU-03	IMPREVISTOS 1%	C62	1,00	$233.585,00		0,00	$233.585,00
4	AIU-04	UTILIDAD 5%	C62	1,00	$1.167.924,00	19,00	0,00	$1.167.924,00

Así las cosas, de la simple lectura de estos documentos y atenidos a su literalidad, es evidente que lo pretendido por la actora es el reconocimiento de los conceptos con código *"AIU-01, AIU-02, AIU-03-AIU-04"* con la siguiente descripción *"costos directos, administración 12%, imprevistos 1%, utilidad 5%"*, cobros que afirma la actora en el libelo introductorio se fundamentan en lo pactado en la cláusula 2ª del contrato de suministro, cuyo objeto es la realización del servicio de alivios térmico, precalentamiento y prueba de dureza en el proyecto Felguera de 4 de octubre de 2021 suscrito entre las partes. En la cláusula 6ª, se especificó que el importe total es de $346.000.000 y se discriminó de la siguiente forma:

Por la ejecución de los servicios realmente realizados según la siguiente tarifa:

MOVILIZACION DE PERSONAL Y EQUIPOS				
DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MOVILIZACION DE PERSONAL Y EQUIPOS	NO TIENE COSTO			

ALIVIOS TERMICOS A JUNTAS ACERO ALEADO Y/O CARBONO

DESCRIPCION	CANT	UN	COSTO DIRECTO TURNO / DIA	ADMINISTRACION [12%]	IMPREVISTOS [1%]	UTILIDAD [5%]	SUBTOTAL ANTES DE IVA	IVA SOBRE UTILIDAD [19%]	TOTAL TURNO / DIA
DISPONIBILIDAD DE 1 EQUIPO DE TRATAMIENTO TERMICO Y PERSONAL SUFICIENTE PARA TURNO DE 10 HORAS	1	turno 10 horas	$ 572,034	$ 68,644	$ 5,720	$ 28,602	**$ 675,000**	$ 5,434	$ 680,434
juntas 1/2"-2"	1	UN	$ 96,610	$ 11,593	$ 966	$ 4,831	**$ 114,000**	$ 918	$ 114,918
juntas 3"- 4"	1	UN	$ 100,847	$ 12,102	$ 1,008	$ 5,042	**$ 119,000**	$ 958	$ 119,958
juntas 6" - 8"	1	UN	$ 128,814	$ 15,458	$ 1,288	$ 6,441	**$ 152,000**	$ 1,224	$ 153,224
juntas 10" - 12"	1	UN	$ 173,729	$ 20,847	$ 1,737	$ 8,686	**$ 205,000**	$ 1,650	$ 206,650
juntas 14" - 18"	1	UN	$ 203,390	$ 24,407	$ 2,034	$ 10,169	**$ 240,000**	$ 1,932	$ 241,932
juntas 20" - 24"	1	UN	$ 266,949	$ 32,034	$ 2,669	$ 13,347	**$ 315,000**	$ 2,536	$ 317,536
juntas 26" - 30"	1	UN	$ 305,085	$ 36,610	$ 3,051	$ 15,254	**$ 360,000**	$ 2,898	$ 362,898
tomas de dureza (punto) (durometro de impacto, NO de rebote dinamico)	1	UN	$ 7,203	$ 864	$ 72	$ 360	**$ 8,500**	$ 68	$ 8,568

En el num. 6.2. se especificó que el precio era fijo y no revisable y que incluía todos los costos directos e "*indirectos, AIU, realización de todos los servicios incluido en el alcance, suministro de equipos, desplazamientos en su caso del personal propio, utilización de los equipos, desplazamiento en su caso del personal propio, utilización de los equipos que resulten necesario, todos los seguros, derechos y gastos necesarios, así como los tributos, impuestos, aranceles, exacciones y tasas de cualquier naturaleza (…). En consecuencia, el suministrados asume la totalidad del riesgo económico por cualquier modificación en el costo de los servicios y materiales, bienes y equipos de fabricación, transporte, en los tributos, impuestos, gravámenes, seguros sociales o en cualquier otro que afecte el alcance y que se pueda ocasionar por cualquier motivo, (…)*".

La cláusula 8ª en el num. 8.2. consagró que las facturas deben especificar el origen del suministro y el tipo de operación realizada. Por su parte, el num. 8.4. enseña que las facturas deben mencionar expresamente el número del contrato y la orden de cargo, ya que en caso de no cumplirse se procederá a su devolución.

7. De la trascripción de las citadas cláusulas y de la lectura de las demás disposiciones señaladas en el convenio, no se ve con la claridad que exige un título valor, que se hubiera establecido en el contrato el pago correspondiente a los conceptos que comprenden las facturas acá reclamados, los cuales son el fundamento de la ejecución y que aparecen en la descripción de la factura y de la representación gráfica, rubros que no comprenden derechos de crédito por

contratos de compraventa y prestación de servicios cumplidos, por lo que no se relacionan con la naturaleza de las facturas electrónicas.

Téngase en cuenta que el AIU que se utiliza en los procesos de contratación, no obedece al cumplimiento de una disposición legal, corresponde a la necesidad de discriminar en el total del costo de la obra, el de los costos directos e indirectos, principalmente con fines de evaluación de las propuestas, verificación de su ejecución y resolver posibles discusiones que surjan en torno.

Recuérdese que el decreto reglamentario 522 de 2003 en su art. 10 ordenaba: "*La cláusula AIU base del impuesto se determinará respecto de cada contrato como el monto correspondiente a la diferencia entre el valor total del contrato y los costos y gastos directos imputables al mismo, discriminados y comprobables, que correspondan a mano de obra, suministros o insumos, y seguros cuando estos sean obligatorios.*".

Esta figura se compone de los gastos de Administración (A), Imprevistos (I) y Utilidades (U). El primero, comprende los gastos para la operación del contrato, disponibilidad de la organización del contratista, servicio de mensajería, secretaría, etc. El segundo, es el valor destinado a cubrir los gastos que se presenten durante la ejecución del contrato por los riesgos en que se incurre por el contratista. El tercero, es la ganancia que espera recibir el contratista; de modo que, en nada se relaciona con la venta de mercancía o prestación de servicios propios de la naturaleza de la factura electrónica.

Por tal virtud, le corresponde a la parte demandante, bajo la discusión de un proceso declarativo, probar que los denominados AIU del contrato no estaban incluidos en el valor final del mismo, tema que, como aún no es claro, no es posible dilucidar en un juicio de naturaleza ejecutiva.

Por último, aunque las facturas cuentan con la certificación de existencia de los registros de la Dian, lo cierto es que esta circunstancia no demuestra el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para este tipo de título, pues se reitera, dicho requisito sólo es necesario en caso de que los títulos vayan a circular.

8. Bajo este contexto, como en los títulos no se incorporó una remuneración por servicios prestados, ni un precio de compra adeudado por la sociedad demandante, ni ninguno de los puntos objeto de contraprestación señalados en el contrato acá aportado, pues se reitera, de la revisión de las facturas y de las representaciones gráficas, lo que se incorporaron fue los costos indirectos cuyo responsable no es claro a cargo de quién están, es evidente que no es viable dar curso a la ejecución pretendida.

9. En síntesis, se confirmará el proveído censurado.

Por lo expuesto, el Suscrito Magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,

RESUELVE

Primero. Confirmar el auto del 15 de junio de 2023 proferido por el Juzgado 41 Civil del Circuito, en el asunto de la referencia.

Segundo. Ejecutoriado este proveído, devuélvase la actuación a la autoridad de origen.

NOTIFÍQUESE

Firma Electrónica

IVÁN DARÍO ZULUAGA CARDONA

Magistrado

Firmado Por:
Ivan Dario Zuluaga Cardona
Magistrado

Sala 010 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **efc87b6fa588c63725ccfd644ff64cd9ee5a19a56a07cbc9c87af150cc4ecdb7**

Documento generado en 29/02/2024 04:07:09 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Proceso N.° 11001310304120220008501
Clase: VERBAL – RESPONSABILIDAD MÉDICA
Demandante: ANA SOFÍA ESCANDÓN y otros
Demandado: EPS COMPENSAR y otros

Comoquiera que la sentencia de 13 de febrero del año en curso proferida por el Juzgado 41 Civil del Circuito de Bogotá no fue recurrida por ninguna de las partes y llamados en garantía en el proceso de la referencia, se declara DESIERTO el recurso de apelación que la parte demandante formuló contra el auto que en la audiencia de 12 de diciembre de 2023 profirió ese mismo estrado judicial, mediante el cual negó, por extemporánea, la prueba encaminada a oficiar a la EPS Compensar para que allegara unos documentos.

Lo anterior, con fundamento en el penúltimo inciso del artículo 323 del C.G.P., según el cual "[l]a circunstancia de no haberse resuelto por el superior recursos de apelación en el efecto devolutivo o diferido, no impedirá que se dicte la sentencia. Si la que se profiera no fuere apelada, el secretario comunicará inmediatamente este hecho al superior por cualquier medio, sin necesidad de auto que lo ordene, para que declare desiertos dichos recursos".

Por lo tanto, oportunamente devuélvase el expediente al juzgado de primera instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

El magistrado,

MANUEL ALFONSO ZAMUDIO MORA
(firma electrónica)

Firmado Por:

Manuel Alfonso Zamudio Mora

Magistrado

Sala 005 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **f8745479464b7b00728d0a7d8703f2807c9678bd8cf08f2cd34971760d10669d**

Documento generado en 29/02/2024 10:05:56 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA
SALA CIVIL

Magistrado Ponente: Iván Darío Zuluaga Cardona

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Proceso	Ejecutivo de mayor cuantía
Demandante	E.S.E. Solución Salud
Demandado	Capital Salud E.P.S.
Radicado	110013103 041 2019 00576 01
Instancia	Segunda
Decisión	Resuelve recurso de queja

Se decide el recurso de queja formulado por la parte ejecutada, contra el auto proferido el 04 de septiembre de 2023, por el cual el *a quo* denegó la concesión de la apelación contra la sentencia al considerar su presentación extemporánea.

I. ANTECEDENTES

1. El 17 de agosto de 2023 el Juzgado 41 Civil del Circuito de Bogotá, D.C., dictó sentencia de primera instancia en el asunto en comento, que ordenó seguir adelante con la ejecución[1].

2. El apoderado de la ejecutada presentó el 24 de agosto de 2023 a las 17:22 horas, recurso de apelación[2].

3. El 04 de septiembre de 2023 se negó la concesión de la alzada dada la extemporaneidad del medio[3].

[1] Cuaderno de primera instancia, carpeta 01, archivo 52.
[2] Ibidem, archivo 53.
[3] Ibidem, archivo 55.

4. Contra el anterior se impetró recurso de reposición y en subsidio queja[4] en el cual el extremo expuso los distintos requerimientos que debió realizar para elaborar el escrito a presentar ante la primera instancia.

Adujo que, la impugnación fue remitida junto con sus anexos "*alrededor de las 4:45 p.m., es decir antes de las 5:00 p.m., del 24 de agosto de 2023*" al correo del despacho judicial; por lo que, recibió con extrañeza la denegación de la alzada.

Al indagar sobre ello con los ingenieros en sistemas de la entidad le fue explicado que el mensaje pudo quedar en la bandeja de salida por varios motivos como el peso de los archivos y demorar en pasar al buzón de enviados.

Por último, refirió la prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades.

5. El 26 de octubre de 2023 se resolvió no reponer la decisión y dar trámite al recurso de queja[5]. Lo anterior, en aplicación del inciso 4, del artículo 109 del Código General del Proceso que dispone la radicación de los memoriales antes del cierre del despacho, esto es, antes de las 5:00 pm., y dentro del término de ejecutoria; sin que el promovido cumpla con tal delimitación.

6. Asignado por reparto, correspondió a esta Magistratura decidir lo propio.

II. CONSIDERACIONES

1. Se analiza si se encuentra ajustada a derecho la decisión por la que el a *quo* tuvo por extemporáneo el recurso de apelación impetrado contra la sentencia de primera instancia. Desde ahora se advierte que el pronunciamiento rebatido será convalidado.

2. El objeto de la queja está circunscrito a indagar si se encuentra ajustada a

[4] Ibidem, archivo 56.
[5] Ibidem, archivo 60.

derecho la negativa de la concesión de la apelación. Así las cosas, para que sea procedente el otorgamiento de la alzada, es necesario que la providencia sea susceptible del recurso de cara al principio de taxatividad, que sea interpuesto en la oportunidad establecida en la ley, que el apelante sea parte o tercero interviniente y que la providencia le cause un agravio o perjuicio, lo que se concreta en el interés jurídico para recurrir.

3. En el presente caso se detecta la legitimidad en el impugnante para promover la apelación contra la sentencia de primera instancia y ser pasible tal decisión de ese recurso; sin embargo, no fue propiciado oportunamente, como orienta el inciso segundo, del numeral primero, del artículo 322 del C.G.P.[6]

Así, como refiere el informe secretarial, el término de ejecutoria de la sentencia venció el 24 de agosto de 2023, a las 5:00 pm, mientras que el memorial con fines de apelación fue recibido en esa fecha, pero a las 5:22 pm[7]; sin que se halle ningún yerro en tal contabilización; por contera, es diáfano que el direccionamiento de la misiva al interior de los canales de la Rama Judicial se dio fuera del lapso permitido para la radicación en el referido inciso 4, del artículo 109 del estatuto procesal civil.

Adicional, no fue un interregno ínfimo para considerar un exceso ritual la extemporaneidad que se castiga, sino de varios minutos, que alejan el recurso del momento de cierre del juzgado; sin que se avizore en el impugnante ninguna situación que pueda encajar como fuerza mayor o caso fortuito.

Debe recordarse que se está ante normas procesales, de orden público y de obligatorio cumplimiento[8], que no deben ser desconocidas a fuerza de la

---

[6] Código General del Proceso.
Artículo 322. Oportunidad Y Requisitos. El recurso de apelación se propondrá de acuerdo con las siguientes reglas:
1. El recurso de apelación contra cualquier providencia que se emita en el curso de una audiencia o diligencia, deberá interponerse en forma verbal inmediatamente después de pronunciada. El juez resolverá sobre la procedencia de todas las apelaciones al finalizar la audiencia inicial o la de instrucción y juzgamiento, según corresponda, así no hayan sido sustentados los recursos.
La apelación contra la providencia que se dicte fuera de audiencia deberá interponerse ante el juez que la dictó, en el acto de su notificación personal o por escrito dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación por estado."
(…) (Negrilla fuera del texto)
[7] Cuaderno principal, archivo 54.
[8] Código General del Proceso.

inobservancia de las partes, lo que raya con la estrictez de los términos legales.

4. En conclusión, al no encontrarse debidamente acreditada la concurrencia del requisito de oportunidad de la apelación, resulta atinada la decisión del juzgado de origen, de denegar la concesión del recurso vertical; sentido en el cual, se pasa a decidir.

5. No se impone la condena en costas de que trata el numeral 1 del artículo 365 del Código General del Proceso, al no aparecer causadas, en concordancia con el precepto de la misma norma, en su numeral 8.

Por lo expuesto, el Suscrito Magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,

RESUELVE

Primero. Declarar bien denegado el recurso de apelación en referencia.

Segundo. No condenar en costas al no aparecer comprobada su causación.

Tercero. Devolver las diligencias al Juzgado de origen para que hagan parte del expediente.

NOTIFÍQUESE

Firma Electrónica

IVÁN DARÍO ZULUAGA CARDONA

Magistrado

Interpretación De Las Normas Procesales. Al interpretar la ley procesal el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Las dudas que surjan en la interpretación de las normas del presente código deberán aclararse mediante la aplicación de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los demás derechos constitucionales fundamentales. El juez se abstendrá de exigir y de cumplir formalidades innecesarias.

Firmado Por:

Ivan Dario Zuluaga Cardona

Magistrado

Sala 010 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **58cc78cbe6a5f99c06d2449cdafd1cb47ecc87d008c4f056c9b7650eb185e482**

Documento generado en 29/02/2024 01:53:56 p. m.

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA DE DECISIÓN CIVIL

Bogotá D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación	110013103040-2021-00125-02
Proceso	Verbal
Asunto	Apelación sentencia
Demandante	Noux C.A.
Demandado	SAP Colombia S.A.S.
Decisión	Señala agencias en derecho

El suscrito magistrado señala la suma de $1’000.000 a título de agencias en derecho, con fines de la liquidación de costas a que se contrae la sentencia de segundo grado de esta misma fecha.

Notifíquese.

JAIME CHAVARRO MAHECHA

Magistrado

Firmado Por:
Jaime Chavarro Mahecha
Magistrado
Sala Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **a12e0711367d27a55e0cec4b3a350237ef1cb21f3ac481f3f96bf294f11ecac7**
Documento generado en 29/02/2024 04:19:14 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA DE DECISIÓN CIVIL

Bogotá D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación	110013103040-2021-00125-02
Proceso	Verbal
Asunto	Apelación sentencia
Demandante	Noux C.A.
Demandado	SAP Colombia S.A.S.
Decisión	Confirma

Magistrado Ponente
JAIME CHAVARRO MAHECHA

Discutido y aprobado en Sala de Decisión No. 2 celebrada el 7 de febrero de 2024

Se decide el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia proferida el 17 de noviembre de 2021 por el Juzgado 40 Civil del Circuito de Bogotá, en el proceso verbal de NOUX C.A. contra SAP COLOMBIA S.A.S.

I. ANTECEDENTES

1. Síntesis de la demanda

Se solicitó[1], principalmente, declarar que:

[1] Ver folios 50 a 130 del archivo *"01EscritoDemanda"* de la carpeta *"01CuadernoPrincipal"* del *"CuadernoJuzgado"* del expediente digital.

Los contratos denominados Master Partner Agreement, términos y condiciones generales, términos y condiciones generales 2018, los programas SAP PartnerEdge y los modelos SAP PartnerEdge son contratos coligados y de adhesión; que las cláusulas de exoneración y limitación de responsabilidad impuestas unilateralmente por SAP, particularmente el artículo 1 de la parte 2 del primer contrato mencionado y el artículo 1 de la parte 2 del segundo son nulas o, en subsidio, de ello, que son ineficaces e inoponibles a Noux.

SAP abusó de sus derechos y actuó en contra del principio de la buena fe en la ejecución y terminación de los citados contratos; que la demandada incumplió el artículo 2 de la parte 1 del pacto inicialmente referido y el artículo 2 de la parte 1 del otro al utilizar información confidencial entregada por Noux para efectos distintos y contrarios a la finalidad de los contratos o, subsidiariamente, que abusó de sus derechos y actuó en contra del principio de buena fe al utilizar información confidencial en la forma preanotada.

SAP incumplió el artículo 11 de la parte 1 de aquellos acuerdos de voluntades, al utilizar información confidencial entregada por la demandante después de haber notificado la terminación o, en su lugar, que abusó de sus derechos conforme con los artículos contractuales referidos, después de haber notificado la aludida terminación.

La demandada incumplió los contratos de soporte SAP celebrados con Noux como consecuencia de la aceptación de las órdenes de renovación de los servicios de soporte y mantenimiento (SAP Enterprise Support) para el año 2020, y el artículo 4 del Modelo VAR Delivered Support o, en subsidio, que aquella abusó de sus derechos y actuó contra sus propios actos y la buena fe al negarse a cumplir los contratos de soporte SAP surgidos con la aceptación

de las órdenes de renovación de servicios de soporte y mantenimiento (SAP Enterprise Support) para el año 2020.

Los incumplimientos de SAP fueron dolosos o resultado de la culpa grave; que se declare que bajo el programa Sell Cloud modificado se configuró una agencia comercial de hecho entre las partes, en la que la demandante obró como agente comercial y tiene derecho a las comisiones de cada una de las suscripciones que se mantengan vigentes por un término de hasta 5 años, contado a partir del 31 de diciembre de 2019, así como al pago de la cesantía comercial tras la terminación unilateral del Programa Sell Cloud Modificado y el Modelo Sell Cloud.

SAP es civilmente responsable por los perjuicios causados a Noux con ocasión del incumplimiento de los contratos y del abuso de los derechos; que SAP debe mantener indemne a la demandante por los perjuicios que sufra con ocasión de las reclamaciones que le presenten los usuarios finales del software en virtud de los incumplimientos de la primera.

En consecuencia, se le condene a pagar a favor de Noux:

USD102.919 por lucro cesante, correspondiente a las sumas dejadas de percibir por la prestación de servicios de soporte y/o mantenimiento a Provefarma S.A., Medeport S.A., Superdeporte S.A. y Equinox Ecuador S.A. y USD61.063 respecto de Interdin S.A.;

USD19.990 por las comisiones causadas bajo el Programa Sell Cloud Modificado y el Modelo Sell Cloud;

USD833 por cesantía comercial bajo el Programa Sell Cloud Modificado;

USD60.175 de lucro cesante por la utilidad no percibida por servicios de implementación;

USD314.236 por lucro cesante resultante de los ingresos no recibidos por la venta de hardware y software a Corporación La Favorita C.A.;

Las comisiones de cada una de las suscripciones vendidas con intermediación de Noux que se mantengan vigentes hasta por 5 años, a partir del 31 de diciembre de 2019, de conformidad con los términos del artículo 4.4. del Programa Sell Cloud Modificado;

USD15.726 por daño emergente correspondiente al valor de la liquidación de los trabajadores que debió pagar Noux.

2. Fundamentos fácticos

En la demanda se afirmaron los hechos que a continuación se sintetizan.

2.1. El 19 de abril de 2016, las partes suscribieron un contrato de adhesión denominado Master Partner Agreement, en virtud del cual SAP ofreció a Noux software, servicios de mantenimiento y soporte técnico (a través de suscripciones a SAP Enterprise Support) y servicios en la nube, y ésta actuaba como *"partner"* de aquella para comercializar, distribuir, posicionar, proporcionar, desarrollar y demostrar dichos productos y servicios en Ecuador.

A través de la firma de pactos adicionales coligados, denominados Programas SAP PartnerEdge (SAP PartnerEdge Schedules) y Modelos SAP PartnerEdge (SAP PartnerEdge Models) las contratantes definieron las particularidades de lo que se comercializaría (art. 1). Los Términos y Condiciones Generales SAP

PartnerEdge aplicables para Colombia quedaron incorporados (art. 3), y todos los contratos terminarían en la fecha en la que el último Modelo SAP PartnerEdge entre las partes fuera rescindido (art. 4).

2.2. Las obligaciones no eran de carácter exclusivo (art. 1 de la parte 1 de los T. y C. G.); Noux fijaba libremente los precios a los cuales comercializaba los productos y servicios a los usuarios finales. La información confidencial no debía ser usada o reproducida de ninguna forma, salvo para cumplir con la intención del contrato (art. 2 ídem) y a la terminación de los Modelos SAP PartnerEdge finaliza, inmediatamente, el derecho de la parte receptora a usar información confidencial (art. 11 de la parte 1 ídem). La demandada, unilateralmente, estableció la restricción a la responsabilidad de las partes y sus excepciones.

2.3. El 19 de abril de 2016, Noux se adhirió al **Programa Sell on Premises** que tenía por objeto **regular la adquisición y comercialización, por cuenta y riesgo de Noux, del software desarrollado por SAP**, para lo cual, aquella debía presentar órdenes de compra a ésta, suministrando información confidencial y sensible, los detalles de lo solicitado y los servicios que prestaría (art. 4), y la orden respectiva se entendía aceptada con la emisión de la factura de venta, sin que pudiese ser cancelada, revocada o transferida. Efectuado el trámite, surgía una relación jurídica independiente entre el cliente final y Noux, por lo que esta respondía directamente por el producto o servicio.

2.4. La duración del acuerdo se fijó hasta el 31 de diciembre de 2016, prorrogable por períodos consecutivos de 1 año, contados desde el 1 de enero y podía terminarse por conveniencia, previo aviso con 3 meses de antelación a la expiración del plazo.

2.5. El 19 de abril de 2016, se suscribió el **Programa VAR Delivered Support**, cuya finalidad era **fijar las pautas para la comercialización, por cuenta y riesgo de Noux, de los servicios de soporte técnico y mantenimiento respecto al software** que se licenciaba a los usuarios finales, que consistían en acceder a las actualizaciones del software y resolver consultas frente a las dudas, por lo cual Noux debía enviar la orden de compra por servicio, junto a la orden de compra del software, y la aceptación se materializaba con la expedición de la factura de venta por parte de SAP. La demandante tenía que pagar anualmente por adelantado el servicio de soporte técnico y mantenimiento, sin interesar la forma que se acordara con el cliente. En caso de que las partes desearan finalizar el convenio, por conveniencia, estaban obligadas a notificarlo por escrito 3 meses antes del 31 de diciembre (numeral 2 del artículo 8 de la parte 1).

El modelo Var Delivered Support también se extinguía automáticamente si el Sell on Premise se acababa (numeral 3 del artículo 13 de la parte 1). Ante el fenecimiento del acuerdo la demandada estaba forzada a gestionar la cesión de las órdenes de servicio de soporte técnico y mantenimiento afectadas.

2.6. El 19 de abril de 2016, se celebró el contrato denominado Programa Sell Cloud para la comercialización, por parte de Noux, pero por cuenta y riesgo de SAP, de *"soluciones en la nube"* en Ecuador, a cambio de una comisión sobre las suscripciones. De darse la terminación por conveniencia, permitida con preaviso de 3 meses, SAP quedaba obligada a pagar a Noux las comisiones de cada una de las suscripciones que se mantengan vigentes durante un término de 5 años.

2.7. En el año 2018 SAP Colombia S.A.S. impuso en lo sucesivo los *"Términos y Condiciones Generales 2018"*, y el modelo

Sell on Premise con el documento Modelo Sell on Premise 2018 (*"SAP PartnerEdge Sell On Premise Specific Terms and Conditions en CO.v.10-2018"*), en ambos casos sin que se alterara el contenido de las que le precedieron.

2.8. El 25 de septiembre de 2019, se le notificó por correo electrónico a Noux la terminación de los contratos a partir del 31 de diciembre de ese año, por lo que la demandante consultó si podía tramitar las órdenes de compra de usuarios finales que habían recibido ofertas de software y servicios de soporte técnico, así como las renovaciones de estos últimos servicios respecto de usuarios finales que lo pretendían para el año 2020 y el 27 de septiembre de 2019 se le contestó que hasta el 31 de diciembre de esa anualidad podía tramitarlas, implicando la prestación durante el 2020 y, únicamente, los contratos relativos al almacenamiento en la nube no podían tener vigencia superior al 31 de diciembre de 2019, cuando Noux perdería su condición de partner.

2.9. El 29 de septiembre siguiente, SAP reiteró por correo electrónico que Noux podía seguir tramitando órdenes de compra y renovaciones de servicios hasta el 31 de diciembre de 2019. Por ende, se gestionaron las atinentes a los servicios de soporte técnico y mantenimiento y SAP emitió las facturas de venta Nos. SAS39465, SAS60038, SAS62855, SAS62853, SAS62857, SAS62856, SAS62854 y SAS62852.

2.10. Antes del 31 de diciembre de 2019, SAP se comunicó con clientes finales de Noux para advertirles la finalización de los contratos y que hicieran una elección del partner con el que seguirían recibiendo los servicios SAP, pese a que algunos de aquellos ni siquiera contaban con los mismos.

2.11. A finales de enero de 2020, SAP Colombia S.A.S. decidió anular y/o emitir notas de crédito respecto de las facturas, con lo que incumplió los contratos de soporte SAP y Modelo VAR Delivered Support.

3. Posición de la convocada

SAP Colombia S.A.S. se opuso a las pretensiones y presentó las excepciones de: *"el contrato es ley para las partes: artículo 1602 del Código Civil"*, *"inexistencia de coligación entre los contratos celebrados entre las partes, particularmente entre los denominados 'Master Partner Agreement', los 'Términos y Condiciones Generales 2018', los Programas SAP Partneredge' y los 'Modelos SAP Partneredge'"*, *"los contratos celebrados entre SAP y Noux no fueron de adhesión, en gracia de discusión, aún si lo fueran, esa circunstancia por sí sola no afecta su validez ni existencia"*, *"las cláusulas de exoneración de responsabilidad contenidas en los contratos son válidas y eficaces"*, *"SAP no es civilmente responsable frente a Noux: SAP terminó válidamente los contratos"*, *"SAP no es civilmente responsable frente a Noux: SAP no incumplió sus obligaciones contractuales frente a Noux. SAP actuó en ejercicio de la facultad contractual que le otorgaba el artículo 13 numeral 5 del Modelo Var Delivered Support"*, *"Noux actuó en contra del principio de Buena fe"*, *"Noux actuó en contra del principio 'venire factum propium non valei'"*, *"Noux actuó en contra del principio 'nemo auditur propiam turpitudinem allegans'"*, *"SAP no generó en Noux ninguna 'confianza legítima' que justificara sus actuaciones contrarias a la buena fe"*, *"SAP no es civilmente responsable frente a Noux: SAP actuó de buena fe (artículo 83) y no abusó de sus derechos"*, *"contrato no cumplido"*, *"ausencia de causalidad entre las conductas que Noux pretende achacar a SAP y los daños que Noux pretende le sean indemnizados"*, *"hecho de un tercero"*, *"ausencia de prueba del monto de los perjuicios reclamados"*, *"en el hipotético caso en que el juzgado encuentre que es procedente declarar a SAP civilmente responsable frente a Noux y a condenar al pago de indemnización de perjuicios, deberá aplicar la cláusula de exoneración de responsabilidad y limitación de perjuicios válidamente pactada entre las partes"*, *"inexistencia de un contrato de agencia comercial"*, *"Noux no tiene derecho alguno a que se reconozca en su favor el pago de una cesantía comercial"*, *"excepción de pago, SAP no adeuda ninguna suma de dinero a Noux"* y *"Genérica"*[2].

4. Sentencia de primer grado

La *a quo* declaró que los contratos denominados Master Partner Agreement, los Programas SAP PartnerEdge y los Modelos SAP

[2] Ver folios 67 a 106 del archivo *"05ContestacionDemanda20210430"* ídem.

PartnerEdge - Sell on Premise, Var Delivered Support y Sell Cloud son coligados y de adhesión, cuyo contenido fue definido unilateralmente por la demandada, y negó las restantes aspiraciones principales y subsidiarias.

Para decidir de ese modo, expuso:

El 19 de abril de 2016 se suscribieron los acuerdos de voluntades y el 25 de septiembre de 2019 la demandada envió a la demandante un aviso de terminación de los mismos por conveniencia, con efectos a partir del 1 de enero de 2020. Luego de ser notificada de tal determinación, Noux emitió órdenes de compra de productos y servicios SAP para el año 2020 porque entendió que, mediante correo electrónico de 29 de septiembre de 2019, su contraparte la autorizó para ello hasta el 31 de diciembre del mismo año, mientras que la encausada afirmó que era claro que aquella no podía comprometerse con sus clientes o usuarios finales para la vigencia 2020, debido a que la relación contractual que se lo permitía finalizó el 31 de diciembre de 2019.

Tras sintetizar las declaraciones recibidas, se estableció que los acuerdos tenían la finalidad única de desarrollar una operación económica compleja y, pese a que conservaban su individualidad, en determinados términos y condiciones, lo cierto es que entre ellos existía una relación de dependencia y conexidad, o sea, eran coligados. Además, también se trató de contratos de adhesión, puesto que SAP impuso el clausulado general y especial, por lo que la otra sociedad solamente aceptó la oferta.

No se acreditó que la demandada ejerció presión indebida a Noux para la celebración o ejecución de los acuerdos, por tanto, las cláusulas no son abusivas, nulas, ineficaces o inoponibles. Tampoco se probó que SAP actuó en desconocimiento de la buena

fe, que se presume (art. 835 C.Com. y art. 769 C.C.), o que abusó del derecho en atención a su posición dominante.

Revisados los artículos 1, 2, 2.1, 3 del programa de venta en la nube se enfatizó que se trataba de un contrato de distribución y se excluyeron los dos primeros elementos de la agencia mercantil, esto es, promover, explotar negocios del agenciado, desplegando un trabajo de intermediación entre este y los consumidores, y orientado a conquistar, conservar, ampliar o recuperar clientela, y que los efectos económicos de dicha gestión repercutan directamente en el patrimonio de aquel (art. 1317 C.Com).

Las pruebas revelaron que existía una reventa de los servicios de suscripciones en la nube por parte de Noux C.A. al usuario final, lo que hacía en su propio nombre, bajo su cuenta y riesgo en el territorio ecuatoriano. No se acreditó el total de suscripciones que hubo durante la vigencia ni el número de usuarios que vinculó para generar la comisión o sus valores, para constatar si se pagaron todas o quedaron algunas pendientes.

Tampoco se determinó que en la reventa de suscripciones al programa Sell Cloud Modificado Noux C.A. no actuó por cuenta de SAP Colombia S.A.S., o que los dineros percibidos por la enajenación de servicios a terceros salieran del peculio de aquella a favor de ésta, es decir, que no hubo una actuación a nombre de la supuesta agenciada, por lo que, de acuerdo con el clausulado, el modelo Sell on Cloud no es un contrato de agencia comercial.

Fracasó lo perseguido respecto al abuso del derecho por divulgación de información confidencial que se le endilgó a la encausada, bajo el argumento que incumplió los artículos 2 y 11 de la parte 1 y 2 de los términos y condiciones generales, respectivamente, porque, conforme con lo pactado, la conducta de

la pasiva de publicitar la extinción del contrato a los clientes de Noux *"se encuentra justificada"*. A su turno, pese a lo ocurrido en el mismo sentido con clientes que no eran usuarios de programas SAP, no se demostró que esto causara los cuantiosos perjuicios reclamados, más cuando la sociedad todavía desarrolla su objeto social y mantiene la relación con aquellos.

Respecto al incumplimiento de los contratos de Soporte SAP por la demandada al haber aceptado, inicialmente, las órdenes de renovación (SAP Enterprise Support) para el año 2020, con la expedición de las facturas correspondientes, pero que luego anuló, en un claro abuso del derecho, en contra de sus propios actos y la buena fe, no fue de recibo para la juzgadora, como quiera que el 25 de septiembre de 2019 SAP Colombia S.A.S. avisó por escrito a Noux que se rescindían los contratos por conveniencia, por lo que los derechos y obligaciones de las partes, en virtud de los acuerdos, cesarían el 31 de diciembre siguiente, excepto las disposiciones que sobrevivieran expresamente a dicha culminación contractual.

El 25 y el 29 de septiembre de 2019, Noux remitió correos electrónicos a la encausada para saber qué acciones comerciales podía ejecutar, lo que en su oportunidad fue respondido, pero, más allá de las interpretaciones que el personal de Noux hiciese, es claro que solo tenía la posibilidad de tramitar órdenes de compra hasta el 31 de diciembre de 2019 con vigencia hasta dicha calenda, por ende, *"no podía ser superior a esa misma fecha, en pocas palabras, no podía ofrecer, revender, y/o suministrar servicios para el año 2020"*, situación corroborada con las declaraciones de Luis Fernando Díaz Tirado, Julieta Carolina Gazcón y Guillermo Brinkmann.

La demandante interpretó equivocadamente lo manifestado y emitió órdenes de compra para entidades públicas y privadas, y pese a que SAP Colombia S.A.S. expidió las facturas Nos. SAS39465,

SAS60038, SAS62855, SAS62853, SAS62857, SAS62856, SAS62854 y SAS62852, después rectificó su error y las anuló, lo que si bien pudo provocar una expectativa a la demandante e inconvenientes con sus clientes, *"para el juzgado la demandada actuó de acuerdo a lo informado en el aviso de terminación de los acuerdos y de los correos electrónicos cruzados entre las partes los días 25 y 29 de septiembre de 2019 y en fechas posteriores"*. No es necesario estudiar los perjuicios exigidos por la eventualidad descrita por no existir incumplimiento de la encausada.

5. El recurso de apelación

La demandante planteó y sustentó los siguientes reparos:

5.1. *"El a quo erró en el análisis del incumplimiento del Modelo VAR Delivered Support y los Contratos de Soporte SAP que surgieron con ocasión a la anulación de las facturas por parte de SAP y su renuencia a prestar los servicios de soporte y mantenimiento".* Se interpretó equivocadamente que el modelo aludido terminó el 25 de septiembre de 2019 y que Noux no podía comercializar o renovar servicios de soporte, lo que en la práctica da a entender que la extinción contractual operó inmediatamente el día referido, y no el 31 de diciembre, generando una insatisfacción del preaviso de 3 meses previsto en la cláusula 13. La posibilidad de seguir con la venta de servicios hasta el fin de 2019 (arts. 6 y 8 modelo VAR Delivered Support), implicaba que estos serían usados por el cliente durante la vigencia de 2020, ya que se vendían y pagaban año anticipado, sin perjuicio de que bajo la figura de cesión se hicieran las gestiones para que otro partner prestara los servicios, por tanto, si la encausada recibió las órdenes de compra y emitió las facturas respecto de las entidades enlistadas, demostró que tenía conciencia de la validez de la comercialización; entonces, la

posterior anulación de los títulos valores configuró un incumplimiento de la vigencia contractual.

Guillermo Brinkmann declaró que, entre el 25 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, Noux no podía vender servicios vigentes para ese mismo año, *"[e]n otras palabras, los servicios que Noux podía continuar comercializando hasta el 31 de diciembre de 2019 necesariamente iban a tener vigencia durante el año 2020"*. En el correo de 25 de septiembre de 2019, Esteban Burbano de Lara informó a SAP que Noux tenía clientes con contratos de soporte vigente y con decisión de renovar para el 2020, prueba de que realizó consultas de forma clara y transparente. En la testimonial rendida, indicó que los servicios renovados entre la notificación de terminación y el último día de 2019, serían prestados en 2020. Los correos electrónicos cruzados entre las partes que SAP confirmaron la renovación de servicios durante ese periodo, pero, inexplicablemente, esas pruebas no fueron valoradas. Pasó por alto la juzgadora que el representante legal de SAP confesó que los servicios se vendían y renovaban anualmente.

5.2. *"Los correos enviados por SAP el 25 y 29 de septiembre de 2019 confirmaban la posibilidad de renovar servicios para el año 2020, y expresamente limitaban esa posibilidad sólo para los servicios Sell on Cloud".* Esto en oposición a lo considerado en el fallo atacado, en el que se concluyó que la restricción que SAP impuso para la comercialización de servicios cloud en vigencias posteriores a 2019, era aplicable a los servicios de soporte y mantenimiento para 2020, sin tener presente que se trata de modelos independientes, tal como se reconoció en la contestación de la demanda, el interrogatorio de parte del representante legal de la demandada y el testimonio de Guillermo Brinckmann. La literalidad de los correos electrónicos mencionados demuestra que SAP Colombia S.A.S. manifestó expresamente que

las ventas de soporte (VAR Delivered Support) para el 2020 podían realizarse hasta el 31 de diciembre de 2019, aunque la prestación durante el siguiente año no estuviera directamente a cargo de Noux y, solamente, los servicios de Sell on Cloud, no podían tener vigencia superior al 31 de diciembre de 2019.

En las comunicaciones que SAP Colombia S.A.S. remitió a clientes de Noux, les hizo saber que, desde el 31 de diciembre de 2019, esta no tenía autorización para comercializar o prestar servicios de mantenimiento, lo que refleja que antes de tal día, podía hacerlo, y los servicios serían prestados durante 2020. Así las cosas, la anulación de las facturas ya conocidas por SAP Colombia S.A.S. y el negarse a proveer los servicios constituyó el incumplimiento del Modelo Var Delivered Support y los contratos de soporte.

5.3. *"El derecho causado a favor de Noux por la comercialización de servicios, es la contraprestación contractual por comercializar esos servicios y, por lo tanto, no es una simple expectativa".* El artículo 4 del Modelo VAR Delivered Support estableció que la aceptación de las órdenes de trabajo y la expedición de facturas daba lugar a un contrato independiente que no era revocable unilateralmente por SAP Colombia S.A.S., por tanto, al haberse expedido las facturas SAS39465, SAS60038, SAS62855, SAS62853, SAS62857, SAS62856, SAS62854 y SAS62852 surgieron los acuerdos que obligaban a la demandada, situación que no representó solamente una expectativa.

El error del juzgado es más evidente en el caso presentado con el Ministerio de Educación de Ecuador, puesto que Noux comercializó servicios de soporte de 2020 a 2022 con la aprobación de SAP Colombia S.A.S., que expidió una certificación dirigida a dicha entidad validando la participación de la demandante en el

proceso de contratación y su capacidad para prestar servicios, pese a que los correos electrónicos con los formularios se le enviaron el 15 de octubre de 2019, y ninguno de los empleados de la encartada se opuso ni expuso que pudiesen presentarse problemas en virtud de la terminación del contrato, lo que muestra que todas las órdenes de servicios comercializadas hasta el 31 de diciembre de 2019 eran válidas y requería una cesión para que otro partner prestara los servicios desde 2020, tanto que el 27 de enero de dicha anualidad se expidió la factura de venta SAS62855. Dicha anulación, así como de los documentos de venta emitidos en los asuntos de Grupo Marathon, Interdin y Provefarma causaron verdaderos y cuantiosos perjuicios derivados de la pérdida de las utilidades que se percibirían por la comercialización, tal como acredita el dictamen pericial.

5.4. ***"Los contratos preveían la posibilidad de comercializar servicios que prestaría otro partner con ocasión a la transferencia o cesión de los mismos"***, situación que desconoció la *iudex a quo* al no examinar los artículos 8 y 13 del Modelo Var Delivered Support, el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de SAP y las comunicaciones remitidas por SAP Colombia S.A.S. a los clientes de Noux para que escogieran otro partner.

5.5. ***"Las órdenes de compra de Noux no contrariaban lo pactado (renovación automática de los servicios), pues previamente se había informado sobre la no renovación automática de los servicios de soporte"***. No acertó la dispensadora de justicia al señalar que la demandante se apartó de lo acordado con SAP Colombia S.A.S. al presentar las órdenes de compra de Interdin S.A., Superdeportes S.A. y Provefarma S.A., toda vez que esos usuarios habían informado previamente la no renovación, por lo que era menester una orden de compra nueva, la

cual se gestionó debido a la posibilidad de comercializar hasta el 31 de diciembre de 2019.

5.6. ***"El a quo erró en el análisis del incumplimiento del artículo 2 de la parte 1 de los términos y condiciones generales al considerar que no hubo un uso indebido de la información confidencial por parte de SAP"***, puesto que utilizó los datos de clientes de Noux que no mantenían ninguna relación con aquella y no para lograr los fines del contrato, al tiempo que se equivocó al afirmar que se convino que la encausada estaba excluida de responder por daños asociados al uso no autorizado de información confidencial, en la medida que las cláusulas disponen lo opuesto (art. 1 de la parte 2).

5.7. ***"El reproche sobre el uso de información confidencial se predica únicamente de los clientes de Noux que no tenían vigente ningún producto o servicio SAP"***, por ejemplo, Corporación La Favorita, Yangtse Motors e Industrias Ales. ***"En el proceso se acreditó que Corporación La Favorita no tenía ninguna relación vigente con SAP, por lo que no había motivo para que ésta fuera contactada e informada de la terminación"***.

5.8. ***"El a quo erró al confundir la causación de perjuicios con los incumplimientos contractuales"***. Se expuso en la providencia fustigada que no se demostró que por haber comunicado SAP Colombia S.A.S. a clientes de Noux que no tenían servicios SAP se hubiesen causado perjuicios, sin tener en cuenta que en la pretensión quinta de la demanda se solicitó declarar que la demandada incumplió el artículo 2 de la parte 1 de los términos y condiciones generales al utilizar información confidencial para fines diferentes al objeto del contrato, y que tal aspiración era independiente de las de condena respecto a los perjuicios, por lo que

debió valorarse la conducta de SAP *"conforme a las obligaciones de confidencialidad que tenían las partes en virtud de los contratos suscritos, con independencia de las pretensiones económicas, las cuales debían ser analizadas en un estadio posterior y de cara al dictamen pericial que se aportó para esos efectos específicos"*. Noux reclamó únicamente perjuicios derivados del incumplimiento de manejo de información reservada respecto a Corporación La Favorita, la cual se abstuvo de contratar y rompió vínculos con aquella, con ocasión de la conducta de SAP Colombia S.A.S., lo que provocó graves daños a la demandante.

5.9. ***"El a quo erró al declarar que SAP no debe responder por daños asociados al uso no autorizado de información confidencial y 'mala conducta voluntaria'"***. La indebida interpretación del artículo 1 de la parte 2 de los Términos y Condiciones generales llevó a que se aseverara en el fallo que la encausada quedaba excluida de responsabilidad por daños asociados al uso no autorizado de información confidencial, cuando su orientación es la contraria, debido a que se sanciona precisamente ese tipo de actuación.

5.10. ***"Noux sí intentó ceder los contratos, las pruebas documentales así lo acreditan"***.

5.11. ***"El a quo erró al negar la pretensión décima y décima novena como resultado de su análisis sobre la inexistencia de una agencia comercial bajo el Programa Sell Cloud Modificado, pues aquellas no dependían de la calificación jurídica como agencia comercial de dicho contrato"***. Las comisiones reclamadas no tienen relación alguna con las prestaciones del contrato de agencia comercial, sino con lo estatuido en el artículo 4.4. de la enmienda al Modelo Sell on Cloud,

que fue cuantificado en el dictamen pericial frente a Etatex en USD19.990.

Con base en lo anterior, solicitó la revocatoria de la sentencia de primer grado, y en su lugar, se acceda a la totalidad de las pretensiones.

La demandada se pronunció en tiempo respecto de los fundamentos de la censura y pidió mantener lo dispuesto por la *iudex a quo*.

II. CONSIDERACIONES

1. Concurren en este asunto los presupuestos procesales traducidos en competencia del juez, demanda en forma, capacidad procesal y para ser parte, sin que se advierta causal de nulidad que pueda comprometer la validez de lo actuado, por manera que se procede a resolver el asunto en referencia, en orden a lo cual se precisa que, por mandato del artículo 328 del Código General del Proceso, la actividad del Tribunal se concretará a los precisos reparos debidamente sustentados por la impugnante, sin perjuicio de las determinaciones que eventualmente deba adoptar de oficio.

2. Análisis del caso concreto

De conformidad con los reparos impetrados, la labor de la Sala es establecer si una vez notificado el aviso de terminación de los contratos celebrados entre SAP Colombia S.A.S. y Noux C.A., se autorizó, facultó o avaló a ésta para continuar comercializando servicios SAP o renovándolos desde el 25 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2019 y, averiguado esto, si es dable pregonar un incumplimiento de los acuerdos de voluntades por la demandada al haber anulado las facturas de venta que expidió con ocasión de las

órdenes de compra que remitió la demandante en dicho interregno. Luego, se examinará si la encausada utilizó información confidencial y causó perjuicios a su contraparte con tal actuación; finalmente, se estudia lo atinente al pago de la comisión a que se refiere el artículo 4.4. del Programa Sell Cloud Modificado.

Para resolver, se examinarán en el orden propuesto.

Es pacífico que SAP Colombia S.A.S. ofrece software, servicios en la nube y asociados como servicios de mantenimiento, y que celebró con Noux C.A. los contratos que sirven de base a la acción, es decir:

Con el *"Acuerdo Maestro de Socio"*[3], de 19 de abril de 2016, la última se convirtió en socia de la primera para la comercialización de los aludidos servicios. Para tal fin, se especificó que *"(…)'Acuerdo' significa este Acuerdo Maestro de Socio, cualquier Programa de SAP PartnerEdge, cualquier Modelo de SAP PartnerEdge, cualquier documento, anexo, apéndice y anexo incluido, adjunto o referenciado en cualquier programa de SAP PartnerEdge, cualquier Modelo de SAP PartnerEdge o ambos (…)"*. Se definió que *"'Modelo SAP PartnerEdge' significa cada uno de los diferentes 'Términos y condiciones específicos de SAP PartnerEdge' que SAP y el Socio acuerdan al firmar un Programa de SAP PartnerEdge relacionado."*; luego, que *"'Programa de SAP PartnerEdge' significa cualquier 'Programa de SAP PartnerEdge' concluido por SAP y el socio. (…)"*. Se condicionó el contrato bajo examen a que *"las partes celebren al menos un programa de SAP PartnerEdge para al menos uno de los Modelos de SAP PartnerEdge (…)"* (art. 4.1), y que terminaría *"en la fecha en que el último modelo SAP PartnerEdge fue terminado, rescindido o terminado de cualquier otra forma"* (art. 4.2.).

[3] Ver folios 114 a 118 del archivo *"02ApoderadoAllegaPruebas20210319"* ídem.

Al convertirse Noux C.A. en *"partner"* de la demandada, y *"considerando que (…) desea* ***revender cierto software*** *de SAP a los Usuarios Finales (…)"* (negrilla fuera de texto) y *"(…) puede brindar soporte de SAP Business One si el socio está autorizado para revender el Software SAP Business One"*, las partes suscribieron el contrato denominado *"Programa de Venta en las Instalaciones"*[4] (Sell On Premise Schedule es su traducción en inglés), al cual se entienden incorporados los *"Términos y Condiciones*[5] *Específicos de venta en las Instalaciones de SAP PartnerEdge para Colombia"* (art. 3.1.a), en los que se establece que cualquiera de las partes puede rescindir este modelo de distribución de venta por conveniencia, siempre que haga un aviso previo, por escrito, con 3 meses de antelación al 31 de diciembre de cada año (art. 10.2).

A su vez, al haberse firmado el convenio de ventas en las instalaciones y *"considerando que, el socio desea* ***brindar soporte a sus Usuarios Finales para el software*** *de SAP que el socio revende (…)"* (destacado de la Sala), las partes se obligaron por medio del *"Programa de Soporte Entregado por VAR"*[6], en el que se entendieron incluidos los *"Términos y Condiciones Específicos de SAP PartnerEdge – Soporte Entregado Por VAR para Colombia"*[7], en los que se pactó un modo de terminación por conveniencia sometido al preaviso escrito con anterioridad de 3 meses al 31 de diciembre (art. 13.2)[8].

Adicionalmente, las sociedades aquí enfrentadas firmaron el *"Programa de Venta en la Nube"*[9], toda vez que *"el socio desea* ***revender suscripciones a ciertos servicios en la nube bajo demanda, alojados en SAP y basados en suscripción****"* (Negrilla

[4] Ver folios 209 a 212 ídem.
[5] Ver folios 216 a 233 ídem.
[6] Ver folios 238 a 241 ídem.
[7] Ver folios 300 a 390 ídem.
[8] Ver folio 335 ídem.
[9] Ver folio 416 a 420 ídem.

no es del original), que en sus *"Términos y Condiciones específicos de Venta en la Nube"*[10], permitía que el modelo se extinguiera por conveniencia con el enteramiento escrito, con mínimo un trimestre de precedencia al 31 de diciembre (art.12.2).

El 25 de septiembre de 2019[11], SAP Colombia S.A.S. notificó por escrito a Noux C.A. de la terminación de los contratos, así:

> *(…) [C]elebraron, entre otros, los siguientes acuerdos:*
>
> *Modelo de Venta En las instalaciones de SAP PartnerEdge;*
> *Modelo de Venta en la Nube de SAP PartenEdge; y*
> *Modelo de Soporte Entregado por VAR de SAP PartnerEdge el 20.04.2016.*
>
> *Por medio de la presente, SAP rescinde los Acuerdos por conveniencia.*
>
> *Los derechos y obligaciones de las partes en virtud de los acuerdos cesan el 31 de diciembre de 2019, excepto aquellas disposiciones que sobreviven expresamente a la terminación según lo establecido en los Acuerdos.*

Del documento en mención se colige:

En primer lugar, el tiempo de antelación a 31 de diciembre de 2019 es superior a 3 meses; segundo, se identificaron cada uno de los contratos a dar por finalizados; tercero, el motivo expuesto por la remitente es la conveniencia, la que, como viene de verse, estaba pactada con claridad en cada concurso de voluntades; cuarto, se advirtió que los derechos y obligaciones de las partes en los mencionados acuerdos cesarían el 31 de diciembre de 2019, salvo las que por disposición expresa debiesen mantenerse o persistieran, pese a la extinción contractual.

Ahora bien, la recurrente puso especial énfasis en que no se tuvo en cuenta en primer grado el alcance de las misivas que

[10] Ver folios 728 a 757 ídem.
[11] Ver folios 424 a 426 ídem.

posteriormente se cruzaron las partes, por lo que procede el Tribunal a revisarlas.

El 25 de septiembre de 2019[12], a las 6:59 p.m., Esteban Burbano de Lara, vía correo electrónico, se comunicó con Luisa Oliveros y Guillermo Brinkmann, para exponerles que fue notificado de la terminación de los contratos que tendría lugar el 31 de diciembre de 2019, y presentó sus inquietudes basado en que:

> *Tenemos clientes con contratos de soporte vigente y con decisión de renovar el servicio para el 2020. Podemos tramitar dichas ordenes (sic) hasta el 31 de diciembre de 2019 y durante el 2020 coordinar con quien el cliente defina será su proveedor de soporte para que el mismo no interrumpa su servicio hasta que esté formalizada su relación con su futuro proveedor? En caso de que la respuesta sea que sí, existe alguna consideración particular para tramitarlas? RTA/ Noux puede firmar ordenes de compra hasta diciembre 31 de 2019, reiterando que por la comunicación ·3549DB4f-4371-4DD8-B515-52ª1F29801E2 firmada por Luis Fernando Díaz donde* ***me notifica que los acuerdos de venta on premise, cloud, y var delivered support terminarán el 31 de diciembre de 2019****, a partir de 1 de enero de 2010 (sic), no podrá revender licenciamiento, ni prestar servicios de soporte sobre ningún licenciamiento. Para procesar durante este periodo de tiempo transacciones cloud,* ***estos contratos no podrán tener una vigencia superior a diciembre 31 de 2019****, periodo sobre el cual NOUX mantiene su partnership.*
>
> *Tenemos quotations vigentes para licitaciones públicas, con adjudicación formal, y pendiente de formalización contractual. Podemos tramitar dichas órdenes hasta el 31 de diciembre de 2019 y proceder como sugiero en la pregunta anterior?* ***En caso de que la respuesta sea que no, los procesos se declararán desiertos****. Rta/ Misma respuesta del enunciado anterior. Es posible que me confirmes la presencia de un funcionario de SAP que nos acompañe la primera semana de octubre* ***para comunicar en conjunto la razón externa que nos obliga para no renovar las ofertas enviadas previamente****.* ***No será necesario entrar en detalles, tan solo comunicar la terminación de la relación comercial efectiva 31 de diciembre 2019****. Rta/ Para tal efecto podrás hacer uso de la comunicación ·3549DB4f-4371-4DD8-B515-52A1F29801E2 firmada por Luis Fernando Díaz donde* ***me notifica que los acuerdos de venta on premise, cloud, y var delivered support terminarán el 31 de diciembre de 2019****.*

[12] Ver folios 429 y 430 ídem.

> *Tenemos oportunidades en cierre con clientes de base instalada. Su decisión de cierre depende de actividad comercial que estamos ejecutando en este momento. Podemos tramitar dichas órdenes hasta el 31 de diciembre de 2019 y proceder como sugiero en la primera pregunta? En caso de que la respuesta sea que no, tendríamos que comunicárselo al cliente en lo que resta del mes para que tome una decisión informada sobre la renovación del servicio de mantenimiento 2020. Rta/ respuesta contenida en los numerales anteriores.* (Resaltado en amarillo del original, parte que la Sala subraya)

La documental contiene las consultas que elevó Esteban Burbano de Lara, en representación de Noux C.A., frente al futuro de las posibles contrataciones que suscribiera con entidades públicas o privadas a partir del 25 de septiembre de 2019, y se reconoció indefectiblemente que la persona fue enterada de la terminación de todos los contratos, sin excepción, el 31 de diciembre de 2019; entonces, probatoriamente no hay motivo para referir que se permitió la comercialización de servicios a prestarse desde el 1 de enero de 2020.

El 27 de septiembre de 2019, Luisa Oliveros le manifestó por correo electrónico: *"[a]bajo la respuesta a tus inquietudes en amarillo"*[13], por lo que se resaltó en dicho color, lo que se entiende es la respuesta a lo consultado por aquel y de la cual se extrae que, aunque no se restringió a la demandante procesar transacciones cloud después del 25 de septiembre de 2019, se dejó expresamente señalado que *"estos contratos no podrán tener una vigencia superior a 31 de diciembre de 2019"*.

Así las cosas, Noux estaba informada de:

a) Antes de ser notificada de la terminación: que, celebrados los contratos con terceros, sin interesar la forma que se acordara con el cliente, debía pagar anualmente por adelantado el

[13] Ver folios 428 y 429 ídem.

servicio de soporte técnico y mantenimiento, lo que fijaba el tiempo mínimo de extensión del acuerdo que suscribiera (1 año);

b) Después de ser notificada de la terminación: la fecha en que se extinguirían los vínculos que tenía con la encausada (31 de diciembre de 2019).

Ambas situaciones, duración de los convenios y la forma de finalización de los acuerdos de voluntades entre las litigantes, son de orden contractual, por lo que no es dable concluir que Noux desconocía la imposibilidad de celebrar pactos con clientes finales que se prolongaran después del 31 de diciembre de 2019. Lo que se busca poner de relieve, es que los **contratos entre Noux y SAP no fenecieron el 25 de septiembre de 2019**, debido a que aquella pudo culminar la prestación de servicios a que se encontraba comprometida por la vigencia 2019. Además, los correos electrónicos cruzados no tuvieron el alcance de otrosí a los contratos, pues solamente sirvieron para consultar y responder inquietudes, pero no fueron en estricto sentido modificaciones a lo convenido.

No se le prohibió a Noux comercializar productos y servicios SAP después del 25 de septiembre de 2019, pero se le explicó el límite temporal referente a que, en ningún caso, podía ofrecerlos con vigencias que excedieran el 31 de diciembre de ese año. Esto, por cuanto la parte resaltada en amarillo en el texto digital aportado (subrayado líneas arriba por la Sala), es claro en torno a que:

i) "Noux puede tramitar ordenes (sic) de compra hasta diciembre 31 de 2019"; ii) "los acuerdos de venta on-premise, cloud, y var delivered support terminarán el 31 de diciembre de 2019"; *iii)* Noux C.A. *"a partir de 1 de enero de 2010 (sic), no podrá re vender licenciamiento, ni prestar servicios de soporte de ningún*

licenciamiento", se comprende que el año que corresponde es 2020; *iv)* y, no puede pasarse por alto que se señaló que *"para procesar durante ese periodo de tiempo transacciones cloud, estos contratos no podrán tener una vigencia superior a diciembre 31 de 2019, periodo sobre el cual Noux mantiene su partner ship"*.

El texto en ninguna parte autorizó al socio para poner en el mercado servicios SAP que debieran prestarse en el año 2020, solamente refleja que la terminación de los acuerdos se materializaría el 31 de diciembre de 2019 y ese día fenecerían los derechos y obligaciones recíprocas entre los extremos en contienda, no más.

No puede pasarse por alto que respecto al alcance de la respuesta ofrecida por Luisa Oliveros, en el hecho 99 de la demanda se expuso que *"hasta el 31 de diciembre de 2019 Noux podía tramitar las órdenes de compra y renovaciones de servicios de soporte y mantenimiento (las cuales necesariamente implicaban la prestación de los servicios durante el año 2020 según los términos del Modelo Var Delivered Support), independiente de si el usuario final era una entidad pública o un particular"*, y *"[ú]nicamente los contratos relativos al almacenamiento en nube – no aquellos relativos a la venta de software y/o servicios de mantenimiento y soporte técnico – no podrían tener una vigencia superior al 31 de diciembre de 2019, fecha en la cual Noux perdería su condición de partner"*[14].

Tal fundamento fáctico fue controvertido por ser *"una paráfrasis descontextualizada del contenido del correo electrónico que SAP envió a Noux el 27 de septiembre de 2019. Me atengo al contenido del correo electrónico. En cualquier caso, rechazamos por infundadas las afirmaciones de la Demandante en el sentido que SAP hubiese afirmado que la tramitación de órdenes de compra y*

[14] Ver folio 74 archivo *"01EscritoDemanda"* ídem.

renovaciones de servicios de soporte y mantenimiento implicaran la prestación de servicios durante el año 2020, y que 'únicamente los contratos relativos al almacenamiento en nube – no aquellos relativos a la venta de software o servicios de mantenimiento y soporte técnico - no podrían tener una vigencia superior al 31 de diciembre de 2019, fecha en la cual Noux perdería su condición de partner'"[15].

Aunque las posturas de las partes son antagónicas, lo cierto es que el medio de prueba reporta información acerca de la terminación de la totalidad de los contratos el 31 de diciembre de 2019, sin discriminar si alguno, por ejemplo, el modelo de venta en la nube subsistía luego de dicha fecha. Tampoco alude el elemento de juicio que los servicios que se vendieran entre el 25 de septiembre y 31 de diciembre de 2019 serían prestados en 2020, pues nada se anotó en este sentido, y no podía desconocer Noux, desde que se le notificó la extinción del contrato, que pese a no haberse restringido expresamente, no era posible insistir en comercializar servicios hasta el límite fijado, esto es, a 31 de diciembre de 2019, debido a que lo adquirido por el usuario final tendría una duración de un año y se pagaría por el socio a SAP Colombia S.A.S. por adelantado anualmente, o sea, que sobrepasaba la fecha de finalización ya determinada, por así reglarlo los Términos y Condiciones Generales 2018 que, como se ha insistido, no fueron modificados con el correo estudiado ni con ningún otro medio de prueba.

En ese orden, se vislumbra que de acuerdo con el clausulado de los contratos y las comunicaciones cruzadas entre las partes, que fueron analizadas, la vigencia de los mismos no podía sobrepasar, en ningún caso, el 31 de diciembre de 2019, conclusión que expuso la *iudex a quo*, y que se mantiene incólume, por ende, fracasan los reparos interpuestos en este sentido, y los referentes a

[15] Ver folio 42 del archivo *"05ContestaciónDemanda20210430"* ídem.

que no se estudiaron tales documentos, cuando en el fallo (pág. 36) se observa que se hizo la expresa alusión y valoración. Del mismo modo, lo declarado por el representante legal de SAP Colombia S.A.S. acerca de que los servicios de soporte se comercializaban y renovaban año anticipado en nada muta lo advertido, como quiera que esa forma de venta fue la pactada por las partes, sin que ello acredite que le era dable a la demandante ofrecer y vender servicios luego del 31 de diciembre de 2019. Símil situación se presenta con la declaración de Guillermo Brinkmann, en la cita que hizo la apelante, dado que reconoció el testigo que los contratos estaban vigentes entre 25 de septiembre de 2019 y 31 de diciembre de ese año, lo que es indudable, y que la renovación era automática y anual.

Tampoco se abre paso la alegación consistente en que conforme con la sentencia atacada se entendió que los contratos terminaron el 25 de septiembre de 2019, dado que en la parte motiva no hay manifestación alguna al respecto, sino que se centró en lo reportado por las pruebas, es decir, que la extinción contractual tuvo lugar el 31 de diciembre de 2019; además, se insiste, que a Noux no se le impidió prestar los servicios SAP contratados antes del 25 de septiembre de 2019 y hasta el 31 de diciembre de esa anualidad, lo que de suyo hace que no se predique una terminación en la primera calenda referida, pues lo pactado entre las partes en contienda, así como entre la demandante y los terceros respecto de servicios SAP, se mantuvo hasta el último día de ese año.

Igualmente queda rebatido el reproche fundado en que no se tuvo en cuenta que se constituyó un incumplimiento de la encausada al anular las facturas que habían sido expedidas por servicios SAP a Marathon (Superdeporte), Interdin S.A., Provefarma S.A. y el Ministerio de Educación de Ecuador, tal como se expondrá.

En el expediente están las facturas de venta Nos. SAS39465[16], de 23 de octubre de 2019, por USD29.295 por adquisición de licencia del consumidor final Ministerio de Educación del Ecuador; SAS60038[17], de 10 de diciembre de 2019, por mantenimiento de software SAP; SAS62855[18], de 27 de enero de 2020, por USD6.444.90; SAS62853[19], de 27 de enero de 2020, usuario final Interdin S.A.; SAS62856[20], de 27 de enero de 2020, consumidor final Provefarma S.A.; SAS62857, de 27 de enero de 2020, por mantenimiento de software SAP a Superdeportes S.A.; SAS62854[21], de 27 de enero de 2020, con destinatario Leterago del Ecuador S.A. y SAS62852, de 27 de enero de 2020, por mantenimiento de software SAP a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza.

Cada uno de estos, conforme con lo pactado en los contratos, tendrían como fuente la orden de compra remitida por Noux C.A. a la demandada, que en señal de aceptación expide los documentos cambiarios, y en ese momento nace el contrato entre el distribuidor o socio y el cliente final, con las obligaciones respectivas; a su vez, para SAP Colombia S.A.S. surgían las obligaciones pertinentes frente a Noux C.A. para satisfacer la demanda requerida. No obstante, en este caso, tales facturas se emitieron como un error injustificable administrativamente de la demandada, supuestamente, por desconocer la empleada del área encargada de la terminación de los contratos[22], pero eso no implica un incumplimiento de los acuerdos.

Lo anterior, toda vez que el 25 de septiembre de 2019 se notificó en debida forma la terminación de los contratos el 31 de

---

[16] Ver folio 533 del archivo *"02ApoderadoAllegaPruebas"* ídem.
[17] Ver folio 535 ídem.
[18] Ver folio 537 ídem.
[19] Ver folio 540 ídem.
[20] Ver folio 562 ídem.
[21] Ver folio 770 ídem.
[22] Declaración Julieta Carolina Gazcón.

diciembre siguiente, sin que pudiese en ese lapso obligarse la demandante con clientes finales a proveer servicios durante 2020, como se explicó; el **27 de septiembre de 2019** Noux C.A. solicitó a SAP Colombia S.A.S. la exclusión del proceso de renovación automática de mantenimiento[23] de clientes como Provefarma S.A., Leterago de Ecuador S.A., Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza del Valle, Interdin S.A. y Superdeportes S.A.; significa ello, que enterada la demandante de la terminación de los contratos a 31 de diciembre de 2019, y a sabiendas que no se haría la renovación automática de servicios de mantenimiento para los clientes mencionados, insistió en pedirla el 24 de diciembre de 2019, para la vigencia *"desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020"*, respecto de Provefarma, Superdeportes e Interdin[24], y la encausada procedió a facturar y mantener activas las cuentas, con lo que incurrió en un error, que luego decidió subsanar con la anulación[25] de los títulos valores.

No puede pasarse por alto que solamente las facturas SAS39465 y SAS60038 se emitieron antes de extinguirse los contratos, por preceder al último día de 2019, mientras que las demás se expidieron a partir de enero de 2020, lo que no implica que de generar algún efecto adverso a la activa, el mismo no se derivó de los convenios extinguidos, por tanto, no es dable que se analicen tales consecuencias a través de la acción contractual aquí promovida, que se circunscribió específicamente a los acuerdos ya conocidos.

Así las cosas, al haberse establecido la extinción de los acuerdos de voluntad para el 31 de diciembre de 2019, conforme con las pautas contractuales fijadas, y ser así acreditado, quien primero desatendió lo pactado fue Noux C.A., al adelantar un

[23] Ver folios 776 a 778 ídem.
[24] Ver folios 438, 439 y 440 ídem.
[25] Ver folios 544, 555, 565 ídem.

trámite contractualmente improcedente, esto es, vender servicios para la vigencia 2020. De allí, que no pueda atribuirse un incumplimiento a SAP Colombia S.A.S. por dejar sin efecto los documentos que tuvieron el origen aludido. Entonces, Noux C.A. no podía reclamar comisión por las irregulares ventas que realizó entre el 25 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, y que fueron recogidas en las facturas ya enunciadas, a la vez que ningún perjuicio puede desprenderse de esa conducta renuente a honrar lo acordado, es decir, no existió si quiera una expectativa de contrato, pues ya era clara su extinción y no hay prueba alguna de una prórroga.

De cara a los reproches que tuvieron como pilar que no se analizó debidamente el incumplimiento del artículo 2 de la parte 1 de los términos y condiciones generales al considerar que no hubo un uso indebido de la información confidencial por parte de SAP Colombia S.A.S., en reiteración de lo esgrimido en los hechos 128 a 139 de la demanda que sirvieron de soporte a las pretensiones quinta y sexta principales y subsidiarias, es evidente su infertilidad, en principio, porque la juzgadora despachó tal argumento con apoyo en jurisprudencia constitucional y en lo dispuesto por el artículo 265 de la Decisión 486 de 2000, y a continuación, de acuerdo con el clausulado de los contratos, encontró improcedente la pretensión.

Ahora bien, basta memorar que el uso inadecuado de la información que atribuyó la demandante a la demandada es porque dio a conocer a clientes de Noux C.A. la terminación de los contratos entre ellas, pese a que aquellos no eran consumidores de servicios SAP, como Corporación La Favorita, Yangtse Motors e Industrias Ales. Documentalmente se demostró que ello fue así, pues aparecen las misivas que se enviaron a tales empresas[26]; no obstante, el

[26] Ver folios 441, 445, 446 ídem.

contenido apenas revela que se les hizo saber que Noux C.A. estaba informada de la terminación, lo que es cierto, y que debían escoger un socio o partner para que les prestara los servicios, es decir, que no se reveló ningún dato que pudiese ser reservado o sensible, ni se procuró *"instarlos a que terminarán su relación con Noux"* (hecho 132). Adicionalmente, la dirección electrónica o datos de contacto de empresas no es clasificado u oculto, pues existen formas de publicitarlos, razón por la que no se incurrió en un uso indebido de información confidencial, por tanto, ningún daño se causó a la actora en tal virtud.

Se examina ahora el reparo que se basó en que la *a quo* erró al negar las pretensiones décima y décima novena como resultado de su análisis sobre la inexistencia de una agencia comercial bajo el Programa Sell Cloud Modificado, pues aquellas no dependían de la calificación jurídica como agencia comercial de dicho contrato, ya que las comisiones reclamadas no tienen relación alguna con las prestaciones del contrato de agencia comercial, sino con lo estatuido en el artículo 4.4. de la enmienda al Modelo Sell on Cloud, que fue cuantificado en el dictamen pericial frente a Etatex en USD19.990.

Para resolver, debe memorarse que tales aspiraciones son del siguiente tenor:

> *Décima. Que se declare que bajo el programa Sell Cloud Modificado Noux tiene derecho a las comisiones de cada una de las suscripciones que se mantengan vigentes por un término de hasta cinco (5) años a partir del 31 de diciembre de 2019.*
>
> Y,
>
> *Décima novena. Que se condene a SAP a pagar a Noux la suma de sesenta mil ciento setenta y cinco dólares (USD$60.175), o el mayor valor que resulte probado en el proceso, por concepto de las comisiones causadas bajo el Programa Sell Cloud Modificado y el Modelo Sell Cloud.*

Ahora bien, en la *"Enmienda de la Opción de Reembolso al Programa de Venta en la Nube de SAP PartnerEdge para el acuerdo Maestro de Socio de SAP PartnerEdge"*[27] se estableció en el numeral 4 la *"Comisión de socios"*, y en el 4.4. que *"SAP solo pagará comisiones al socio durante la vigencia de esta enmienda. Sin embargo, cuando SAP* ***rescinda esta Enmienda o el Acuerdo por conveniencia****,* ***SAP estará obligada a continuar con el pago de las comisiones*** *de acuerdo con esta Sección 4* ***durante el plazo restante de las suscripciones para los pedidos que aún estén vigentes al momento de la rescisión hasta cinco (5) años después de la fecha efectiva de terminación, siempre que el pedido respectivo permanezca vigente durante dicho período***" (negrilla no es del original).

En este caso no existe controversia en punto de que el motivo de terminación del contrato fue la conveniencia, lo que se ajusta, en principio, a lo contractualmente dispuesto para la procedencia del reconocimiento de las comisiones, que según se pactó se extiende hasta por cinco años más después de la terminación, que tuvo lugar el 31 de diciembre de 2019, siempre que el *"pedido respectivo permanezca vigente durante dicho período"*.

En la demanda se indicó puntualmente que el valor al que ascienden las comisiones generadas en el caso de Etatex C.A. es de USD29.988 desde el 31 de diciembre de 2018 hasta el 30 de diciembre de 2021, a razón de USD2.499 liquidados por períodos trimestrales (ver hechos 140 a 143) y frente a eso la demandada contestó que pagó en su integridad todas las comisiones causadas hasta el 30 de abril de 2021, sin acompañar las pruebas respectivas.

Con el objeto de acreditar la causación y cuantía de lo reclamado, se aportó el dictamen pericial rendido el 23 de julio de

[27] Ver folios 715 a 723 ídem.

2021 por Integra Auditoría y Consultoría[28], el cual fue sometido a contradicción, en el que en su numeral "4.3. *Daños Sufridos por Noux bajo la ejecución del modelo Sell Cloud"*, se consignó que *"para establecer el monto de las comisiones SAP genera un documento denominado Payout Schedule, en el cual se incluyen las fechas de inicio (31.12.2018) y terminación del contrato suscrito con el cliente final (30.12.2021) y los montos a pagar en cada período por SAP a Noux"*, y se obtuvo el valor del Payout Schedule por las ventas que el socio realizó a Etatex CA por USD49.975.20, las comisiones son del 20%, y su valor trimestral es de USD2.498.76, de donde resulta que el total de la comisión es de USD29.985.12, pero de ese monto se cancelaron USD9.995.04, el saldo adeudado es de USD19.990.12.

Nótese, que la experticia carece de claridad en torno al interregno liquidado por las comisiones, puesto que, como viene de verse, en la demanda se proyectó hasta el 31 de diciembre de 2021 por un monto de USD29.988, y en el dictamen no se expuso con nitidez hasta cuando se causó el valor que adujo como saldo, en tanto en el *"cuadro No. 6 Valor adeudado por comisiones"* incluyó las siguientes calendas: 8 de abril de 2016, 20 de mayo de 2020 y 2 de junio de 2020 y, aun así, obtuvo un monto similar al del texto introductor, esto es, USD29.985,12.

Entonces, ante la falta de claridad de los períodos tenidos en cuenta para estimar la deuda que por comisiones pudiera llegar a tener la pasiva con la actora, no es dable asignarle mérito demostrativo en este sentido al trabajo pericial bajo examen, motivo por el que no es posible modificar la decisión de primer grado.

[28] Ver archivo de *"01CuadernoPrincipal"* de *"CuadernoJuzgado"* del expediente digital.

III. CONCLUSIÓN

El acervo probatorio permitió establecer que los contratos que ligaron a los extremos procesales fenecieron el 31 de diciembre de 2019, por lo que no se configuró incumplimiento alguno de sus lineamientos por la demandada, acorde con lo alegado por la demandante, situación que motiva confirmar la sentencia atacada.

Dado el resultado del recurso de apelación, se impondrá condena en costas por la segunda instancia a la demandante en favor de la demandada que intervino en la alzada.

IV. DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en Sala Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

Primero: CONFIRMASE la sentencia apelada.

Segundo: CONDENASE a la parte demandante a pagar las costas de segundo grado en favor de la parte demandada. Tásense y liquídense por el procedimiento previsto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

En la debida oportunidad, la secretaría devolverá la actuación digital al juzgado de origen.

Notifíquese.

Magistrado y magistradas integrantes de la Sala

JAIME CHAVARRO MAHECHA

MARÍA PATRICIA CRUZ MIRANDA

STELLA MARÍA AYAZO PERNETH

Firmado Por:

Jaime Chavarro Mahecha
Magistrado
Sala Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Maria Patricia Cruz Miranda
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Dirección Ejecutiva De Administración Judicial
División De Sistemas De Ingenieria
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Stella Maria Ayazo Perneth
Magistrada
Sala 04 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **b1fbbeddc4ca37ac805e9ca35eb679ff0f3a958aa6e05e60f90c68d4aab7ab11**
Documento generado en 29/02/2024 03:57:10 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ - SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

Magistrada Ponente:	**CLARA INÉS MÁRQUEZ BULLA**
Radicación:	**110013103040 2012 000214 02**
Procedencia:	Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito
Demandante:	Luis Alejando Moreno Rivas
Demandados:	Hospital Universitario San Ignacio y otra
Proceso:	Verbal
Asunto:	Aclaración de sentencia

Discutido y aprobado en Sala de Decisión del 29 de febrero de 2024. Acta 06.

2. OBJETO DE LA DECISIÓN

Se resuelve la solicitud de aclaración formulada por el apoderado de la Cruz Roja Colombiana, frente a la sentencia proferida por esta Corporación el 19 de febrero pasado, dentro del proceso **VERBAL** instaurado por **LUIS ALEJANDRO MORENO RIVAS** contra el **HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO y la CRUZ ROJA**

COLOMBIANA –SECCIONAL CUNDINAMARCA Y BOGOTÁ.

3. ANTECEDENTES

3.1. Mediante la providencia objeto del *petitum*, se zanjó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en aquella determinación se resolvió:

***"...7.1. CONFIRMAR** la sentencia proferida en el asunto del epígrafe de fecha16 de enero de 2023, por el Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de Bogotá, D.C.*

***7.2. COSTAS** a cargo del recurrente Luis Alejando Moreno Rivas, derrotado en esta sede. Liquidar en la forma prevista en el artículo 366 del Código General del Proceso. La magistrada ponente fija como agencias en derecho la suma de $ 3'000.000.oo*

***7.3. DEVOLVER** el expediente a su Despacho de origen. Oficiar y dejar constancia…"*[1].

3.2. El mandatario judicial de una de las integrantes de la pasiva deprecó que, con estribo en el *"…artículo 366 del Código General del Proceso … numeral 7º…"*, se aclare el ordinal 7.2. de la sentencia, para que señale si el valor fijado por agencias en derecho es para cada uno de los demandados y la compañía llamada en garantía, o los comprende a todos ellos[2].

4. CONSIDERACIONES

4.1. Autoriza el artículo 285 del Código General del Proceso, la aclaración de las providencias judiciales con el propósito que el

[1] Folios 36 y 37 del archivo 22SentenciaConfirma.
[2] Archivo 23SolictudAclaración.

Funcionario que la profirió subsane los defectos o deficiencias de orden material, a lo cual procederá de oficio en el término de su ejecutoria, o a petición de parte presentada dentro del mismo.

Esta modalidad que cobra importancia para efectos de la petición que ahora se despacha, se encuentra instituida para aquellos eventos en que la decisión contenga frases o conceptos que procuren motivo de duda, siempre que estén contenidos en el acápite resolutivo o influyan en él.

Por consiguiente, debe puntualizarse que procede únicamente cuando la duda o incertidumbre se advierta en la parte resolutiva de la decisión, ya que si ella es diáfana no habrá lugar a la misma, aun cuando persistan frases oscuras en las motivaciones, a menos que, como lo señala la propia norma, la resolutiva refiera a ellas y de la remisión surja la duda o ambigüedad.

Descendiendo en el sub-judice, de entrada, se advierte lo impróspero del pedimento aclaratorio, como quiera que auscultado el ordinal 7.2. del acápite resolutivo de la determinación, dispuso condenar en costas al apelante Luis Alejandro Moreno Rivas por haber resultado vencido en esta instancia.

A continuación, indicó que se liquidarán en la forma establecida en el artículo 366 del actual Estatuto Adjetivo Civil, y determinó que debían sufragarse como agencias en derecho la suma de $3.000.000.oo.

De manera que, en tal mandato no se advierten conceptos o frases que generen perplejidad, por lo tanto, se descartan las exigencias disciplinadas en el canon 285 *ejúsdem,* y no se abre paso la aclaración invocada.

Lo anterior, máxime cuando la disposición citada por el memorialista

que, en realidad, corresponde al numeral 7º del artículo 365 *ibidem* y no al precepto siguiente, en manera alguna, impone que la cifra establecida a título de agencias en derecho sea reconocida de forma individual a los litigantes, sino que a cada uno de estos se les reconozcan los gastos solucionados y, sus liquidaciones se efectúen por separado.

Así las cosas, como en la orden de solucionar la cantidad que se determinó por el concepto antes memorado, a su vez, no se especificó que dicho monto era para cada uno de los convocados y la llamada en garantía, se entiende que el mismo debe dividirse entre ellos proporcionalmente.

Ergo, deviene frustránea la aludida petición.

5. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA, EN SALA QUINTA DE DECISIÓN CIVIL,**

RESUELVE:

NEGAR la aclaración de la providencia calendada el 19 de febrero de 2024, por las razones expuestas en la parte motiva.

NOTIFÍQUESE,

Firmado Por:

Clara Ines Marquez Bulla
Magistrada
Sala 003 Civil
Tribunal Superior De Bogotá D.C.,

Angela Maria Pelaez Arenas
Magistrada
Sala 009 Civil
Tribunal Superior De Bogotá D.C.,

Sandra Cecilia Rodriguez Eslava
Magistrada
Sala Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **0b26089cdc4ad84d3322c27fb61e7116d8a7c1a19b58231049463a681b147db0**
Documento generado en 29/02/2024 11:42:07 a. m.

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia
Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, D.C.
SALA CIVIL DE DECISIÓN

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

MAGISTRADA PONENTE:	**ANGELA MARÍA PELÁEZ ARENAS**
RADICACIÓN:	**11001310304020190016403**
PROCESO:	**VERBAL**
DEMANDANTE:	**NATASHA IVONNE BLOCH MOREL**
DEMANDADO:	**INVERSIONES HARI SAS EN REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL**
ASUNTO:	**APELACIÓN DE AUTO**

Discutido y aprobado por la Sala del 29 de febrero de 2024, según acta N° 07 de la misma fecha.

Decídase el recurso de apelación interpuesto en contra del auto proferido en diligencia celebrada el 30 de noviembre del 2023, por el Inspector de Policía de Cota, Cundinamarca, comisionado por el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogotá, dentro del despacho comisorio No. E0064-23 de entrega de bien inmueble ordenada en el proceso del epígrafe, mediante el cual se rechazó la oposición formulada.

ANTECEDENTES

1. Mediante Despacho Comisorio No. E0064-23 del 13 de octubre del 2023[1], el Juzgado 40 Civil del Circuito de esta ciudad, comisionó la diligencia de entrega del inmueble denominado Santa Sofía, marcado con el número 51 del lote 1 de la parcelación Granjas Familiares de Cota -Cundinamarca- y distinguido con el folio de matrícula inmobiliaria 50N-102799, en favor de la señora Natasha Ivonne Bloch Morel, demandante en la presente acción verbal.

---

[1] Ver documento denominado *"57ComisorioEntregaSentenciaE0064"* del cuaderno *"01CuadernoPrincipal"* del expediente remitido en calidad de préstamo para desatar el recurso de alzada.

2. Por auto del 2 de noviembre del mismo año[2], el Inspector de Policía de Cota, Cundinamarca, auxilió la comisión encomendada y señaló fecha y hora para surtir la entrega ordenada en sentencia del 19 de abril de 2021, la cual fue aclarada por auto del 11 de mayo del mismo año[3]; orden que fue finalmente confirmada por este Tribunal Superior, en la medida que, mediante fallo del 26 de octubre del 2021[4], solo se modificó el ordinal octavo de la providencia apelada, en lo que respecta al reconocimiento y pago de la cláusula penal parcial y su compensación.

3. El funcionario comisionado, el 14 de noviembre del 2023[5] inició la diligencia de marras, en la que identificó el bien objeto de entrega; acto seguido el representante legal de la sociedad Inversiones Hari S.A., alegó la existencia de un error en las providencias emitidas, ya que estas no contemplan la entrega de las dos casas que fueron vendidas y entregadas, además se encuentran reconocidas en el proceso de insolvencia tramitado ante la Superintendencia de Sociedades.

Refirió que los inmuebles fueron entregados con anterioridad a la admisión del proceso, por lo que no puede adjudicar lo que no es de su pertenencia; esto es, el área de las casas, así como sus zonas comunes, representadas por portería, shut o cuartos de basura, lo dispuesto para equipos técnicos, tanque de agua subterránea, espacio disponible para subestación eléctrica, vías adoquinadas y redes de servicios públicos.

3.1. Por su parte, la señora Marleny Bedoya Giraldo, por medio de apoderada judicial, formuló oposición a la entrega bajo el argumento que como propietaria de la vivienda No. 2 ubicada en el inmueble objeto de diligencia es tercera de buena fe, ya que adquirió parte del inmueble mediante contrato de cuentas en participación y canceló por él la suma de $710.000.000 a la empresa Inversiones Hari S.A.S. el 9 de enero del 2018, fecha en la cual recibió el lote de terreno referido.

---

[2] Ver fl. 63 del documento denominado *"DESPACHO COMISORIO E-0064-23.pdf"* de la carpeta llamada *"E-0064-23"* del cuaderno identificado como *"PrimeraInstancia" ídem*.
[3] Ver documentos denominados *"22Sentencia20210423.pdf"* y *"26AutoAclaraSentencia20210511"* del cuaderno *"01CuadernoPrincipal" íd.*
[4] Ver documento denominado *"11SentenciaSegundaInstancia.pdf"* del cuaderno identificada como *"Cuaderno Tribunal" ibídem*.
[5] Ver fls 71 a 74 del documento denominado *"DESPACHO COMISORIO E-0064-23.pdf"* de la carpeta llamada *"E-0064-23"* del cuaderno identificado como *"PrimeraInstancia"* del expediente remitido en calidad de préstamo.

Alegó que en la medida que no ha sido vinculada a ningún proceso judicial, en donde se debatan sus derechos de propiedad sobre el citado inmueble, el inspector no puede realizar la entrega del predio de mayor extensión, por lo menos en lo que respecta a la vivienda número 2, la cual fue dada en arrendamiento al señor Juan Fernando Sánchez desde el 1 de diciembre del 2020 y desde ese momento, este funge como su tenedor de buena fe, circunstancia por la cual de igual forma abogó ser su agente oficiosa, en la medida que esta persona no podía comparecer a la citada diligencia.

Aseveró que la diligencia comisionada se limita a la entrega de un bien inmueble, pero no respecto a viviendas actualmente arrendadas, las cuales cuentan con todos los servicios públicos, y como quiera que el funcionario público sólo puede hacer lo que taxativamente le está permitido, las viviendas no pueden ser objeto de la diligencia.

Solicitó la intervención de la Personería y del Ministerio Público, para que en ejercicio de sus funciones actúen en defensa de sus derechos al debido proceso, pues si bien el Juez 40 Civil del Circuito ordenó la entrega del inmueble, este desconocía la existencia de mejoras y viviendas de propiedad de terceros de buena fe; por lo que solicitó la devolución del comisorio para que el juez de pronuncie al respecto, puesto que desconocía de la existencia del proceso.

Finalmente, con la exhibición de los documentos que soportan su oposición, aseveró que la fecha de suscripción del contrato de cuentas en participación fue el 16 de noviembre del 2016, no como consta en el instrumento.

3.2. Entre tanto, la señora Olga Lucía Herrera Chitiva, también formuló oposición, bajo el argumento que compró de buena fe en agosto de 2017, sin que las personas involucradas en el litigio la llamaran, no obstante, la existencia evidente de las dos casas. Finalmente, aseveró que actualmente tiene la casa arrendada al señor Mauricio Ortiz, quien no pudo asistir a la diligencia.

3.3. Por último, el señor Luis Eberto Velasco Delgado, solicitó el otorgamiento de unos días para poder desocupar el inmueble objeto de diligencia.

4. Mediante auto proferido en diligencia del 17 de noviembre del 2023[6], la autoridad comisionada no tuvo en cuenta la oposición formulada en favor del señor Juan Francisco Sánchez García, dado que no fue ratificada la agencia oficiosa solicitada a su favor, luego de que si compareció a la diligencia surtida el 14 de noviembre de 2023.

5. Una vez evacuadas las pruebas decretadas, por auto pronunciado en la audiencia celebrada el 30 de noviembre de 2023[7], el comisionado rechazó las oposiciones formuladas por la parte demandada y por las señoras Olga Lucia Herrera Chitiva y Luz Marleny Bedoya Giraldo, ordenó la entrega del inmueble a la señora Natasha Ivonne Bloch Morel conforme lo dispuso la sentencia y la comisión encomendada, al considerar, en primer lugar, que de conformidad con el material probatorio y respecto de la Sociedad Inversiones Hari S.A.S., es claro que debe dar aplicación a lo previsto en el numeral 1 del artículo 309 del Código General del Proceso, ya que tanto en el proceso como en la diligencia pudo evidenciarse que gran parte del terreno viene siendo ocupado por el ente demandado, hecho que ratificó su representante legal y en todo caso corroboró el señor Luis Eberto Velasco Delgado, quien señaló ser empleado de la empresa, comentó ocupar una de las viviendas identificadas en el inmueble y además estar dispuesto a entregarlo.

En segundo lugar, porque las señoras Herrera Chitiva y Bedoya Giraldo, derivan sus derechos de persona contra quien la sentencia produce efectos, es decir, son causahabientes de la demandada, *"justamente del negocio primigenio que se dio por terminado en la sentencia de marras"*. Lo anterior en la medida que el negocio denominado cuentas en participación, el cual soporta su resistencia, fue celebrado por la persona jurídica contra la que produce efectos el fallo proferido.

---

[6] Ver fls 100 a 104 y 199 a 201 del documento denominado *"DESPACHO COMISORIO E-0064-23.pdf"* de la carpeta llamada *"E-0064-23"* del cuaderno identificado como *"PrimeraInstancia"* del expediente remitido en calidad de préstamo.
[7] Ver fls 281 a 288 *ídem.*

Puntualizó que aun cuando una vez suscrito un contrato, cumpliendo con los requisitos legales y formales a que hubiere lugar, el mismo solo produce efectos para los que lo celebran o suscriben. También lo es que quienes se oponen en calidad de terceros, sucedieron los derechos de Inversiones Hari S.A.S., máxime si se trata de adquisición de bienes inmuebles que, *per se*, tienen un proceso jurídico y de registro específico.

Recalcó que de cara a la prueba documental, el inmueble materia de litigio (Finca Santa Sofía), fue entregado a título de comodato precario, por lo que la titularidad del predio se encuentra en cabeza de la demandante y en consecuencia la intención de las partes era la de dar la finca en tenencia, de manera que no podía la entidad demandada ostentar la calidad de poseedora material del bien y mucho menos quedar habilitada para ceder el derecho de posesión que dicen ostentar las opositoras, ya que no se puede transferir más derecho del que se tiene.

Afirmó que las opositoras adquirieron un derecho común y proindiviso en el mismo estado en que se encontraba en el patrimonio del causante, en la misma posición en la que se le había asignado en los contratos traídos al proceso, no solo el que fue objeto de resolución sino del denominado cuentas en participación, en donde no se observa transmisión o entrega del derecho de posesión con ánimo de señor y dueño.

Agregó que en todo caso, el caudal probatorio allegado no robusteció la calidad de poseedoras que deprecan las opositoras, pues no allegaron prueba sumaria que acreditara tal calidad, ni tampoco presentaron declaraciones de terceros que la corroboren, aunado al hecho que de sus dichos se desprende el reconocimiento de dominio ajeno en cabeza de la demandante Bloch Morel; sin que se avizore la rebeldía del poseedor respecto de quien aparece inscrito como titular del derecho de dominio.

Aseveró que en el caso de la señora Olga Lucía Herrera Chitiva, su calidad de tercero no se encuentra acreditada y menos aún la de poseedora, puesto que la suscripción del contrato denominado cuentas en participación, se realizó en calidad de representante legal de la sociedad Ingeas S.A.S.

6. Inconforme con las anteriores determinaciones, las señoras Olga Lucía Herrera Chitiva y Luz Marleny Bedoya Giraldo, por medio de su apoderada judicial, formularon recurso de reposición y en subsidio apelación, bajo el argumento que no ostentan la calidad de tenedoras a nombre de la empresa demandada, sino que por el contrario soportan su oposición en los términos del artículo 762 del C.G.P., pues son poseedoras de las dos viviendas que se encuentran en el predio objeto de entrega, por lo que el numeral 1 del artículo 309 de del Estatuto Procesal civil no les es aplicable, por ser terceras poseedoras de buena fe.

Aseveraron que la posesión alegada se encuentra probada con los contratos de arrendamiento arrimados, ya que esta derivó de la entrega efectuada con los contratos de cuentas en participación y data del año 2017, sin que la misma emane de la ejercida por la sociedad demandada. Que en todo caso han ejercido actos de señor y dueño, pagando la totalidad de las viviendas, hecho conocido por la actora, quien no se ha opuesto a ello.

Afirmaron que nunca fueron vinculadas al proceso verbal tramitado por el Juzgado 40 Civil del Circuito de esta ciudad, actuación que desconoció sus posesiones de más de siete años.

7. Corrido el traslado correspondiente, el *a quo* comisionado mantuvo su decisión primigenia, al considerar que son débiles los argumentos esgrimidos por las recurrentes, puesto que, si bien la posesión se ejerce a través de actos propios de señorío, más cierto es que dicho derecho debe acreditarse a través de los medios de prueba establecidos legalmente.

Puntualizó que la actividad probatoria se limitó a las pruebas documentales allegadas, sin que se allegara un esfuerzo jurídico para acreditar la posesión. Que en todo caso, nada se informó respecto a la causahabiencia considerada y menos se alegó respecto a la relatividad de los contratos o la individualización de la oposición alegada.

Refirió que el rechazo en virtud del numeral 1 del artículo 309 del Código General del Proceso, fue el argumento medular, pero para rechazar la oposición o resistencia de Inversiones Hari S.AS. dada su calidad de parte y aun cuando se utilizó solo una parte del numeral, fue la interpretación

sistemática e integral del artículo 309 del C.G.P., el que dio origen a la decisión fustigada.

Informó que para su decisión fue necesario analizar la persona que se resiste a la práctica de la medida, para saber las condiciones, estirpe y vínculo jurídico que las ata al inmueble materia de entrega, por lo que, ponderada la calidad deprecada, se estableció que los derechos de las opositoras se sustentan en unos contratos de cuentas en participación, de donde se extrajo que las opositoras ostentan es una tenencia, como quedó plasmado en el contrato de promesa de venta objeto de resolución y se esboza de los contratos líneas atrás referidos.

Acto seguido, se concedió el recurso de alzada y se dispuso la entrega real y material del inmueble objeto del proceso, conforme lo ordenado en la comisión encomendada.

CONSIDERACIONES

1. Delanteramente se advierte que conforme lo normado en el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia de esta segunda instancia se limitará a resolver únicamente los argumentos expuestos por el apelante, por lo que, conviene precisar que esta Colegiatura no emitirá ningún pronunciamiento frente a la decisión emitida respecto a la sociedad Inversiones Hari S.A.S., puesto que la alzada se concedió solamente respecto a las señoras Olga Lucía Herrera Chitiva y Luz Marleny Bedoya Giraldo, a quienes se les rechazó la oposición a la entrega del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 50N-102799.

2. Ahora, con el fin de abordar la inconformidad planteada, sea lo primero advertir que si bien el artículo 309 del Código General del Proceso, al ocuparse de la oposición a la entrega, señala en el numeral dos que: "*Podrá oponerse la persona en cuyo poder se encuentra el bien y contra quien la sentencia no produzca efectos, si en cualquier forma alega hechos constitutivos de posesión y presenta prueba siquiera sumaria que los demuestre* (…)". No es menos cierto que el numeral uno de ese precepto prevé que "[e]*l juez rechazará de plano la oposición a la entrega formulada por persona contra quien produzca efectos la sentencia, o por quien sea tenedor a nombre de aquella*".

3. En el anterior contexto, bien pronto se advierte que la decisión impugnada habrá de ser confirmada, conforme las razones que se pasan a explicar a continuación:

3.1. En efecto, con la sentencia proferida el 19 de abril del 2021, la cual fue aclarada el 11 de mayo del mismo año[8], se declaró resuelto el contrato de promesa de compraventa de la parcela Santa Sofía, suscrito el 23 de octubre de 2014, así como los Otro Sí Nos. 1, 2, 3 y 4, todos celebrados entre Natasha Ivonne Bloch Morel e Inversiones Hari S.A.S., hoy en Reorganización Empresarial, y se ordenó entre otras, que la sociedad restituyera el bien identificado con el folio de matrícula líneas atrás referido; decisión que fue confirmada en segunda instancia por este Tribunal Superior de Distrito Judicial, mediante fallo del 26 de octubre de 2021[9].

Lo que, en principio, permitiría inferir que estas decisiones no producen efectos respecto de las señoras Herrera Chitiva y Bedoya Giraldo, dado que no fueron vinculadas como parte o litisconsortes en este proceso; sin embargo, para la Sala es claro que tampoco estarían legitimadas para oponerse a la diligencia de entrega realizada por el Inspector Comisionado, por cuanto su derecho sí deriva del extremo pasivo, quien fue condenado a la devolución de la totalidad del predio de propiedad de Natrasha Ivonne Bloch Morel.

Es que téngase en cuenta, que conforme se extrae de las declaraciones rendidas por las opositoras, estas suscribieron con la demandada contratos de cuentas en participación, en donde si bien en su clausulado se estipuló la entrega de las casas 1 Tipo B y 2 Tipo A, la transferencia se dio a título de beneficio por el hecho de haber realizado un aporte al proyecto inmobiliario que se realizaría en ese predio, al punto que se agregó en la estipulación cuarta de los contratos[10] que *"no se vería afectado, disminuido o aumentado por el resultado final del proceso*".

Con lo cual resulta evidente que nunca se pactó la enajenación de los inmuebles referidos y menos aún se hizo trasferencia de la eventual

---

[8] Ver documentos denominados *"22Sentencia20210423.pdf"* y *"26AutoAclaraSentencia20210511"* del cuaderno *"01CuadernoPrincipal" íd.*

[9] Ver documento denominado *"11SentenciaSegundaInstancia.pdf"* del cuaderno identificada como *"Cuaderno Tribunal" ibídem*.

[10] Ver fls. 196 y 245 del documento denominado "DESPACHO COMISORIO E-0064-23.pdf" de la carpeta llamada "E-0064-23" del cuaderno identificado como "PrimeraInstancia" del expediente remitido en calidad de préstamo.

posesión; sino por el contrario, se trató de un traslado de la mera tenencia que en principio se encontraba en cabeza de Inversiones Hari, que la había obtenido al suscribir el contrato de promesa de compraventa, pues ello se extrae de lo expresamente consagrado en la cláusula décima segunda[11] del instrumento, en donde se pactó la entrega del inmueble a título de comodato precario y sin que se le autorizara enajenar total o parcialmente el lote de terreno objeto de negociación.

Por lo anterior, resulta inverosímil considerar que las señoras Herrera Chitiva y Bedoya Giraldo derivaron sus derechos de posesión de la sociedad demandada, cuando sabido es que la promesa de contrato no confiere posesión material al promitente comprador sino la mera tenencia, pues así lo ha puntualizado la Corte Suprema de Justicia: *"Por consiguiente, cuando los promitentes contratantes anticipando el cumplimiento del contrato prometido, en forma clara, explícita e inequívoca no estipulan expressis verbis en cláusula agregada a propósito de la entrega antelada de la posesión de la cosa prometida en compraventa, se entiende entregada y recibida a título de mera tenencia, porque al prometerse con la celebración del definitivo, transferir y adquirir la propiedad de su dueño, se reconoce dominio ajeno, y tal reconocimiento excluye la posesión"*[12]*.*

De igual forma, refiere el Alto Tribunal de la justicia ordinaria, que para que la entrega de un bien prometido en venta pueda originar posesión material, es indispensable que en la promesa se estipule expresa y claramente que el bien es entregado en tal condición, ya que solo en ese caso se manifiesta el desprendimiento del ánimo de señor y dueño del promitente vendedor y la voluntad de adquirirlo por parte del futuro comprador[13].

En todo caso, vale la pena recordarle a la parte recurrente, que nadie puede transferir más derechos de los que tiene y, de igual forma, tampoco puede recibirse más derechos de los que les fueron transferidos, de manera que como la sociedad demandada entró en calidad de tenedora del inmueble objeto de controversia, en virtud de un contrato de promesa de compraventa, el cual como se expuso precedentemente fue resuelto dado el

---

[11] Ver fl 43 del documento denominado *"01ExpedienteEscaneado.pdf"* del cuaderno *"01CuadernoPrincipal"* del expediente remitido en calidad de préstamo.
[12] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de casación de 30 de julio de 2010. Referencia: expediente: 11001-3103-014-2005-00154-01. Magistrado Ponente: William Namén Vargas.
[13] CSJ, sent. de 30 de junio de 2010, exp. 11001310301420050015401.

incumplimiento del promitente comprador, circunstancia por la cual fue compelido a restituir la propiedad a su legitima dueña; claro es que no se encuentran legitimadas las apelantes para oponerse, pues ninguna calidad de terceras de buena fe puede predicarse de ellas.

3.2. De igual forma y no menos importante, resulta el hecho que son las mismas opositoras quienes reconocen el dominio del inmueble del cual deprecan posesión en cabeza de la señora Natasha Ivonne Bloch Morel, pues a la pregunta realizada a la señora Bedoya Giraldo referente a que ¿Cuándo se refiere en su respuesta a la dueña del lote, a quién se refiere? contestó *"dentro de los documentos aparece el nombre de ella, (…) la señora Natasha Ivonne Bloch Morel ella era la propietaria"*[14], igual circunstancia aconteció con la señora Herrera Chitiva, quien frente al mismo cuestionamiento respondió *"a la señora Natasha que no recuerdo el apellido"*[15], lo que claramente echa por tierra el derecho de posesión aludido.

4. Así las cosas y como quiera que de vieja data se sabe que solo se encuentra autorizado para oponerse a la diligencia de entrega un tercero ajeno al proceso y sin relación alguna con las partes, lo cual no se cumple en el presente asunto; pues como se consideró, se advierte la causahabiencia que deriva de la sociedad demandada, esta vicisitud impide necesariamente que salga avante la pretensión de las opositoras, encaminada a que se les reconozca su calidad de poseedoras.

En un caso donde al igual que en este objeto de estudio, pero en relación con diligencia de embargo y secuestro, este Tribunal Superior de Distrito Judicial consideró: "(…) *quien pretenda oponerse al embargo y secuestro dentro de este tipo de asuntos, necesariamente debe ser un tercero ajeno al proceso y por consiguiente sin relación con las partes, presupuesto que no se cumple en el sub lite, pues, como se vio, al estar plenamente probada la 'causahabiencia' que deriva la opositora* (…) *del demandado* (…) *[por cuenta de un contrato de promesa de compraventa], ello le impide alegar posesión alguna* (…)"[16].

De igual forma, cabe precisar que conforme lo ha puntualizado la Corte Suprema de justicia, aun cuando los efectos inmediatos de los

[14] Ver fl.103 del documento denominado "DESPACHO COMISORIO E-0064-23.pdf" de la carpeta llamada "E-0064-23" del cuaderno identificado como "PrimeraInstancia" del expediente remitido en calidad de préstamo.
[15] Ver fl. 200 *ídem.*
[16] Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, auto del 30 de septiembre de 2016, rad. 06119991193901; reiterado en auto del 12 de julio de 2017, rad. 02620080048904.

contratos se radican en las partes que lo convinieron, *"Necesario es precisar, sin embargo, que personas hay que sin ser propiamente las celebrantes del negocio, no pueden ser consideradas como absolutamente extrañas al mismo, y por eso los efectos de aquel, sobrevenidas ciertas circunstancias, se radicarán en ellas. Trátese del fenómeno de la causahabiencia, a cuyo estudio se contrae la Corte, habida cuenta que no es tampoco este el lugar para caer en la ingenua y presuntuosa idea de abrazar uno a uno todos los eventos de los terceros. Así que se colma la necesidad de hoy memorando no más terceros que los causahabientes. Y no bien se mencionan éstos, y a punto salta la frase sentenciosa de que quien contrata no sólo lo hace para sí sino también para sus sucesores universales. Porque es verdad irrecusable que quien a este título obra, es el continuador del patrimonio del causante, se identifica con él, le recibe todos los elementos patrimoniales transmisibles, y en consecuencia se torna, incluso sin saberlo, en acreedor o deudor de las relaciones patrimoniales de aquél, salvas apenas algunas excepciones"*[17] *(subrayado propio).*

5. Como corolario de lo anterior, considera esta Sala de Decisión que fue acertada la decisión del Inspector de Policía de Cota, Cundinamarca, comisionado por el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogotá, al rechazar la oposición formulada por las señoras Olga Lucía Herrera Chitiva y Luz Marleny Bedoya Giraldo, circunstancia por la cual en este sentido el auto objeto de inconformidad ha de ser confirmado integralmente, sin lugar a disponer condena en costas, por no aparecer causadas en esta instancia.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.**, en Sala de Decisión Civil,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el auto de fecha y procedencia anotadas.

SEGUNDO: SIN COSTAS por no aparecer causadas.

[17] C.S.J., sentencia del 30 de enero de 2006, rad. 1995-29402-02, M.P. Manuel Isidro Ardila Velásquez.

TERCERO: Una vez cobre ejecutoria este pronunciamiento, devuélvase el expediente al Estrado de origen.

NOTIFÍQUESE,

ANGELA MARÍA PELÁEZ ARENAS

Magistrada

(4020190016403)

SANDRA CECILIA RODRÍGUEZ ESLAVA

Magistrada

(4020190016403)

CLARA INÉS MÁRQUEZ BULLA

Magistrada

(4020190016403)

Firmado Por:

Angela Maria Pelaez Arenas
Magistrada
Sala 009 Civil
Tribunal Superior De Bogotá D.C.,

Clara Ines Marquez Bulla
Magistrada
Sala 003 Civil
Tribunal Superior De Bogotá D.C.,
Firma Con Salvamento Parcial De Voto

Sandra Cecilia Rodriguez Eslava
Magistrada
Sala Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **63ba628d3b83309b9d8e82eb522ee150346265678fe65ec71ad09044ee3b6d57**

Documento generado en 29/02/2024 12:34:09 p. m.

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.

SALA CIVIL

MARTHA ISABEL GARCÍA SERRANO
Magistrada Ponente

Bogotá D. C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Proceso: Verbal
Radicación N.°: 11001310303820220022802
Demandante: Fernando Marín Arbeláez.
Demandado: Construcciones Inteligentes Eva S.A.S., y Otros.

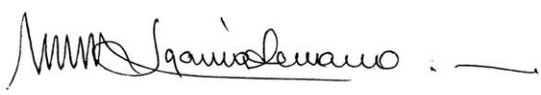
ADMITIR el recurso de apelación formulado por el apoderado de la parte demandante de la referencia contra la sentencia proferida por escrito el 18 de diciembre de 2023, por la Juez 38 Civil del Circuito de Bogotá D.C., de conformidad con las previsiones del artículo 12 de la Ley 2213 de 2022.

Por lo anterior, **CONCEDER** al recurrente el término de cinco (5) días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia para que proceda a **SUSTENTAR** los reparos concretos que formuló ante la autoridad de primera instancia; transcurrido dicho lapso, se **CORRERÁ TRASLADO** a la contraparte por el mismo plazo, para que, si a bien lo tiene, efectúe la réplica.

Advertir al recurrente que, en ese **lapso y en ésta instancia deberá sustentar los reparos concretos que formuló ante el *a quo* o manifestar si se tiene como sustentación el escrito que presentó ante el juez de instancia, pues en caso de guardar silencio, se declarará desierto el recurso de alzada, como dispone el artículo citado**. Para todos los efectos, el **ÚNICO** correo institucional habilitado para recibir el escrito de sustentación es secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

Finalmente, **PRORROGAR** en seis (6) meses el término para decidir la apelación, dado el alto número de recursos asignados al Despacho.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



MARTHA ISABEL GARCÍA SERRANO
Magistrada

Firmado Por:

Martha Isabel Garcia Serrano

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Sala 009 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **550fca4dff1dda5ade6c834d551ec9d387d30ca8a0b6346184cd26a8493dfc23**

Documento generado en 29/02/2024 03:44:00 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ - SALA CIVIL

Bogotá D.C, veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

Magistrada Ponente:	**CLARA INÉS MÁRQUEZ BULLA**
Radicación:	110013103037 2020 00108 01
Procedencia:	Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de Bogotá, D.C.
Demandante:	Anderson Vergara Ruíz
Demandado:	Víctor Guillermo Rojas Rojas
Proceso:	Verbal
Recurso:	Apelación

Discutido y aprobado en Sala de Decisión del 29 de febrero de 2024. Acta 06.

2. OBJETO DE LA DECISIÓN

Se dirime el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia calendada 18 de septiembre de 2023, proferida por el Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de Bogotá D.C., dentro del proceso **VERBAL** instaurado por **ANDERSON VERGARA RUÍZ** contra **VÍCTOR**

GUILLERMO ROJAS ROJAS.

3. ANTECEDENTES

3.1. La Demanda.

Anderson Vergara García, a través de apoderado judicial, interpuso demanda contra Víctor Guillermo Rojas Rojas, para que previos los trámites de rigor, se hicieran los siguientes pronunciamientos:

3.1.1. De manera principal:

3.1.1.1. Declarar la resolución del contrato de compraventa celebrado entre las partes respecto del inmueble ubicado en la carrera 68 F número 5ª – 39, Urbanización Nueva Marsella de esta capital, distinguido con matrícula inmobiliaria 50C-78739, ante el incumplimiento de los requisitos legales exigidos en las tradiciones previas a la firma de la escritura 851, protocolizada el 22 de abril de 2007 en la Notaría 76 del Círculo de Bogotá, por el vendedor.

3.1.1.2. Ordenar la cancelación del memorado instrumento público y el registro de la misma.

3.1.1.3. Disponer que el intimado reintegre $210.000.000.oo, precio del bien, así como $230.000.000.oo, por aumento del valor, más los intereses moratorios generados desde la ejecutoria de la sentencia.

3.1.1.4. Determinar la devolución de la heredad, una vez satisfaga lo anterior, y restituya al demandante los gastos ocasionados por el convenio.

3.1.1.5. Condenar al convocado a pagar las costas procesales.

3.1.2. De forma subsidiaria:

3.1.2.1. Establecer que existe evicción en el negocio jurídico consumado entre las partes.

3.1.2.2. Declarar la nulidad de la alianza, por existir vicios de evicción que deber ser superados por el vendedor.

3.1.2.3. Imponer al encausado efectuar el saneamiento, solucionando $210.000.000.oo costo del predio, $230.000.000.oo por aumento de su precio, $1.413.572.oo como gastos de notaría y registro de la escritura contentiva de la citada enajenación; más los réditos moratorios que causen tales cifras a partir de la ejecutoria del veredicto.

3.1.2.4. Determinar la devolución del bien al demandado, después que acate lo precedente, y asuma los gastos procesales[1].

3.2. Hechos.

Para soportar dichos pedimentos adujo los supuestos fácticos que se compendian como sigue:

P.C. Inmobiliaria S.A.S., en calidad de corredora lo asesoró para la compra del bien relacionado en las peticiones, sobre el cual celebró promesa de contrato con el demandado como vendedor el 17 de abril de 2017. Pactaron como valor $210.000.000.oo, satisfechos el día 22 siguiente, cuando se consumó la convención definitiva y empezó a comportarse como propietario.

[1] Folios 179 a 181, archivo 01ExpedienteDigitalizadoCuadernoPrincipal, ubicado en la carpeta 01CuadernoPrincipal

El bien lo adquirió el demandado por adjudicación en la sucesión de Julia Carreño Agudelo, protocolizada en instrumento público 3078 del 9 de noviembre de 2016, tras haberle comprado los derechos herenciales a Carlos Julio Rubiano Sotomayor, mediante escritura pública 2513 otorgada el 15 de septiembre de 2016 en la Notaría 76 de esta capital. En el certificado de libertad y tradición la propiedad no tenía ninguna limitación para la época en que fue negociada.

Al tramitar un crédito hipotecario con el fin de gravar el predio, funcionarios del Banco de Occidente le informaron que, a la última escritura antes mencionada, el señor Rubiano Sotomayor, violando el principio de legalidad e incurriendo en el delito de falsedad en documento, aportó un acta de matrimonio con Julia Carreño Agudelo falsa, según lo informado el 18 de mayo de 2017 por el párroco de la iglesia San Miguel y el obispo de Girardot a la Registraduría de Puente Aranda de esta ciudad, donde se había inscrito el 10 de agosto de 2016.

Por lo tanto, como el matrimonio no existió, son fraudulentas las tradiciones antecedentes a la venta que le realizó Rojas Rojas, e ilegal por tener los títulos anteriores tal calidad, además de encontrarse viciada de nulidad.

No ha podido contactar a Víctor Guillermo Rojas para resolver lo acontecido y que le restituya el dinero pagado. Desconoce su residencia y número de teléfono actual[2].

3.3. Trámite Procesal.

La demanda fue admitida el 9 de marzo de 2020. Dispuso su notificación al extremo pasivo, y posterior traslado[3].

[2] Folios 176 a 179 *ibidem.*
[3] Folio 189 *ibidem*.

Efectuado el emplazamiento del intimado, se le designó curador *ad litem*[4] quien manifestó atenerse a lo que resultara probado, sin proponer excepciones, aduciendo desconocer los supuestos fácticos esbozados en la demanda.[5].

Transcurrido en silencio el traslado de tal escrito, decretó las pruebas solicitadas y convocó a las audiencias consagradas en los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso[6], [7]. Dictó sentencia que desestimó las súplicas demandatorias, finiquitó la controversia, levantó las medidas cautelares decretadas, le impuso al promotor asumir los gastos del proceso y ordenó el archivo del expediente en oportunidad.

Inconforme, el precursor interpuso recurso de apelación, concedido en el acto[8].

4. LA SENTENCIA IMPUGNADA

El Funcionario advirtió que no existe irregularidad que invalide lo actuado; la presencia de los presupuestos procesales, para luego señalar que los problemas jurídicos a resolver se enfilan a determinar si tiene acogida, la pretensión principal dirigida a declarar la resolución de la compraventa celebrada entre las partes, por incumplimiento del vendedor, en virtud de la denuncia penal y la actuación administrativa iniciada por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos en las que se debate la falsedad de un documento presentado al realizar una transferencia antecedente, o la subsidiaria, enfocada a precisar si es nula la memorada alianza por cualquiera de las causales legales, así

[4] Archivo 25AutoActualizarOficiosNombraCurador20221214.
[5] Archivo31ContestaciónCurador20230222.
[6] Archivo 34ConvocaAudiencias20230419.
[7] Archivo 47ActaAudienciaInicialPruebasOficio20230810.
[8] Archivo 59ActaAudienciaAlegatosFalloNiegaPeticionesApelaDemandante20230918.

como establecer, en caso de tener acogida lo anterior, las restituciones pertinentes.

Tras exponer los requisitos para que prospere la acción de resolución contractual promovida, indicó que el convenio consumado entre los litigantes el 22 abril de 2017 es válido, como también lo son, además de conservar la autenticidad, la partida de matrimonio entre Carlos Julio Rubiano y Julia Carreño, expedida por la Arquidiócesis de Girardot, así mismo la adjudicación de los activos en la sucesión; y, el negocio antecedente al que concitó el proceso , es decir, mediante el cual el señor Rubiano enajenó el inmueble a Rojas Rojas, como los correspondientes registros.

Lo anterior, porque la autoridad penal no ha declarado lo contrario, y la administrativa archivó la respectiva investigación, con sustento que no es la competente para pronunciarse sobre la validez de los documentos; motivos por los cuales deviene frustránea la resolución invocada

Tampoco se estructura la nulidad del pacto cuestionado, por alguno de los motivos regulados en el canon 1741 del Código Civil, ya que el mismo cumplió con las formalidades exigidas por la ley, su registro inmobiliario se encuentra vigente, no existe objeto, ni causa ilícita. Aunado, los extremos negociales son personas capaces que manifestaron su consentimiento.

Acerca del saneamiento por evicción, expuso que según los artículos 1893 y siguientes *ejúsdem* a ello hay lugar, cuando se afecte el goce del atributo del derecho de dominio por privación de la cosa vendida, en virtud de lo dispuesto en una sentencia judicial, lo cual no ha ocurrido; o, se reclame, a través de una demanda, por un tercero en proceso; connotación que no puede dársele al juicio penal, debido a que no es el fin de tales diligencias, ni se acreditó que se tramite actualmente un

litigio con tal propósito.

Con estribo en lo precedente denegó el petitum, terminó el asunto, levantó las cautelas decretadas, condenó en costas al actor y ordenó el archivo del expediente, en oportunidad[9].

5. ALEGACIONES DE LAS PARTES

5.1. El apoderado del demandante, como sustento de solicitud revocatoria, al momento de presentar los reparos concretos manifestó disconformidad con lo resuelto, por cuanto, pese a haberse cumplido la compraventa en lo atinente al pago del precio y la entrega del inmueble, ceñirse a las formalidades legales; no es dable desconocer que los actos antecedentes que radicaron el dominio en el vendedor son inválidos, ilegales, espurios, falsos; situación que afecta a su representado al haber solucionado el valor que afecta al bien materia de tal convención, la cual se encuentra viciada, debido a que los negocios antecedentes también lo están por objeto y causa ilícita. En esas condiciones, debe resolverse.

La acción penal no provee en todos los casos sobre el efecto civil de la convención traslaticia de dominio, a lo que se suma que tal causa se entabló frente a personas diferentes a las partes de esta contienda, pero que con su proceder perjudicaron a su asistido, circunstancia que genera la nulidad de tal acuerdo, y su concomitante resolución.

Cuestionó la valoración que el Juez le dio a cada uno de los documentos contentivos de los negocios precedentes al aquí debatido[10].

En la oportunidad para sustentar la alzada criticó que, a pesar de tener

[9] Minuto 0:01 a 19:10 del archivo 58VideoSentenciaOralRecursoApelaciónCOncede.
[10] Minuto 19:30 a 23:42 *ibidem*

conocimiento de la irregularidad en la tradición de la heredad involucrada en la *litis*, la primera instancia prefirió pasarla por alto, y desestimar la resolución del contrato, con soporte en que el mismo fue realizado en debida forma, y tiene como precedentes actos probados que no han sido invalidados por la Fiscalía General de la Nación.

Sin embargo, insiste, en que el convenio materializado por su representado se encuentra viciado, debido a que las tradiciones anteriores a estas son fraudulentas y espurias, por lo que Víctor Guillermo Rojas debe salir al saneamiento del primer vínculo, con independencia de la acción penal adelantada contra las personas que realizaron dichas transferencias de dominio.

La providencia impugnada es arbitraria, al desconocer las irregularidades que precedieron el convenio ejecutado por Anderson Vergara Ruíz, y zanjar el asunto únicamente con base en este acuerdo, ignorando los delitos, *"…estafas y triquiñuelas…"* que el propietario anterior al vendedor cometió; además, la cláusula contractual que le impone salir al saneamiento.

Así, su prohijado se quedaría sin el derecho de presentar una acción legal por los hechos que originaron la causa, ya que la acción penal dura un lapso superior a los 10 años en que prescribe la civil, han transcurrido más de 6 años desde cuando se celebró la compraventa y esta sentencia tiene los efectos de cosa juzgada.

Para el Despacho *a quo, "…la buena fe no forma parte de la acción contractual y todos los actos irregulares que ocurran antes de una negociación se sanean con una contratación aparentemente regular…",* cuando, en realidad, queda viciada por actos ilícitos[11].

[11] Archivo 08SustentaciónApelación.

5.2. El intimado no hizo uso del derecho de réplica[12].

6. CONSIDERACIONES.

6.1. Liminarmente se advierte la presentación de una demanda en forma, la capacidad de las partes para obligarse y concurrir al juicio, así como la competencia del Juzgador para dirimir el conflicto. Además, por cuanto examinado el trámite rituado no se observa irregularidad capaz de invalidarlo fluye meridiana la concurrencia de las condiciones jurídico-procesales que habilitan el proferimiento de una sentencia de mérito.

Acorde con lo previsto en el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del Tribunal de conformidad con los reparos esbozados ante el señor Juez se circunscriben, a determinar, si de cara al material suasorio obrante en el proceso era dable declarar la prosperidad de la acción resolutoria, de saneamiento por evicción o la nulidad de la convención celebrada entre las partes.

6.2. Para ahondar en el estudio del asunto, viene bien recordar conforme al criterio que sostenía en los últimos lustros el Alto Tribunal Civil, que el desconocimiento unilateral de lo pactado por parte de uno de los contratistas facultaba al otro, es decir, al cumplidor o que se allanó a satisfacer sus deberes, a solicitar la resolución del contrato con indemnización de perjuicios, según lo disciplinado en el artículo 1546 del Código Civil, que preceptúa:

"...En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado.

[12] Archivo 09InformeEntrada20231114.

Pero en tal caso podrá el otro contratante, pedir a su arbitrio, o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios...".

Bajo el resguardo de la memorada disposición, la Corporación pregonó que la condición resolutoria tácita, es el instrumento que el legislador estatuyó con miras a dejar sin efectos el negocio jurídico vinculante de las partes y a restablecer las condiciones en que ellas se encontraban, antes de su celebración[13].

A tono con ello, expresó que para su prosperidad es necesario demostrar que el actor ha acatado las obligaciones a su cargo, que el demandado no ha satisfecho las suyas, y que el contrato del que estas derivan sea válido.

Sin embargo, por vía jurisprudencial, en sentencia SC1662 de 2019 efectuó una importante corrección doctrinaria, a partir de la interpretación sistemática y armónica de los artículos 1546 y 1609 del Código Civil, para precisar que, ante el mutuo incumplimiento, era plausible que cualquiera de los contratantes demandara la resolución del pacto, sin indemnización de perjuicios.

Más adelante la misma Corporación precisó, en Sentencia SC4801 de 2020, que la deshonra convencional debía ocurrir de manera simultánea, pues si existe un orden prestacional, el incumplimiento del primero en sus débitos habilita al segundo para también desatender los que en adelante le correspondan y promover la resolución convencional regulada en el artículo 1546 del Código Civil[14].

[13] Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 26 de agosto de 2011, expediente 2002-00007-01.
[14] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia SC3666-2021, reiteradas en SC5430 de 7 de diciembre de 2021, expediente 05001 31 03 010 -2014 01068 01 y SC1962 de 28 de junio

6.3. Ahora bien, siendo que la resolución se depreca sobre un contrato de compraventa por el incumplimiento del vendedor, deviene necesario examinar las prestaciones que le corresponden ejecutar a este negociante, con el fin de determinar si las deshonró.

Sobre el tópico, la Corte Suprema de Justicia ha dicho:

"…En ese orden, hay que memorar que las obligaciones del vendedor, según el artículo 1880 del Código Civil, "se reducen en general a dos: la entrega o tradición, y el saneamiento de la cosa vendida." Estas obligaciones son las mismas que consagra el Código de Comercio para la compraventa mercantil, en sus artículos 922 y siguientes.

"La obligación de saneamiento – indica el artículo 1893 del Código Civil– comprende dos objetos: amparar al comprador en el dominio y posesión pacífica de la cosa vendida, y responder de los defectos ocultos de ésta, llamados vicios redhibitorios."

El enajenante, entonces, está obligado a entregar al comprador la cosa vendida, y a procurarle la pacífica posesión de ella para que pueda disponer de la misma tranquilamente y en toda su extensión, como señor y dueño, a fin de que pueda obtener la utilidad que persiguió al contratar.

Esa posesión quieta y pacífica de la cosa vendida puede verse turbada por las pretensiones que tenga un tercero sobre su dominio, o por los

---

2022, expediente 11001-31-03-023-2017-00478-01. Magistrado Ponente Doctor Octavio Augusto Tejeiro Duque.

reclamos que haga respecto de alguno de los derechos reales que pueden ejercitarse sobre ella y que comporten una limitación de su propiedad. En tales casos el vendedor está obligado a amparar al comprador en el dominio y posesión pacífica de la cosa vendida; y esa obligación recibe el nombre de saneamiento por evicción…"[15].

6.4. De cara a los anteriores derroteros, bien pronto se advierte que la acción resolutoria no debe abrirse paso, pues ninguno de los deberes negociales que le atañían al vendedor fueron inobservados.

Ello es así porque, conforme lo revela el certificado de libertad y tradición del inmueble con matrícula inmobiliaria 50C-78732 de la Oficina de Registro de Instrumentos públicos de esta capital, expedido para el 21 de julio de 2017 y aportado con la demanda por el actor, Anderson Vergara Ruíz figura como su titular de derecho real de dominio[16], en virtud de compraventa efectuada a Víctor Guillermo Rojas Rojas, protocolizada en instrumento público 851 del 22 de abril de 2017[17].

Con la materialización del negocio jurídico el señor Rojas Rojas cumplió con la carga prestacional relativa a efectuar la tradición, así mismo se consumó la entrega del bien el 30 de julio de 2017, y desde entonces Vergara Ruíz tiene su posesión, como se colige del escrito presentado[18] y de lo admitido en interrogatorio de parte absuelto en la audiencia inicial realizada el 10 de agosto de 2023, en la que adicionalmente dejó entrever que el inmueble no ha sido reclamado por un tercero, a través de otra acción[19].

---

[15] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 17 de septiembre de 2013. Expediente 11001- 3103-023-1997-04959-01. Magistrado Ponente doctor Ariel Salazar Ramírez.
[16] Folios 4 al 7 del archivo 01ExpedienteDigitalizadoCuadernoPrincipal.
[17] Folios 13 al 25 *ibidem.*
[18] Folio 91 *ibidem*.
[19] Minuto 13:53 a 14:30 y 33:20 a 33:44 del archivo 46VideoAudienciaInicial.

La condición de propietario del precursor no varió con la actuación administrativa adelantada por el Registrador Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá D.C. Zona Centro[20] -que terminó archivada[21]-, ni con ocasión de las denuncias penales que aduce el impulsor se promovieron[22], por haber presentado un documento falso uno de los tradentes anteriores del inmueble, aspecto que, al parecer, respaldan los elementos suasorios adosados a las diligencias[23]; sin embargo, no es del resorte de este asunto determinar tal calidad.

Valorados entonces el cúmulo de elementos de convicción reseñados, a la luz de las reglas de la sana crítica, se colige que el demandado Rojas Rojas, quien fungió como vendedor, acató las obligaciones esenciales que le concernían, al haber efectuado la tradición del dominio del predio, derecho aún vigente en cabeza del comprador -ya que nada demostró lo contrario-.

A lo anterior se suma el hecho que tampoco es dable endilgar deshonra negocial a Víctor Guillermo Rojas, pues, como quedó visto, el comprador Anderson Vergara Ruíz asintió en el decurso del proceso que conserva la posesión del inmueble y que no ha sido reclamado en juicio por un tercero.

Además, no debe catalogarse como contratante incumplido, por no realizar el saneamiento en las circunstancias relatadas, es decir, sin que el inmueble lo esté disputando un tercero en un proceso, por cuanto dicha obligación inicia solo con el llamamiento del vendedor al juicio y termina cuando en este se emite la respectiva sentencia; circunstancias

[20] Folios 103 a 110 del archivo 01ExpedienteDigitalizadoCuadernoPrincipal.
[21] Folios 1 al 9 del archivo 49AportaPruebas20230811.
[22] Minuto 35:01 a 43:08 del archivo 46VideoAudienciaInicial.
[23] Folios 96 al 101 del archivo 01ExpedienteDigitalizadoCuadernoPrincipal y archivo 51RespuestaDiocesisGirardot20230814.

que no han acaecido en el *sub examine.*

De consiguiente, al haber ejecutado el vendedor todas las obligaciones que le atañían, la acción resolutoria de la compraventa deviene frustránea, por no estructurarse el requisito atinente a la deshonra negocial del demandado, exigido para su acogida.

6.5. En línea con las anteriores argumentaciones, dado que, conforme se anunció, el comprador Vergara Ruiz mantiene, tanto la titularidad de derecho real de dominio, como la aprehensión material de la heredad con ánimo de señor y dueño, ello impide que salga avante la acción de saneamiento por evicción, formulada de manera subsidiaria, pues ha sido criterio conocido del Alto Tribunal Civil de tiempo atrás, que para su prosperidad son necesarios, *"…estos elementos esenciales: 1º Que el demandado, directa o indirectamente, haya vendido al demandante la cosa evicta; 2º Que el demandante comprador haya perdido total o parcialmente el dominio y posesión del bien comprado directa o indirectamente al demandado; y 3º Que la cosa evicta en una sentencia sea la misma que el comprador demandante adquirió del demandado vendedor, directa o indirectamente…"*[24].

Así las cosas, no obstante, la posible falsedad de la partida de matrimonio utilizada para materializar una de las tradiciones anteriores a la que radicó como dueño al demandante, tal circunstancia, por muy reprochable que sea, por sí sola, esto es, sin que medie un juicio en el que con ocasión de ello se reclame el bien negociado por parte de un tercero, y en virtud de esto se llame al vendedor al saneamiento, o una sentencia que modifique la calidad de propietario del comprador, impide, la primera situación enunciada, tildar al enajenante de contratante incumplido al no haber sido convocado aún para efectuar la defensa de

[24] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 20 de abril de 1942. Magistrado Ponente doctor Fulgencio Lequerica Vélez.

la cosa, y la segunda, el acogimiento de la acción de saneamiento por evicción.

Dicho en otros términos, la mera probabilidad que resulte afectada la eficacia de un vínculo antecedente al que consolidó la propiedad, no impone al enajenante el deber se salir al saneamiento de este último acuerdo, ni menos aún permite que salga triunfante una demanda de saneamiento por evicción.

Por las razones precedentes, no son de recibo en su mayoría los argumentos expuestos por el impugnante en los reparos y la sustentación de alzada, en los que, insistentemente, se reprocha no reparar en la irregularidad presentada en la transferencia antecedente a aquella en virtud de la cual el demandante se hizo dueño del bien involucrado en la *litis,* pese al perjuicio que ello puede representar para él.

Al respecto, insístase, *"…importa anotar que de todos modos la protección que para el comprador surge por vía del saneamiento por evicción se desdobla en la obligación del primero de defender al segundo contra las acciones que, por causa anterior a la venta, promuevan los terceros para hacer valer sus derechos sobre la cosa vendida, lo que ocurrirá normalmente dentro de los respectivos procesos, previa denuncia del pleito que se le haga (artículos 1893, 1899 C.C.; 54 C. de P. C.); y en una segunda fase, según el resultado positivo que obtengan aquéllos por el que tal cosa resulta evicta, tras de ser infructuosa la respectiva defensa, deviene la obligación de restituir el precio y sufragar las indemnizaciones a que haya lugar de acuerdo con la ley (artículos1895 y 1903 C. C.)…*"[25].

[25] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 6 de julio de 2005, expediente 00791-01. Magistrado Ponente: Silvio Fernando Trejos Bueno.

De otra parte, es un contrasentido que el apelante señale que la nulidad del convenio celebrado entre las partes genera su concomitante resolución, cuando estas figuras son diferentes, pues la primera destruye tal vínculo como si nunca hubiera existido, en cambio la postrera, lo hace con las obligaciones derivadas del mismo, y la validez de la convención es un requisito para su prosperidad.

Sobre el tema, el Alto Tribunal de Justicia, anotó:

La resolución da lugar a la *"…destrucción de las obligaciones que nacen del contrato, generando unas diferentes, porque no se trata de cuestiones relacionadas con la validez de los negocios jurídicos sino de su ejecución …, opera retroactivamente para dejar a las partes en la misma situación en la que estaban hasta antes de contratar…"*[26].

Por su parte, *"…*[l]*a nulidad es una acción dirigida a hacer desaparecer el acto viciado, cuya característica es la destrucción del negocio con efecto retroactivo, es decir como si no se hubiera celebrado jamás, por lo que las cosas deben volver al estado en que se encontraban antes de su ejecución…"*[27].

Aclarado lo anterior, debe decir la Sala que nuestro ordenamiento jurídico instituyó el régimen de las nulidades sustanciales, diferenciándolas entre las absolutas y las relativas.

El ordenamiento civil prevé como motivos de invalidez absoluta, además de la ilicitud de la causa o el objeto, la participación en el acto de un incapaz absoluto y producida por la omisión de algún requisito o

[26] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de25 de agosto de 2001, expediente 66001-31-03-003-2012-00061-01. Magistrado Ponente doctor Álvaro Fernando García Restrepo.
[27] Arturo ALESSANDRI BESA. La nulidad y la rescisión en el derecho civil chileno. t. i. Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile, 2008. página 86.

formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos.

Ahora, *"…**la causa ilícita**, entendiéndose por tal, "la prohibida por la ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público" (Art. 1524); … **el objeto ilícito**, pues dado que el mismo concierne a lo que se quiere del negocio jurídico, este debe ser armónico con el imperio de la legalidad. Se desconoce por ejemplo, al contravenirse el derecho público de la Nación, venderse cosas que se encuentren por fuera del comercio, o cuando se transfiere el derecho a suceder a una persona viva, no obstante mediar su consentimiento (Arts. 1519-1521); … Por último, la sanción que se comenta se produce cuando el acuerdo se celebra entre personas **incapaces absolutamente**…"*[28].

Cabe acotar que en lo atinente al *«objeto ilícito»*, el canon 1521 del Código Civil contempla que se presenta en la enajenación *"1°) De las cosas que no están en el comercio; 2°) De los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona; 3°) De las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello",* y adicionalmente, el precepto 1523 *ibídem,* estatuye que *"*[h]*ay asimismo objeto ilícito en todo contrato prohibido por las leyes"*.

En cuanto al tema de la causa ilícita, el artículo 1524 del Código Civil, estatuye: "...[s]*e entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato; y **por causa ilícita la prohibida por la ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público**. – Así, la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe, carece de causa; y la promesa de*

[28] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia SC17154 de 14 de diciembre de 2015, expediente11001 31 03 004 2011 00125 01. Magistrado Ponente Doctora Margarita Cabello Blanco.

dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral, tiene una causa ilícita..." -negrilla fuera del texto.

Acerca de los requisitos comunes para la validez de todo acto o contrato, el canon 1502 *ibidem,* exige que la persona *«sea legalmente capaz»*, y el precepto 1504 *ídem,* estatuye: *«...[s]on absolutamente incapaces [las personas con discapacidad mental]*[29]*, los impúberes y sordomudos, que no puedan darse a entender...»*.

Igualmente se torna pertinente señalar, que con base en lo normado en el precepto 1503 del Código Civil, se interpreta que por regla general se presume la capacidad de las personas y por excepción la ley consagra los eventos en que concurre un motivo de incapacidad, por lo que en materia probatoria ha de acreditarse mediante prueba concluyente.

Además, *"…la incapacidad relativa de las partes, el error, la fuerza, el dolo y las deficiencias de las formalidades habilitantes o tutelares generan nulidad relativa (art. 1741 [2] c.c. y art. 900 C. de Co)…"*[30].

Empero, los elementos suasorios incorporados al plenario no respaldan que estuviera proscrita la enajenación del inmueble negociado entre los litigantes, ni que tal pacto se encuentre prohibido por el ordenamiento jurídico; además fue celebrado con las formalidades impuestas por el artículo 1857 del Código Civil y celebrado por personas capaces, quienes manifestaron su consentimiento libre de error, fuerza y dolo.

Por ende, el vínculo consumado entre las partes no está viciado por ninguno de los motivos establecidos por el ordenamiento jurídico para nulitarlo, ergo, ningún reproche merece el Juez a quo en así declararlo.

---

[29] La expresión que aparece entre corchetes fue introducida por el parágrafo del artículo 2º de la Ley 1306 de 2009.
[30] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 6 de marzo de 2012, expediente 2001-00026.

6.6. En virtud del principio de congruencia, el argumento atinente a que las negociaciones antecedentes a la que celebró el demandante están viciadas por objeto y causa ilícita, constituye un hecho no expuesto en la demanda, ni el decurso de la primera instancia, que fue planteado solo como reparo por lo tanto, su invocación en el recurso vertical *"…debe ser repelida por ir en desmedro del principio de lealtad procesal para con el estamento jurisdiccional y con la parte contraria, por tratarse de un alegato sorpresivo que la doctrina denomina «medio nuevo», esto es, aquel que uno de los litigantes guarda para erigirlo cuando han fenecido las oportunidades de contradicción previstas en el ordenamiento jurídico…"*[31].

6.7. En punto a los motivos de censura, según los cuales el promotor se queda sin derecho a presentar una nueva acción legal por los efectos de cosa Juzgada que tiene esta decisión, así como la consumación del término de prescripción de la acción civil, no serán materia de pronunciamiento, porque pese a que se sustentaron ante esta Sede no fueron alegados en la oportunidad para indicar los reparos concretos.

Carga necesaria que la apelante acatara, pues, al tenor del artículo 320 del Código General del Proceso, en consonancia con el inciso 2° del numeral 3° del canon 322 *ejúsdem*, el superior solo debe pronunciarse sobre "…*los reparos concretos formulados por el apelante…"*, que hayan sido sustentados.

6.8. Como los desencuentros del impugnante no prosperan, se confirmará el veredicto de primer grado. No habrá condena en costas al estar representado el demandado por curador ad-litem.

[31] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 7 de diciembre de 2020, expediente 11001-31-03-001-2011-00495-01. Magistrado Ponente doctor Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.

7. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**, en **SALA QUINTA CIVIL DE DECISIÓN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

7.1. CONFIRMAR la sentencia proferida en el asunto del epígrafe, emitida el 18 de septiembre de 2023, por el Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de Bogotá D.C.

7.2. DETERMINAR que no hay condena en costas.

7.3. DEVOLVER el expediente a su Despacho de origen. Oficiar y dejar constancia.

NOTIFÍQUESE.

Firmado Por:

Clara Ines Marquez Bulla
Magistrada
Sala 003 Civil
Tribunal Superior De Bogotá D.C.,

Angela Maria Pelaez Arenas
Magistrada
Sala 009 Civil

Tribunal Superior De Bogotá D.C.,

Sandra Cecilia Rodriguez Eslava
Magistrada
Sala Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **fa717f3496ef81fe37948bf2299bb2fd9b510fa8039e82acb7153532d32798c4**
Documento generado en 29/02/2024 11:42:13 a. m.

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.

Sala Civil de Decisión

Magistrada Sustanciadora

SANDRA CECILIA RODRÍGUEZ ESLAVA

CLASE DE PROCESO	Ejecutivo
DEMANDANTE	Scotiabank Colpatria S.A.
DEMANDADOS	Partes y suministros Agroindustriales S.A.S. y Leonardo Andrés Castellanos
RADICADO	1100-131-03-036-2023-00057-01
PROVIDENCIA	Sentencia No 08
DECISIÓN	Confirma
DISCUTIDO Y APROBADO	Veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
FECHA	Veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Se procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra la sentencia anticipada proferida el 30 de junio de 2023, por el Juzgado Treinta y Seis Civil de Circuito de esta ciudad, y que fue repartido a esta Magistratura el 19 de octubre siguiente[1].

I. ANTECEDENTES

Scotiabank Colpatria S.A., por conducto de vocero judicial, formuló demanda ejecutiva contra Partes y Suministros Agroindustriales S.A.S. y Leonardo Andrés Castellanos Sanabria, para que fuera librada la orden de apremio en contra de éstos por $1.625.000.000, capital incorporado en el pagaré No. 201100000259, más los intereses moratorios liquidados desde que se hizo exigible la obligación y hasta que se verifique el pago total; así como la condena en costas a los convocados[2].

---

[1] Archivo "*03ActaReparto.pdf*" de la carpeta "*CuadernoTribunal*".
[2] Folio 1, archivo "*003EscritoDemanda.pdf*" de la carpeta "*1.-CUADERNO PRINCIPAL*" de "*PrimeraInstancia*".

Fundamento fáctico: En apoyo de sus pedimentos, la parte actora señaló que los ejecutados se obligaron a cancelar la suma reclamada por esta vía compulsiva, contenida en el evocado título valor, junto con los réditos de plazo y moratorios, comprometiéndose a honrarla en su totalidad, el 27 de enero de 2023; sin embargo, no procedieron de esta forma[3].

Actuación procesal: El 23 de febrero postrero, se libró mandamiento de pago en los términos deprecados, del cual se dispuso la comunicación a los convocados[4], a quienes se tuvo por notificados por conducta concluyente y, a través de apoderado, formularon las excepciones de mérito que denominaron "*pago parcial de la obligación"* y *"cobro de lo no debido"*[5]*.*

En sustento de tales medios defensivo reseñaron básicamente que, han realizado pagos al acreedor por un monto de $530.165.512,68, según consta en el "*cuadro de pagos*", donde se discrimina fecha, concepto y valor de cada emolumento.

Sentencia impugnada: El *a quo* resolvió declarar no probadas las exceptivas perentorias propuestas por el extremo pasivo y ordenó seguir adelante con la ejecución, conforme se dispuso en el mandamiento de pago y condenó en costas a los demandados[6].

Como fundamento de esa determinación comenzó aduciendo que el pagaré báculo de la acción reunía las exigencias legales de los artículos 619, 621 y 709 del Estatuto Mercantil. Posteriormente, y en relación al pago, hizo alusión a los preceptos 1625 y 1627 del Código Civil.

---

[3] Folio 2, archivo "*003EscritoDemanda.pdf*", *ejúsdem.*
[4] Archivo "*007LibraMandamiento.pdf", ejúsdem.*
[5] Archivo "*010ContestacionDemanda.pdf", ejúsdem.*
[6] Archivo "*017sentencia de primera instancia, pago parcial y cobro de lo debido.pdf*", *ibídem.*

Luego, aclaró la diferencia entre el aludido concepto y el abono, para indicar que en el *sub examine* los ejecutados no allegaron elemento de convicción que respaldara su alegación de retribución al capital exorado; sin embargo, la entidad convocante al descorrer los medios de defensa, reconoció haber recibido los montos informados por los ejecutados, explicando la forma en que fueron imputados a la obligación (regla 1653 C.C.).

Lo anterior, para puntualizar que el valor de $530.165.512, fue aplicado por la actora, así: *(i)* $643.392,54 a intereses moratorios; *(ii)* $154.521.920,14 a réditos de plazo y; *(iii)* $375.000.000 a capital, para un saldo de $1.625.000.000, cantidad por la que se diligenció el pagaré báculo de la acción.

Así mismo sostuvo que en la relación suministrada por los ejecutados, no se tuvo en cuenta los rendimientos legales acordados; igualmente, que los rubros correspondientes a "*remanente liquidación*" -$460.000.000-, "*diferencia no uso TC*" -$32.000.000- y "*remanente*" -$102.165.512,68-, contrario a lo afirmado por los enjuiciados, fueron objeto de reconocimiento por la demandante.

Por último, precisó que el importe de $1.137.500.000 que reconoció el Fondo Nacional de Garantía frente al crédito objeto de la litis, no puede ser considerado como pago, de un lado, porque se efectuó posterior a la presentación de la acción y por otro, se trata de una subrogación legal.

Apelación: El extremo pasivo planteó el remedio vertical contra el fallo de primer grado. Exponiendo sus reparos por escrito, siendo aceptados los mismos en esta instancia, conforme se advirtió en proveído del pasado 14 de diciembre[7], los cuales recaen sobre los siguientes aspectos:

[7] Archivo "*07AutoCorreTraslado.pdf*" de la carpeta "*CuadernoTribunal*".

Insistieron que han realizado pagos a la obligación, aduciendo que los mismos no fueron tenidos en cuenta por el banco ejecutante, pues en su ejercicio matemático solo adeudan $1.469.834.488, según da cuenta la relación en donde detallan el valor desembolsado, remanente, los pagos efectuados, así como la fecha de los mismos.

Pronunciamiento de la demandante: La actora pidió mantener el fallo cuestionado, porque los abonos por los que se duele su contraparte sí fueron aplicados al crédito, para lo cual realizó una descripción de ello. Asimismo, reiteró que los demandados pasan por alto que las remuneraciones no pueden ser destinadas en su totalidad a capital, toda vez que deben ser imputadas primero a intereses causados y no cancelados [8].

II. PROBLEMA JURÍDICO

Resolver sí los demandados cumplieron con su deber legal de acreditar los pagos que aducen no fueron aplicados por la demandante a la obligación exorada, para el buen éxito de sus excepciones perentorias o, si por el contrario, se debe confirmar el fallo censurado.

III. CONSIDERACIONES

1. La Sala advierte que se resolverá la instancia con la limitación que impone el inciso primero del artículo 328 del Código General del Proceso, esto es, que solo se analizarán los argumentos que desarrollen los reparos concretos presentados ante el juez de primera instancia, tal como lo dispone el inciso final del canon 327 *ibídem.*

2. El proceso ejecutivo le permite al acreedor reclamar el cumplimiento de una obligación clara, expresa y exigible mediante la presentación de un título que la contenga y que constituya plena prueba en contra del

[8] PDF "12DescorreApelacion.pdf", *ejúsdem.*

deudor, a la luz de lo contemplado en el canon 422 del Código General del Proceso.

3. Ahora bien, cuando la demanda se sustenta en un título valor como el pagaré, además de contener las características prenotadas para que pueda ser considerado como un instrumento con fuerza compulsiva, requiere la satisfacción de las exigencias contempladas en el artículo 621 del Código de Comercio, la mención del derecho que en él se incorpora y la firma de su creador, así como las previstas en la regla 709 *ibidem*, la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre de la persona a quien deba hacerse el pago, la indicación de ser pagadero a la orden o al portador y la forma de vencimiento.

4. Desde esta perspectiva, en el caso bajo estudio se observa que al libelo genitor se adosó el cartular No. 201100000259, suscrito por Partes y Suministros Agroindustriales S.A.S. y Leonardo Andrés Castellanos, quienes se comprometieron a pagar, incondicionalmente, a favor del Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A., hoy Scotiabank Colpatria S.A., la suma de $1.625.000.000 el 27 de enero de 2023; de suyo que, se adviertan los elementos esenciales del instrumento aportado.

5. Establecido que el documento base del recaudo atiende las exigencias legales para prestar mérito ejecutivo, emprende la Sala el estudio de los argumentos en los que se sustentó la alzada, precisando que nuestra legislación civil y comercial le concede a los títulos valores la presunción de autenticidad que, permite considerarlos como una expresión cierta de la voluntad de sus signatarios y prueba fehaciente del derecho allí incorporado, conforme lo previene el artículo 625 del C. de Co., según el cual *"(…) toda obligación cambiaria deriva su eficacia de una firma puesta en un título valor y de su entrega con la intención de hacerlo negociable conforme a la ley de su circulación",* y consecuentemente, el suscriptor queda obligado al tenor literal del documento (canon 626 *ídem*).

6. En el caso presente, debe anticiparse que se confirmará la decisión impugnada, toda vez que los demandados más allá de la manifestación de haber realizado pagos a la obligación cuyo recaudo se persigue por el actor, no aportaron un medio persuasivo que permitiera tener por cierta tal afirmación, conforme se lo exige el artículo 167 del Estatuto Procesal.

7. Memórese que al tenor del canon 1626 del Código Civil, el pago es la prestación de lo que se debe y corresponde demostrarlo a quien lo realiza, de acuerdo con la regla contenida en el precepto 1757 de la misma codificación, conforme con la cual compete "*(…) probar las obligaciones o su extinción a quien alega aquellas o éstas".*

8. Lo anterior, conforme a los principios elementales del derecho probatorio, pues si bien es cierto que el demandado puede formular excepciones de fondo, no lo es menos que estas no pueden consistir simplemente en negar los hechos afirmados por el actor, sino en la invocación de otros supuestos fácticos impeditivos o extintivos del derecho reclamado, conforme así lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia:

> *"La defensa en sentido estricto estriba en la negación del derecho alegado por el demandante. Y la excepción comprende cualquier defensa de fondo que no consista en la simple negación del hecho afirmado por el actor, sino en contraponerle otro hecho impeditivo o extintivo que excluya los efectos jurídicos del primero y por lo mismo, la acción (…) De consiguiente, la excepción perentoria, cualquiera que sea su naturaleza, representa un verdadero contraderecho del demandado, preexistente al proceso y susceptible de ser reclamado generalmente a su vez como acción"*[9]

9. Empero, véase que en la contienda que nos captura, la inconformidad de los ejecutados se finca en que no se tuvieron en cuenta unos pagos realizados antes del diligenciamiento del pagaré base de recaudo por parte del acreedor, para lo cual realizaron una relación de tales estipendios, así:

[9] Sentencias de Casación Civil de 31 de julio de 1945, G.J. t. LX pág. 406; 9 de abril de 1969, G.J. t. CXXX pág. 16, y 25 de enero de 2008, entre otras.

Fecha del pago	Valor
14/12/2021	$12.107.894,84
11/01/2022	$12.676.777,78
11/02/2022	$13.420.000
11/03/2022	$14.910.000
11/04/2022	$77.888.333,33
11/05/2022	$78.589.322,92
11/06/2022	$79.029.531,67
11/07/2022	$79.482.213,98
11/08/2022	$80.637.291,67
11/09/2022	$81.424.146,49
Total	**$530.165.512**

10. De cara a tal situación, cuando la ejecutante se pronunció frente a las exceptivas aceptó haber recibido tales emolumentos, aclarando que los mismos fueron aplicados, primero a intereses y luego al saldo de la obligación, de la siguiente forma:

PAGOF

FECHAE	DESCRI	PAGOTOTAL$	MORA	INTERE	CARGOS	CAPVEN	CAPITA	SALCAP
20211112	DESEMBOLSO	-2000000000	0	0	0	0	-2000000000	2000000000
20211112	ABONO	54000000	54000000	0	0	0	0	2000000000
20211214	PAGO	12107894,84	7894,84	12100000	0	0	0	2000000000
20220111	PAGO	12676777,78	0	12676777,78	0	0	0	2000000000
20220211	PAGO	13420000	0	13420000	0	0	0	2000000000
20220310	PAGO	14910000	0	14910000	0	0	0	2000000000
20220412	PAGO	77888333,33	0	15388333,33	0	62500000	0	1937500000
20220512	PAGO	78589322,92	0	16089322,92	0	62500000	0	1875000000
20220614	PAGO	79029531,67	59219,17	16470312,5	0	62500000	0	1812500000
20220718	PAGO	79482213,98	369519,54	16612694,44	0	62500000	0	1750000000
20220812	PAGO	80637291,67	0	18137291,67	0	62500000	0	1687500000
20220915	PAGO	81424146,49	206958,99	18717187,5	0	62500000	0	1625000000
20230328	ABONO	1137500000	0	0	0	0	1137500000	487500000

11. En ese sentido, véase que los ejecutados pasan por alto que en el instrumento No. 201100000259, asintieron de forma expresa pagar, además del capital: "*(…) intereses corrientes a la tasa máxima legal…Se pacta expresamente que los intereses pendientes producirán intereses en*

los términos del artículo 886 del Código de Comercio y normas que lo reglamenten"[10].

12. Situación que fue consentida de igual forma en la correspondiente carta de instrucciones, en donde los obligados facultaron al acreedor a reclamar:

> *"1.* ***Incorporar a este pagaré****,* ***la suma que por*** *capital,* ***intereses****, comisiones, honorarios, gastos, etc.* ***se genere a mi(nuestro) cargo*** *por cualquier concepto que llegase(mos) a deber que se encuentre vencida sea por mutuo comercial, descuento de títulos valores, apertura de créditos, cartas de créditos, diferencias de cambio, comisiones, tarjetas de crédito, aceptaciones bancarias y en general, por cualquier obligaciones presente o futura que directa o indirectamente, conjunta o separadamente y por cualquier causa que le deba(mos) o llegue (lleguemos) a deber al BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. el día que sea llenado el título.*
> *2.* ***Capitalizar los intereses de conformidad con el artículo 886 del Código de Comercio y normas concordantes.***
> *3.* ***Estipular los intereses corrientes y de mora*** *que rijan en el BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.,* ***para las operaciones incorporadas en el citado pagaré, el día que se llene el pagaré****"*[11]*.* (Negrilla fuera de texto).

13. Así las cosas, para esta Sala emerge claro que, la diferencia alegada por el extremo pasivo -$155.165.512-, y que, en su sentir, no fue aplicada a la obligación objeto de cobro compulsivo, corresponde a réditos moratorios -$643.592,54 y de plazo -$154.521.920- que no fueron cancelados en su oportunidad, sin que exista elemento suasorio que permita arribar a una conclusión diferente.

14. Además, la forma de imputación de tales rubros tiene cimiento en lo previsto en la regla 1653 del Código Civil, el cual prevé: *"Si se deben capital e intereses, el pago se imputará primeramente a los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente que se impute al capital";* máxime, cuando no se acreditó que Scotiabank Colpatria S.A., hubiese autorizado la imputación sólo al saldo insoluto de la deuda. Añádase que

[10] Folio 2 del archivo "*002Anexos.pdf".*
[11] Folio 1 del archivo "*002Anexos.pdf".*

tampoco se demostró que tales beneficios hayan sido superiores los límites de la usura.

15. Eb adición a lo anterior, los comentados réditos son permitidos legalmente, conforme lo estipula el artículo 884 del Código de Comercio (modificado por el canon 111 de la Ley 510 de 1999), que a la letra señala: *"(c)uando en los negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un capital, sin que se especifique por convenio el interés, éste será el bancario corriente; si las partes no han estipulado el interés moratorio, será equivalente a una y media veces del bancario corriente y en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos el acreedor perderá todos los intereses, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990"*.

16. Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia ha expresado*:"(c)onvencionalmente se pueden estipular los intereses remuneratorios y los moratorios; cuando no ha habido tal estipulación, nada debe el deudor por razón de los primeros (…) la obligación de pagar intereses remuneratorios como fruto de prestaciones dinerarias no opera ipso iure, como acontece con los intereses moratorios (artículo 883 del Código de Comercio), sino que es incuestionablemente necesario que la obligación de pagarlos dimane de un acuerdo entre las partes o de una disposición legal que así lo determine".*[12] En todo caso, "*lo cierto es que haya existido o no pacto de intereses, o que estos los haya dispuesto el acreedor a su antojo, únicamente corresponde establecer si los que fueron efectivamente pagados exceden el máximo de la tasa legal permitida"*[13].

17. Conforme a las razones expuestas en precedencia, para la Sala no son de recibo los reparos de los recurrentes que cuestionan el fallo de primer grado, en la medida en que no tuvieron la virtualidad de enervar

[12] Corte Suprema de Justicia, Sentencia de 28 de noviembre de 1989.
[13] Corte Suprema de Justicia, sentencia de 27 nov. 2002, exp. 7400, citada en la STC6067-2016.

los argumentos planteados por el juez de primera instancia para desestimar sus defensas.

Así, se impondrá la respectiva condena en costas a la parte demandada conforme a los derroteros del numeral 1 del artículo 365 de Código General del Proceso.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, en nombre la República de Colombia y por autoridad de la Ley, **el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Quinta Civil de Decisión,**

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia anticipada proferida el 30 de junio de 2023, por el Juzgado Treinta y Seis Civil de Circuito de Bogotá, por las razones expuestas.

SEGUNDO: CONDENAR en costas de la instancia a la parte apelante. Para efectos de su liquidación, la Magistrada Sustanciadora fija como agencias en derecho la suma de $1.500.000.

TERCERO: En su oportunidad, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE

SANDRA CECILIA RODRÍGUEZ ESLAVA
Magistrada

CLARA INÉS MÁRQUEZ BULLA

Magistrada

(salvamento de voto)

ANGÉLA MARÍA PELÁEZ ARENAS

Magistrada

Firmado Por:

Sandra Cecilia Rodriguez Eslava
Magistrada
Sala Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Clara Ines Marquez Bulla
Magistrada
Sala 003 Civil
Tribunal Superior De Bogotá D.C.,
Firma Con Salvamento De Voto

Angela Maria Pelaez Arenas
Magistrada
Sala 009 Civil
Tribunal Superior De Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **3343380e9b4ad8f945cedf78c4b2a37e0a8e38be86e05b5a978bd6c74ea492c9**
Documento generado en 29/02/2024 04:39:11 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia
Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Radicación: 110013103034-2020-00302-01 (5671)
Demandante: Nelson Grau Jiménez
Demandado: Beatriz Sierra Lancheros
Proceso: Verbal
Trámite: Desistimiento

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

En escrito visto en el pdf 03 del cuaderno del Tribunal, que se presume auténtico (art. 244, inc. 3º, del CGP), el apoderado de la demandada, desde el correo electrónico *pebsjuridico@hotmail.com*, que fue informado al juzgado al momento de radicar la contestación de la demanda, según el art. 3° de la ley 2213, manifestó desistir del recurso de apelación formulado con el auto de 15 de febrero de 2023, proferido por el Juzgado 34 Civil del Circuito de Bogotá, para lo cual se encuentra facultado según el poder especial a él otorgado (cuad. 01, doc. 11, pág. 5).

El artículo 316 del Código General del Proceso preceptúa que las partes podrán desistir de los recursos interpuestos y de los incidentes, las excepciones y los demás actos procesales que hayan promovido.

Por consiguiente, **acéptase** el desistimiento del recurso de apelación antes referido. Sin condena en costas, teniendo en cuenta que, según se informó en el escrito, en audiencia de primera instancia, el juzgado tomó medidas de corrección y con la colaboración de las partes resolvieron subsanar el yerro para continuar el proceso (cuad. 01, doc. 35).

En firme esta providencia, devuélvanse las diligencias al despacho de origen para que expida las órdenes, constancias, comunicaciones y demás instrucciones pertinentes.

Notifíquese y devuélvase.

JOSE ALFONSO ISAZA DAVILA
MAGISTRADO TRIBUNAL SUP. DE BOGOTÁ, SALA CIVIL

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA
SALA CIVIL

Magistrado Ponente: Iván Darío Zuluaga Cardona

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Proceso	Verbal – responsabilidad civil
Demandante	Nancy Fabiola Ruiz Caro y otros
Demandado	Famisanar EPS CAFAM Colsubsidio Limitada
Llamamiento en garantía 1	Caja de Compensación Familiar CAFAM
Llamamiento en garantía 2	Allianz Seguros S.A.
Radicado	110013103 034 2017 00145 02
Instancia	Segunda
Decisión	Pone en conocimiento

1. Se pone en conocimiento el archivo en el que se comunica que, la Entidad Promotora de Salud Famisanar S.A.S., se encuentra en intervención bajo medida de toma de posesión, resolución nro. 2023320030005625-6 del 15 de septiembre de 2023 de la Superintendencia Nacional de Salud[1].

2. Al estar en presencia de un proceso declarativo y no de ejecución, se dispone su continuidad, más cuando la competencia de esta Corporación es restringida, como reseña el artículo 328 del Código General del Proceso.

3. Se ordena comunicar la existencia de este proceso al interventor, en cumplimiento a lo direccionado en el literal d, numeral 1, artículo 4, de la resolución en mención, en el que se advierte que "*en adelante, no se podrá iniciar ni continuar proceso o actuación alguna contra la intervenida sin que se notifique personalmente al interventor, so pena de nulidad*".

[1] Cuaderno de segunda instancia, archivos 09 y 11.

Por secretaría, remítase copia de esta decisión y compártase el vínculo del expediente a la interventora Sandra Milena Jaramillo Ayala, a la dirección electrónica notificaciones@famisanar.com.co; tal como se lee en el certificado de existencia y representación legal acercado[2].

NOTIFÍQUESE

Firma Electrónica
IVÁN DARÍO ZULUAGA CARDONA
Magistrado

Firmado Por:
Ivan Dario Zuluaga Cardona
Magistrado
Sala 010 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **efc44055e075a0779c1fda4f2e928daa26c52899198c4425bd8634741a890d76**
Documento generado en 29/02/2024 02:06:30 p. m.

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

[2] Ibidem, archivo 09, páginas 10 a 32.

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR ZULUAGA CARDONA RV: RADICACION MEMORIAL ALEGATOS SEGUNDA INSTANCIA PROCESO 11001-31-03-05-2017-00145-02 NANCY FABIOLA RUIZ CARO Y OTROS CONTRA EPS FAMISANAR

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 10/11/2023 12:42
Para:2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>

2 archivos adjuntos (658 KB)
MEMORIAL 2017-00145-02.pdf; C&C 01112023 (2).pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DR ZULUAGA CARDONA

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Lina Marcela Moreno Orjuela <lmorenoo@famisanar.com.co>
Enviado: viernes, 10 de noviembre de 2023 12:26
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: nicolasgarzonlopez@gygabogados.com.co <nicolasgarzonlopez@gygabogados.com.co>; Nicolás Garzón López <nicolasgarzonlopez@hotmail.com>; avanzar.a.c@gmail.com <avanzar.a.c@gmail.com>; milciadesnovoa77@gmail.com <milciadesnovoa77@gmail.com>; ferorve@yahoo.com <ferorve@yahoo.com>
Asunto: RADICACION MEMORIAL ALEGATOS SEGUNDA INSTANCIA PROCESO 11001-31-03-05-2017-00145-02 NANCY FABIOLA RUIZ CARO Y OTROS CONTRA EPS FAMISANAR

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA CIVIL

M.P. IVAN DARIO ZULUAGA CARDONA
secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co
E. S. D.

REFERENCIA: **VERBAL -RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**
RADICADO: **11001-31-03-05-2017-00145-02**
DEMANDANTE: **NANCY FABIOLA RUIZ CAROS Y OTROS**
DEMANDADO: **ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S.A.S.**
LLAMADOS EN GARANTIA: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM

ALLIANZ SEGUROS S.A.

ASUNTO: **TRASLADO RECURSO APELACIÓN PRESENTADO POR LA PARTE DEMANDANTE CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

LINA MARCELA MORENO ORJUELA, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Bogotá, identificada con Cédula de Ciudadanía número 53.125.424 de Bogotá, portadora de la Tarjeta Profesional de Abogado número 183.875 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en mi calidad de apoderada de la demandada **ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S.A.S.,- EN INTERVENCIÓN BAJO MEDIDA DE BAJO LA MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN,** mediante el presente, me permito radicar memorial con destino al proceso de la referencia.

Copio este correo a las partes del proceso de las que conozco la dirección electrónica en cumplimiento del artículo 78 del C.G.P. y del Decreto 806 de 2020, en concordancia de la Ley 2213 de 2022.

Famisanar EPS
Lina Marcela Moreno Orjuela
Abogada I
Secretaría General y Jurídica
6016500200
Lmorenoo@famisanar.com.co
Kr 13ª 77ª 63 Bogotá DC

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA CIVIL
M.P. IVAN DARIO ZULUAGA CARDONA
secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co
E. S. D.

REFERENCIA:	**VERBAL -RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**
RADICADO:	**11001-31-03-05-2017-00145-02**
DEMANDANTE:	**NANCY FABIOLA RUIZ CAROS Y OTROS**
DEMANDADO:	**ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S.A.S.**
LLAMADOS EN GARANTIA:	**CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM**
	ALLIANZ SEGUROS S.A.
ASUNTO:	**TRASLADO RECURSO APELACIÓN PRESENTADO POR LA PARTE DEMANDANTE CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

LINA MARCELA MORENO ORJUELA, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Bogotá, identificada con Cédula de Ciudadanía número 53.125.424 de Bogotá, portadora de la Tarjeta Profesional de Abogado número 183.875 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en mi calidad de apoderada de la demandada **ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S.A.S.,- EN INTERVENCIÓN BAJO MEDIDA DE BAJO LA MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN,** estando dentro de la oportunidad procesal y de conformidad con al artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, descorro traslado otorgado para pronunciarme respecto a la sustentación del recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia de fecha 2 de octubre de 2023 proferida por el Juzgado 34 Civil del Circuito de Bogotá en los siguientes términos:

De los argumentos expuestos por el recurrente, en su mayoría todos encaminados a probar una “indebida valoración probatoria” por los motivos relacionados en cada uno de los reparos, sea esta la oportunidad para referirme de manera especial frente a la gestión del riesgo en salud a cargo de EPS Famisanar S.A.S., como obligaciones del aseguramiento en salud.

1.) **EN CUANTO A LA ATENCIÓN MÉDICA BRINDADA A LA SEÑORA NAZZLY ANTERIOR AL 14 DE JULIO DE 2015 EN LA IPS O&G, ESPECÍFICAMENTE LA ATENCIÓN DESPLEGADA FRENTE EL RESULTADO DE LA ECOGRAFÍA DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2015 APORTADA EN LA DEMANDA**

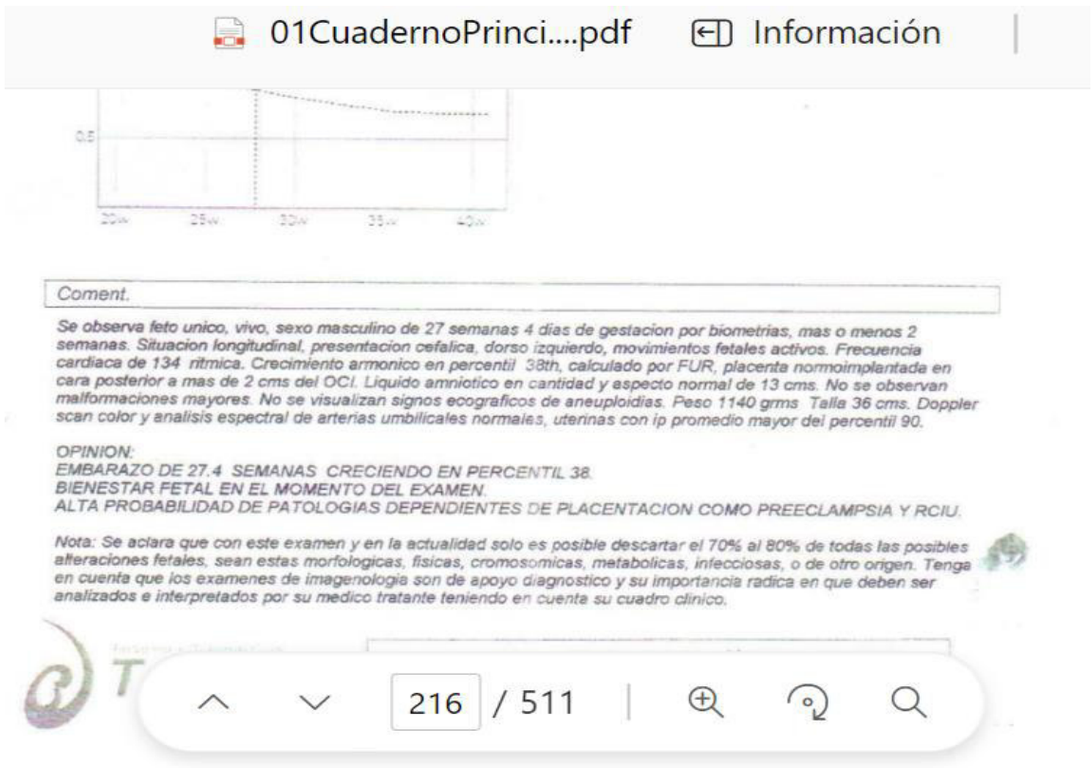
A pesar de que este hecho no fue objeto de reparo en los hechos de la demanda, sino hasta la sustentación del recurso de apelación contra la sentencia, resulta necesario explicar al Despacho lo correspondiente frente a la atención especializada por el servicio de gineco obstetricia suministrada a la señora Nazzly a través de la red prestadora de servicios de EPS Famisanar S.A.S. y el tratamiento recibido anterior al 14 de julio de 2015.

Debido a la calificación del alto riesgo obstétrico dado los antecedentes ya conocidos (colitis ulcerativa, serología positiva sífilis gestacional) en controles prenatales realizados en la Caja de Compensación Familiar CAFAM, se remitió a la paciente a valoración en la IPS FETAL CLINIC O Y G tal y como se advierte en la autorización de servicios No.23127015402 visible a folio 387 del archivo pdf 01 cuaderno principal.

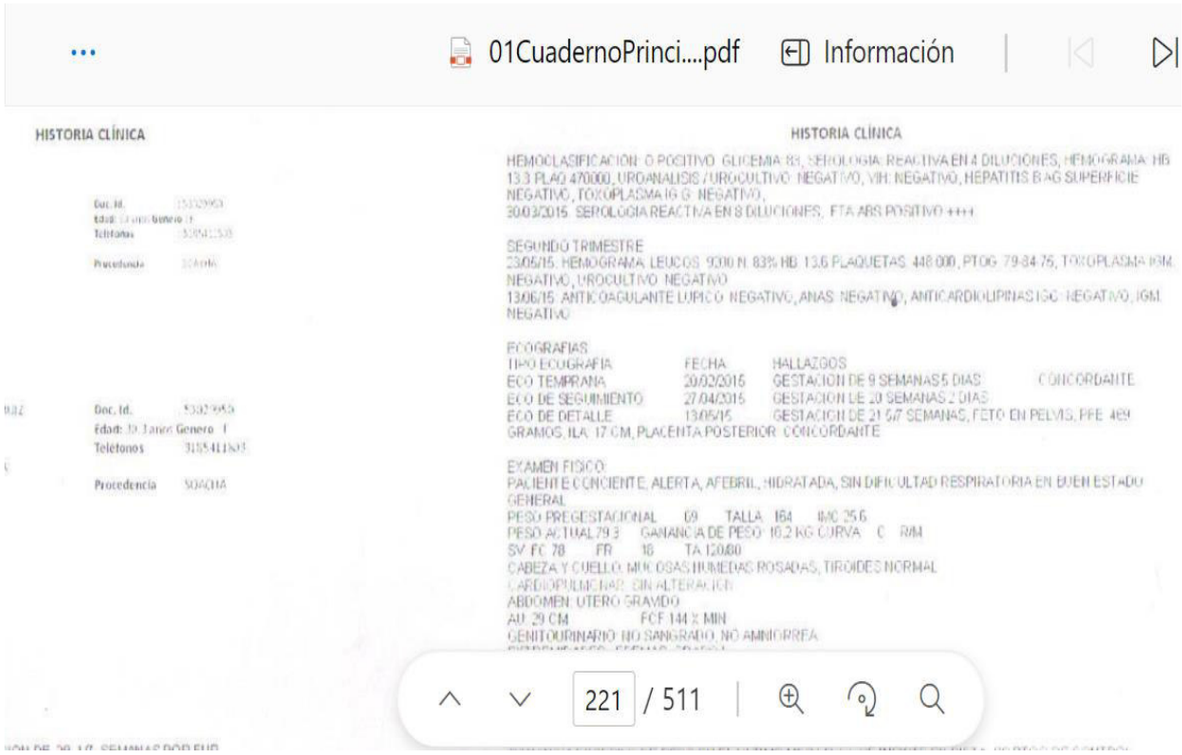
En esta institución, le realizaron a la paciente 3 controles por especialista en GINECO OBSTETRICIA (**28.04.2015, 29.05.2015 con cita de control en 1 mes y el 02.07.2015**) y una ecografía gineco-obstétrica con fecha del 13.05.2015.

Llama la atención que el **23.06.2015** la paciente se realizó ecografía obstétrica de detalle fetal 4D en IMÁGENES DIAGNOSTICAS TEUSA por el Dr. Omar Lopez Gonzalez visible a folio 213 a 216 del archivo pdf 01 cuaderno principal, la cual se concluye que se realizó de manera particular tal y como se observa en la factura de venta ID 18192 aportada por la misma parte actora bajo el entendido que no obra autorización de servicios generada por EPS Famisanar S.A.S., pues no obra tal servicio autorizado en el informe de autorizaciones aportado en la contestación de la demanda.

Al respecto, el reporte de esta ecografía fue: *"OPINIÓN: -EMBARAZO DE 27.04. SEMANAS CRECIENDO EN PERCENTIL 38. – BIENESTAR FETAL EN EL MOMENTO DEL EXAMEN. –* ***ALTA PROBABILIDAD DE PATOLOGIAS DEPENDIENTES DE PLACENTACION COMO PREECLAMSIA Y RCIU.*** Es importante aclarar que, en este reporte no se describe si se le explica a la paciente sobre el hallazgo de alta probabilidad de preeclamsia y necesidad de reportar el hallazgo al médico tratante más allá de la preforma que se consigna en estos tipos de exámenes "T*enga en cuenta que las imágenes de imagenología son de apoyo diagnóstico y su importancia radicada en que deben ser analizados e interpretados por su médico tratante teniendo en cuenta el cuadro clínico"*



En el control de **02.07.2015** en FETAL CLINIC O Y G visible a folio 221 del archivo pdf 01 cuaderno principal **no se describe** el reporte de la ecografía gineco-obstétrica realizada en IMÁGENES DIAGNOSTICAS TEUSA el **23.06.2015,** por lo tanto, podría afirmarse que los resultados de esta ecografía no fueron presentados al médico tratante para su análisis e interpretación. Si el Despacho revisa con detenimiento, se observa que en este control se relacionan las ecografías presentadas al gineco obstetra tratante a ese momento menos la ecografía del 23 de junio de 2015, razón por la cual se puede inferir que, si los resultados de la ecografía hubiesen sido presentados en el control del 2 de julio de 2023 el plan de manejo o la conducta desplegada por el gineco obstetra hubiese sido otra dado la importancia del hallazgo.

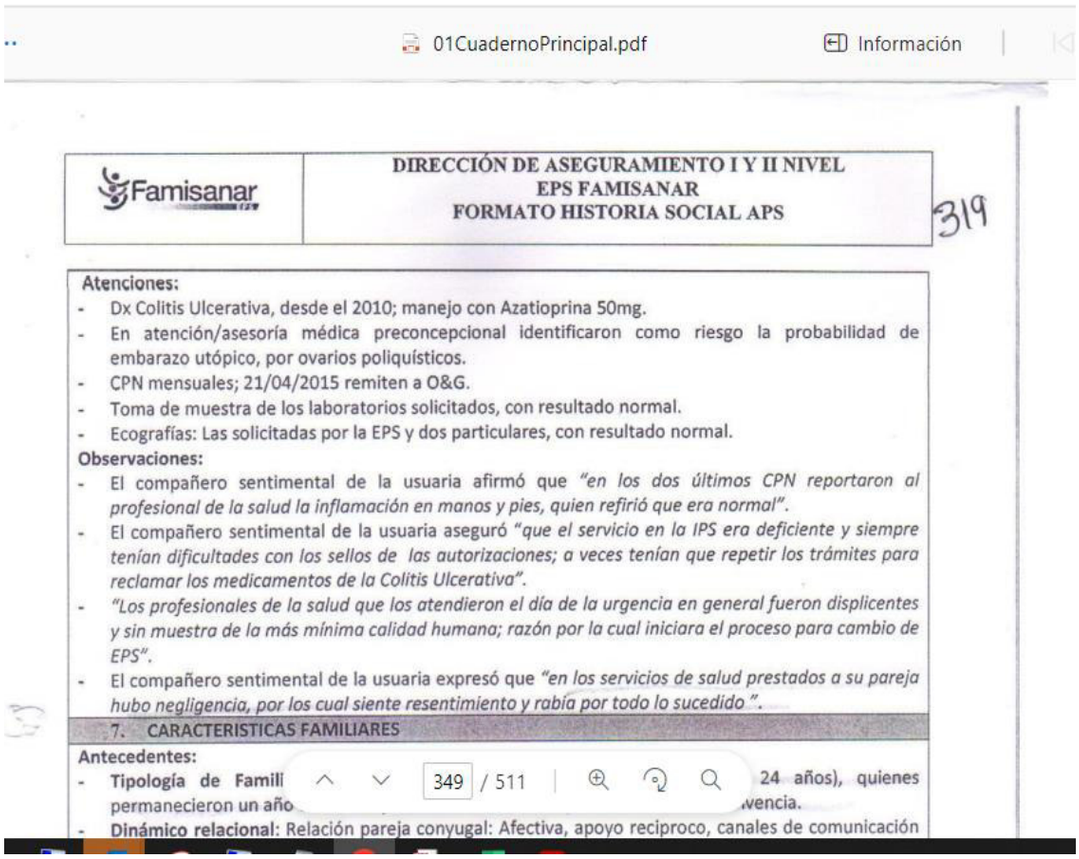


En el examen físico realizado a la paciente en el control del 2 de julio de 2015 refieren **"cifras tensionales controladas"** (ta:120/80mmhg), se da orden de nuevo control en 15 días con signos de alarma claramente identificados, control programado para 21.07.2015 con reportes de TEST DE OSULLIVAN, Y **ESTUDIO RENAL DE 24 HORAS y VDRL** dado las observaciones anotadas en el seguimiento, entre ellas, la ganancia de peso en el último mes, edema gestacional, y que de paso sea dicho tuvo acceso a las valoraciones por nutrición el 29 de abril de 2015 como da cuenta el folio 194 del archivo pdf 01 cuaderno principal. Debe tenerse en cuenta el control programado para 21.07.2015 no se realizó porque la paciente presenta complicación e ingreso a urgencias el 14.07.2015 y posterior deceso el 17.07.2015.

Pues bien, los laboratorios fueron realizados el 4 de julio de 2015 como se observa en el folio 225 del archivo pdf 01 cuaderno principal en donde se encuentra los resultados del estudio renal; sin embargo, debo llamar la atención del Despacho que anterior al 14 de julio de 2015 la paciente no tuvo ingreso por el servicio de urgencias a ninguna de las IPS de la red de servicios de EPS Famisanar S.A.S., y para cuando ingresó al servicio de urgencias de Cafam el 14 de julio de 2015 a la 17:40 horas, los resultados de los laboratorios del 04 de julio de 2015 no se advierte en la historia clínica de la atención del 14 de julio de 2015 que fueran presentados por la paciente, así como tampoco fueron presentados los resultados de la ecografía del 23 de junio de 2015, últimos paraclínicos e imágenes diagnósticas realizados por la paciente y de vital importancia para presentar más aún ante un evento de urgencia, los cuales seguramente, hubiesen aportado de manera positiva para realizar el diagnóstico de la preclamsia, inferencia lógica a la que llega esta parte resultado del análisis integral según trazabilidad de los hechos de acuerdo con las pruebas documentales aportadas al proceso.

Sobre esta ecografía quiero destacar o llamar la atención del Despacho que, en el **formato historia social APS** aportada en la contestación de la demanda por EPS FAMISANAR, visible a folio 348 a 350 del archivo pdf 01 cuaderno principal, se consignó la información de la entrevista realizada por la trabajadora social de EPS Famisanar al señor Cristian Camilo Moreno Bayona el 27 de julio de 2015, esto como parte de las acciones que se generan ante una mortalidad materna. Pues bien, en este formato se relacionaron las atenciones que informó el compañero permanente de la señora Nazlly a la trabajadora social refiriendo lo siguiente*; "controles prenatales mensuales, el 21 de abril remiten a O&G,* ***toma de muestra de laboratorios solicitados, con resultado normal, ecografías, las solicitadas por la EPS y dos particulares con resultado normal"*****;** situaciones que corroboran lo dicho anteriormente: (i) que la ecografía del 23 de junio de 2015 fue tomada de manera particular y (ii) que en sentir de la usuaria y de su esposo, los resultados de los

laboratorios del 4 de julio de 2015 y de la ecografía del 23 de junio 2115 a su juicio eran normales y seguramente ello explica la razón por la cual no fueron presentadas al ingreso del servicio de urgencias del 14 de julio de 2015.


01CuadernoPrincipal.pdf Información

Famisanar

DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO I Y II NIVEL
EPS FAMISANAR
FORMATO HISTORIA SOCIAL APS

319

Atenciones:
- Dx Colitis Ulcerativa, desde el 2010; manejo con Azatioprina 50mg.
- En atención/asesoría médica preconcepcional identificaron como riesgo la probabilidad de embarazo utópico, por ovarios poliquísticos.
- CPN mensuales; 21/04/2015 remiten a O&G.
- Toma de muestra de los laboratorios solicitados, con resultado normal.
- Ecografías: Las solicitadas por la EPS y dos particulares, con resultado normal.

Observaciones:
- El compañero sentimental de la usuaria afirmó que *"en los dos últimos CPN reportaron al profesional de la salud la inflamación en manos y pies, quien refirió que era normal"*.
- El compañero sentimental de la usuaria aseguró *"que el servicio en la IPS era deficiente y siempre tenían dificultades con los sellos de las autorizaciones; a veces tenían que repetir los trámites para reclamar los medicamentos de la Colitis Ulcerativa"*.
- *"Los profesionales de la salud que los atendieron el día de la urgencia en general fueron displicentes y sin muestra de la más mínima calidad humana; razón por la cual iniciara el proceso para cambio de EPS"*.
- El compañero sentimental de la usuaria expresó que *"en los servicios de salud prestados a su pareja hubo negligencia, por los cual siente resentimiento y rabia por todo lo sucedido"*.

7. CARACTERISTICAS FAMILIARES

Antecedentes:
- **Tipología de Famili** 349 / 511 24 años), quienes permanecieron un año ,vencia.
- **Dinámico relacional:** Relación pareja conyugal: Afectiva, apoyo reciproco, canales de comunicación

2.) EN CUANTO AL NIVEL DE COMPLEJIDAD DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CLÍNICA CAFAM

Ips en donde se le garantizó a la señora Nazzly el acceso de servicios por la especialidad de Obstetricia, servicio que se encuentra habilitado desde el 04 de mayo de 2007, clasificado en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud de la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá, como servicio 204-Cirugía Ginecológica de mediana complejidad en la modalidad de hospitalario y ambulatorio, con número distintivo de habilitación de servicios DHS 204884, lo cual quiere decir que según esta habilitación permitía que para el periodo julio/2015, se atendieran pacientes con trastornos hipertensivos durante la gestación en la IPS Clínica Cafam, ello se demostró con la consulta realizada en el REPS, de la cual se aportó captura de pantalla visible a folio 321 del del cuaderno 1 del expediente, con ello queda desvirtuado lo manifestado por la parte demandante.

Adicionalmente, de acuerdo con el dictamen pericial rendido por la Dra. Ivonne Diaz, específicamente a lo informado en la respuesta a la pregunta número 3, al momento de la atención de las 17:40 del 14 de julio la señora Nazly no cumplía las condiciones o criterios para que la paciente fuera remitida a una institución de mayor nivel de complejidad durante el trabajo de parto.

3.) EN CUANTO A LA ATENCIÓN MÉDICA DISPENSADA EN CAFAM ENTRE EL 14 Y 15 DE JULIO DE 2015

Dictamen Pericial Parte Demandante

-El perito Dr. Rubén Dario Angulo Gonzalez no es especialista en GINECO-OBSTETRICIA, no es un MEDICO PAR, por lo tanto, el peritaje no goza de IDONEIDAD, porque sin

desestimar su experticia en medicina forense y criminalística, el acto médico en el caso concreto se enmarca en el conocimiento especifico de la GINECO-OBSTETRICIA, en ese sentido para evaluar de manera coherente, objetiva y profunda las presuntas acciones, omisiones de los profesionales tratantes que alega la parte demandante solo un especialista en GINECO OBSTETRA es el idóneo para conceptuar sobre el asunto.

- No obstante, el perito de la parte demandante tanto en el dictamen como en la sustentación del mismo avala el acto médico de los profesionales de la salud de la Caja de Compensación Familiar Cafam.

-En el peritaje, específicamente el **acápite de resumen de atenciones**, se relaciona las valoraciones realizadas en la IPS FETAL CLINIC O & G, a donde la paciente fue remitida para la valoración y seguimiento por GINECO OBSTETRICIA debido a la calificación del I alto riesgo obstétrico; sin embargo, en las conclusiones del dictamen el perito se contradice al señalar que la afiliada no tuvo acceso a servicios especializados.

-El perito no tiene en cuenta para el dictamen las documentales aportadas por EPS Famisanar S.A.S., en cuanto al proceso de referencia y contrareferencia que evidencia el cumplimiento de las obligaciones a cargo de mi representada, quedando una vez mas demostrado con esto que el dictamen pericial fue elaborado solo con la HC de Cafam, con información parcializada pues no se tuvo en cuenta la información aportada por EPS Famisanar S.A.S., en la contestación de la demanda y por eso las conclusiones del peritazgo frente al proceso del traslado carecen de sustento y no podrían tenerse en cuenta.

-El perito en sus conclusiones se limita a declarar y concluir que la causa principal del deceso de la muerte de la paciente es como consecuencia a la presunta demora en la remisión a 3er nivel de atención y esta afirmación es totalmente alejada de la realidad pues de acuerdo a los registros de la historia clínica de Cafam antes de que se indicara y ordenara la remisión a UCI Adultos, la paciente presentó ECLAMSIA dado por episodio convulsivo descrito y entró en paro cardiorespiratorio por lo que se inició código azul, luego del evento de la convulsión, al examen físico en adelante describen que la señora Nazly presentada "***pupilas midriaticas no reactivas a la luz y no respuesta a estímulos" (folio 108 archivo pdf 01 cuaderno principal evolución 10:10 del 15 de julio de 2015)***, condición que seguramente hace referencia a un daño neurológico ya instaurado, lo cual fue confirmado con los exámenes y los diagnósticos realizados en el Hospital del Tunal, registros que obran en la HC también aportada con la demanda, TAC de cráneo donde se evidenció una hemorragia cerebral masiva, lo anterior condiciona muerte cerebral, **es decir la paciente seguramente presentaba daño neurológico desde ese evento** la posterior remisión a UCI alegada como tardía, poco o nada hubieran cambiado en pronóstico (fatal) que finalmente se materializó.

Entonces fueron la preclamsia severa, la hemorragia obstétrica, como factores predominantes en la causalidad de la muerte de la señora Nazzly, la situación generada por estas patologías es la causa de la muerte y estas obedecen a factores propios de la paciente.

4.) EN CUANTO AL TRASLADO DE LA PACIENTE AL SERVICIO UCI ADULTO COMO OBLIGACIÓN A CARGO DE EPS FAMISANAR

La HC y las pruebas allegadas por EPS Famisanar en la contestación de la demanda relacionadas con el proceso de referencia y contrareferencia deben ser analizadas en su integralidad y conforme a la trazabilidad de los hechos y no como lo pretende hacer ver el apoderado de la parte demandante al referirse únicamente a la hoja 2 del formato de referencia No.368512 en donde se encuentran las respuestas emitidas por los diferentes prestadores a partir de las 07:24 del 15 de julio de 2015.

En cuanto a la remisión de la paciente: De acuerdo a la HC aportada en la demanda se encuentra nota realizada el **14 de julio de 2015 a las 11:53 p.m**. por el Dr. Fabio Rocero, quien ordena el traslado a tercer nivel de atención Unidad de Cuidados Intensivos, por tanto, no es cierto como lo manifiesta la parte demandante que el traslado se ordenara desde las 10:05 p.m., ya que a esta hora lo que se activa es el código azul y esto fue para la reanimación y no para la solicitud de remisión.

EPS Famisanar, en cumplimiento de sus obligaciones que como entidad aseguradora tiene a su cargo a través del proceso de referencia y contra referencia ejecutó todas las acciones tendientes a la materialización traslado de la paciente, y una vez fue recibido el correo electrónico por parte de Cafam a las 00:03 minutos del 15 de julio de 2015, mi representada comenta a la señora Nazzly Johana Perez Ruiz, en la red especializada **desde las 00:018 del 15 de julio de 2015** y no desde las 07:29 horas del 15 de julio de 2015 como lo pretende hacer ver al Despacho la parte demandante que a esta hora se haya iniciado el trámite de remisión.

Traslado Ambulancia Medicalizada

En relación con el traslado de la paciente mediante ambulancia medicalizada EPS Famisanar genera autorización de servicios No. 21731970 con el prestador Fundación Saint – Salud Integral a las 7:43 del 15 de julio de 2015, como se evidencia en el reporte de autorizaciones activas por afiliado (página 5 del informe, visible a folio 356 del expediente), llega ambulancia a la IPS Clínica Cafam Calle 51 a las 08:00 a.m. y sale nuevamente hacia la IPS Hospital El Tunal III Nivel de Atención ESE a las 09:20 a.m. del 15 de julio de 2015, debido a que la paciente tenía múltiples gestiones de enfermería con llegada al Hospital Tunal a las 09:50 a.m., quedando instalada en UCI a las 10:45 a.m., tal y como se acreditó en la bitácora de la ambulancia obrante a folio 350 y 351 del cuaderno 1 del expediente.

En conclusión y según los soportes revisados, se evidencia que la IPS Cafam solicitó remisión a UCI el 15 de julio de 2015 a las 12:03 a EPS Famisanar, luego Famisanar inició el trámite a las 00:18 horas del 15 de julio, esto es, pasando 15 minutos después de recibido el correo de Cafam, procediendo a comentar a la paciente en las IPS de la red a la 01:02 a.m., 6:15 a.m., 6:29 y a las 6:57 en adelante reiterando la necesidad del servicio de UCI para la señora Nazly, gestionando tanto en la red adscrita, como en la red privada y pública.

Así las cosas, queda desvirtuado una vez más el presunto incumplimiento a la obligación de garantizar y poner en funcionamiento oportunamente el sistema de referencia y contrareferencia como quiera que se encuentra probado que mi representada inició la presentación y con eso activó el proceso desde las 0 horas con 18 minutos del 15 de julio de 2015 y no desde el a 7:29 horas como lo informa la parte demandante y el traslado por medio de ambulancia medicalizada dentro de la oportunidad que permitía las circunstancias particulares del caso, ello quedó probado con las bitácoras aportadas en la contestación de la demanda y las capturas de pantalla de los correos enviados como se refirió anteriormente, dando cumplimiento de la obligación a cargo de EPS Famisanar.

CONCLUSIONES

1. El servicio de Obstetricia se encuentra habilitado desde el 04 de mayo de 2007, clasificado en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud de la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá, como servicio 204-Cirugía Ginecológica de mediana complejidad en la modalidad de hospitalario y ambulatorio, con número distintivo de habilitación de servicios DHS 204884, lo cual quiere decir que según esta habilitación permitía que para el periodo julio/2015, se atendieran pacientes con trastornos hipertensivos durante la gestación en la IPS Clínica Cafam.
2. De acuerdo con el dictamen pericial, respuesta a la pregunta 3, se puede concluir que, la señora Naxlly no cumplía con los criterios de la guía de práctica para la remisión a una institución de mediana o mayor complejidad.
3. La usuaria no llegó con una preclamsia diagnosticada el 15 de julio de 2015.
4. La preclamsia se debe diagnosticar con exámenes de diagnóstico.
5. La eclampsia no es prevenible, es intempestiva.
6. No se presentó demora en el traslado, se presentaron dificultades, que es distinto porque se comentó con las IPS que conforman la red prestadora de servicios pública y privas hasta su aceptación por parte del Hospital el Tunal a las 07:42 am del 16 de julio de 2015.
7. No se afirmó de manera inequívoca por la Dra. Ivone Diaz, perito ginecoobstetra de q**ue el traslado hubiese cambiado la situación de salud de la paciente, es más**

destaca la perito que desde la convulsión es posible que la paciente ya hubiese hecho la hemorragia cerebral.

8. EPS Famisanar S.A.S., cumplió con todas las obligaciones de aseguramiento, incluyendo la de gestión del riesgo en salud.

PETICIONES

Con fundamento en lo expuesto, solicito respetuosamente se confirme la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 34 Civil del Circuito de Bogotá el pasado 2 de octubre de 2023.

En el hipotético caso que, prosperen las pretensiones de la demanda y se revoque el fallo apelado, solicito al Despacho que se acceda a las pretensiones del llamamiento en garantía formulado por EPS Famisanar S.A.S. a la Caja de Compensación Familiar Cafam con fundamento el contrato de prestación de servicios de salud allegado, como fuente de obligaciones entre las partes que suscribieron el contrato.

ANEXOS

1. Certificado de Existencia y Representación Legal de EPS Famisanar S.A.S. **EN INTERVENCIÓN BAJO MEDIDA DE BAJO LA MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN.**

Del Señor Juez,



LINA MARCELA MORENO ORJUELA
APODERADA EPS FAMISANAR S.A.S.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de noviembre de 2023 Hora: 14:45:23
Recibo No. AB23890981
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23890981A888E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S.A.S - EN INTERVENCIÓN BAJO LA MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN
Sigla: EPS FAMISANAR SAS
Nit: 830003564 7
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 00643287
Fecha de matrícula: 24 de abril de 1995
Último año renovado: 2023
Fecha de renovación: 30 de marzo de 2023
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cr 13 A No 77 A - 63
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: notificaciones@famisanar.com.co
Teléfono comercial 1: 6500200
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cra 13 A 77 A 63
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: notificaciones@famisanar.com.co
Teléfono para notificación 1: 6500200
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de noviembre de 2023 Hora: 14:45:23
Recibo No. AB23890981
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23890981A888E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por E.P. No. 542 de la Notaría 52 de Santafé de Bogotá del 31 de marzo de 1.995, inscrita el 24 de abril de 1. 995 bajo el número 489.653 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAMCOL SUBSIDIO la sociedad podrá utilizar la sigla E.P.S. FAMISANAR LIMITADA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 245 de la Junta de Socios, del 04 de abril de 2017, inscrita el 28 de agosto de 2017 bajo el número 02254257 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad Limitada a Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre de: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S.A.S., sigla: E.P.S. FAMISANAR S.A.S.

Por Acta No. 245 de la Junta de Socios, del 04 de abril de 2017, inscrita el 28 de agosto de 2017 bajo el número 02254257 del libro IX, la sociedad de la referencia cambió su nombre de: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR CAFAM COLSUBSIDIO LIMITADA, sigla: E.P.S. FAMISANAR LIMITADA, por el de: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S.A.S., sigla: EPS FAMISANAR S.A.S.

ÓRDENES DE AUTORIDAD COMPETENTE

Mediante Resolución No. 2023320030005625-6 del 15 de septiembre de 2023, la Superintendencia Nacional de Salud, inscrito el 20 de Septiembre de 2023 con el No. 03019490 del libro IX, resolvió ordenar la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y, la intervención forzosa administrativa para administrar la sociedad de la referencia por el término de un (1) año, es decir, desde el 15 de septiembre de 2023 hasta el 15 de septiembre de 2024.

TÉRMINO DE DURACIÓN

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de noviembre de 2023 Hora: 14:45:23
Recibo No. AB23890981
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23890981A888E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

El objeto principal de la sociedad es la ejecución de todos los actos y contratos propios de las entidades promotoras de salud previstos en la ley y en desarrollo del mismo podrá, ejecutar y celebrar todo acto directamente relacionado con el objeto principal o conducente al mismo. Como entidad promotora ejercerá los siguientes actos; A) Promover la afiliación de los habitantes de Colombia al sistema general de seguridad social en salud en su ámbito geográfico de influencia, bien sea a través del régimen contributivo o del régimen subsidiado, garantizando siempre la libre escogencia del usuario y remitir al fondo de solidaridad y garantía o quien haga sus veces, la información relativa a la afiliación del trabajador y de su familia, a las novedades laborales, a los recaudos por cotizaciones y a los desembolsos por el pago de la prestación de servicios. B) Administrar el riesgo en salud de sus afiliados y el riesgo financiero derivado del mismo, procurando disminuir la ocurrencia de eventos previsibles de enfermedad o de eventos de enfermedad sin atención, evitando en todo caso la discriminación de personas con altos riesgos o enfermedades costosas en el sistema. C) Propender por la adecuada utilización de los recursos para el funcionamiento del sistema de seguridad social en salud mediante el recaudo de las cotizaciones por delegación del fondo de solidaridad y garantía o quien cumpla sus funciones, girar los excedentes entre los recaudos, la cotización y el valor de la unidad de pago por capitación a dicho fondo, o cobrar la diferencia en caso de ser negativa, y pagar los servicios de salud a los prestadores con los cuales celebre contrato. D) Organizar y garantizar el acceso a la prestación de los servicios en salud, con el fin de obtener el mejor estado de salud de sus afiliados con cargo a las unidades de pago por capitación correspondientes. Con éste propósito gestionará y coordinará la oferta de servicios de salud, directamente o a través de la contratación con instituciones prestadoras y con profesionales de la salud, implementará sistemas de control de costos, informará y educará a los usuarios para el uso racional del sistema, establecerá procedimientos de garantía de calidad para la atención integral, eficiente y oportuna de los usuarios en las instituciones prestadoras de salud y representará a los afiliados ante los prestadores y demás actores del sistema. E)

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de noviembre de 2023 Hora: 14:45:23
Recibo No. AB23890981
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23890981A888E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Organizar la prestación del servicio de salud derivado del sistema de riesgos profesionales, conforme a las disposiciones legales. F) Organizar facultativamente la prestación de planes complementarios al plan obligatorio de salud, según lo prevea su propia naturaleza. Para el normal desarrollo del objeto de la sociedad, esta podrá adquirir, enajenar, gravar toda clase de bienes muebles e inmuebles, celebrar toda clase de contratos y asociarse con otras sociedades y personas jurídicas o naturales y ejecutar toda clase de actos, sean o no de comercio, necesarios o conducentes al logro del objeto social y en especial las que a continuación se indican: A) Comprar, vender, dar o tomar en arrendamiento, hipotecar, dar en prenda y grabar bienes inmuebles y muebles. B) Dar o recibir dinero en mutuo; con o sin intereses, y con o sin garantía. C) Abrir y manejar cuentas bancarias y celebrar con los bancos y demás entidades financieras, las operaciones comerciales a que estén autorizados por la ley a realizar. D) Suscribir acciones o cuotas en otras sociedades y fusionarse con ellas, E) Brindar a otras entidades del sistema; asesoría, consultoría, asistencia técnica, soporte y apoyo operativo en materia de procesos operativos, tecnología, desarrollo y licenciamiento de software para el soporte de procesos propios del aseguramiento en salud. F) Celebrar contratos, presentar ofertas mercantiles y realizar todas aquellas actividades comerciales afines con el desarrollo de su objeto. G) Actuar como entidad operadora de libranzas, igualmente podrá suscribir acuerdos o convenios de libranza o descuento directo con empleadores o entidades pagadoras, de naturaleza pública o privada, además de acordar otros mecanismos de recaudo. Parágrafo. Los recursos para desarrollar el objeto social de EPS FAMISANAR tendrán origen lícito; con el fin de garantizarlo se implementarán los mecanismos idóneos orientados a prevenir, controlar, detectar y evitar el ingreso de recursos de origen no lícito. Se entenderán incluidos en el objeto social todos los actos directamente relacionados con el mismo, y los que tengan como finalidad complementario o ejercer derechos al igual que cumplir las obligaciones legales, crear, modificar o extinguir toda clase de obligaciones civiles o comerciales relacionadas con las actividades propuestas en desarrollo de su objeto social.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de noviembre de 2023 Hora: 14:45:23
Recibo No. AB23890981
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23890981A888E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor : $600.000.000.000,00
No. de acciones : 600.000.000,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $393.892.276.000,00
No. de acciones : 393.892.276,00
Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $393.892.276.000,00
No. de acciones : 393.892.276,00
Valor nominal : $1.000,00

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Resolución No. 05625-6 del 15 de septiembre de 2023, de Superintendencia Nacional de Salud, inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de septiembre de 2023 con el No. 03019491 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Agente Interventor	Sandra Milena Jaramillo Ayala	C.C. No. 65766395

Por Acta No. 69 del 27 de julio de 2022, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de agosto de 2022 con el No. 02869925 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Suplente Del Gerente General	Sergio Andres Zarate Sanabria	C.C. No. 79791233

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de noviembre de 2023 Hora: 14:45:23
Recibo No. AB23890981
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23890981A888E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Acta No. 71 del 28 de septiembre de 2022, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 7 de octubre de 2022 con el No. 02887331 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Segundo Suplente Del Gerente General	Saidi Adriana Osorio Casalini	C.C. No. 34560753

Por Acta No. 70 del 31 de agosto de 2022, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de septiembre de 2022 con el No. 02876743 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Tercer Suplente Del Gerente General	Luis Eduardo Moreno Rojas	C.C. No. 79506649

Por Acta No. 24 del 28 de agosto de 2019, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de septiembre de 2019 con el No. 02507211 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Cuarto Suplente Del Gerente General	Diana Patricia Angulo Diaz	C.C. No. 51870819

REVISORES FISCALES

Por Resolución No. 05625-6 del 15 de septiembre de 2023, de Superintendencia Nacional de Salud, inscrita en esta Cámara de Comercio el 29 de septiembre de 2023 con el No. 03022533 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de noviembre de 2023 Hora: 14:45:23
Recibo No. AB23890981
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23890981A888E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Contralor Persona Jurídica.	NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S	N.I.T. No. 800088357 4

Por Documento Privado No. BM&A996 del 21 de septiembre de 2023, de Contralor, inscrita en esta Cámara de Comercio el 3 de octubre de 2023 con el No. 03023338 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Contralor Principal	Fabian Andres Romero Acosta	C.C. No. 79938093 T.P. No. 118310-T

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Contralor Suplente	Angela Rocio Garcia Barrera	C.C. No. 40046425 T.P. No. 99734-T

PODERES

Por Escritura Pública No. 1714 de la Notaría 30 de Bogotá D.C., del 06 de agosto de 2019, inscrita el 23 de Agosto de 2019 bajo el registro No 00042077 del libro V, compareció Elías Botero Mejía, identificado con C.C No. 79.146.216 expedida en Bogotá D.C en su calidad de Representante Legal como Gerente General de la sociedad de la referencia, por medio de la presente Escritura Pública, confiere poder general, amplio y suficiente a Jairo Antonio Moreno Monsalve, identificado con C.C No. 79.599.250 de Bogotá D.C y Tarjeta Profesional No. 156.625 del Consejo Superior de la Judicatura, quien tiene las atribuciones, responsabilidades y obligaciones señaladas en la ley para el contrato de mandato y para el sistema de salud, siempre que estén relacionadas con el desarrollo del objeto social de ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S.A.S. - EPS FAMISANAR S.A.S., que serán las que a continuación se indican: Para tal efecto el Apoderado General queda facultado para: 1.- Ejercer la representación legal de la sociedad ante las autoridades judiciales y administrativas tales como Audiencias de Conciliación Judicial y Extrajudicial, Absolución de Interrogatorios de Parte ante autoridades judiciales y administrativas de todo el territorio

nacional y Centros de Conciliación Públicos y Privados. 2.- Notificarse personalmente de las respectivas decisiones proferidas en los procesos que se adelanten contra ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD, FAMISANAR S.A.S. - EPS FAMISANAR S.A.S., o en aquellos originados por la misma ante las jurisdicciones ordinaria, contencioso administrativa y jurisdiccional. 3.- Interponer los recursos ordinarios y extraordinarios procedentes contra las providencias dictadas en los procesos antes mencionados. 4.- Conciliar y transigir en los procesos judiciales, extrajudiciales y jurisdicciánales3 que se adelanten a favor y en contra de ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD que se adelanten a favor y en contra de ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S.A.S. - EPS FAMISANAR S.A.S. 5.- Notificarse personalmente de las respectivas decisiones proferidas en los procesos que se adelanten contra ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S.A.S. - EPS FAMISANAR S.A.S., o en aquellos originados por la misma ante las jurisdicciones ordinaria, contencioso administrativa y jurisdiccional. 6.- Todas las facultades anteriormente señaladas y aquellas generales y comunes al mandato conferido podrán ser sustituidas por el apoderado general cuando este lo estime conveniente y necesario. Cláusula tercera. Limitaciones y prohibiciones. Conforme con las normas legales, queda prohibido al mandatario y apoderado: 1.- Adquirir para sí, directamente o con el concurso de un tercero, bienes o haberes de la sociedad o venderle bienes o servicios propios o de personas vinculadas hasta el tercer grado de consanguinidad, afinidad o único civil, salvo autorización expresa y por escrito del representante legal de la compañía. Parágrafo: En general, el mandatario solamente está facultado para realizar única y exclusivamente lo encomendado en este mandato, y no podrá extralimitarse en ninguna función por analogía o figura diferente, ni a quien este sustituya las facultades conferidas en el marco y ejercicio del presente poder.

Por Escritura Pública No. 2264 del 08 de noviembre de 2022, otorgada en la Notaría 30 de Bogotá D.C., registrada en esta Cámara de Comercio el 22 de Noviembre de 2022, con el No. 00048601 del libro V, la persona jurídica confirió poder general, amplio y suficiente a Sandra Milena García Bernal, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.332.771 de Bogotá D.C., y Tarjeta Profesional No. 195.267 del Consejo Superior de la Judicatura, quien tiene las atribuciones, responsabilidades y obligaciones señaladas en la ley para el contrato de mandato y para el sistema de salud, siempre que estén relacionadas con el desarrollo del objeto social de ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S.A.S. - EPS FAMISANAR S.A.S., con NIT. 830.003.564-7 que

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de noviembre de 2023 Hora: 14:45:23
Recibo No. AB23890981
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23890981A888E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

serán las que a continuación se indican: Para tal efecto el Apoderado General queda facultado para: 1. Ejercer la representación legal de la sociedad ante las autoridades judiciales y administrativas tales como Audiencias de Conciliación Judicial y Extrajudicial, Absolución de Interrogatorios de Parte ante autoridades judiciales y administrativas de todo el territorio nacional y Centros de Conciliación Públicos y Privados. 2. Notificarse personalmente de las respectivas decisiones proferidas en los procesos que se adelanten contra ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S.A.S. - EPS FAMISANAR S.A.S., con NIT. 830.003.564-7, o en aquellos originados por la misma ante las jurisdicciones ordinaria, contencioso administrativa y jurisdiccional. 3. Interponer los recursos ordinarios y extraordinarios procedentes contra las providencias dictadas en los procesos antes mencionados. 4. Conciliar y transigir en los procesos judiciales, extrajudiciales y jurisdiccionales que se adelanten a favor y en contra de ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S.A.S. - EPS FAMISANAR S.A.S., con NIT. 830.003.564-7. 5. Notificarse personalmente de las respectivas decisiones proferidas en los procesos que se adelanten contra ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S.A.S. - EPS FAMISANAR S.A.S., con NIT. 830.003.564-7, o en aquellos originados por la misma ante las jurisdicciones ordinaria, contencioso administrativa y jurisdiccional. 6. Todas las facultades anteriormente señaladas y aquellas generales y comunes al mandato conferido podrán ser sustituidas por el apoderado general cuando este lo estime conveniente y necesario. Conforme con las normas legales, queda prohibido al mandatario y apoderado: I. Adquirir para sí, directamente o con el concurso de un tercero, bienes haberes de la sociedad o venderle bienes o servicios propios o de personas vinculadas hasta el tercer grado de consanguinidad, afinidad o único civil, salvo autorización expresa y por escrito del representante legal de la compañía. Parágrafo: En general, el mandatario solamente está facultado para realizar única y exclusivamente lo encomendado en este mandato, y no podrá extralimitarse en ninguna función por analogía o figura diferente, ni a quien este sustituya las facultades conferidas en el marco y ejercicio del presente poder.

Por Escritura Pública No. 2828 del 26 de diciembre de 2022, otorgada en la Notaría 30 de Bogotá D.C., registrada en esta Cámara de Comercio el 06 de enero de 2023 con el No. 00049024 del libro V, la persona jurídica confirió poder general, amplio y suficiente a Leonora Cerdas Gómez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 63.353.537 de Bucaramanga, en su calidad de Gerente Técnico de Salud

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de noviembre de 2023 Hora: 14:45:23
Recibo No. AB23890981
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23890981A888E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Regional Centro, quien tiene las atribuciones, responsabilidades y obligaciones señaladas en la ley para el contrato de mandato y para el sistema de salud, siempre que estén relacionadas con el desarrollo del objeto social de ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S.A.S.-EPS FAMISANAR S.A.S., con NIT. 830,003.564-7, que serán las que a continuación se indican: Para tal efecto el Gerente Técnico de Salud de la Regional Centro queda facultado para: 1- Ejercer la representación legal de la sociedad en las zonales y municipios que integran la Regional Centro. 2-Asistir a diligencias judiciales como Representante Legal o como testigo técnico, acorde con las directrices de la secretaria general y Jurídica o la Dirección Jurídica. 3. Celebrar y ejecutar los actos y contratos de salud cuando se requiera y previa autorización de la Gerencia de Salud, los cuales estarán limitados hasta la cuantía autorizada para el Representante Legal Principal. 4-Dar cumplimiento a los fallos de tutela, requerimientos y desacatos notificados a EPS Famisanar SAS, en las zonales y municipios que integran la Regional Centro. 5-Ejercer la representación legal de la sociedad en la Regional Centro ante las autoridades judiciales y administrativas tales como Audiencias de Conciliación Judicial y Extrajudicial, Absolución de Interrogatorios de Parte ante autoridades judiciales y administrativas de todo el territorio nacional y Centros de Conciliación Públicos y Privados. 6.-Notificarse personalmente de las respectivas decisiones proferidas en los procesos que se adelanten contra ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S.A.S. EPS FAMISANAR S.A.S, con NIT. 830.003.564-7, o en aquellos originados por la misma ante las jurisdicciones ordinaria, contencioso administrativa y jurisdiccional. 7.-Interponer los recursos ordinarios y extraordinarios procedentes contra las providencias dictadas en los procesos antes mencionados. 8.- Conciliar y transigir en los procesos judiciales, extrajudiciales y jurisdiccionales que se adelanten a favor y en contra de ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S.A.S.-EPS FAMISANAR S.A.S., con NIT. 830.003 584-7. 9-Todas las facultades anteriormente señaladas y aquellas generales y comunes al mandato conferido podrán ser sustituidas por el apoderado general cuando esta lo estime conveniente y necesario. Limitaciones y Prohibiciones: Conforme con las normas legales, queda prohibido al mandatario y apoderado 1- Adquirir para sí, directamente o con el concurso de un tercero, bienes o haberes de la sociedad o venderle bienes o servicios propios o de personas vinculadas hasta el tercer grado de consanguinidad, afinidad o único civil, salvo autorización expresa y por escrito del representante legal de la compañía. En general, el

mandatario solamente está facultado para realizar Única y exclusivamente lo encomendado en este mandato, y no podrá extralimitarse en ninguna función por analogía o figura diferente, ni a quien este sustituya las facultades conferidas en el marco y ejercicio del presente poder.

Por Escritura Pública No. 2830 del 26 de diciembre de 2022, otorgada en la Notaría 30 de Bogotá D.C., registrada en esta Cámara de Comercio el 6 de Enero de 2023, con el No. 00049026 del libro V, la persona jurídica confirió poder general, amplio y suficiente a Jesica Lara Pedraza, identificado con la cédula de ciudadanía No. 57.436.092 de Santa Marta, en su calidad de Gerente Técnico de Salud Regional Norte, quien tiene las atribuciones, responsabilidades y obligaciones señaladas en la ley para el contrato de mandato y para el sistema de salud, siempre que estén relacionadas con el desarrollo del objeto social de ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S.A.S.-EPS FAMISANAR S.A.S., con NIT. 830,003.564-7, que serán las que a continuación se indican: Para tal efecto el Gerente Técnico de Salud de la Regional Norte queda facultado para: 1- Ejercer la representación legal de la sociedad en las zonales y municipios que integran la Regional Norte. 2-Asistir a diligencias judiciales como Representante Legal o como testigo técnico, acorde con las directrices de la secretaria general y Jurídica o la Dirección Jurídica. 3. Celebrar y ejecutar los actos y contratos de salud cuando se requiera y previa autorización de la Gerencia de Salud, los cuales estarán limitados hasta la cuantía autorizada para el Representante Legal Principal. 4-Dar cumplimiento a los fallos de tutela, requerimientos y desacatos notificados a EPS Famisanar SAS, en las zonales y municipios que integran la Regional Norte. 5-Ejercer la representación legal de la sociedad en la Regional Norte ante las autoridades judiciales y administrativas tales como Audiencias de Conciliación Judicial y Extrajudicial, Absolución de Interrogatorios de Parte ante autoridades judiciales y administrativas de todo el territorio nacional y Centros de Conciliación Públicos y Privados. 6.-Notificarse personalmente de las respectivas decisiones proferidas en los procesos que se adelanten contra ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S.A.S. EPS FAMISANAR S.A.S, con NIT. 830.003.564-7, o en aquellos originados por la misma ante las jurisdicciones ordinaria, contencioso administrativa y jurisdiccional. 7.-Interponer los recursos ordinarios y extraordinarios procedentes contra las providencias dictadas en los procesos antes mencionados. 8.- Conciliar y transigir en los procesos judiciales, extrajudiciales y jurisdiccionales que se adelanten a

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de noviembre de 2023 Hora: 14:45:23
Recibo No. AB23890981
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23890981A888E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

favor y en contra de ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S.A.S.-EPS FAMISANAR S.A.S., con NIT. 830.003 584-7. 9-Todas las facultades anteriormente señaladas y aquellas generales y comunes al mandato conferido podrán ser sustituidas por el apoderado general cuando esta lo estime conveniente y necesario. Limitaciones y Prohibiciones: Conforme con las normas legales, queda prohibido al mandatario y apoderado 1- Adquirir para sí, directamente o con el concurso de un tercero, bienes o haberes de la sociedad o venderle bienes o servicios propios o de personas vinculadas hasta el tercer grado de consanguinidad, afinidad o único civil, salvo autorización expresa y por escrito del representante legal de la compañía. En general, el mandatario solamente está facultado para realizar Única y exclusivamente lo encomendado en este mandato, y no podrá extralimitarse en ninguna función por analogía o figura diferente, ni a quien este sustituya las facultades conferidas en el marco y ejercicio del presente poder.

Por Escritura Pública No. 2825 del 26 de diciembre de 2022, otorgada en la Notaría 30 de Bogotá D.C. , registrada en esta Cámara de Comercio el 10 de Enero de 2023, con el No. 00049047 del libro V, la persona jurídica confirió poder general, amplio y suficiente a German Ignacio Bastidas Andrade, identificado con la cédula de ciudadanía número 80.041.178 de Bogotá, en su calidad de Gerente Regional Sur, con el fin de realizar todas las operaciones, actos y contratos hasta el límite que establecen los Estatutos Societarios y atendiendo a los manuales y procedimientos internos establecidos por la entidad. La precitada regional está conformada por los Departamentos: Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Valle del Cauca, Nariño y Huila. El presente poder se extenderá a los demás municipios, establecimientos de comercio, agencias y sucursales que posteriormente sean integrados a ésta regional. Extensión y límites del poder conferido. Se le confiere por medio de este instrumento poder general, amplio y suficiente al mandatario, quien tiene las atribuciones, responsabilidades y obligaciones señaladas en la ley para el contrato de mandato y para el sistema de salud, siempre que estén relacionadas con el desarrollo del objeto social de ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S.A.S.- EPS FAMISANAR S.A.S., con NIT. 836.003.564-7, que serán las que a continuación se indican: Para tal efecto el Gerente Regional Sur queda facultado para: 1. Ejercer la representación legal de la sociedad en la Regional Sur 2.- Celebrar y ejecutar los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social a que se relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la sociedad en la

Regional Sur. Requerirá autorización previa de la Gerencia General y la Junta Directiva 3.- Dar cumplimiento a los fallos emitidos por las autoridades Judiciales y Administrativas 4- Dar cumplimiento a los fallos de tutela y requerimientos notificados a EPS Famisanar SAS. 5-Ejercer la representación legal de la sociedad en la Regional Sur ante las autoridades judiciales y administrativas tales como Audiencias de Conciliación Judicial y Extrajudicial, Absolución de Interrogatorios de Parte ante autoridades judiciales y administrativas de todo el territorio nacional y Centros de Conciliación Públicos y Privados-6.-Notificarse personalmente de las respectivas decisiones proferidas en los procesos que se adelanten contra ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S.A.S. - EPS FAMISANAR S.A.S., con NIT. 830.003.564-7; o en aquellos originados por la misma ante las jurisdicciones ordinaria, contencioso administrativa y jurisdiccional. 7.-Interponer los recursos ordinarios y extraordinarios procedentes contra las providencias dictadas en los procesos antes mencionados. 8.- Conciliar y transigir en los procesos judiciales, extrajudiciales y jurisdiccionales que se adelanten a favor y en contra de ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S.A.S.-EPS FAMISANAR S.A.S., con NIT. 830.003.564-7.- 9.- Notificarse personalmente de las respectivas decisiones proferidas en los procesos que se adelanten contra ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S.A.Ş. - EPS FAMISANAR S.A.S., con NIT. 830.003.564-7, a en aquellos originados por la misma ante las jurisdicciones ordinaria, contencioso administrativa y jurisdiccional. 10.-Todas las facultades anteriormente señaladas y aquellas generales y comunes al mandato conferido podrán ser sustituidas por el apoderado general cuando este lo estime conveniente y necesario. Conforme con las normas legales, queda prohibido al mandatario y apoderado: 1.- Adquirir para si, directamente o con el concurso de un tercero, bienes o haberes de la sociedad o venderle bienes a servicios propios o de personas vinculadas hasta el tercer grado de consanguinidad, afinidad o único civil, salvo autorización expresa y por escrito del representante legal de la compañía. Parágrafo: En general, el mandatario solamente está facultado para realizar única y exclusivamente lo encomendado en este mandato, y no podrá extralimitarse en ninguna función por analogía o figura diferente, ni a quien este sustituya las facultades conferidas en el marco y ejercicio del presente poder.

Por Escritura Pública No. 2826 del 26 de diciembre de 2022, otorgada en la Notaría 30 de Bogotá D.C., registrada en esta Cámara de Comercio el 10 de enero de 2023 con el No. 00049046 del libro V, la

persona jurídica confirió poder general, amplio y suficiente a Elkin Fabian Silva Vargas, identificado con la cédula de ciudadanía número 86.061.139 de Villavicencio, en su calidad de Gerente Regional Norte, con el fin de realizar todas las operaciones, actos y contratos hasta el límite que establecen los Estatutos Societarios y atendiendo a las manuales y procedimientos internos establecidos por la entidad. La precitada regional está conformada por las Departamentos: Atlántica, Bolívar, Magdalena, Cesar y Santander. El presente poder se extenderá a los demás municipios, establecimientos de comercio agencias y sucursales que posteriormente sean integrados a ésta regional. Extensión y límites del poder conferido. Se le confiere por medio de este instrumento poder general, amplio y suficiente al mandatario, quien tiene las atribuciones, responsabilidades y obligaciones señaladas en la ley para el contrato de mandato y para el sistema de salud, siempre que estén relacionadas con el desarrollo del objeto social de ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S.A.S.- EPS FAMISANAR S.A.S., con NIT. 830.003.564-7, que serán las que a continuación se indican: Para tal efecto el Gerente Regional Norte queda facultado para: 1.- Ejercer la representación legal de la sociedad en la Regional Norte 2.- Celebrar y ejecutar los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la sociedad en la Regional Norte. Requerirá autorización previa de la Gerencia General y la Junta Directiva. 3.- Dar cumplimiento a los fallos emitidos por las autoridades Judiciales y Administrativas- 4.- Dar cumplimiento a los fallos de tutela y requerimientos notificados a EPS Famisanar SAS. 5.-Ejercer la representación legal de la sociedad en la Regional Norte ante las autoridades judiciales y administrativas tales como Audiencias de Conciliación Judicial y Extrajudicial, Absolución de Interrogatorios de Parte ante autoridades judiciales y administrativas de todo el territorio nacional y Centros de Conciliación Públicos y Privados 6.-Notificarse personalmente de las respectivas decisiones proferidas en los procesos que se adelanten contra ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S.A.S.- EPS FAMISANAR S.A.S., con NIT. 830.003.564-7, o en aquellos originados por la misma ante las jurisdicciones ordinaria, contencioso administrativa y jurisdiccional. 7.-Interponer los recursos ordinarios y extraordinarios procedentes contra las providencias dictadas en los procesos antes mencionados. 8.- Conciliar y transigir en los procesos judiciales, extrajudiciales y jurisdiccionales que se adelanten a favor y en contra de ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S.A.S. EPS FAMISANAR S.A.S., con NIT. 830.003.564-7. 9.- Notificarse

personalmente de las respectivas decisiones proferidas en los procesos que se adelanten contra ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S.A.S. EPS FAMISANAR S.A.S., con NIT. 830.003.564-7, o en aquellos originados por la misma ante las jurisdicciones ordinaria, contencioso administrativa y jurisdiccional. 10-Todas las facultades anteriormente señaladas y aquellas generales y comunes al mandato conferido podrán ser sustituidas por el apoderado general cuando este lo estime conveniente y necesario. Conforme con las normas legales, queda prohibido al mandatario y apoderado: 1.- Adquirir para sí, directamente o con el concurso do un tercero. bienes a haberes de la sociedad o venderle bienes o servicios propios o de personas vinculadas hasta el tercer grado de consanguinidad, afinidad o único civil, salvo autorización expresa y por escrito del representante legal de la compañía. Parágrafo: En general, el mandatario solamente está facultado para realizar única y exclusivamente lo encomendado en este mandato, y no podrá extra limitarse en ninguna función por analogía o figura diferente, ni a quien este sustituya las facultades conferidas en el marco y ejercicio del presente poder.

Por Escritura Pública No. 0282 del 23 de febrero de 2023, otorgada en la Notaría 30 de Bogotá D.C., registrada en esta Cámara de Comercio el 31 de marzo de 2023, con el No. 00049590 del libro V, la persona jurídica confirió poder general, amplio y suficiente a Laura Marcela Quinchanegua Pulido, mayor de edad, vecino y domiciliado en esta ciudad de nacionalidad colombiana, quien se identifica con la cédula de ciudadanía número 1018405472 de Bogotá D.C. y Tarjeta Profesional No. 239567 del Consejo Superior de la Judicatura, para que en nuestro nombre y representación ejecute y celebre los siguientes: confiere poder para la representación de entidad en toda clase de acciones judiciales, extrajudiciales, jurisdiccionales, administrativas y policivas. Extensión y límites del poder conferido. Se le confiere por medio de este instrumento PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE al mandatario, quien tiene las atribuciones, responsabilidades y obligaciones señaladas en la ley para el contrato de mandato y para el sistema de salud, siempre que estén relacionadas con el desarrollo del objeto social de ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S.A.S. - EPS FAMISANAR S.A.S., con NIT. 830.003.564-7, que serán las que a continuación se indican: Para tal efecto el Apoderado General queda facultado para: 1.-Ejercer la representación legal de la sociedad ante las autoridades judiciales y administrativas tales como Audiencias de Conciliación Judicial y Extrajudicial, Absolución de Interrogatorios de Parte ante autoridades judiciales y

administrativas de todo el territorio nacional y Centros de Conciliación Públicos y Privados. 2.- Notificarse personalmente de las respectivas decisiones proferidas en los procesos que se adelanten contra ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S.A.S. - EPS FAMISANAR S.A.S., con NIT. 830.003.564-7, o en aquellos originados por la misma ante las jurisdicciones ordinaria, contencioso administrativa y jurisdiccional. 3.- Interponer los recursos ordinarios y extraordinarios procedentes contra las providencias dictadas en los procesos antes mencionados. 4.- Conciliar y transigir en los procesos judiciales, extrajudiciales y jurisdiccionales que se adelanten a favor y en contra de ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S.A.S. - EPS FAMISANAR S.A.S., con NIT. 830.003.564-7. 5.- Todas las facultades anteriormente señaladas y aquellas generales y comunes al mandato conferido podrán ser sustituidas por el apoderado general cuando este lo estime conveniente y necesario. Limitaciones y Prohibiciones. Conforme con las normas legales, queda prohibido al mandatario y apoderado: 1.- Adquirir para sí, directamente o con el concurso de un tercero, bienes o haberes de la sociedad o venderle bienes o servicios propios o de personas vinculadas hasta el tercer grado de consanguinidad, afinidad o único civil, salvo autorización expresa y por escrito del representante legal de la compañía. Parágrafo: En general, el mandatario solamente está facultado para realizar única y exclusivamente lo encomendado en este mandato, y no podrá extralimitarse en ninguna función por analogía o figura diferente, ni a quien este sustituya las facultades conferidas en el marco y ejercicio del presente poder.

Por Escritura Pública No. 0786 del 5 de mayo de 2023, otorgada en la Notaría 30 de Bogotá D.C., registrada en esta Cámara de Comercio el 30 de Mayo de 2023, con el No. 00050007 del libro V, la persona jurídica confirió poder general, amplio y suficiente a Juan Carlos Vera Rúgeles, quien se identifica con la cédula de ciudadanía número 80.513.483 de Bogotá, en su calidad de Gerente Técnico de salud de la regional Bogotá para que en nuestro nombre y representación ejecute y celebre los siguientes: Clausula Primera: Que para, efectos de este instrumento Santiago Eugenio Barragán. Fonseca, obra en. calidad de Representante Legal como Gerente General de la sociedad por acciones simplificada denominada ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S.A.S. - EPS FAMISANAR S.A.S., con NIT. 830.003.564-7 conforme lo acredita con el Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio de Bogotá, que se anexa al presente documento para su protocolización. Parágrafo Primero: Que facultado por los Estatutos

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de noviembre de 2023 Hora: 14:45:23
Recibo No. AB23890981
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23890981A888E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

de la sociedad para otorgar mandatos extrajudiciales y en su carácter de Representante Legal Gerente General de la sociedad y conforme con lo previsto en los artículos 114, 1262,1263,1266,1267, 1268,1269,1271,1273,1274 1279, a 1286 del Código del Comercio confiere poder para la representación de entidad en toda clase de acciones judiciales, extrajudiciales, jurisdiccionales, administrativas y policivas. Clausula Segunda: Extensión y límites del poder conferido. Se le confiere por medio de este instrumento Poder General Amplio Y Suficiente al mandatario, quien tiene las atribuciones, responsabilidades y obligaciones señaladas en la ley para el contrato de mandato y para el sistema de salud, siempre que estén relacionadas con el desarrollo del objeto social de ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S.A.S. - EPS FAMISANAR S.A.S., con NIT. 830.003.564-7, que serán las que a continuación se indican: Para tal efecto el Gerente Técnico de Salud de la Regional Bogotá queda facultado para:1.- Ejercer la representación legal de la sociedad en la Regional Bogotá 2.- Asistir a diligencias judiciales como Representante Legal o como testigo técnico, acorde con las directrices de la Secretaría General y Jurídica o la Dirección Jurídica. 3. Celebrar y ejecutar los actos y contratos de salud cuando se requiera y previa autorización de la Gerencia de Salud, los cuales estarán limitados hasta la cuantía autorizada para el Representante Legal Principal.4.- Dar cumplimiento a los fallos de tutela, requerimientos y desacatos notificados a EPS FAMISANAR SAS, en la Regional Bogotá.5.-Ejercer la representación legal de la sociedad en la ciudad de Bogotá ante las autoridades judiciales y administrativas tales como Audiencias de Conciliación Judicial y Extrajudicial, Absolución de Interrogatorios de Parte ante autoridades judiciales y administrativas. De todo el territorio nacional y Centros de Conciliación Públicos y Privados 6.-Notificarse personalmente de las respectivas decisiones proferidas en procesos que se adelanten contra ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S.A.S. - EPS FAMISANAR S.A.S., con NIT. 830.003.564-7, o en aquellos originados por la misma ante las jurisdicciones ordinaria, contencioso administrativa y jurisdiccional. 7.-lnterponer los recursos ordinarios y extraordinarios procedentes contra las providencias dictadas en los procesos antes mencionados. 8.- Conciliar y transigir en los procesos Judiciales, extrajudiciales y jurisdiccionales que se adelanten, a favor y en contra de ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S.A.S. EPS FAMISANAR S.AS NIT. 830.003564-7 9. Todas las facultades anteriormente señaladas y aquellas generales y comunes al mandato conferido podrán ser

sustituidas por el apoderado general cuando este lo estime conveniente y necesario. Clausula Tercera Limitaciones Y Prohibiciones., Conforme con las normas legales, queda prohibido al mandatario y apoderado: I.- Adquirir para sí, directamente o con el concurso de un tercero, bienes o haberes de la sociedad o venderle bienes o servicios propios o de personas vinculadas hasta el tercer grado de consanguinidad, afinidad, o único civil, salvo autorización expresa y por escrito del representante legal de la compañía. Parágrafo: En general, el mandatario solamente está facultado para realizar única y exclusivamente lo encomendado en este mandato, y no podrá extralimitarse en ninguna función por analogía o figura diferente, ni a quien este sustituya las facultades conferidas en el marco y ejercicio del presente poder.

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0003220 del 22 de diciembre de 1997 de la Notaría 15 de Bogotá D.C.	00616479 del 30 de diciembre de 1997 del Libro IX
E. P. No. 0003989 del 22 de diciembre de 1998 de la Notaría 9 de Bogotá D.C.	00662192 del 24 de diciembre de 1998 del Libro IX
E. P. No. 0000382 del 18 de febrero de 2003 de la Notaría 32 de Bogotá D.C.	00869186 del 5 de marzo de 2003 del Libro IX
E. P. No. 0003139 del 15 de diciembre de 2005 de la Notaría 32 de Bogotá D.C.	01027346 del 20 de diciembre de 2005 del Libro IX
E. P. No. 0004886 del 7 de julio de 2008 de la Notaría 24 de Bogotá D.C.	01228196 del 15 de julio de 2008 del Libro IX
E. P. No. 4448 del 18 de agosto de 2009 de la Notaría 24 de Bogotá D.C.	01322040 del 26 de agosto de 2009 del Libro IX
E. P. No. 389 del 25 de enero de 2010 de la Notaría 24 de Bogotá D.C.	01357258 del 28 de enero de 2010 del Libro IX
E. P. No. 2960 del 29 de noviembre	01434539 del 9 de diciembre de

de 2010 de la Notaría 30 de Bogotá D.C.	2010 del Libro IX
E. P. No. 2959 del 22 de octubre de 2015 de la Notaría 30 de Bogotá D.C.	02030924 del 27 de octubre de 2015 del Libro IX
E. P. No. 1788 del 30 de noviembre de 2015 de la Notaría 58 de Bogotá D.C.	02043038 del 9 de diciembre de 2015 del Libro IX
Acta No. 245 del 4 de abril de 2017 de la Junta de Socios	02254257 del 28 de agosto de 2017 del Libro IX
Acta No. 02 del 19 de septiembre de 2017 de la Asamblea de Accionistas	02410515 del 28 de diciembre de 2018 del Libro IX
Acta No. 7 del 27 de noviembre de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02475153 del 11 de junio de 2019 del Libro IX
Acta No. 17 del 15 de abril de 2021 de la Asamblea de Accionistas	02793747 del 17 de febrero de 2022 del Libro IX
Acta No. 18 del 11 de junio de 2021 de la Asamblea de Accionistas	02795071 del 21 de febrero de 2022 del Libro IX
Acta No. 22 del 12 de julio de 2022 de la Asamblea de Accionistas	02910469 del 16 de diciembre de 2022 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de noviembre de 2023 Hora: 14:45:23
Recibo No. AB23890981
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23890981A888E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 8430
Actividad secundaria Código CIIU: 8699

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s)en esta Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre: EPS FAMISANAR SAS C.C EL EDEN
Matrícula No.: 02159961
Fecha de matrícula: 18 de noviembre de 2011
Último año renovado: 2023
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Av Cra 72 Nº 12 B - 18 L. 2-084 Centro Cial El Eden
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: EPS FAMISANAR SAS SOACHA
Matrícula No.: 02159962
Fecha de matrícula: 18 de noviembre de 2011
Último año renovado: 2023
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Cr 4 Este No. 31- 40
Municipio: Soacha (Cundinamarca)

Nombre: EPS FAMISANAR SAS SUBA ACUARELA
Matrícula No.: 02159970
Fecha de matrícula: 18 de noviembre de 2011
Último año renovado: 2023
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Cl 145 No 92 - 30
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: EPS FAMISANAR SAS FUSAGASUGA
Matrícula No.: 02161237
Fecha de matrícula: 23 de noviembre de 2011
Último año renovado: 2023

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de noviembre de 2023 Hora: 14:45:23
Recibo No. AB23890981
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23890981A888E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Cl 8 No 25 - 42
Municipio: Fusagasugá (Cundinamarca)

Nombre: EPS FAMISANAR ZIPAQUIRA
Matrícula No.: 02161241
Fecha de matrícula: 23 de noviembre de 2011
Último año renovado: 2023
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Tv 18 No 7 D - 81
Municipio: Zipaquirá (Cundinamarca)

Nombre: EPS FAMISANAR SAS RESTREPO
Matrícula No.: 02296384
Fecha de matrícula: 20 de febrero de 2013
Último año renovado: 2023
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Cr 14 No. 3 - 61 Sur
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: EPS FAMISANAR SAS UBATE
Matrícula No.: 02798969
Fecha de matrícula: 29 de marzo de 2017
Último año renovado: 2023
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Cr 7 No 7 - 75
Municipio: Ubaté (Cundinamarca)

Nombre: EPS FAMISANAR SAS - CHIA
Matrícula No.: 03091471
Fecha de matrícula: 29 de marzo de 2019
Último año renovado: 2023
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Cr 9 No. 10 - 74
Municipio: Chía (Cundinamarca)

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de noviembre de 2023 Hora: 14:45:23
Recibo No. AB23890981
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23890981A888E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 3.936.498.326.155
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 8430

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 8 de febrero de 2021. Fecha de envío de información a Planeación : 3 de octubre de 2023. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de noviembre de 2023 Hora: 14:45:23
Recibo No. AB23890981
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23890981A888E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



MEMORIAL PAR REGISTRAR DRA GONZALEZ FLOREZ RV: Memorando PCSJM23-132

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

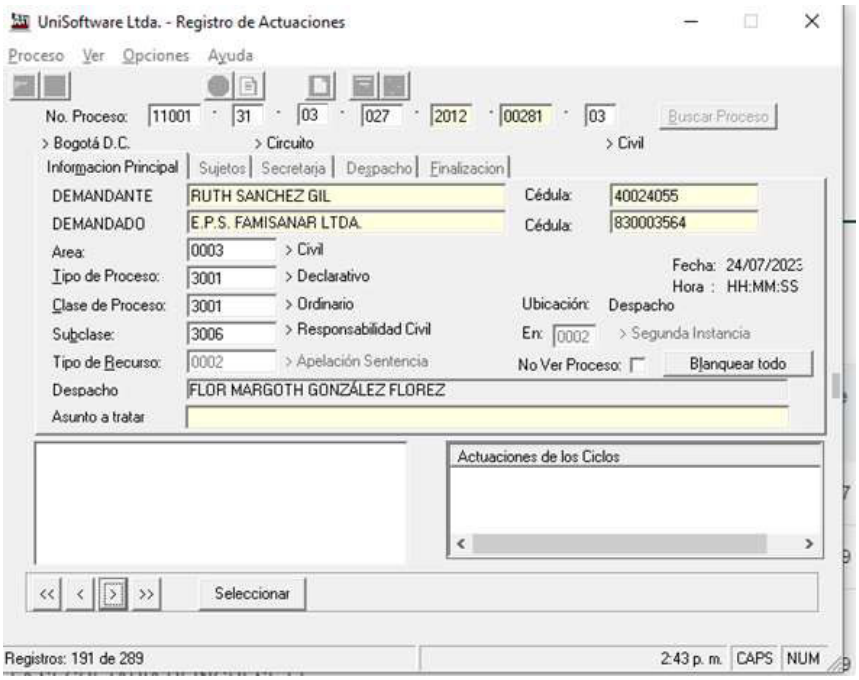
Mié 15/11/2023 3:08 PM

Para:2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>

3 archivos adjuntos (2 MB)

Oficio 1165 Rta Agente Interventor FAMISANAR.pdf; Memorando 132.pdf; Res. SUPERSALUD Toma bienes FAMISANAR.pdf;

MEMORIAL PAR REGISTRAR DRA GONZALEZ FLOREZ



Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Notificaciones Consejo Seccional Judicatura Sala Administrativa - Bogotá - Bogotá D.C. <notificacioncsjsabta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: viernes, 27 de octubre de 2023 14:15
Para: Coordinación Centro Servicios Administrativo Ejecución Penas Medidas Seguridad - Bogotá - Bogotá D.C. <coorcsejcpbt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Centro Servicios Administrativos Juzgado Circuito Penal Especial - Bogotá - Bogotá D.C. <cserjesbt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Centro Servicios Administrativos Penal Especializado - Cundinamarca <cserjescun@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Centro Servicios Penales Circuito Especializados Extinción Dominio - Bogotá - Bogotá D.C. <cserjesextdombt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Centro Servicios Judiciales Juzgado Penales Adolescentes - Bogotá - Bogotá D.C. <cserjpadobta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Centro Servicios Convida Juzgados Penales Municipales - Bogotá - Bogotá D.C. <cserjpmconvidabta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Coordinación Centro Servicios Sistema Penal Acusatorio - Paloquemao - Bogotá - Bogotá D.C. <coorcserspabta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Coordinador Oficina Ejecución Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <coors01ejecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Coordinador Centro Servicios Ejecución Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <coocserejeccbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Oficina Apoyo Juzgados Ejecución Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <ofapjefbog@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Apoyo Coordinación Centro Servicios - Paloquemao - Bogotá - Bogotá D.C. <coordinacionapoyocsj@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Oficina Apoyo Juzgados Administrativos - Bogotá - Bogotá D.C. <ofiapoyojadmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; j01pqccmckbtbta@cendoj.ramajudicial.gov.co <j01pqccmckbtbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; j02pqccmckbtbta@cendoj.ramajudicial.gov.co <j02pqccmckbtbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; j43pccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co <j43pccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; j44pccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co <j44pccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 01 Pequeñas Causas Competencia Múltiple Civil - Bogotá - Bogotá D.C. <j01pqccmcbtbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 02 Pequeñas Causas Competencia Múltiple Des - Bogotá - Bogotá D.C. <j02pqccmcbtbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 03 Pequeñas Causas Competencia Múltiple Civil - Bogotá - Bogotá D.C. <j03pqccmsubabt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 04 Pequeñas Causas Competencia Múltiple - Bogotá - Bogotá D.C. <j04pqccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 05 Pequeñas Causas Competencia Múltiple - Bogotá - Bogotá D.C. <j05pqccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 06 Pequeñas Causas Competencia Múltiple - Bogotá - Bogotá D.C. <j06pqccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 07 Pequeñas Causas Competencia Múltiple - Bogotá - Bogotá D.C. <j07pqccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 08 Pequeñas Causas Competencia Múltiple - Bogotá - Bogotá D.C. <j08pccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 09 Pequeñas Causas Competencia Múltiple - Bogotá - Bogotá D.C.

<j09pqccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 10 Pequeñas Causas Competencia Múltiple - Bogotá - Bogotá D.C.
<j10pqccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 11 Pequeñas Causas Competencia Múltiple - Bogotá - Bogotá D.C.
<j11pqccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 12 Pequeñas Causas Competencia Múltiple - Bogotá - Bogotá D.C.
<j12pqccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 13 Pequeñas Causas Competencia Múltiple - Bogotá - Bogotá D.C.
<j13pqccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 14 Pequeñas Causas Competencia Múltiple - Bogotá - Bogotá D.C.
<j14pqccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 15 Pequeñas Causas Competencia Múltiple - Bogotá - Bogotá D.C.
<j15pqccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 16 Pequeñas Causas Competencia Múltiple - Bogotá - Bogotá D.C.
<j16pqccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 17 Pequeñas Causas Competencia Múltiple - Bogotá - Bogotá D.C.
<j17pqccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 18 Pequeñas Causas Competencia Múltiple - Bogotá - Bogotá D.C.
<j18pqccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 19 Pequeñas Causas Competencia Múltiple - Bogotá - Bogotá D.C.
<j19pqccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 20 Pequeñas Causas Competencia Múltiple - Bogotá - Bogotá D.C.
<j20pqccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 21 Pequeñas Causas Competencia Múltiple - Bogotá - Bogotá D.C.
<j21pqccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 22 Pequeñas Causas Competencia Múltiple - Bogotá - Bogotá D.C.
<j22pqccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 23 Pequeñas Causas Competencia Múltiple - Bogotá - Bogotá D.C.
<j23pqccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 24 Civil Municipal Descongestión - Bogotá - Bogotá D.C. <j24pqccmbt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 27 Pequeñas Causas Competencia Múltiple - Bogotá - Bogotá D.C. <j27pqccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 28 Pequeñas Causas Competencia Múltiple - Bogotá - Bogotá D.C. <j28pqccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 29 Pequeñas Causas Competencia Múltiple - Bogotá - Bogotá D.C. <j29pccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 30 Pequeñas Causas Competencia Múltiple - Bogotá - Bogotá D.C.
<j30pccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 31 Pequeñas Causas Competencia Múltiple - Bogotá - Bogotá D.C.
<j31pccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 32 Pequeñas Causas Competencia Múltiple - Bogotá - Bogotá D.C.
<j32pccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 33 Pequeñas Causas Competencia Múltiple - Bogotá - Bogotá D.C.
<j33pccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 34 Pequeñas Causas Competencia Múltiple - Bogotá - Bogotá D.C.
<j34pccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 35 Pequeñas Causas Competencia Múltiple - Bogotá - Bogotá D.C.
<j35mpalpcbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 36 Pequeñas Causas Competencia Múltiple - Bogotá - Bogotá D.C.
<j36pccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 37 Pequeñas Causas Competencia Múltiple - Bogotá - Bogotá D.C.
<j37pccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 38 Pequeñas Causas Competencia Múltiple - Bogotá - Bogotá D.C.
<j38pccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 39 Pequeñas Causas Competencia Múltiple - Bogotá - Bogotá D.C.
<j39pccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 40 Pequeñas Causas Competencia Múltiple - Bogotá - Bogotá D.C.
<j40pccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 41 Pequeñas Causas Competencia Múltiple - Bogotá - Bogotá D.C.
<j41pccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 42 Pequeñas Causas Competencia Múltiple - Bogotá - Bogotá D.C.
<j42pccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 69 Pequeñas Causas Competencia Múltiple - Bogotá - Bogotá D.C.
<j69pqccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 70 Pequeñas Causas Competencia Múltiple - Bogotá - Bogotá D.C.
<j70pqccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 71 Pequeñas Causas Competencia Múltiple - Bogotá - Bogotá D.C.
<j71pqccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 72 Pequeñas Causas Competencia Múltiple - Bogotá - Bogotá D.C.
<j72pqccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 73 Pequeñas Causas Competencia Múltiple - Bogotá - Bogotá D.C.
<j73pqccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 74 Pequeñas Causas Competencia Múltiple - Bogotá - Bogotá D.C.
<j74pqccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 75 Pequeñas Causas Competencia Múltiple - Bogotá - Bogotá D.C.
<j75pqccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 751 Pequeñas Causas Competencia Múltiple Civil - Bogotá - Bogotá D.C.
<j01pqccmkbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 752 Pequeñas Causas Competencia Múltiple Civil - Bogotá - Bogotá D.C.
<j02pqccmkbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Atención Virtual Oficina Ejecución Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C.
<aviroejecctobta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Coordinador Centro Servicios Ejecución Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C.
<coocserejeccbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 01 Civil Circuito Ejecución Sentencias - Bogotá - Bogotá D.C.
<j01ejeccbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 02 Civil Circuito Ejecución Sentencias - Bogotá - Bogotá D.C. <j02ejeccbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 03 Civil Circuito Ejecución Sentencias - Bogotá - Bogotá D.C. <j03ejeccbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 04 Civil Circuito Ejecución Sentencias - Bogotá - Bogotá D.C. <j04ejeccbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 05 Civil Circuito Ejecución Sentencias - Bogotá - Bogotá D.C.
<j05ejeccbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Coordinador Oficina Ejecución Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C.
<coors01ejecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 01 Civil Municipal Ejecución Sentencias - Bogotá - Bogotá D.C.
<j01ejecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 02 Civil Municipal Ejecución Sentencias - Bogotá - Bogotá D.C.
<j02ejecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 03 Civil Municipal Ejecución Sentencias - Bogotá - Bogotá D.C.
<j03ejecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 04 Civil Municipal Ejecución Sentencias - Bogotá - Bogotá D.C.
<j04ejecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 05 Civil Municipal Ejecución Sentencias - Bogotá - Bogotá D.C.
<j05ejecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 06 Civil Municipal Ejecución Sentencias - Bogotá - Bogotá D.C.
<j06ejecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 07 Civil Municipal Ejecución Sentencias - Bogotá - Bogotá D.C.
<j07ejecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 08 Civil Municipal Ejecución Sentencias - Bogotá - Bogotá D.C.
<j08ejecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 09 Civil Municipal Ejecución Sentencias - Bogotá - Bogotá D.C.
<j09ejecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 10 Civil Municipal Ejecución Sentencias - Bogotá - Bogotá D.C.
<j10ejecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 11 Civil Municipal Ejecución Sentencias - Bogotá - Bogotá D.C.
<j11ejecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 12 Civil Municipal Ejecución Sentencias - Bogotá - Bogotá D.C.
<j12ejecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 13 Civil Municipal Ejecución Sentencias - Bogotá - Bogotá D.C.
<j13ejecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 14 Civil Municipal Ejecución Sentencias - Bogotá - Bogotá D.C.
<j14ejecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 15 Civil Municipal Ejecución Sentencias - Bogotá - Bogotá D.C.
<j15ejecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 16 Civil Municipal Ejecución Sentencias - Bogotá - Bogotá D.C.
<j16ejecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 17 Civil Municipal Ejecución Sentencias - Bogotá - Bogotá D.C.
<j17ejecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 18 Civil Municipal Ejecución Sentencias - Bogotá - Bogotá D.C.
<j18ejecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 19 Civil Municipal Ejecución Sentencias - Bogotá - Bogotá D.C.
<j19ejecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 20 Civil Municipal Ejecución Sentencias - Bogotá - Bogotá D.C.
<j20ejecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Oficina Apoyo Juzgados Civiles Municipales Ejecución - Bogotá - Bogotá D.C.
<ofiapoyojcmejebta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; oficinaejecucion.2013@gmail.com <oficinaejecucion.2013@gmail.com>; j405cctobta@cendoj.ramajudicial.gov.co <j405cctobta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; j406cctobta@cendoj.ramajudicial.gov.co <j406cctobta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 01 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <ccto01bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 02 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <ccto02bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 03 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <j03cctobta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 04 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <ccto04bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 05 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C.

<ccto05bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 06 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <j06cctobta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 07 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <ccto07bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 08 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <ccto08bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 09 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <j09cctobt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 10 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <ccto10bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 11 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <ccto11bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 12 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <ccto12bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 13 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <ccto13bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 14 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <ccto14bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 15 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <ccto15bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 16 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <ccto16bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 17 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <ccto17bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 18 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <ccto18bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 19 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <ccto19bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 20 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <ccto20fbt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 21 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <ccto21bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 22 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <ccto22bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 23 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <ccto23bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 24 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <ccto24bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 25 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <ccto25bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 26 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <ccto26bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 27 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <ccto27bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 28 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <ccto28bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 29 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <ccto29bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 30 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <ccto30bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 31 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <ccto31bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 32 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <j32cctobta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 33 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <ccto33bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 34 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <ccto34bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 35 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <ccto35bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 36 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <ccto36bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 37 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <ccto37bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 38 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <ccto38bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 39 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <ccto39bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 40 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <ccto40bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 407 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <j407cctobta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 41 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <ccto41bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 42 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <ccto42bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 43 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <ccto43bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 44 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <j44cctobt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 45 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <j45cctobt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 46 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <j46cctobt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 47 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <j47cctobt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 48 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <j48cctobt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 49 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <j49cctobt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 50 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <j50cctobt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 51 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <j51cctobt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 52 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <j52cctobt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 53 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <j53cctobt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 54 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <j54cctobt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 55 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <j55cctobt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 56 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <j56cctobt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 01 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl01bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 02 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl02bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 03 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl03bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 04 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl04bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 05 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl05bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 06 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl06bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 07 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl07bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 08 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl08bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 09 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl09bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 10 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl10bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 11 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl11bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 12 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl12bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 13 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl13bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 14 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl14bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 15 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl15bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 16 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl16bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 17 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl17bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 18 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <j18cmpalbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 19 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl19bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 20 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl20bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 21 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl21bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 22 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl22bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 23 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl23bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 24 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl24bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 25 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl25bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 26 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl26bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 27 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl27bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 28 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl28bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 29 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl29bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 30 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl30bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 31 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl31bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 32 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl32bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 33 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <jcmpl33bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 34 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl34bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 35 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl35bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 36 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl36bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 37 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl37bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 38 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl38bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 39 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl39bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 40 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl40bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 41 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl41bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 42 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl42bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 43 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl43bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 44 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl44bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 45 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl45bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 46 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl46bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 47 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl47bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 48 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl48bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 49 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl49bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 50 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl50bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 51 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl51bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 52 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl52bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 53 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl53bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 54 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl54bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 55 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl55bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 56 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl56bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 57 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl57bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 58 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl58bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 59 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl59bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 60 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl60bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 61 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C.

<cmpl61bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 62 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl62bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 63 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl63bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 64 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl64bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 65 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl65bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 48 Pequeñas Causas Competencia Múltiple - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl66bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 67 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl67bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 68 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl68bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 69 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl69bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 70 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl70bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 71 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl71bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 72 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl72bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 73 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl73bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 74 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl74bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 75 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl75bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 76 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl76bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 77 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl77bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 78 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl78bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 79 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl79bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 62 Pequeñas Causas Competencia Múltiple - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl80bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 81 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl81bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 82 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl82bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 83 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl83bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 84 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl84bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 85 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl85bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 86 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl86bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 87 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <j87cmpalbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 88 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <j88cmpalbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 89 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <j89cmpalbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 90 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <j90cmpalbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 01 Pequeñas Causas Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <j01lpcbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 02 Pequeñas Causas Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <j02lpcbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 03 Pequeñas Causas Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <j03lpcbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 04 Pequeñas Causas Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <j04lpcbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 05 Pequeñas Causas Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <j05lpcbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 06 Pequeñas Causas Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <j06lpcbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 07 Pequeñas Causas Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <j07lpcbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 08 Pequeñas Causas Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <j08lpcbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 09 Pequeñas Causas Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <j09lpcbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 10 Pequeñas Causas Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <j10lpcbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 11 Pequeñas Causas Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <j11lpcbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 12 Pequeñas Causas Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <j12lpcbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 01 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia01bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 02 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia02bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 03 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia03bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 04 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia04bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 05 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia05bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 06 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia06bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 07 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia07bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 08 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia08bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 09 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia09bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 10 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia10bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 11 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia11bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 12 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia12bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 13 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia13bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 14 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia14bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 15 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia15bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 16 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia16bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 17 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia17bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 18 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia18bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 19 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia19bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 20 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia20bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 21 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia21bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 22 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia22bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 23 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia23bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 24 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia24bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 25 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia25bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 26 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia26bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 27 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia27bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 28 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia28bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 29 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia29bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 30 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia30bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 31 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia31bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 32 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia32bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 33 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia33bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 34 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia34bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 35 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia35bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 36 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia36bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 37 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia37bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Andrea Del Pilar Cetina Bayona <acetinab@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 01 Ejecución Asuntos Familia Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <j01ejefbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 02 Ejecución Asuntos Familia Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <j02ejefbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 03 Ejecución Asuntos Familia Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <j03ejefbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Oficina Apoyo Juzgados Ejecución Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <ofapjefbog@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 01 Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <jlato01@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 02 Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <jlato02@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 03 Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <jlato03@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 04 Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <jlato04@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 05 Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <j05labctobta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 06 Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <jlato06@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 07 Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <jlato07@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 08 Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <jlato08@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 09 Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <jlato09@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 10 Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <jlato10@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 11 Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <jlato11@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 12 Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <jlato12@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 13 Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <jlato13@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 14 Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <jlato14@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 15 Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <jlato15@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 16 Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <jlato16@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 17 Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <jlato17@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 18 Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <jlato18@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 19 Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <jlato19@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 20 Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <jlato20@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 21 Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <jlato21@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 22 Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <jlato22@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 23 Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <jlato23@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 24 Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <jlato24@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 25 Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <jlato25@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 26 Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <jlato26@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 27 Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <jlato27@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 28 Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <jlato28@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 29 Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <j29lctobta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 30 Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <j30lctobta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 31 Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <jlato31@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 32 Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <jlato32@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 33 Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <jlato33@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 34 Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <j34lctobta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 35 Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <j35lctobta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 36 Laboral - Bogotá -

Bogotá D.C. <j36lctobta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 37 Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <j37lctobta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 38 Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <jlato38@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 39 Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <jlato39@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 40 Circuito Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <j40ctolbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 41 Circuito Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <j41ctolbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 42 Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <jlato42@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 43 Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <jlato43@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 44 Circuito Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <j44ctolbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 45 Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <jlato45@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 46 Circuito Laboral - Bogotá - Bogotá D.C. <j46ctolbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; j47ctolbta@cendoj.ramajudicial.gov.co <j47ctolbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; des01sctscbta@cendoj.ramajudicial.gov.co <des01sctscbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; des02sctscbta@cendoj.ramajudicial.gov.co <des02sctscbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; des03sctscbta@cendoj.ramajudicial.gov.co <des03sctscbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; des04sctscbta@cendoj.ramajudicial.gov.co <des04sctscbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; des05sctscbta@cendoj.ramajudicial.gov.co <des05sctscbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; des06sctscbta@cendoj.ramajudicial.gov.co <des06sctscbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; des07sctscbta@cendoj.ramajudicial.gov.co <des07sctscbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Despacho 05 Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <des05ctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Despacho 06 Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <des06ctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Despacho 07 Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <des07ctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Despacho 08 Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <des08ctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Despacho 09 Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <des09ctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Despacho 10 Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <des10ctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Despacho 11 Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <des11ctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Despacho 12 Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <des12ctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Despacho 14 Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <des14ctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Despacho 15 Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <des15ctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Despacho 16 Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <des16ctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Despacho 17 Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <des17ctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Despacho 18 Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <des18ctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Despacho 19 Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <des19ctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Despacho 21 Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <des21ctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juan Pablo Cabra Gonzalez <jcabrag@comisiondedisciplina.ramajudicial.gov.co>; 12544a30f9cd49c492abda30fdfdc695-jninog; Juzgado 01 Civil Circuito Restitución Tierras - Casanare - Yopal <j01cctoesrtyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Manuel Alfonso Zamudio Mora <mzamudiom@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Martha Patricia Guzman Alvarez <marthaga@cortesuprema.gov.co>; Martha Isabel Garcia Serrano <mgarcias@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Presidencia Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <presidenciasalaciviltsb@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Secretaría Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <secsctribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>; secsctsupbta@notificacionesrj.gov.co <secsctsupbta@notificacionesrj.gov.co>; Ivan Alfredo Fajardo Bernal <ifajardb@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Hector Mauricio Correa Carreno <hcorreac@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Jaime Humberto Araque Gonzalez <jaraqueg@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Secretaría Sala Familia Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <secfabta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Despacho 01 Sala Familia Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <des01sftsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Despacho 02 Sala Familia Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <des02sftsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Despacho 03 Sala Familia Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <des03sftsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Despacho 04 Sala Familia Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <des04sftsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Despacho 05 Sala Familia Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <des05sftsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Despacho 06 Sala Familia Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <des06sftsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Judicante Despacho 04 Sala Familia Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <judicantefamilia04@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Presidencia Sala Familia – Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <presidenciasftsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Despacho 17 Sala Laboral Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <des17sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Despacho 03 Sala Laboral Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <des03sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Secretario Sala Laboral Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Despacho 01 Sala Laboral Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <des01sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Despacho 02 Sala Laboral Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <des02sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Despacho 04 Sala Laboral Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <des04sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Despacho 05 Sala Laboral Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <des05sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Despacho 06 Sala Laboral Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <des06sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Despacho 07 Sala Laboral Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <des07sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Despacho 08 Sala Laboral Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <des08sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Despacho 09 Sala Laboral Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <des09sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Despacho 10 Sala Laboral Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <des10sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Despacho 11 Sala Laboral Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <des11sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Despacho 12 Sala Laboral Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <des12sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Despacho 13 Sala Laboral Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <des13sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Despacho 14 Sala Laboral Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <des14sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Despacho 15 Sala Laboral Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <des15sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Despacho 16 Sala Laboral Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <des16sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Despacho 19 Sala Laboral Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <des19sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Despacho 20 Sala Laboral Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <des20sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Despacho 21 Sala Laboral Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <des21sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Despacho 22 Sala Laboral Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <des22sltsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Presidencia Sala Laboral Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <presltribsup@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: Memorando PCSJM23-132

Respetado(a) Usuario(a):

Le notificamos el contenido del (los) documento(s) adjunto(s).
En caso de respuesta, consulta o recurso podrá hacerlo al siguiente correo: **csjsabta@cendoj.ramajudicial.gov.co**

Cordialmente,

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá
Correo: csjsabta@cendoj.ramajudicial.gov.co
Elaborado por:

Por favor no responder este mensaje dado que esta cuenta de correo electrónico no está habilitada para recibir respuestas, consultas o cualquier tipo de solicitud. En caso de enviar mensaje a esta cuenta no será tenido en cuenta para su trámite.

Agradecemos responder la siguiente encuesta: Encuesta de satisfacción

En lo posible no imprimir este mensaje. Gracias por ayudarnos a preservar el medio ambiente.

De: Presidencia Consejo Superior <presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co>
Enviado: miércoles, 25 de octubre de 2023 11:29
Asunto: Memorando PCSJM23-132

Cordial Saludo,

Se remite a los Consejos seccionales Memorando PCSJM23-132 y anexos, a fin de que sea reenviado a las sedes judiciales del correspondiente distrito, para los fines que resulten pertinentes.

Atentamente,

Consejo Superior de la Judicatura
Oficina del Despacho de la Presidencia

Oficina del Despacho de la Presidencia
(601) 562 9094- EXT 4655
Palacio de Justicia 'Alfonso Reyes Echandía'
Calle 12 # 7 - 65

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

MEMORANDO PCSJM23-132

DE: **OFICINA DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**

PARA: **CONSEJOS SECCIONALES DE LA JUDICATURA**

ASUNTO: **Resolución 2023320030005625-6 del 15/09/2023 "*Por la cual se ordena la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a FAMISANAR EPS SAS*". NIT. 830.003.564-7**

FECHA: **19 de octubre de 2023**

Remito para su conocimiento y demás fines pertinentes la Resolución 2023320030005625-6 del 15 de septiembre de 2023, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, "*Por la cual se ordena la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a FAMISANAR EPS SAS*", lo anterior, en cumplimiento de la orden impartida en la parte resolutiva de este acto administrativo, en la que se ordena "*(...) la comunicación a los jueces de la República y a las autoridades que adelanten procesos de jurisdicción coactiva, sobre la suspensión de los procesos de ejecución en curso y la imposibilidad de admitir nuevos procesos de esta clase contra la entidad objeto de toma de posesión, con ocasión de obligaciones anteriores a dicha medida (...)*".

En consecuencia, los trámites y la información respectiva, deberán efectuarse ante la oficina enunciada.

Lo anterior, a efectos de que se remita a los juzgados del correspondiente distrito para los fines que resulten pertinentes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5.° de la Ley 270 de 1996, respecto de la autonomía de la Rama Judicial, en concordancia con los artículos 228 y 230 de la Constitución Política de Colombia.

Cordialmente,

MARGARITA MARÍA BECERRA DAWSON
Magistrada Auxiliar

Cc. Superintendencia Nacional de Salud
snsnotificacionesjudiciales@**supersalud**.gov.co

Anexo lo anunciado

Elaboró: C Báez / EIOCH

PCSJO23-1165

Bogotá, D.C., 19 de octubre de 2023

Doctora
SANDRA MILENA JARAMILLO AYALA
Agente Especial Interventora
EPS FAMISANAR S.A.S.
notificaciones@famisanar.com.co
Ciudad

Asunto: Respuesta a la petición radicada el 3 de octubre de 2023. Comunicación de la Resolución 2023320030005625-6 del 15/09/2023. Rad. EXTPCSJ23-1068

En relación a la petición de la referencia, en la que se le solicita al Consejo Superior de la Judicatura lo siguiente:

1. *"En amparo de la medida de intervención forzosa administrativa ejecutada a mi representada a través de la Resolución 2023320030005625-6 del 15 de septiembre de 2023, fundamentada jurídicamente, entre otras normas, por lo establecido en el literal E del artículo 116 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en amparo, solicito se informe a los diferentes despachos judiciales la imposibilidad de ordenar medidas preventivas y el levantamiento de cualquier tipo de medidas cautelares impuestas a la intervenida y en consecuencia, se ordene la entrega de dineros, recursos y/o cualquier tipo de activo a la misma que haya sido afectado con ocasión de estás ." y*
2. *"De conformidad con lo regulado en la norma transcrita al inicio del presente documento, solicito a la Corporación se sirva ordenar a todos los jueces de la República, la suspensión de cualquier tipo de actuación judicial, así como la imposibilidad de admitir trámites judiciales relacionados con la naturaleza delas que trata la Resolución de intervención forzosa, esto es, procesos ejecutivos, coactivos y declarativos en contra de la intervenida, sin que se notifique personalmente a la interventora so pena de nulidad ".*

Respuesta: Al respecto le informo que el Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con lo establecido en los artículos 256 y 257 de la Constitución Política y 85 de la Ley 270 de 1996, tiene a su cargo el gobierno y la administración integral de la Rama Judicial, en tal sentido no tiene funciones de jurisdiccionales y no interviene en las decisiones que profieran los jueces, los cuales son autónomos e independientes en el ejercicio de administrar justicia, conforme lo dispuesto en el artículo 5.° de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los artículos 228 y 230 de la Constitución Política de Colombia.

Bajo estos presupuestos, el Consejo Superior de la Judicatura no puede instruir a los jueces sobre el sentido de las decisiones que les corresponde adoptar en su función jurisdiccional. Por lo anterior, la Corporación no está facultada para dar trámite a lo solicitado.

Sin perjuicio de lo señalado, el Consejo Superior de la Judicatura mediante el Memorando PCSJM23-132 del 19 de octubre de 2023, dispuso la divulgación entre las sedes judiciales del país, de la citada resolución, para los fines que consideren pertinentes.

Atentamente,

MARGARITA MARIA BECERRA DAWSON
Magistrada Auxiliar

Anexo lo anunciado

PCSJ/ C Báez / EIOCH

Famisanar EPS

Famisanar EPS

Consejo Superior de la Judicatura
Código: EXTPCSJ23-1068:
Fecha: 03- oct-2023
Hora: 14:23:02
Destino: Presidencia Consejo Superior de la Judicatura
Responsable: GÓMEZ GUTIÉRREZ, ALISSON DAYANA (RESPONSABLE)
No. de Folios: 14

Señores.
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.
Rama Judicial.
Bogotá D.C.
E. S. D.

ASUNTO: COMUNICACIÓN RESOLUCIÓN 2023320030005625-6 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

SANDRA MILENA JARAMILLO AYALA, mayor de edad, vecina de la ciudad de Bogotá, domiciliada y residenciada en esta ciudad, identificada con cédula de ciudadanía No. 65.766.395 de Ibagué, actuando en calidad de Agente Interventora de la **ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S.A.S., - EN INTERVENCIÓN BAJO LA MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN** mediante el presente memorial, me permito poner en conocimiento del Despacho la Resolución **2023320030005625-6 del 15 de septiembre de 2023** expedida por el Superintendente Nacional de Salud *"Por la cual se ordena la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a FAMISANAR EPS SAS identificada con el NIT 830.003.564-7"*. Lo anterior de conformidad con lo ordenado en el artículo 116 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el artículo 9.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010 y el literal C) del artículo 4 de la citada resolución el cual indica que:

> *"**ARTÍCULO CUARTO. ORDENAR** el cumplimiento de las siguientes medidas preventivas, de conformidad con lo establecido el artículo 9.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010, así:*
>
> ***1. Medidas preventivas obligatorias.***
>
> *(...)*
> ***c) La comunicación a los jueces de la República y a las autoridades que adelanten procesos de jurisdicción coactiva sobre la suspensión de los procesos de la ejecución en curso y la imposibilidad de admitir nuevos procesos de esta clase contra la entidad objeto de toma de posesión con ocasión de las obligaciones anteriores a dicha medida.***
>
> *d) La advertencia que, en adelante, no se podrá iniciar ni continuar procesos o actuación alguna contra la intervenida sin que se notifique personalmente al Interventor, so pena de nulidad;"*
>
> *(Subrayado y negrilla fuera del texto original)*

En virtud de ello, al presente memorial, se adjunta copia de la Resolución 2023320030005625-6 del 15/09/2023 para efectos de su divulgación y a su vez aplicación por parte de los Jueces de la República, frente a los procesos tanto en trámite como los que en adelante se radiquen, con ocasión de obligaciones anteriores a la medida de intervención forzosa administrativa.

Por lo descrito anteriormente, de forma respetuosa, me permito realizar la siguiente

PETICIÓN

1. En amparo de la medida de intervención forzosa administrativa ejecutada a mi representada a través de la Resolución 2023320030005625-6 del 15 de septiembre de 2023, fundamentada jurídicamente, entre otras normas, por lo establecido en el literal E del artículo 116 del del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en amparo, solicito se informe a los diferentes despachos judiciales la imposibilidad de ordenar medidas preventivas y el levantamiento de cualquier tipo de medidas cautelares impuestas a la intervenida y en consecuencia, se ordene la entrega de dineros, recursos y/o cualquier tipo de activo a la misma que haya sido afectado con ocasión de éstas.

Anexo: 14 Folios

2. De conformidad con lo regulado en la norma trascrita al inicio del presente documento, solicito a la Corporación se sirva ordenar a todos los Jueces de la República, la suspensión de cualquier tipo de actuación judicial, así como la imposibilidad de admitir trámites judiciales relacionados con la naturaleza de las que trata la Resolución de intervención forzosa, esto es, procesos ejecutivos, coactivos y declarativos en contra de la intervenida, sin que se notifique personalmente a la Interventora so pena de nulidad.

NOTIFICACIONES

La **EPS FAMISANAR S.A.S.**, con domicilio en la ciudad de Bogotá, se identifica con el NIT 830.003.564-7 con dirección de notificaciones en la Carrera 13A No. 77ª-63 de la ciudad de Bogotá; dirección electrónica para notificaciones judiciales notificaciones@famisanar.com.co

Anexo: Resolución No. 2023320030005625-6 del 15 de septiembre de 2023 de la SNS en veinticuatro (24) folios.

Cordialmente,

SANDRA MILENA JARAMILLO AYALA
AGENTE ESPECIAL INTERVENTORA
EPS FAMISANAR S.A.S.
Proyectó: María Paula Ñustes G.
Revisó: Alexander Joven, Abogado
Revisó. Sergio Andrés Zárate Sanabria. Secretario General y Jurídico
Revisó: Liliana Patricia Varón Ruiz. Asesor Técnico Jurídico

Supersalud
Por la defensa de los derechos de los usuarios

RESOLUCIÓN
2023320030005625-6 DE 15 - 09 - 2023

"Por la cual se ordena la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a FAMISANAR EPS SAS identificada con el NIT 830.003.564-7"

EL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, en especial las que le confieren las Leyes 100 de 1993, 1122 de 2007 y 1438 de 2011, los artículos 114, 115, 116 parágrafo y 335 del Decreto Ley 663 de 1993, el artículo 9.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010, los artículos 42 y 68 de la Ley 715 de 2001, el artículo 68 de la Ley 1753 de 2015, los artículos 11 y 26 de la Ley 1797 de 2016, el artículo 17 de la Ley 1966 de 2019, los artículos 2.1.10.5.1, 2.5.5.1.1, 2.5.5.1.9 del Decreto 780 de 2016, el numeral 30 del artículo 4 y numeral 7 del artículo 7 del Decreto 1080 de 2021, la Resolución 002599 de 2016 y sus modificaciones, el Decreto 1712 de 2022 y demás normas concordantes y,

I. CONSIDERANDO

Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Constitución Política, la Seguridad Social, en su componente de atención en salud, se define como un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

Que, el Sistema General de Seguridad Social en Salud -en lo que sigue SGSSS- tiene su atención puesta en la protección en la atención al servicio público de salud y en la salvaguarda al derecho fundamental de la salud de las personas.

Que, el numeral 22 del artículo 189 de la Constitución Política indica que al Presidente de la República corresponde: "Ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos".

Que, a efectos de la prestación del servicio público esencial de salud, las funciones de vigilancia, inspección y control la ejerce la Superintendencia Nacional de Salud.

Que conforme el artículo 334 de la Constitución Política, la prestación de servicios públicos está sometida a leyes de intervención económica.

Que, el derecho a la salud es fundamental tal como lo estipula la Ley 1751 de 2015 que "Comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud", según lo ordena el artículo 2º de la disposición estatutaria.

Que, la salud como derecho fundamental vincula no solo a los poderes públicos, sino también, y sobre todo, a los particulares encargados de su prestación que aparece en la Constitución calificada como un servicio público (art. 48 constitucional). De esta

Digitally signed by SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Date: 2023.09.15 12:00:58 COT

suerte, despliega una eficacia horizontal (*Drittwirkung*[1]) no solo como derecho subjetivo sino como principio objetivo.

Que, en virtud del artículo 154 de la Ley 100 de 1993, el Estado intervendrá en el servicio público de seguridad social en salud, con el fin de garantizar los principios consagrados en la Constitución Política y en la Ley.

Que, conforme al artículo 155 de la Ley 100 de 1993, la Superintendencia Nacional de Salud integra el Sistema General de Seguridad en Salud.

Que, el parágrafo segundo del artículo 230 de la Ley 100 de 1993 preceptúa que la Superintendencia Nacional de Salud ejercerá las funciones de inspección, vigilancia y control[2] respecto de las entidades promotoras de salud, cualquiera que sea su naturaleza jurídica y a su turno, el artículo 68 de la Ley 715 de 2001, establece que la Superintendencia Nacional de Salud tendrá como competencia "(...) realizar la inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las normas constitucionales y legales del sector salud y de los recursos del mismo (...)".

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 1122 de 2007, a efectos de la prestación del servicio público esencial de salud, el Sistema de Inspección, Vigilancia y Control del SGSSS está en cabeza de la Superintendencia Nacional de Salud.

Que, el parágrafo segundo del artículo 233 de la Ley 100 de 1993 en consonancia con los artículos 2.5.5.1.1. y 2.5.5.1.9 del Decreto 780 de 2016 establecen que las medidas cautelares y la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios que adopte esta superintendencia, se regirán por las disposiciones contempladas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero -en lo que sigue EOSF- y serán de aplicación inmediata, por lo cual, el recurso de reposición que procede contra las mismas, no suspende la ejecución del acto administrativo de que se trate, de acuerdo con lo previsto en el artículo 335 del EOSF.

Que, en armonía con lo establecido en las normas referenciadas anteriormente, la Ley 1966 de 2019, como parte de las normas que reforman el SGSSS, estableció en su artículo 17 que todas las facultades del Superintendente Nacional de Salud que desarrollan el eje de medidas especiales (numeral 5 artículo 37 de la Ley 1122 de 2007) estarían dotadas de un efecto inmediato y, en consecuencia, los recursos de reposición interpuestos en su contra tendrían un efecto devolutivo.

Que, el artículo 2.5.2.2.1.1 y subsiguientes del Decreto 780 de 2016, establece las condiciones financieras y de solvencia que deben acreditar las Entidades Promotoras de Salud - EPS autorizadas para operar el aseguramiento en salud, así como los criterios generales para que la información financiera reúna las condiciones de veracidad, consistencia y confiabilidad necesarias para la adecuada y eficaz inspección, vigilancia y control.

---

[1] **JUAN CARLOS GAVARA**, "LA VINCULACIÓN POSITIVA DE LOS PODERES PÚBLICOS A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES". En UNED. *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 20, 2007, p. 290 (277-320).

[2] Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, C.P Alberto Montaña Plata, Radicado 27001-23-31-000-2004-00699-01(35783) del 30 de mayo de 2019 "(...) con base en las cuales puede señalarse que la función administrativa de inspección implica la facultad de solicitar información de las personas objeto de supervisión, así como de practicar visitas a sus instalaciones y realizar auditorías y seguimiento de su actividad; la vigilancia, por su parte, está referida a funciones de advertencia, prevención y orientación encaminadas a que los actos del ente vigilado se ajusten a la normatividad que lo rige; y, finalmente, el control permite ordenar correctivos sobre las actividades irregulares y las situaciones críticas de orden jurídico, contable, económico o administrativo (...)."

Continuación de la resolución, **"Por la cual se ordena la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a FAMISANAR EPS SAS identificada con el NIT 830.003.564-7"**

Que, el artículo 2.5.2.2.1.15 del Decreto 780 de 2016, dispone que el incumplimiento de las condiciones financieras y de solvencia dentro de los plazos allí previstos, dará lugar a la adopción de las medidas correspondientes por parte de la Superintendencia Nacional de Salud de conformidad con sus competencias.

Que, en el artículo 114 del EOSF define las causales, y en el artículo 115 se establece la procedencia de la medida de toma de posesión[3], sus efectos y principios. En línea, con los artículos 68 de la Ley 715 de 2001 y 68 de la Ley 1753 de 2015, corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud, ordenar la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar a las entidades sometidas a su inspección, vigilancia y control.

Que, el artículo 115 del EOSF, en concordancia con el artículo 9.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010, señala que la toma de posesión tiene como fin, establecer si la entidad debe ser objeto de liquidación, si es posible colocarla en condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social o si se pueden realizar otras operaciones que permitan lograr mejores condiciones para los afiliados y sus acreedores.

Que, el artículo 116 del EOSF dispone que la toma de posesión conlleva la suspensión de los procesos de ejecución en curso y la imposibilidad de admitir nuevos procesos de esta clase contra la entidad objeto de toma de posesión por razón de obligaciones anteriores a dicha medida. Igualmente, la norma en cita señala que el proceso o actuación correspondiente será remitido al agente especial. Así mismo, la toma de posesión implica, entre otros efectos, la cancelación de los embargos decretados con anterioridad a la toma de posesión que afecten bienes de la entidad.

Que, de conformidad con los artículos 68 de la Ley 715 de 2001 y 68 de la Ley 1753 de 2015 corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud ordenar la intervención forzosa administrativa para administrar las entidades sometidas a inspección, vigilancia y control. A su vez, el inciso 3° del numeral 2° del artículo 116 del EOSF modificado por el artículo 22 de la Ley 510 de 1999, en concordancia con el inciso final del artículo 9.1.2.1.1 del Decreto 2555 de 2010, señala que, en todo caso, si en el plazo de un (1) año, prorrogable por un término igual no se subsanaren las dificultades que dieron origen a la toma de posesión, la entidad de vigilancia y control dispondrá la disolución y liquidación de la entidad vigilada. Lo anterior, sin perjuicio de que el Gobierno Nacional por resolución ejecutiva autorice una prórroga mayor cuando así se requiera, de conformidad a las características de la institución.

Que, en el numeral 42.8 de la Ley 715 de 2001 se definió como competencia de la Nación en el sector salud establecer los procedimientos y reglas para la intervención técnica o administrativa de instituciones que manejan recursos del SGSSS que sean intervenidas para su administración a través de la Superintendencia Nacional de Salud.

[3] Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. C.P: Edgar Gonzalez López. Radicado: 11001-03-06-000-2017-00192-00(2358) del 12 de diciembre de 2017. La naturaleza de la toma de posesión como instrumento para el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud, se debe advertir que este mecanismo no es una medida administrativa de carácter sancionatorio, (...) En su lugar, la naturaleza de la medida de toma de posesión -al igual que las demás medidas preventivas o de salvamento concebidas por el legislador para evitar la toma de posesión- corresponde más a la de una medida cautelar, que tiene por objeto corregir situaciones económicas y administrativas, con el fin de poner la entidad intervenida en condiciones de desarrollar su objeto social (...)

Que, el inciso 5° del artículo 68 de la Ley 715 de 2001 prescribe: "la Superintendencia Nacional de Salud ejercerá la intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar las entidades vigiladas que cumplan funciones de explotación u operación de monopolios rentísticos, cedidos al sector salud, Empresas Promotoras de Salud e Instituciones Prestadoras de Salud de cualquier naturaleza, así como para intervenir técnica y administrativamente las direcciones territoriales de salud, en los términos de la Ley y los reglamentos".

Que, la toma de posesión está orientada por el propósito de superar, en lo posible, las condiciones objetivas que amenazan la estabilidad, continuidad y permanencia de la entidad de tal forma que la toma de posesión incluye la posibilidad de adoptar un conjunto de medidas de salvamento de la entidad intervenida como los acuerdos con los acreedores, figura desarrollada en el artículo 9.1.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010.

Que, el Gobierno Nacional modificó la estructura de la Superintendencia Nacional de Salud mediante Decreto 1080 de 10 de septiembre de 2021.

Que el numeral 7º del artículo 7º del Decreto 1080 de 2021, estableció como una de las funciones del Superintendente Nacional de Salud, además de las señaladas por la Constitución Política y la ley, la de "Ordenar la toma de posesión, los procesos de intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar y otras medidas especiales a las entidades promotoras de salud, las entidades adaptadas, los prestadores de servicios de salud de cualquier naturaleza, y monopolios rentísticos cedidos al sector salud no asignados a otra entidad, así como intervenir técnica y administrativamente a las secretarías de departamentales, distritales y municipales de salud o las entidades que hagan sus veces".

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 291 del EOSF, en consonancia con el numeral 4 del artículo 295 y el literal a) del numeral 1 del artículo 296, normativa aplicable a las intervenciones realizadas por la Superintendencia Nacional de Salud, es competencia de la superintendencia designar a los que deban desempeñar las funciones de agente especial interventor, liquidador y contralor, quienes podrán ser personas naturales o jurídicas y actuar, entre otros, durante la toma de posesión o la etapa inicial, como en la administración o liquidación, adelantando bajo su inmediata dirección y responsabilidad los procesos de intervención.

Que, la Superintendencia Nacional de Salud expidió la Resolución 002599 del 6 de septiembre de 2016 y sus modificaciones, por la cual se dictaron disposiciones relacionadas con la inscripción, designación, fijación de honorarios, posesión, funciones, obligaciones, seguimiento, sanciones, reemplazo y otros asuntos de los agentes interventores, liquidadores y contralores de las entidades objetó de medidas especiales de toma de posesión e intervención forzosa administrativa prevista en el artículo 68 de la Ley 1753 de 2015 por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.

Que, en atención al régimen jurídico anteriormente referenciado, el Superintendente Nacional de Salud procede a presentar la relación de los siguientes:

II. ANTECEDENTES FÁCTICOS

Que, la Superintendencia Nacional de Salud otorgó a **FAMISANAR EPS SAS**

identificada con NIT 830.003.564-7, la autorización para operar en el régimen contributivo a través de la Resolución 0509 del 25 de julio de 1995, siendo está posteriormente actualizada por la Resolución 8678 del 18 de julio de 2018. Esta autorización se renovó en virtud de la Resolución 2023310000004929-6 del 04 de agosto de 2023.

Que, mediante la Resolución 2023310010001393-6 del 2 de marzo de 2023, se denegó la aprobación del plan de reorganización institucional. Esta decisión fue ratificada con la Resolución 2023162000002897-6 del 16 de mayo de 2023, al resolver el recurso de reposición presentado por la entidad.

Que, el numeral 7º del artículo 7º del Decreto 1080 de 2021, estableció como una de las funciones del Despacho Superintendente Nacional de Salud, además de las señaladas por la Constitución Política y la ley, la de; "Ordenar la toma de posesión, los procesos de intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar y otras medidas especiales a las entidades promotoras de salud, las entidades adaptadas, los prestadores de servicios de salud de cualquier naturaleza, y monopolios rentísticos cedidos al sector salud no asignados a otra Entidad, así como intervenir técnica y administrativamente a las secretarías de departamentales, distritales y municipales de salud o las entidades que hagan sus veces".

Que, en ejercicio de las competencias establecidas en el numeral 21[4] del artículo 23 y numeral 9[5] del artículo 24 del Decreto 1080 de 2021 la Dirección de Inspección y Vigilancia de Entidades de Aseguramiento en Salud y la Dirección de Medidas Especiales para Entidades Promotoras de Salud y Entidades Adaptadas remitió a la Superintendente Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud concepto técnico de seguimiento de la **FAMISANAR EPS SAS.**

Que, la Superintendencia Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud, en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 20215100013052-6[6] presentó al Comité de Medidas Especiales de la Superintendencia Nacional de Salud concepto técnico de seguimiento de **FAMISANAR EPS SAS** en sesión del 12 de septiembre de 2023, en donde se destacan las siguientes conclusiones, frente a los componentes financieros, técnicos y administrativos:

"(...)

- En junio de 2015, en el marco del Decreto 2702 de 2014, **FAMISANAR EPS SAS** determinó un defecto en el Indicador de Capital Mínimo de -$33.815 millones y en el indicador de Patrimonio Adecuado de $157.415 millones, situación que debió subsanarse a diciembre de 2021. Sin embargo, a pesar de la capitalización por $755.949 millones, se incumplió en la cuantía necesaria para enervar las pérdidas registradas en las vigencias 2017, 2018 y 2022.

- En diciembre de 2022 FAMISANAR EPS SAS reconoció pasivos de vigencias anteriores por $758.671 millones, de los cuales, la entidad omitió reconocer contablemente $602.370 millones al cierre de 2021. Lo anterior implica que el resultado del indicador de Régimen de Inversiones al cierre de 2021 estaba sobrevalorado; es decir, si la entidad hubiese reconocido oportunamente sus pasivos habrían presentado un mayor incumplimiento en el Indicador al cierre de 2021. Se concluye que **FAMISANAR EPS SAS**, reportó, de manera reiterada ante la Superintendencia Nacional de Salud información carente de calidad y transparencia, lo que

[4] Decreto 1080 de 2021, artículo 23, numeral 21 "(...) En coordinación con la Dirección de Medidas Especiales para Entidades Promotoras de Salud y Entidades Adaptadas, elaborar análisis y recomendar al Superintendente Delegado, sobre la posibilidad de adoptar medidas especiales de las entidades promotoras de salud y entidades adaptadas (...)"

[5] Decreto 1080 de 2021, artículo 24, numeral 9 "(...) En coordinación con la Dirección de Inspección y Vigilancia, elaborar análisis con fundamento en los hallazgos identificados y recomendar al Superintendente Delegado, sobre la adopción de medidas especiales respecto de las entidades promotoras de salud y entidades adaptadas, de conformidad con los hallazgos identificados (...)"

[6] Resolución "Por la cual se crea y conforma el Comité de Medidas Especiales de la Superintendencia Nacional de Salud" modificada por la Resolución 2023100000000915-6 de 14 de febrero de 2023.

impidió el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia y se enmarca en el incumplimiento del numeral 11 del Artículo 130 de la Ley 1438 de 2011.

- Entre diciembre 2021 y junio de 2023 Famisanar presentó una reducción del **-4%** en el valor de los activos (-$44.123 millones), un aumento del **142%** del valor de sus pasivos ($1.296.597 millones) y una variación patrimonial de **-918%** (-$1.340.720 millones), de modo que, a junio de 2023 sus activos totales ($1.010.484 millones) equivalían a tan solo el **45,7%** de sus pasivos totales ($2.209.623 millones), una situación que ha elevado el riesgo de liquidez e insolvencia para atender las obligaciones con acreedores en el corto, mediano y largo plazo.

- El comportamiento del indicador de siniestralidad de **FAMISANAR EPS SAS** genera alertas sobre la viabilidad financiera de la entidad, debido a que la operación corriente evidencia que los costos de la EPS ascendieron a 119% en diciembre de 2022 y 105% en junio de 2023, lo que genera mayores presiones de liquidez, mayores requerimientos de capitalización y precarios resultados en los indicadores de Capital mínimo, Patrimonio Adecuado y Régimen de Inversión.

- Los activos de la entidad presentan una estructura en la que sus principales rubros (cuentas por cobrar y activos por impuesto diferido) presentan incertidumbre frente a la convertibilidad en dinero, así:

  - A junio de 2023, de los $643.663 millones de las cuentas por cobrar brutas, el 55% presentan una antigüedad superior a 360 días, lo que ha generado que la EPS reconozca un deterioro acumulado de -$248.925 millones, ante la posibilidad de no recuperación de la cartera.
  - El 45,50% de los Recobros No UPC ($331.538 millones) están deteriorados ($150.845 millones).
  - El 40,73% de las cuentas por cobrar UPC están deterioradas ($72.198 millones);
  - El activo por impuesto diferido que ascendía a $400.159 millones y representaba el 39,6% del total de los activos no tiene la capacidad de generar beneficios económicos para la entidad en el corto plazo, dado que su materialización está sujeta a que la EPS obtenga utilidades fiscales en vigencias futuras.

- La confiabilidad de los resultados de siniestralidad, Capital Mínimo, Patrimonio Adecuado y Régimen de Inversiones correspondientes a la vigencia 2021, está seriamente comprometida dado que, **FAMISANAR EPS SAS** no reconoció oportunamente cuentas por pagar y costos por Reservas Técnicas por $602.370 millones.

- Entre enero y junio de 2023, Famisanar reportó pagos a prestadores y proveedores de servicios por $2.1 billones recibidos por concepto de UPC del Régimen Contributivo, Régimen Subsidiado y Presupuesto Máximo. 86,5% de los pagos se destinaron a la red privada y 11,77% a la red pública.

  Del total de recursos girados, 46,2% fueron pagos a sus socios (Colsubsidio: 31,8% y Cafam: 14,4%)

- En visita de Inspección y Vigilancia realizada a **FAMISANAR EPS SAS** entre el 30 de marzo y el 05 de abril de 2022, la Superintendencia Nacional de Salud formuló hallazgos sobre la Reserva Técnica relacionados con el procedimiento para el conocimiento de los servicios avisados, la calidad de la información y la metodología de suficiencia de la reserva técnica. Tras este precedente, la EPS reconoció a finales de 2022, de manera extraordinaria, cuentas por pagar y costos por Reservas Técnicas por $602.370 millones que debieron haber sido reconocidos en la vigencia 2021, generando la re-expresión de Estados Financieros y una afectación de la confiabilidad de la información financiera.

- La información disponible en fuentes oficiales (2019 y 2020) relacionadas con la captación temprana para el control prenatal de mujeres gestantes, indica un incumplimiento promedio para las dos vigencias, de alrededor del 15%, que se encuentra en relación directa con la alta incidencia de sífilis congénita.

  De la misma manera, tres indicadores trazadores para la detección del cáncer cérvico uterino refuerzan la deficiencia en el cumplimiento de la función indelegable del aseguramiento, relacionada con la gestión del riesgo en salud y la falta de garantía en las intervenciones individuales de la ruta de atención integral de Promoción y Mantenimiento de la Salud, que

Continuación de la resolución, **"Por la cual se ordena la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a FAMISANAR EPS SAS identificada con el NIT 830.003.564-7"**

materializan el derecho fundamental e impactan en la optimización de los recursos públicos del sistema.

- Si bien, se observó una disminución de 15 casos de mortalidad materna entre los años 2021 y 2022, la notificación de 6 casos hasta la semana epidemiológica número 20 de 2023, no evidencia avances significativos en la tendencia y el cumplimiento de las metas del Plan de Desaceleración para la Reducción de la Mortalidad Materna, en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social.

- En relación con los casos de cáncer en menores de 18 años, el comportamiento mensual durante el primer cuatrimestre de 2023 revela un incremento de casos cercano al 20% . Esta tendencia requiere medidas efectivas para garantizar la ruta de atención integral para esta población de especial protección constitucional.

- La EPS no garantiza a sus afiliados el acceso a servicios y tecnologías en salud, evidenciado en los principales motivos específicos de las reclamaciones, presentando un incremento del 24% en la radicación de PQRD en el periodo comprendido entre enero y julio del 2022 versus el mismo periodo de 2023.

- La EPS en el año 2022, precisa dentro de los motivos específicos de las PQRD interpuestas ante esta Superintendencia, falta de oportunidad en: la asignación de citas de consulta médica especializada, la prestación de servicios de imagenología de segundo y tercer nivel, la programación de exámenes de laboratorio o diagnósticos y la programación de cirugía; lo que puede encontrarse relacionado con las coberturas de servicios de: baja complejidad, alta complejidad y especialidades básicas, a nivel municipal; inferiores al 100%, que se identificaron en el análisis de la red.

- Con corte julio de 2023 presenta un acumulado de 59.391 de reclamos en salud, destacando que el principal macro motivo es la barrera en el acceso a tecnologías y servicios de salud y otros elementos complementarios con un 82,8% y que los principales motivos específicos son: negación en la asignación de citas o consultas, falta de oportunidad, negación en la atención de otros servicios de salud, falta de oportunidad en la atención de otros servicios de salud y no reconocimiento y pago de prestaciones económicas.

- **FAMISANAR EPS SAS** no implementó dentro de la contratación lo establecido en el Decreto 441 de 2022, ni implementó los lineamientos que estableció dentro de su manual de contratación para la gestión interna del proceso.

- De acuerdo con la información reportada por **FAMISANAR EPS SAS** durante la auditoría *in situ,* los motivos más frecuentes por los que se presentan las acciones de tutela son la inoportunidad en la asignación de citas por medicina especializada y en la entrega tardía de insumos, dispositivos o medicamentos necesarios para garantizar la atención integral en salud de la población.

- **FAMISANAR EPS SAS** a corte del I semestre de 2022 tenía vigentes un total de cuatrocientos treinta y tres (433) procesos, de los cuales, en ciento cuarenta y cinco (145) actúa la EPS en calidad de demandante, con una cuantía por valor de ciento cuarenta y nueve mil setecientos veintiséis millones ($ 149.726 millones); y doscientos ochenta y ocho (288) procesos en calidad de demandada con una cuantía por valor de ciento setenta y siete mil ochocientos diecinueve millones de pesos ($ 177.819).

- Con corte a diciembre de 2022, del total de los procesos jurídicos clasificados en riesgo alto de pérdida, el 62% corresponde a procesos de naturaleza laboral.

- La EPS presenta inconsistencias en la información relacionada con las acciones de tutela, lo cual dificulta las acciones de inspección y vigilancia, toda vez que de lo entregado se encuentran registros que no especifican el motivo de interposición. "

Que, la Superintendente Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud, en sesión del Comité de Medidas Especiales del 12 de septiembre de 2023, recomendó[7]

[7] Decreto 1080 de 2021, artículo 22, numeral 22 "Recomendar al Superintendente Nacional de Salud, la adopción, prórroga, modificación o levantamiento de las medidas preventivas o especiales sobre las Entidades Promotoras de Salud y las entidades

ordenar la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a **FAMISANAR EPS SAS,** identificada con el NIT. 830003564-7, debido al estado actual de la EPS evidenciado en el concepto técnico presentado, con la finalidad de realizar otras operaciones que garanticen la prestación de los servicios de salud de los usuarios y desarrollar el objeto social de la entidad; ya que, de conformidad al seguimiento en las acciones de inspección y vigilancia, se acreditan situaciones directamente relacionadas con la ocurrencia de causales previstas en el artículo 114 del EOSF.

Que, la Superintendente delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud consideró que las conductas desplegadas por la entidad vigilada se enmarcan en los literales **e, g, h, i** del artículo 114 del EOSF como se relacionan a continuación:

III. CAUSALES DEL ARTÍCULO 114 DEL EOSF

Que, la información y las situaciones evidenciadas en el marco de las funciones de inspección vigilancia y control[8] realizada por la Superintendencia Nacional de Salud a **FAMISANAR EPS SAS,** permite establecer un incumplimiento reiterado de la ley y de aquellas normas que rigen el aseguramiento y la prestación de servicios de salud, de acuerdo con el concepto de *actividad ordenadora de la administración*.[9]

Que, dichas situaciones se ven directamente reflejadas en la vulneración de los derechos de los afiliados y en el incumplimiento de las funciones indelegables de aseguramiento, lo cual tiene incidencia en la facultad que tiene la Superintendencia Nacional de Salud de ordenar la toma de posesión a los sujetos vigilados, de acuerdo con lo establecido en el régimen del EOSF.

Que, sobre la facultad que tiene la Superintendencia Nacional de Salud de intervenir a sus vigilados siguiendo el régimen del EOSF, es pertinente seguir la interpretación del Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil en función consultiva 2358 de 12 de diciembre de 2017[10] donde se establecieron las reglas de interpretación sobre el alcance de la toma de posesión y las medidas de salvamento en el sector salud. A partir de lo anterior, se derivan algunas reglas especiales de aplicación como: a) la discrecionalidad tanto en la toma de decisiones como en su ejercicio previo, y, al mismo tiempo; b) la decisión de la toma de posesión, siempre que se verifique alguna de las causales previstas en el artículo 114 del EOSF.

Que, para la Sala de Consulta existe también un aspecto que determina la potestad de posesión o, para decirlo mejor, la facultad de tomar posesión de los bienes de entidades vigiladas; b) su carácter extremo, es decir, el hecho de se recurra a ella solo en situaciones límite:

> "En este orden de ideas, cabe resaltar que la toma de posesión es una medida "extrema", si se entiende por tal aquella que procede ante la ocurrencia de hechos que afectan en forma particularmente grave el interés público tutelado por la SNS, específicamente, la adecuada prestación del servicio de salud y la confianza pública en el sistema. Por lo tanto, ante la

adaptadas"

[8] La Ley 1753 de 2015, Artículo 68: "Medidas Especiales: Sin perjuicio de lo previsto en las demás normas que regulen la toma de posesión y ante la ocurrencia de cualquiera de las causales previstas en el artículo 114 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el Superintendente Nacional de Salud podrá ordenar o autorizar a las entidades vigiladas, la adopción individual o conjunta de las medidas de que trata el artículo 113 del mismo Estatuto, con el fin de salvaguardar la prestación del servicio público de salud y la adecuada gestión financiera de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Las medidas especiales que se ordenen se regirán por lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, incluido el artículo 291 y siguientes de ese estatuto, en lo que resulte pertinente a las medidas especiales; el Decreto número 2555 de 2010; las disposiciones aplicables del Sector Salud y las normas que los sustituyan, modifiquen o complementen (...)"

[9] **Jaime Orlando Santofimio Gamboa,** *COMPENDIO DE DERECHO ADMINISTRATIVO,* Bogotá D.C, Universidad Externado de Colombia, 2017, pp. 183-184.

[10] Radicado 11001-03-06-000-2017-00192-00(2358) M.P. Edgar González López

Continuación de la resolución, **"Por la cual se ordena la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a FAMISANAR EPS SAS identificada con el NIT 830.003.564-7"**

ocurrencia de alguna de las causales de toma de posesión previstas en el numeral 1 del artículo 114 del EOSF, la SNS tiene la obligación de verificar en forma detallada y exhaustiva los hechos que sustentan la medida; la necesidad y proporcionalidad de su adopción e, incluso, si es conveniente adoptar o no alguna de las medidas de salvamento previstas en el art. 113 del EOSF, antes de adoptar la medida de toma de posesión. Por el contrario, no es posible afirmar que la medida de toma de posesión es una "medida extrema", en el entendido que solo procede cuando se han agotado previamente las medidas de salvamento prevista en el art. 113 del EOSF, pues como ya se analizó, esta decisión discrecional de la SNS" **(PÁG. 21)**

Que, de acuerdo con lo anterior, se entrará a precisar, en la situación particular de **FAMISANAR EPS SAS,** sí en cada caso, si se configuran alguna o algunas de las causales como presupuestos normativos que autorizan la toma de posesión:

e. <u>Cuando persista en violar sus Estatutos o alguna Ley</u>

Que, los problemas financieros de la EPS han incidido directamente en la garantía del derecho fundamental a la salud de sus afiliados y que han afectado directamente el goce efectivo de este derecho fundamental, consagrado como un derecho a la preservación de salud y bienestar[11], de acuerdo con las normas que regulan la prestación del servicio a la salud, desconociendo entonces los mandatos constitucionales de protección.

Que, además de lo anteriormente señalado, la EPS también ha incumplido con algunas de las condiciones de habilitación conforme a lo dispuesto en la Resolución 497 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, evidenciado en el informe final de auditoría[12] realizada a **FAMISANAR EPS SAS** en cumplimiento al Auto número 2023310000000359-7 del 10 de marzo de 2023.

Que, la anterior situación permite, entre otras, evidenciar que la EPS no está cumpliendo con su objeto social y así, vulnerando el contenido esencial o mínimo del derecho a la salud fijado en el segmento inicial del artículo 6 de la Ley 1751 de 2015[13]: donde la continuidad[14], disponibilidad[15], accesibilidad[16], calidad, actúan como principios fijados para la actividad que ejerce el particular como asegurador. A lo que se agrega, el desconocimiento del principio de oportunidad en la prestación como una condición de las prestaciones necesarias para todos estos usuarios, definido en la misma norma: *"(...) e) Oportunidad. La prestación de los servicios y tecnologías de salud deben proveerse sin dilaciones (...)".*

Que, de igual forma, se está generando una afectación del núcleo complementario del derecho conformado por el principio de continuidad fijado por el literal d) de la misma norma, así: *"(...) d)* Continuidad. Las personas tienen derecho a recibir los servicios de salud de manera continua. Una vez la provisión de un servicio ha sido iniciada, este no podrá ser interrumpido por razones administrativas o económicas*".*

---

[11] Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, Bogotá, Colombia, 1948, artículo XI: "Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad"

[12] Informe trasladado a la EPS el 29 de mayo de 2023 mediante radicado 20233100000875831 por parte de la Dirección de Inspección y Vigilancia para Entidades de Aseguramiento en Salud.

[13] Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones.

[14] "d) Continuidad. Las personas tienen derecho a recibir los servicios de salud de manera continua. Una vez la provisión de un servicio ha sido iniciada, este no podrá ser interrumpido por razones administrativas o económicas;

[15] "a) Disponibilidad. El Estado deberá garantizar la existencia de servicios y tecnologías e instituciones de salud, así como de programas de salud y personal médico y profesional competente";

[16] "(...) c) Accesibilidad. Los servicios y tecnologías de salud deben ser accesibles a todos, en condiciones de igualdad, dentro del respeto a las especificidades de los diversos grupos vulnerables y al pluralismo cultural. La accesibilidad comprende la no discriminación, la accesibilidad física, la asequibilidad económica y el acceso a la información (...)"

Que, el derecho a la salud se considera como un típico derecho social y puede hacerse valer tanto del Estado y los poderes públicos[17], por lo que implica una dimensión protectora y promotora de los derechos fundamentales[18], como la libertad, la igualdad y, principalmente, una participación en los bienes sociales básicos[19] a través de estos derechos. Ello quiere decir que tiene elementos de configuración como un derecho social o prestaciones y que a través suyo se desarrolla una finalidad especial: el derecho a la asistencia sanitaria.
Que, lo anterior redunda en un deber de concreción[20] o realización del derecho a la salud con la Ley 1751 de 2015. A partir de ahí, los estándares del SGSSS deben ser *(re) interpretados* conforme a[21] las nuevas reglas del derecho fundamental.

Que esta reconfiguración aplicada al caso de la EPS implicará una infracción de dos preceptos del derecho fundamental; las reglas que regulan la producción[22] en las condiciones fijadas por los literales a) a d) del artículo 6 y, en paralelo, las normas que regulan los principios que deben regir su prestación o dimensión objetiva[23] conformado por los literales d) y e).

Adicionalmente, es importante recordar que tal como se indicó, también se establece la persistencia en el incumplimiento de las normas cuando se indican qué:

> "Que, las situaciones evidenciadas (se encuentran relacionadas con dos de las causales de toma de posesión aquí especificadas, como son la prevista el literal a) del artículo 114 del EOSF sobre incumplimiento de obligaciones y, la del literal e) sobre persistencia en el incumplimiento de las normas legales, en este caso, las del SGSSS".

Que, en consecuencia, incumple las obligaciones que le asisten como parte de la función indelegable de aseguramiento (art. 14 L. 1122 de 2007) como se evidencia en las conclusiones del concepto técnico referidas en la presente decisión, afectando a la población afiliada incluidos sujetos de especial protección, en la garantía del derecho fundamental a la salud.

g. <u>Cuando se reduzca su patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito</u>

Que, de conformidad con la información reportada por el vigilado a través del archivo tipo FT001 - "Catálogo de Información Financiera para fines de Supervisión", se observa que, **FAMISANAR EPS SAS** presenta entre diciembre de 2021 y junio de 2023, una estructura financiera que ha transitado desde un superávit patrimonial de $141.580 millones en 2021 a un déficit patrimonial de -$1.090.509 millones en diciembre de 2022 y -$1.199.140 millones en junio de 2023.

---

[17] **Antonio Baldassarre**, *LOS DERECHOS SOCIALES*, Bogotá D.C, 2001, Universidad Externado de Colombia, Primera Edición, pp167 - 168

[18] **UE Wolkmann.**, *ELEMENTOS DE UNA TEORÍA DE LA CONSTITUCIÓN ALEMANA*, óp.cit.p.282

[19] **UE Wolkmann.**, *ELEMENTOS DE UNA TEORÍA DE LA CONSTITUCIÓN ALEMANA*, óp.cit.p.282

[20] **Gregorio Peces Barba Martínez**, CURSO DE TEORÍA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, Teoría general con la colaboración de Rafael de Asís Roig, Carlos R. Fernández Liesa, Ángel Llamas Cascón, Madrid, 1995, Universidad Carlos III Boletín Oficial del Estado, p.180.

[21] **Konrad Hesse**, "LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL" En ESCRITOS DE DERECHO CONSTITUCIONAL, Segunda Edición, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales Fundación Coloquio Jurídico Europeo, Madrid, 2012, p.71 (traducción de P. Cruz Villalón y M. Aspitarte Sánchez)

[22] **Gregorio Peces Barba Martínez**, CURSO DE TEORÍA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, Teoría general, *óp.cit.p.* 371-372

[23] **Gavara de Cara, Juan Carlos**, LA PROYECCIÓN DE LA DIMENSIÓN OBJETIVA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EL ARTÍCULO 101 CE, Barcelona, BOSCH EDITOR, 2011, p. 14

Continuación de la resolución, **"Por la cual se ordena la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a FAMISANAR EPS SAS identificada con el NIT 830.003.564-7"**

Que, de acuerdo con los resultados del patrimonio a junio de 2023, este se ubica por debajo del 50% del capital suscrito.

h. <u>Cuando existan graves inconsistencias en la información que suministra a la Superintendencia Nacional de Salud que a juicio de ésta no permita conocer adecuadamente la situación real de la entidad</u>

Que, **FAMISANAR EPS SAS** no reconoció oportunamente cuentas por pagar y costos por Reservas Técnicas por $602.370 millones en la vigencia 2021, de los cuales, $474.489 millones correspondían a Reservas Técnicas Conocidas No Liquidadas y $284.182 millones correspondían a Reservas Técnicas por Glosas Pendientes por Conciliar. De este último rubro, la EPS estaba obligada a reconocer al menos el 45% de las glosas pendientes por conciliar el 31 de diciembre de 2021, de conformidad con lo definido por la Circular Externa 00002 de 2021 de la Superintendencia Nacional de Salud; es decir, debía haber reconocido contablemente, como mínimo $127.881 millones; como consecuencia, la entidad realizó el reconocimiento extemporáneo de sus pasivos y costos al cierre de la vigencia de 2022 generando la reexpresión de estados financieros. Lo anterior afectando de forma directa la información financiera reportada a esta superintendencia en el marco de la Circular Externa 0016 de 2016, hecho que se encuadra en lo señalado en la causal h) del artículo 114 del EOSF, generando alerta frente a la confiabilidad de los resultados de siniestralidad, Capital Mínimo, Patrimonio Adecuado y Régimen de Inversiones correspondientes a la vigencia 2021.
Que, lo anterior redunda en lo relacionado con el reporte de información bajo las reglas especiales y deberes propios que como actor del sistema deberá cumplir, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 37 de la Ley 1122 de 2007, los postulados de razonabilidad, calidad, consistencia y confiabilidad, así como el principio de transparencia definido en el numeral 3.14 del artículo 3 de la Ley 1438 de 2011 que fija los deberes de publicidad, claridad y visibilidad de la información del sistema.

i. <u>Cuando la entidad no cumpla los requerimientos mínimos de capital de funcionamiento previstos</u>

Que, la citada causal consignada en el literal i) del artículo 114 sobre el incumplimiento del capital mínimo para su funcionamiento, se configura sin duda alguna, soportada en el análisis técnico realizado por la delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud a corte de junio de 2023, del cual se extraen los siguientes resultados:

Capital Mínimo: -$1.104.400 millones,
Patrimonio Adecuado: -$1.480.644 millones

Que este incumplimiento debe interpretarse a partir de los estándares normativos existentes en el SGSSS y las reglas del Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social 780 de 2016:

"ARTÍCULO 2.5.2.2.1.5. CAPITAL MÍNIMO. Las entidades a que hace referencia el artículo2.5.2.2.1.2 del presente decreto deberán cumplir y acreditar ante la Superintendencia Nacional de Salud el capital mínimo determinado de acuerdo con las siguientes reglas:

1. El monto de capital mínimo a acreditar para las entidades que se constituyan a partir del 23 de diciembre de 2014 será de ocho mil setecientos ochenta y ocho millones de pesos ($8.788.000.000) para el año 2014. Además del capital mínimo anterior, deberán cumplir con un capital adicional de novecientos sesenta y cinco millones de pesos

($965.000.000) por cada régimen de afiliación al sistema de salud, esto es contributivo y subsidiado, así como para los planes complementarios de salud.

Para efectos de acreditar el capital suscrito y pagado o el monto de los aportes en el caso de entidades solidarias, solo computarán los aportes realizados en dinero.

Las entidades que al 23 de diciembre de 2014 se encuentren habilitadas para operar el aseguramiento en salud, deberán acreditar el Capital Mínimo señalado en el presente numeral, en los plazos previstos en el artículo2.5.2.2.1.12 del presente decreto. Para efectos de acreditar las adiciones al capital suscrito y pagado o el monto de los aportes en el caso de entidades solidarias que se requieran por efectos de la presente norma, solo computarán los aportes realizados en dinero.

Los anteriores montos se ajustarán anualmente en forma automática en el mismo sentido y porcentaje en que varíe el índice de precios al consumidor que suministre el DANE. El valor resultante se aproximará al múltiplo en millones de pesos inmediatamente superior. El primer ajuste se realizará en enero de 2015, tomando como base la variación del índice de precios al consumidor durante 2014.

2. La acreditación del capital mínimo resultará de la sumatoria de las siguientes cuentas patrimoniales: capital suscrito y pagado, capital fiscal o la cuenta correspondiente en las Cajas de Compensación Familiar, capital garantía, reservas patrimoniales, superávit por prima en colocación de acciones, utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores, revalorización del patrimonio, y se deducirán las pérdidas acumuladas, esto es, las pérdidas de ejercicios anteriores sumadas a las pérdidas del ejercicio en curso.

   Para el caso de las entidades solidarias la acreditación del capital mínimo resultará de la sumatoria del monto mínimo de aportes pagados, la reserva de protección de aportes, excedentes no distribuidas de ejercicios anteriores, el monto mínimo de aportes no reducibles, el fondo no susceptible de repartición constituido para registrar los excedentes que se obtengan por la prestación de servicios a no afiliados de acuerdo con el artículo10de la Ley 79 de 1988, los aportes sociales amortizados o readquiridos por la entidad cooperativa en exceso del que esté determinado en los estatutos como monto mínimo de aportes sociales no reducibles y el fondo de readquisición de aportes y se deducirán las pérdidas de ejercicios anteriores, sumadas a las pérdidas del ejercicio en curso.

   En todo caso en concordancia con la Ley 79 de 1988, deberá establecerse en los estatutos que los aportes sociales no podrán reducirse respecto de los valores previstos en el presente artículo.".

Que, conforme al anterior análisis que evidencia el deterioro de la entidad vigilada en los componentes financiero, técnico científico y jurídico se evidencian las causales previstas en los literales **e), g) h), i)** del artículo 114 del EOSF y la ocurrencia de los presupuestos normativos para ordenar la toma de posesión e intervención forzosa administrativa para administrar de **FAMISANAR EPS SAS,** en consonancia con las disposiciones de los artículos 9.1.1.1.1 y 9.1.3.1.1 del Decreto 2555 de 2010 y ante la inminente afectación del aseguramiento en salud y de la garantía de la prestación de los servicios de salud y, en cumplimiento de los preceptos establecidos en los artículos 48, 49 y 365 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con las normas del SGSSS.

Que el Comité de Medidas Especiales de la Superintendencia Nacional de Salud, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 3° de la Resolución 20215100013052-6 de 2021, y una vez analizada la situación de la EPS de acuerdo con el concepto presentado por la Superintendente Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud en la citada sesión, recomendó al Superintendente Nacional de Salud ordenar la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a **FAMISANAR EPS SAS.**

Que, la medida anteriormente referida, buscará verificar una de las dos circunstancias descritas en el inciso dos del artículo 115 del EOSF, esto es, verificar

si es posible situar a la entidad en condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social, o si se pueden realizar otras operaciones que permitan lograr mejores condiciones para el pago total o parcial de sus acreencias pendientes, además de, la adecuada prestación del servicio de salud a la población afiliada.

Que, la Corte Constitucional en Sentencia C- 246 del 5 de junio de 2019[24], al referirse a las actuaciones que en materia de las facultades de control corresponde adelantar a la Superintendencia Nacional de Salud en el SGSSS, expresa:

> "[...] Por otro lado, no considera la Corte que sea irrazonable atribuir a la Superintendencia Nacional de Salud la función de liquidar entidades del sector salud en circunstancias determinadas. En este sentido, se trata del ejercicio de una competencia que tiene expreso fundamento constitucional y que fue asignad(a) al Gobierno nacional (artículo 49, numerales 8 y 23 del artículo 150, numeral 22 del artículo 189, artículo 334 y artículo 365 de la Constitución). De acuerdo con las normas que se refieren a ella, el Estado tiene el deber de garantizar la calidad de vida de las personas, por lo que debe ejercer la inspección y vigilancia y control sobre los servicios públicos, entre los cuales se encuentra el servicio público de salud. Uno de los mecanismos a través de los cuales se puede cumplir tal atribución es la posesión con fines de liquidación, que pretende proteger el interés general, preservar el orden público, el orden económico y evitar perjuicios graves e indebidos a los usuarios afectados por problemas en la gestión de las empresas de servicios públicos (ver supra, numerales)". **Fundamento jurídico 48.**

Que, las decisiones adoptadas por esta entidad en el presente acto administrativo, como cabeza del sistema de inspección, vigilancia y control *para la defensa de los derechos de los usuarios y preservar la confianza pública y los recursos del Sistema*, en ejercicio de sus atribuciones y competencias, se expiden sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, fiscal, disciplinaria o penal que corresponda a los representantes legales y demás responsables de la administración y manejo de los recursos públicos, por incumplimiento de sus deberes y de las instrucciones y órdenes impartidas por la superintendencia, así como por la violación de la normas vigentes sobre la prestación del servicio público de salud y el SGSSS que llegaren a determinarse por las autoridades competentes, sean estas por acción u omisión.

Que, con fundamento en las anteriores consideraciones hasta aquí desarrolladas, es claro que los participantes en la operación del aseguramiento han sido autorizados para prestar un servicio público objeto de intervención, vigilado por el Estado a través de la Superintendencia Nacional de Salud. Así, cuando en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia esta entidad establece que existen circunstancias que motiven una respuesta distinta al seguimiento y requerimientos realizados previamente, que se han mostrado insuficientes o no han sido atendidas en forma adecuada para superarlas, está legalmente autorizada y legitimada para ejercer las facultades de control conferidas por el legislador, con el propósito de velar por el interés general y la debida prestación del servicio público de salud, así como por la protección de los recursos del Sistema.

Que, por tanto, se tienen en cuenta aquellos aspectos que comportan una gran incidencia para la garantía del derecho fundamental a la salud del que son titulares los usuarios de la EPS, en especial los sujetos de especial protección constitucional, en el marco de la prestación de un servicio público intervenido cuya dirección, coordinación, vigilancia y control corresponde al Estado y que debe prestarse por los responsables de cumplir con las funciones indelegables del aseguramiento con sujeción entre otros, a los principios de eficiencia, oportunidad, accesibilidad y calidad, además de todas las reglas y demás principios contenidos en la normativa del Sistema, siendo parte de las funciones de esta superintendencia *exigir la*

[24] Si bien esta actividad se relaciona con las competencias de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud, sobre las Empresas Sociales del Estado, sobre los alcances constitucionales de la Superintendencia son de interés y por ello se traen a colación aquí.

observancia de los principios y fundamentos del servicio público esencial de Seguridad Social en Salud[25].

Que, la Superintendencia Nacional de Salud expidió la Resolución 002599 del 6 de septiembre de 2016, por la cual se dictaron disposiciones relacionadas con la inscripción, designación, fijación de honorarios, posesión, funciones, obligaciones, seguimiento, sanciones, reemplazo de los agentes interventores, liquidadores y contralores de las entidades objeto de medidas especiales de toma de posesión e intervención forzosa administrativa y de medidas especiales previstas en el artículo 68 de la Ley 1753 de 2015 por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.

Que, en sesión del 12 de septiembre de 2023, el Comité de Medidas Especiales presentó tres (3) hojas de vida de agentes especiales, vigentes en el Registro de Interventores, liquidadores y contralores – RILCO- las cuales cumplen los requisitos, para adelantar la toma de posesión e intervención forzosa administrativa para administrar a **FAMISANAR EPS SAS,** que cumplen con los requisitos previamente establecidos para la categoría aplicable a la entidad objeto de la intervención. De igual manera, se presentaron tres (3) hojas de vida de contralores, vigentes en el Registro de Interventores, liquidadores y contralores – RILCO- las cuales cumplen los requisitos para actuar como contralores designados en la toma de posesión e intervención forzosa administrativa para administrar de **FAMISANAR EPS SAS.**

Que, en la misma sesión desarrollada el 12 de septiembre de 2023 el Despacho del Superintendente Nacional de Salud, una vez analizadas las hojas de vida en el Comité de Medidas Especiales, decidió designar a **SANDRA MILENA JARAMILLO AYALA** identificada con cédula de ciudadanía número 65.766.395 de Ibagué, para actuar como interventora para la medida ordenada en la presente decisión y la designación de la firma **NEXIA MONTES & ASOCIADOS SAS** como contralor de la toma de posesión forzosa administrativa para administrar de **FAMISANAR EPS SAS,** recomendaciones acogidas por el señor Superintendente Nacional de Salud.

Que, de conformidad con lo expuesto, el Superintendente Nacional de Salud acoge la recomendación del Comité de Medidas Especiales, ordenar la medida de intervención forzosa administrativa para administrar a **FAMISANAR EPS SAS**, por el término de un (1) año, de conformidad al artículo 116 del EOSF, designando como **INTERVENTORA** a **SANDRA MILENA JARAMILLO AYALA** identificada con la cédula de ciudadanía no. 65.766.395 de Ibagué y la designación de la firma **NEXIA MONTES & ASOCIADOS SA** como contralor.
Que el incumplimiento en las funciones indelegables de aseguramiento (L. 1122 art. 14) implica una restricción al acceso y garantía en la prestación de los servicios de salud. En ese orden de ideas, con ese propósito se impondrá la medida de restricción de la capacidad de afiliación prevista en el artículo 2.1.10.5.1 (modificado por el Decreto 1184 de 2016 art. 1).

Que, en virtud de lo anteriormente expuesto,

IV. RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. ORDENAR la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y, la intervención forzosa administrativa para administrar **FAMISANAR EPS SAS** identificada con el NIT 830003564-7 por el término de un (1) año, es decir, desde el 15 de septiembre de 2023 hasta el 15 de septiembre de

[25] Ley 1122 de 2007, artículo 39 "(...) La Superintendencia Nacional de Salud, en ejercicio de sus atribuciones de inspección, vigilancia y control, desarrollará, además de los señalados en otras disposiciones, los siguientes objetivos (...)"

2024, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. COMISIONAR a la **SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA ENTIDADES DE ASEGURAMIENTO EN SALUD,** para que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 291 numeral 4 del Decreto Ley 663 de 1993 y el numeral 23 del artículo 22 del Decreto 1080 de 2021, ejecute en nombre de la Superintendencia Nacional de Salud, la medida adoptada en el presente acto administrativo, quien podrá ordenar que se decreten y practiquen las medidas necesarias para dar cumplimiento a los objetivos de la toma de posesión; así como para que, adelante el proceso de notificación del presente acto administrativo.

Se advierte que, si la presente decisión no se puede notificar personalmente al representante legal de **FAMISANAR EPS SAS**, o a quien haga sus veces, se notificará por un aviso que se fijará en lugar público de las oficinas de la administración del domicilio social de la EPS, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato, de todo lo cual se dejará constancia por parte del funcionario comisionado para el efecto, conforme con lo dispuesto en el inciso anterior.

ARTÍCULO TERCERO. ORDENAR a la interventora de **FAMISANAR EPS SAS**, presentar e implementar **un plan de trabajo**, dentro del término de treinta (30) días calendario siguientes a su posesión que será evaluado, discutido y aprobado por la Dirección de Medidas Especiales para EPS y Entidades Adaptadas[26] que dé cumplimiento a las siguientes órdenes:

1. Implementar y ejecutar las acciones del plan de mejoramiento viabilizado a través del radicado 20233100001249521 del 31 de julio de 2023, definidas para subsanar los hallazgos de la auditoría realizada a las condiciones de habilitación en el marco de la Resolución 497 de 2021 y reportar periódicamente la información de avances conforme a la metodología definida por la Dirección de Inspección y Vigilancia.

2. Implementar y ejecutar estrategias que impacten el estado de salud de los afiliados de acuerdo con el modelo de atención en salud, identificando los resultados por cada grupo de riesgo de la población afiliada, en el término máximo de seis (6) meses.

3. Evaluar y presentar los resultados de la implementación de las rutas integrales de atención RIAS que impactan en los resultados de salud en el término máximo de seis (6) meses.

4. Resolver de fondo y de acuerdo con el término establecido por la Circular Externa 008 de 2018 de la Superintendencia Nacional de Salud, las reclamaciones en salud- interpuestas por la población afiliada, con especial atención en las clasificadas como "riesgo vital" y dar solución efectiva a aquellas que se encuentran pendientes por resolver.

5. Evaluar y operativizar la red de prestadores de servicios de salud de tal forma que permita a la población afiliada acceder a los servicios de salud en condiciones de oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad, en un término máximo de siete (7) meses.

[26] De conformidad al parágrafo del artículo 28 de la Resolución 2599 de 2016, (Modificado por la Resolución 20221300000004146 de 2022) *La aprobación del plan de trabajo propuesto por el agente interventor o liquidador, según corresponda, no implica aprobación del presupuesto bajo el entendido que se trata de proyecciones o estimaciones del presupuesto que han sido efectuadas por el responsable de la programación y ejecución de este.*

6. Cumplir con las condiciones financieras y de solvencia establecidas en el Capítulo 2, Sección 1 del Decreto Reglamentario 780 de 2016 (Capital mínimo, Patrimonio adecuado y Régimen de inversión de las reservas técnicas), ejecutando estrategias para el fortalecimiento patrimonial.

7. Implementar y ejecutar, bajo la metodología actuarial acogida por la entidad y aprobada por esta superintendencia, el cálculo de la reserva técnica. De igual forma, deberá implementar actividades de control operacional que garanticen la evaluación, seguimiento y monitoreo para el reconocimiento oportuno de las reservas técnicas en la estructura financiera de la entidad.

8. Diseñar, implementar y ejecutar acciones con seguimiento mensual, enfocadas en la contención y reducción de la siniestralidad, por tipo de contratación (evento, cápita, PGP, entre otros), tipo de red (pública y privada) y relación económica (vinculados y no vinculados), de acuerdo con el diagnostico o evaluación de la estructura de costos que realice la entidad.

9. Implementar y ejecutar seguimiento a la evidencia que respalda la recuperación del activo por impuesto diferido en periodos futuros y que apoya su reconocimiento en Estados Financieros. Dicho seguimiento deberá contemplar, como mínimo, las proyecciones de: 1) ingresos operacionales y no operacionales, 2) gasto administrativo y 3) costo en salud. Al igual que, realizar los ajustes que correspondan al valor de activo por impuesto diferido de conformidad con el marco técnico normativo contable que aplique.

10. Implementar y ejecutar las acciones que garanticen la depuración, saneamiento y legalización oportuna de los anticipos realizados a prestadores y proveedores de servicios y tecnologías en salud, en el término máximo de tres (3) meses.

11. Implementar y ejecutar acciones que garanticen la conciliación y depuración de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, principalmente con vinculados económicos, en el término máximo de tres (3) meses.

12. Realizar la liquidación de los acuerdos de voluntades terminados con la red prestadora de servicios de salud y proveedores de tecnologías en salud, así como, el seguimiento a los que se encuentran en ejecución y adoptar las medidas a que hubiere lugar en caso de evidenciar incumplimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo segundo del Decreto 441 de 2022.

13. Adelantar el proceso conciliatorio de los depósitos judiciales contra lo registrado en el Banco Agrario, realizando la depuración contable a la que haya lugar. A su vez, realizar las gestiones efectivas frente a la recuperación de los recursos del Sistema General de Seguridad Social y remitir dentro del informe de gestión el detalle de las acciones adelantadas.

14. Implementar y ejecutar las estrategias necesarias para garantizar prestación de los servicios de salud a la población afiliada, de manera que se reduzca el riesgo jurídico por la interposición de acciones de tutela.

PARÁGRAFO PRIMERO. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 18 de la Resolución 2599 de 2016[27], el agente interventor deberá presentar:

[27] Modificada mediante Resolución 202213000000414-6 de 2022

1) Presupuesto de actividades
2) Cronograma de actividades
3) Indicadores de gestión de acuerdo con las actividades ordenadas en el artículo tercero
4) Inventario preliminar de los activos de la entidad en un plazo máximo de treinta (30) días a partir de su posesión, que deberá ser presentado ante la Superintendencia Nacional de Salud dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al vencimiento de dicho término.
5) Informe sobre la situación encontrada en la entidad y sobre la gestión de quien ejercía la representación legal antes de la toma de posesión.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Advertir a la interventora que, en caso de detectar alguna irregularidad o inconsistencia en la información contable, técnico científica, administrativa y jurídica relacionada con la gestión del exrepresentante legal, deberá iniciar las acciones legales respectivas, ante las autoridades competentes, informando de ellas a esta superintendencia. Además de los traslados a las entidades competentes.

ARTÍCULO CUARTO. ORDENAR el cumplimiento de las siguientes medidas preventivas, dé conformidad con lo establecido el artículo 9.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010, así:

1. Medidas preventivas obligatorias.

a) La inmediata guarda de los bienes de la intervenida y la colocación de sellos y demás seguridades indispensables;

b) La orden de registro del acto administrativo que dispone la toma de posesión en la Cámara de Comercio del domicilio de la intervenida y en las del domicilio de sus sucursales; y si es del caso, la de los nombramientos de los administradores y del revisor fiscal;

c) La comunicación a los jueces de la República y a las autoridades que adelanten procesos de jurisdicción coactiva sobre la suspensión de los procesos de la ejecución en curso y la imposibilidad de admitir nuevos procesos de esta clase contra la entidad objeto de toma de posesión con ocasión de las obligaciones anteriores a dicha medida.

d) La advertencia que, en adelante, no se podrá iniciar ni continuar procesos o actuación alguna contra la intervenida sin que se notifique personalmente al Interventor, so pena de nulidad;

e) La comunicación a la Superintendencia de Notariado y Registro, para que dicha entidad mediante circular ordene a todos los Registradores de Instrumentos Públicos que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la toma de posesión se sujeten a las siguientes instrucciones:

   i. Informar al interventor sobre la existencia de folios de matrícula en los cuales figure la entidad intervenida como titular de bienes o cualquier clase de derechos; disponer el registro de la toma de posesión en los folios de matrícula de los bienes inmuebles de la intervenida; cancelar los embargos decretados con anterioridad a la fecha de la adopción de la medida de toma de posesión que afecten

los bienes de la intervenida a solicitud elevada solo por el agente especial mediante oficio; y cancelar los gravámenes que recaigan sobre los bienes de la entidad intervenida a solicitud elevada solo por el agente especial mediante oficio.

ii. Se abstengan de cancelar los gravámenes constituidos a favor de la intervenida sobre cualquier bien cuya mutación esté sujeta a registro, salvo expresa autorización del interventor; así como de registrar cualquier acto que afecte el dominio de bienes de propiedad de la intervenida a menos que dicho acto haya sido realizado por la persona mencionada, caso en el cual deben cancelar la respectiva anotación sobre el registro de toma de posesión.

f) La comunicación al Ministerio de Transporte, para que dicha entidad directamente o mediante solicitud a todas las secretarias de tránsito y transporte proceda a realizar la inscripción de la medida de toma de posesión en el registro de automotores correspondiente o en el registro único nacional de tránsito, para que cancelen los embargos decretados con anterioridad a la fecha de la adopción de la medida de toma de posesión que afecten los vehículos de la intervenida; que cancelen los gravámenes que recaigan sobre los vehículos de la intervenida a solicitud unilateral del agente especial mediante oficio; para que se abstengan de cancelar los gravámenes constituidos sobre vehículos a favor de la intervenida, cuya mutación esté sujeta a registro, salvo expresa autorización del agente especial y para que se abstengan de registrar cualquier acto que afecte el dominio de vehículos de propiedad de la intervenida a menos que dicho acto haya sido realizado por la persona mencionada;

g) La prevención a todo acreedor y en general a cualquier persona que tenga en su poder activos de propiedad de la intervenida, para que proceda de manera inmediata a entregar dichos activos al agente especial;

h) La advertencia de que el interventor está facultado para poner fin a cualquier clase de contratos existentes al momento de la toma de posesión, si los mismos no son necesarios. Si se decide la liquidación, los derechos causados hasta la fecha de la intervención serán reconocidos y pagados de conformidad con las reglas que rigen el proceso de liquidación forzosa administrativa;

i) La prevención a los deudores de la intervenida de que sólo podrán pagar al interventor; advirtiendo la inoponibilidad del pago hecho a persona distinta, así como el aviso a las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud sobre la adopción de la medida, para que procedan de conformidad;

j) La prevención a todos los que tengan negocios con la intervenida, de que deben entenderse exclusivamente con el interventor, para todos los efectos legales.

PARÁGRAFO. La presente medida habilita a la interventora a tomar las medidas de salvamento previstas en el artículo 9.1.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010.

ARTÍCULO QUINTO. DISPONER que los gastos que ocasione la decisión aquí ordenada serán a cargo de **FAMISANAR EPS SAS** en los términos de ley.

Continuación de la resolución, **"Por la cual se ordena la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a FAMISANAR EPS SAS identificada con el NIT 830.003.564-7"**

ARTÍCULO SEXTO. ORDENAR la separación del gerente o representante legal de **FAMISANAR EPS SAS** y la Junta Directiva, de conformidad con el artículo 116 del EOSF.

PARÁGRAFO: Se excluirá de la remoción del presente artículo, el máximo órgano de dirección de la sociedad de **FAMISANAR EPS SAS**, sin perjuicio que, en ejercicio de esta competencia facultativa de acuerdo con el artículo 9.1.1.1.1 y numeral 2 del artículo 9.1.1.2.4 del Decreto 2555 de 2010, la interventora pueda decidir posteriormente su separación.

ARTÍCULO SÉPTIMO. DESIGNAR como interventora de **FAMISANAR EPS SAS**, a la doctora **SANDRA MILENA JARAMILLO AYALA** identificada con cédula de ciudadanía número **65.766.395 de Ibagué**, quien ejercerá las funciones propias de su cargo, de acuerdo con lo previsto en las normas del Sistema General de Seguridad Social, el EOSF y demás normas que sean aplicables, para dar cumplimiento a los fines de la toma de posesión e intervención administrativa para administrar.

El cargo de interventor es de obligatoria aceptación. Por tanto, el designado tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha en que sea notificado para aceptar el cargo y posesionarse del mismo, ante el despacho del Superintendente delegado para Medidas Especiales de la Superintendencia Nacional de Salud; de conformidad con el artículo primero de la Resolución 2021300000017762-6 del 23 de diciembre de 2021 y el inciso segundo del artículo décimo sexto de la Resolución 002599 de 2016.

Si el interventor designado rechaza el nombramiento o no se posesiona dentro de los términos indicados en el presente acto administrativo, será excluido del registro, a menos que, en cumplimiento de su deber de información manifieste que está incurso en una situación de conflicto de interés, o acredite la ocurrencia de una circunstancia de fuerza mayor que le impida llevar a cabo el encargo. En este evento el Superintendente Nacional de Salud podrá designar una nueva persona de los candidatos restantes que le haya presentado el Comité de Medidas Especiales.

El interventor designado ejercerá las funciones propias de su cargo, previa posesión de éste, y tendrá la guarda y administración de los bienes que se encuentren en poder de la junto con los demás deberes y facultades de Ley, garantizando el aseguramiento y la prestación del servicio de salud.

De conformidad con lo previsto en el EOSF, particularmente lo dispuesto en los numerales 1, 2, y 6 del artículo 295 y el artículo 9.1.1.2.2 del Decreto 2555 de 2010, el interventor cumple funciones públicas transitorias, es auxiliar de la justicia, tiene autonomía en la adopción de decisiones relacionadas con el ejercicio de sus funciones y para ningún efecto, puede reputarse como trabajador o empleado de la entidad objeto de la medida de toma de posesión, ni de la Superintendencia Nacional de Salud.

ARTÍCULO OCTAVO. ORDENAR a la **interventora**, presentar ante la Superintendencia Nacional de Salud los informes que a continuación se describen, los cuáles serán evaluados, discutidos y aprobados por la Dirección de Medidas Especiales para EPS y Entidades Adaptadas, que contenga la siguiente información:

1. Informes periódicos: Dentro de los veinte (20) primeros días calendario de cada mes, presentar un informe periódico que deberá contener análisis de

los componentes financiero, jurídico, técnico-científico y administrativo de la vigilada, así como cualquier otro análisis que considere relevante para esta superintendencia.

2. Informe al vencimiento de la medida: Mínimo cinco (5) días hábiles previos al vencimiento de la medida ordenada en el artículo primero de la presente decisión, deberá presentar informe final de resultados en el cual, se establezca si es posible poner a la entidad en condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social, si se pueden realizar otras operaciones que permitan lograr mejores condiciones de la vigilada o, si la entidad debe ser objeto de liquidación. Adicionalmente en este informe indicará si es necesario prorrogar el término de intervención, de conformidad lo establecido el artículo 115 del EOSF.

3. Informe final: Deberá presentarse a la Superintendencia Nacional de Salud, a más tardar dentro de los diez (10) días calendario siguientes al momento en que sea informado de la decisión (bien sea por recusación, renuncia, remoción, cambio de la medida especial, muerte, incapacidad permanente, incapacidad temporal prolongada o cualquier otro motivo que de manera grave imposibilite el desempeño de funciones). En el mismo, se sintetizarán todas las actividades realizadas durante su ejercicio como interventor.

ARTÍCULO NOVENO. DESIGNAR a la firma **NEXIA MONTES & ASOCIADOS** identificada con NIT. 800.088.357-4, como contralor para la medida de toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar de **FAMISANAR EPS SAS** ordenada en el artículo primero del presente acto administrativo, quien ejercerá las funciones propias de su cargo, de acuerdo con lo previsto en las normas del SGSSS, el EOSF, el Código de Comercio y demás normas que le sean aplicables y responderá de acuerdo con ellas.

El cargo de contralor es de obligatoria aceptación, en consecuencia, el designado tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha en que sea notificado, para aceptar el cargo y posesionarse del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del articulo décimo sexto de la Resolución 002599 de 2016.

Si el contralor designado rechaza el nombramiento o no se posesiona dentro de los términos indicados en el presente acto administrativo, será excluido del registro, a menos que, en cumplimiento de su deber de información manifieste que está incurso en una situación de conflicto de interés, o acredite la ocurrencia de una circunstancia de fuerza mayor que le impida llevar a cabo el encargo. En este evento el Superintendente Nacional de Salud podrá designar una nueva persona de los candidatos restantes que le haya presentado el Comité de Medidas Especiales.

El contralor designado a través del representante legal y la persona natural designada para ejercer el cargo deberán posesionarse firmando el acta correspondiente en la entidad objeto de la medida ante el Superintendente Delegado para Entidades de Aseguramiento en Salud de conformidad con él artículo primero de la Resolución 2021300000017762-6 del 23 de diciembre de 2021 y el inciso segundo del artículo décimo sexto de la Resolución 002599 de 2016, o en las instalaciones de la Superintendencia Nacional de Salud, aportando prueba de la representación legal y del certificado que acredite el vínculo de la persona jurídica con la persona natural que en su nombre desarrollará las funciones como contralor.

Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 19 de la Resolución 002599 de 2016. Así mismo, aportarán documento en el cual manifiesten su responsabilidad solidaria en cualquier evento.

Al contralor designado le corresponderá realizar el seguimiento al desarrollo y ejecución de las actividades y estrategias planteadas por la entidad vigilada, así como el aval a los indicadores establecidos por esta Superintendencia en salvaguarda a la medida de toma de posesión e intervención forzosa administrativa para administrar a **FAMISANAR EPS SAS** y suministrar a la Superintendencia Nacional de Salud, la información que le sea solicitada en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control.

ARTÍCULO DÉCIMO. ORDENAR al contralor designado, salvaguardar la medida de intervención forzosa administrativa para administrar, adoptada a **FAMISANAR EPS SAS** realizando el seguimiento y monitoreo al desarrollo y ejecución de las acciones y estrategias implementadas para superar los hallazgos que dieron origen a la medida.

Por lo anterior, deberá:

1. Realizar el seguimiento a las acciones adelantadas por la interventora de **FAMISANAR EPS SAS** a más tardar dentro de los diez (10) días calendario siguientes al reporte del vigilado, de conformidad con la metodología dispuesta por la Superintendencia Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud, para los componentes administrativo, financiero, técnico-científico y jurídico, resultados que deberán ser entregados en el informe mensual. Además de presentar un plan de trabajo donde se les hará seguimiento a las órdenes establecidas en el artículo segundo y el cual contemplará también el cronograma para el seguimiento del desarrollo del proceso.

2. Presentar los informes que a continuación se describen en los cuales deberá incluir el avance en cada uno de los componentes objeto de seguimiento y que evidencien la ejecución y resultado realizado al proceso[28], mediante la presentación de los siguientes informes:

   2.1 Informe preliminar: Una vez posesionado le corresponderá presentar documentos de propuesta de: a) plan de trabajo, b) cronograma de actividades; c) diagnóstico: el mismo deberá contener la evaluación, observaciones y recomendaciones sobre aspectos relacionados con la situación administrativa, financiera, jurídica, laboral y técnico científica de la entidad vigilada, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a su posesión.

   2.2 Informe mensual: Deberá presentarse durante el término de la medida, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la entrega del informe de gestión mensual e información financiera presentada por el representante legal de la entidad, un informe a la Superintendencia Nacional de Salud, en el cual, se incluya el avance y la evaluación de la situación administrativa, financiera, jurídica, laboral y técnico científica de la entidad vigilada.

[28] Artículo 27 de la Resolución 2599 de 2016, modificado por la resolución 2022130000000414-6 de 2020.

2.3 Informe final: Deberá presentarse a la Superintendencia Nacional de Salud, a más tardar dentro de los diez (10) días calendario siguientes al momento en que sea informado de la decisión de designación de un nuevo contralor (bien sea por recusación, renuncia, remoción, muerte, incapacidad permanente, incapacidad temporal prolongada o cualquier otro motivo que de manera grave imposibilite el desempeño de funciones), o a la fecha de vencimiento de la medida. En el mismo, se sintetizarán todas las actividades realizadas durante su ejercicio como contralor, de conformidad con los parámetros establecidos en la Ley 43 de 1990 y con el grado de avance obtenido frente al plan de trabajo inicialmente propuesto.

PARÁGRAFO PRIMERO. El contralor designado ejercerá funciones públicas transitorias y tendrá la condición de auxiliar de justicia. En consecuencia, esta designación no constituye relación laboral alguna entre el designado y la entidad objeto de medida de intervención forzosa administrativa para administrar, ni entre aquél y la Superintendencia Nacional de Salud.

PARÁGRAFO SEGUNDO. La Superintendencia Nacional de Salud a través de la Dirección de Medidas Especiales para Entidades Promotoras de Salud y Entidades Adaptadas, evaluará y aprobará el documento presentado por el contralor designado, de acuerdo con el artículo 27 de la Resolución 2599 de 2016, modificado por la Resolución 2022130000000414-6 de 2022.

PARÁGRAFO TERCERO. Los criterios de oportunidad y calidad de la información solicitada por la Superintendencia Nacional de Salud al Contralor designado serán tenidos en cuenta para la evaluación de la gestión realizada al seguimiento de la medida administrativa.[29]

ARTÍCULO ÚNDECIMO. POSESIÓN DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRALOR. La Superintendente Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud de la Superintendencia Nacional de Salud realizará la posesión del interventor y contralor, de conformidad con lo señalado en el artículo segundo de la Resolución 202130000000174-6 del 24 de enero de 2021 expedida por esta superintendencia y el inciso 2º del artículo 16 de la Resolución 002599 de 2016.

ARTÍCULO DUODÉCIMO. CUMPLIMIENTO Y NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN. La presente resolución será de cumplimiento inmediato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 291 del EOSF y será a cargo del funcionario comisionado en los términos del artículo 2° del presente acto y se notificará de acuerdo con lo establecido en el artículo 9.1.2.1.1 del Decreto 2555 de 2010, para lo cual fijará un aviso por un día, en lugar público de las oficinas de la administración del domicilio social de la intervenida.

PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad con el inciso final del artículo 9.1.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010, dentro de los **tres (3) días siguientes** a la fecha en que se haga efectiva la medida, la resolución por la cual se adopte será **publicada** por una sola vez en la página web de la Superintendencia Nacional de Salud y en el diario oficial.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición en el efecto devolutivo, su interposición no suspenderá la ejecución de la medida de toma de posesión e intervención para administrar, la cual será de

[29] Artículo 23 de la Resolución 2599 de 2016.

14.

Continuación de la resolución, **"Por la cual se ordena la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a FAMISANAR EPS SAS identificada con el NIT 830.003.564-7"**

cumplimiento inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1966 de 2019, en concordancia con el artículo 335 del EOSF y el artículo 2.5.5.1.9 del Decreto780 de 2016. Dicho recurso podrá interponerse en el momento de la diligencia de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, ante el despacho del Superintendente Nacional de Salud el cual podrá ser remitido a la dirección habilitada para recibo de correspondencia: Carrera 68A N.º 24B - 10,Torre 3, piso 4 Edificio Plaza Claro, Bogotá D.C. (atención presencial de lunes a viernes 8:00 a.m. a 4:00 p.m.) o correo electrónico correointernosns@supersalud.gov.co de conformidad con lo previsto en el artículo 76 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO TÉRCERO. LIMITAR la capacidad para realizar nuevas afiliaciones y para aceptar traslados a **FAMISANAR EPS SAS**, identificada con Nit. 830003564-7 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1.10.5.1 del Decreto 780 de 2016, adicionado por el artículo 1 del Decreto 1184 de 2016.

ARTÍCULO DECIMO CUARTO. COMUNICAR el presente acto administrativo al Ministerio de Salud y Protección Social, en la dirección electrónica notificacionesjudiciales@minsalud.gov.co o a la dirección física Carrera 13 No. 32-76 en la ciudad de Bogotá; al Director General de la Entidad Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES en la dirección electrónica notificaciones.judiciales@adres.gov.co o a la dirección física en la Avenida Calle 26 No. 69-76 Torre 1 Piso 17 Centro Empresarial Elemento en la ciudad de Bogotá; al Director de la Cuenta de Alto Costo en la dirección electrónica administrativa@cuentadealtocosto.org o, a la dirección física en la Carrera 45 No.103-34 oficina 802 en Bogotá D.C., y a los gobernadores de los departamentos de Atlántico notificacionesjudiciales@atlantico.gov.co, Bolívar notificaciones@bolivar.gov.co, Boyacá, notificacionesjudiciales@boyaca.gov.co, Caldas notificacionesjudiciales@caldas.gov.co, Cesar notificacionesjudiciales@gobcesar.gov.co, Cundinamarca notificaciones@cundinamarca.gov.co, Huila notificaciones.judiciales@huila.gov.co, Magdalena notificacionjudicial@magdalena.gov.co, Meta notificacionesjudiciales@meta.gov.co, Nariño notificaciones@narino.gov.co, Quindío notificacionesjudiciales@quindio.gov.co, Risaralda notificaciones.judiciales@risaralda.gov.co, Santander notificaciones@santander.gov.co, Tolima notificaciones.judiciales@tolima.gov.co y Valle del Cauca njudiciales@valledelcauca.gov.co, y Bogotá D.C. notificacionesjudiciales@gobiernobogota.gov.co.

PARÁGRAFO COMUNICAR el presente acto administrativo a la Superintendencia del Subsidio Familiar al correo electrónico de notificaciones judiciales ssf@ssf.gov.co, teniendo en cuenta la participación accionaria de la EPS se encuentra la Caja Colombiana del Subsidio Familiar – COLSUBSIDIO y Caja de Compensación Familiar – CAFAM, en atención al artículo 2 de la Ley 1929 de 2018, a la Delegatura para la Función Jurisdiccional y de Conciliación y, al Grupo de Trabajo de Cobro Coactivo de la Secretaria General de la Superintendencia Nacional de Salud.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición

Dada en Bogotá D.C., a los 15 días del mes 09 de 2023.

Continuación de la resolución, **"Por la cual se ordena la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a FAMISANAR EPS SAS identificada con el NIT 830.003.564-7"**

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente por: Ulahi Dan Beltrán López

Ulahi Dan Beltrán López
SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD

Proyectó: Natalia Del Pilar Alfonso Villamil
Revisó: Laura Natalia Corredor Amaya -- MARIA ISABEL ANGEL ECHEVERRY -- EDWIN ALEJANDRO ACEVEDO GARCIA -- Ellecer Enrique Polo Castro 16000
Aprobó: Ulahi Dan Beltrán López

MEMORANDO PCSJM23-132

DE: **OFICINA DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**

PARA: **CONSEJOS SECCIONALES DE LA JUDICATURA**

ASUNTO: **Resolución 2023320030005625-6 del 15/09/2023 "*Por la cual se ordena la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a FAMISANAR EPS SAS*". NIT. 830.003.564-7**

FECHA: **19 de octubre de 2023**

Remito para su conocimiento y demás fines pertinentes la Resolución 2023320030005625-6 del 15 de septiembre de 2023, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, "*Por la cual se ordena la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a FAMISANAR EPS SAS*", lo anterior, en cumplimiento de la orden impartida en la parte resolutiva de este acto administrativo, en la que se ordena "*(...) la comunicación a los jueces de la República y a las autoridades que adelanten procesos de jurisdicción coactiva, sobre la suspensión de los procesos de ejecución en curso y la imposibilidad de admitir nuevos procesos de esta clase contra la entidad objeto de toma de posesión, con ocasión de obligaciones anteriores a dicha medida (...)*".

En consecuencia, los trámites y la información respectiva, deberán efectuarse ante la oficina enunciada.

Lo anterior, a efectos de que se remita a los juzgados del correspondiente distrito para los fines que resulten pertinentes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5.° de la Ley 270 de 1996, respecto de la autonomía de la Rama Judicial, en concordancia con los artículos 228 y 230 de la Constitución Política de Colombia.

Cordialmente,

MARGARITA MARÍA BECERRA DAWSON
Magistrada Auxiliar

Cc. Superintendencia Nacional de Salud
snsnotificacionesjudiciales@**supersalud**.gov.co

Anexo lo anunciado

Elaboró: C Báez / EIOCH

PCSJO23-1165

Bogotá, D.C., 19 de octubre de 2023

Doctora
SANDRA MILENA JARAMILLO AYALA
Agente Especial Interventora
EPS FAMISANAR S.A.S.
notificaciones@famisanar.com.co
Ciudad

Asunto: Respuesta a la petición radicada el 3 de octubre de 2023. Comunicación de la Resolución 2023320030005625-6 del 15/09/2023. Rad. EXTPCSJ23-1068

En relación a la petición de la referencia, en la que se le solicita al Consejo Superior de la Judicatura lo siguiente:

1. *"En amparo de la medida de intervención forzosa administrativa ejecutada a mi representada a través de la Resolución 2023320030005625-6 del 15 de septiembre de 2023, fundamentada jurídicamente, entre otras normas, por lo establecido en el literal E del artículo 116 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en amparo, solicito se informe a los diferentes despachos judiciales la imposibilidad de ordenar medidas preventivas y el levantamiento de cualquier tipo de medidas cautelares impuestas a la intervenida y en consecuencia, se ordene la entrega de dineros, recursos y/o cualquier tipo de activo a la misma que haya sido afectado con ocasión de estás ." y*
2. *"De conformidad con lo regulado en la norma transcrita al inicio del presente documento, solicito a la Corporación se sirva ordenar a todos los jueces de la República, la suspensión de cualquier tipo de actuación judicial, así como la imposibilidad de admitir trámites judiciales relacionados con la naturaleza delas que trata la Resolución de intervención forzosa, esto es, procesos ejecutivos, coactivos y declarativos en contra de la intervenida, sin que se notifique personalmente a la interventora so pena de nulidad ".*

Respuesta: Al respecto le informo que el Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con lo establecido en los artículos 256 y 257 de la Constitución Política y 85 de la Ley 270 de 1996, tiene a su cargo el gobierno y la administración integral de la Rama Judicial, en tal sentido no tiene funciones de jurisdiccionales y no interviene en las decisiones que profieran los jueces, los cuales son autónomos e independientes en el ejercicio de administrar justicia, conforme lo dispuesto en el artículo 5.° de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los artículos 228 y 230 de la Constitución Política de Colombia.

Bajo estos presupuestos, el Consejo Superior de la Judicatura no puede instruir a los jueces sobre el sentido de las decisiones que les corresponde adoptar en su función jurisdiccional. Por lo anterior, la Corporación no está facultada para dar trámite a lo solicitado.

Sin perjuicio de lo señalado, el Consejo Superior de la Judicatura mediante el Memorando PCSJM23-132 del 19 de octubre de 2023, dispuso la divulgación entre las sedes judiciales del país, de la citada resolución, para los fines que consideren pertinentes.

Atentamente,

MARGARITA MARIA BECERRA DAWSON
Magistrada Auxiliar

Anexo lo anunciado

PCSJ/ C Báez / EIOCH

Famisanar EPS

Famisanar EPS

Consejo Superior de la Judicatura
Código: EXTPCSJ23-1068:
Fecha: 03- oct-2023
Hora: 14:23:02
Destino: Presidencia Consejo Superior de la Judicatura
Responsable: GÓMEZ GUTIÉRREZ, ALISSON DAYANA (RESPONSABLE)
No. de Folios: 14

Señores.
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.
Rama Judicial.
Bogotá D.C.
E. S. D.

ASUNTO: COMUNICACIÓN RESOLUCIÓN 2023320030005625-6 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

SANDRA MILENA JARAMILLO AYALA, mayor de edad, vecina de la ciudad de Bogotá, domiciliada y residenciada en esta ciudad, identificada con cédula de ciudadanía No. 65.766.395 de Ibagué, actuando en calidad de Agente Interventora de la **ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S.A.S., - EN INTERVENCIÓN BAJO LA MEDIDA DE TOMA DE POSESIÓN** mediante el presente memorial, me permito poner en conocimiento del Despacho la Resolución **2023320030005625-6 del 15 de septiembre de 2023** expedida por el Superintendente Nacional de Salud *"Por la cual se ordena la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a FAMISANAR EPS SAS identificada con el NIT 830.003.564-7"*. Lo anterior de conformidad con lo ordenado en el artículo 116 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el artículo 9.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010 y el literal C) del artículo 4 de la citada resolución el cual indica que:

> *"**ARTÍCULO CUARTO. ORDENAR** el cumplimiento de las siguientes medidas preventivas, de conformidad con lo establecido el artículo 9.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010, así:*
>
> ***1. Medidas preventivas obligatorias.***
>
> *(...)*
> ***c) La comunicación a los jueces de la República y a las autoridades que adelanten procesos de jurisdicción coactiva sobre la suspensión de los procesos de la ejecución en curso y la imposibilidad de admitir nuevos procesos de esta clase contra la entidad objeto de toma de posesión con ocasión de las obligaciones anteriores a dicha medida.***
>
> *d) La advertencia que, en adelante, no se podrá iniciar ni continuar procesos o actuación alguna contra la intervenida sin que se notifique personalmente al Interventor, so pena de nulidad;"*
>
> *(Subrayado y negrilla fuera del texto original)*

En virtud de ello, al presente memorial, se adjunta copia de la Resolución 2023320030005625-6 del 15/09/2023 para efectos de su divulgación y a su vez aplicación por parte de los Jueces de la República, frente a los procesos tanto en trámite como los que en adelante se radiquen, con ocasión de obligaciones anteriores a la medida de intervención forzosa administrativa.

Por lo descrito anteriormente, de forma respetuosa, me permito realizar la siguiente

PETICIÓN

1. En amparo de la medida de intervención forzosa administrativa ejecutada a mi representada a través de la Resolución 2023320030005625-6 del 15 de septiembre de 2023, fundamentada jurídicamente, entre otras normas, por lo establecido en el literal E del artículo 116 del del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en amparo, solicito se informe a los diferentes despachos judiciales la imposibilidad de ordenar medidas preventivas y el levantamiento de cualquier tipo de medidas cautelares impuestas a la intervenida y en consecuencia, se ordene la entrega de dineros, recursos y/o cualquier tipo de activo a la misma que haya sido afectado con ocasión de éstas.

Anexo: 14 Folios

2. De conformidad con lo regulado en la norma trascrita al inicio del presente documento, solicito a la Corporación se sirva ordenar a todos los Jueces de la República, la suspensión de cualquier tipo de actuación judicial, así como la imposibilidad de admitir trámites judiciales relacionados con la naturaleza de las que trata la Resolución de intervención forzosa, esto es, procesos ejecutivos, coactivos y declarativos en contra de la intervenida, sin que se notifique personalmente a la Interventora so pena de nulidad.

NOTIFICACIONES

La **EPS FAMISANAR S.A.S.**, con domicilio en la ciudad de Bogotá, se identifica con el NIT 830.003.564-7 con dirección de notificaciones en la Carrera 13A No. 77ª-63 de la ciudad de Bogotá; dirección electrónica para notificaciones judiciales notificaciones@famisanar.com.co

Anexo: Resolución No. 2023320030005625-6 del 15 de septiembre de 2023 de la SNS en veinticuatro (24) folios.

Cordialmente,

SANDRA MILENA JARAMILLO AYALA
AGENTE ESPECIAL INTERVENTORA
EPS FAMISANAR S.A.S.
Proyectó: María Paula Ñustes G.
Revisó: Alexander Joven, Abogado
Revisó. Sergio Andrés Zárate Sanabria. Secretario General y Jurídico
Revisó: Liliana Patricia Varón Ruiz. Asesor Técnico Jurídico

Supersalud
Por la defensa de los derechos de los usuarios

RESOLUCIÓN
2023320030005625-6 DE 15 - 09 - 2023

"Por la cual se ordena la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a FAMISANAR EPS SAS identificada con el NIT 830.003.564-7"

EL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, en especial las que le confieren las Leyes 100 de 1993, 1122 de 2007 y 1438 de 2011, los artículos 114, 115, 116 parágrafo y 335 del Decreto Ley 663 de 1993, el artículo 9.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010, los artículos 42 y 68 de la Ley 715 de 2001, el artículo 68 de la Ley 1753 de 2015, los artículos 11 y 26 de la Ley 1797 de 2016, el artículo 17 de la Ley 1966 de 2019, los artículos 2.1.10.5.1, 2.5.5.1.1, 2.5.5.1.9 del Decreto 780 de 2016, el numeral 30 del artículo 4 y numeral 7 del artículo 7 del Decreto 1080 de 2021, la Resolución 002599 de 2016 y sus modificaciones, el Decreto 1712 de 2022 y demás normas concordantes y,

I. CONSIDERANDO

Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Constitución Política, la Seguridad Social, en su componente de atención en salud, se define como un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

Que, el Sistema General de Seguridad Social en Salud -en lo que sigue SGSSS- tiene su atención puesta en la protección en la atención al servicio público de salud y en la salvaguarda al derecho fundamental de la salud de las personas.

Que, el numeral 22 del artículo 189 de la Constitución Política indica que al Presidente de la República corresponde: "Ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos".

Que, a efectos de la prestación del servicio público esencial de salud, las funciones de vigilancia, inspección y control la ejerce la Superintendencia Nacional de Salud.

Que conforme el artículo 334 de la Constitución Política, la prestación de servicios públicos está sometida a leyes de intervención económica.

Que, el derecho a la salud es fundamental tal como lo estipula la Ley 1751 de 2015 que "Comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud", según lo ordena el artículo 2º de la disposición estatutaria.

Que, la salud como derecho fundamental vincula no solo a los poderes públicos, sino también, y sobre todo, a los particulares encargados de su prestación que aparece en la Constitución calificada como un servicio público (art. 48 constitucional). De esta

Digitally signed by SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Date: 2023.09.15 12:00:58 COT

suerte, despliega una eficacia horizontal (*Drittwirkung*[1]) no solo como derecho subjetivo sino como principio objetivo.

Que, en virtud del artículo 154 de la Ley 100 de 1993, el Estado intervendrá en el servicio público de seguridad social en salud, con el fin de garantizar los principios consagrados en la Constitución Política y en la Ley.

Que, conforme al artículo 155 de la Ley 100 de 1993, la Superintendencia Nacional de Salud integra el Sistema General de Seguridad en Salud.

Que, el parágrafo segundo del artículo 230 de la Ley 100 de 1993 preceptúa que la Superintendencia Nacional de Salud ejercerá las funciones de inspección, vigilancia y control[2] respecto de las entidades promotoras de salud, cualquiera que sea su naturaleza jurídica y a su turno, el artículo 68 de la Ley 715 de 2001, establece que la Superintendencia Nacional de Salud tendrá como competencia "(...) realizar la inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las normas constitucionales y legales del sector salud y de los recursos del mismo (...)".

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 1122 de 2007, a efectos de la prestación del servicio público esencial de salud, el Sistema de Inspección, Vigilancia y Control del SGSSS está en cabeza de la Superintendencia Nacional de Salud.

Que, el parágrafo segundo del artículo 233 de la Ley 100 de 1993 en consonancia con los artículos 2.5.5.1.1. y 2.5.5.1.9 del Decreto 780 de 2016 establecen que las medidas cautelares y la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios que adopte esta superintendencia, se regirán por las disposiciones contempladas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero -en lo que sigue EOSF- y serán de aplicación inmediata, por lo cual, el recurso de reposición que procede contra las mismas, no suspende la ejecución del acto administrativo de que se trate, de acuerdo con lo previsto en el artículo 335 del EOSF.

Que, en armonía con lo establecido en las normas referenciadas anteriormente, la Ley 1966 de 2019, como parte de las normas que reforman el SGSSS, estableció en su artículo 17 que todas las facultades del Superintendente Nacional de Salud que desarrollan el eje de medidas especiales (numeral 5 artículo 37 de la Ley 1122 de 2007) estarían dotadas de un efecto inmediato y, en consecuencia, los recursos de reposición interpuestos en su contra tendrían un efecto devolutivo.

Que, el artículo 2.5.2.2.1.1 y subsiguientes del Decreto 780 de 2016, establece las condiciones financieras y de solvencia que deben acreditar las Entidades Promotoras de Salud - EPS autorizadas para operar el aseguramiento en salud, así como los criterios generales para que la información financiera reúna las condiciones de veracidad, consistencia y confiabilidad necesarias para la adecuada y eficaz inspección, vigilancia y control.

---

[1] **JUAN CARLOS GAVARA**, "LA VINCULACIÓN POSITIVA DE LOS PODERES PÚBLICOS A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES". En UNED. *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 20, 2007, p. 290 (277-320).

[2] Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, C.P Alberto Montaña Plata, Radicado 27001-23-31-000-2004-00699-01(35783) del 30 de mayo de 2019 "(...) con base en las cuales puede señalarse que la función administrativa de inspección implica la facultad de solicitar información de las personas objeto de supervisión, así como de practicar visitas a sus instalaciones y realizar auditorías y seguimiento de su actividad; la vigilancia, por su parte, está referida a funciones de advertencia, prevención y orientación encaminadas a que los actos del ente vigilado se ajusten a la normatividad que lo rige; y, finalmente, el control permite ordenar correctivos sobre las actividades irregulares y las situaciones críticas de orden jurídico, contable, económico o administrativo (...)."

Continuación de la resolución, **"Por la cual se ordena la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a FAMISANAR EPS SAS identificada con el NIT 830.003.564-7"**

Que, el artículo 2.5.2.2.1.15 del Decreto 780 de 2016, dispone que el incumplimiento de las condiciones financieras y de solvencia dentro de los plazos allí previstos, dará lugar a la adopción de las medidas correspondientes por parte de la Superintendencia Nacional de Salud de conformidad con sus competencias.

Que, en el artículo 114 del EOSF define las causales, y en el artículo 115 se establece la procedencia de la medida de toma de posesión[3], sus efectos y principios. En línea, con los artículos 68 de la Ley 715 de 2001 y 68 de la Ley 1753 de 2015, corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud, ordenar la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar a las entidades sometidas a su inspección, vigilancia y control.

Que, el artículo 115 del EOSF, en concordancia con el artículo 9.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010, señala que la toma de posesión tiene como fin, establecer si la entidad debe ser objeto de liquidación, si es posible colocarla en condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social o si se pueden realizar otras operaciones que permitan lograr mejores condiciones para los afiliados y sus acreedores.

Que, el artículo 116 del EOSF dispone que la toma de posesión conlleva la suspensión de los procesos de ejecución en curso y la imposibilidad de admitir nuevos procesos de esta clase contra la entidad objeto de toma de posesión por razón de obligaciones anteriores a dicha medida. Igualmente, la norma en cita señala que el proceso o actuación correspondiente será remitido al agente especial. Así mismo, la toma de posesión implica, entre otros efectos, la cancelación de los embargos decretados con anterioridad a la toma de posesión que afecten bienes de la entidad.

Que, de conformidad con los artículos 68 de la Ley 715 de 2001 y 68 de la Ley 1753 de 2015 corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud ordenar la intervención forzosa administrativa para administrar las entidades sometidas a inspección, vigilancia y control. A su vez, el inciso 3° del numeral 2° del artículo 116 del EOSF modificado por el artículo 22 de la Ley 510 de 1999, en concordancia con el inciso final del artículo 9.1.2.1.1 del Decreto 2555 de 2010, señala que, en todo caso, si en el plazo de un (1) año, prorrogable por un término igual no se subsanaren las dificultades que dieron origen a la toma de posesión, la entidad de vigilancia y control dispondrá la disolución y liquidación de la entidad vigilada. Lo anterior, sin perjuicio de que el Gobierno Nacional por resolución ejecutiva autorice una prórroga mayor cuando así se requiera, de conformidad a las características de la institución.

Que, en el numeral 42.8 de la Ley 715 de 2001 se definió como competencia de la Nación en el sector salud establecer los procedimientos y reglas para la intervención técnica o administrativa de instituciones que manejan recursos del SGSSS que sean intervenidas para su administración a través de la Superintendencia Nacional de Salud.

[3] Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. C.P: Edgar Gonzalez López. Radicado: 11001-03-06-000-2017-00192-00(2358) del 12 de diciembre de 2017. La naturaleza de la toma de posesión como instrumento para el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud, se debe advertir que este mecanismo no es una medida administrativa de carácter sancionatorio, (...) En su lugar, la naturaleza de la medida de toma de posesión -al igual que las demás medidas preventivas o de salvamento concebidas por el legislador para evitar la toma de posesión- corresponde más a la de una medida cautelar, que tiene por objeto corregir situaciones económicas y administrativas, con el fin de poner la entidad intervenida en condiciones de desarrollar su objeto social (...)

Que, el inciso 5° del artículo 68 de la Ley 715 de 2001 prescribe: "la Superintendencia Nacional de Salud ejercerá la intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar las entidades vigiladas que cumplan funciones de explotación u operación de monopolios rentísticos, cedidos al sector salud, Empresas Promotoras de Salud e Instituciones Prestadoras de Salud de cualquier naturaleza, así como para intervenir técnica y administrativamente las direcciones territoriales de salud, en los términos de la Ley y los reglamentos".

Que, la toma de posesión está orientada por el propósito de superar, en lo posible, las condiciones objetivas que amenazan la estabilidad, continuidad y permanencia de la entidad de tal forma que la toma de posesión incluye la posibilidad de adoptar un conjunto de medidas de salvamento de la entidad intervenida como los acuerdos con los acreedores, figura desarrollada en el artículo 9.1.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010.

Que, el Gobierno Nacional modificó la estructura de la Superintendencia Nacional de Salud mediante Decreto 1080 de 10 de septiembre de 2021.

Que el numeral 7º del artículo 7º del Decreto 1080 de 2021, estableció como una de las funciones del Superintendente Nacional de Salud, además de las señaladas por la Constitución Política y la ley, la de "Ordenar la toma de posesión, los procesos de intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar y otras medidas especiales a las entidades promotoras de salud, las entidades adaptadas, los prestadores de servicios de salud de cualquier naturaleza, y monopolios rentísticos cedidos al sector salud no asignados a otra entidad, así como intervenir técnica y administrativamente a las secretarías de departamentales, distritales y municipales de salud o las entidades que hagan sus veces".

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 291 del EOSF, en consonancia con el numeral 4 del artículo 295 y el literal a) del numeral 1 del artículo 296, normativa aplicable a las intervenciones realizadas por la Superintendencia Nacional de Salud, es competencia de la superintendencia designar a los que deban desempeñar las funciones de agente especial interventor, liquidador y contralor, quienes podrán ser personas naturales o jurídicas y actuar, entre otros, durante la toma de posesión o la etapa inicial, como en la administración o liquidación, adelantando bajo su inmediata dirección y responsabilidad los procesos de intervención.

Que, la Superintendencia Nacional de Salud expidió la Resolución 002599 del 6 de septiembre de 2016 y sus modificaciones, por la cual se dictaron disposiciones relacionadas con la inscripción, designación, fijación de honorarios, posesión, funciones, obligaciones, seguimiento, sanciones, reemplazo y otros asuntos de los agentes interventores, liquidadores y contralores de las entidades objetó de medidas especiales de toma de posesión e intervención forzosa administrativa prevista en el artículo 68 de la Ley 1753 de 2015 por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.

Que, en atención al régimen jurídico anteriormente referenciado, el Superintendente Nacional de Salud procede a presentar la relación de los siguientes:

II. ANTECEDENTES FÁCTICOS

Que, la Superintendencia Nacional de Salud otorgó a **FAMISANAR EPS SAS**

identificada con NIT 830.003.564-7, la autorización para operar en el régimen contributivo a través de la Resolución 0509 del 25 de julio de 1995, siendo está posteriormente actualizada por la Resolución 8678 del 18 de julio de 2018. Esta autorización se renovó en virtud de la Resolución 2023310000004929-6 del 04 de agosto de 2023.

Que, mediante la Resolución 2023310010001393-6 del 2 de marzo de 2023, se denegó la aprobación del plan de reorganización institucional. Esta decisión fue ratificada con la Resolución 2023162000002897-6 del 16 de mayo de 2023, al resolver el recurso de reposición presentado por la entidad.

Que, el numeral 7º del artículo 7º del Decreto 1080 de 2021, estableció como una de las funciones del Despacho Superintendente Nacional de Salud, además de las señaladas por la Constitución Política y la ley, la de; "Ordenar la toma de posesión, los procesos de intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar y otras medidas especiales a las entidades promotoras de salud, las entidades adaptadas, los prestadores de servicios de salud de cualquier naturaleza, y monopolios rentísticos cedidos al sector salud no asignados a otra Entidad, así como intervenir técnica y administrativamente a las secretarías de departamentales, distritales y municipales de salud o las entidades que hagan sus veces".

Que, en ejercicio de las competencias establecidas en el numeral 21[4] del artículo 23 y numeral 9[5] del artículo 24 del Decreto 1080 de 2021 la Dirección de Inspección y Vigilancia de Entidades de Aseguramiento en Salud y la Dirección de Medidas Especiales para Entidades Promotoras de Salud y Entidades Adaptadas remitió a la Superintendente Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud concepto técnico de seguimiento de la **FAMISANAR EPS SAS.**

Que, la Superintendencia Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud, en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 20215100013052-6[6] presentó al Comité de Medidas Especiales de la Superintendencia Nacional de Salud concepto técnico de seguimiento de **FAMISANAR EPS SAS** en sesión del 12 de septiembre de 2023, en donde se destacan las siguientes conclusiones, frente a los componentes financieros, técnicos y administrativos:

"(...)

- En junio de 2015, en el marco del Decreto 2702 de 2014, **FAMISANAR EPS SAS** determinó un defecto en el Indicador de Capital Mínimo de -$33.815 millones y en el indicador de Patrimonio Adecuado de $157.415 millones, situación que debió subsanarse a diciembre de 2021. Sin embargo, a pesar de la capitalización por $755.949 millones, se incumplió en la cuantía necesaria para enervar las pérdidas registradas en las vigencias 2017, 2018 y 2022.

- En diciembre de 2022 FAMISANAR EPS SAS reconoció pasivos de vigencias anteriores por $758.671 millones, de los cuales, la entidad omitió reconocer contablemente $602.370 millones al cierre de 2021. Lo anterior implica que el resultado del indicador de Régimen de Inversiones al cierre de 2021 estaba sobrevalorado; es decir, si la entidad hubiese reconocido oportunamente sus pasivos habrían presentado un mayor incumplimiento en el Indicador al cierre de 2021. Se concluye que **FAMISANAR EPS SAS**, reportó, de manera reiterada ante la Superintendencia Nacional de Salud información carente de calidad y transparencia, lo que

[4] Decreto 1080 de 2021, artículo 23, numeral 21 "(...) En coordinación con la Dirección de Medidas Especiales para Entidades Promotoras de Salud y Entidades Adaptadas, elaborar análisis y recomendar al Superintendente Delegado, sobre la posibilidad de adoptar medidas especiales de las entidades promotoras de salud y entidades adaptadas (...)"

[5] Decreto 1080 de 2021, artículo 24, numeral 9 "(...) En coordinación con la Dirección de Inspección y Vigilancia, elaborar análisis con fundamento en los hallazgos identificados y recomendar al Superintendente Delegado, sobre la adopción de medidas especiales respecto de las entidades promotoras de salud y entidades adaptadas, de conformidad con los hallazgos identificados (...)"

[6] Resolución "Por la cual se crea y conforma el Comité de Medidas Especiales de la Superintendencia Nacional de Salud" modificada por la Resolución 2023100000000915-6 de 14 de febrero de 2023.

impidió el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia y se enmarca en el incumplimiento del numeral 11 del Artículo 130 de la Ley 1438 de 2011.

- Entre diciembre 2021 y junio de 2023 Famisanar presentó una reducción del **-4%** en el valor de los activos (-$44.123 millones), un aumento del **142%** del valor de sus pasivos ($1.296.597 millones) y una variación patrimonial de **-918%** (-$1.340.720 millones), de modo que, a junio de 2023 sus activos totales ($1.010.484 millones) equivalían a tan solo el **45,7%** de sus pasivos totales ($2.209.623 millones), una situación que ha elevado el riesgo de liquidez e insolvencia para atender las obligaciones con acreedores en el corto, mediano y largo plazo.

- El comportamiento del indicador de siniestralidad de **FAMISANAR EPS SAS** genera alertas sobre la viabilidad financiera de la entidad, debido a que la operación corriente evidencia que los costos de la EPS ascendieron a 119% en diciembre de 2022 y 105% en junio de 2023, lo que genera mayores presiones de liquidez, mayores requerimientos de capitalización y precarios resultados en los indicadores de Capital mínimo, Patrimonio Adecuado y Régimen de Inversión.

- Los activos de la entidad presentan una estructura en la que sus principales rubros (cuentas por cobrar y activos por impuesto diferido) presentan incertidumbre frente a la convertibilidad en dinero, así:

  - A junio de 2023, de los $643.663 millones de las cuentas por cobrar brutas, el 55% presentan una antigüedad superior a 360 días, lo que ha generado que la EPS reconozca un deterioro acumulado de -$248.925 millones, ante la posibilidad de no recuperación de la cartera.
  - El 45,50% de los Recobros No UPC ($331.538 millones) están deteriorados ($150.845 millones).
  - El 40,73% de las cuentas por cobrar UPC están deterioradas ($72.198 millones);
  - El activo por impuesto diferido que ascendía a $400.159 millones y representaba el 39,6% del total de los activos no tiene la capacidad de generar beneficios económicos para la entidad en el corto plazo, dado que su materialización está sujeta a que la EPS obtenga utilidades fiscales en vigencias futuras.

- La confiabilidad de los resultados de siniestralidad, Capital Mínimo, Patrimonio Adecuado y Régimen de Inversiones correspondientes a la vigencia 2021, está seriamente comprometida dado que, **FAMISANAR EPS SAS** no reconoció oportunamente cuentas por pagar y costos por Reservas Técnicas por $602.370 millones.

- Entre enero y junio de 2023, Famisanar reportó pagos a prestadores y proveedores de servicios por $2.1 billones recibidos por concepto de UPC del Régimen Contributivo, Régimen Subsidiado y Presupuesto Máximo. 86,5% de los pagos se destinaron a la red privada y 11,77% a la red pública.

  Del total de recursos girados, 46,2% fueron pagos a sus socios (Colsubsidio: 31,8% y Cafam: 14,4%)

- En visita de Inspección y Vigilancia realizada a **FAMISANAR EPS SAS** entre el 30 de marzo y el 05 de abril de 2022, la Superintendencia Nacional de Salud formuló hallazgos sobre la Reserva Técnica relacionados con el procedimiento para el conocimiento de los servicios avisados, la calidad de la información y la metodología de suficiencia de la reserva técnica. Tras este precedente, la EPS reconoció a finales de 2022, de manera extraordinaria, cuentas por pagar y costos por Reservas Técnicas por $602.370 millones que debieron haber sido reconocidos en la vigencia 2021, generando la re-expresión de Estados Financieros y una afectación de la confiabilidad de la información financiera.

- La información disponible en fuentes oficiales (2019 y 2020) relacionadas con la captación temprana para el control prenatal de mujeres gestantes, indica un incumplimiento promedio para las dos vigencias, de alrededor del 15%, que se encuentra en relación directa con la alta incidencia de sífilis congénita.

  De la misma manera, tres indicadores trazadores para la detección del cáncer cérvico uterino refuerzan la deficiencia en el cumplimiento de la función indelegable del aseguramiento, relacionada con la gestión del riesgo en salud y la falta de garantía en las intervenciones individuales de la ruta de atención integral de Promoción y Mantenimiento de la Salud, que

Continuación de la resolución, **"Por la cual se ordena la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a FAMISANAR EPS SAS identificada con el NIT 830.003.564-7"**

materializan el derecho fundamental e impactan en la optimización de los recursos públicos del sistema.

- Si bien, se observó una disminución de 15 casos de mortalidad materna entre los años 2021 y 2022, la notificación de 6 casos hasta la semana epidemiológica número 20 de 2023, no evidencia avances significativos en la tendencia y el cumplimiento de las metas del Plan de Desaceleración para la Reducción de la Mortalidad Materna, en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social.

- En relación con los casos de cáncer en menores de 18 años, el comportamiento mensual durante el primer cuatrimestre de 2023 revela un incremento de casos cercano al 20% . Esta tendencia requiere medidas efectivas para garantizar la ruta de atención integral para esta población de especial protección constitucional.

- La EPS no garantiza a sus afiliados el acceso a servicios y tecnologías en salud, evidenciado en los principales motivos específicos de las reclamaciones, presentando un incremento del 24% en la radicación de PQRD en el periodo comprendido entre enero y julio del 2022 versus el mismo periodo de 2023.

- La EPS en el año 2022, precisa dentro de los motivos específicos de las PQRD interpuestas ante esta Superintendencia, falta de oportunidad en: la asignación de citas de consulta médica especializada, la prestación de servicios de imagenología de segundo y tercer nivel, la programación de exámenes de laboratorio o diagnósticos y la programación de cirugía; lo que puede encontrarse relacionado con las coberturas de servicios de: baja complejidad, alta complejidad y especialidades básicas, a nivel municipal; inferiores al 100%, que se identificaron en el análisis de la red.

- Con corte julio de 2023 presenta un acumulado de 59.391 de reclamos en salud, destacando que el principal macro motivo es la barrera en el acceso a tecnologías y servicios de salud y otros elementos complementarios con un 82,8% y que los principales motivos específicos son: negación en la asignación de citas o consultas, falta de oportunidad, negación en la atención de otros servicios de salud, falta de oportunidad en la atención de otros servicios de salud y no reconocimiento y pago de prestaciones económicas.

- **FAMISANAR EPS SAS** no implementó dentro de la contratación lo establecido en el Decreto 441 de 2022, ni implementó los lineamientos que estableció dentro de su manual de contratación para la gestión interna del proceso.

- De acuerdo con la información reportada por **FAMISANAR EPS SAS** durante la auditoría *in situ,* los motivos más frecuentes por los que se presentan las acciones de tutela son la inoportunidad en la asignación de citas por medicina especializada y en la entrega tardía de insumos, dispositivos o medicamentos necesarios para garantizar la atención integral en salud de la población.

- **FAMISANAR EPS SAS** a corte del I semestre de 2022 tenía vigentes un total de cuatrocientos treinta y tres (433) procesos, de los cuales, en ciento cuarenta y cinco (145) actúa la EPS en calidad de demandante, con una cuantía por valor de ciento cuarenta y nueve mil setecientos veintiséis millones ($ 149.726 millones); y doscientos ochenta y ocho (288) procesos en calidad de demandada con una cuantía por valor de ciento setenta y siete mil ochocientos diecinueve millones de pesos ($ 177.819).

- Con corte a diciembre de 2022, del total de los procesos jurídicos clasificados en riesgo alto de pérdida, el 62% corresponde a procesos de naturaleza laboral.

- La EPS presenta inconsistencias en la información relacionada con las acciones de tutela, lo cual dificulta las acciones de inspección y vigilancia, toda vez que de lo entregado se encuentran registros que no especifican el motivo de interposición. "

Que, la Superintendente Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud, en sesión del Comité de Medidas Especiales del 12 de septiembre de 2023, recomendó[7]

[7] Decreto 1080 de 2021, artículo 22, numeral 22 "Recomendar al Superintendente Nacional de Salud, la adopción, prórroga, modificación o levantamiento de las medidas preventivas o especiales sobre las Entidades Promotoras de Salud y las entidades

ordenar la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a **FAMISANAR EPS SAS,** identificada con el NIT. 830003564-7, debido al estado actual de la EPS evidenciado en el concepto técnico presentado, con la finalidad de realizar otras operaciones que garanticen la prestación de los servicios de salud de los usuarios y desarrollar el objeto social de la entidad; ya que, de conformidad al seguimiento en las acciones de inspección y vigilancia, se acreditan situaciones directamente relacionadas con la ocurrencia de causales previstas en el artículo 114 del EOSF.

Que, la Superintendente delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud consideró que las conductas desplegadas por la entidad vigilada se enmarcan en los literales **e, g, h, i** del artículo 114 del EOSF como se relacionan a continuación:

III. CAUSALES DEL ARTÍCULO 114 DEL EOSF

Que, la información y las situaciones evidenciadas en el marco de las funciones de inspección vigilancia y control[8] realizada por la Superintendencia Nacional de Salud a **FAMISANAR EPS SAS,** permite establecer un incumplimiento reiterado de la ley y de aquellas normas que rigen el aseguramiento y la prestación de servicios de salud, de acuerdo con el concepto de *actividad ordenadora de la administración*.[9]

Que, dichas situaciones se ven directamente reflejadas en la vulneración de los derechos de los afiliados y en el incumplimiento de las funciones indelegables de aseguramiento, lo cual tiene incidencia en la facultad que tiene la Superintendencia Nacional de Salud de ordenar la toma de posesión a los sujetos vigilados, de acuerdo con lo establecido en el régimen del EOSF.

Que, sobre la facultad que tiene la Superintendencia Nacional de Salud de intervenir a sus vigilados siguiendo el régimen del EOSF, es pertinente seguir la interpretación del Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil en función consultiva 2358 de 12 de diciembre de 2017[10] donde se establecieron las reglas de interpretación sobre el alcance de la toma de posesión y las medidas de salvamento en el sector salud. A partir de lo anterior, se derivan algunas reglas especiales de aplicación como: a) la discrecionalidad tanto en la toma de decisiones como en su ejercicio previo, y, al mismo tiempo; b) la decisión de la toma de posesión, siempre que se verifique alguna de las causales previstas en el artículo 114 del EOSF.

Que, para la Sala de Consulta existe también un aspecto que determina la potestad de posesión o, para decirlo mejor, la facultad de tomar posesión de los bienes de entidades vigiladas; b) su carácter extremo, es decir, el hecho de se recurra a ella solo en situaciones límite:

> "En este orden de ideas, cabe resaltar que la toma de posesión es una medida "extrema", si se entiende por tal aquella que procede ante la ocurrencia de hechos que afectan en forma particularmente grave el interés público tutelado por la SNS, específicamente, la adecuada prestación del servicio de salud y la confianza pública en el sistema. Por lo tanto, ante la

adaptadas"

[8] La Ley 1753 de 2015, Artículo 68: "Medidas Especiales: Sin perjuicio de lo previsto en las demás normas que regulen la toma de posesión y ante la ocurrencia de cualquiera de las causales previstas en el artículo 114 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el Superintendente Nacional de Salud podrá ordenar o autorizar a las entidades vigiladas, la adopción individual o conjunta de las medidas de que trata el artículo 113 del mismo Estatuto, con el fin de salvaguardar la prestación del servicio público de salud y la adecuada gestión financiera de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Las medidas especiales que se ordenen se regirán por lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, incluido el artículo 291 y siguientes de ese estatuto, en lo que resulte pertinente a las medidas especiales; el Decreto número 2555 de 2010; las disposiciones aplicables del Sector Salud y las normas que los sustituyan, modifiquen o complementen (...)"

[9] **Jaime Orlando Santofimio Gamboa,** *COMPENDIO DE DERECHO ADMINISTRATIVO,* Bogotá D.C, Universidad Externado de Colombia, 2017, pp. 183-184.

[10] Radicado 11001-03-06-000-2017-00192-00(2358) M.P. Edgar González López

Continuación de la resolución, **"Por la cual se ordena la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a FAMISANAR EPS SAS identificada con el NIT 830.003.564-7"**

ocurrencia de alguna de las causales de toma de posesión previstas en el numeral 1 del artículo 114 del EOSF, la SNS tiene la obligación de verificar en forma detallada y exhaustiva los hechos que sustentan la medida; la necesidad y proporcionalidad de su adopción e, incluso, si es conveniente adoptar o no alguna de las medidas de salvamento previstas en el art. 113 del EOSF, antes de adoptar la medida de toma de posesión. Por el contrario, no es posible afirmar que la medida de toma de posesión es una "medida extrema", en el entendido que solo procede cuando se han agotado previamente las medidas de salvamento prevista en el art. 113 del EOSF, pues como ya se analizó, esta decisión discrecional de la SNS" **(PÁG. 21)**

Que, de acuerdo con lo anterior, se entrará a precisar, en la situación particular de **FAMISANAR EPS SAS,** sí en cada caso, si se configuran alguna o algunas de las causales como presupuestos normativos que autorizan la toma de posesión:

e. <u>Cuando persista en violar sus Estatutos o alguna Ley</u>

Que, los problemas financieros de la EPS han incidido directamente en la garantía del derecho fundamental a la salud de sus afiliados y que han afectado directamente el goce efectivo de este derecho fundamental, consagrado como un derecho a la preservación de salud y bienestar[11], de acuerdo con las normas que regulan la prestación del servicio a la salud, desconociendo entonces los mandatos constitucionales de protección.

Que, además de lo anteriormente señalado, la EPS también ha incumplido con algunas de las condiciones de habilitación conforme a lo dispuesto en la Resolución 497 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, evidenciado en el informe final de auditoría[12] realizada a **FAMISANAR EPS SAS** en cumplimiento al Auto número 2023310000000359-7 del 10 de marzo de 2023.

Que, la anterior situación permite, entre otras, evidenciar que la EPS no está cumpliendo con su objeto social y así, vulnerando el contenido esencial o mínimo del derecho a la salud fijado en el segmento inicial del artículo 6 de la Ley 1751 de 2015[13]: donde la continuidad[14], disponibilidad[15], accesibilidad[16], calidad, actúan como principios fijados para la actividad que ejerce el particular como asegurador. A lo que se agrega, el desconocimiento del principio de oportunidad en la prestación como una condición de las prestaciones necesarias para todos estos usuarios, definido en la misma norma: *"(...) e) Oportunidad. La prestación de los servicios y tecnologías de salud deben proveerse sin dilaciones (...)".*

Que, de igual forma, se está generando una afectación del núcleo complementario del derecho conformado por el principio de continuidad fijado por el literal d) de la misma norma, así: *"(...) d)* Continuidad. Las personas tienen derecho a recibir los servicios de salud de manera continua. Una vez la provisión de un servicio ha sido iniciada, este no podrá ser interrumpido por razones administrativas o económicas*".*

---

[11] Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, Bogotá, Colombia, 1948, artículo XI: "Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad"

[12] Informe trasladado a la EPS el 29 de mayo de 2023 mediante radicado 20233100000875831 por parte de la Dirección de Inspección y Vigilancia para Entidades de Aseguramiento en Salud.

[13] Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones.

[14] "d) Continuidad. Las personas tienen derecho a recibir los servicios de salud de manera continua. Una vez la provisión de un servicio ha sido iniciada, este no podrá ser interrumpido por razones administrativas o económicas;

[15] "a) Disponibilidad. El Estado deberá garantizar la existencia de servicios y tecnologías e instituciones de salud, así como de programas de salud y personal médico y profesional competente";

[16] "(...) c) Accesibilidad. Los servicios y tecnologías de salud deben ser accesibles a todos, en condiciones de igualdad, dentro del respeto a las especificidades de los diversos grupos vulnerables y al pluralismo cultural. La accesibilidad comprende la no discriminación, la accesibilidad física, la asequibilidad económica y el acceso a la información (...)"

Que, el derecho a la salud se considera como un típico derecho social y puede hacerse valer tanto del Estado y los poderes públicos[17], por lo que implica una dimensión protectora y promotora de los derechos fundamentales[18], como la libertad, la igualdad y, principalmente, una participación en los bienes sociales básicos[19] a través de estos derechos. Ello quiere decir que tiene elementos de configuración como un derecho social o prestaciones y que a través suyo se desarrolla una finalidad especial: el derecho a la asistencia sanitaria.
Que, lo anterior redunda en un deber de concreción[20] o realización del derecho a la salud con la Ley 1751 de 2015. A partir de ahí, los estándares del SGSSS deben ser *(re) interpretados* conforme a[21] las nuevas reglas del derecho fundamental.

Que esta reconfiguración aplicada al caso de la EPS implicará una infracción de dos preceptos del derecho fundamental; las reglas que regulan la producción[22] en las condiciones fijadas por los literales a) a d) del artículo 6 y, en paralelo, las normas que regulan los principios que deben regir su prestación o dimensión objetiva[23] conformado por los literales d) y e).

Adicionalmente, es importante recordar que tal como se indicó, también se establece la persistencia en el incumplimiento de las normas cuando se indican qué:

> "Que, las situaciones evidenciadas (se encuentran relacionadas con dos de las causales de toma de posesión aquí especificadas, como son la prevista el literal a) del artículo 114 del EOSF sobre incumplimiento de obligaciones y, la del literal e) sobre persistencia en el incumplimiento de las normas legales, en este caso, las del SGSSS".

Que, en consecuencia, incumple las obligaciones que le asisten como parte de la función indelegable de aseguramiento (art. 14 L. 1122 de 2007) como se evidencia en las conclusiones del concepto técnico referidas en la presente decisión, afectando a la población afiliada incluidos sujetos de especial protección, en la garantía del derecho fundamental a la salud.

g. <u>Cuando se reduzca su patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito</u>

Que, de conformidad con la información reportada por el vigilado a través del archivo tipo FT001 - "Catálogo de Información Financiera para fines de Supervisión", se observa que, **FAMISANAR EPS SAS** presenta entre diciembre de 2021 y junio de 2023, una estructura financiera que ha transitado desde un superávit patrimonial de $141.580 millones en 2021 a un déficit patrimonial de -$1.090.509 millones en diciembre de 2022 y -$1.199.140 millones en junio de 2023.

---

[17] **Antonio Baldassarre**, *LOS DERECHOS SOCIALES*, Bogotá D.C, 2001, Universidad Externado de Colombia, Primera Edición, pp167 - 168

[18] **UE Wolkmann.**, *ELEMENTOS DE UNA TEORÍA DE LA CONSTITUCIÓN ALEMANA*, óp.cit.p.282

[19] **UE Wolkmann.**, *ELEMENTOS DE UNA TEORÍA DE LA CONSTITUCIÓN ALEMANA*, óp.cit.p.282

[20] **Gregorio Peces Barba Martínez**, CURSO DE TEORÍA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, Teoría general con la colaboración de Rafael de Asís Roig, Carlos R. Fernández Liesa, Ángel Llamas Cascón, Madrid, 1995, Universidad Carlos III Boletín Oficial del Estado, p.180.

[21] **Konrad Hesse**, "LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL" En ESCRITOS DE DERECHO CONSTITUCIONAL, Segunda Edición, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales Fundación Coloquio Jurídico Europeo, Madrid, 2012, p.71 (traducción de P. Cruz Villalón y M. Aspitarte Sánchez)

[22] **Gregorio Peces Barba Martínez**, CURSO DE TEORÍA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, Teoría general, *óp.cit.p.* 371-372

[23] **Gavara de Cara, Juan Carlos**, LA PROYECCIÓN DE LA DIMENSIÓN OBJETIVA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EL ARTÍCULO 101 CE, Barcelona, BOSCH EDITOR, 2011, p. 14

Continuación de la resolución, **"Por la cual se ordena la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a FAMISANAR EPS SAS identificada con el NIT 830.003.564-7"**

Que, de acuerdo con los resultados del patrimonio a junio de 2023, este se ubica por debajo del 50% del capital suscrito.

h. <u>Cuando existan graves inconsistencias en la información que suministra a la Superintendencia Nacional de Salud que a juicio de ésta no permita conocer adecuadamente la situación real de la entidad</u>

Que, **FAMISANAR EPS SAS** no reconoció oportunamente cuentas por pagar y costos por Reservas Técnicas por $602.370 millones en la vigencia 2021, de los cuales, $474.489 millones correspondían a Reservas Técnicas Conocidas No Liquidadas y $284.182 millones correspondían a Reservas Técnicas por Glosas Pendientes por Conciliar. De este último rubro, la EPS estaba obligada a reconocer al menos el 45% de las glosas pendientes por conciliar el 31 de diciembre de 2021, de conformidad con lo definido por la Circular Externa 00002 de 2021 de la Superintendencia Nacional de Salud; es decir, debía haber reconocido contablemente, como mínimo $127.881 millones; como consecuencia, la entidad realizó el reconocimiento extemporáneo de sus pasivos y costos al cierre de la vigencia de 2022 generando la reexpresión de estados financieros. Lo anterior afectando de forma directa la información financiera reportada a esta superintendencia en el marco de la Circular Externa 0016 de 2016, hecho que se encuadra en lo señalado en la causal h) del artículo 114 del EOSF, generando alerta frente a la confiabilidad de los resultados de siniestralidad, Capital Mínimo, Patrimonio Adecuado y Régimen de Inversiones correspondientes a la vigencia 2021.
Que, lo anterior redunda en lo relacionado con el reporte de información bajo las reglas especiales y deberes propios que como actor del sistema deberá cumplir, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 37 de la Ley 1122 de 2007, los postulados de razonabilidad, calidad, consistencia y confiabilidad, así como el principio de transparencia definido en el numeral 3.14 del artículo 3 de la Ley 1438 de 2011 que fija los deberes de publicidad, claridad y visibilidad de la información del sistema.

i. <u>Cuando la entidad no cumpla los requerimientos mínimos de capital de funcionamiento previstos</u>

Que, la citada causal consignada en el literal i) del artículo 114 sobre el incumplimiento del capital mínimo para su funcionamiento, se configura sin duda alguna, soportada en el análisis técnico realizado por la delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud a corte de junio de 2023, del cual se extraen los siguientes resultados:

Capital Mínimo: -$1.104.400 millones,
Patrimonio Adecuado: -$1.480.644 millones

Que este incumplimiento debe interpretarse a partir de los estándares normativos existentes en el SGSSS y las reglas del Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social 780 de 2016:

"ARTÍCULO 2.5.2.2.1.5. CAPITAL MÍNIMO. Las entidades a que hace referencia el artículo2.5.2.2.1.2 del presente decreto deberán cumplir y acreditar ante la Superintendencia Nacional de Salud el capital mínimo determinado de acuerdo con las siguientes reglas:

1. El monto de capital mínimo a acreditar para las entidades que se constituyan a partir del 23 de diciembre de 2014 será de ocho mil setecientos ochenta y ocho millones de pesos ($8.788.000.000) para el año 2014. Además del capital mínimo anterior, deberán cumplir con un capital adicional de novecientos sesenta y cinco millones de pesos

($965.000.000) por cada régimen de afiliación al sistema de salud, esto es contributivo y subsidiado, así como para los planes complementarios de salud.

Para efectos de acreditar el capital suscrito y pagado o el monto de los aportes en el caso de entidades solidarias, solo computarán los aportes realizados en dinero.

Las entidades que al 23 de diciembre de 2014 se encuentren habilitadas para operar el aseguramiento en salud, deberán acreditar el Capital Mínimo señalado en el presente numeral, en los plazos previstos en el artículo2.5.2.2.1.12 del presente decreto. Para efectos de acreditar las adiciones al capital suscrito y pagado o el monto de los aportes en el caso de entidades solidarias que se requieran por efectos de la presente norma, solo computarán los aportes realizados en dinero.

Los anteriores montos se ajustarán anualmente en forma automática en el mismo sentido y porcentaje en que varíe el índice de precios al consumidor que suministre el DANE. El valor resultante se aproximará al múltiplo en millones de pesos inmediatamente superior. El primer ajuste se realizará en enero de 2015, tomando como base la variación del índice de precios al consumidor durante 2014.

2. La acreditación del capital mínimo resultará de la sumatoria de las siguientes cuentas patrimoniales: capital suscrito y pagado, capital fiscal o la cuenta correspondiente en las Cajas de Compensación Familiar, capital garantía, reservas patrimoniales, superávit por prima en colocación de acciones, utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores, revalorización del patrimonio, y se deducirán las pérdidas acumuladas, esto es, las pérdidas de ejercicios anteriores sumadas a las pérdidas del ejercicio en curso.

   Para el caso de las entidades solidarias la acreditación del capital mínimo resultará de la sumatoria del monto mínimo de aportes pagados, la reserva de protección de aportes, excedentes no distribuidas de ejercicios anteriores, el monto mínimo de aportes no reducibles, el fondo no susceptible de repartición constituido para registrar los excedentes que se obtengan por la prestación de servicios a no afiliados de acuerdo con el artículo10de la Ley 79 de 1988, los aportes sociales amortizados o readquiridos por la entidad cooperativa en exceso del que esté determinado en los estatutos como monto mínimo de aportes sociales no reducibles y el fondo de readquisición de aportes y se deducirán las pérdidas de ejercicios anteriores, sumadas a las pérdidas del ejercicio en curso.

   En todo caso en concordancia con la Ley 79 de 1988, deberá establecerse en los estatutos que los aportes sociales no podrán reducirse respecto de los valores previstos en el presente artículo.".

Que, conforme al anterior análisis que evidencia el deterioro de la entidad vigilada en los componentes financiero, técnico científico y jurídico se evidencian las causales previstas en los literales **e), g) h), i)** del artículo 114 del EOSF y la ocurrencia de los presupuestos normativos para ordenar la toma de posesión e intervención forzosa administrativa para administrar de **FAMISANAR EPS SAS,** en consonancia con las disposiciones de los artículos 9.1.1.1.1 y 9.1.3.1.1 del Decreto 2555 de 2010 y ante la inminente afectación del aseguramiento en salud y de la garantía de la prestación de los servicios de salud y, en cumplimiento de los preceptos establecidos en los artículos 48, 49 y 365 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con las normas del SGSSS.

Que el Comité de Medidas Especiales de la Superintendencia Nacional de Salud, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 3° de la Resolución 20215100013052-6 de 2021, y una vez analizada la situación de la EPS de acuerdo con el concepto presentado por la Superintendente Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud en la citada sesión, recomendó al Superintendente Nacional de Salud ordenar la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a **FAMISANAR EPS SAS.**

Que, la medida anteriormente referida, buscará verificar una de las dos circunstancias descritas en el inciso dos del artículo 115 del EOSF, esto es, verificar

si es posible situar a la entidad en condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social, o si se pueden realizar otras operaciones que permitan lograr mejores condiciones para el pago total o parcial de sus acreencias pendientes, además de, la adecuada prestación del servicio de salud a la población afiliada.

Que, la Corte Constitucional en Sentencia C- 246 del 5 de junio de 2019[24], al referirse a las actuaciones que en materia de las facultades de control corresponde adelantar a la Superintendencia Nacional de Salud en el SGSSS, expresa:

> "[...] Por otro lado, no considera la Corte que sea irrazonable atribuir a la Superintendencia Nacional de Salud la función de liquidar entidades del sector salud en circunstancias determinadas. En este sentido, se trata del ejercicio de una competencia que tiene expreso fundamento constitucional y que fue asignad(a) al Gobierno nacional (artículo 49, numerales 8 y 23 del artículo 150, numeral 22 del artículo 189, artículo 334 y artículo 365 de la Constitución). De acuerdo con las normas que se refieren a ella, el Estado tiene el deber de garantizar la calidad de vida de las personas, por lo que debe ejercer la inspección y vigilancia y control sobre los servicios públicos, entre los cuales se encuentra el servicio público de salud. Uno de los mecanismos a través de los cuales se puede cumplir tal atribución es la posesión con fines de liquidación, que pretende proteger el interés general, preservar el orden público, el orden económico y evitar perjuicios graves e indebidos a los usuarios afectados por problemas en la gestión de las empresas de servicios públicos (ver supra, numerales)". **Fundamento jurídico 48.**

Que, las decisiones adoptadas por esta entidad en el presente acto administrativo, como cabeza del sistema de inspección, vigilancia y control *para la defensa de los derechos de los usuarios y preservar la confianza pública y los recursos del Sistema*, en ejercicio de sus atribuciones y competencias, se expiden sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, fiscal, disciplinaria o penal que corresponda a los representantes legales y demás responsables de la administración y manejo de los recursos públicos, por incumplimiento de sus deberes y de las instrucciones y órdenes impartidas por la superintendencia, así como por la violación de la normas vigentes sobre la prestación del servicio público de salud y el SGSSS que llegaren a determinarse por las autoridades competentes, sean estas por acción u omisión.

Que, con fundamento en las anteriores consideraciones hasta aquí desarrolladas, es claro que los participantes en la operación del aseguramiento han sido autorizados para prestar un servicio público objeto de intervención, vigilado por el Estado a través de la Superintendencia Nacional de Salud. Así, cuando en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia esta entidad establece que existen circunstancias que motiven una respuesta distinta al seguimiento y requerimientos realizados previamente, que se han mostrado insuficientes o no han sido atendidas en forma adecuada para superarlas, está legalmente autorizada y legitimada para ejercer las facultades de control conferidas por el legislador, con el propósito de velar por el interés general y la debida prestación del servicio público de salud, así como por la protección de los recursos del Sistema.

Que, por tanto, se tienen en cuenta aquellos aspectos que comportan una gran incidencia para la garantía del derecho fundamental a la salud del que son titulares los usuarios de la EPS, en especial los sujetos de especial protección constitucional, en el marco de la prestación de un servicio público intervenido cuya dirección, coordinación, vigilancia y control corresponde al Estado y que debe prestarse por los responsables de cumplir con las funciones indelegables del aseguramiento con sujeción entre otros, a los principios de eficiencia, oportunidad, accesibilidad y calidad, además de todas las reglas y demás principios contenidos en la normativa del Sistema, siendo parte de las funciones de esta superintendencia *exigir la*

[24] Si bien esta actividad se relaciona con las competencias de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud, sobre las Empresas Sociales del Estado, sobre los alcances constitucionales de la Superintendencia son de interés y por ello se traen a colación aquí.

observancia de los principios y fundamentos del servicio público esencial de Seguridad Social en Salud[25].

Que, la Superintendencia Nacional de Salud expidió la Resolución 002599 del 6 de septiembre de 2016, por la cual se dictaron disposiciones relacionadas con la inscripción, designación, fijación de honorarios, posesión, funciones, obligaciones, seguimiento, sanciones, reemplazo de los agentes interventores, liquidadores y contralores de las entidades objeto de medidas especiales de toma de posesión e intervención forzosa administrativa y de medidas especiales previstas en el artículo 68 de la Ley 1753 de 2015 por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.

Que, en sesión del 12 de septiembre de 2023, el Comité de Medidas Especiales presentó tres (3) hojas de vida de agentes especiales, vigentes en el Registro de Interventores, liquidadores y contralores – RILCO- las cuales cumplen los requisitos, para adelantar la toma de posesión e intervención forzosa administrativa para administrar a **FAMISANAR EPS SAS,** que cumplen con los requisitos previamente establecidos para la categoría aplicable a la entidad objeto de la intervención. De igual manera, se presentaron tres (3) hojas de vida de contralores, vigentes en el Registro de Interventores, liquidadores y contralores – RILCO- las cuales cumplen los requisitos para actuar como contralores designados en la toma de posesión e intervención forzosa administrativa para administrar de **FAMISANAR EPS SAS.**

Que, en la misma sesión desarrollada el 12 de septiembre de 2023 el Despacho del Superintendente Nacional de Salud, una vez analizadas las hojas de vida en el Comité de Medidas Especiales, decidió designar a **SANDRA MILENA JARAMILLO AYALA** identificada con cédula de ciudadanía número 65.766.395 de Ibagué, para actuar como interventora para la medida ordenada en la presente decisión y la designación de la firma **NEXIA MONTES & ASOCIADOS SAS** como contralor de la toma de posesión forzosa administrativa para administrar de **FAMISANAR EPS SAS,** recomendaciones acogidas por el señor Superintendente Nacional de Salud.

Que, de conformidad con lo expuesto, el Superintendente Nacional de Salud acoge la recomendación del Comité de Medidas Especiales, ordenar la medida de intervención forzosa administrativa para administrar a **FAMISANAR EPS SAS**, por el término de un (1) año, de conformidad al artículo 116 del EOSF, designando como **INTERVENTORA** a **SANDRA MILENA JARAMILLO AYALA** identificada con la cédula de ciudadanía no. 65.766.395 de Ibagué y la designación de la firma **NEXIA MONTES & ASOCIADOS SA** como contralor.
Que el incumplimiento en las funciones indelegables de aseguramiento (L. 1122 art. 14) implica una restricción al acceso y garantía en la prestación de los servicios de salud. En ese orden de ideas, con ese propósito se impondrá la medida de restricción de la capacidad de afiliación prevista en el artículo 2.1.10.5.1 (modificado por el Decreto 1184 de 2016 art. 1).

Que, en virtud de lo anteriormente expuesto,

IV. RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. ORDENAR la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y, la intervención forzosa administrativa para administrar **FAMISANAR EPS SAS** identificada con el NIT 830003564-7 por el término de un (1) año, es decir, desde el 15 de septiembre de 2023 hasta el 15 de septiembre de

[25] Ley 1122 de 2007, artículo 39 "(...) La Superintendencia Nacional de Salud, en ejercicio de sus atribuciones de inspección, vigilancia y control, desarrollará, además de los señalados en otras disposiciones, los siguientes objetivos (...)"

2024, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. COMISIONAR a la **SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA ENTIDADES DE ASEGURAMIENTO EN SALUD,** para que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 291 numeral 4 del Decreto Ley 663 de 1993 y el numeral 23 del artículo 22 del Decreto 1080 de 2021, ejecute en nombre de la Superintendencia Nacional de Salud, la medida adoptada en el presente acto administrativo, quien podrá ordenar que se decreten y practiquen las medidas necesarias para dar cumplimiento a los objetivos de la toma de posesión; así como para que, adelante el proceso de notificación del presente acto administrativo.

Se advierte que, si la presente decisión no se puede notificar personalmente al representante legal de **FAMISANAR EPS SAS**, o a quien haga sus veces, se notificará por un aviso que se fijará en lugar público de las oficinas de la administración del domicilio social de la EPS, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato, de todo lo cual se dejará constancia por parte del funcionario comisionado para el efecto, conforme con lo dispuesto en el inciso anterior.

ARTÍCULO TERCERO. ORDENAR a la interventora de **FAMISANAR EPS SAS**, presentar e implementar **un plan de trabajo**, dentro del término de treinta (30) días calendario siguientes a su posesión que será evaluado, discutido y aprobado por la Dirección de Medidas Especiales para EPS y Entidades Adaptadas[26] que dé cumplimiento a las siguientes órdenes:

1. Implementar y ejecutar las acciones del plan de mejoramiento viabilizado a través del radicado 20233100001249521 del 31 de julio de 2023, definidas para subsanar los hallazgos de la auditoría realizada a las condiciones de habilitación en el marco de la Resolución 497 de 2021 y reportar periódicamente la información de avances conforme a la metodología definida por la Dirección de Inspección y Vigilancia.

2. Implementar y ejecutar estrategias que impacten el estado de salud de los afiliados de acuerdo con el modelo de atención en salud, identificando los resultados por cada grupo de riesgo de la población afiliada, en el término máximo de seis (6) meses.

3. Evaluar y presentar los resultados de la implementación de las rutas integrales de atención RIAS que impactan en los resultados de salud en el término máximo de seis (6) meses.

4. Resolver de fondo y de acuerdo con el término establecido por la Circular Externa 008 de 2018 de la Superintendencia Nacional de Salud, las reclamaciones en salud- interpuestas por la población afiliada, con especial atención en las clasificadas como "riesgo vital" y dar solución efectiva a aquellas que se encuentran pendientes por resolver.

5. Evaluar y operativizar la red de prestadores de servicios de salud de tal forma que permita a la población afiliada acceder a los servicios de salud en condiciones de oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad, en un término máximo de siete (7) meses.

[26] De conformidad al parágrafo del artículo 28 de la Resolución 2599 de 2016, (Modificado por la Resolución 20221300000004146 de 2022) *La aprobación del plan de trabajo propuesto por el agente interventor o liquidador, según corresponda, no implica aprobación del presupuesto bajo el entendido que se trata de proyecciones o estimaciones del presupuesto que han sido efectuadas por el responsable de la programación y ejecución de este.*

6. Cumplir con las condiciones financieras y de solvencia establecidas en el Capítulo 2, Sección 1 del Decreto Reglamentario 780 de 2016 (Capital mínimo, Patrimonio adecuado y Régimen de inversión de las reservas técnicas), ejecutando estrategias para el fortalecimiento patrimonial.

7. Implementar y ejecutar, bajo la metodología actuarial acogida por la entidad y aprobada por esta superintendencia, el cálculo de la reserva técnica. De igual forma, deberá implementar actividades de control operacional que garanticen la evaluación, seguimiento y monitoreo para el reconocimiento oportuno de las reservas técnicas en la estructura financiera de la entidad.

8. Diseñar, implementar y ejecutar acciones con seguimiento mensual, enfocadas en la contención y reducción de la siniestralidad, por tipo de contratación (evento, cápita, PGP, entre otros), tipo de red (pública y privada) y relación económica (vinculados y no vinculados), de acuerdo con el diagnostico o evaluación de la estructura de costos que realice la entidad.

9. Implementar y ejecutar seguimiento a la evidencia que respalda la recuperación del activo por impuesto diferido en periodos futuros y que apoya su reconocimiento en Estados Financieros. Dicho seguimiento deberá contemplar, como mínimo, las proyecciones de: 1) ingresos operacionales y no operacionales, 2) gasto administrativo y 3) costo en salud. Al igual que, realizar los ajustes que correspondan al valor de activo por impuesto diferido de conformidad con el marco técnico normativo contable que aplique.

10. Implementar y ejecutar las acciones que garanticen la depuración, saneamiento y legalización oportuna de los anticipos realizados a prestadores y proveedores de servicios y tecnologías en salud, en el término máximo de tres (3) meses.

11. Implementar y ejecutar acciones que garanticen la conciliación y depuración de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, principalmente con vinculados económicos, en el término máximo de tres (3) meses.

12. Realizar la liquidación de los acuerdos de voluntades terminados con la red prestadora de servicios de salud y proveedores de tecnologías en salud, así como, el seguimiento a los que se encuentran en ejecución y adoptar las medidas a que hubiere lugar en caso de evidenciar incumplimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo segundo del Decreto 441 de 2022.

13. Adelantar el proceso conciliatorio de los depósitos judiciales contra lo registrado en el Banco Agrario, realizando la depuración contable a la que haya lugar. A su vez, realizar las gestiones efectivas frente a la recuperación de los recursos del Sistema General de Seguridad Social y remitir dentro del informe de gestión el detalle de las acciones adelantadas.

14. Implementar y ejecutar las estrategias necesarias para garantizar prestación de los servicios de salud a la población afiliada, de manera que se reduzca el riesgo jurídico por la interposición de acciones de tutela.

PARÁGRAFO PRIMERO. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 18 de la Resolución 2599 de 2016[27], el agente interventor deberá presentar:

[27] Modificada mediante Resolución 202213000000414-6 de 2022

1) Presupuesto de actividades
2) Cronograma de actividades
3) Indicadores de gestión de acuerdo con las actividades ordenadas en el artículo tercero
4) Inventario preliminar de los activos de la entidad en un plazo máximo de treinta (30) días a partir de su posesión, que deberá ser presentado ante la Superintendencia Nacional de Salud dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al vencimiento de dicho término.
5) Informe sobre la situación encontrada en la entidad y sobre la gestión de quien ejercía la representación legal antes de la toma de posesión.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Advertir a la interventora que, en caso de detectar alguna irregularidad o inconsistencia en la información contable, técnico científica, administrativa y jurídica relacionada con la gestión del exrepresentante legal, deberá iniciar las acciones legales respectivas, ante las autoridades competentes, informando de ellas a esta superintendencia. Además de los traslados a las entidades competentes.

ARTÍCULO CUARTO. ORDENAR el cumplimiento de las siguientes medidas preventivas, dé conformidad con lo establecido el artículo 9.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010, así:

1. Medidas preventivas obligatorias.

a) La inmediata guarda de los bienes de la intervenida y la colocación de sellos y demás seguridades indispensables;

b) La orden de registro del acto administrativo que dispone la toma de posesión en la Cámara de Comercio del domicilio de la intervenida y en las del domicilio de sus sucursales; y si es del caso, la de los nombramientos de los administradores y del revisor fiscal;

c) La comunicación a los jueces de la República y a las autoridades que adelanten procesos de jurisdicción coactiva sobre la suspensión de los procesos de la ejecución en curso y la imposibilidad de admitir nuevos procesos de esta clase contra la entidad objeto de toma de posesión con ocasión de las obligaciones anteriores a dicha medida.

d) La advertencia que, en adelante, no se podrá iniciar ni continuar procesos o actuación alguna contra la intervenida sin que se notifique personalmente al Interventor, so pena de nulidad;

e) La comunicación a la Superintendencia de Notariado y Registro, para que dicha entidad mediante circular ordene a todos los Registradores de Instrumentos Públicos que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la toma de posesión se sujeten a las siguientes instrucciones:

   i. Informar al interventor sobre la existencia de folios de matrícula en los cuales figure la entidad intervenida como titular de bienes o cualquier clase de derechos; disponer el registro de la toma de posesión en los folios de matrícula de los bienes inmuebles de la intervenida; cancelar los embargos decretados con anterioridad a la fecha de la adopción de la medida de toma de posesión que afecten

los bienes de la intervenida a solicitud elevada solo por el agente especial mediante oficio; y cancelar los gravámenes que recaigan sobre los bienes de la entidad intervenida a solicitud elevada solo por el agente especial mediante oficio.

ii. Se abstengan de cancelar los gravámenes constituidos a favor de la intervenida sobre cualquier bien cuya mutación esté sujeta a registro, salvo expresa autorización del interventor; así como de registrar cualquier acto que afecte el dominio de bienes de propiedad de la intervenida a menos que dicho acto haya sido realizado por la persona mencionada, caso en el cual deben cancelar la respectiva anotación sobre el registro de toma de posesión.

f) La comunicación al Ministerio de Transporte, para que dicha entidad directamente o mediante solicitud a todas las secretarias de tránsito y transporte proceda a realizar la inscripción de la medida de toma de posesión en el registro de automotores correspondiente o en el registro único nacional de tránsito, para que cancelen los embargos decretados con anterioridad a la fecha de la adopción de la medida de toma de posesión que afecten los vehículos de la intervenida; que cancelen los gravámenes que recaigan sobre los vehículos de la intervenida a solicitud unilateral del agente especial mediante oficio; para que se abstengan de cancelar los gravámenes constituidos sobre vehículos a favor de la intervenida, cuya mutación esté sujeta a registro, salvo expresa autorización del agente especial y para que se abstengan de registrar cualquier acto que afecte el dominio de vehículos de propiedad de la intervenida a menos que dicho acto haya sido realizado por la persona mencionada;

g) La prevención a todo acreedor y en general a cualquier persona que tenga en su poder activos de propiedad de la intervenida, para que proceda de manera inmediata a entregar dichos activos al agente especial;

h) La advertencia de que el interventor está facultado para poner fin a cualquier clase de contratos existentes al momento de la toma de posesión, si los mismos no son necesarios. Si se decide la liquidación, los derechos causados hasta la fecha de la intervención serán reconocidos y pagados de conformidad con las reglas que rigen el proceso de liquidación forzosa administrativa;

i) La prevención a los deudores de la intervenida de que sólo podrán pagar al interventor; advirtiendo la inoponibilidad del pago hecho a persona distinta, así como el aviso a las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud sobre la adopción de la medida, para que procedan de conformidad;

j) La prevención a todos los que tengan negocios con la intervenida, de que deben entenderse exclusivamente con el interventor, para todos los efectos legales.

PARÁGRAFO. La presente medida habilita a la interventora a tomar las medidas de salvamento previstas en el artículo 9.1.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010.

ARTÍCULO QUINTO. DISPONER que los gastos que ocasione la decisión aquí ordenada serán a cargo de **FAMISANAR EPS SAS** en los términos de ley.

Continuación de la resolución, **"Por la cual se ordena la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a FAMISANAR EPS SAS identificada con el NIT 830.003.564-7"**

ARTÍCULO SEXTO. ORDENAR la separación del gerente o representante legal de **FAMISANAR EPS SAS** y la Junta Directiva, de conformidad con el artículo 116 del EOSF.

PARÁGRAFO: Se excluirá de la remoción del presente artículo, el máximo órgano de dirección de la sociedad de **FAMISANAR EPS SAS**, sin perjuicio que, en ejercicio de esta competencia facultativa de acuerdo con el artículo 9.1.1.1.1 y numeral 2 del artículo 9.1.1.2.4 del Decreto 2555 de 2010, la interventora pueda decidir posteriormente su separación.

ARTÍCULO SÉPTIMO. DESIGNAR como interventora de **FAMISANAR EPS SAS**, a la doctora **SANDRA MILENA JARAMILLO AYALA** identificada con cédula de ciudadanía número **65.766.395 de Ibagué**, quien ejercerá las funciones propias de su cargo, de acuerdo con lo previsto en las normas del Sistema General de Seguridad Social, el EOSF y demás normas que sean aplicables, para dar cumplimiento a los fines de la toma de posesión e intervención administrativa para administrar.

El cargo de interventor es de obligatoria aceptación. Por tanto, el designado tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha en que sea notificado para aceptar el cargo y posesionarse del mismo, ante el despacho del Superintendente delegado para Medidas Especiales de la Superintendencia Nacional de Salud; de conformidad con el artículo primero de la Resolución 2021300000017762-6 del 23 de diciembre de 2021 y el inciso segundo del artículo décimo sexto de la Resolución 002599 de 2016.

Si el interventor designado rechaza el nombramiento o no se posesiona dentro de los términos indicados en el presente acto administrativo, será excluido del registro, a menos que, en cumplimiento de su deber de información manifieste que está incurso en una situación de conflicto de interés, o acredite la ocurrencia de una circunstancia de fuerza mayor que le impida llevar a cabo el encargo. En este evento el Superintendente Nacional de Salud podrá designar una nueva persona de los candidatos restantes que le haya presentado el Comité de Medidas Especiales.

El interventor designado ejercerá las funciones propias de su cargo, previa posesión de éste, y tendrá la guarda y administración de los bienes que se encuentren en poder de la junto con los demás deberes y facultades de Ley, garantizando el aseguramiento y la prestación del servicio de salud.

De conformidad con lo previsto en el EOSF, particularmente lo dispuesto en los numerales 1, 2, y 6 del artículo 295 y el artículo 9.1.1.2.2 del Decreto 2555 de 2010, el interventor cumple funciones públicas transitorias, es auxiliar de la justicia, tiene autonomía en la adopción de decisiones relacionadas con el ejercicio de sus funciones y para ningún efecto, puede reputarse como trabajador o empleado de la entidad objeto de la medida de toma de posesión, ni de la Superintendencia Nacional de Salud.

ARTÍCULO OCTAVO. ORDENAR a la **interventora**, presentar ante la Superintendencia Nacional de Salud los informes que a continuación se describen, los cuáles serán evaluados, discutidos y aprobados por la Dirección de Medidas Especiales para EPS y Entidades Adaptadas, que contenga la siguiente información:

1. Informes periódicos: Dentro de los veinte (20) primeros días calendario de cada mes, presentar un informe periódico que deberá contener análisis de

los componentes financiero, jurídico, técnico-científico y administrativo de la vigilada, así como cualquier otro análisis que considere relevante para esta superintendencia.

2. Informe al vencimiento de la medida: Mínimo cinco (5) días hábiles previos al vencimiento de la medida ordenada en el artículo primero de la presente decisión, deberá presentar informe final de resultados en el cual, se establezca si es posible poner a la entidad en condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social, si se pueden realizar otras operaciones que permitan lograr mejores condiciones de la vigilada o, si la entidad debe ser objeto de liquidación. Adicionalmente en este informe indicará si es necesario prorrogar el término de intervención, de conformidad lo establecido el artículo 115 del EOSF.

3. Informe final: Deberá presentarse a la Superintendencia Nacional de Salud, a más tardar dentro de los diez (10) días calendario siguientes al momento en que sea informado de la decisión (bien sea por recusación, renuncia, remoción, cambio de la medida especial, muerte, incapacidad permanente, incapacidad temporal prolongada o cualquier otro motivo que de manera grave imposibilite el desempeño de funciones). En el mismo, se sintetizarán todas las actividades realizadas durante su ejercicio como interventor.

ARTÍCULO NOVENO. DESIGNAR a la firma **NEXIA MONTES & ASOCIADOS** identificada con NIT. 800.088.357-4, como contralor para la medida de toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar de **FAMISANAR EPS SAS** ordenada en el artículo primero del presente acto administrativo, quien ejercerá las funciones propias de su cargo, de acuerdo con lo previsto en las normas del SGSSS, el EOSF, el Código de Comercio y demás normas que le sean aplicables y responderá de acuerdo con ellas.

El cargo de contralor es de obligatoria aceptación, en consecuencia, el designado tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha en que sea notificado, para aceptar el cargo y posesionarse del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del articulo décimo sexto de la Resolución 002599 de 2016.

Si el contralor designado rechaza el nombramiento o no se posesiona dentro de los términos indicados en el presente acto administrativo, será excluido del registro, a menos que, en cumplimiento de su deber de información manifieste que está incurso en una situación de conflicto de interés, o acredite la ocurrencia de una circunstancia de fuerza mayor que le impida llevar a cabo el encargo. En este evento el Superintendente Nacional de Salud podrá designar una nueva persona de los candidatos restantes que le haya presentado el Comité de Medidas Especiales.

El contralor designado a través del representante legal y la persona natural designada para ejercer el cargo deberán posesionarse firmando el acta correspondiente en la entidad objeto de la medida ante el Superintendente Delegado para Entidades de Aseguramiento en Salud de conformidad con él artículo primero de la Resolución 2021300000017762-6 del 23 de diciembre de 2021 y el inciso segundo del artículo décimo sexto de la Resolución 002599 de 2016, o en las instalaciones de la Superintendencia Nacional de Salud, aportando prueba de la representación legal y del certificado que acredite el vínculo de la persona jurídica con la persona natural que en su nombre desarrollará las funciones como contralor.

Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 19 de la Resolución 002599 de 2016. Así mismo, aportarán documento en el cual manifiesten su responsabilidad solidaria en cualquier evento.

Al contralor designado le corresponderá realizar el seguimiento al desarrollo y ejecución de las actividades y estrategias planteadas por la entidad vigilada, así como el aval a los indicadores establecidos por esta Superintendencia en salvaguarda a la medida de toma de posesión e intervención forzosa administrativa para administrar a **FAMISANAR EPS SAS** y suministrar a la Superintendencia Nacional de Salud, la información que le sea solicitada en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control.

ARTÍCULO DÉCIMO. ORDENAR al contralor designado, salvaguardar la medida de intervención forzosa administrativa para administrar, adoptada a **FAMISANAR EPS SAS** realizando el seguimiento y monitoreo al desarrollo y ejecución de las acciones y estrategias implementadas para superar los hallazgos que dieron origen a la medida.

Por lo anterior, deberá:

1. Realizar el seguimiento a las acciones adelantadas por la interventora de **FAMISANAR EPS SAS** a más tardar dentro de los diez (10) días calendario siguientes al reporte del vigilado, de conformidad con la metodología dispuesta por la Superintendencia Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud, para los componentes administrativo, financiero, técnico-científico y jurídico, resultados que deberán ser entregados en el informe mensual. Además de presentar un plan de trabajo donde se les hará seguimiento a las órdenes establecidas en el artículo segundo y el cual contemplará también el cronograma para el seguimiento del desarrollo del proceso.

2. Presentar los informes que a continuación se describen en los cuales deberá incluir el avance en cada uno de los componentes objeto de seguimiento y que evidencien la ejecución y resultado realizado al proceso[28], mediante la presentación de los siguientes informes:

   2.1 Informe preliminar: Una vez posesionado le corresponderá presentar documentos de propuesta de: a) plan de trabajo, b) cronograma de actividades; c) diagnóstico: el mismo deberá contener la evaluación, observaciones y recomendaciones sobre aspectos relacionados con la situación administrativa, financiera, jurídica, laboral y técnico científica de la entidad vigilada, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a su posesión.

   2.2 Informe mensual: Deberá presentarse durante el término de la medida, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la entrega del informe de gestión mensual e información financiera presentada por el representante legal de la entidad, un informe a la Superintendencia Nacional de Salud, en el cual, se incluya el avance y la evaluación de la situación administrativa, financiera, jurídica, laboral y técnico científica de la entidad vigilada.

[28] Artículo 27 de la Resolución 2599 de 2016, modificado por la resolución 2022130000000414-6 de 2020.

2.3 Informe final: Deberá presentarse a la Superintendencia Nacional de Salud, a más tardar dentro de los diez (10) días calendario siguientes al momento en que sea informado de la decisión de designación de un nuevo contralor (bien sea por recusación, renuncia, remoción, muerte, incapacidad permanente, incapacidad temporal prolongada o cualquier otro motivo que de manera grave imposibilite el desempeño de funciones), o a la fecha de vencimiento de la medida. En el mismo, se sintetizarán todas las actividades realizadas durante su ejercicio como contralor, de conformidad con los parámetros establecidos en la Ley 43 de 1990 y con el grado de avance obtenido frente al plan de trabajo inicialmente propuesto.

PARÁGRAFO PRIMERO. El contralor designado ejercerá funciones públicas transitorias y tendrá la condición de auxiliar de justicia. En consecuencia, esta designación no constituye relación laboral alguna entre el designado y la entidad objeto de medida de intervención forzosa administrativa para administrar, ni entre aquél y la Superintendencia Nacional de Salud.

PARÁGRAFO SEGUNDO. La Superintendencia Nacional de Salud a través de la Dirección de Medidas Especiales para Entidades Promotoras de Salud y Entidades Adaptadas, evaluará y aprobará el documento presentado por el contralor designado, de acuerdo con el artículo 27 de la Resolución 2599 de 2016, modificado por la Resolución 2022130000000414-6 de 2022.

PARÁGRAFO TERCERO. Los criterios de oportunidad y calidad de la información solicitada por la Superintendencia Nacional de Salud al Contralor designado serán tenidos en cuenta para la evaluación de la gestión realizada al seguimiento de la medida administrativa.[29]

ARTÍCULO ÚNDECIMO. POSESIÓN DEL INTERVENTOR Y DEL CONTRALOR. La Superintendente Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud de la Superintendencia Nacional de Salud realizará la posesión del interventor y contralor, de conformidad con lo señalado en el artículo segundo de la Resolución 202130000000174-6 del 24 de enero de 2021 expedida por esta superintendencia y el inciso 2º del artículo 16 de la Resolución 002599 de 2016.

ARTÍCULO DUODÉCIMO. CUMPLIMIENTO Y NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN. La presente resolución será de cumplimiento inmediato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 291 del EOSF y será a cargo del funcionario comisionado en los términos del artículo 2° del presente acto y se notificará de acuerdo con lo establecido en el artículo 9.1.2.1.1 del Decreto 2555 de 2010, para lo cual fijará un aviso por un día, en lugar público de las oficinas de la administración del domicilio social de la intervenida.

PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad con el inciso final del artículo 9.1.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010, dentro de los **tres (3) días siguientes** a la fecha en que se haga efectiva la medida, la resolución por la cual se adopte será **publicada** por una sola vez en la página web de la Superintendencia Nacional de Salud y en el diario oficial.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición en el efecto devolutivo, su interposición no suspenderá la ejecución de la medida de toma de posesión e intervención para administrar, la cual será de

[29] Artículo 23 de la Resolución 2599 de 2016.

14.

Continuación de la resolución, **"Por la cual se ordena la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a FAMISANAR EPS SAS identificada con el NIT 830.003.564-7"**

cumplimiento inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1966 de 2019, en concordancia con el artículo 335 del EOSF y el artículo 2.5.5.1.9 del Decreto780 de 2016. Dicho recurso podrá interponerse en el momento de la diligencia de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, ante el despacho del Superintendente Nacional de Salud el cual podrá ser remitido a la dirección habilitada para recibo de correspondencia: Carrera 68A N.º 24B - 10,Torre 3, piso 4 Edificio Plaza Claro, Bogotá D.C. (atención presencial de lunes a viernes 8:00 a.m. a 4:00 p.m.) o correo electrónico correointernosns@supersalud.gov.co de conformidad con lo previsto en el artículo 76 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO TÉRCERO. LIMITAR la capacidad para realizar nuevas afiliaciones y para aceptar traslados a **FAMISANAR EPS SAS**, identificada con Nit. 830003564-7 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1.10.5.1 del Decreto 780 de 2016, adicionado por el artículo 1 del Decreto 1184 de 2016.

ARTÍCULO DECIMO CUARTO. COMUNICAR el presente acto administrativo al Ministerio de Salud y Protección Social, en la dirección electrónica notificacionesjudiciales@minsalud.gov.co o a la dirección física Carrera 13 No. 32-76 en la ciudad de Bogotá; al Director General de la Entidad Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES en la dirección electrónica notificaciones.judiciales@adres.gov.co o a la dirección física en la Avenida Calle 26 No. 69-76 Torre 1 Piso 17 Centro Empresarial Elemento en la ciudad de Bogotá; al Director de la Cuenta de Alto Costo en la dirección electrónica administrativa@cuentadealtocosto.org o, a la dirección física en la Carrera 45 No.103-34 oficina 802 en Bogotá D.C., y a los gobernadores de los departamentos de Atlántico notificacionesjudiciales@atlantico.gov.co, Bolívar notificaciones@bolivar.gov.co, Boyacá, notificacionesjudiciales@boyaca.gov.co, Caldas notificacionesjudiciales@caldas.gov.co, Cesar notificacionesjudiciales@gobcesar.gov.co, Cundinamarca notificaciones@cundinamarca.gov.co, Huila notificaciones.judiciales@huila.gov.co, Magdalena notificacionjudicial@magdalena.gov.co, Meta notificacionesjudiciales@meta.gov.co, Nariño notificaciones@narino.gov.co, Quindío notificacionesjudiciales@quindio.gov.co, Risaralda notificaciones.judiciales@risaralda.gov.co, Santander notificaciones@santander.gov.co, Tolima notificaciones.judiciales@tolima.gov.co y Valle del Cauca njudiciales@valledelcauca.gov.co, y Bogotá D.C. notificacionesjudiciales@gobiernobogota.gov.co.

PARÁGRAFO COMUNICAR el presente acto administrativo a la Superintendencia del Subsidio Familiar al correo electrónico de notificaciones judiciales ssf@ssf.gov.co, teniendo en cuenta la participación accionaria de la EPS se encuentra la Caja Colombiana del Subsidio Familiar – COLSUBSIDIO y Caja de Compensación Familiar – CAFAM, en atención al artículo 2 de la Ley 1929 de 2018, a la Delegatura para la Función Jurisdiccional y de Conciliación y, al Grupo de Trabajo de Cobro Coactivo de la Secretaria General de la Superintendencia Nacional de Salud.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición

Dada en Bogotá D.C., a los 15 días del mes 09 de 2023.

Continuación de la resolución, **"Por la cual se ordena la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a FAMISANAR EPS SAS identificada con el NIT 830.003.564-7"**

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente por: Ulahi Dan Beltrán López

Ulahi Dan Beltrán López
SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD

Proyectó: Natalia Del Pilar Alfonso Villamil
Revisó: Laura Natalia Corredor Amaya -- MARIA ISABEL ANGEL ECHEVERRY -- EDWIN ALEJANDRO ACEVEDO GARCIA -- Ellecer Enrique Polo Castro 16000
Aprobó: Ulahi Dan Beltrán López

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.

SALA CIVIL

MARTHA ISABEL GARCÍA SERRANO
Magistrada Ponente

Bogotá D. C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Proceso:	Verbal
Radicación N.°:	11001310303420220019001
Demandante:	Jesús Alfonso Cruz Vargas y Otra.
Demandado:	Constructora Siglo XXI Santo Domingo S.A.S.

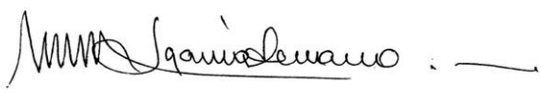
ADMITIR el recurso de apelación formulado por ambas partes de la referencia contra la sentencia proferida en audiencia el 31 de enero hogaño, por el Juez 55 Civil del Circuito de Bogotá D.C., de conformidad con las previsiones del artículo 12 de la Ley 2213 de 2022.

Por lo anterior, **CONCEDER** a los recurrentes el término de cinco (5) días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia para que procedan a **SUSTENTAR** los reparos concretos que formularon ante la autoridad de primera instancia; transcurrido dicho lapso, se **CORRERÁ TRASLADO** a la contraparte por el mismo plazo, para que, si a bien lo tiene, efectúe la réplica.

Advertir a los recurrentes que, en ese **lapso y en ésta instancia deberán sustentar los reparos concretos que formularon ante el *a quo* o manifestar si se tiene como sustentación el escrito que presentó ante el juez de instancia, pues en caso de guardar silencio, se declarará desierto el recurso de alzada, como dispone el artículo citado**. Para todos los efectos, el **ÚNICO** correo institucional habilitado para recibir el escrito de sustentación es secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

Finalmente, **PRORROGAR** en seis (6) meses el término para decidir la apelación, dado el alto número de recursos asignados al Despacho.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



MARTHA ISABEL GARCÍA SERRANO
Magistrada

Firmado Por:

Martha Isabel Garcia Serrano

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Sala 009 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c996b7131b9bd629acf9503e46c4fa9b286795434285bebb66944923cf63aaa2**

Documento generado en 29/02/2024 03:43:34 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.

SALA CIVIL

MARTHA ISABEL GARCÍA SERRANO
Magistrada Ponente

Bogotá D. C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Proceso: Verbal – Reivindicatorio
Radicación N.°: 11001310303320190062002
Demandante: María Orfelia Hoyos Buitrago
Demandado: Ruth García Barreto y Otros.

ADMITIR el recurso de apelación formulado por los apoderados de los demandados Robert Becerra Bolívar y José Leonardo González García contra la sentencia proferida en audiencia el 19 de octubre de 2023, por el Juez 33 Civil del Circuito de Bogotá D.C., de conformidad con las previsiones del artículo 12 de la Ley 2213 de 2022.

Por lo anterior, **CONCEDER** a los recurrentes el término de cinco (5) días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia para que procedan a **SUSTENTAR** los reparos concretos que formularon ante la autoridad de primera instancia; transcurrido dicho lapso, se **CORRERÁ TRASLADO** a la contraparte por el mismo plazo, para que, si a bien lo tiene, efectúe la réplica.

Advertir a los recurrentes que, en ese **lapso y en ésta instancia deberán sustentar los reparos concretos que formularon ante el *a quo* o manifestar si se tiene como sustentación el escrito que presentó ante el juez de instancia, pues en caso de guardar silencio, se declarará desierto el recurso de alzada, como dispone el artículo citado**. Para todos los efectos, el **ÚNICO** correo institucional habilitado para recibir el escrito de sustentación es secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

Finalmente, **PRORROGAR** en seis (6) meses el término para decidir la apelación, dado el alto número de recursos asignados al Despacho.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

MARTHA ISABEL GARCÍA SERRANO
Magistrada

Firmado Por:

Martha Isabel Garcia Serrano

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Sala 009 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **e7b5f8e3941be206049f881868b2a289d4874e1b50bc5023e8a8f0f01334a3e7**

Documento generado en 29/02/2024 03:42:35 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, D.C.

SALA CIVIL

Bogotá, D. C., veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro.

Ref: **Proceso verbal**
De: **Spazio Premium S.A.**
Contra: **Scoatibank Colpatria S.A.**
NO. **11001 31 030 31 2022 00146 01**

Magistrada Ponente: Adriana Ayala Pulgarín.

Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada contra la providencia de 11 de octubre de 2023 proferida por el Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de esta ciudad.

ANTECEDENTES

1. El juez de primera instancia mediante el auto de 11 de octubre de 2023 decretó el desistimiento tácito.

2. Contra la anterior decisión la parte demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, que se sustentó en que en el término de ejecutoria de este proveído la entidad actora realizó la notificación de la demandada y de la litisconsorte, por lo que estima haber cumplido con su carga.

CONSIDERACIONES

El desistimiento tácito es una forma anormal de terminación del proceso, y el artículo 317 del Código General del Proceso, consagra tres hipótesis para su ocurrencia: la primera, cuando el juez requiere para que se realice una actuación por una de las partes efecto para cual se concede el término de 30 días para su realización; la segunda atinente a cuando el proceso en encuentre en Secretaría por el término de un año y la tercera después de dictada sentencia y el proceso queda en Secretaría por el término de dos años.

En el caso de marras, el desistimiento se fundó en que había transcurrido más de un año con el proceso en Secretaría sin que se realizara actuación alguna, y evidentemente desde que se admitió la demanda desde el 16 de junio de 2022 la parte actora no realizó ninguna actuación, puesto que no notificó a la demandada ni a la litisconsorte ni mucho menos prestó la caución para la practica de las medidas cautelares, y el escrito de 5 de julio de 2022 no tenía trascendencia alguna puesto sino compartía la decisión de disponer la vinculación del litisconsorte debió recurrir el auto admisorio.

Luego fuerza concluir que trancurrió con creces el término previsto en el artículo 317 del Código de rito, y sin que la actuación surtida dentro del término de ejecutoria del proveído aquí recurrido tenga la virtualidad de modificar la decisión, pues fue una actuación extemporánea.

De acuerdo a lo discurrido debe confirmarse el proveído censurado pero sin condena en costas por no aparecer causadas.

D E C I S I O N:

En mérito de lo expuesto, la suscrita magistrada de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C.

RESUELVE

PRIMERO. Confirmar el auto materia de apelación.

Notifíquese y cúmplase

Firmado Por:

Adriana Ayala Pulgarin

Magistrado

Sala 017 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **877283358526275516e1ac1ab3cf4cbc0313c952af3366669626895d30f954fd**

Documento generado en 29/02/2024 10:18:29 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA

SALA CIVIL

MAGISTRADA SUSTANCIADORA

MARÍA PATRICIA CRUZ MIRANDA

Bogotá D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

ASUNTO: PROCESO VERBAL (RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL) DE LA SOCIEDAD INVERSIONES RODRÍGUEZ ZULETA S.A.S. CONTRA GRUPO NORMANDIA S.A.

Rad. 31 2019 00588 01

Sentencia escrita de conformidad con lo autorizado por el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, cuyo proyectó se discutió aprobó en la de 14 de febrero de 2023, según acta 06.

Se resuelve el recurso de apelación que interpuso la parte demandante contra la sentencia de 12 de octubre de 2022 que profirió el Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogotá.

I. ANTECEDENTES

1. La sociedad Inversiones Rodríguez Zuleta S.A.S., a través de apoderada judicial, formuló demanda contra Grupo Normandía S.A., con el fin de que se declare que es civilmente responsable por los daños generados con ocasión a la omisión de información respecto: *i)* a la no ejecución de obras para la conexión de servicios de acueducto y alcantarillado en el inmueble donde se construyó la Urbanización Bosques de Salamanca; *ii)* por la no información acerca de la toma de posesión que la Defensoría del Espacio Público de Bogotá efectuó sobre las áreas de cesión incluidas en la resolución de urbanismo.

En consecuencia, pidió que se le condene a la demandada a pagar debidamente indexadas las siguientes sumas: *"($50.474.724.oo) por concepto de obras ejecutadas"; ($56.418.174.oo por la compra de materiales para obras"; "($212.402.961.oo) por concepto de valores pagados a contratistas interventores, diseños y topografía..."* y, el monto de *($49.377.380.oo), por obras ejecutadas en las zonas verdes",* todas efectuadas por Nevado Inversiones S.A.S., ahora a cargo de la demandante; y, por las costas y gastos del proceso.

2. Como fundamento de las anteriores pretensiones, explicó que, luego de dos audiencias de conciliación, la convocada se comprometió a transferir en favor de su representada, a título de fiducia mercantil, el dominio del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria N°50N-20358038 para continuar la construcción de un proyecto denominado *"Bosques de Salamanca",* negocio que se protocolizó en el instrumento público N°1460 de 2012 en la Notaría 11 de esta ciudad.

Agregó, que con anterioridad la demandada suscribió una *"carta de compromiso con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá",* donde se obligó a realizar determinadas obras para acceder al servicio de *"ejecución y puesta en servicio de las redes de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial".* Sin embargo, en el mes de marzo de 2011, y en virtud a que no se continuó con la ejecución del proyecto inmobiliario, la demandante celebró un nuevo acuerdo privado con la sociedad Nevado Inversiones S.A.S. para terminar la planeación, diseño y construcción del proyecto.

Que en virtud del precitado negocio, la demandante cedió por valor de 500 millones de pesos su posición de fideicomitente del contrato a la sociedad Nevado Inversiones S.A.S. para continuar y terminar el proyecto, así como el certificado de viabilidad y disponibilidad inmediata de los servicios de acueducto y alcantarillado para el predio; sin embargo, el 16 de abril de 2015, la empresa de Acueducto y Alcantarillado rechazó la solicitud de servicio temporal para Bosques de Salamanca, debido a que el urbanizador inicial no efectuó la *"construcción de la redes diseñadas",* a la que se había comprometió la demandada y que quedó plasmada en la escritura pública, en razón a que declaró haber hecho entrega del inmueble a *"paz y salvo por todo concepto de servicios públicos".*

Adicionó, que la demandada no construyó las tuberías de acueducto y de aguas negras y lluvias; que la sociedad Nevado Inversiones, una vez la empresa de Acueducto rechazó la solicitud de suministro, excavó y revisó la propiedad y encontró que el urbanizador *"se pegó"* a la tubería del predio colindante que para la época desarrollaba la Constructora Pedro Gómez, para el suministro del servicio, aspectos que no le fueron informados a la demandante.

Expuso, que Nevado Inversiones S.A.S., con ocasión de lo anterior, suscribió una nueva carta de compromiso de urbanizador ante el Acueducto, y *"con cargo a Inversiones Rodríguez Zuleta S.A.S."* realizó todas las obras necesarias con un presupuesto de *"$90.265.201.oo como consta en el documento Nº9-99-30100-005022017 de 7 de mayo de 2017"*.

Finalmente, señaló que el Grupo Normandía le transfirió el dominio del área restante del lote de terreno que faltó por urbanizar, correspondiente a 4.961,51 m2, empero, no le informó que el 11 de noviembre de 2011, la Defensoría del Espacio Público de Bogotá tomó posesión de las áreas cedidas incluidas en la resolución de urbanismo, por tanto, también la engañó sobre esa materia; y que los gastos y costos que la demandante debió asumir por el incumplimiento de la demandada, junto con las obras ascienden a *"$368.673.239.oo"*.

3. Notificada la sociedad demandada mediante aviso[1], se opuso a las pretensiones y formuló los medios defensivos que denominó:

i) *"falta de legitimación por activa (para ser demandante) y por pasiva (para ser demandado)",* porque la escritura pública a que se refiere la demanda no corresponde a una compraventa, sino a la transferencia del terreno a *"título de fiducia mercantil"* en nombre de la Fiduciaria Bogotá S.A. y como tradente, el Grupo Normandía S.A., es decir, actuó en nombre y por cuenta de la demandante *"como si de un mandato sin representación se tratara"* y, además, Inversiones Rodríguez Zuleta S.A.S. *"cedió su posición contractual de fideicomitente a Nevado Inversiones S.A.S. el 7 de marzo de 2013"*.

ii) *"Grupo Normandía S.A. cumplió con las obligaciones a su cargo",* pues a pesar que se constituyó en mayo de 2004 y se inscribió en la Cámara

[1] *Folio 297 (03ExpedienteDigitalizado1-217.pdf)*

de Comercio de Cali en ese mismo año, no es posible, como lo asegura la demandante, que se hubiere comprometido en el 2002 a realizar las obras; y que la carta de compromiso con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá la suscribió *"Constructora Normandía S.A."*, persona jurídica diferente, constituida en 1996 y se encuentra en liquidación.

Que la conciliación de 1998 celebrada entre Constructora Normandía S.A. e Inversiones Altamar Ltda. en Liquidación (quien le cedió los derechos a Rodríguez Zuleta S.A.S.) tuvo como objeto desarrollar en un lote de terreno de propiedad de la demandante un proyecto de vivienda que se denominó Bosques de Salamanca; que como solo fue posible ejecutar tres etapas, la Constructora se obligó a devolver a *"Inversiones Altamar Ltda. y/o a Inversiones Rodríguez Zuleta S.A.S."* la parte del lote que no se construyó, lo que cumplió.

iii) *"Los costos en que incurrió Nevado Inversiones S.A.S. obedecen al desarrollo de las etapas que estaban pendientes por desarrollar del proyecto Bosques de Salamanca",* en razón a que Inversiones Rodríguez Zuleta S.A.S. cedió a Nevado Inversiones S.A.S. su posición contractual dentro del contrato de Fiducia Mercantil celebrado previamente con Fiduciaria Bogotá S.A. el 18 de marzo de 2011. Allí, Nevado Inversiones se comprometió a continuar lo que no terminó Constructora Normandía S.A., de ahí que cualquier obra adicional corría por cuenta del nuevo urbanizador.

iv) *"Ausencia de prueba del daño como de la cuantía de los perjuicios",* porque no existe elemento de convicción *"serio, sólido y fundamentado"* que informe que los perjuicios reclamados son ciertos y reales, más aún si se tiene en cuenta que Grupo Normandía S.A. no intervino en ninguna de las operaciones donde asegura la demandante existió un supuesto incumplimiento, sin que tampoco tuviera a su cargo efectuar las obras de acueducto y alcantarillado.

v) *"Prescripción",* toda vez que la escritura pública donde Grupo Normandía transfirió en nombre y por cuenta de Inversiones Rodríguez Zuleta S.A.S. a la Fiduciaria Bogotá S.A. es de mayo de 2012 y el acuerdo al que inicialmente se llegó entre la Constructora Normandía S.A. e Inversiones Altamar Ltda. en Liquidación data de 1998, por ende, todas las actuaciones derivadas de ese contrato se encuentran prescritas de acuerdo con el artículo 2536 del Código Civil.

vi) *"Genérica",* que pidió reconocer de encontrarse probada en el proceso.

4. Surtido el trámite, el juez de primera instancia profirió sentencia donde negó la totalidad de las pretensiones, condenó en costas a la parte demandante y ordenó el levantamiento de las medidas cautelares.

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

A vuelta de resumir los antecedentes del caso y los medios exceptivos propuestos, se refirió a la normatividad y jurisprudencia con relación a las obligaciones del vendedor, de acuerdo con el artículo 1880 del Código Civil; la entrega o tradición de la cosa y el saneamiento de la cosa vendida.

Luego, hizo mención a la acción redhibitoria a la que tiene derecho el comprador, con el propósito que se rescinda la venta o se rebaje el precio por vicios ocultos. De esa manera, sostuvo que, si bien el conflicto se presentó entre personas jurídicas que desarrollan actividades comerciales, la normatividad aplicable, artículos 934 a 938 del Código de Comercio prevén un término de prescripción de 6 meses, el que se debe contabilizar desde la entrega del bien; que esa entrega se dio en virtud del desarrollo de un proyecto inmobiliario *"a su original propietario, es decir, a Inversiones Altamar quien como se expuso cedió su posición contractual a Inversiones Rodríguez Zuleta S.A.S.",* sin que la demandada hubiera intervenido, pues solo lo hizo en la segunda conciliación de 18 de mayo de 2012, *"cuyo único objetivo fue convenir una nueva fecha para llevar a cabo la transferencia del dominio pactada",* obligación que no comprende el saneamiento de vicios ocultos o redhibitorios.

III. EL RECURSO DE APELACIÓN

1. Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación. Aseguró que el juez no tuvo en cuenta la totalidad del material probatorio, que las consideraciones del fallo no coinciden con las pruebas documentales que demuestran la responsabilidad

de la demandada; resaltó que las pretensiones no corresponden a una indemnización como resultado de una *"acción redhibitoria",* sino a una *"acción de responsabilidad por los perjuicios causados en razón a la violación de un deber específico de información en este caso por el tradente Grupo Normandía"*.

Que para el 2005, cuando el Grupo Normandía adquirió el inmueble, estaba constituido el reglamento de propiedad horizontal, por ello no es posible sostener que la convocada solo realizó una transferencia del inmueble, sino que también lo hizo respecto del Proyecto Inmobiliario Bosques de Salamanca porque, además, continuó con su desarrollo, pese a que lo inició la Constructora Normandía, sociedades que están representadas por la misma persona.

Y que la transferencia que se le efectuó a la Fiduciaria Bogotá por la conciliación de 17 de marzo de 2011 no desvirtúa la responsabilidad de la demandada, porque el que Grupo Normandía, para ese momento, era la propietaria del inmueble y tanto ella como la Constructora Normandía, se obligaron a dar aviso a los copropietarios sobre su responsabilidad con relación a la *"terminación de las obras comunes",* entre ellas, las de acueducto y alcantarillado.

IV. CONSIDERACIONES

1. No admiten reparo los denominados presupuestos procesales, sobre el entendido que quienes acudieron a la litis por activa y pasiva ostentan capacidad procesal, la demanda fue debidamente presentada y tramitada por el Juez competente lo que, aunado a la ausencia de vicio con idoneidad anulatoria, permite proferir la decisión de fondo que de esta Corporación se requiere.

Propósito para el que se tendrán en cuenta los reparos formulados por la parte convocante, en atención a lo establecido en el artículo 328 del Código General del Proceso, pero sin desechar la opción de adoptar de decisiones de oficio, en los casos previstos en la ley, como esa misma

disposición faculta al juez, conforme lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia[2] al decir que:

> *En este orden se tiene que, como regla de principio, la decisión del superior está restringida a los argumentos expuestos por el apelante, lo que no obsta para que sentencie sobre temáticas respecto de las cuales el ordenamiento le impone pronunciarse motu proprio, por estar íntimamente relacionadas con el asunto sometido a su conocimiento, verbi gratia, las restituciones mutuas derivadas de distintas modalidades de decaimiento de un acuerdo de voluntades (CSJ SC 020 de 2003, rad. 6610; SC10097 de 2015, rad. 2009-00241); el deber de reexaminar en juicios coactivos el título ejecutivo aportado a efectos de determinar la cabal concurrencia de sus requisitos (CSJ STC15169 de 2019, rad. 2019-01721; CSJ STC13428 de 2019, rad. 2019-01460); entre otros eventos.*
>
> ***Uno de estos pronunciamientos oficiosos que debe asumir el funcionario ad-quem corresponde al señalado en el artículo 282 de la obra en mención, a cuyo tenor «[e]n cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda».***
>
> *Otro lo constituye el análisis de los presupuestos del derecho reclamado por el demandante, sin que este proceder implique la desatención del principio de la congruencia, porque como lo tiene dicho la Corte, «[d]esde esa perspectiva si lo que pasa por alto el sentenciador es la inexistencia del derecho reclamado, no quiere decir que el fallo sea inconsonante, que sólo se da si no declara de oficio una «excepción» que forzosamente debía reconocer. Esto es, no corresponde a un yerro in procedendo.…» (CSJ SC4574 de 2015, rad. 2007-00600-02).*
>
> *Es decir, la resolución del derecho reclamado por el solicitante, accediendo o negando, previamente al estudio de los mecanismos de defensa propuestos o a los reparos señalados por el recurrente por vía de apelación, no comporta la conculcación del principio de congruencia, por tratarse del cumplimiento del deber de administrar justicia de que está investido todo funcionario judicial, ya de primera instancia ora de segundo grado, en desarrollo del derecho a la tutela judicial efectiva.*
>
> *(…)*
>
> ***5. En suma, no se configura el vicio de incongruencia cuando el juzgador de segundo grado analiza la satisfacción de los presupuestos de la pretensión radicada por el demandante, aun cuando estos no sean objeto de reparo en la apelación (SC3918***

[2] *CSJ. CAS CIV SENT SC3918-2021, Sep. 8 DE 2021 Exp. 033-2008 0010601 y SC5473-2021, Dic. 16 de 2021, Exp 001 2017 40845 MP. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo*

de 2021, rad. 2008-00106) *(negrita y subrayas fuera del texto original)*

2. Establecido lo anterior y para resolver inicialmente sobre la legitimación en la causa de la demandada, así como los reparos dirigidos en cierto modo a la incongruencia de la sentencia por cuanto, al decir del apelante, la responsabilidad que promovió no derivó de una acción redhibitoria sino de una *"acción de responsabilidad por los perjuicios causados en razón a la violación de un deber específico de información en este caso por el tradente Grupo Normandía"*, se tiene que si bien en la demanda se relata varios negocios antecedentes, especialmente con la constructora Normandía, no se puede perder de vista que entre las partes en litigio se suscribió una conciliación donde zanjaron todas sus diferencias.

2.1 Al efecto, nótese que con la demanda se adosó copia del acta de conciliación N°00048 de 17 de marzo de 2011 de la Notaría 11 de Bogotá[3], donde se presentaron ***a)*** Andrés Guillen, en calidad de apoderado de Constructora Normandía S.A. en Liquidación y, ***b)*** Gustavo Rodríguez Zuleta, liquidador de Inversiones Altamar Ltda. en Liquidación y representante legal de Inversiones Rodríguez Zuleta S.A.S., en condición de cesionaria y aquí demandante, así se ve el respectivo que obra en el archivo 03ExpedienteDigitalizado1-217.pdf

En tal documento, se acordó declarar terminado el negocio celebrado en el año 1998 dirigido a desarrollar un proyecto inmobiliario de vivienda *"Bosques de Salamanca"*; restituir por parte de la Constructora la porción del inmueble que *"no resultó comprometida en la ejecución del proyecto"* y, efectuar la liquidación final de cuentas. Se indicó, además, del avance del proyecto, que el predio se transfirió finalmente al Grupo Normandía S.A. y que, mediante documento de 23 de febrero de 2011, Inversiones Altamar *"CEDIÓ a título oneroso los derechos y obligaciones a favor de la Sociedad INVERSIONES RODRIGUEZ ZULETA S.A.S."*

Así mismo que, en consideración a que el proyecto no se desarrolló en su totalidad ni era deseo de la Constructora ni del Grupo Normandía continuar con su ejecución, optaron por terminarlo de manera anticipada *"y poner fin a las controversias surgidas, responsabilidades y restitución de la parte del inmueble no comprometida en la ejecución del proyecto y en*

[3] *Folios 167 a 189 (03ExpedienteDigitalizado1-217.pdf)*

general a todas las controversias y/o diferencias entre ellas con causa anterior al presente acuerdo" y, por ende, decidieron *"dar por resueltas sus diferencias"*, las cuales enlistaron en 9 ítems.

Luego de relacionar sus diferencias, plasmaron el acuerdo conciliatorio donde el primero de ellos consistió en dar por terminado el acuerdo celebrado para el desarrollo del proyecto Inmobiliario inicialmente denominado Bosques de Altamar, posteriormente Bosques de Salamanca, celebrado el 25 de enero de 1998, adicionado el 27 de noviembre de ese mismo año y el 20 de 0ctubre de 2000 y, "*en consecuencia, dar por terminada todas las relaciones civiles, comerciales laborales, fiscales y de cualquier índole, existentes entre las partes y entre sus socios con anterioridad a la fecha del presente contrato.*"

Además, se aportó el acta de conciliación 067 del 18 de mayo de 2018 donde las partes, según allí se lee, ante el incumplimiento de la acá demandante por no presentarse a la Notaría en la fecha prevista, convinieron condonar ese incumplimiento y señalar otra fecha para ese acto.

También se adosó copia de la escritura pública N°1460 de 2012 de la Notaría 11 de Bogotá[4], correspondiente a los actos jurídicos *"transferencia a título de fiducia mercantil"* y *"constitución de comodato precario"* sobre el inmueble con folio de matrícula inmobiliaria N°50N-20358038, donde en la cláusula primera se plasmaron los siguientes antecedentes:

> *"Que el TRADENTE: GRUPO NORMANDIA S.A. e INVERSIONES RODRÍGUEZ ZULETA S.A.S. en virtud del Acta de Conciliación celebrada en día diecisiete (17) de marzo de dos mil once (2011), LA TRADENTE – GRUPO NORMANDÍA S.A. se obliga a título de fiducia mercantil, a nombre y por cuenta de INVERSIONES RODRIGUEZ ZULETA S.A.S.*
>
> *Que mediante documento privado suscrito el dieciocho (18) de marzo de dos mi once (2011), entre INVERSIONES RODRÍGUEZ ZULETA S.A.S. y la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., celebraron contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración, en virtud del cual se constituyó FIDEICOMISO PATRIMONIO AUTONOMO INVERSIONES RODRIGUEZ ZULETA S.A.S. – FIDUBOGOTA*
>
> *1.2. Que INVERSIONES ZULETA S.A.S. ha pagado la totalidad del precio del inmueble parte a la firma de la Conciliación, celebrada el día diecisiete (17) de marzo de dos mil once (2011) y parte a la firma de esta escritura y ha manifestado a EL TRADENTE que la persona jurídica a favor de la cual se deberá transferir a título de fiducia mercantil y a nombre y por cuenta de INVERSIONES RODRIGUEZ ZULETA S.A.S.., el bien y con ella perfeccionar el contrato prometido es FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. quien concurre como vocera constituyó FIDEICOMISO PATRIMONIO AUTONOMO INVERSIONES RODRIGUEZ ZULETA S.A.S. – FIDUBOGOTA única y*

[4] *Folios 62 a 99 (03ExpedienteDigitalizado1-217.pdf)*

exclusivamente para recibir el inmueble y dar cumplimiento a lo establecido en el contrato de fiducia.

1.3. Que EL TRADENTE declara haber recibido el pago a satisfacción y cumple la obligación contenida en la conciliación en los términos contenidos en la presente escritura pública.

El anterior documento tuvo como objeto transferir *"a título de fiducia mercantil por cuenta y a nombre de Inversiones Rodríguez Zuleta S.A.S. – FIDUBOGOTA el derecho de dominio y de posesión real y material que tiene respecto del bien inmueble..."* por un valor de 500 millones de pesos.

La copia del certificado de tradición y libertad del inmueble[5], evidencia la inscripción anterior del instrumento en la anotación N°15, donde consta la *"transferencia de dominio a título de beneficio en fiducia mercantil"* de *"Grupo Normandía S.A."* a *"Fiduciaria Bogotá S.A. vocera del Patrimonio Autónomo Inversiones Rodríguez Zuleta S.A.S. – Fidubogotá"*.

3. De la anterior prueba documental se constata que si bien el negocio primigenio dirigido a la ejecución de un proyecto inmobiliario fue celebrado entre Constructora Normandía S.A. e Inversiones Altamar Ltda. en Liquidación, el Grupo Normandía no es ajeno a las relaciones contractuales surgidas entre la citada Constructora e Inversiones Rodríguez Zuleta S.A.S., precisamente por tratarse del Grupo al que la Constructora hace parte.

De ahí que la Constructora y el Grupo Normandía (aquí demandado), de un lado, e Inversiones Altamar Ltda. e Inversiones Rodríguez Zuleta S.A.S. (aquí demandante), del otro, se encuentran vinculadas por el referido acto de conciliación, especialmente el Grupo Normandía que por figurar como titular del derecho de dominio del restante lote de terreno que debía trasferir en desarrollo de la comentada conciliación, no puede esgrimir, como lo hizo, su falta de legitimación por pasiva, porque como lo reconoció su representante legal al absolver el interrogatorio de parte, al indagársele sobre tal aspecto, dijo que su representada solo debía *"transferir el lote"* y que las demás obligaciones eran de la Constructora Normandía; y que resultó siendo el titular del dominio *"como una participación transitoria o decisión administrativa, y que en la conciliación es quien queda con la obligación de transferir el lote a la demandante, únicamente."*, pero no por ello puede ser considerado como un tercero totalmente ajeno a esta litis.

---

[5] *Folio 114 (03ExpedienteDigitalizado1-217.pdf)*

Al respecto véase que en las anotaciones N°11 y 12 inscritas en el folio de matrícula inmobiliaria del inmueble en cuestión se señala que:

> *"Anotación Nro.11 Fecha:19-04-2005 Radicación:2005-27469 Valor Acto: $162.000.000.oo*
> *Documento: Escritura 904 del 14-04-2005 Notaria 59 de Bogotá*
> *Especificación: 0125 Compraventa parte restante de este y total de otros (modo de adquisición)*
> *PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO...*
> *DE: CONSTRUCTORA NORMANDÍA S.A.*
> *A: GRUPO NORMANDÍA S.A."*
>
> *"Anotación Nro.12 Fecha:08-07-2005 Radicación:2005-50076 Valor Acto:*
> *Documento: Escritura 1588 del 15-06-2005 Notaria 59 de Bogotá D.C.*
> *Especificación: 0901 Aclaración Escr.904/2005 Not.59 Bog en cuanto a citar el área de terreno que falta por urbanizar en este inmueble (otro)*
> *PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO...*
> *A: CONSTRUCTORA NORMANDÍA S.A.*
> *A: GRUPO NORMANDÍA S.A."*

Entonces, pese a que la Constructora Normandía como el Grupo Normandía, en su constitución, son personas jurídicas diferentes, no lo son respecto a la ejecución de los convenios o contratos celebrados con Inversiones Altamar Ltda. e Inversiones Rodríguez Zuleta S.A.S. relacionados con la construcción y desarrollo del proyecto Bosques de Salamanca, precisamente por la interdependencia de la Constructora con el Grupo al que pertenece, al punto en que la referida conciliación fue la Constructora quien vinculó al Grupo, sociedades éstas que, por demás, valga resaltar son representadas legalmente por una misma persona natural, es decir, el Grupo no resultó ajeno ni inconsulto en la referida la conciliación.

4. También obra en el plenario copia del rechazo de la solicitud de servicio temporal de 16 de abril de 2015 para el predio *"Bosques de Salamanca II"*[6], dirigido a Nevado Inversiones S.A.S. por la siguiente razón: *"a la fecha no ha cumplido con la totalidad de los compromisos adquiridos como Urbanizador responsable, conforme a la Licencia de Urbanismo con Resolución N°41030 del 15 de marzo de 2001. Debe tener en cuenta que de acuerdo a los diseños de redes de Acueducto y Alcantarillados presentados por el Urbanizador y aprobados por la Empresa con Carta de Compromiso, se encuentran algunos pendientes de construcción de las redes diseñadas, así mismo es importante resaltar que al interior del predio existen redes locales de prestación de servicios que pueden verse afectadas durante el proceso*

[6] *Folio 165, 166 (03ExpedienteDigitalizado1-217.pdf)*

constructivo en desarrollo. Por lo anterior debe cumplir en su totalidad con los compromisos adquiridos para poder continuar con el trámite".

Por tal razón, la empresa de Acueducto y Alcantarillado solicitó la suscripción de una nueva carta de compromisos de urbanizadores el 7 de mayo de 2017[7] a la sociedad encargada de terminar la ejecución del proyecto, donde se obligó a *"ejecutar los tramos de alcantarillado sanitario y acueducto pendientes por construir de los proyectos No. 6164 y 28/086 teniendo en cuenta que el Proyecto Bosques de Salamanca corresponde a un urbanismo sin terminar... TENIENDO EN CUENTA LO ANTERIOR NO PROCEDE NINGÚN TIPO DE RECONOCIMIENTO, DADO QUE NO SE HAN CULMINADO LAS OBRAS DE URBANISMO. EL URBANIZADOR se compromete una vez se construyan los tramos comprendidos entre los pozos 6R al 11R de alcantarillado sanitario a deshabilitar la conexión de drenaje del pozo 442 al 13R y conectar el total de las áreas correspondientes a 27,5 HA (Proyecto 6164) hacia el colector entre los pozos 442 al 11R..."*

5. Si bien de las anteriores documentales se advierte que para el momento en que se decidió continuar con la ejecución del proyecto inmobiliario por parte de Inversiones Nevado, al parecer, los compromisos que adquirió la Constructora Normandía S.A. en los años 2002 y 2005 con la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá no habían culminado, y que tal acontecer no se probó le hubiere sido informado a la sociedad demandante, como tampoco la toma de posesión de las zonas de cesión a las que se refiere en la demanda, lo cierto es que todas las diferencias fueron objeto de pronunciamiento en el acta de conciliación N°00048 de 17 de marzo de 2011 que, precisamente, le dio vida a la escritura pública ya reseñada.

En efecto, ha de verse que en la cláusula 6ª de tal documento se estipuló que *"en consideración a que el proyecto de construcción* ***no se desarrolló en su totalidad,*** *y que la CONSTRUCTORA NORMANDÍA S.A. EN LIQUIDACIÓN, ni el actual propietario del terreno, el GRUPO NORMANDÍA S.A., desean continuar con el desarrollo y ejecución del proyecto en los términos pactados en la cláusula segunda del "Acuerdo para el Desarrollo de un Proyecto Inmobiliario", las partes de acuerdo a la cláusula séptima y octava del citado acuerdo, han decidido darlo por terminado de manera anticipada y poner fin a las controversias surgidas entre ellas en relación con*

[7] *Folio 192 a 197 (03ExpedienteDigitalizado1-217.pdf)*

el pago de las obligaciones surgidas, ***responsabilidades*** *y restitución de la parte del inmueble no comprometida en la ejecución del proyecto y en general a todas las controversias y/o diferencias entre ellas con causa anterior al presente acuerdo".* (negrilla y subrayas intencionales)

6. Esa conciliación, conforme a la Ley 446 de 1998 (artículo 66) norma que reprodujo la Ley 2220 de 2022 (artículo 64), hace tránsito a cosa juzgada y su acta presta mérito ejecutivo, calidad que no se desconoció en el acuerdo donde las establecieron: *"TERCERA.- COSA JUZGADA. Las partes, en acuerdo con las disposiciones contenidas en el artículo 2.483 del Código Civil, convienen y aceptan que la presente conciliación produce el efecto de cosa juzgada última instancia, y que las partes expresan su consentimiento para su celebración de manera libre, espontánea y autónoma."*

De ahí que lo conciliado entre las partes no se pueda desconocer ni siquiera invocando la falta al deber de información, materia que fue prevista entre las partes como una de las diferencias que se concretó así: *"4.Suministro de toda la información relativa al inmueble objeto del proyecto inmobiliario y de la presente conciliación por parte de CONSTRUCTORA NORMANDIA S.A., EN LIQUIDACIÓN, a la FIDUCIARIA señalada por INVERSIONES RODRIGUEZ ZULETA, SAS."*; discrepancia que, por demás, no quedó sujeta a que ella diera fe del cumplimiento total de las obras del proyecto.

6.1 Sobre esa materia la Corte Constitucional, de tiempo atrás, ha reconocido como características de ese medio de autocomposición que *"Es un acto jurisdiccional, porque la decisión final, que el conciliador avala mediante un acta de conciliación, tiene la fuerza vinculante de una sentencia judicial (rei iudicata) y presta mérito ejecutivo (art. 66, Ley 446 de 1998)."*[8]

Posteriormente, la misma Corporación consideró que: *"La conciliación extrajudicial como mecanismo de resolución de conflictos se ha definido como un procedimiento por el cual un número determinado de individuos, trabados entre sí por causa de una controversia jurídica, se reúnen para componerla con la intervención de un tercero neutral - el conciliador - quién, además de proponer fórmulas de acuerdo, da fe de la decisión de arreglo e imparte su aprobación. El convenio al que se llega como resultado del acuerdo es obligatorio y definitivo para las partes que concilian."* [9]

---

[8] *Corte Const. Sent C- 893 de 2001, reiterada en la SC-902-08 y otras.*
[9] *Corte Const. Sent C-222 de 2013*

Entonces, si lo formalmente conciliado entre las partes de manera extrajudicial hace tránsito a cosa juzgada, ello impide que pueda ser objeto de posterior debate a través de un proceso judicial, ese es el principio general, porque tal figura conlleva a que no se puedan revivir asuntos conciliados en razón a que el acta de conciliación tiene la misma fuerza obligante de una sentencia, por tanto, si el juez la advierte la deberá declarar aún de oficio, ese el mandato perentorio.

6.2 No obstante lo anterior, como lo finalmente contenido en el acta son declaraciones de voluntad, constitutivas de requisitos para obligarse, conforme al artículo 1502 del C.C., cuando estás se ven afectadas porque se actúa sin capacidad o voluntad o cuando verse sobre un objeto o causa ilícita, como todo contrato, puede pedirse judicialmente la declaratoria de nulidad de un acta de conciliación.

Así lo ha reconocido la jurisprudencia al decir que: "*Los efectos de cosa juzgada de la conciliación pueden verse enervados cuando el acuerdo de voluntades está afectado por un vicio del consentimiento que lo invalide, por lo que excepcionalmente se puede poner en tela de juicio la cosa juzgada por infracción a los supuestos del artículo 1502 del Código Civil, sin que ello desvirtúe el carácter serio y responsable con el que las partes deben intervenir en este caso."*[10]. También, que *" no cualquier vicio es suficiente para declarar la nulidad de una conciliación, sino que éste debe ser de tal magnitud o característica que brille al ojo ante una mera y simple lectura del contenido del acta, incluso, por qué no decirlo, sin necesidad de acudir a otros medios probatorios."*[11]

6.3 Pero para que la pretensión de nulidad del acta de conciliación por vicios del consentimiento pueda salir avante, necesariamente se debe impugnar, invocar y luego probar el vicio respectivo, conforme al mencionado artículo 1502 del C.C; de ahí que si la parte actora consideraba que se omitió información por la sociedad demandada al momento de conciliar, la que no pudo advertir por haber sido viciado su consentimiento, que sería la que cabría, lo propio no era acudir directamente a un proceso declarativo a reclamar los eventuales perjuicios que esa omisión le generó, sin cuestionar para nada el acta, como se refleja en esta actuación.

---

[10] *Corte Const. Sent. T 446 de 2001*
[11] *CSJ SL Sent de16 de oct. de 2012, Exp. 38706*

Por tanto, no podría esta Corporación, sin desatender los efectos de la cosa juzgada, entrar directamente a pronunciarse sobre los reparos y luego sobre las pretensiones de la demanda, porque, se insiste, las partes conciliaron todas sus diferencias, como así se reseñó en el documento que la contiene donde se acordó:

III.CONCILIACION

PRIMERA.- OBJETO: El objeto de la presente conciliación es terminar extrajudicialmente las diferencias de las partes en torno al "Acuerdo para el desarrollo de un Proyecto Inmobiliario", de fecha 25 de noviembre de 1998, adicionado por las mismas partes mediante Otro Sí suscrito el veintisiete (27) de noviembre de 1998, Otro Sí suscrito el dieciocho (18) de diciembre de 1998, y Otro Sí suscrito el veinte (20) de octubre de 2000, que recae sobre el lote de terreno urbano ubicado en esta ciudad, con un área de 11.620.26 metros cuadrados, identificado con el Folio de matrícula Inmobiliaria No. 50N-20358038, del Registrador de Instrumentos Públicos de Bogotá, y todas las obligaciones que de él se derivan para las partes y en general dirimir y dejar resueltas todas las diferencias entre las partes por cualquier causa anterior a la presente, pues la única relación que las ha vinculado ha sido la que se menciona en este escrito Para ello han acordado: ----------

---

Así, dieron por resueltas todas sus diferencias, entre las cuales, enumeraron las siguientes:

> *"2. Deuda a cargo de la CONSTRUCTORA NORMANDÍA S.A. EN LIQUIDACIÓN y a favor de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado del Distrito (EAAD) que recae sobre el inmueble objeto de restitución;*
> *3. Ausencia de mojones entre el predio objeto de restitución y el predio colindante de propiedad de la Fábrica de Prefabricados;*
> *4. Suministro de toda la información relativa al inmueble objeto del proyecto inmobiliario y de la presente conciliación por parte de CONSTRUCTORA NORMANDÍA S.A. EN LIQUIDACIÓN, a la FIDUCIARIA señalada por INVERSIONES RODRÍGUEZ ZULETA S.A.S.:*
> *5. Comunicación escrita por parte de CONSTRUCTORA NORMANDÍA S.A. EN LIQUIDACIÓN, dirigida a la propiedad horizontal "BOSQUES DE SALAMANCA", por medio de la cual se le comunica su responsabilidad en cuanto a la terminación de las obras comunes que están pendientes cuyo texto conoce y aceptan las sociedades INVERSIONES ALTAMAR e INVERSIONES RODRIGUEZ ZULETA S.A.S." (se subraya)*

Lo anterior demuestra entonces que todas las vicisitudes que se pudieron presentar en torno al desarrollo y ejecución del proyecto inmobiliario Bosques de Salamanca, fueron objeto de conciliación entre las

partes, puesto que no solo dieron por terminado el "*Acuerdo para el desarrollo del Proyecto Inmobiliario"*, sino que también conciliaron *"todas las obligaciones que de él se derivan para las partes y en general dirimir y dejar resueltas todas las diferencias por cualquier causa anterior a la presente …"*.

7. Siendo así las cosas, se impone la declaratoria de la cosa juzgada acá anunciada, como uno de los pronunciamientos de oficio que debe hacer el funcionario, aún el de segunda instancia, conforme se advirtió en la parte inicial de las consideraciones de este fallo, en cumplimiento del artículo 282 del CGP, según el cual*: "En cualquier estado del proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa que deberán alegarse en la contestación de la demanda."*

De igual modo, se confirmará la sentencia apelada, en cuanto niega las pretensiones de la demanda, con la consecuente condena en costas a cargo del extremo apelante, propósito para el que la Magistrada Sustanciadora fija la suma equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes S.M.L.M.V., atendiendo lo previsto por el Art. 5º, numeral 1º, del Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: **DECLARAR** de oficio, que operó la cosa juzgada entre las partes acá en contienda, Inversiones Rodríguez Zuleta S.A.S., y el Grupo Normandía S.A. en virtud a la conciliación a que las partes llegaron, conforme a las motivaciones de esta providencia.

SEGUNDO: **CONFIRMAR** la sentencia el Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogotá el 12 de octubre de 2022, en cuanto niega pretensiones, pero por las razones acá expuestas.

TERCERO: **CONDENAR** en costas de esta instancia a la parte recurrente. La magistrada sustanciadora señala como agencias en derecho la suma equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes S.M.L.M.V., en atención a lo previsto en el numeral 1º del artículo 5 del Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016. El Juzgado de primer grado proceda a su liquidación de conformidad con el artículo 366 del Código General del Proceso.

CUARTO: **EJECUTORIADA** esta providencia, devuélvase al juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPASE,

Los Magistrados,

MARÍA PATRICIA CRUZ MIRANDA

31 2019 00588 01

STELLA MARÍA AYAZO PERNETH

31 2019 00588 01

JAIME CHAVARRO MAHECHA

31 2019 00588 01

Firmado Por:

Maria Patricia Cruz Miranda
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Dirección Ejecutiva De Administración Judicial
División De Sistemas De Ingenieria
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Jaime Chavarro Mahecha

Magistrado

Sala Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Stella Maria Ayazo Perneth

Magistrada

Sala 04 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **e53b6668260f24df7e6c70d1365eedd50b8987e526cd987f9c4daecc05f99fd1**

Documento generado en 29/02/2024 03:56:00 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA DE DECISIÓN CIVIL

Bogotá D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación	110013103030-201800355-01
Proceso	Verbal
Asunto	Apelación sentencia
Demandante	Humana Vivir S.A. E.P.S. Liquidada
Demandado	Colombiana de Trasplantes S.A.S.
Decisión	Confirma

Magistrado Ponente
JAIME CHAVARRO MAHECHA

Discutido y aprobado en Sala de Decisión del 21 de febrero de 2024

Se decide el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia proferida el 3 de febrero de 2023 por el Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá, en el proceso verbal de HUMANA VIVIR S.A. E.P.S. Liquidada contra COLOMBIANA DE TRASPLANTES S.A.S.

I. ANTECEDENTES

1. Síntesis de la demanda

Se solicitó declarar que la demandada le debe a Humana Vivir S.A. E.P.S.-S Liquidada la suma de $85.244.028. En consecuencia, se condene a aquella a pagar el valor aludido más $78.416.408 por concepto de lucro cesante.

2. Fundamentos fácticos

En el libelo[1] se afirmaron los hechos que a continuación se sintetizan.

2.1. En los años 2012 y 2013, Humana Vivir S.A. E.P.S.-Liquidada giró a la pasiva $6.500.000 para el *"pago evento febrero régimen subsidiado",* $52.010.224 respecto de la usuaria Alison Valeria Cañas Ardila y $52.010.224 en relación con Erika Walteros Preciado, en ambos casos, por concepto de pago total anticipado de los procedimientos que les fueron ordenados por vía de tutela.

2.2. El 31 de mayo y el 31 de agosto de 2013, las citadas pacientes fueron retiradas de la E.P.S. en virtud de la liquidación forzosa administrativa a la que fue sometida, por lo cual la encausada solamente les prestó los servicios médicos incluidos en la fase 1 de los procedimientos, sin realizar las legalizaciones de los giros, pues no allegó facturas y soportes médicos requeridos para demostrar la prestación de la atención.

2.3. Depurada la cartera de la extinta E.P.S. se encontró que Colombiana de Trasplantes S.A.S. tiene un saldo de $85.244.028, lo que constituyó un desequilibrio patrimonial al incrementar el propio y disminuir el de la entidad promotora de salud, injustificadamente.

3. Posición de la parte demandada

Se opuso a las pretensiones y presentó las defensas de mérito que denominó: *"inexistencia de aumento patrimonial injustificado de Colombiana por concepto de los anticipos recibidos por parte*

[1] Ver folios 104 a 105 del archivo *"01DemandaFísicayAnexos"* de la "Carpeta No. 1 Principal" de *"PrimeraInstancia"* del expediente digital.

Humana", "ausencia de prueba del perjuicio", "falta de legitimación en la causa de Lois" y *"ausencia de derecho de la parte demandante"*[2].

4. Sentencia de primer grado

La juzgadora *a quo* declaró probada la excepción de *"falta de legitimación en la causa por activa"*, negó las pretensiones y condenó en costas a la demandante.

Para decidir de ese modo, expuso:

Corresponde definir si la actora está facultada para exigirle a la pasiva el reintegro de $85.244.028 a favor de Humana Vivir S.A. E.P.S.-S liquidada, para evitar el desequilibrio patrimonial de esta, como quiera que la legitimación en la causa es una cuestión de índole sustancial que atañe a la acción y su ausencia conduce al fracaso de las pretensiones.

La actora pretende reclamar unas sumas de dinero a favor de la cartera adjudicada en el marco del proceso liquidatorio de Humana Vivir E.P.S.-S liquidada, en virtud del contrato de mandato representativo destinado a producir efectos no sólo entre las partes, sino ante terceros (art. 1505 C.C.). Para tal fin allegó copia del acuerdo de voluntades suscrito por dicho ente jurídico, como mandante, y Germán Gómez Jurado Delgado, en calidad de mandatario, en el que se acordó como objeto que este administre recursos dados por aquel en encargo fiduciario para realizar, efectuar y ejecutar las actividades relacionadas con la terminación de las situaciones no definidas dentro del proceso de liquidación, continuar con la depuración de la cartera no definida de la sociedad, entre otras. En la cláusula quinta se pactó la duración por 7 meses

[2] Ver folios 331 a 353 ídem.

contados a partir del 1 de junio de 2016, sin que puedan ser prorrogables y con especificación de que las actividades relacionadas en la cláusula primera deberían ejecutarse en ese lapso.

Jurado Delgado, con tal empeño, el 30 de diciembre de 2016, facultó a Sandra Nereida Figueroa Camacho para suscribir escritura pública a través de la cual, a su turno, le otorgara poder a Lois Soluciones Jurídicas S.A.S. para adelantar las actuaciones tendientes a recuperar los valores aludidos, lo que tuvo lugar el 31 de enero de 2017, al levantar el instrumento público No. 153 en la Notaría 76 de Bogotá. Luego, el 11 de mayo de 2017, la actora mediante escritura pública No. 403 de la misma notaría confirió poder a María Alejandra Padilla Gómez.

La demandante acudió a esta vía como apoderada general de Germán Gómez Jurado Delgado, quien dijo ser mandatario de Humana Vivir E.P.S.-S liquidada, pero se echa de menos la legitimación para ello, debido a que cuando se le otorgó mandato general por parte de Figueroa Camacho, el 31 de enero de 2017, las facultades concedidas por Jurado Delgado no estaban vigentes por terminación del plazo del contrato de mandato entre este y la E.P.S. que feneció el 1 de enero de 2017.

No se aportaron los contratos celebrados por Lois Soluciones Jurídicas S.A.S. con Germán Gómez el 16 y 22 de diciembre, ni el otrosí del 30 del mismo mes de 2016, por lo que no se puede determinar su alcance.

No se pudo catalogar como tercera con interés privado a la activa, en tanto no se vislumbró el vínculo sustancial que alegó tener con el otrora mandatario, puesto que al ser interrogada la representante legal manifestó que *"el poder no lo otorgó el Dr. Gómez Jurado porque evidentemente para el 31 de enero él ya no hubiese*

tenido esa facultad, pero él dejó dentro de ese término que podía hacerlo, se firmó el contrato y le dejó ese poder a esa persona para que esa persona nos firmara a nosotros el poder que se hizo para esa fecha, porque yo llegaba para esa fecha pero todo quedó legalizado dentro del término del mandato otorgado".

5. El recurso de apelación

La parte demandante planteó y sustentó los siguientes reparos:

5.1. *"Vigencia del contrato de mandato"*. El poder general contenido en la escritura pública No. 153 de la Notaría 76 de Bogotá no lo confirió el mandatario Germán Gómez, sino Sandra Nereida Figueroa Camacho, quien había sido facultada desde el 30 de diciembre de 2016, cuando el mandato se encontraba vigente. Los efectos de dicho contrato deben extenderse *"para la fecha de la suscripción del poder otorgado a Lois Soluciones Jurídicas S.A.S. de conformidad con el poder dado a"* Figueroa Camacho, en atención a lo reglado por el artículo 2199 del Código Civil, norma que debe interpretarse en el sentido de que las partes suscriptoras del mandato sabían que fenecería el 1 de enero de 2017, *"los actos celebrados con terceros de buena fe serán oponibles al mandante y a terceros; es decir, que el poder otorgado a Sandra Nereida Figueredo Camacho en el cual se faculta para dar otro poder a la demandante a pesar que para la fecha de la suscripción del poder general el mandato se hubiera terminado debe producir efectos"*.

El mandatario estaba en condiciones de celebrar el contrato de prestación de servicios con la actora acogiéndose a lo establecido por el artículo 9.1.3.6.2. del Decreto 2555 de 2010.

5.2. *"Validez de la escritura pública No. 153"*. Con soporte en las reglas del decreto antes referido el mandatario seleccionó a la demandante para recuperar los activos que se adjudicaron al

acreedor preferencial en el proceso de liquidación de la E.P.S., por lo que no puede el juez ser ajeno a la aplicación de normas especiales de orden público y que fueron expedidas para proteger derechos de rango constitucional, más tratándose de un asunto tan particular y excepcional en el que la interpretación ha de hacerse a la luz del artículo 1620 del Código Civil y lo reglado por el Código General del Proceso en punto del acceso a la administración de justicia.

5.3. ***"Existencia de relación jurídica entre Mandatario y Lois Soluciones Jurídicas S.A.S."***. Figueroa Camacho actuó en nombre y representación de Germán Gómez en el acto contenido en la escritura en la que se otorgó poder a quien presentó la demanda. El mandatario podía suscribir el convenio de prestación de servicios pues el objeto del mandato era la defensa del patrimonio de la E.P.S. y en 7 meses era imposible la depuración de la cartera y el inicio de acciones judiciales. Los negocios jurídicos realizados antes y después de la liquidación tenían como finalidad la recuperación para beneficio del Ministerio de Salud y Protección Social, en su condición de acreedor con preferencia especial.

6. La parte demandada al descorrer el traslado de la sustentación de la alzada, solicitó desecharla y confirmar el fallo.

II. CONSIDERACIONES

1. Concurren en este asunto los presupuestos procesales traducidos en competencia del juez, demanda en forma, capacidad procesal y para ser parte, sin que se advierta causal de nulidad que pueda comprometer la validez de lo actuado, por manera que se procede a resolver el asunto en referencia.

De conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 328 del Código General del Proceso, que limita la competencia del superior a resolver *"solamente sobre los argumentos expuestos por*

el apelante" en armonía con el inciso final del artículo 327 *ibídem*, que respecto a la oportunidad para sustentar la apelación de sentencia, prevé que "*el apelante deberá sujetar su alegación a desarrollar los argumentos expuestos ante el juez de primera instancia*", en esta providencia únicamente se tendrán en cuenta los argumentos expuestos por la recurrente que guarden relación con los precisos reparos planteados en su momento contra el fallo de primer grado.

2. Análisis del caso concreto

Advierte la Sala que la sentencia deberá confirmarse, pero por argumentos distintos a los expuestos por la *iudex a quo*, quien estableció la falta de legitimación en la causa por activa debido a la expiración del plazo pactado en el contrato de mandato, cuando ello encaja dentro del sustento fáctico de la excepción previa de indebida representación del demandante, que no fue alegada en oportunidad, mientras que omitió indicar que Humana Vivir E.P.S. S.A. se encontraba liquidada desde antes de acudir al aparato judicial y, por tanto, carece de capacidad jurídica.

Para desatar la alzada, es necesario memorar los reproches impetrados, lo considerado por la dispensadora de justicia y lo que estima al respecto esta Colegiatura.

En torno a lo primero, se tiene que la recurrente alegó, en síntesis, que está legitimada en la causa por activa, en virtud de la cadena de poderes otorgados para actuar y de la interpretación de las normas que refirió.

Respecto a los enlaces contractuales existentes y por medio de los cuales se considera facultada Lois Soluciones Jurídicas S.A.S. para obrar y reclamar judicialmente los derechos indicados en la

demanda, es importante tener presente que el punto de partida fue el *"contrato de mandato entre Humana Vivir S.A. E.P.S.-en liquidación y el señor Germán Gómez Jurado Delgado"*[3], suscrito el 25 de mayo de 2016 por este como mandatario y por Carlos Enrique Cortés Cortés, en representación de aquella como mandante, dada su condición de agente especial liquidador.

En el acuerdo de voluntades se consignaron el objeto, las obligaciones y derechos de las partes, así como que *"[l]a duración del presente contrato será de siete (7) meses contados a partir del primero de junio de 2016; dicho término será improrrogable, y por lo cual las actividades relacionadas en la cláusula primera deberán ejecutarse en dicho periodo de tiempo"* (Cláusula quinta). Tal pacto se ajustó a la forma de terminación que establece el numeral 2 del artículo 2189 del Código Civil: *"por la expiración del término o por el evento de la condición prefijados para la terminación del mandato"*.

Sin lugar a dudas el plazo fijo expiró el 1 de enero de 2017, por lo que a partir de ese momento Germán Gómez Jurado Delgado no podía gestionar actividad alguna de las enlistadas en la cláusula primera en nombre de Humana Vivir S.A. E.P.S.-S, con ocasión del citado convenio. Esto, por cuanto las mismas partes establecieron que *"cualquier modificación al presente contrato, se efectuará por escrito, mediante la suscripción de un otrosí adicional o acta"*, de los cuales no se allegó prueba al expediente.

No obstante, dentro del plazo acordado por los contratantes, Jurado Delgado, el 30 de diciembre de 2016[4], en calidad de *"mandatario de la sociedad Humana Vivir S.A.-, Entidad Promotora de Salud del régimen subsidiado-Liquidada,* ***conforme al contrato firmado el 25 de mayo de 2016****, cuyo objeto es 'realizar, efectuar y*

[3] Ver folio 18 a 30 del archivo *"01DemandaFísicayAnexos"* de la *"Carpeta No. 1 Principal"* de *"PrimeraInstancia"* del expediente digital.
[4] Ver folio 16 y 17 ídem.

ejecutar' las actividades relacionadas con la terminación de las situaciones no definidas dentro del proceso de liquidación, confiero poder amplio y suficiente a la Doctora Sandra Nereida Figueroa Camacho (…) para que suscriba la escritura pública mediante la cual se otorgará poder general a Lois Soluciones Jurídicas S.A.S. firma contratada para adelantar (…) de la cartera, como la defensa en los procesos ordinarios y administrativos (…)". (Destacado de la Sala)

Es indiscutible que tal acto de encomienda a Figueroa Camacho se derivó puntualmente del contrato de mandato de 25 de mayo de 2016, y esta era conocedora de ello, tal como da cuenta la literalidad del documento.

El 31 de enero de 2017, ante la Notaría 76 del Círculo de Bogotá se levantó la escritura pública No. 153, a través de la que Sandra Nereida Figueroa Camacho, *"actuando de conformidad con el poder conferido por el doctor Germán Gómez Jurado Delgado en su condición de mandatario de la sociedad Humana Vivir S.A., Entidad Promotora de Salud (…) del régimen subsidiado-**liquidada**, manifiesto que otorgó (sic) poder especial, amplio y suficiente a favor de la sociedad Lois Soluciones Jurídicas S.A.S. (…) para que obre en representación judicial de la extinta sociedad Humana Vivir S.A. E.P.S. -**Liquidada** (…)".*

Es claro que para cuando se celebró el acto referido se encontraba extinguido el contrato de mandato y con ello la calidad de mandatario de Jurado Delgado respecto de la E.P.S. liquidada, por lo que aquel carecía de facultades para ejecutar labor o tarea alguna en nombre o representación de esta, debido a que "*las actividades relacionadas en la cláusula primera deberán ejecutarse en dicho periodo de tiempo".*

En resumen, cualquier acto cuya trazabilidad se derivó de la condición de mandatario de Germán Gómez, posterior al 1 de enero de 2017, adolece de eficacia, en la medida en que esa calidad

desapareció en dicha calenda, por lo que no es menester analizar el contenido de la escritura pública No. 403 de la Notaría 1º de Chía, por medio de la cual Lois Soluciones Jurídicas S.A.S. le otorgó poder a María Alejandra Padilla Gómez.

En ese orden, por una disposición contractual (cláusula quinta) ajustada al compendio legal (art. 2189 C.C.), se produjo la terminación del contrato de mandato de 25 de mayo de 2016, sin que de ninguna manera puedan extenderse sus efectos con soporte en lo dispuesto por el artículo 2199 del Código Civil, como alegó la recurrente, quien agregó, no sin ambigüedad, que tal norma debe interpretarse en el sentido que las partes que suscribieron el mandato sabían que fenecería el 1 de enero de 2017, y *"los actos celebrados con terceros de buena fe serán oponibles al mandante y a terceros; es decir, que el poder otorgado a Sandra Nereida Figueredo Camacho en el cual se faculta para dar otro poder a la demandante a pesar que para la fecha de la suscripción del poder general el mandato se hubiera terminado debe producir efectos"*.

Lo anterior, dado que el artículo 2199 del Código Civil, señala:

> "*En general, todas las veces que el mandato expira por una causa ignorada del mandatario, lo que éste haya hecho en ejecución del mandato será válido, y dará derecho a terceros de buena fe, contra el mandante.*
> *Quedará asimismo obligado el mandante, como si subsistiera el mandato, a lo que el mandatario, sabedor de la causa que lo haya hecho expirar, hubiere pactado con terceros de buena fe; pero tendrá derecho a que el mandatario le indemnice. (…)"*.

Para el particular, la censora se apoyó en el último párrafo trascrito, en procura de dar validez a los actos realizados después del 1 de enero de 2017, pero pasó por alto que Sandra Nereida Figueroa Camacho conocía que el poder que se le otorgó derivó del mandato que en dicha calenda se terminaba, por lo que no puede alegarse que

era una tercera de buena fe o, por lo menos, que no sabía los por menores del acuerdo. Por su lado, Lois Soluciones Jurídicas S.A.S. no puede alegarla, porque recibió mandato de una mandataria.

Tampoco es de recibo para esta Sala el argumento de alzada atinente a que podía Jurado Delgado como mandatario de la E.P.S. liquidada, celebrar el contrato de prestación de servicios con Lois Soluciones Jurídicas S.A.S. por así permitírselo el artículo 9.1.3.6.2. del Decreto 2555 de 2010, puesto que aquel no tenía esa calidad cuando se protocolizó el mandato a la empresa de servicios jurídicos. Además, la norma referida establece:

> "***ARTÍCULO 9.1.3.6.2*** **Determinación del equilibrio financiero del proceso de liquidación forzosa administrativa.** *El liquidador realizará cada seis (6) meses a partir del segundo año de la liquidación, o en cualquier momento del proceso a solicitud del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras -FOGAFIN, una evaluación objetiva que permita establecer si la relación entre la venta de activos y los gastos administrativos justifica continuar con el esfuerzo de realización de los activos para el pago de acreencias. En el evento en que el liquidador determine que la relación no justifica la continuidad del proceso de realización de los activos y el pago de acreencias, deberá proceder de manera inmediata a aplicar las reglas sobre activos remanentes y situaciones jurídicas no definidas previstas en los siguientes artículos*".

Ni la más amplia y laxa interpretación del artículo lleva a concluir que extinguido el contrato de mandato, subsistía alguna posibilidad legal para el otrora mandatario de levantarse contra la voluntad exteriorizada por las partes y la ley, más cuando no fue designado liquidador.

Decae la alegación respecto a que en este asunto debe realizarse una interpretación a la luz del artículo 1620 del Código Civil, como quiera que la redacción del mandato no se presta a dudas y, en todo caso, de preferirse el sentido de que la cláusula surta efectos, como aquí ocurre, sigue manteniéndose la extinción el 1 de enero de 2017.

La naturaleza del acreedor con preferencia especial, es decir, el Ministerio de Salud y Protección Social, tampoco permite pasar por encima de lo pactado y lo hasta aquí analizado, por lo que es infértil esa disertación de censura.

Visto lo anterior, se vislumbra que la juzgadora de primer grado hizo una correcta lectura de los medios de prueba en relación con la vigencia del contrato de mandato, pero llegó a una conclusión incorrecta por cuanto la extinción del plazo pactado seguido de la actuación promovida por Lois Soluciones Jurídicas S.A.S. en nombre de la E.P.S. no constituye la falta de legitimación en la causa por activa, puesto que lo que ocurrió fue que aquella obró sin tener poder vigente para representar a esta, o lo que es igual, se configuró el supuesto de hecho que consagra el numeral 4 del artículo 100 del Código General del Proceso por indebida representación del demandante, lo que no fue alegado como excepción previa por la encausada, quien impetró la de inepta demanda[5] por motivos diferentes a los esgrimidos, por lo que no persistió la falencia dado el silencio de la encausada.

Pese a lo anterior, como se advirtió, se pasó por alto en primera instancia señalar que el certificado de existencia y representación legal expedido el 22 de mayo de 2017[6] así como el de 5 de julio de 2018[7], aportado con la demanda, demostró que:

> "Certifica:
> *Matrícula No: 00637510 cancelada el 7 de junio de 2016*
> *(…)*
> *Conforme a lo dispuesto en la Resolución 018 del Liquidador Interventor, del 31 de mayo de 2016 inscrita 7 de junio de 2016 bajo el No. 02110315 del Libro IX,* ***se declaró terminada la existencia legal de Humana Vivir S.A.***

[5] Ver archivo *"01DemandaFísicayAnexos"* de la "Carpeta No. 2 Excepciones Previas" de *"PrimeraInstancia"* del expediente digital.
[6] Ver folio 50 a 52 del archivo *"01DemandaFísicayAnexos"* de la *"Carpeta No. 1 Principal"* de *"PrimeraInstancia"* del expediente digital.
[7] Ver folio 121 a 123 ídem.

> ***Entidad Promotora de Salud del Régimen Contributivo y Entidad promotora de Salud del Régimen Subsidiado*** *en liquidación identificada con el NIT. 830.006.404,* ***por lo tanto a partir de la fecha del presente registro ningún juez de la República puede admitir demanda en contra de la extinta sociedad al configurarse la falta de legitimación por pasiva****. (…)*
> *Certifica:*
> *que, en consecuencia, y conforme a los registros que aparecen en la cámara de Comercio de Bogotá,* ***la sociedad se encuentra liquidada***".

Sin lugar a dudas, la sociedad de quien se reclaman sus derechos, Humana Vivir E.P.S. S.A.-Liquidada, carece por completo de personería jurídica y no tiene capacidad para ser parte en un proceso judicial, pues quedó despojada de ella cuando se finalizó la liquidación y se canceló el registro mercantil, incluso antes de la presentación de la demanda (14 de junio de 2018)[8], lo que impide acoger las aspiraciones invocadas.

Dado el estado jurídico de la sociedad, conforme con jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, los eventualmente legitimados para exigir los derechos que le pudiesen corresponder eran los otrora accionistas. A este tenor dijo la alta Corporación:

> *"En este caso, teniendo en cuenta que la sociedad vendedora se encontraba disuelta y liquidada a la fecha en que se presentó el libelo que dio inicio al proceso y, por lo tanto, se había extinguido la personalidad jurídica de ese ente moral, el contradictorio en este asunto debía integrarse con las personas naturales que la conformaban a la época de la enajenación, en la forma y términos señalados en la norma precitada.*
>
> *De acuerdo con el acta mediante la cual se aprobó la cuenta final de liquidación de Inversiones Asociados Cía. Ltda., a ese momento además del demandante Álvaro Martínez Hernández y del demandado Aldo Antonio Fuentes Castro (liquidador), eran socios Yebrail Mateus Gordillo, Álvaro Jesús Uribe Castellanos y Ángela Castellanos de Uribe, cuyos intereses se verían directamente afectados de llegar a tomarse una decisión de fondo. (CSJ SC1182-2016, 8 Feb. 2016, Rad. 2008-00064-01).*

[8] Ver folio 111 ídem.

III. CONCLUSIÓN

En la sentencia fustigada se erró al establecer la razón de la improsperidad de las pretensiones, pero acertó al negarlas, por lo que se confirmará en armonía con lo ahora expuesto. Y vista la decisión anunciada, con apoyo en el artículo 365 numerales 1º y 8º del Código General del Proceso, se condenará en costas a la parte actora.

IV. DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en Sala Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

Primero: CONFIRMASE la sentencia apelada proferida el 3 de febrero de 2023 por el Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá.

Segundo: CONDENASE a la parte demandante a pagar las costas de segundo grado en favor de la parte demandada. Tásense y liquídense por el procedimiento previsto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

En la debida oportunidad, la secretaría devolverá la actuación digital al juzgado de origen.

Notifíquese.

Magistrado y magistradas integrantes de la Sala

JAIME CHAVARRO MAHECHA
MARÍA PATRICIA CRUZ MIRANDA
STELLA MARÍA AYAZO PERNETH

Firmado Por:

Jaime Chavarro Mahecha
Magistrado
Sala Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Maria Patricia Cruz Miranda
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Dirección Ejecutiva De Administración Judicial
División De Sistemas De Ingenieria
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Stella Maria Ayazo Perneth
Magistrada
Sala 04 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **4dc51d69939b2e25ebbceca38c7643a2aeaf34cb3aceee2807f40dd75056f41d**
Documento generado en 29/02/2024 03:57:23 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA DE DECISIÓN CIVIL

Bogotá D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación	110013103030-201800355-01
Proceso	Verbal
Asunto	Apelación sentencia
Demandante	Humana Vivir S.A. E.P.S. Liquidada
Demandado	Colombiana de Trasplantes S.A.S.
Decisión	Señala agencias en derecho

El suscrito magistrado señala la suma de $1’000.000 a título de agencias en derecho, con fines de la liquidación de costas a que se contrae la sentencia de segundo grado de esta misma fecha.

Notifíquese.

JAIME CHAVARRO MAHECHA

Magistrado

Firmado Por:
Jaime Chavarro Mahecha
Magistrado
Sala Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c81cba84ed5cf8102269490fae722f1316a6fd30ed3e671226c1ee56631c3a0c**
Documento generado en 29/02/2024 04:18:43 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.

SALA CIVIL

MARTHA ISABEL GARCÍA SERRANO
Magistrada Ponente

Bogotá D. C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Proceso: Verbal – Responsabilidad médica
Radicación N.°: 11001310302920210046601
Demandante: Nancy Arenas Bejarano y Otros.
Demandado: EPS Cruz Blanca –hoy Liquidada, y Otros.

ADMITIR el recurso de apelación formulado por la apoderada de la demandada EPS Cruz Blanca –hoy Liquidada contra la sentencia proferida en audiencia el 22 de enero hogaño, por la Juez 29 Civil del Circuito de Bogotá D.C., de conformidad con las previsiones del artículo 12 de la Ley 2213 de 2022.

Por lo anterior, **CONCEDER** al recurrente el término de cinco (5) días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia para que proceda a **SUSTENTAR** los reparos concretos que formuló ante la autoridad de primera instancia; transcurrido dicho lapso, se **CORRERÁ TRASLADO** a la contraparte por el mismo plazo, para que, si a bien lo tiene, efectúe la réplica.

Advertir al recurrente que, en ese **lapso y en ésta instancia deberá sustentar los reparos concretos que formuló ante el *a quo* o manifestar si se tiene como sustentación el escrito que presentó ante el juez de instancia, pues en caso de guardar silencio, se declarará desierto el recurso de alzada, como dispone el artículo citado**. Para todos los efectos, el **ÚNICO** correo institucional habilitado para recibir el escrito de sustentación es secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

Finalmente, **PRORROGAR** en seis (6) meses el término para decidir la apelación, dado el alto número de recursos asignados al Despacho.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

MARTHA ISABEL GARCÍA SERRANO
Magistrada

Firmado Por:

Martha Isabel Garcia Serrano

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Sala 009 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **9a03c5c94c3bf94e1a61f74166ce49076ee15fe61662489cbe233c946df9193b**

Documento generado en 29/02/2024 03:44:40 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ - SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

Magistrada Ponente:	**CLARA INÉS MÁRQUEZ BULLA**
Radicación:	110013103028 2022 00367 01
Procedencia:	Juzgado 28 Civil del Circuito de Bogotá
Demandantes:	Transmares Logística S.A.S.
Demandados:	Patricia Cyfuentes Pantoja de Santacruz y otro.
Proceso:	Verbal
Asunto:	Apelación de auto

2. OBJETO DE LA DECISIÓN

Se dirime el recurso de apelación interpuesto contra el numeral 4 del auto del 28 de abril de 2023, proferido por el Juzgado 28 Civil del Circuito de Bogotá D.C., dentro del proceso **VERBAL** promovido por **TRANSMARES LOGÍSTICA S.A.S.,** contra **PATRICIA CYFUENTES PANTOJA DE SANTACRUZ** y **BANCO DE OCCIDENTE S.A.**

3. ANTECEDENTES

A través de la providencia materia de censura el Funcionario se abstuvo de decretar la medida cautelar deprecada por la parte

activante[1].

Inconforme con la decisión la apoderada de la demandante formuló recurso de reposición y, en subsidio, apelación. Denegado el primero, se concedió el segundo mediante proveído del 21 de julio pasado[2].

4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

Argumentó que la acción tiene como finalidad evitar que el extremo actor pierda su activo más valioso que asciende a $3.200.000.000, el cual está en riesgo mientras la señora Patricia Cyfuentes Pantoja tenga la posibilidad de ejercer el derecho de compra.

El decreto de la inscripción de la demanda luce insuficiente para proteger los derechos de la activante, por cuanto no imposibilita el uso de la anotada prerrogativa.

La petición cautelar es necesaria, proporcional y efectiva, en la medida que, existe una amenaza, se circunscribe únicamente a limitar la evocada facultad y salvaguardar las garantías de la convocante[3].

5. CONSIDERACIONES

Las medidas cautelares son un mecanismo procesal instituido para asegurar el cumplimiento de las decisiones judiciales, sean personales o patrimoniales. En este último evento se enfilan a lograr la conservación de los bienes del demandado, en caso de salir avante las peticiones del promotor, limitándose, con ello, los eventuales efectos desfavorables que puedan presentarse ante la tardanza de los litigios. Son de naturaleza instrumental o aseguraticia, provisoria o temporal, variable o modificable y accesorias al proceso principal.

---

[1] Archivo "*026.AutoRequiere-Apelado"* del *"01.CuadernoUno"* Primera Instancia
[2] Archivo "*031.AutoConcedeRecurso2"* ib.
[3] Archivo *"028.EscritoApelaciónFolios174Hasta178-5*" ib.

El Estatuto Procesal vigente consagra las pertinentes en los asuntos de naturaleza declarativa en el artículo 590, literal c) de la norma en cita, prevé otras cautelas posibles en esta clase juicios. Al respecto señala:

"*...c) Cualquiera otra medida que el juez encuentre razonable para la protección del derecho objeto del litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión.*

Para decretar la medida cautelar el juez apreciará la legitimación o interés para actuar de las partes y la existencia de la amenaza o la vulneración del derecho.

Así mismo, ... tendrá en cuenta la apariencia de buen derecho, como también la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida y, si lo estimare procedente, podrá decretar una menos gravosa o diferente de la solicitada. El juez establecerá su alcance, determinará su duración y podrá disponer de oficio o a petición de parte la modificación, sustitución o cese de la medida cautelar adoptada…"

Las medidas innominadas tienen un carácter novedoso e indeterminado, provienen de las solicitudes de los interesados, su decreto le impone al funcionario un estudio riguroso sobre la necesidad, efectividad y proporcionalidad, de cara al objeto del litigio[4].

En el *sub-lite*, al examinar el libelo, se avizora en lo medular que, las pretensiones principales y subsidiarias se enfilan a declarar la ineficacia de las cesiones efectuadas respecto del contrato de leasing

[4] CSJ. STC de 11 de febrero de 2013, exp. 11001 22 03 000 2012 02009 01, STC16248-2016 de 10 de noviembre de 2016, exp. 68001-22-13-000-2016-00415-02 y STC1302-2019 de 8 de febrero de 2019, exp. 11001-22-10-000-2018-00699-01.

celebrado por Transmares Logística S.A.S. y el Banco de Occidente, con fundamento en distintas figuras jurídicas y, como consecuencia, disponer que la primera sociedad es la única titular del derecho de compra allí pactado[5]; así mismo, el actor solicitó la inscripción de la demanda en el folio de matrícula inmobiliaria 50C-1366222 y *"…ordenar a las demandadas, señora Patricia Cyfuentes Pantoja y al Banco de Occidente que se abstengan de ejecutar la opción de compra que pretenda ejercer la cesionaria aparente, señora Patricia Cyfuentes Pantoja, mientras se resuelve el proceso…"*[6].

Bajo ese panorama, como la anotada medida se enmarca en las innominadas corresponde realizar el análisis en comento, para lo cual importa precisar que de cara a los contornos fácticos que originaron el litigio y a la etapa procesal en que se encuentra, no se halla viable su decreto.

En efecto, en relación con la apariencia del buen derecho, como viene de verse, aunque el *petitum* tiene como propósito general invalidar las anotadas convenciones, lo cierto es que se sustenta en una multiplicidad de causas, cuya configuración no es dable atestarse en esta oportunidad procesal, amén que del material probatorio no emerge con diamantina convicción alguna de ellas y, en todo caso, los elementos suasorios no han sido sometidos a contradicción.

En otras palabras, de la actuación surtida hasta este momento, no se evidencia ningún instrumento de persuasión que acredite, por ahora, la probabilidad de que le asista la razón a la promotora en sus pretensiones, y por contera, exista un alto grado de probabilidad de salir victoriosa en el litigio.

Con todo debe relievarse que las precedentes disertaciones de modo

[5] Archivo "*017.Demanda*" ib.
[6] Archivo *"002.AnexoUno*" ib.

alguno constituyen prejuzgamiento.

Aunado, en punto a la necesidad, no debe soslayarse que el a-quo ordenó la inscripción de la demanda en el folio de matrícula inmobiliaria del citado inmueble, la cual aún se encuentra pendiente de ser inscrita y garantiza la materialización de la sentencia, en caso de resultar favorable a la actora.

Sobre los efectos de tal medida, el inciso segundo del canon 591 del Código General del Proceso dispone: *"…quien los adquiera con posterioridad estará sujeto a los efectos de la sentencia de acuerdo con lo previsto en el artículo 303. Si sobre aquellos se constituyen posteriormente gravámenes reales o se limita el dominio, tales efectos se extenderán a los titulares de los derechos correspondientes…".*

A voces de la Corte Suprema de Justicia: *"…el efecto fundamental de la susodicha cautela es la oponibilidad de la sentencia a quien adquiere el bien luego de haberse inscrito la misma, sin que, y esto es relevante, ella pueda significar de algún modo que por el mero hecho de la inscripción el titular del dominio deje de serlo y, mucho menos, que los terceros entender que ya no lo es. Por demás, claro está, que tal consecuencia presupone que esa resolución hubiere acogido las súplicas del demandante, dado que la provisionalidad, característica de los procesos cautelares, hace que esa anotación esté a la espera de su ratificación por el registro de la providencia condenatoria.*

Es evidente, de otro lado, que la medida afecta la eficacia de los asientos registrales de las transferencias de propiedad, gravámenes y limitaciones al dominio efectuadas después de la inscripción de la demanda, ya que apareja su cancelación, dejándolos sin fuerza legal, conforme lo prevé el inciso 5º del literal a) del numeral 1) del precitado artículo 690 al disponer que "si la sentencia fuere favorable al demandante, en ella se ordenará su registro y la cancelación de los

registros de las transferencias de propiedad, gravámenes y limitaciones al dominio efectuados después de la inscripción de la demanda, si los hubiere (…)" (negrilla fuera de texto) (CSJ SC, 19 dic. 2011, rad. 2002-00329-01)»…"[7]*.*

Corolario de lo discurrido, se impone ratificar la providencia censurada, con la consecuente condena en costas a cargo del extremo opugnante.

6. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D. C.,** en **SALA DE DECISIÓN CIVIL,**

RESUELVE:

6.1. CONFIRMAR el numeral 4 del auto del 28 de abril de 2023, proferido dentro del presente asunto por el Juzgado 28 Civil del Circuito de Bogotá.

6.2. CONDENAR en costas de la instancia al apelante. Liquidar conforme al artículo 366 del Código General del Proceso. Fijar como agencias en derecho la suma de $ 1.000.000.oo.

6.3. DEVOLVER el expediente a su despacho judicial de origen, previas las constancias del caso. Ofíciese.

NOTIFIQUESE.

[7] CSJ STC15539-2018 Magistrado Ponente AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Firmado Por:

Clara Ines Marquez Bulla

Magistrada

Sala 003 Civil

Tribunal Superior De Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **9690a5baf12a60ea5144b6a5d52e3f111b255a47a6f3f42f9a29d6f56e09890e**

Documento generado en 29/02/2024 08:11:17 a. m.

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA
SALA CIVIL

Magistrado Ponente: Iván Darío Zuluaga Cardona

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Proceso	Verbal – Pertenencia
Demandante	Elías Orlando Páez
Demandado	Personas indeterminadas
Radicado	110013103 028 2011 00001 01
Instancia	Segunda
Decisión	Admite recurso de apelación

1. Se admite en el efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por los demandantes, contra la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2023 por el Juzgado 46 Civil del Circuito de Bogotá, D.C., en el radicado en referencia.

2. Tramitar el presente asunto en segunda instancia atendiendo el procedimiento previsto en el artículo 12 del Ley 2213 de 2022[1].

3. Ejecutoriado este auto, el extremo apelante deberá sustentar el recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes, en la dirección de correo electrónico: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

4. De la sustentación presentada oportunamente, por secretaría, córrase traslado por el término de cinco (5) días a la parte contraria.

5. En caso de no sustentarse oportunamente el recurso será declarado desierto.

[1] De conformidad con lo previsto en el inciso 2º del artículo 40 de la Ley 153 de 1887 modificado por el artículo 624 del C.G.P. "(…) los recursos interpuestos (…) se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos (…)".

6. Advertir que, de conformidad con lo previsto por el inciso 4 del artículo 109 del C.G.P., los memoriales, incluidos los mensajes de datos, se entenderán presentados oportunamente si son recibidos antes del cierre del despacho del día en que vence el término, es decir, antes de la cinco de la tarde (5:00 p.m.).

7. Por economía procesal y para evitar la pérdida automática de competencia, de una vez se ordena prorrogar el término para fallar este asunto por seis (6) meses más, contados a partir del día siguiente al vencimiento del término inicial.

NOTIFÍQUESE

Firma Electrónica
IVÁN DARÍO ZULUAGA CARDONA
Magistrado

Firmado Por:
Ivan Dario Zuluaga Cardona
Magistrado
Sala 010 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **f6218c6a36d76d5a4bf0cfd18d0be0d47d258e23352c783598e13f01b74fd4a5**
Documento generado en 29/02/2024 02:12:16 p. m.

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

Proceso N.°	11001310302720210034901
Clase:	EJECUTIVO
Ejecutante:	ANA MARÍA BERNAL SANABRIA
Ejecutado:	SERGIO IGNACIO LLINÁS ANGULO

Con apoyo en el artículo 321, numeral 8º de la Ley 1564 de 2012, el suscrito magistrado resuelve la apelación que el ejecutado interpuso contra el auto de 4 de agosto de 2023[1] proferido por el Juzgado 27 Civil del Circuito de Bogotá, mediante el cual le negó su solicitud de reducción de medidas cautelares.

ANTECEDENTES

1. Mediante el proveído de 4 de agosto de 2023, la juzgadora de primer grado decretó las siguientes cautelas: i) el embargo de las acciones que el demandado posea en la sociedad Inversiones Sicar S.A.S., en liquidación, y ii) el embargo y secuestro de los bienes muebles y enseres de propiedad de este último depositados en el inmueble ubicado en la Calle 120 n.° 20 – 78 de esta ciudad.

2. Inconforme, el ejecutado interpuso recurso de reposición y el subsidiario de apelación, con fundamento en que previamente se habían decretado otras cautelares que ya "se encuentran materializadas", por lo que las nuevas que ahora se ordenaron "exceden el límite" establecido en los artículos 599 y 600 del CGP

3. El 15 de febrero de 2023 se resolvió en forma infructuosa el primero de los aludidos medios de impugnación, por lo que se procede a resolver la alzada subsidiaria previas las siguientes

CONSIDERACIONES

El auto recurrido se confirmará, por lo siguiente:

Es útil memorar que "[t]oda decisión judicial [y lo es aquella que se pronuncia sobre la procedencia de limitar o reducir las medidas

[1] Repartido al suscrito magistrado el 28 de febrero de 2024.

cautelares decretadas] debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. (…)" (art. 164, Ley 1564 de 2012).

Bajo ese entendido, importa precisar que el ejecutado no acreditó, como le correspondía, el supuesto de hecho por cuya virtud solicitó la limitación o reducción de las medidas cautelares decretadas; es decir, que el valor de los bienes embargados supera el doble del crédito, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas, en la forma en que lo ordenan los artículos 599.3 y 600, *ibídem*.

En efecto, no aportó ninguna probanza que, en los términos de los evocados preceptos, permitiera establecer el valor los bienes embargados para verificar si excede "el doble del crédito cobrado, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas".

No se olvide que es con soporte en los elementos de juicio a que hace alusión el inciso 4° del artículo 599 ya citado (facturas de compra, libros de contabilidad, certificados de catastro o recibos de pago de impuesto predial, o de otros documentos oficiales), que puede acreditarse que "el valor de los bienes excede ostensiblemente el límite mencionado".

Así, pues, como el recurrente no satisfizo la carga probatoria que gravitaba sobre sus hombros, no queda más remedio que confirmar el auto apelado.

No sobra agregar que no es cierto, como lo sugirió el inconforme, que ya "se encuentran materializadas" las cautelas decretadas con antelación en este juicio[2], pues, por un lado, ninguno de los establecimientos bancarios requeridos comunicó la materialización del embargo sobre alguna suma de dinero perteneciente al demandado[3] y, de otro, si bien el Juzgado 3° Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de esta ciudad tomó atenta nota del embargo de remanentes decretado en el marco del proceso n.° 041 2019 00159[4], no ha puesto a disposición del despacho de primera instancia excedente alguno.

De ese modo las cosas, el supuesto de hecho en que el recurrente soportó su disenso aparece desvirtuado.

Por lo demás, a falta de determinación, en la hora actual, del valor de los dividendos, muebles y enseres objeto de la medida de embargo cuestionada, no resulta posible establecer si se excedió "el doble del crédito cobrado, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas",

---

[2] Decretadas por auto de 6 de octubre de 2021, visible en el cuaderno de primera instancia, carpeta "C02Cautelas", archivo "03AutoDecretaCautelares".
[3] *Ib.*, carpeta "C02Cautelas", archivos 5 a 17 y 20.
[4] *Ib.*, carpeta "C02Cautelas", archivo "21AcusaAtentaNotaEmbargoRemanentes_Juz3C.C._13-02-2023".

debiéndose agregar, que el interesado cuenta con la posibilidad de pedir la reducción cautelar, de ser procedente, en cualquier estado del proceso una vez consumados los embargos y secuestros, y hasta antes de que se fije fecha para remate, conforme lo regula el artículo 600 de la Ley 1564 de 2012.

Colofón, se confirmará la providencia impugnada con la consecuente condena en costas al apelante vencido, de conformidad con lo previsto en el artículo 365 del Código General del Proceso.

En mérito de lo expuesto, el suscrito magistrado sustanciador

RESUELVE:

Primero. Confirmar el auto de 4 de agosto de 2023 proferido por el Juzgado 27 Civil del Circuito de Bogotá, por lo expuesto.

Segundo. Costas a cargo del recurrente. Como agencias en derecho en esta instancia se señala el equivalente a 1 s.m.m.l.v., de conformidad con lo previsto en el artículo 365 del CGP., en concordancia con el artículo 5°, numeral 4° del Acuerdo n.° PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016, expedido por la presidencia del Consejo Superior de la Judicatura. La juzgadora de primer grado deberá realizar su liquidación acorde con lo establecido en el artículo 366, *ídem*.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE

El Magistrado,

MANUEL ALFONSO ZAMUDIO MORA
(firma electrónica)

Firmado Por:
Manuel Alfonso Zamudio Mora
Magistrado
Sala 005 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **3f540feb9e1babd0be01211d92a1e60a7737357cf56d2f3c096ec29ce10bdc72**
Documento generado en 29/02/2024 11:56:39 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

R.I. 16398

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ - SALA CIVIL

1100131030-26-2010-00250-01

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

Sería del caso decidir el recurso de apelación interpuesto por el extremo demandante contra la sentencia proferida el 13 de junio de 2023, por el Juzgado 50 Civil del Circuito de Bogotá D.C., dentro del proceso de la referencia, si no fuera porque se observa que lo actuado en primera instancia adolece de nulidad, conforme se explica a continuación.

Con miras a facilitar que las personas (determinadas o indeterminadas) se enteren de la existencia de procesos tramitados en su contra, o de su respectivo causante, el legislador previó tanto el mecanismo del emplazamiento como del registro único de personas emplazadas. Además, cuando se trata de acciones de pertenencia también se ordenó el registro de procesos para que todos los que se crean con derechos sobre el inmueble pretendido puedan conocerlo, dado el carácter *erga omnes* de la declaración de pertenencia. Estos registros son públicos y tienen la finalidad de permitir *"la consulta de la información del registro"* (art. 108 parágrafo 1) y que puedan *"contestar la demanda las personas emplazada*s" (art. 375 num. 7 inc. 6).

En el Acuerdo No. PSAA14-10118 de 2014, por medio del cual se crean y organizan los Registros Nacionales de Personas

Emplazadas, de Procesos de Pertenencia, Bienes Vacantes o Mostrencos, y de Procesos de Sucesión, el Consejo Superior de la Judicatura dispuso que *"[l]os Registros Nacionales reglamentados mediante este Acuerdo estarán disponibles al público en general a través de la página web de la Rama Judicial: www.ramajudicial.gov.co, para facilitar su acceso, consulta y disponibilidad de la información en todo momento."*[1]

A su turno, el 20 de febrero de 2015, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial expidió los manuales *"DE USO DE LOS REGISTROS NACIONALES (RN) PARA DESPACHOS JUDICIALES"*, y el *"DE USO PARA LA CONSULTA DE PERSONAS EMPLAZADAS Y LOS REGISTROS NACIONALES (RN)."*

El primero de ellos señala que el registro se compone de 4 secciones, en las que se quiere destacar la información del sujeto, donde van los "Datos del demandante(s), demandado(s) y/o emplazados", y la del predio, para los "Datos del predio"; además, otro aparte de "consulta del ciudadano" en el que expresamente se consignó que el ingreso será por el portal de la Rama Judicial en la sección de Ciudadano, el enlace denominado "Consulta Personas Emplazadas y Registros Nacionales."

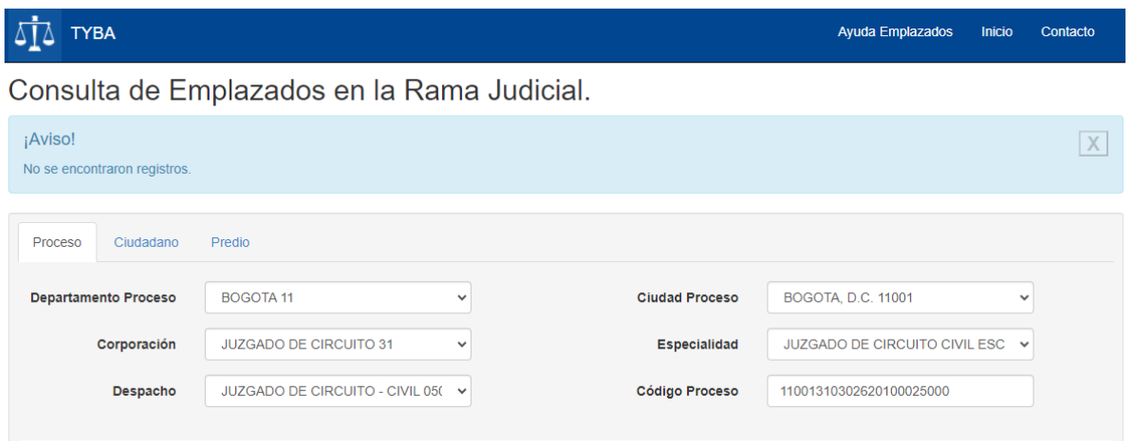
El segundo indica que el ciudadano debe tener acceso a la consulta por "Datos del proceso, Datos del ciudadano emplazado, Identificación de un predio", y en esta última opción "es viable consultar por cualquiera" de los siguientes registros "número de matrícula inmobiliaria" y "cédula catastral" para visualizar los datos del registro.

De esto se desprende que al mencionado registro lo gobiernan las características de publicidad y acceso a la información completa sobre el sujeto emplazado, el despacho que lo requiere y las partes del

[1] Artículo 3 del Acuerdo No. PSAA14-10118 de 2014.

litigio, así como la información concerniente al predio pretendido en pertenencia; ingreso fácil a la plataforma en la que se encuentra la información y, lo más relevante, el ciudadano emplazado, o cualquier interesado en el inmueble, puede ubicar directamente, desde cualquier lugar, el trámite en el que es convocado a juicio, o donde se persigue un bien determinado, con lo que se le garantizan los derechos fundamentales a la contradicción y defensa (artículo 29 de la Constitución Política).

En el caso concreto, se advierte que, en el registro público mencionado no se incluyó el emplazamiento de la convocada ni de las personas indeterminadas, y no se puede acceder a la información en la página web diseñada para la consulta ciudadana del mencionado registro, pues al ingresar por el proceso se obtiene la siguiente advertencia: *"no se encontraron registros"*[2]. Y al intentar la consulta por sujetos y el predio tampoco se visualiza ninguna información.



En consecuencia, el emplazamiento no se surtió de la manera debida, pues la norma expresamente señala que sólo *"se entenderá surtido quince (15) días después de publicada la información de dicho registro"* (inciso 6° del artículo 108 del CGP).

---

2 https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/justicia21/Administracion/Ciudadanos/frmConsulta.aspx?opcion=emplazados
Consultada: 29/02/2024

Así las cosas, se estructuró la nulidad regulada en el numeral 8° del artículo 133 del Código General del Proceso, por no practicarse en legal forma ***"el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas"*** respecto del bien objeto de la pertenencia, la cual no pueden tenerse como saneada en la medida en que se refiere a los terceros que no han sido debidamente convocados y que por esa misma razón estarían en imposibilidad de alegarla o proponerla, y porque quienes hubieren tenido interés en el predio no hayan conocido los datos del mismo, para solicitar pruebas en su favor.

En consecuencia, se impone declarar la nulidad de lo actuado a partir de la inclusión en el Registro de Personas Emplazadas de la demandada, las personas indeterminadas y de Procesos de Pertenencia, en su lugar, se ordenará que se haga la corrección para que la información allí contenida sea pública o la omitida se incorpore, y cumplido el término establecido en el inciso 6° del artículo 108, proceda a designar nuevamente curador *ad litem* de los emplazados y que transcurra el previsto en el inciso 6° del numeral 7° del artículo 375, para que puedan contestar la demanda.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., Sala Civil,

RESUELVE

Primero. - Declarar la nulidad de lo actuado a partir del Registro de Personas Emplazadas de la demandada, las personas indeterminadas y de Procesos de Pertenencia y, en su lugar, el *a quo* dispondrá que la información allí contenida se haga pública, no privada, para proceder luego en la forma indicada.

Asimismo, tomar las medidas de saneamiento pertinentes de acuerdo con lo ordenado en el párrafo final de la parte considerativa.

Segundo.- La prueba practicada dentro de esta actuación conservará validez y tendrá eficacia respecto de quienes tuvieron oportunidad de controvertirla, tal como lo dispone el inciso segundo del artículo 138 del Código General del Proceso.

Notifíquese y Cúmplase,

(firma electrónica)

STELLA MARÍA AYAZO PERNETH

Magistrada

Firmado Por:
Stella Maria Ayazo Perneth
Magistrada
Sala 04 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c2d569d5449fd7291154e130648b379173dac81eaddb91354030f9bff40fdc0f**
Documento generado en 29/02/2024 11:38:11 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.

SALA CIVIL DE DECISIÓN No. 3
Magistrada Ponente: MARTHA ISABEL GARCÍA SERRANO

Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticuatro (2024).
(Decisión presentada en Salas de 7, 14 y 21 de febrero pasado y aprobada en Sala de la fecha).

Proceso:	Verbal
Radicado:	11001 3103 025 2019 00656 02
Demandantes:	Leonidas Ruiz Manrique
Demandado:	Nidia Constanza del Pilar Molina Pulgarín
Asunto:	Apelación de sentencia
Decisión:	Confirma

1. ASUNTO A RESOLVER

El recurso de apelación interpuesto por ambos extremos procesales, contra la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2022, por el Juez 25 Civil del Circuito de Bogotá[1].

2. ANTECEDENTES

1. Según la demanda subsanada, el señor Leonidas Ruiz Manrique, promovió juicio verbal contra Luis Francisco Bermúdez Castro y Nidia Constanza del Pilar Molina Pulgarín, para que, en últimas, se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

[1] Asignado por reparto al despacho de la Magistrada Ponente el 14 de febrero de 2023.

i) «*que se declare terminado y resuelto el contrato de obra civil, más las modificaciones efectuadas* [a este] *para terminar la obra designada para el predio de cual se aporta el certificado de tradición y libertad, entre el demandante y el demandado*» y, en consecuencia, ***ii)*** condenar a los demandados a pagar al demandante, además de los perjuicios ocasionados con posterioridad a la presentación de la demanda, los siguientes valores:

CONCEPTO	VALOR
1. Construcciones adicionales dentro del predio relacionado según certificado de tradición y libertad No.50n-20186922, mano de obra y saldos de material para la construcción, efectuada bajo el contrato de obra suscrito entre las partes intervienes dentro del presente como las modificaciones de tiempo y lugar que se generaron durante la ejecución de dicho contrato de obra. Valor demostrado en la relación de gastos y mano de obra efectuadas por el constructor y los testigos – obreros intervinientes dentro de la obra como mano de obra, y los testimonios relacionados én su respectivo acápite	1. $69.266.300.oo
2. Lucro cesante por los gastos adicionales que no fueron estipulados dentro del contrato, pero que si fueron exigidos por los demandados al efectuar la obra y que no quedaron reconocidos dentro del contrato inicial, ni sus modificaciones y daño emergente, por los gastos de vigilancia del terreno de día y de noche, ejercido en ocasiones por el señor Cristian Ruiz y otros, mientras la construcción se efectuaba, más los gastos de transportes para que le fueran pagados los saldos del contrato y los adicionales de la obra, que si bien es cierto no se tienen especificamente documentos de estos traslados, si se tienen los testimonios de las personas llamadas dentro del acápite de pruebas testimoniales, y el detrimento del patrimonio de mi poderdante por la no entrega total de la obra, ya que tuvo que incurrir en préstamos personales para cubrir las obligaciones de préstamos de material y posterior cancelación.	2. $33.161.000.oo
3. Pago de los intereses corrientes y moratorios, causados desde el no pago de los saldos por construcciones adicionales, mano de obra y saldos de material para la construcción, hasta el pago total de las obligaciones objeto del presente litigio, según la tabla de intereses aportada en el acápite de pruebas.	3. Por determinar.

2. Como sustento de las anteriores pretensiones, relató el convocante en síntesis y en cuanto resulta relevante para desatar esta alzada, el sucesivo compilado fáctico:

Que mediante documento privado adiado 21 de noviembre de 2013, suscribió con los demandados el contrato de obra civil No. 013069, estipulándose como término de ejecución el de 6 meses; que no obstante aquellos incumplieron con las obligaciones pactadas, comoquiera que, a la fecha de presentación del escrito originario, le adeudan la suma de $69’266.300 por concepto de materiales, mano de obra de la construcción «*principal*» y «*adicionales*» convenidos de común acuerdo, y aun cuando

ha presentado los requerimientos escritos y verbales, no se le ha efectuado tal consignación, «*quedando clara la actitud dolosa de los* [accionados]*, al no querer pagar, ni dejar que la obra se entregue a satisfacción*».

Indicó que otra muestra de la falta de buena voluntad de don Luis Francisco y doña Nidia Constanza, es que no asistieron a la audiencia de conciliación previa, pese que fueron notificados de la misma con la ayuda de agentes de policía, pues de no ser así, no hubiera podido cumplirse con el debido enteramiento.

Remató diciendo que en el contrato sí fue estipulada una cláusula penal por incumplimiento del constructor, pero en ningún lado se fijó, una similar en cabeza los contratantes por sus faltas, motivo por el cual, tal convenio es «*abusivo*».

3. ACONTECER PROCESAL

3.1. La demanda se presentó el 12 de enero de 2017[2], siendo inadmitida por auto calendado 3 de marzo siguiente[3], para que ***i)*** se diera cumplimiento a lo preceptuado en el canon 206 del Código General del Proceso y, ***ii)*** se adecuara el poder.

Subsanada, el Juzgado 17 Civil Municipal de Bogotá (al que inicialmente se le asignó el asunto) dispuso su admisión en proveído del 15 de mayo de 2017, ordenándose su traslado a la parte accionada por el término de ley[4].

3.2. Notificada esa decisión por conducta concluyente[5], los convocados se opusieron a las pretensiones de la acción, a través de la excepción de mérito que denominaron «*temeridad y mala fe*».

---

[2] Folio 80, 0001CuadernoPrincipalFolio1a289.pdf, carpeta 01Cuaderno Principal, carpeta PrimeraInstancia, exp. 11001310302520190065602.
[3] Folio 83, *ejusdem.*
[4] Folio 99, *Ib*.
[5] Folio 271, *Cit.*

Por otra parte, promovieron demanda de reconvención[6], a través de la cual, pidieron, a la letra:

> «***1.*** *Que se* ***declare*** *que el señor* ***LEONIDAS MANRIQUE incumplió*** *el contrato de obra identificado bajo el número CO-013069 y sus adiciones Nos. 1, 2 y 3, celebrados* [en su orden], *el 21 de noviembre de 2013, 23 de abril, 17 de junio y 8 de agosto de 2014, entre los* [demandantes en reconvención] (…) *como contratantes y aquél como contratista, por no haber entregado nunca la obra contratada y haberla ejecutado de manera totalmente defectuosa.*
>
> ***2.*** *Como consecuencia de no haber entregado jamás la obra contratada, se* ***condene*** *al demandado* ***LEONIDAS RUIZ MANRIQUE*** *a cancelar a* [los demandantes en reconvención] (…) *por concepto de cláusula o indemnización pactada en la cláusula décima séptima de dicho contrato, la suma de* ***ciento sesenta y dos mil quinientos noventa pesos ($162.590,00)*** *diarios a partir del 9 de octubre de 2014 hasta que se realice el pago de dicha suma, que a la fecha de presentación de esta demandada, asciende a* (…) *de* ***ciento setenta y siete millones trescientos ochenta y cinco mil seiscientos noventa pesos ($177'385.690,00).***
>
> ***3.*** *Que como consecuencia de haber ejecutado de manera totalmente defectuosa la obra, se condene al demandado* ***LEONIDAS RUIZ MANRIQUE*** *a cancelar a* [los demandantes en reconvención] (…) *por concepto de perjuicios* ***materiales y morales****, las siguientes sumas de dinero:*
>
> ***3.1. Perjuicios materiales:***
>
> ***3.1.1.*** *La suma de* ***veinticuatro millones dieciocho mil quinientos veintiún pesos ($24'018.521.00),*** *pagados por* [los demandantes en reconvención] (…) *a la entidad contratista ECONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS, para reparar y terminar las obras defectuosas elaboradas por el demandado en el predio de propiedad de aquellos, más los intereses comerciales moratorios conforme a lo certificado por la Superintendencia Financiera, desde el 31 de enero de 2016 y hasta que esta suma se reintegre a los demandantes en reconvención.*
> ***3.1.2.*** *La suma de* ***seis millones novecientos treinta mil pesos ($6'930.000,00)****, pagados por* [los demandantes en reconvención] (…) *al contratista señor EDWIN ALEXANDER PEDRAZA RODRIGUEZ, para reparar y terminar las obras defectuosas elaboradas por el demandado en el predio de propiedad de aquellos, más los intereses comerciales moratorios conforme a lo certificado por la Superintendencia Financiera, desde el 13 de diciembre de 2016 y hasta que esta suma se reintegre a los demandantes en reconvención.*

[6] Folio 001demandadereconvencionfolios1al52, carpeta Primera Instancia, 02CuadernoDemandadeReconvención, exp. 11001310302520190065602

3.2. Perjuicios morales:

3.2.1. *En favor del demandante LUIS FRANCISCO BERMUDEZ CASTRO la cantidad de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (100 SMMLV), en razón de la angustia y consternación que tuvo que padecer este señor en su propia persona, así como viendo a su esposa y sus dos hijos sufrir las consecuencias del incumplimiento contractual, que inclusive le generaron una enfermedad dictaminada como 'DIVERTICULAR PERFORADA CON ABCESO RETROVESICAL' que lo llevó además a una intervención quirúrgica, o la cantidad que el señor juez en su oportunidad estime pertinente.*

3.2.2. *En favor de la demandante NIDIA CONSTANZA DEL PILAR MOLINA PULGARIN la cantidad de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (100 SMLMV), en razón de la angustia y consternación que tuvo que padecer esta persona en su propia persona, así como viendo a su esposo y sus dos hijos sufrir las consecuencias del incumplimiento contractual, que inclusive le generaron a su esposo dictaminada como 'DIVERTICULAR PERFORADA CON ABCESO RETROVESICAL' que lo llevó además a una intervención quirúrgica, o la cantidad que el señor juez en su oportunidad estime pertinente.*

4. *En su oportunidad, se sirv*[a] *condenar en costas al demandado*».

3.3. Para cimentar tales pedimentos, adujeron en lo esencial los reconvinientes, que:

3.3.1. Entre los extremos de la litis, el 21 de noviembre de 2013, se celebró un contrato de obra civil, identificado con el consecutivo CO-013069, por un término de 6 meses, motivo por el cual, los trabajos pactados debían entregarse el 21 de mayo de 2014; que, no obstante, por el «*incumplimiento*» del señor Leonidas, se hizo «*necesario*» ampliar el término inicialmente convenido, en tres «*adicionales*», calendados 23 de abril, 17 de junio y 8 de agosto postreros.

3.3.2. En la última semana del mes de septiembre de 2014, el señor Leonidas dejó de «*apersonarse de la obra, dejándola totalmente abandonada*», sin acercarse al menos para la liquidación del contrato, por lo que todos los yerros evidenciados desde la ejecución del primero [techos, fachada frontal, fachada posterior, portal, chimeneas, pisos de la segunda planta, baño segundo piso, cajas de aguas, filtro de aguas lluvia], no fueron

enmendados, lo que los obligó a llamar a Econstrucciones y Montajes SAS y Edwin Alexander Pedraza Rodríguez, para su culminación, por valor, en su orden de $24’018.521 y $6’930.000, trabajos finalizados el 30 de enero y el 21 de noviembre de 2016, respectivamente.

3.3.3. Debido a las demoras en la entrega de las obras encomendadas al demandante principal, no han podido vender el predio, con el fin de «*trasladar su núcleo familiar a la ciudad de Villavicencio, donde labora como gerente de la entidad Davivienda,* (…) *desde el 1° de enero de 2013*»; así entonces, ha tenido que «*sostener dos residencias*», y asumir cuantiosos gastos; que la afectación no ha sido solamente de índole económica, sino también física, psicológica y moral, pues el mal estado de la casa, produjo en uno de sus descendientes «*bronquitis y faringitis agudas*»; en el señor Bermúdez Castro, quien ante las angustias para conseguir el dinero no solo del sostenimiento de su familia, sino para poder finalmente arreglar los daños locativos de su predio de La Calera, desarrolló una patología denominada «*diverticular perforada con absceso retrovesical*», teniendo que someterse a un procedimiento quirúrgico para su manejo y, en la señora Nidia Constanza, sentimientos de desazón por todo lo anterior y por los «*maltratos*» que sufrió por parte del director de la obra inicial y sus ayudantes, quienes aprovechaban que ella se encontraba sola en la casa, por la obligación de su esposo de permanecer en la capital del Meta, atendiendo su trabajo.

3.4. Por auto de 11 de septiembre de 2019, la Juez 17 Civil Municipal de esta urbe, tras advertir la cuantía de las pretensiones de la demanda de reconvención, remitió el asunto a la oficina de reparto, para su asignación a un juzgado civil de la categoría circuito, correspondiéndole al 25, el que admitió la misma mediante proveído de 6 de mayo de 2021[7].

3.5. El 9 de mayo de 2022, el juez *a quo* evacuó la audiencia inicial prevista en el canon 372 del Código General del Proceso; el 23 de junio

[7] 006AutoAdmiteDemandaReconvencionOrdenaRemisionExpediente, *ejusdem.*

postrero, continuó con la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de la que trata el precepto 373 *ejusdem.*

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Bajo el amparo de lo contemplado en el inciso 3º del numeral 5º del artículo 373 del Código General del Proceso, el 19 de diciembre de 2022, por escrito, el juez de primer grado desató la instancia, así:

> «***PRIMERO: Negar*** *las pretensiones de la demanda principal, atendiendo los motivos señalados en la parte considerativa de esta sentencia.*
>
> ***SEGUNDO: Negar*** *las pretensiones de la demanda de reconvención, en razón de los motivos señalados en la parte considerativa de esta sentencia.*
>
> ***TERCERO: Declarar*** *terminado el proceso.*
>
> ***CUARTO: Ordenar*** *el levantamiento de las medidas cautelares que se hubieren decretado. Secretaría proceda de conformidad.*
>
> ***QUINTO:*** *Sin condenas en costas*».

Para arribar a esa determinación, empezó por señalar que el problema jurídico a dilucidar se fincaba en dos situaciones a saber: ***i)*** en lo que refiere a la demanda principal, una vez averiguado si existió o no el vínculo contractual aludido, establecer si los demandados (contratantes) le deben o no al demandante los valores pretendidos por los gastos adicionales y la retención por garantía; ya en lo concerniente a la demanda de reconvención, ***ii)*** si logró demostrarse el incumplimiento del contrato, relativo a las obras supuestamente defectuosas y la falta de entrega de algunas otras contratadas, para luego entrar a estudiar si probados están los perjuicios reclamados como consecuencia de ese actuar del demandante principal (contratista).

Acerca entonces del pacto base de las súplicas de ambos extremos de la litis, estableció que, en efecto, aquellos suscribieron el contrato de obra civil No. CO-013069, calendado 21 de noviembre de 2013, citando *in*

extenso, cada una de las cláusulas, y haciendo énfasis que su objeto no era otro que «*la* [c]*onstrucción de la* [o]*bra* [c]*ivil de una casa unifamiliar de dos pisos de características aislada y un área de construcción total de 258.08 M2, más sus áreas exteriores, y anexas, a ser localizada en la vereda El Salitre, en el municipio de La Calera, Cundinamarca en Colombia*», según reposa en su cláusula primera. Qué, asimismo, se establecieron las «*actividades*» a desarrollar por el contratista, las cuales estaban enlistadas en un anexo. Con todo, lo que debía entregarse por el valor contratado ($169’865.157) era una construcción de dos pisos en obra gris, del metraje antes citado, fijando como plazo final, el de 6 meses desde la rúbrica del contrato.

Hizo alusión, también, a una primera relación de actividades adicionales, pactada por los contendientes, por valor de $43’149.000, del 23 de abril de 2014; un segundo acuerdo de la misma índole, del 13 de junio de 2014, que ascendía a $12’525.725 y, una tercera adición, del 8 de agosto de 2014, por la suma de $15’000.000, sin que, en ninguno de los anteriores, se fijara plazo de entrega.

Luego, y ya en camino a la desestimación de la demanda principal, dijo, en síntesis, que frente a los montos supuestamente adeudados por los contratantes, «*no se observa en el paginario la existencia de prueba alguna con calidades de idoneidad, pertinencia, conducencia y utilidad que los demuestre*», primero, porque en el escrito inicial se especificó que los mismos serian demostrados con la prueba testimonial deprecada, misma que se denegó en la audiencia de 9 de mayo de 2022, por no cumplir los lineamientos del canon 212 del C.G.P.

De otro lado, ya que dichos valores se cimientan en documentos elaborados por el propio demandante, que no contienen la aceptación de los demandados principales y, finalmente, porque «*todos esos conceptos* (…) *ya habían sido incluidos tanto en el contrato original como en los tres adicionales, particularmente en el denominado “RELACION DE ACTIVIDADES ADICIONALES AL CONTRATO SEGÚN ACUERDO ENTRE*

LAS PARTES No.1, por un valor total de $43’149.000», sumado a que una vez efectuada la respectiva operación matemática, entre los dineros que realmente se le pagaron al señor Leonidas, y los valores contratados, la única diferencia es de $14’224.989, suma esta que corresponde a la retención por garantía pactada, que debía devolverse al contratista luego de cuatro meses de finalizada la obra y suscrita la respectiva acta de entrega, tal y como reza en el contrato base; empero, lo cierto es que aquella jamás se elaboró, incumpliendo con esa obligación que era de su cargo.

Siguiendo ese hilo conductor, y frente a la demanda de reconvención, adujo que los contratantes no pueden reclamar la sanción por incumplimiento, por la potísima razón que no honraron «*la cláusula tercera del mismo contrato, en la que pactaron un plazo total de seis meses para la ejecución de la obra contados a partir de la suscripción del referido convenio, 21 de noviembre de 2013, ni a la cláusula décima en cuanto allí pactaron la posibilidad de efectuar cambios o modificaciones a las especificaciones establecidas originalmente en el contrato, para lo cual convinieron que si esos cambios …afectan el plazo del contrato, se deberá establecer de mutuo acuerdo el nuevo plazo de entrega final de la obra*», plazos estos que nunca se fijaron en los adicionales, haciendo hincapié que no es cierto que estos últimos se tuvieron que convenir por incumplimiento del primigenio contrato, comoquiera que, las obras nuevas no habían sido inicialmente estipuladas, y de sus textos, no tiene como establecerse la trasgresión del contrato base por parte del señor Leonidas, postulado que además sustentó en reciente jurisprudencia que establece que cuando ambos contratantes son incumplidos, no puede entonces pedirse el reconocimiento de perjuicios ni de la cláusula penal, como en el caso de marras.

Y frente a los perjuicios morales, y a los materiales por obra defectuosa, dijo que no existía prueba alguna de la primera, ni mucho menos de los pagos que supuestamente se hicieron para solventar los segundos, aun

cuando demostrada si estaba el incumplimiento del reconvenido en la ejecución[8].

5. RECURSO DE APELACIÓN

Inconformes con lo resuelto, ambas partes apelaron y sustentaron en tiempo sus reparos.

De un lado, el extremo demandante fincó su réplica, en suma, en el siguiente punto, a saber[9]:

- Que el demandado confesó en su interrogatorio, que la obra había sido finalizada en un 100% y que no se había devuelto el valor de la retención por garantía, situación que «*suple*» la falta de concertación acerca la entrega de las obras adicionales y la elaboración y firma del acta final, motivo por el cual, sin más, debió reconocerse ese valor a favor del contratista, máxime cuando no se demostró que la obra fue defectuosa.

Por el otro, el extremo demandado (reconviniente), sustentó su descontento, en síntesis, en los ítems que a paso seguido se enlistan[10]:

- Que pese a que se decretó una medida cautelar sobre el bien inmueble de propiedad de los demandados (inscripción de la demanda)[11] la cual a la postre, se levantó ante la negativa de las pretensiones del demandante principal, debió el fallador de primer grado, condenar a éste al resarcimiento de los respectivos perjuicios.

- En cuanto a las costas, se anotó que no es posible que en un proceso que demoró más de 5 años en ser zanjado en primera instancia, no se le hubiere condenado al pago de las mismas, tras resultar vencido.

[8] 057SentenciaPrimeraInstanciaNiegaPretensiones_2019-00656, *ibidem.*
[9] 06Sustentacion, cuaderno Tribunal, exp. 11001310302520190065602
[10] 07Sustentacion, *Cit.*
[11] Folio 58, 03CuadernoMedidas Cautelares, PrimeraInstancia, exp. 11001310302520190065602.

- Que la única excepción de mérito propuesta «*temeridad y mala fe*», debió declararse probada, en aplicación de lo dispuesto en el precepto 281 del Código General del Proceso, pues el juez *a quo* conforme sus consideraciones, estableció que las manifestaciones y probanzas allegadas por el señor Leonidas, eran «*falsas*», imponiendo, por contera, las sanciones contempladas en los artículos 79 a 81 *ejusdem.*

- Que no es posible que se niegue el reconocimiento de la cláusula penal, pues en el Acuerdo No. 3, «*si se dejó plasmada la inconformidad y el incumplimiento del contrato por parte del contratista*»; además de las pruebas que dan cuenta de la imperfección de las obras desarrolladas, lo que al final obligó a los contratantes a tener que buscar ayuda en otra empresa de construcción, debiendo asumir gastos adicionales. Es decir, que está demostrado el incumplimiento contractual del demandado en reconvención, pero no el de los reconvinientes, por lo cual no es posible aplicar el precedente jurisprudencial que trajo a colación el *a quo.*

- Que sí existe prueba de los perjuicios morales y materiales suplicados, máxime cuando el demandante principal guardó silencio frente a la demanda de reconvención, por lo que debía aplicarse en los artículos 96 y 97 *ibidem.*

6. RÉPLICA

El término concedido a las partes para tal fin venció en silencio por parte del demandante inicial.

Sin embargo, los demandados reconvinientes si hicieron uso de ese derecho, tras alegar, en lo fundamental, que jamás afirmaron dentro del trámite de primer grado que la obra les fuera entregada a satisfacción, por lo que la retención fue «*legítima*», derivada del contrato inicial, y que sí se

demostraron los imperfectos de la obra con el informe técnico de inspección rendido por Asistencia Bolívar en agosto de 2015.

7. PARA RESOLVER SE CONSIDERA

7.1. Competencia.

Esta Sala Tercera de Decisión es competente para dirimir la presente instancia, al tenor del numeral 2° del artículo 31 del Código General del Proceso, y lo hará bajo las limitantes contempladas en los artículos 280 y 328 *ibídem.* Además, se encuentran satisfechos los presupuestos procesales y no se verifica ninguna irregularidad procesal que pueda invalidar lo actuado.

7.2. Problema jurídico.

Gravita este juicio, alrededor de la responsabilidad civil contractual; corresponde a esta Sala, por ello, definir si existe mérito para la confirmación de la sentencia de primer grado que negó las pretensiones tanto de la demanda principal como la de reconvención, o, *contrario sensu*, si se revoca como piden los extremos de litis, en punto de los reparos que cada uno especificó como cimiento de su alzada.

7.3. Marco conceptual.

Si habláramos de una definición de responsabilidad civil, podríamos decir que es la consecuencia jurídica de un comportamiento generador de un daño y perjuicio, susceptibles de ser resarcidos.

Ahora, si esa conducta está relacionada con el incumplimiento de una obligación derivada de un contrato, será entonces la memorada responsabilidad de carácter contractual -de la cual corresponde a la Sala ocuparse en el *sub examine*- constituyéndose en sus elementos, jurisprudencial y doctrinariamente hablando, ***i)*** la existencia de un convenio

válido; ***ii)*** el incumplimiento imputable al deudor contractual; ***iii)*** el daño y ***iv)*** la relación de causalidad entre los dos últimos.

Recordemos que el canon 1495 del Código Civil define el contrato o convención como «*un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa*».

Siguiendo al paso de tal precepto, las estipulaciones relativas a los elementos esenciales y naturales de un negocio, así como las accidentales que los contratantes voluntariamente acepten incluir, deben ser satisfechas en los términos que se establecieron, pues «*el contrato, además de revestir determinados comportamientos sociales y recoger el conjunto de derechos y obligaciones que los interesados optaron por asumir, reflejo palpable, entre otros aspectos, de su voluntad libre para autodeterminarse, connota una categoría jurídica que, con apego a las descripciones abstractas de la ley, ha de evaluarse en procura de visualizar eventuales desbordamientos o abusos, ya relacionados con quienes en él intervinieron, o vinculados a los compromisos acordados*»[12].

Así entonces, dable es afirmar que, en el campo de la responsabilidad contractual, se supone el desconocimiento de una obligación emanada de una relación jurídica precedente, cuya inobservancia merece una sanción; es que precisamente el hecho que se repudien las obligaciones por el deudor es el origen de una indemnización por los perjuicios ocasionados al acreedor contractual. Quiere lo anterior significar, que además del derecho que le asiste a este último -contratante cumplido- a pedir la responsabilidad contractual, ostenta un derecho secundario para exigir del deudor -contratante incumplido- la indemnización de daños y perjuicios que le haya causado la falta de cumplimiento total o parcial de la obligación o la simple demora en el mismo.

[12] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia adiada 15 de agosto de 2008, Magistrado Ponente Pedro Munar Cadena, exp. 11001 31 03 016 1994 03216 01.

7.4. Caso concreto.

7.4.1. Pues bien, en el *sub judice* nos encontramos ante una responsabilidad civil contractual, sobre eso no hay duda, máxime cuando es punto pacífico lo relacionado con la existencia del «*CONTRATO DE OBRA CIVIL No. CO-013069*»[13], signado el 21 de noviembre de 2013 entre el demandante principal Leonidas Ruiz Manrique, como contratista, y los demandados (demandantes en reconvención) Nidia Constanza del Pilar Molina Pulgarín y Luis Francisco Bermúdez Castro, como contratantes, cuyo objeto era «*la Construcción de la Obra Civil de una casa unifamiliar de dos pisos de características aislada y un área de construcción total de 258.08 M2, más sus áreas exteriores, y anexas, a ser localizada en la vereda El Salitre, en el municipio de La Calera, Cundinamarca en Colombia*», por valor total de $169’865.157, en el que además se pactó, entre otros asuntos, que «*en cualquier momento durante la ejecución del contrato, los CONTRATANTES podrán ordenar por conducto de su SUPERVISOR, los cambios que consideren necesarios en las especificaciones y el CONTRATISTA estará obligado a ejecutar dichas obras de acuerdo a la modificación, a los precios unitarios establecidos de común acuerdo. Sin embargo, si los cambios afectan el plazo del contrato, se deberá establecer de mutuo acuerdo el nuevo plazo de entrega final de la obra. Si los cambios afectan el precio, el nuevo precio será establecido de común acuerdo entre las partes*».

También, de los documentos suscritos por los contendientes *a posteriori,* denominados, ***i)*** «*RELACION DE ACTIVIDADES ADICIONALES AL CONTRATO SEGÚN ACUERDO ENTRE LAS PARTES No.1*»[14] por un valor total de $43’149.000, y de fecha 23 de abril de 2014, ***ii)*** «*RELACION DE ACTIVIDADES ADICIONALES AL CONTRATO SEGÚN ACUERDO ENTRE LAS PARTES No. 2*»[15], calendado 13 de junio de 2014, por $12’525.725 y, ***iii)*** «*RELACION ACUERDO No. 3 y ACTIVIDADES ADICIONALES AL*

[13] Folios 46 a 49, 001CuadernoPrincipalFolio1a289.pdf, carpeta 01Cuaderno Principal, carpeta PrimeraInstancia, exp. 11001310302520190065602.
[14] Folio 50, *ejusdem.*
[15] Folio 51, *ibidem.*

CONTRATO SEGÚN ACUERDO CELEBRADO ENTRE LAS PARTES EL 8 DE AGOSTO DE 2014»[16], por la suma de $15.000.000, acuerdos anexos al contrato inicial, en los que no se acordó fecha máxima de culminación.

7.4.2. Tras hacer las precedentes precisiones, procederá la Sala a resolver cada uno de los puntos en los que se fundó la apelación de los extremos de la litis. Veamos:

7.4.2.1. Se duele el demandante principal, básicamente, que como el demandado Luis Francisco Bermúdez Castro, «*confesó*» en su interrogatorio, que la obra encomendada fue terminada en su totalidad, los valores retenidos por garantía en cada pago que eventualmente se le hicieron, le sean devueltos porque transcurrido el término de 4 meses de la entrega de lo encomendado, según la cláusula 9a, contrato base, debió haberse procedido a ello, al margen si se fijó o no la fecha de terminación de las obras adicionales y de la falta de elaboración de la respectiva acta.

Cotejado lo anterior con lo obrante en el proceso, diremos, más allá de si los demandados aceptaron o no que la obra finalizó y se entregó completa, que lo cierto es que no existe lugar a que el demandante solicite tal devolución de la retención aludida, pues está demostrado que éste no fue contratante cumplido, bajo el entendido que no elaboró ni suscribió el acta de entrega de la que trata la cláusula décima tercera del contrato de obra base del reclamo- como lo concluyó el *a quo*, cuando trató esta puntual temática, concluyendo que brilla por su ausencia tal documento (SC 1662 de 2019, antes aludida).

Por lo anterior, y sin más razones por innecesarias, no prospera esta inconformidad.

7.4.2.2. Continuando con los ataques enfilados por los demandados reconvinientes, en estricto orden de interposición, tenemos en primer lugar,

[16] Folios 52 y 53, *cit.*

i) **el atinente a la falta de reconocimiento de los «*perjuicios*»** a los que dicen tener derecho, por el simple hecho de haberse decretado una medida cautelar en su contra, consistente en la inscripción de la demanda en el folio de matrícula del inmueble de su propiedad, identificado con el No. 50N-20186922, y luego ordenarse su levantamiento ante la desestimación de las pretensiones de su contraparte.

Para zanjar este punto, observemos lo que disponen los cánones 590 y 597 del Código General del Proceso, que respectivamente, rezan:

«***ARTÍCULO 590. Medidas cautelares en procesos declarativos.*** *En los procesos declarativos se aplicarán las siguientes reglas para la solicitud, decreto, práctica, modificación, sustitución o revocatoria de las medidas cautelares:*

1. Desde la presentación de la demanda, a petición del demandante, el juez podrá decretar las siguientes medidas cautelares:
(...)

b) La inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro que sean de propiedad del demandado, cuando en el proceso se persiga el pago de perjuicios provenientes de responsabilidad civil contractual o extracontractual.
(...)

2. Para que sea decretada cualquiera de las anteriores medidas cautelares, el demandante deberá prestar caución equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones estimadas en la demanda, ***para responder por las costas y perjuicios derivados de su práctica****.* (...)» (negrilla intencional).

«***Artículo 597. Levantamiento del embargo y secuestro.***

Se levantarán el embargo y secuestro en los siguientes casos:

(...)

5. Si se absuelve al demandado en proceso declarativo, o este termina por cualquier otra causa.
(...)

Siempre que se levante el embargo o secuestro en los casos de los numerales 1, 2, 4, 5 y 8 del presente artículo, ***se condenará de oficio o a solicitud de parte en costas y perjuicios a quienes pidieron tal medida****, salvo que las partes convengan otra cosa.*

En todo momento cualquier interesado podrá pedir que se repita el oficio de cancelación de medidas cautelares.
(...)

PARÁGRAFO. Lo previsto en los numerales 1, 2, ***5****, 7 y 10 de este artículo también* ***se aplicará para levantar la inscripción de la demanda***». (Resalta la Sala).

Bajo ese entendido, lo que el legislador prevé cuando se levanta la inscripción de la demanda, es la condena de oficio o a solicitud de parte en costas y perjuicios a quienes pidieron la medida, cuando sus pretensiones son desestimadas.

Lo anterior significa, que la condena instada por los censores, tiene cabida, porque el artículo 597 *ejusdem* así lo contempla, para procesos como el que aquí nos ocupa, a más, que para el decreto de la cautela decretada, se fijó como requisito, la prestación de una caución con el único fin de responder por tales rubros, derivados de su práctica.

Por ello, en esta puntual temática se dará viabilidad al alegato de los demandados reconvinientes, lo que traerá como consecuencia, la modificación del ordinal 5° de la parte resolutiva del fallo opugnado, en lo que se refiere a la imposición de la condena por costas y perjuicios

Continuando con el segundo reparo, que tiene que ver con ***ii)*** la falta de condena en costas a la contraparte, aun cuando fueron desestimadas sus pretensiones, es cierto que los recurrentes también resultaron vencidos en la contienda, pues las pretensiones elevadas a través de su demanda de reconvención no se acogieron.

Empero, en concomitancia con el anterior ítem analizado, también se prosperará este motivo de alzada, pues guardan directa relación las costas y los perjuicios por levantamiento de la medida cautelar, y resultan procedentes -se repite- según lo normado en el artículo 597 *ibidem*.

Ahora bien, trasladándonos al tercer ítem objeto de desacuerdo, relacionado con ***iii)*** la falta de congruencia de la sentencia, en tanto si consideró que las probanzas allegadas por el demandante inicial eran «*falsas*», debió declararse probada la única excepción de mérito propuesta

«*temeridad y mala fe*», y sancionar a éste, conforme lo preceptúan los cánones 79 a 81 del C.G.P.

En este punto, debe advertir la Sala, que de la lectura detenida de la sentencia objeto de las réplicas verticales, no se encuentra aparte alguno en el que el operador judicial de primera instancia, hubiere calificado alguno de los medios de convicción arrimados por el señor Leonidas, de «*falsos*», por lo que se dejan sin piso los alegatos de los demandados, acerca de la falta de congruencia de la sentencia, al no declarar probado el comentado medio exceptivo, pues, en momento alguno, el juez se expresó de esa manera.

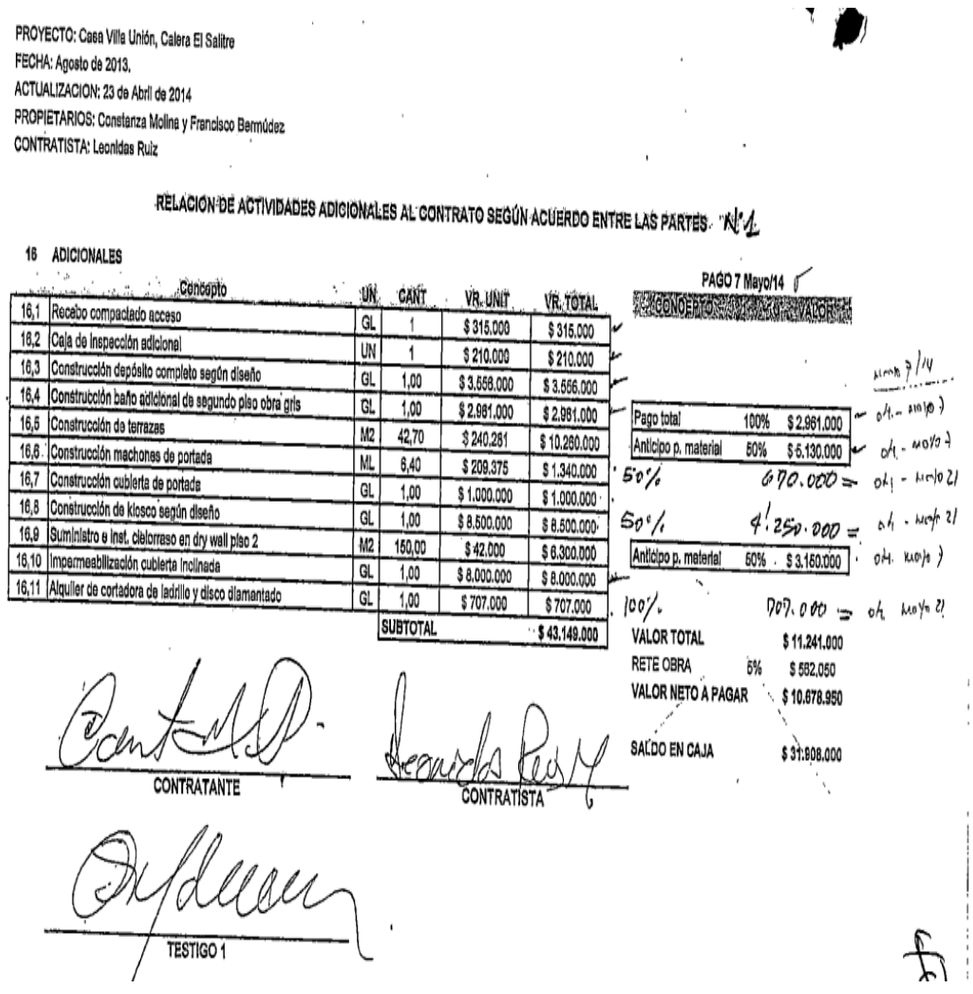
Con todo, el hecho que se determine que las pruebas allegadas no lograron el cometido para el fin que fueron aportadas, o que, sobre uno y otro punto, hay orfandad probatoria, no significa, *per se*, que tales situaciones sean indicio de una mala fe de quien no salió victorioso en su *petitum* por no demostrar los dichos en los que lo fundó.

En suma, en el *sub examine,* no se encuentra ni someramente demostrado, ninguno de los casos que el legislador estableció para presumir la temeridad ni mala fe, en el artículo 79 *ejusdem* y, -se repite a riesgo de fatigar-, el simple hecho de la desestimación de las pretensiones de una u otra parte, no se traduce automáticamente en la configuración de «*una manifiesta carencia de fundamento legal*» (numeral 1, *ibídem*) o que el proceso se hubiere adelantado «*para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos*» (numeral 3, *Cit*), es más, los apelantes manifiestan que sí hay probanzas sobre ese particular, pero no refieren específicamente cuáles.

De otra parte, y acerca de la queja relacionada con ***iv)*** la viabilidad del cobro de la cláusula penal por parte de los demandados reconvinientes, porque, supuestamente, de las pruebas dan cuenta de las imperfecciones de las obras, de entrada se advierte que la Sala no observa que las deducciones del *a quo* y la jurisprudencia que al caso aplicó no estén acordes con la realidad procesal, bajo el entendido que, de acuerdo con la

cláusula décima del contrato de obra inicial, en caso de existir cambios en lo allí encomendado, el contratista estaba en la obligación de ejecutarlos; empero, si las mismas afectaban el plazo primigeniamente estipulado -como aquí ocurrió según se extracta de los interrogatorios-, se debía «*establecer de mutuo acuerdo el nuevo plazo de entrega final de la obra*».

Ergo, si los contratantes asintieron en que, ante la necesidad de nuevas construcciones, se suscribieran tres adiciones, y según la cláusula acabada de citar, en las mismas **debían**, si o si, fijar el nuevo plazo de entrega, se concluye el incumplimiento bilateral de esa obligación contractual que era «*ley para las partes*», en tanto que, en los convenios subsecuentes, ningún término se instituyó a efectos de poder determinar cuándo debían finalizarse las obras. Veamos:



PROYECTO: Casa Villa Unión, Calera El Salitre
FECHA: Agosto de 2013,
ACTUALIZACION: 23 de Abril de 2014
PROPIETARIOS: Constanza Molina y Francisco Bermúdez
CONTRATISTA: Leonidas Ruiz

RELACIÓN DE ACTIVIDADES ADICIONALES AL CONTRATO SEGÚN ACUERDO ENTRE LAS PARTES. N°1

16 ADICIONALES

	Concepto	UN	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
16,1	Recebo compactado acceso	GL	1	$ 315.000	$ 315.000
16,2	Caja de inspección adicional	UN	1	$ 210.000	$ 210.000
16,3	Construcción depósito completo según diseño	GL	1,00	$ 3.556.000	$ 3.556.000
16,4	Construcción baño adicional de segundo piso obra gris	GL	1,00	$ 2.961.000	$ 2.961.000
16,5	Construcción de terrazas	M2	42,70	$ 240.261	$ 10.260.000
16,6	Construcción machones de portada	ML	6,40	$ 209.375	$ 1.340.000
16,7	Construcción cubierta de portada	GL	1,00	$ 1.000.000	$ 1.000.000
16,8	Construcción de kiosco según diseño	GL	1,00	$ 8.500.000	$ 8.500.000
16,9	Suministro e inst. cielorraso en dry wall piso 2	M2	150,00	$ 42.000	$ 6.300.000
16,10	Impermeabilización cubierta inclinada	GL	1,00	$ 8.000.000	$ 8.000.000
16,11	Alquiler de cortadora de ladrillo y disco diamantado	GL	1,00	$ 707.000	$ 707.000
			SUBTOTAL		$ 43.149.000

PAGO 7 Mayo/14

CONCEPTO		VALOR
Pago total	100%	$ 2.961.000
Anticipo p. material	50%	$ 5.130.000
Anticipo p. material	50%	$ 3.150.000
VALOR TOTAL		$ 11.241.000
RETE OBRA	5%	$ 562.050
VALOR NETO A PAGAR		$ 10.678.950
SALDO EN CAJA		$ 31.908.000

CONTRATANTE

CONTRATISTA

TESTIGO 1

PROYECTO: Casa Villa Unión, Calera El Salitre
FECHA: Junio 17 de 2013.
PROPIETARIOS: Constanza Molina y Francisco Bermúdez
CONTRATISTA: Leonidas Ruiz

RELACION DE ACTIVIDADES ADICIONALES AL CONTRATO SEGÚN ACUERDO ENTRE LAS PARTES N°2

16 ADICIONALES

	Concepto	UN	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	
16.12	Lechada concreto muros	M2	12.2	$ 52,000	$ 634,400	– mayo 21
16.13	Vigas bajo muros	ML	25.2	$ 34,500	$ 869,400	– mayo 21
16.14	Mamposteria bajo muros fachada	ML	25.20	$ 21,500	$ 541,800	– mayo 21
16.15	Relleno de piso acceso cocina	GL	1.00	$ 140,000	$ 140,000	
16.16	Muros para jacuzzi baño principal	GL	1.00	$ 180,000	$ 180,000	– mayo 21
16.17	Placa y muros para cilindro concreto y placa de cubierta - 60	GL	1.00	$ 500,000	$ 500,000	
16.18	Alero perimetral valor total	GL	1.00	$ 6,952,125	$ 6,952,125	– mayo 21 – de 1'500.000
16.19	Dinteles sobre puertas	UN	8.00	$ 66,500	$ 532,000	
16.20	Prefabricados en concreto salida cocina	GL	1.00	$ 416,000	$ 416,000	
16.21	Suministro e instalación de gas para calentador, estufa y horno	GL	1.00	$ 910,000	$ 910,000	
16.22	Buitrones para 2 chimeneas	GL	1.00	$ 850,000	$ 850,000	
			SUBTOTAL		$ 12,525,725	
			RETE OBRA	10%	$ 1,252,573	
			VALOR NETO A PAGAR		$ 11,273,153	

Leonidas Ruiz M
CONTRATISTA

CONTRATANTE

TESTIGO 1

46 46

La Calera Cundinamarca Agosto 8 de 2014

Proyecto: Casa Villa Unión, Calera el Salitre.

Propietarios: Constanza Molina y Francisco Bermúdez

Contratista: Leónidas Ruiz

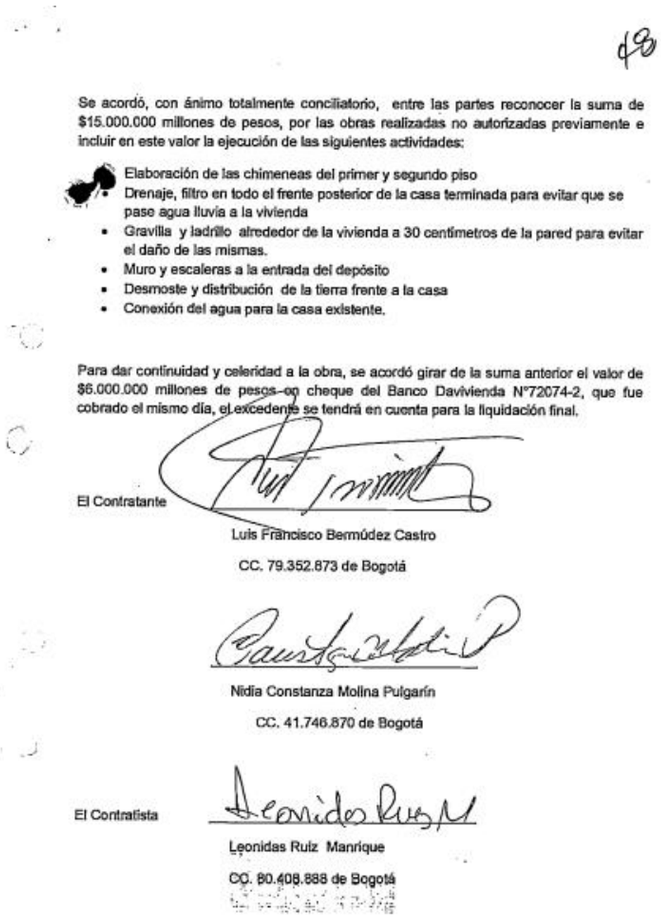
RELACION ACUERDO N° 3 y ACTIVIDADES ADICIONALES AL CONTRATO SEGÚN ACUERDO CELEBRADO ENTRE LAS PARTES EL 8 DE AGOSTO DE 2014

Se revisó el contrato de obra, así como los acuerdos 1 y 2, determinando que sin regirse por lo descrito en el contrato, el contratista Sr. Leónidas Ruiz, manifiesta haber realizado obras adicionales, estas fueron analizadas por la Arquitecta Claudia Molina supervisora del contrato y tasadas en $6.969.341 pesos. El contratista solicita para finiquitar la obra sean reconocido el valor propuesto por él a la supervisora.

No obstante, haber desconocido lo contenido en el contrato en las clausulas Segunda, Decima en las que se manifiesta:

"**SEGUNDA – ALCANCE DEL OBJETO:** Para el desarrollo del objeto del contrato se suscribe un listado de Actividades de Obra, el cual hace parte integral de este contrato y se anexa al mismo, el cual contiene la descripción, cantidades y precios pormenorizados contratados por LOS CONTRATANTES al CONTRATISTA. Sin embargo, se aclara que el valor total contratado es el resultante del precio global de construcción en obra gris por la cantidad total a construirse en metros cuadrados. **Cualquier actividad no descrita en el referido listado se deberá acordar entre las partes en cuanto a su especificación, cantidad y precio, previamente a su ejecución y constituirá actividad adicional a éste, debiéndose liquidar el precio final como resultante de la multiplicación entre la cantidad ejecutada y el precio unitario acordado entre las partes o como precio global acordado entre las partes.**

DECIMA – ESPECIFICACIONES. EL CONTRATISTA se ceñirá a las especificaciones que entreguen los CONTRATANTES a través de su SUPERVISOR. En cualquier momento durante la ejecución del contrato, los CONTRATANTES podrán ordenar por conducto de su SUPERVISOR, los cambios que considere necesarios en las especificaciones y el CONTRATISTA estará obligado a ejecutar dichas obras de acuerdo a la modificación, a los precios unitarios establecidos de común acuerdo. Sin embargo, si estos cambios afectan el plazo del contrato, se deberá establecer de mutuo acuerdo el nuevo plazo de entrega final de obra. Si los cambios afectan el precio, el nuevo precio será establecido de común acuerdo entre las partes. **Cuando a juicio del CONTRATISTA sea conveniente variar las especificaciones, someterá las variaciones al SUPERVISOR explicando las causas que justifican dichas variaciones. Si las mismas no son aprobadas, el CONTRATISTA se someterá a las especificaciones acordadas originalmente.**"



Se acordó, con ánimo totalmente conciliatorio, entre las partes reconocer la suma de $15.000.000 millones de pesos, por las obras realizadas no autorizadas previamente e incluir en este valor la ejecución de las siguientes actividades:

- Elaboración de las chimeneas del primer y segundo piso
- Drenaje, filtro en todo el frente posterior de la casa terminada para evitar que se pase agua lluvia a la vivienda
- Gravilla y ladrillo alrededor de la vivienda a 30 centímetros de la pared para evitar el daño de las mismas.
- Muro y escaleras a la entrada del depósito
- Desmonte y distribución de la tierra frente a la casa
- Conexión del agua para la casa existente.

Para dar continuidad y celeridad a la obra, se acordó girar de la suma anterior el valor de $6.000.000 millones de pesos en cheque del Banco Davivienda N°72074-2, que fue cobrado el mismo día, el excedente se tendrá en cuenta para la liquidación final.

El Contratante

Luis Francisco Bermúdez Castro

CC. 79.352.873 de Bogotá

Nidia Constanza Molina Pulgarín

CC. 41.746.870 de Bogotá

El Contratista

Leonidas Ruiz Manrique

CC. 80.408.888 de Bogotá

Puestas de ese modo las cosas, tal y como lo ha enseñado la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, según el precedente acotado en la sentencia analizada (SC 1662 de 2019), imposible resultaba reclamar por parte los aquí contendientes, la indemnización de perjuicios o el pago de la cláusula penal, circunstancia que está intrínseca y directamente relacionada con el último de los reparos formulados por Luis Francisco y Nidia Constanza, porque en últimas, demostrados o no aquéllos, no estaban legitimados para solicitarlos al ser **contratantes incumplidos**.

Súmese a lo anterior, que analizadas las vicisitudes esbozadas por ambos extremos, puede decirse que ***i)*** no hubo queja alguna de los contratantes cuando Leonidas desarrolló tanto la obra inicial como las adicionales, pues contundentes fueron los primeros en señalar en la audiencia inicial, que la obra, a simple vista, había quedado muy bien y que según la interventora que ellos mismos nombraron -la arquitecta Claudia

Amparo Molina-, todo había quedado perfecto, máxime cuando ella, estaba encargada de revisar cada una de las construcciones apenas se iban culminando y; ***ii)*** que en efecto el señor Luis Francisco no le devolvió a Leonidas los $14’224.900 que le fueron retenidos por garantía, porque el verdadero problema se presentó cuando después de terminadas las obras, empezaron las inundaciones en la casa, dinero que en últimas pudo utilizar para los daños alegados.

Con todo, como pretéritamente se acotó, aun cuando los demandados aceptaron el hecho de tal retención, **no podemos olvidar que ningún acta de entrega fue suscrita por los extremos contratantes**, por lo que más allá de los dichos de aquellos relativos a que para prever cualquier imperfecto que pudiera presentarse dentro de los cuatro meses siguientes a la finalización se retuvo tal valor, no puede ordenarse ninguna devolución, pues no hay prueba contundente de la fecha de terminación de las obras a satisfacción.

7.5. Corolario, solo se modificará el ordinal quinto de la parte resolutiva del fallo impugnado, en el sentido de condenar en costas y perjuicios al demandante principal, por el levantamiento de la medida cautelar que pidió en contra de los demandados, de conformidad a lo normado en los artículos 590 y 597, num. 5, 10 y parágrafo del C.G.P.

En lo demás, se confirmará la sentencia apelada y se condenará en costas al señor Leonidas Ruiz Manrique (demandante principal), por la tramitación de esta instancia, ante la prosperidad parcial de la alzada de su contraparte, de conformidad con el artículo 365 num. 1.

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

8. RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR el ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2022, por el Juez 25 Civil del Circuito de Bogotá D.C., el cual quedará de la siguiente manera:

«***QUINTO: CONDENAR*** *en costas y perjuicios al demandante –demanda principal-, en aplicación de lo consagrado en los preceptos 590 y 597 del Código General del Proceso, por mediar levantamiento de la inscripción de la demanda como consecuencia de la denegación de sus pretensiones».*

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás, el fallo impugnado.

TERCERO: CONDENAR en costas de esta instancia al demandante – demanda principal, por haber prosperado parcialmente las aspiraciones de su contendiente. La Magistrada ponente fija como agencias en derecho, la suma de $1’000.000.

CUARTO: DEVOLVER el asunto al juzgado de origen, en firme la presente providencia por la Secretaría de la Sala Civil.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Los Magistrados,

MARTHA ISABEL GARCÍA SERRANO
(025 2019 00656 02)

JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS
(025 2019 00656 02)

RUTH ELENA GALVIS VERGARA
(025 2019 00656 02)

Firmado Por:

Martha Isabel Garcia Serrano
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 009 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Jorge Eduardo Ferreira Vargas
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Dirección Ejecutiva De Administración Judicial
División De Sistemas De Ingenieria
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Ruth Elena Galvis Vergara
Magistrada
Sala Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **105fda77f6911822801fd3f40577c939d1af44076c29d4f2839210cb2d588af3**
Documento generado en 29/02/2024 04:53:29 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

Proceso N.°	11001310301920150069604
Clase:	VERBAL
Demandante:	NORIA S.A., cesionaria CALAFATE S.A.S.
Demandadas:	BLACKROCK S.A.S., THE ÉLITE FLOWER S.A.S. y YELLOW ROCK S.A.S.

De conformidad con el artículo 121 del Código General del Proceso, se prorroga, por el término de seis (6) meses, la competencia para emitir decisión en esta instancia.

La anterior determinación no admite recurso en los términos de la disposición en cita.

NOTIFÍQUESE

El magistrado

MANUEL ALFONSO ZAMUDIO MORA
(firma electrónica)

Firmado Por:
Manuel Alfonso Zamudio Mora
Magistrado
Sala 005 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **7fb262b17f156f9514ea0dcdfbb440f1a485b50bcf3e4d6bfee6cc8e30f9e2f1**
Documento generado en 29/02/2024 10:05:18 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.

Sala Civil de Decisión

Magistrada Sustanciadora

SANDRA CECILIA RODRÍGUEZ ESLAVA

CLASE DE PROCESO	Verbal
DEMANDANTE	Nancy Vergara Villamil
DEMANDADO	Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María
RADICADO	11001 31 03 016 2017 00313 01
PROVIDENCIA	Interlocutorio 16
DECISIÓN	Declara nulidad
FECHA	Veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Sería del caso resolver sobre la admisión del recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia de 1º de diciembre de 2023, proferida por el Juzgado 17 Civil del Circuito de esta ciudad, de no ser porque se advierte un motivo que invalida la actuación de acuerdo con lo siguiente:

En la valla fijada se incluyó un número errado de folio de matrícula inmobiliaria que identifica el bien, pues se precisó que corresponde al "50 S 0000-00000"[1], cuando el correcto era "50S-200002"[2]. Adicionalmente, se indicó que el proceso correspondía al "11001310303**17**20170031300" [3], mientras que su consecutivo obedece a 11001310303**16**20170031300 que se adelanta en el Juzgado 17 Civil del Circuito de esta ciudad.

[1] PDF 007CuadernoPrincipalFolio452a510, JGP 004FotoVallaTomadaInspeccion.
[2] PDF 007CuadernoPrincipalFolio452a510; Fl 33 y JGP 004FotoVallaTomadaInspeccion.
[3] PDF 007CuadernoPrincipalFolio452a510; Fl. 46 y JGP 004FotoVallaTomadaInspeccion.

De igual forma, en la publicación efectuada en el Nuevo Siglo se aprecia que fueron citadas todas las personas indeterminadas y aquellas que crean tener derecho sobre el inmueble que se identifica con el folio de matrícula inmobiliaria "50 S 00000000"[4]. A su vez, se indicó que el auto a notificar era aquel que se profirió el 2 de agosto de 2019 y el número de radicación del trámite judicial: "17-2017-0313"[5].

Añádase a lo anterior, que no se hizo pública la información consignada en el Registro Nacional de Procesos de Pertenencia en tanto que en la consulta aparece que "Se visualizan proceso(s) no disponible(s) para consulta, diríjase al despacho judicial correspondiente":



[4] PDF EMPLAZAMIENTO periódico el siglo y 003CuadernoPrincipalFolio100a321; fl. 395.
[5] PDF EMPLAZAMIENTO periódico el siglo y 003CuadernoPrincipalFolio100a321; fl. 395.

Y en los registros incorporados en el proceso se aprecia etiquetada la casilla “privado”:



Por si lo anterior fuere poco, no aparece relacionada en aquella base de datos información precisa y suficiente del predio objeto de usucapión





En ese orden, resulta incontestable que esa situación pudo haber impedido el acceso a la información por parte de las personas indeterminadas, a quienes se les hizo el llamado para concurrir al proceso.

Lo anterior contraviene lo previsto en los literales f) y g) del numeral 7º del artículo 375 del C.G.P., atinente al emplazamiento de todas las personas que se crean con derechos sobre el inmueble para que concurran a la actuación procedimental, la identificación del predio a usucapir y la inclusión del contenido de la valla en el Registro Nacional de Procesos de Pertenencia.

Exigencias que resultan relevantes por tratarse de este proceso declarativo que exige, imperativamente, el debido enteramiento de los sujetos que ostenten alguna prerrogativa sobre el bien objeto de la pretensión, pues en el evento que la sentencia acceda a las pretensiones del actor sus efectos serán *erga omnes.*

Bajo ese tenor, es preciso advertir que esa omisión se erige en una indebida notificación de quienes debían ser citados, la cual no puede ser subsanada con la intimación del curador *ad litem*, en razón a que el único legitimado para alegarla es el afectado que, en este caso, sería el ausente, lo cual convierte en insaneable el yerro en su emplazamiento y exige del juez su declaración de oficio.

Así lo ha puntualizado la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,

> *"'Concretamente en el caso de la nulidad por indebida notificación o emplazamiento de personas indeterminadas, 'sólo podrá alegarse por la persona afectada' (Art. 143 ib.), es decir, por las personas indebidamente notificadas o emplazadas; en el punto, ha dicho la Corte que '...en lo atañedero a la causal 9 del artículo 140 del C. de P. C., se tiene que si bien es cierto que no puede ser puesta en conocimiento para que los indebidamente citados la convaliden, lo que la convierte virtualmente en insubsanable, no lo es menos que ello no significa que cualquiera de las partes resulte habilitada para alegarla, puesto que en el punto se mantiene inquebrantable la exigencia conforme a la cual sólo puede proponerla quien se encuentre legitimado para ello, es decir, aquel que no hubiere sido citado al proceso, sin perjuicio de que el juez de instancia la decrete dentro de las oportunidades que para ello le otorga la ley' (Casación Civil de 28 de abril de 1995, reiterada, entre otras, por la sentencia del 22 de febrero de 2000).*
>
> *Débese precisar en todo caso, para evitar malos entendidos, que cuando la Corte ha calificado de "virtualmente insubsanable" la nulidad surgida por el indebido emplazamiento de personas indeterminadas, ha querido significar con ello que, por razones obvias, no le es dado al juez, una vez advierta su existencia, ponerla en conocimiento de los afectados, en los términos del art.145 Código de Procedimiento Civil, para que estos se pronuncien sobre su saneamiento. No quiere decirse, por consiguiente, que frente a quien encontrándose comprendido en el llamamiento edictal indebidamente realizado comparece al proceso sin alegar la irregularidad, no se surta el saneamiento, pues, por el contrario, como claramente lo señalara esta Sala en providencia del 8 de mayo 1992, "se trata de una nulidad esencialmente saneable como que es precisamente un motivo anulatorio que mira más bien al interés*

del indebidamente notificado y éste en consecuencia perfectamente puede convalidar expresa o tácitamente"[6].

En consecuencia, dado que se configura la causal prevista en el numeral 8º del precepto 133 del C.G.P., por no haberse practicado en debida forma el emplazamiento de las personas indeterminadas que deben ser citadas como parte, cuando la ley así lo prevé, se impone su declaratoria de oficio a partir de la sentencia proferida en primera instancia, inclusive. Se aclara que las pruebas practicadas dentro de la actuación conservan su validez respecto de quienes tuvieron la oportunidad de controvertirlas.

Para tal efecto, se ordenará la remisión del expediente al Juzgado de origen a fin de que sea enmendada la incorrección advertida.

NOTIFÍQUESE,

SANDRA CECILIA RODRÍGUEZ ESLAVA
Magistrada

Firmado Por:
Sandra Cecilia Rodriguez Eslava
Magistrada

[6] Sentencia del 15 de febrero de 2001, exp. 5741.

Sala Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ac829d27e489d9a306898c98a3d2834110036d82838d24b02396c24888e38ac6**

Documento generado en 29/02/2024 04:23:20 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.
SALA CIVIL

Bogotá, D.C., veintiocho de febrero de dos mil veinticuatro

Proceso:	Verbal
Demandante:	José Luis Rueda Camargo y otros
Demandado:	Vicente Ortiz Álvarez
Radicación:	11001310301120190071504
Procedencia:	Juzgado 11 Civil del Circuito de Bogotá
Asunto:	Apelación sentencia

Previo a resolver lo que en derecho corresponda sobre la solicitud de desistimiento de la demanda y terminación del proceso presentada por el apoderado judicial del extremo demandante, se precisa aclarar lo pedido:

1. En el término de la ejecutoria de este proveído, deberá el memorialista aclarar si desiste de las pretensiones de la demanda en los términos del artículo 314 de la Ley 1564 de 2012 o si lo que busca, es la terminación del proceso por transacción, tal como lo consagra el precepto 312 *ibídem*.

Tenga en cuenta que, aunque se allegó memorial manifestando el desistimiento de la demanda y la terminación del proceso, también se arrimó contrato de transacción suscrito por los apoderados de los extremos en conflicto, lo que no permite tener claridad sobre la forma de terminación del proceso que se pretende, máxime, cuando cada una de ellas tiene formalidades y consecuencias jurídicas disímiles.

2. Con todo, al margen de la figura procesal por la que se opte, deberá darse estricto cumplimiento a los requisitos que consagran las normas antes referidas y que regulan cada uno de esos actos jurídicos, bien sea la transacción aportando los comprobantes respectivos, ora el desistimiento de las pretensiones.

Decisión

Tribunal Superior de Bogotá D.C.

Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., Sala Civil, RESUELVE:

1. REQUERIR al memorialista para que en el término de ejecutoria de este proveído, atendiendo lo advertido en el presente auto, precise la forma de terminación anormal del proceso que invoca.

Notifíquese,

RUTH ELENA GALVIS VERGARA
Magistrada

Tribunal Superior de Bogotá D.C.

Firmado Por:
Ruth Elena Galvis Vergara
Magistrada
Sala Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **4eb6c31827e0cb212087d94d665ba777f99ae46b5f165171c99e3550c784f17b**
Documento generado en 28/02/2024 05:04:28 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA DE DECISIÓN CIVIL

Bogotá D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación	110013103011-2021-00291-01
Proceso	Expropiación
Asunto	Apelación sentencia
Demandante	Agencia Nacional de Infraestructura - ANI
Demandado	Álvaro Ignacio Echeverría Ramírez
Decisión	Confirma sentencia

Magistrado Ponente
JAIME CHAVARRO MAHECHA

Discutido y aprobado en Sala de Decisión del 21 de febrero de 2024

Se decide el recurso de apelación formulado por el demandado contra la sentencia proferida el 11 de julio de 2023 por el Juzgado 11 Civil del Circuito de Bogotá, en el proceso de expropiación de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI- contra ÁLVARO IGNACIO ECHEVERRIA RAMÍREZ.

I. ANTECEDENTES

1. Síntesis de la demanda

Se solicitó[1] que se decrete la expropiación del área de terreno equivalente a 15426,00 metros cuadrados de un predio rural de

[1] Ver folios 1 a 3 del archivo *"01. DEMANDA DE EXPROPIACIÓN CON ANEXOS PHPV-1-033"* de la carpeta *"CuadernoUno"* de *"PrimeraInstancia"* del expediente digital.

mayor extensión, denominado lote No. 9, identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 062-27943 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de El Carmen de Bolívar, ubicado en la Vereda/Barrio El Carmen del Municipio de El Carmen de Bolívar, Departamento de Bolívar.

2. Fundamentos fácticos

En el libelo[2] se afirmaron los hechos que a continuación se sintetizan.

2.1. El terreno perseguido se requiere para llevar a cabo el proyecto vial *"Puerta de Hierro-Palmar de Varela y Carreto-Cruz del Viso, Unidad Funcional 1, sector Variante El Carmen de Bolívar"*.

2.2. Los linderos específicos de la franja a expropiar son: por el norte: en longitud de 93.38 metros con Sociedad de Comercialización Internacional Tairona S.A. (R4-R8); por el sur: en longitud de 113.11 metros con carretera que de El Carmen conduce a Zambrano (R25-R-26) Ella Cecilia Nadaff Narváez (R26-R29) y Agencia Nacional de Infraestructura-ANI (062-38412), (062-27945), (062-27946), (062-27947), (062-27948) del (P47-P53); por el oriente: en longitud de 183.27 con Instituto Colombiano Agropecuario ICA (P53-P55) (P55-P1) (P1-P2), (R74-R75), (R75-R1) y (R1-R4); por el occidente: en longitud de 274.71 metros con David Enrique Ochoa Suárez, Yoni Bartolo Ochoa Suárez (R8-R25).

3. Trámite procesal y posición de la convocada

El 8 de julio de 2021 el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de El Carmen de Bolívar rechazó de plano la demanda por falta de competencia y ordenó remitir el expediente a los Juzgados

[2] Ver folios 3 a 19 ídem.

Civiles del Circuito de Bogotá[3], correspondiéndole su conocimiento al 11, que el 27 de agosto de dicha anualidad la admitió[4] y de ello se notificó al demandado, quien manifestó[5] que *"(…) se opone únicamente en lo que tiene que ver con el valor asignado al metro cuadrado de su propiedad, pues este dista de la realidad fáctica, violentando el principio de igualdad y el debido proceso"*, como quiera que el avalúo presentado por la actora se fundó en el Acuerdo 004 del 8 de septiembre de 2014, emanado del Concejo Municipal de El Carmen de Bolívar, que está viciado de nulidad por *"haber sido expedido con infracción de las normas en que debería fundarse, en forma irregular, mediante falsa motivación y con desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió, además de que no existen documentos que justifiquen el trámite para la modificación excepcional del Plan Básico de Ordenamiento Territorial"*.

En respaldo de su disertación allegó el avalúo realizado por la lonja de Propiedad Raíz de Sucre[6].

4. Sentencia de primer grado

La juzgadora *a quo* decretó la expropiación por motivos de utilidad pública e interés social de la franja correspondiente; tuvo como valor de la indemnización a favor de Echeverría Ramírez, conforme con el avalúo allegado con la demanda, la suma de $675.749.707, *"los cuales fueron entregados al demandado en proporción de 92.13%, quedando a órdenes del Juzgado el 7.87% restante"*; ordenó la cancelación de los gravámenes, embargos e inscripciones que afecten el bien y advirtió que ejecutoriada la sentencia se resolverá sobre la entrega definitiva del predio y, efectuada esta, se dispondrá el registro del acta de la diligencia y del

[3] Ver archivo *"02. Auto Rechazando Por Competencia 2020-00057""* ídem.
[4] Ver archivo *"13AutoAdmiteDemandaExpropiación2021-291"* ídem.
[5] Ver folios 5 a 20 del archivo *"16AcusoRecibidoContestacióndemandaPorCuartaVez"* ídem.
[6] Ver folios 162 a 217 del archivo *"14AcusoRecibidoContestaciónDemanda"* ídem.

fallo para que sirvan de título de dominio al demandante y se determinará lo atinente a la entrega del dinero consignado a favor del encausado por concepto de la indemnización y que está pendiente de pago.

Para decidir de ese modo, expuso:

Para que proceda la expropiación deben concurrir tres elementos: *i)* la existencia de una ley que defina cuáles son los motivos de utilidad pública o de interés que le abren paso; *ii)* la intervención de la jurisdicción para que por medio de sentencia se determine su procedencia en un caso concreto; *iii)* el pago de la indemnización previa que resarza los perjuicios que se causan al particular con la extinción del dominio en favor del estado.

En el de marras se encuentran reunidos los elementos axiológicos aludidos, puesto que, apoyada en la Resolución 20216060002875 del 18 de febrero de 2021, expedida por la ANI, la demandante buscó adquirir por esta vía el inmueble de propiedad del demandado que fuese declarado de utilidad pública e interés social.

Con la demanda se aportaron, entre otras, el folio de matrícula inmobiliaria respectivo, con el que se advierte la titularidad del derecho real de dominio en el extremo pasivo, la aludida resolución que dispuso la expropiación, *"la constancia de la consignación del saldo del valor en el que fue avaluado el bien, efectuada ante el Banco Agrario y a órdenes de esta sede judicial, pues el 92.13% del dicho avalúo ya fue desembolsado al demandado en virtud de la promesa de compraventa suscrita el 19 de mayo de 2020 y su otrosí suscrito el 23 de octubre de la misma anualidad"*.

El demandado no se opuso a las pretensiones, pero sí al valor estimado por metro cuadrado por la activa, razón por la que aportó

el dictamen pericial rendido por Néstor Enrique Sánchez Quintana, adscrito a la Lonja de Propiedad Raíz de Sucre.

Tal experticia se comparó con la presentada por la ANI, y se avistó que en aquel se categorizó el bien como urbano, mientras que en este como rural; además, el *"método de comparación de mercado"* en cada una fue diferente, ya que la primera se efectuó *"en relación con los inmuebles segregados del lote de mayor extensión"* y se sustentó en la Ley 388 de 1997, el Decreto 172 de 1998 y la Resolución 620 de 2008 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y, el segundo, *"con dos ofertas [predios algo lejanos del punto]"* y con base en dichas normativas y los Acuerdos Nos. 004 de 8 de septiembre de 2014, mediante el que se modificó el perímetro urbano y 008 de 2002, a través del que se adoptó el Plan Básico de Ordenamiento territorial PBOT, y que establece el lote No. 9 como rural, emitidos por el Concejo Municipal de El Carmen de Bolívar, los cuales, de conformidad con el artículo 88 del Código de Procedimiento Contencioso Administrativo, se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la jurisdicción respectiva, tal como lo ha referido la Corte Constitucional (T-136 de 2019) al analizar el principio de seguridad jurídica.

El artículo 60 de la Ley 388 de 1997 estatuye que la adquisición o expropiación de inmuebles debe efectuarse acorde con los objetivos y usos del suelo establecidos en los planes de ordenamiento territorial; el artículo 61 ídem, impone que el precio será igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones o por peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones correspondientes, según lo determinado por el Decreto-Ley 2150 de 1995 y para establecer el avalúo se tendrá en cuenta la reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir y, en particular, con su destinación económica.

El dictamen pericial que arrimó la ANI se ajustó a las normas y jurisprudencia mencionadas, dado que cuando se hizo tuvo en cuenta la reglamentación vigente para la época, es decir, el plan de ordenamiento territorial del Municipio y el uso del suelo, *"la cual, hasta el momento de emisión de esta sentencia, no había sido nulitada por ningún juez de la república o suspendida en virtud de una medida cautelar de índole judicial y, por tanto, se encuentra revestida de la presunción de legalidad"*.

El Consejo de Estado ha señalado que el precio indemnizatorio está amparado por la presunción de legalidad al estar incorporado al acto administrativo que ordena la expropiación y el interesado en desvirtuarla debe probar el error o la incorrección del avalúo, lo que no acaeció en el *sub judice*, pues, aunque el demandado allegó dictamen pericial para ese empeño, se ordenó la citación del perito (Num. 7 art. 399 CGP) para surtir la contradicción, pero no compareció, razón por la que se aplicó lo reglado por el artículo 228 del compendio procesal.

El experto que elaboró el dictamen de la actora acudió a la audiencia, acreditó su idoneidad, explicó la normatividad y metodología en que se apoyó y, a partir de ello, se conoció el origen de la disparidad entre los avalúos obrantes en el expediente, esto es, por la categorización del predio que se hizo en uno y otro, como rural o urbano. De allí, que el valor de la indemnización se tasó en los términos señalados en la experticia de la activa.

5. El recurso de apelación

La demandante planteó y sustentó los siguientes reparos:

5.1. El Juzgado trasgredió los derechos al debido proceso, defensa y contradicción del demandado, pues *"no contó con la*

posibilidad de contar con un profesional del derecho que defendiera sus intereses en la audiencia que se llevó a cabo el 07 de julio de 2023 y de cuya celebración se enteró el jueves 13 de julio de 2023", pues sus anteriores apoderados renunciaron ante la imposibilidad de cubrir sus honorarios.

5.2. Respecto al Acuerdo del Concejo Municipal de El Carmen de Bolívar No. 004 del 8 de septiembre de 2014 señaló:

i) En el plenario aparece la sentencia dictada por el Juzgado 2° Administrativo de Cartagena con la que decretó la nulidad de ese Acuerdo, la cual no está en firme, debido a que el municipio la recurrió y de ello conoce el Tribunal Administrativo de Bolívar.

ii) La Policía Judicial emitió una experticia en la que da cuenta de los delitos cometidos con la expedición de dicho acuerdo.

iii) Está en el expediente el Decreto de la Alcaldía de la referida municipalidad con No. CTC 040 de 4 de marzo de 2020, en el que se consignó que *"del acuerdo 004 de 2014, no se encontraron en los archivos del Concejo municipal y del municipio documentos que permitan concluir que hay diferencia entre las coordenadas y la cartografía de dicho acuerdo"*.

5.3. Se omitió la práctica del *"testimonio de los peritos que emitieron el dictamen presentado"* por el demandado.

6. La parte demandante se pronunció frente al recurso de su opositor, para pedir que sea desechado.

II. CONSIDERACIONES

1. Concurren en este asunto los presupuestos procesales traducidos en competencia del juez, demanda en forma, capacidad

procesal y para ser parte, sin que se advierta causal de nulidad que pueda comprometer la validez de lo actuado, por manera que se procede a resolver el asunto en referencia, en orden a lo cual se precisa que, por mandato del artículo 328 del Código General del Proceso, la actividad del Tribunal se concretará a los precisos reparos debidamente sustentados por la impugnante.

2. Análisis del caso concreto

Conocidos los puntos de inconformidad, se advierte su infertilidad, por las razones que pasan a exponerse.

El demandado alegó, en principio, que se trasgredieron sus derechos al debido proceso, defensa y contradicción al realizarse la audiencia el 23 de julio de 2023, pese a que para esa calenda no tenía apoderado judicial; sin embargo, como es evidente, con tal disquisición no atacó la sentencia, no reprochó sus fundamentos o lo allí determinado, sino que enfiló su queja contra una actuación diferente, esto es, la de seguir el trámite procesal sin la comparecencia de Echeverría Ramírez y su apoderado para la litis, la cual no es susceptible de ser analizada por el *ad quem*, como quiera que no fue recurrida oportunamente y quedó en firme, por lo que, sin duda, fracasa el argumento de censura.

Pese a lo anterior, es importante mencionar que la juzgadora de primer grado ofreció las garantías procesales a las partes y explicó los motivos por los que prosiguió con el desarrollo de la audiencia de la que se duele el apelante[7]; entonces, de haber considerado que realmente se violó el debido proceso o el derecho de defensa y con ello se invalidó el trámite, así debió exponerlo el extremo demandado en la oportunidad que contempla la ley, pero se abstuvo de hacerlo.

[7] Ver notas 2 y 4 del *"ActaAudiencia07Julio2023"* y tiempo 10:23 a 12:00 *"56AudioAudiencia07Julio2023"* ídem.

En torno a las aseveraciones relacionadas con el Acuerdo 004 de 8 de septiembre de 2014 del Concejo Municipal de El Carmen de Bolívar, es dable señalar que, si bien la oposición del señor Echeverría Ramírez a la estimación económica del metro cuadrado de su predio que hizo la activa, se fincó en que tal normativa está viciada de nulidad, lo cierto es que con suficiencia la *iudex a quo* en el acápite denominado *"presunción de legalidad de los actos administrativos"*[8] brindó el sustento legal (art. 88 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, arts. 60 y 61 de la Ley 388 de 1997), jurisprudencial (Corte Constitucional T-136 de 2019 y Consejo de Estado-Sección Primera- sentencia No. 05001-23-31-000-2012-00340-01), fáctico y probatorio por el que la lucubración bajo estudio no puede ser acogida, sin que fuese objeto de reparo en esta sede, pues mírese, que se dedicó la recurrente a poner de presente situaciones para advertir que eventualmente se puede producir una decisión judicial que invalide el acuerdo municipal, pero ello, en todo caso, es una expectativa, implicando que preste plenos efectos.

Así las cosas, dada la orfandad probatoria en punto de la nulidad del Acuerdo *"por medio del cual se modifica excepcionalmente el Plan Básico de Ordenamiento Territorial y se dictan otras disposiciones"*, el alegato no derrota los fundamentos del fallo de primera instancia.

Para desechar el último tema de disidencia, es decir, la omisión que se le atribuyó a la juez respecto al recaudo del interrogatorio del perito que realizó la experticia que allegó el encausado, basta tener presentes las mismas razones que se esgrimieron frente a la improcedencia del primer reproche, puesto que, si se observa bien, tampoco se dolió de una indebida valoración probatoria, sino de prescindir del mentado elemento de juicio, sin parar en mientes, que

[8] Ver folios 11 a 13 del archivo *"58SentenciaPrimeraInstancia"* ídem.

esa etapa precluyó, y en atención al principio de eventualidad que orienta el proceso civil no es dable revivirla.

En ese orden, no se vislumbra la presentación de una insatisfacción con la sentencia, sino con la determinación de no agotar el citado interrogatorio con el experto, la que, dicho sea de paso, encontró su pilar en el artículo 228 del Código General del Proceso, dada la inasistencia de quien efectuó el avalúo[9].

Es claro que la juzgadora no podía soportar su decisión en el dictamen pericial que arrimó la pasiva, motivo por el cual, para establecer el avalúo del inmueble a expropiar, se apoyó, justificadamente, en el realizado el 24 de julio de 2020 por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C.[10] por encargo de la actora, pues al impetrarse la demanda el 25 de marzo de 2021[11], tal estimación estaba vigente, acorde con lo reglado por el artículo 9 de la Ley 1882 de 2018, que modificó el parágrafo 2° del artículo 24 de la Ley 1682 de 2013, que específica para los proyectos de infraestructura de transporte que: *"El avalúo comercial tendrá una vigencia de un (1) año, contado, desde la fecha de su comunicación a la entidad solicitante o desde la fecha en que fue decidida y notificada la revisión y/o, impugnación de este. Una vez notificada la oferta, el avalúo quedará en firme para efectos de la enajenación voluntaria".*

Como quedó visto, el demandado no logró sustentar su oposición frente a la valoración económica del predio.

Quedan así desvirtuados los argumentos de la apelación.

---

[9] Ver segundo párrafo de la nota 5 del *"ActaAudiencia07Julio2023"* y tiempo 12:01 en adelante de *"56AudioAudiencia07Julio2023"* ídem.
[10] Ver folio 115 a 182 *"01. DEMANDA DE EXPROPIACIÓN CON ANEXOS PHPV-1-033"* de la carpeta *"CuadernoUno"* de *"PrimeraInstancia"* del expediente digital.
[11] Ver archivo "04 Constancia de Recibido" ídem.

III. CONCLUSIÓN

La sentencia fustigada se respaldó en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso (art. 164 CGP), debidamente sometidas a contradicción de las partes, con respeto por las formas propias del juicio, por lo cual no hay mérito para revocarla.

Dado el resultado del recurso de apelación, se impondrá condena en costas por la segunda instancia a cargo de la demandada (num. 1 y 8, art. 365 c.g.p.).

IV. DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en Sala Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

Primero: CONFIRMASE la sentencia apelada proferida el 11 de julio de 2023 por el Juzgado 11 Civil del Circuito de Bogotá.

Segundo: CONDENASE al demandado a pagar la costas de segundo grado en favor de la parte actora. Tásense y liquídense por el procedimiento previsto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

En la debida oportunidad, la secretaría devolverá la actuación digital al juzgado de origen.

Notifíquese.

Magistrado y magistradas integrantes de la Sala

JAIME CHAVARRO MAHECHA

MARÍA PATRICIA CRUZ MIRANDA

STELLA MARÍA AYAZO PERNETH

Firmado Por:

Jaime Chavarro Mahecha
Magistrado
Sala Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Maria Patricia Cruz Miranda
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Dirección Ejecutiva De Administración Judicial
División De Sistemas De Ingenieria
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Stella Maria Ayazo Perneth
Magistrada
Sala 04 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **a5c1c71b130c327793665a1b10f5cdaea006c3487c9d33b732d43680ed0b6c2e**
Documento generado en 29/02/2024 03:56:42 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA DE DECISIÓN CIVIL

Bogotá D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación	110013103011-2021-00291-01
Proceso	Expropiación
Asunto	Apelación sentencia
Demandante	Agencia Nacional de Infraestructura - ANI
Demandado	Álvaro Ignacio Echeverría Ramírez
Decisión	Señala agencias en derecho

El suscrito magistrado señala la suma de $1’000.000 a título de agencias en derecho, con fines de la liquidación de costas a que se contrae la sentencia de segundo grado de esta misma fecha.

Notifíquese.

JAIME CHAVARRO MAHECHA

Magistrado

Firmado Por:
Jaime Chavarro Mahecha
Magistrado
Sala Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **49bfa4a2317b984f4dc369870ce84739828df9200c112c919e62171c21609026**

Documento generado en 29/02/2024 04:18:14 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia
Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, D.C.
SALA CIVIL DE DECISIÓN

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

MAGISTRADA PONENTE:	**ANGELA MARÍA PELÁEZ ARENAS**
RADICACIÓN:	**11001310301020230057501**
PROCESO:	**EJECUTIVO SINGULAR**
DEMANDANTE:	**ENTERPRISE INTERNATIONAL S.A.S.**
DEMANDADO:	**COMITÉ PARALIMPICO COLOMBIANO**
ASUNTO:	**APELACIÓN DE AUTO**

Decídase el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante contra el auto del 15 de diciembre de 2023, proferido por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá, que denegó el mandamiento de pago.

ANTECEDENTES

1. Por medio del auto objeto de inconformidad, el *a quo* negó la orden de apremio solicitada por la sociedad Enterprise International S.A.S., al considerar que el título base de recaudo carece de exigibilidad, habida cuenta que se desconoce la constitución de la garantía y del cumplimiento del contrato, condiciones a las cuales se encontraban supeditados el primer y segundo pago, respectivamente.

Finalmente, concluyó diciendo que la cláusula penal es una obligación condicional, cuya existencia depende del incumplimiento contractual, por lo que se requiere realizar discusiones subjetivas, que son objeto de estudio a través de un proceso declarativo, puesto que con el mandamiento de pago no se pueden hacer deducciones o interpretaciones de ninguna naturaleza.

2. Inconforme con la anterior determinación, la ejecutante

formuló recurso de apelación, bajo el argumento que entre las partes se suscribió un Otro sí al contrato, con el cual se suprimió el requisito de la garantía.

Afirmó que la deudora no dio cumplimiento al pago acordado en la prestación de servicios, en donde se pactó en la cláusula cuarta un pago de $200.900.000 y otro por $86.100.000, los cuales corresponden al 70% y 30% del valor total del contrato, contra factura dentro de los 30 días siguientes a que se determine el cumplimiento del objeto contractual.

Informó que las cláusulas segunda y tercera, establecieron como valor del contrato la suma de $287.000.000 y como vigencia de ejecución hasta el 30 de diciembre del 2022, susceptible de prórroga mediante acuerdo previo y expreso entre las partes por Otro sí, el cual debía constar por escrito, antes de la expiración del mismo.

Refirió que las pretensiones son claras, expresas y exigibles para ser tenidas en cuenta, además corresponde al funcionario judicial dar prevalencia al derecho sustancial sobre las formas, de manera que las dudas que surjan en la interpretación de las normas deben aclararse mediante la aplicación de los principios constitucionales y generales del derecho procesal, garantizando en todo caso el debido proceso, derecho a la defensa, igualdad y demás derechos fundamentales.

Frente a la cláusula penal refirió, que las partes establecieron que quien incumpla cualquiera de las obligaciones contenidas en el convenio, debía pagar a título de pena la suma equivalente al 20% del valor del contrato, lo cual corresponde a la suma de $57.400.000, y en la medida que en los términos del artículo 1602 del Código Civil el contrato es ley para las partes, esta pretensión es viable jurídicamente.

Corolario de lo anterior, solicitó revocar la totalidad de la

providencia recurrida, para que en su lugar se libre la orden de apremio demandada.

CONSIDERACIONES:

1. Bien sabido es que la acción ejecutiva tiene por finalidad la satisfacción coactiva del crédito, aún en contra de la voluntad del deudor y a costa de sus bienes, siempre que el título ejecutivo cumpla con las condiciones establecidas en el artículo 422 del Código General del Proceso, el cual dispone que solo pueden ejecutarse las obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba en su contra.

Así las cosas, en términos de la Corte Suprema de Justicia, si el instrumento no satisface tales presupuestos, no es posible seguir adelante el cobro coercitivo, pues téngase en cuenta que*:*

> (…) ***La claridad*** *de la obligación, consiste en que el documento que la contenga sea inteligible, inequívoco y sin confusión en el contenido y alcance obligacional de manera que no sea oscuro con relación al crédito a favor del acreedor y la deuda respecto del deudor. Que los elementos de la obligación, sustancialmente se encuentren presentes: Los sujetos, el objeto y el vínculo jurídico. Tanto el préstamo a favor del sujeto activo, así como la acreencia en contra y a cargo del sujeto pasivo* (…)*.*
>
> (…) ***La expresividad****, como característica adicional, significa que la obligación debe ser explícita, no implícita ni presunta, salvo en la confesión presunta de las preguntas asertivas. No se trata de que no haya necesidad de realizar argumentaciones densas o rebuscadas para hallar la obligación, por cuanto lo meramente indicativo o implícito o tácito al repugnar con lo expreso no puede ser exigido ejecutivamente. Tampoco de suposiciones o de formulación de teorías o hipótesis para hallar el título. Y* ***es exigible*** *en cuanto la obligación es pura y simple o de plazo vencido o de condición cumplida* (…)[1]*.*

2. De igual forma, vale la pena advertir que las anteriores

[1] CSJ. STC3298-2019 de 14 de marzo de 2019, exp. 25000-22-13-000-2019-00018-01, reiterada en sentencia STC720-2021 del 4 de febrero del 2021 exp. 11001020300020210004200

características, no necesariamente deben provenir de un único documento, sino que también pueden estar presentes en un conjunto de estos, caso en el cual se trata de un título ejecutivo complejo, el cual debe tener la virtualidad de producir tal certeza en el juez, que de una simple lectura se pueda vislumbrar la obligación que se reclama, sin que sea necesario efectuar mayores elucubraciones o inferencias a efectos de determinar la existencia y condiciones de las prestaciones reclamadas.

3. Teniendo en cuenta el contexto descrito y en la medida que para librar la orden de apremio se requiere del pleno convencimiento del juez de conocimiento, no solo que la obligación reclamada se encuentre en cabeza del demandado, sino que también le asiste el derecho al ejecutante para recibir lo cobrado, circunstancias que deben ser evidentes en el instrumento objeto de recaudo, sin importar que el mismo se componga de uno o de varios documentos, ya que estos deben forman una unidad jurídica que permita inferir que la prestación que se reclama cumple con las características del título ejecutivo, considera esta magistratura que en el caso particular estas condiciones no se encuentran cumplidas, por las razones que se exponen a continuación:

3.1. Adviértase que, si bien la actora allega como soporte de la ejecución reclamada, el Contrato de Prestación de Servicios No. CPSPJ027-2022 suscrito con la entidad demandada, Comité Paralímpico Colombiano, lo cierto es que de este documento no se extraen obligaciones claras, expresas y menos actualmente exigibles.

En efecto, si bien en el negocio jurídico descrito se pactó como valor total del mismo la suma de $287.000.000, acto seguido se estipuló una cláusula penal, equivalente al 20% de dicho precio, el cual se consideró *"como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios causados por el incumplimiento de las obligaciones*", no se puede perder de vista que las partes en las cláusulas cuartas y sexta, establecieron la forma en la

cual se pagaría el monto acordado, así como las obligaciones a las cuales estaría sujeto el contratista.

Frente al particular, se tiene que las partes convinieron que el pago se haría en forma fraccionada; más exactamente, en dos desembolsos, el primero por la suma de $200.900.000 incluido IVA, que corresponde al 70% del valor del contrato suscrito, y el segundo por el 30% restante, que corresponde a $86.100.000; precisándose que en el primer evento debían expedirse las garantías solicitadas en el contrato, en tanto que para el segundo, debía allegarse factura dentro de los 30 días siguientes al cumplimiento del objeto del contrato a satisfacción.

Y agregó puntualmente en el parágrafo 1 de la cláusula cuarta que: *"Para efectuar el pago, será requisito indispensable la presentación, por parte del CONTRATISTA, de los siguientes documentos: 1. La correspondiente factura electrónica detallada. 2. Certificación expedida por el representante legal de la empresa donde manifieste que durante los últimos seis (6) meses, la sociedad no tiene deudas pendientes con el Sistema de Seguridad Social en Salud, pensiones y riesgos laborales, tampoco por concepto de aportes parafiscales (…). 3. certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato. 4. Copia de la cédula de ciudadanía del Representante legal de la sociedad. 5. Copia de certificación Bancaria a nombre de la sociedad".*

Como puede observarse, para la presente ejecución no bastaba con aportar el contrato de prestación suscrito entre los extremos procesales, sino que era necesario adosar cuando menos la constancia de radicación de los documentos requeridos en el parágrafo transcrito, lo cual brilla por su ausencia y en consecuencia hace nugatoria cualquier ejecución que pretenda emprenderse, pues es claro que las garantías que amparaban el cumplimiento y calidad del servicio, fueron suprimidas en virtud del Otro Sí firmado el 1 de diciembre de 2022.

3.2. Ahora, si bien las partes de común acuerdo dispusieron en la cláusula octava, que "[e]*l presente contrato presta mérito ejecutivo en los términos del Artículo 488 del C.P.C.* (sic) *y, por lo tanto, podrá exigirse el cumplimiento de las obligaciones en él contenidas, sin necesidad de requerimientos o constituciones en mora, a los cuales renuncian las partes en mutuo beneficio"*; para hacer efectivas las prestaciones pactadas, debían cumplirse cada una de las condiciones allí estipuladas, lo cual -se itera- no fue acatado a cabalidad por la ejecutante.

Así las cosas, teniendo en cuenta que se está en presencia de un título ejecutivo complejo o compuesto, conocidos como aquellos en los cuales la obligación se deduce del contenido de dos o más documentos dependientes o conexos; es decir, ligados íntimamente, procedente es considerar que al no existir unidad jurídica del título, imposible es que surja el mérito ejecutivo reclamado, por lo que hizo bien el juez de instancia al negar la orden de apremio.

3.3. Igual circunstancia acontece con el reclamo efectuado respecto a la cláusula penal, pues de cara al contrato, se advierte que aun cuando las partes se comprometieron a cancelar esta, supeditaron dicha prestación al incumplimiento total, cumplimiento parcial, imperfecto o tardío de cualquiera de las obligaciones pactadas; lo que a la postre se desconoce si se encuentra configurado.

Obsérvese que en su demanda, la ejecutante solo informa de la existencia del negocio jurídico y el monto de los rubros objeto de reclamación, sin informar circunstancias puntuales en las cuales se desarrolló la ejecución, menos aun si a la fecha el objeto contractual se encuentra satisfecho y a partir de qué momento la demandada se encuentra en mora de cancelar la obligación.

Pues lo cierto es que aunque el contrato de prestación de servicios fue suscrito el 14 de diciembre de 2022, conforme quedó estipulado en la cláusula tercera de este, su término de ejecución

finalizaba el 30 de ese mismo mes y año, por lo que mal podría reconocerse un incumplimiento y menos intereses moratorios a partir del mismo día de la suscripción del contrato, como erradamente reclama la parte actora.

En relación con la carga de probar el cumplimiento, la Sala de Casación Civil, analizando un asunto de similares contornos, señaló que "(…) *para que el juez pueda librar el mandamiento ejecutivo, la demanda de tal índole debe ser presentada con arreglo a la ley, acompañada de documento que preste mérito ejecutivo (art. 497 del C.P.C.)* [hoy art. 430 C.G.P]*. Y ejecutivamente, dice la ley, no pueden demandarse sino las obligaciones expresas, claras y exigibles (art. 488 ibídem)* [hoy art. 422 C.G.P]*. Del mismo modo, que para poder ejecutar las obligaciones de su demandado el ejecutante debe comprobar previamente que ha cumplido las suyas, porque a nadie le es lícito 'prevalerse de su propia torpeza' alegando cumplimiento cuando él no ha cumplido, siendo necesario para poder intentar la acción de resolución o cumplimiento, con mayor razón lo es para obtener pretensión ejecutiva* (…)"[2].

4. En resumen, como en esta ejecución se persigue el cumplimiento de una obligación de sufragar montos dinerarios, emanados de un contrato bilateral de prestación de servicios, es necesario que además de acreditar la integralidad del título objeto de recaudo, de conformidad con lo previsto en el canon 1609 del Código Civil, el ejecutante también debe acreditar que cumplió o se allanó a cumplir las obligaciones a su cargo, pues de allí proviene la exigibilidad de la obligación reclamada, de manera que al no cumplirse con esos presupuestos, acertada fue la decisión del juez de instancia en negarse a librar el mandamiento de apremio.

5. Desde esa perspectiva, se convalidará el auto apelado, sin lugar a disponer condena en costas, por no aparecer causadas en esta instancia.

[2] C.S.J. STC. 22 ene. 2010. Exp. 02353-00, reiterada en STC. 17 sept. 2013. Exp. 00123-01.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**, en Sala de Decisión Civil Unitaria,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el auto de fecha y procedencia anotadas.

SEGUNDO: SIN COSTAS por no aparecer causadas.

TERCERO: Una vez cobre ejecutoria este pronunciamiento, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE,

ANGELA MARÍA PELÁEZ ARENAS
Magistrada.

Firmado Por:

Angela Maria Pelaez Arenas

Magistrada

Sala 009 Civil

Tribunal Superior De Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **987e4932dec10ccaeafb9b9db4c29215ffdb15210a288740952a881dedfe3125**

Documento generado en 27/02/2024 02:31:05 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.
SALA CIVIL

Bogotá, D.C., veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro

Proceso:	Verbal
Accionante:	Ingeniería en Limpieza y Mantenimiento Sociaseo S.A.
Accionado:	Administradora Hotelera del Llano S.A. en liquidación y otra
Radicación:	11001310301020160075803
Procedencia:	Juzgado 10° Civil del Circuito de Bogotá
Asunto:	Apelación de sentencia – Recurso extraordinario de casación
AI-022/24	

Se resuelve sobre la concesión del recurso extraordinario de casación presentado por la demandada Diplomat Hotels S.A.

Antecedentes

1. Con sentencia de 25 de enero de 2024 este Tribunal revocó el fallo proferido por el Juzgado 10 Civil del Circuito de Bogotá, emitido en el asunto del epígrafe; en consecuencia, declaró la existencia de un contrato de suministro y condenó de manera solidaria a Administradora Hotelera del Llano S.A. en liquidación y a Diplomat Hotels S.A. al pago de $391’0368.791.

2. La referida sentencia fue objeto de adición, para indicar que la suma a la que se condenó a los convocados, debía ser indexada a la fecha más próxima a la que se adoptó la decisión por lo que equivale a $717’.848.636,[45].

3. De forma oportuna, Diplomat Hotels S.A., a través de apoderado, promovió recurso extraordinario de casación.

Consideraciones

1. Al tenor del artículo 333 de la Ley 1564 de 2012 el recurso de casación se distingue por su carácter extraordinario, de ahí que en el precepto que le sigue, se anota de manera restrictiva que sólo tiene cabida respecto de las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores, en "*segunda instancia*", "*en toda clase de procesos declarativos*"; "*en las acciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicción ordinaria*" y "*las dictadas para liquidar una condena en concreto*"; con la advertencia, además, de que en sumarios relativos al estado civil recae, simplemente, en las de "*impugnación o reclamación del estado y la declaración de uniones maritales de hecho*".

Acerca de la procedencia del recurso extraordinario de casación ha puntualizado a jurisprudencia:

> «*En virtud de la naturaleza extraordinaria y restringida del recurso de casación, su procedencia se halla condicionada a la satisfacción de diversos requisitos, expresamente establecidos en la ley. Al respecto, el artículo 334 del Código General del Proceso prevé que el aludido medio de impugnación "(…) procede contra las siguientes sentencias, cuando son proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia: 1) Las dictadas en toda clase de procesos declarativos; 2) Las dictadas en las acciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicción ordinaria; 3) Las dictadas para liquidar una condena en concreto».*
>
> *En ese orden, resulta evidente que no todas las providencias judiciales son susceptibles de ser atacadas por esta vía, sino solo aquéllas expresamente previstas por el legislador, en consideración a la naturaleza del asunto debatido y, en determinados supuestos, a la cuantía actual del agravio denunciado por el impugnante.*
>
> *2.2. Conviene precisar, también, que el Código General del Proceso introdujo relevantes modificaciones a la impugnación extraordinaria en comento, por vía de ejemplo, amplió el espectro de las sentencias susceptibles de ser atacadas en casación, desde la perspectiva del tipo de procedimiento en el que se profirieron (declarativos, acciones de grupo y liquidaciones de condena en concreto en cualquier tramitación).*
>
> *Asimismo, la normativa procesal actual puntualizó que el importe de la resolución desfavorable debe ascender, cuanto menos, a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), cuando se*

trate de sentencias dictadas dentro de las acciones de grupo y las que versen sobre el estado civil".

Se evidencia así que no todas las providencias judiciales son susceptibles de casación, sino aquéllas expresamente previstas por el legislador, en consideración a la naturaleza del asunto debatido, o a la cuantía monetaria actual y perjudicial al impugnante. En relación con dicho aspecto, en CSJ AC 2291-2016, rad. 2016-00720-00, la Sala reiteró: "(…) [E]l carácter extraordinario y limitado del recurso de casación se proyecta, en la práctica, en las precisas limitaciones dentro de las cuales la ley lo regula, y referentes no sólo a los motivos o causales para su procedencia, sino también a la clase de providencias susceptibles de impugnarse con él (…)".

Lo anterior no constituye quebranto al derecho de igualdad respecto de las excluidas, pues la aludida exigencia pecuniaria se predica tanto del accionante, como del convocado y precisamente el carácter extraordinario del recurso de casación permite esa limitante, como bien se ha establecido en los exámenes de constitucionalidad de normas relacionadas (CC C-1046/01).

Conviene precisar que el Código General del Proceso introdujo relevantes modificaciones a la impugnación extraordinaria que se viene analizando, ampliando por ejemplo la clase de providencias susceptibles de dicha vía desde la perspectiva del tipo de proceso en el que se profieren (declarativos, acciones de grupo y liquidación de condena en concreto). No obstante, en el nuevo compendio continúa siendo preponderante la estimación del importe de la resolución desfavorable, la cual se exige en un mil (1000) SMLMV, para los supuestos de pretensiones esencialmente patrimoniales, exceptuando tan sólo a los fallos pronunciados en acciones de grupo y las que aluden al estado civil -siempre y cuando traten sobre reclamación e impugnación del mismo o la declaración de uniones materiales de hecho-, como se desprende de la lectura armónica de los artículos 334 y 338 del Código General del Proceso» (CSJ AC2403-2018, 24 jun.)»[1].

2. El artículo 338 *ibídem* agrega que, si las expectativas del litigante vencido son esencialmente económicas, el ataque procede "*si el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente*" excede de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que carece de incidencia en "*sentencias dictadas dentro de las acciones de grupo y las que versen sobre el estado civil*". Exigencia que constituye lo que se conoce como el

[1] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Citado en auto AC512-2024 de 14 de febrero de 2024, magistrado ponente Luis Alonso Rico Puerta. Radicación 11001310303220150013301.

interés para recurrir en casación, el que conforme se ha señalado en la jurisprudencia nacional:

> «*Dentro de los requisitos para conceder dicho medio de defensa se encuentra "el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente", tal como lo refiere el artículo 338 de la citada codificación, el cual se determina por el monto de los perjuicios que la sentencia ocasiona al impugnante, estimados al momento de su emisión.*
>
> *Por lo tanto, dicho interés está supeditado a la tasación económica de la relación jurídica sustancial que se conceda o niegue en la sentencia, es decir, a la cuantía de la afectación o desventaja patrimonial sufrida por el recurrente con la resolución desfavorable a sus intereses, evaluación que debe efectuarse para el día del fallo, aun cuando la sentencia sea "íntegramente desestimatoria, se determina a partir de lo pretendido en el libelo genitor o su reforma" (CSJ AC1650-2021, 5 may., rad. 2020-00107-00)*»[2].

En similar sentido, se ha dicho:

> «*El interés para recurrir en casación, entonces, refiere a la estimación cuantitativa de la resolución desfavorable al recurrente, al momento de proferirse la sentencia objeto de la impugnación extraordinaria, concepto que «(...) está supeditado a la tasación económica de la relación jurídica sustancial que se conceda o niegue en la sentencia, (…) a la cuantía de la afectación o desventaja patrimonial que sufre el recurrente con la resolución que le resulta desfavorable, evaluación que debe efectuarse para el día del fallo» (CSJ AC7638-2016, 8 nov.).*
>
> *Lo anterior implica que, cuando sea necesario establecer el aludido monto, este se determinará a partir del agravio o perjuicio que le ocasione la decisión impugnada al inconforme, en el preciso contexto del litigio planteado, analizado el mismo en su dimensión integral, y atendidas las singularidades del caso. Así lo ha señalado, en forma invariable, el precedente de la Sala:*
>
> «*(...) uno de los aspectos a tener en cuenta para la concesión del recurso extraordinario de casación, corresponde al monto del perjuicio que la decisión atacada ocasiona al impugnante al momento que [esta] se profiere, para lo cual se debe apreciar la calidad de la parte, los pedimentos de la demanda, las*

[2] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto AC538-2024 de 15 de febrero de 2024, magistrado ponente Fernando Augusto Jiménez Valderrama. Radicación 11001310304620220031601.

manifestaciones de los oponentes y las demás circunstancias que conlleven a su delimitación, así como las decisiones definitorias, toda vez que las expectativas económicas de los intervinientes varían de acuerdo con las particularidades que le son propias a cada uno de ellos» (CSJ AC, 28 sep. 2012, rad. 2012-00065-01; reiterado en AC1849-2014, 10 abr.).

En síntesis, la actualidad de la afectación, en su faceta patrimonial, constituye un elemento determinante para la viabilidad del indicado medio de impugnación extraordinario, razón por lo cual su cumplimiento debe evaluarse con prolijidad y estricta sujeción a la relación sustancial definida en la sentencia, en tanto que «sólo la cuantía de la cuestión de mérito en su realidad económica en el día de la sentencia es lo que realmente cuenta para determinar el monto del comentado interés» (CSJ AC924-2016, 24 feb.)»[3].

Además, en las contiendas meramente patrimoniales, el artículo 339 *ídem* impone que, cuando "*sea necesario fijar el interés económico afectado con la sentencia, su cuantía deberá establecerse con los elementos de juico que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podrá aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidirá de plano sobre la concesión*".

Disposición que consagra una carga para el recurrente de probar el monto del detrimento que le ocasiona la providencia, simultáneamente con la radicación del embate, o antes de que venza el lapso para ese fin, salvo que lo estime identificable con los instrumentos obrantes en el legajo, en cuyo caso es tarea del funcionario constatarlo, sin que se factible decretar más pruebas a las existentes, ya que el censor asume los efectos adversos de su desidia.

De cualquier forma, la fijación del malogro debe cristalizarse al tiempo en que surge la legitimación para disentir, esto es, la fecha de la decisión cuestionada y contar con bases susceptibles de verificación.

«*Ahora bien, el artículo 338 ibídem agrega que si las expectativas del litigante vencido son «esencialmente económicas» el ataque procederá cuando «el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente» exceda de «un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes», cuantía que al tenor del artículo 339 procesal se determinará, en línea de principio, «con los elementos de juicio que obren en el expediente», a menos que el censor estime que estos son insuficientes para demostrar el monto del detrimento económico que*

[3] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto AC1594-2023 de 8 de junio de 2023, magistrado Luis Alonso Rico Puerta, radicación 13001310300720130006902.

le ocasiona el pronunciamiento, caso en el cual corre con la carga de «aportar un dictamen pericial», cuya idoneidad demostrativa deberá constatar el funcionario, con la advertencia de que el recurrente asume los efectos adversos de su desidia probatoria.

Significa entonces, como lo ha sostenido la Sala, que «el interés pecuniario del agraviado ha de determinarse a través de las probanzas recaudadas a lo largo del litigio, salvo que aquel allegue un dictamen al formular el recurso para acreditarlo, de modo que el fallador pueda establecer de manera objetiva si el perjuicio irrogado por la resolución confutada es suficiente para promover esta herramienta» (CSJ AC3554-2021. Subrayas ajenas al original)».[4]

3.. En el proceso de la referencia, a propósito del interés para recurrir en casación, de conformidad con la jurisprudencia reseñada, el agravio generado al recurrente con la providencia emanada de esta Corporación, se circunscribe al valor al que asciende la condena impuesta en segunda instancia esto es, $717'848.636,[45] atendiendo a que la decisión de primer grado fue revocada en su totalidad, por lo que solo en esta sede se impuso condena a la parte encartada.

La demandada, ahora recurrente, no aportó un dictamen pericial para establecer que el agravio con la sentencia confutada alcanzaba el umbral previsto en el artículo 338 de la Ley 1564 de 2012, aunque el artículo 339 le impone esa carga demostrativa.

Por tanto, debe acudirse al material de convicción obrante en el plenario que, para el caso, se circunscribe a la sentencia emanada de este Tribunal, en la que, se itera, se impuso una condena solidaria a los demandados, de $717'848.636,45.

Visto lo anterior, se denota que el rubro obtenido no supera la cifra para recurrir en casación que para este año equivale a $1.300'000.000[5]. Ergo, inviable resulta conceder el recurso extraordinario propiciado.

Decisión

Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., Sala Civil de Decisión **RESUELVE:**

[4] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto AC2834-2022 de 30 de junio de 2022, magistrado Octavio Augusto Tejeiro Duque, radicación 11001020300020220185100.
[5] Para el año 2024 el salario mínimo quedó fijado en $1.300.000, según el artículo 1° del Decreto 2292 de 29 de diciembre de 2023.

1. DE**NEGAR la concesión del recurso extraordinario de casación** formulado por Diplomat Hotels S.A.S., en contra de la sentencia expedida por esta Colegiatura el 25 de enero de 2024, adicionada el 15 de febrero último en el asunto del epígrafe.

2. En firme la presente decisión, por Secretaría **RETORNAR** el expediente al Juzgado que lo remitió.

Notifíquese y cúmplase,

RUTH ELENA GALVIS VERGARA
Magistrada

Firmado Por:
Ruth Elena Galvis Vergara
Magistrada
Sala Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **a660304c5a0997a74981d7e976740fdc854c6d04b8fd450ad0b5a55c67ba1716**
Documento generado en 29/02/2024 10:20:00 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA
SALA CIVIL

Magistrado Ponente: Iván Darío Zuluaga Cardona

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Proceso	Verbal – Cumplimiento contractual
Demandante	Luis Mauricio Gómez Duran y otros
Demandado	Sociedad DAMICI S.A.S.
Radicado	110013103 009 2020 00261 01
Instancia	Segunda
Decisión	Admite recurso de apelación

1. Se admite en el efecto devolutivo el recurso de apelación interpuesto por la demandada, contra la sentencia proferida el 22 de noviembre de 2023 por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogotá, D.C., en el radicado en referencia.

2. Tramitar el presente asunto en segunda instancia atendiendo el procedimiento previsto en el artículo 12 del Ley 2213 de 2022[1].

3. Ejecutoriado este auto, el extremo apelante deberá sustentar el recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes, en la dirección de correo electrónico: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

4. De la sustentación presentada oportunamente, por secretaría, córrase traslado por el término de cinco (5) días a la parte contraria.

5. En caso de no sustentarse oportunamente el recurso será declarado desierto.

[1] De conformidad con lo previsto en el inciso 2º del artículo 40 de la Ley 153 de 1887 modificado por el artículo 624 del C.G.P. "(…) los recursos interpuestos (…) se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos (…)".

6. Advertir que, de conformidad con lo previsto por el inciso 4 del artículo 109 del C.G.P., los memoriales, incluidos los mensajes de datos, se entenderán presentados oportunamente si son recibidos antes del cierre del despacho del día en que vence el término, es decir, antes de la cinco de la tarde (5:00 p.m.).

7. Por economía procesal y para evitar la pérdida automática de competencia, de una vez se ordena prorrogar el término para fallar este asunto por seis (6) meses más, contados a partir del día siguiente al vencimiento del término inicial.

NOTIFÍQUESE

Firma Electrónica
IVÁN DARÍO ZULUAGA CARDONA
Magistrado

Firmado Por:
Ivan Dario Zuluaga Cardona
Magistrado
Sala 010 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ed894101b9f9508296eb2d5c7304d299fd3b9c65f3bb810aa1b5def53c89dc08**
Documento generado en 29/02/2024 02:12:49 p. m.

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRIO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA SÉPTIMA CIVIL DE DECISIÓN

Bogotá, D. C., veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro

11001 31 03 007 2021 00 174 01

Ref. proceso verbal de Juan Sebastián Aguilar, Luz Mery Mendieta Poveda y Tania Camila Aguilar Mendieta frente a Grupo Alpha S. en C. y Arquitectos e Ingenieros S.A.

Se admite el recurso de apelación que presentó la parte actora contra la sentencia que el 24 de enero de 2024 profirió el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, en el proceso de la referencia.

En su momento, **la secretaría controlará el surtimiento de los traslados de que trata el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022**.

Las partes tendrán en cuenta que los memoriales con destino a este proceso serán remitidos al correo electrónico secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Cumplido lo anterior, el expediente reingresará al despacho del suscrito Magistrado, para lo que haya lugar.

Notifíquese y cúmplase

ÓSCAR FERNANDO YAYA PEÑA
Magistrado

Firmado Por:
Oscar Fernando Yaya Peña
Magistrado
Sala 011 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **a36efcc2fd6395a29c78d2eff5ddc6baf04d47cbbaca1edf6a34fb371b83c151**
Documento generado en 29/02/2024 02:20:09 p. m.

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.

Sala Civil de Decisión

Magistrada Sustanciadora

SANDRA CECILIA RODRÍGUEZ ESLAVA

CLASE DE PROCESO	Pertenencia
DEMANDANTE	Campo Emilio Agudelo Puentes y Otros
DEMANDADOS	Rafael Estrada Londoño y Otros
RADICADO	11001310300520080039001
PROVIDENCIA	Sentencia No. 09
DECISIÓN	Confirma
DISCUTIDO Y APROBADO	Ocho (8), veintidós (22) y veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
FECHA	Veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Se procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 14 de julio de 2023, por el Juzgado Cuarenta y Seis Civil de Circuito de esta ciudad, medio impugnatorio que fue repartido a este despacho el 22 de agosto siguiente.

I. ANTECEDENTES

Los actores, a través de apoderado judicial, demandaron a Rafael Estrada Londoño, Carlos Traslaviña Amado, Alfonso Guillén Estévez, Juan de la Cruz, José Evaristo Parraga o Vergara, Jaime Guillén Humberto Vélez Parra, Julián Restrepo Cardona, Carlos David Traslaviña Aristizábal y a las personas indeterminadas que se creyeran con derechos sobre los predios en disputa, para que previo los trámites del proceso abreviado, se hicieran los siguientes pronunciamientos:

1. Declarar que adquirieron por prescripción extraordinaria de dominio, las viviendas de interés social que hacen parte del predio de mayor extensión con matrícula inmobiliaria No 50S-283547, relacionados así:

Nombres demandantes	**Ubicación (Bogotá) de los inmuebles a usucapir**
Orlando Martínez Quintero y Nubia Mair Bermúdez Mora	Calle 60 A Sur No. 16 D-04
Rafael Antonio Bernal Casallas y Nora Mair Bermúdez Mora	Carrera 17 Bis A No. 60 B-34 Sur
Campo Emilio Agudelo Puentes	Carrera 17 Bis A No. 60D-12 Sur
María Consuelo Lozano Reinoso	Calle 60 A Sur No. 16 D-08
Betulia Ariza de Cepeda	Carrera 17 Bis A No. 59 B-41 Sur
Ángel Uriel López Rodríguez y Blanca Isabel Gaona García	Carrera 16 D No. 59 B-69 Sur
Álvaro Arcenio Jiménez Méndez y Patricia Melo Cala	Carrera 17 No. 59 B-62 Sur
Ricardo Díaz Gaitán	Carrera 18 No. 60 B-12 Sur
Manuel Alfredo Arévalo López	Carrera 17 No. 60 C-16 Sur
María Emma Arrendoso de Gómez	Carrera 17 Bis A No. 60 D-04 Sur
María de Jesús Moreno Cárdenas	Carrera 16 D No. 60 C-13 Sur
María Magdalena Albarracín Martínez y Luis Antonio Jiménez Carpeta	Carrera 17 Bis A No. 59 B-20 Sur
Luis Carlos López Rodríguez	Calle 60 B Bis Sur No. 17-73
Lucinda Calderón de Gómez	Carrera 17 A No. 59 B-09 Sur
Alfonso Melo Rojas	Carrera 17 No. 59 B-42 Sur
Luis Ernesto Quiroga Camelo	Calle 60 C Sur No. 17-68
Francisco Antonio Díaz Vásquez	Carrera 17 Bis A No. 59 B-32 Sur
Luz Mery Martínez Quevedo	Calle 60 A Sur No. 16D-12
Elsa Beatriz Mora Barrantes y Pedro Joaquín León Rosas	Calle 60 A Sur No. 16 D-15
Segundo Rogerio Martiniano Delgado Betancourt	Calle 60 C Sur No. 17-64
Luz Aurora Rodríguez	Carrera 17 No. 60 A-27 Sur
Rosa María Latorra Bohórquez y Jorge Enrique Monzaque	Carrera 16 D No. 60 A-80 Sur

Reisner Martínez Martínez y Yuver Ricardo Agudelo Ruano	Carrera 17 No. 60 C-20 Sur
Luis Manuel Escobar Pinilla	Carrera 17 Bis A No. 59 B-47 Sur
Yenny Angulo Jiménez	Carrera 17 Bis A No. 60 B-12 Sur
Roberto Echevarría Vargas y Ruby Merchán Ruiz	Carrera 16 D No. 60 A-13 Sur
Miller Vargas y Ana Blanco Nemes Martínez	Carrera 17 No. 60 C-39 Sur
Juan Carlos Buitrago Romero, Sor María y Luz Marcela Romero Bejarano	Carrera 17 No. 60 A-35 Sur
Gloria Inés Callejas Cusba	Carrera 17 No. 60 C-17 Sur
Martha Martínez Daza	Carrera 17 No. 60 C-27 Sur
José Fernando Salazar y Aída Esther González	Carrera 17 No. 59 B-51 Sur
María Lenny Moreno Sánchez	Carrera 17 No. 59 B-59 Sur
Florinda Fuentes Avendaño	Carrera 17 No. 60 A-31 Sur
Zoraida Angulo Ariza	Calle 60 G Sur No. 17-02
María del Socorro Giraldo	Carrera 17 No. 60 C-32 Sur
Martha Elena Martínez Colmenares y José Jamer Toro Muñoz	Carrera 17 Bis A No. 59 B-56 Sur
Alcibíades Zamora Gómez y Rocío Layton Saavedra	Carrera 17 Bis A No. 60 B-15 Sur
Fanny Arias Guerra y Renso Antonio Barrera Jiménez	Carrera 17 No. 60 A-41 Sur
Blanca Lucila Vaca Vaca	Carrera 17 Bis A No. 60 A-08 Sur
Joel Suárez Tello	Calle 60 B Bis Sur No. 17-43
Marlidy Bohórquez Mejía	Calle 60 A Sur No. 17-17
Gloria del Pilar Forero Ramos y Evangelista Díaz Gamboa	Carrera No. 60 A-62 Sur
Ivon Aseneth Cardona Callejas	Carrera 17 No. 60 A-12 Sur
Cristina Ardila Moreno	Carrera 17 No. 59 B-63 Sur
José Alberto Díaz Beltrán y Doris Stella Caicedo	Carrera 17 Bis A No. 60 B-26 Sur
Héctor Alirio Valdéz y Sandra Patricia Blanco Ortiz	Carrera 17 Bis A No. 60 B-32 Sur
Cristina Ardila Moreno	Carrera 17 No. 59 B-55 Sur
Luis Martín Cuellar	Carrera 17 No. 60 C-12 Sur
Luis Carlos Mompotes Golondrino	Carrera 17 Bis A No. 59 B-53 Sur
Ruby Merchán Ruiz y Roberto Echevarría Vargas	Carrera 17 No. 59 B-62 Sur
Erasmo González	Carrera 17 No. 60 C-23 Sur

Juan Humberto Cortés	Carrera 16 D No. 60 A-21 Sur
Derly Hernández Cortés	Carrera 17 No. 60 A-58 Sur
Pablo Abel Gutiérrez	Carrera 17 No. 60 A-45 Sur
Blanca Molina	Calle 60 C No. 16 D-12 Sur
Miriam Villanueva	Calle 60 A No. 16 D-09 Sur
Segundo Alfonso Osma Rodríguez y Elena Pardo	Carrera 16 D No. 60 A-68 Sur
Leonor Melo Martínez	Carrera 17 A Bis No. 60 C-10 Sur
María luz Mery Padilla	Calle 60 C Sur No. 16 D-17
Walter Enoc Palomino Vélez	Carrera 17 A Bis No. 60 C-49 Sur
Israel Perilla García y Mery Morales Álvarez	Carrera 16 D No. 60 A-76

Cuyos linderos de cada heredad, se encuentran descritos en el libelo introductorio.

2. Ordenar el registro de la sentencia en el folio de matrícula inmobiliaria del globo de mayor extensión.

3.Condenar en costas a la parte demandada[1].

Fundamento fáctico: En apoyo de sus pretensiones, los actores expusieron, en síntesis, que desde hace más de cinco años, poseen de manera real y material cada uno de los predios de vivienda de interés social, reclamados por la vía de usucapión a largo plazo, ejerciendo actos de señores y dueños, sin reconocer dominio ajeno, en forma pública, tranquila, pacifica e ininterrumpida, que han plantado mejoras con sus propios recursos y pagado los impuestos prediales. Además, instalaron los servicios públicos de agua, luz y gas[2].

[1] Folios 29 a 49 del archivo "*01CuadernoUnoTomoIII.PDF*" de la carpeta "*04CuadernoUnoTomoIII*" del "*01CuadernoUnoDigitalizado*".
[2] Folios 5 a 29 del archivo "*01CuadernoUnoTomoIII.PDF*",*ibídem.*

Actuación procesal: El Juzgado que asumió inicialmente el conocimiento, admitió la demanda mediante auto de 25 de febrero de 2009, ordenó el respectivo traslado al extremo pasivo y el emplazamiento de los convocados[3], el que efectuado sin que comparecieran los mismos, les designó curador *ad litem,* auxiliar de la justicia que fue intimado el 23 de enero y 18 abril de 2013[4], habiendo presentado escrito de réplica sin formular oposición alguna al petitum[5].

Por proveído de 11 de febrero de 2014[6], se aceptó el desistimiento de las pretensiones de los actores Orlando Martínez Quintero, Nubia Mair Bermúdez Mora, Rafael Antonio Bernal Casallas, Nora Mair Bermúdez Mora, María Magdalena Albarracín Martínez, Luis Antonio Jiménez Carpeta, Lucinda Calderón de Gómez, Alfonso Melo Rojas, Luis Ernesto Quiroga Camelo, Segundo Rogerio Martiniano Delgado Betancourt, Luis Manuel Escobar Pinilla, María Lenny Moreno Sánchez, Florinda Fuentes Avendaño, Martha Elena Martínez Colmenares, José Jamer Toro Muñoz, Cristina Arcila Moreno, Walter Enoc Palomino, Israel Perilla García y Mery Morales Álvarez.

Mediante providencia de 27 de noviembre siguiente, el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Descongestión de esta ciudad, decretó las pruebas solicitadas[7].

Por medidas de prontitud en la labor de administrar justicia adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura, el litigio fue remitido al Juzgado Segundo de la misma especialidad, el que el 8

[3] Folios 99 a 91 del archivo "*01CuadernoUnoTomoIII.PDF*", *ibídem.*
[4] Folios 322 y 410 del del archivo "*01CuadernoUnoTomoIII.PDF*", *ibídem.*
[5] Folios 411 a 414 del archivo "*01CuadernoUnoTomoIII.PDF*", *ibídem.*
[6] Folios 441 y 442 del archivo "*01CuadernoUnoTomoIII.PDF*", *ibídem.*
[7] Folios 498 a 500 del archivo "*01CuadernoUnoTomoIII.PDF*", *ibídem.*

de mayo de 2015[8], avocó conocimiento, reprogramó las fechas para evacuar inspección judicial y escuchar a los testigos, dejando las constancias de rigor de su inasistencia en esa data.

El 21 de abril de 2023[9], la *iudex* decretó el cierre probatorio y citó a la audiencia regulada en el artículo 373 del Código General del Proceso, reprogramada el 10 de julio de esa anualidad[10], en la cual se escucharon los alegatos de conclusión de los extremos y se profirió sentencia que negó las pretensiones, sin condena en costas[11].

Sentencia impugnada: Como fundamento de esa determinación rememoró los presupuestos axiológicos que debían acreditarse para el buen éxito de las pretensiones. Acto seguido, expresó que los inmuebles de vivienda de interés social reclamados eran susceptibles de ser adquiridos a través de prescripción adquisitiva, por tratarse de bienes de dominio privado, toda vez que no están dentro de los catalogados como imprescriptibles, como aquellos públicos, fiscales, patrimonio arqueológico, entre otros. De otro lado, frente al presupuesto de singularidad, consideró que conforme a los dictámenes periciales recaudados, se demostró tal exigencia.

Seguidamente, precisó que quien reclama la usucapión, a voces del artículo 762 del Código Civil, debía probar su calidad de poseedor material, esto es, los elementos de corpus y *animus domini*, este último del que reflexionó no estar acreditado, habida consideración que el extremo actor incumplió la carga probatoria prevista en el precepto 167 del Código General del Proceso, comoquiera que la

[8] Folios 502 a 505 del archivo "*01CuadernoUnoTomoIII.PDF", ibídem.*
[9] Archivo "*31AutoFijaFechaAudiencia.pdf"* de la carpeta "*01CuadernoUnoDigitalizado".*
[10] Archivo "*36AutoReprogramaFechaAudiencia.pdf", ejúsdem.*
[11] Archivo "*11001310300520080039000-20230714_100423-Grabación de la reunión"* de la carpeta "*37Audiencia14Julio2023"* del "*01CuadernoUnoDigitalizado".*

evocada condición solo se comprueba con los testigos, probanza decretada pero no recaudada por descuido de los interesados, aunado a que si bien se incorporaron al legajo una serie de documentos, estos elementos suasorios simplemente permiten aflorar los actos dispositivos que se ejercen sobre la cosa[12].

Apelación: El extremo activo planteó el remedio vertical contra el fallo de primer grado. Para ello expuso sus reparos por escrito[13], los cuales sustentó en oportunidad[14], peticionando que se revoque el fallo de primera instancia, y en su lugar, se declare la nulidad desde la providencia que reprogramó la fecha para escuchar a los testigos y evacuar la inspección judicial y posteriormente, se profiera una sentencia favorable a sus aspiraciones.

Para tal fin, hizo un recuento procesal, advirtiendo que si bien las aludidas probanzas fueron decretadas en su oportunidad, las mismas no pudieron ser recaudadas ante la modificación "intempestiva" de la calenda destinada para tal fin por parte del juez de conocimiento. Además, la decisión de negación de reprogramación de la evocada vista pública, así como el decreto del dictamen pericial como reemplazo de la visita ocular, son conductas que, en su criterio, desconocen la ley adjetiva y consecuentemente configura un vicio procesal; máxime, cuando es obligatorio el reconocimiento personal del inmueble.

Expresó la recurrente que el 20 de octubre de 2020, por intermedio de su apoderado judicial, presentó "*un listado de nuevos testigos"*, solicitando la convocatoria de esas personas, ante la falta de

---

[12] Minuto 12:42 del archivo *11001310300520080039000-20230714_100423-Grabación de la reunión", ejúsdem.*
[13] Archivo "*38RecursoApelacion.pdf", ejúsdem..*
[14] Archivo "*07SustentaApelacion.pdf"* de la carpeta "*CuadernoTribunal".*

recaudo de este elemento suasorio. Además, que arrimó declaraciones extrajudiciales; empero, la *a quo* omitió emitir pronunciamiento al respecto, estructurándose un defecto procedimental por vía de hecho.

Pronunciamiento de los demandados: El extremo pasivo guardó silencio.

II. PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde a la Sala determinar si se cumplen los requisitos legales para declarar la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio de inmuebles de vivienda de interés social o, si por el contrario, conforme lo consideró la *a quo,* había lugar a denegar las pretensiones de los demandantes, ante el incumplimiento del presupuesto del *animus domini.*

III. CONSIDERACIONES

1. Se advierte que se resolverá la instancia con la limitación que impone el inciso primero del artículo 328 del Código General del Proceso, esto es, que solo se analizaran los argumentos que desarrollen los reparos concretos presentados ante el juez de primera instancia, tal como lo dispone el inciso final del canon 327 ibidem.

2. Liminarmente, en lo que tiene que ver con la solicitud de los demandantes concerniente a decretar la nulidad de todo lo actuado en primera instancia, desde el auto de 8 de mayo de 2015, a través del cual el Despacho Segundo Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá, reprogramó las fechas para evacuar la diligencia de

inspección judicial y el recaudo de los testimonios decretados oportunamente, se advierte que tal asunto fue objeto de pronunciamiento por esta Corporación en proveído de 9 de febrero pasado[15], motivo por el cual, la Sala no hará pronunciamiento al respecto; máxime, cuando dicha decisión cobró ejecutoria sin réplica alguna.

3. El artículo 673 del Código Civil consagra como modos de adquirir el dominio la ocupación, accesión, tradición, sucesión por causa de muerte y la prescripción, última que, según los artículos 764, 2528, 2529, 2530 y 2531 *ibidem,* puede ser ordinaria cuando se ha poseído de forma regular no interrumpida, en virtud de un justo título, un bien mueble durante tres (3) años o un inmueble en el curso de cinco (5) años, y extraordinaria, cuando se ha detentado de manera irregular la cosa por el término de diez (10) años.

Así, la usucapión o prescripción adquisitiva se logra con la tenencia cualificada de bienes corporales con ánimo de señor y dueño, en forma quieta, pacífica, pública ininterrumpida y sin reconocer dominio ajeno, por el plazo legal, sea que el propietario o el que se da por tal, lo tenga por sí mismo o por otra persona que lo tenga en nombre de aquél. En otras palabras, con la verificación del *animus,* elemento de índole subjetivo entendido como la convicción interior de creerse titular único y verdadero de la cosa, por tanto, debe exteriorizarse a través de la ejecución de actos típicos de quien lo fuere, y el *corpus,* de carácter objetivo definido como la detención material y visible de la cosa sobre la cual se ejecutan los actos.

[15] Archivo "*10AutoRechaza.pdf*" de la carpeta "*CuadernoTribunal*".

Según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, el primero es el componente interno, "*psicológico, la intención del dominus, que por escapar a la percepción directa de los sentidos es preciso presumir de la comprobación plena e inequívoca de los actos materiales y externos ejecutados continuamente y por todo el lapso que dure aquélla",* que por constituir manifestación visible de su intención, llevan a inferir la intención o voluntad de hacerse dueño, mientras no aparezcan otras circunstancias que demuestren lo contrario, y el segundo, el externo, esto es, "*la retención física o material de la cosa"*[16]*.*

Igualmente, "*cuando se invoca la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio para que se declare judicialmente la pertenencia, el demandante debe acreditar, no solamente que la solicitud recae sobre un bien que no está excluido de ser ganado por ese modo de adquirir, sino la posesión pública y pacífica por un tiempo mínimo de veinte años ininterrumpidos [o diez con la modificación introducida por la Ley 791 de 2002]"*[17]*.*

4. La juzgadora de primer grado no accedió a las pretensiones de los demandantes, al considerar no estar probado el elemento del *animus* para catalogar a los promotores como poseedores sobre los inmuebles de vivienda de interés social reclamados, habida consideración que las pruebas recaudadas, esto es, la documental adosada a la actuación solo da cuenta de los actos de disposición de la cosa, mas no de los sucesos de señores y dueños que pudieron ser comprobados a través de los testimonios.

[16] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 29 de agosto de 2000 y Sentencia de 13 de abril de 2019.
[17] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 24 de marzo de 2004. Conforme sentencia de 29 de agosto de 2000.

Así las cosas, corresponde a la Sala determinar si se cumplen los requisitos legales para declarar la prescripción extraordinaria, memorando al efecto que quienes la alegan deben acreditar que, desde el momento en que adujeron haber entrado a ocupar los fundos, hasta la data en que se impetró la demanda, ejercieron actos posesorios, por el término previsto en el ordenamiento jurídico interno establecido para la vivienda de interés social, condición que pregonó el extremo actor ostentan los inmuebles objeto de litigio, aspecto que deberá ser verificado.

5. La Ley 9 de 1989 en su artículo 44 (modificado por la 388 de 1997) señala que esa clase de inmuebles se desarrolla "*para garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos"*. Asimismo, frente al término para usucapir, prevé el canon 51 de esa misma normatividad que es de "*cinco (5) años el tiempo necesario a la prescripción adquisitiva extraordinaria de las viviendas de interés social. A partir del primero (1) de enero de 1990, redúzcase a tres (3) años el tiempo necesario a la prescripción adquisitiva ordinaria de las viviendas de interés social"*.

En complemento, el artículo 91 de la Ley 388 de 1997 consagra que el valor máximo de una vivienda de interés social y subsidiable será de ciento treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales (135 smlm).

6. Reprochan los apelantes que, contrario a lo dicho por la juez de primera instancia, se acreditaron los actos de señores y dueños, conforme se comprobó con las declaraciones extrajudiciales aportadas. Sin embargo, revisado el expediente digital, se constata que a diferencia de lo afirmado por los impugnantes, la aludida probanza no reposa dentro del *dossier,* pues si bien junto con el

escrito de alzada se arrimó copia del documento de referencia "*actualización de testigos*"[18], nótese que en ese escrito, sólo se hace alusión a una relación de nuevos declarantes, sin que se hiciera mención a las declaraciones extrajudiciales, luego, al no existir certeza sobre la aportación de esos elementos suasorios, el motivo de inconformidad queda sin sustento jurídico y fáctico, por cuanto sólo tendrán validez probatoria, las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso -artículo 164 Estatuto Adjetivo-

Con relación al debate de los testimonios no escuchados, la Sala recaba en que este medio probatorio fue decretado en auto de 27 de noviembre de 2014[19], sin que fuera practicado, por circunstancias, que como ya se indicó de forma preliminar en las consideraciones de esta decisión, no fueron alegadas por el extremo actor en el curso de primera instancia; además, memórese que es a la parte que haya solicitado este tipo de probanza a quien le corresponde "*procurar la comparecencia del testigo",* conforme se lo exige la regla 217 del Código General del Proceso*,* carga procesal que los apelantes inobservaron, quienes por demás tampoco acudieron a las diligencias señaladas para recaudar las pruebas.

Así las cosas, estima esta Corporación que la *a quo* estaba facultada para prescindir de tales declaraciones conforme lo facultan el numeral 1º del precepto 218 y el literal b) numeral 3º de la regla 373 *ídem,* y por contera, tal reparo también adolece de fundamento.

Luego, ante la ausencia de probanza testimonial, diamantino es que no se acreditó ese elemento de la posesión relacionado con los actos de señorío esgrimidos en el libelo introductorio, fueron en forma

[18] Folio del archivo "*38RecursoApelacion.pdf", ibídem.*
[19] Folios 498 a 500 del archivo "*01CuadernoUnoTomoIII.PDF", ibídem.*

pública e ininterrumpida y por el término legal; pues si bien, existe prueba documental del pago de impuesto predial y de servicios públicos, así como contratos de compraventa, tales elementos persuasivos resultan ser insuficientes para probar el elemento "psicológico" que exige el canon 762 del Código Civil, entendido por la Honorable Corte Suprema de Justicia, como *"(…)la intención o voluntad de tenerla como dueño (animus domini) o de conseguir esa calidad (animus rem sibi habendi) que por escapar a la percepción directa de los sentidos es preciso presumir de la comprobación plena e inequívoca de la existencia de hechos externos que le sirvan de indicio(…)"*[20], sin que pueda pasarse inadvertido que la prueba testimonial, se erige en la prueba reina en esta clase contiendas.

7. De otro lado, en punto al cuestionamiento a la falta de inspección judicial, basta con decir que al ser un litigio que se surte por una vía especial, por cuanto se reclaman viviendas de interés social, el numeral 4º, del artículo 94 de la Ley 388 de 1997, faculta al juez abstenerse de practicar ese medio de prueba y en su lugar, ordenar un dictamen pericial, como ocurrió en el *sub judice,* sin que ello implique invalidez alguna.

8. Agréguese a lo expuesto, la insuficiencia de acreditación que los inmuebles materia de usucapión puedan catalogarse como viviendas de interés social, como pasa a explicarse.

En efecto, los trabajos técnicos adosados resultan anodinos para establecer el requisito consagrado en el artículo 91 de la Ley 388 de 1997, esto es, que el valor de las heredades a prescribir sea inferior a 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes, puesto que se

[20] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 20 de abril de 1944.

determinó aplicando el método "*De acuerdo a la Ley 794 de Enero 08 de 2003 modificada por el Artículo 516 del C.P.C., se establece que el nivel comercial de un predio es el incremento del 30% del valor del avalúo comercial*"[21], el precio comercial de cada uno, para el año 2021, época en que se realizaron los laboríos y no para la fecha de su adquisición o adjudicación, como se exige, según lo reiterado por el órgano Cumbre de la Jurisdicción Ordinaria:

> *"…Desde la sentencia de casación de 12 de abril de 2004, exp. 7077, la Corte señaló que la "vivienda de interés social" presenta sólo dos exigencias mínimas: destinación del inmueble y precio. En efecto, se dijo en dicho fallo: "En este derrotero la ley 9ª de 1989 se ocupó de establecer unas exigencias mínimas, que por supuesto parten primeramente de la destinación del inmueble; de allí que se advierta que debe tratarse de "soluciones de vivienda" para, adicionalmente, vincular a este requisito un factor común consistente en el precio de la "adquisición o adjudicación" que para ellas corresponda o haya correspondido en la fecha de adquisición, expresado en salarios mínimos legales mensuales…"*[22].

Así las cosas, ninguno de los otros medios suasorios incorporados al plenario, resultan ser idóneos ni suficientes para establecer la identidad y el valor de los inmuebles objetos de litigio, luego, advierte la Sala insatisfecho dicho presupuesto, añadiéndose una razón más para la negativa de las pretensiones de los demandantes, habida consideración que ante la falta de uno de los elementos axiológicos que se requieren para el buen éxito de la acción incoada, deviene frustránea la usucapión como modo de adquirir el dominio.

9. De colofón, al no abrirse paso a los fundamentos de la censura, habrá de confirmarse la sentencia atacada por las razones esbozadas en precedencia, sin lugar a condena en costas por no aparecer causadas (numeral 8º, regla 365 del C.G.P.).

---

[21] Archivo "*01CuadernoUnoTomoIV.pdf*".
[22] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 11 de septiembre de 2012. Magistrado Ponente doctor Fernando Giraldo Gutiérrez.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, en nombre la República de Colombia y por autoridad de la Ley, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Quinta Civil de Decisión,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida en audiencia, 14 de julio de 2023, por el Juzgado Cuarenta y Seis Civil de Circuito de Bogotá, por las razones expuestas.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

TERCERO: En su oportunidad, devuélvase el expediente a la dependencia de origen.

NOTIFÍQUESE

SANDRA CECILIA RODRÍGUEZ ESLAVA
Magistrada

CLARA INÉS MÁRQUEZ BULLA
Magistrada

ÁNGELA MARÍA PELÁEZ ARENAS
Magistrada

Firmado Por:

Sandra Cecilia Rodriguez Eslava
Magistrada
Sala Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Clara Ines Marquez Bulla
Magistrada
Sala 003 Civil
Tribunal Superior De Bogotá D.C.,

Angela Maria Pelaez Arenas
Magistrada
Sala 009 Civil
Tribunal Superior De Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **e668e4820691a4f7188fd9c9c3ce0e2fe1989b491393b6d0b9d0982769c3167b**
Documento generado en 29/02/2024 04:45:20 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CUARTA DE DECISIÓN CIVIL

Magistrada Ponente: **AÍDA VICTORIA LOZANO RICO**

Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

Discutido en sesiones virtuales ordinarias del 19 y 26 de febrero de 2024, aprobado en la última.

Ref. Proceso de expropiación de la **AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA** contra **MARÍA LEONOR VELASCO MELO** (Apelación de sentencia). **Rad.** 11001-3103-004-2022-00515-01

Se emite sentencia de segunda instancia conforme lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, por tratarse de la disposición vigente para la época en la que se formuló la impugnación.

I. ASUNTO A RESOLVER

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 23 de junio de 2023, adicionada el 25 de agosto siguiente, por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá.

II. ANTECEDENTES

1. Pretensiones.

La Agencia Nacional de Infraestructura demandó a María Leonor Velasco Melo, para que se decrete a favor de esa entidad, la expropiación judicial de una zona de terreno que ha de segregarse del inmueble identificado con el folio de matrícula número 50N- 20441645 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, denominado “Los Robles Lote 39”,

ubicado en el área rural de la vereda La Balsa, en el municipio de Chía, departamento de Cundinamarca, con un área requerida de 1.108,91 metros cuadrados[1].

Pidió, en consecuencia, ordenar a la memorada autoridad registral, inscribir la sentencia en el folio de matrícula respectivo y abrir uno nuevo para el expropiado; asimismo, solicitó la cancelación del Reglamento de Propiedad Horizontal del inmueble, constituido mediante escritura pública número 1999 del 13 de septiembre de 2004, otorgada en la Notaría Sesenta y Uno de esta ciudad. De igual modo, pretendió se declare la improcedencia de cualquier cobro de cuota de administración derivado de ese régimen.

2. Sustento Fáctico.

Como apoyo de sus pretensiones, refirió los hechos que se sintetizan a continuación:

Mediante Resolución No. 673 del 12 de mayo de 2016, modificada por la 1694 del 15 de noviembre siguiente, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura declararon de utilidad pública e interés social el proyecto denominado "Accesos Norte de la Ciudad de Bogotá", de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1682 de 2013.

Para la ejecución de la obra pública, la demandante necesita adquirir la zona de terreno objeto de las pretensiones de la demanda. El precio del inmueble objeto de expropiación es de $332.673.000, según avalúo elaborado por la Cámara de la Propiedad Raíz – Lonja Inmobiliaria.

El 30 de julio de 2020, la parte actora presentó a la convocada la Oferta Formal de Compra No. ACNB-8749-2020 de esa misma fecha, con base en el avalúo mencionado.

---

[1] Folio 8, Archivo "*04 Demanda"* del "*C01 Principal"* en "01CuadernoPrincipal".

La señora María Leonor Velasco Melo aceptó la Oferta Formal de Compra, razón por la cual el 2 de octubre de 2020, suscribió con la Sociedad Accesos Norte de Bogotá S.A.S. un contrato de promesa de compraventa, acta de recibo y entrega del predio.

La promotora de la acción, a través del citado ente moral, pagó a la propietaria la suma de $266.138.400, correspondiente al 80% del precio de la heredad, según lo pactado en ese convenio preparatorio.

El Parágrafo de la Cláusula Quinta de ese pacto establece que el predio objeto de la expropiación debe entregarse a la compradora libre de todo gravamen, incluida la cancelación del reglamento de propiedad horizontal que pesa sobre él.

La promitente vendedora ha requerido en varias ocasiones a los órganos administradores de la Propiedad Horizontal Conjunto Residencial Los Robles P.H. para que levanten esa afectación, sin obtener respuesta positiva.

Ante la imposibilidad de celebrar el contrato prometido por la existencia del régimen de propiedad horizontal al que se encuentra sometido el terreno, la Agencia Nacional de Infraestructura expidió la Resolución No. 20226060018905 del 18 de noviembre de 2022, mediante la cual ordenó el inicio del trámite de expropiación del inmueble por motivos de utilidad pública.

Ese acto administrativo quedó ejecutoriado el 24 de noviembre del 2022, según la constancia expedida por el coordinador GIT Predial de la Agencia Nacional de Infraestructura.

3. Contestación.

La demandada admitió la verdad de los hechos en que se fundamentaron las pretensiones, se allanó a las mismas y solicitó ordenar a su contradictor pagarle el saldo del precio del inmueble. Asimismo, en

consideración a la destinación especial de uso público del bien raíz, pidió cancelar la acción que como propietaria del predio tiene en el Club San Jacinto[2].

4. La sentencia de primera instancia.

Luego de citar los fundamentos jurídicos de la expropiación por motivos de utilidad pública, y constatar que están probados los supuestos de hecho que exigen las normas sustanciales para la declaración de la consecuencia jurídica materia de las pretensiones, atendiendo al allanamiento de la demandada al *petitum*, el sentenciador de primera instancia decretó –a favor de la parte actora y a cargo de la pasiva– la expropiación, por motivos de utilidad pública e interés social, de la porción o área de terreno a segregarse del inmueble identificado con el folio de matrícula No. 50N20441645 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, el cual forma parte del predio denominado "Los Robles" Lote 39, ubicado en el área rural de la vereda La Balsa, municipio de Chía, departamento de Cundinamarca, con un área requerida de 1.108,91 metros cuadrados[3].

En consecuencia, ordenó la inscripción de la sentencia en el registro correspondiente, la cancelación de gravámenes, embargos e inscripciones que pesen sobre el inmueble expropiado.

Como el avalúo presentado por la demandante no fue objetado, se estableció la indemnización en la suma de $332.673.000, de los cuales la demandada recibió $266.138.400. Indicó que el saldo deberá quedar a disposición del despacho, indexado desde la entrega del predio hasta cuando se pague la totalidad de la obligación.

5. La solicitud de complementación.

La convocada pidió adicionar el fallo, porque no se pronunció sobre las pretensiones de cancelación del reglamento de propiedad horizontal y de

---

[2] Archivo "*14 Allanamiento Demanda", ib.*
[3] Archivo *"16Sentencia.pdf", ejusdem.*

improcedencia de cualquier cobro por concepto de cuotas de administración derivadas de ese régimen[4].

Asimismo, incoó pronunciarse sobre la cancelación de la acción que le corresponde al propietario del inmueble en el Club San Jacinto, tal como fue reclamado en la contestación de la demanda.

6. La adición de la decisión.

Mediante proveído del 25 de agosto de 2023, el juez de primera instancia adicionó el fallo, en el sentido de disponer que *"no procede el cobro de cuotas de administración respecto del inmueble expropiado y descrito en el numeral 1º de la parte resolutiva de esta sentencia. En lo demás permanece incólume la sentencia proferida"*[5].

7. La apelación.

La convocada se mostró inconforme con la decisión anterior y, planteó el remedio vertical. Para ello, formuló sus reparos[6], sustentando en oportunidad la alzada.

Solicitó al juzgador de segunda instancia precisar que el cobro de las cuotas de administración es improcedente desde la fecha en que se entregó el inmueble a la Agencia Nacional de Infraestructura. Además, insistió en que el fallo debe ordenar la cancelación de la acción del Club San Jacinto que está ligada a la condición de propietario del predio[7].

8. Pronunciamiento del no apelante.

La entidad demandante coadyuvó los argumentos de la pasiva, pues desde la entrega del terreno a su favor, no deben causarse cobros por cuotas de administración ni por la acción del Club San Jacinto[8].

---

[4] Archivo *"17solicitudComplementaciónSent.pdf"*, *ejusdem.*
[5] Archivo "*19 Auto Ordena Adición", ibidem.*
[6] Archivo "*20 Apelación", ejusdem.*
[7] Archivo "*05 Sustenta Apelación",* en "*02 Cuaderno Tribunal".*
[8] Archivo "*07 Descorre Apelación", ibidem.*

III. CONSIDERACIONES

Concurren los presupuestos procesales y no se advierte vicio que invalide la actuación, siendo del caso precisar que la competencia del *Ad quem* está delimitada a los reproches sustentados por el apelante, dejando al margen del escrutinio cualquier cuestión que no hubiere suscitado inconformidad, ni esté íntimamente relacionada con las eventuales modificaciones frente a lo resuelto en el fallo cuestionado (artículo 328 del Código General del Proceso).

Está demostrado que las partes llegaron a un acuerdo sobre el precio del inmueble en la etapa de enajenación voluntaria, pues la demandada aceptó la oferta que le hizo la demandante, suscribió el contrato de promesa de compraventa, entregó el predio y recibió una parte del precio.

A pesar del ánimo claro de negociación de la propietaria, no fue posible llevar a término la enajenación voluntaria directa por circunstancias ajenas a la vendedora, específicamente, por la afectación del terreno al régimen de propiedad horizontal, constituido mediante escritura pública No. 1999 del 13 de septiembre de 2004, otorgada en la Notaría Sesenta y Uno de Bogotá.

Como ya se dijo, esa situación impidió la venta directa de la heredad, e impuso a las partes la necesidad de acudir al proceso de expropiación judicial en la forma y términos previstos en el artículo 28 de la Ley 9 de 1989.

De manera que el objeto del litigio consistió, más que en la expropiación misma o el precio del bien (puntos sobre los cuales no hubo discrepancia), en las obligaciones que el dueño de una cosa está llamado a asumir debido a su condición de propietario y, específicamente, a las expensas comunes emanadas del régimen de propiedad horizontal, las cuales no pueden seguir siendo asumidas por la entidad adquirente, porque el bien expropiado cumplirá una función de utilidad pública e

interés social, desligada por completo de la copropiedad a la cual estaba vinculada.

En efecto, las obligaciones reales, llamadas también *propter rem*, *ob rem* o *rei coharens* –explica ALESSANDRI– *"son aquellas que incumben al propietario o al poseedor de una cosa por el solo hecho de serlo. También se dice que consisten en una prestación, generalmente periódica, de entregar o de hacer, que es debida en razón de tenerse un derecho o un poder sobre una cosa; en ella el deudor resulta tal por estar investido de derecho o poder"*[9].

Esa clase de prestaciones presentan las siguientes particularidades: (i) su deudor es la persona que ostenta la calidad de propietaria o poseedora de la cosa; y, (ii) la obligación se traspasa al sucesor particular en forma automática: si cambia el titular de la posesión o del dominio, modifica también, al mismo tiempo, el sujeto pasivo de la obligación, sin que sea necesaria ninguna estipulación especial de transferencia o una declaración por parte del sucesor particular de hacerse cargo de ella.

Ella sigue a la cosa (*propter rem*) y grava a los adquirentes sucesivos y, por lo general, desvincula al enajenante. Por este ir de un sujeto a otro, es "ambulatoria". El deudor, por su parte, solo se libera cuando abandona la cosa por cuya causa está constreñido, o se desprende de su dominio por cualquier modo; o bien por expreso mandato legal.

Algunos ejemplos de ellas consagradas en el Código Civil son: la que tienen los propietarios de un cerramiento a contribuir en las expensas de construcción, conservación y reparación del cerramiento (artículo 916); la del condueño de una cerca viva de derribar los árboles medianeros, a solicitud de otro propietario que sufre un daño provocado por aquellos (canon 917); la del dueño del árbol que extiende sus ramas sobre el suelo ajeno, o penetra en él con sus raíces, de cortar la parte excedente de las ramas o raíces (regla 999); entre muchas otras.

---

[9] Arturo Alessandri Rodríguez. Tratado de los derechos reales. Bienes, Tomo I. 6ª ed. Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile, p. 61.

Todos los casos señalados en la ley, en los cuales el adquirente de un inmueble contrae las obligaciones emanadas de su derecho de propiedad, son obligaciones *propter rem*.

También lo es la de contribuir a las expensas comunes de un edificio o copropiedad, como lo establece el precepto 29 de la Ley 675 de 2001:

> "*PARTICIPACIÓN EN LAS EXPENSAS COMUNES NECESARIAS. Los propietarios de los bienes privados de un edificio o conjunto estarán obligados a contribuir al pago de las expensas necesarias causadas por la administración y la prestación de servicios comunes esenciales para la existencia, seguridad y conservación de los bienes comunes, de acuerdo con el reglamento de propiedad horizontal.*
>
> *Para efecto de las expensas comunes ordinarias, existirá solidaridad en su pago entre el propietario y el tenedor a cualquier título de bienes de dominio privado.*
>
> *Igualmente, existirá solidaridad en su pago entre el propietario anterior y el nuevo propietario del respectivo bien privado, respecto de las expensas comunes no pagadas por el primero, al momento de llevarse a cabo la transferencia del derecho de dominio.*
>
> *En la escritura de transferencia de dominio de un bien inmueble sometido a propiedad horizontal, el notario exigirá paz y salvo de las contribuciones a las expensas comunes expedido por el Representante Legal de la copropiedad".*

En el caso *sub examine* el motivo principal para promover el trámite de expropiación judicial, fue la imposibilidad de suscribir la escritura de compraventa por la afectación del inmueble de mayor extensión al régimen de propiedad horizontal y, la existencia de obligaciones por concepto de contribuciones a las expensas comunes, sin cuyo paz y salvo el notario no puede otorgar el respectivo instrumento público.

Asimismo, se requiere solucionar el inconveniente que supone la solidaridad que impone la ley, al anterior y al nuevo propietario para el pago de las expensas comunes.

Pues bien, debido a las particularidades del inmueble materia de la expropiación, no es posible ordenar la cancelación de gravámenes, embargos e inscripciones que pesan sobre el predio de mayor extensión, pues solo una fracción de él debe ser objeto de esas determinaciones; de suerte que los titulares de derechos reales sobre el terreno de mayor extensión no pueden verse afectados por las decisiones que incumben a la franja de la heredad declarada de utilidad pública e interés social.

Y como quiera que el bien raíz desenglobado por razón de la expropiación no tiene folio de matrícula inmobiliaria todavía, por sustracción de materia, no sería esa la medida más idónea para solucionar el conflicto y asegurar el cumplimiento de los fines propuestos por el legislador en el numeral 7 del artículo 399 del Código General del Proceso.

Por lo demás, las obligaciones *propter rem* materia de la controversia no son derechos reales o gravámenes a favor de terceros, sino cargas inherentes a la condición de propietario, por lo que la orden de cancelar los que recaigan sobre el bien, no estarían resolviendo el problema de su subsistencia.

Con todo, como quiera que el bien materia de la expropiación es una fracción que se separará del inmueble sobre el que recae la afectación de propiedad horizontal, para los efectos perseguidos por las partes es suficiente con declarar que el régimen de propiedad horizontal le es inoponible a la entidad adquirente y, por tanto, el nuevo folio de matrícula que se le abra al bien expropiado no debe contener anotaciones concernientes a las obligaciones emanadas del aludido régimen de copropiedad.

No resulta necesario, conveniente, ni jurídico, en suma, ordenar la cancelación de la escritura pública mediante la cual se constituyó el reglamento de la copropiedad, como tampoco es indispensable que se levante la respectiva anotación en el folio de matrícula correspondiente al lote de mayor extensión, porque frente a los demás copropietarios del Conjunto Residencial Los Robles P.H. el reglamento conserva toda su validez; de manera que ordenar su “cancelación”, como pretenden las partes, sería una medida inútil, desproporcionada y carente de sustento legal.

Por las razones expresadas, se hará la correspondiente modificación de la sentencia, sin importar que el punto que aquí se trata haya sido o no materia de la apelación, toda vez que es un asunto íntimamente relacionado con la decisión adoptada por el *a quo* y no comporta una

incongruencia según lo previsto en el último inciso del artículo 281 del Código General del Proceso.

Con relación a la solicitud de precisión de la fecha a partir de la cual no procede el cobro de las expensas comunes, cuotas de administración o cualquier otra obligación emanada del régimen de propiedad horizontal, se accederá al pedimento, señalando que esas prestaciones se extinguieron desde el momento en que quedó en firme la Resolución 20226060018905 del 18 de noviembre de 2022, esto es, a partir del 24 siguiente.

Por último, en lo que respecta a la acción del Club San Jacinto, derecho al que accede quien tiene la condición de propietario del terreno, a quien en principio se le impone el pago de unos emolumentos como contraprestación, lo cierto es que una vez desmembrado el predio expropiado del inmueble de mayor extensión respecto del cual esa acción cumplía su función, carece de todo sentido la permanencia del título representativo de derechos en la corporación civil, toda vez que la entidad adquirente del predio desenglobado como consecuencia de la expropiación, no puede ejercitar esas prerrogativas ni asumir las obligaciones emanadas de su titularidad, por lo tanto, se declararán extintas a partir de la ejecutoria de la resolución que ordenó la expropiación.

En todo lo demás se confirmará el fallo impugnado, sin que haya lugar a imponer condena en costas debido a la prosperidad parcial de su recurso.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la **SALA CUARTA DE DECISIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**, administrando justicia en el nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

Primero. ADICIONAR la sentencia del 23 de junio de 2023 y su complementación del 25 de agosto siguiente, proferidas por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá, para disponer lo siguiente:

-**ORDENAR** al Registrador de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Norte, la apertura de un nuevo folio de matrícula inmobiliaria, correspondiente a la porción del terreno objeto de expropiación, identificado por el *a quo* en el fallo, cuyo titular del derecho de dominio será la Agencia Nacional de Infraestructura, por haberlo adquirido por el modo de la expropiación judicial. Ofíciese por la secretaría del Despacho de primera instancia.

-**DECLARAR** que el reglamento de propiedad horizontal constituido, mediante escritura pública número 1999 del 13 de septiembre de 2004, otorgada en la Notaría Sesenta y Uno de Bogotá, **le es inoponible** a la porción del terreno expropiado. Por lo tanto, el nuevo folio de matrícula no podrá contener anotaciones relacionadas con el mencionado régimen de propiedad horizontal.

-**ADVERTIR** al Registrador de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Norte que los gravámenes, embargos e inscripciones que recaen actualmente sobre el inmueble de mayor extensión identificado con el folio No. 50N-20441645, no podrán trasladarse al que debe darse apertura. Ofíciese por el *a quo.*

Segundo. MODIFICAR el fallo aludido para **DECLARAR** que todas las obligaciones emanadas de la acción del Club San Jacinto, a cargo del propietario del inmueble materia de la expropiación, así como las derivadas del régimen de propiedad horizontal constituido mediante escritura pública número 1999 del 13 de septiembre de 2004, otorgada

en la Notaría Sesenta y Uno de Bogotá, especialmente las correspondientes a expensas comunes, cuotas de administración ordinarias y extraordinarias, etc., quedan extinguidas a partir del 24 de noviembre del 2022, frente a la anterior propietaria del inmueble expropiado y con respecto a los adquirentes sucesivos.

Comuníquese esta decisión a las administraciones del Conjunto Residencial Los Robles P.H. y al Club San Jacinto, para que adopten las medidas a las que hubiere lugar. La secretaría del *a quo* procederá de conformidad.

Tercero. CONFIRMAR en lo demás el fallo de fecha y procedencia antes indicado.

Cuarto. Sin lugar a imponer condena en costas en esta instancia, ante la prosperidad del recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado Por:

Aida Victoria Lozano Rico
Magistrada
Sala 016 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Jose Alfonso Isaza Davila
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 018 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Flor Margoth Gonzalez Florez
Magistrada
Sala Despacho 12 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **f65b514e528833ca69e41e5c9784471a3f203be5a4013090438ab639d2ccc5c5**

Documento generado en 28/02/2024 05:55:13 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

R.I. 16476

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ - SALA CIVIL

11001319900320210261401

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

En atención a que la ponencia presentada para consideración de los demás integrantes de la Sala de Decisión en punto de la alzada incoada por la actora, no fue aprobada por la mayoría, se impone que el presente asunto pase inmediatamente al despacho del H. Magistrado Jaime Chavarro Mahecha, quien sigue en turno para lo de su competencia.

Notifíquese y Cúmplase,

(firma electrónica)

STELLA MARÍA AYAZO PERNETH

Magistrada

Firmado Por:

Stella Maria Ayazo Perneth

Magistrada

Sala 04 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **e30fd64cac371bb4768390e09fe4a3cebfef78553edfb9f22fa238d0d6b21668**

Documento generado en 29/02/2024 12:13:20 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

R.I. 16476

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ - SALA CIVIL

Bogotá D.C. veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

Magistrada Ponente. STELLA MARÍA AYAZO PERNETH

Proceso	Verbal
Demandante	Carmen Cristina Espitia Rosso
Demandado	Acción Sociedad Fiduciaria S.A.
Radicado	11001319900320210261401
Instancia	Segunda
Asunto	Sentencia

Discutido y aprobado en Sala del 21 de febrero de 2024 Acta 007.

I.- ASUNTO

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el extremo demandado, contra la sentencia proferida el 3 de octubre de 2023, por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera, dentro del proceso de la referencia.

De manera *liminar* se advierte que la ponencia presentada para consideración de los demás integrantes de la Sala de Decisión en punto de la alzada incoada por la actora no fue aprobada por la mayoría, tras considerarse que la recurrente no argumentó en esta instancia las censuras esgrimidas ante el juzgador de primer grado, en los términos de los artículos 322 y 327 del Código General del Proceso, razón por la cual se remitió al Magistrado que sigue en turno con auto de fecha 28 de febrero de 2024.

II.- ANTECEDENTES

1). PETITUM:[1]

Carmen Cristina Espitia Rosso, demandó a Acción Sociedad Fiduciaria S.A., a fin de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

- Que la demandada incumplió sus deberes de diligencia, lealtad y buena fe, así como las obligaciones emanadas del contrato de vinculación al encargo fiduciario N° 1700012863.

- Se le ordene a la sociedad convocada devolverle la suma de $192.622.826 por concepto del valor pagado por el apartamento 503 de la unidad residencial Eva Punta Arena

[1] Archivo: 024.Reforma.pdf

Etapa I y $4.503.538 por los gastos de escrituración, beneficencia y registro, debidamente actualizados.

- Se condene a la sociedad Acción Sociedad Fiduciaria S.A. al pago de *"los perjuicios que su mala gestión le ha ocasionado, tasados con base en el interés moratorio establecido por la Superintendencia Financiera para el día 22 de octubre de 2018, fecha en que se frustró la transferencia de la propiedad y se materializó el incumplimiento de la obligación contractual y legal a cargo de esa fiduciaria."*

- Que se condene a la convocada al pago de *"los excedentes invertidos en el encargo 1700012863 cuyo valor asciende a $50.000.000 del año 2020, capital que deberá actualizarse así: a) con base en la inflación desde el día de la inversión y hasta el 18 de mayo de 2021; b) con base en el interés moratorio máximo permitido por la ley desde el 19 de mayo de 2021 (fecha en que se solicitó la devolución) hasta que la misma se haga efectiva."*

- Las demás declaraciones y condenas que en uso de las facultades extra y ultra petita se resuelvan, de acuerdo con lo consagrado en el numeral 9 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011.

- Se le imponga a la demandada el pago de costas y agencias en derecho.

2). CAUSA:

Como fundamentos fácticos, la parte demandante expuso los que admiten el siguiente compendio:

- A través de la Escritura Pública N° 4554 del 18 de diciembre de 2012 se constituyó el Fideicomiso de Parqueo Eva Girardot cuya vocera y administradora es la sociedad Acción Sociedad Fiduciaria S.A.

- El 28 de diciembre de 2016 Carmen Cristina Espitia y Juan Sebastián Díaz Espitia suscribieron en calidad de beneficiarios de área el contrato de vinculación al Fideicomiso de Parqueo Eva Girardot.

- El 3 de febrero de 2017, Juan Sebastián Díaz Espitia cedió en favor de su señora madre, Carmen Cristina Espitia, el derecho que tenía en el mentado encargo fiduciario.

- El 9 de agosto de 2018 la empresa Construcciones Inteligentes Eva S.A.S. le entregó a la actora el apartamento 503 y los parqueaderos 15 y 16 de la unidad residencial Eva Punta Arena Etapa I, según se acordó en el convenio celebrado entre las partes.

- El 22 de octubre de 2018 la demandante suscribió en la Notaría 70 del Círculo Notarial de esta ciudad, la Escritura

Pública N° 1576 de 2018; no obstante, dicho instrumento *"nunca se protocolizó ni fue suscrito por el Notario autorizado porque faltaba la firma del Representante del Banco Colpatria hipoteca global que en su momento constituyó el FIDEICOMISO PARQUEO en favor del Banco Colpatria sobre la totalidad del lote donde se construyó el proyecto."*

- El 26 de marzo de 2019 el Banco Colpatria le informó que sólo *"liberará los lotes o construcciones del proyecto que se vayan enajenando única y exclusivamente mediante el pago proporcional del gravamen que afecta cada lote o construcción."*

- El 21 de mayo de 2019 la convocada le comunicó que debía dirigirse ante Construcciones Inteligentes Eva S.A.S. para que *"a la mayor brevedad posible proceda a dar respuesta a la misma de manera clara y suficiente."*

- A la fecha no se ha suscrito la escritura pública correspondiente.

- Previa solicitud de la actora, el 20 de abril de 2021 Alianza Sociedad Fiduciaria S.A. le certificó que los valores invertidos en el encargo fiduciario N° 1700012863 ascienden a la suma de $238.119.288. En consecuencia, *"solicitó a esa entidad que le indicara el procedimiento a seguir para que le fueran devueltos los excedentes del valor que había comprometido para la adquisición del*

apartamento 503 del conjunto EVA GIRARDOT, cuyo monto fue pactado en la suma de $188.119.288."

- El 14 de mayo de 2021 la sociedad Acción Sociedad Fiduciaria S.A. le puso de presente que *"respecto de los recursos excedentes en el estado de su cuenta se está realizando la respectiva validación contra los comprobantes de consignación que aparecen registrados en sus aportes. Por favor enviar a este mismo correo el pago del excedente que se refleja en su estado de cuenta para poder confirmar la correcta aplicación de los recursos."*

- El 18 de mayo de 2021 solicitó a la demandada la devolución *"de los excedentes invertidos en el Fondo Acción Uno, solicitud que hasta la fecha no ha tenido respuesta."*

3). ACTUACIÓN PROCESAL:

Al encontrar reunidos los requisitos de la reforma de la demanda presentada la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera, la admitió el 3 de agosto de 2021[2], providencia que se notificó a la convocada, quien dentro del término de traslado contestó la demanda y propuso las siguientes excepciones de mérito: *"FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA-EL DEMANDANTE NO TIENE RELACIÓN CONTRACTUAL CON ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. A TÍTULO INSTITUCIONAL SINO CON EL FIDEICOMISO RECURSO PROYECTO EVA GIRARDOT ETAPA 1," "NO*

[2] Archivo: 027AutoDeTrámite.pdf

COMPRENDER LA DEMANDA TODOS LOS LITISCONSORTES NECESARIOS," "FALTA DE COMPETENCIA" y *"EXCEPCIÓN INNOMINADA."*[3]

A través de proveído del 7 de febrero de 2023,[4] el juzgador de instancia dispuso la vinculación del banco Scotiabank Colpatria S.A., quien alegó las defensas denominadas: *"Falta de los elementos de la responsabilidad en cabeza de Scotiabank Colpatria S.A. por cumplimiento contractual del Banco," "Cumplimiento legal y contractual," "Inexistencia de responsabilidad por parte del Banco," "Falta de derecho del demandante en contra de Scotiabank Colpatria S.A.," "Inexistencia de obligación de indemnizar a la parte demandante," "Falta de derecho en contra del vinculado (Scotiabank Colpatria S.A.)," "Falta de legitimación en la causa por pasiva (Scotiabank Colpatria S.A.)," "Scotiabank Colpatria S.A. ha actuado conforme a la Ley y los términos y condiciones del crédito No. 204101060101," "Buena Fe," "Hechos Superados," "Ausencia de Culpa," "Ausencia De Causalidad," "Ausencia De Perjuicio," "Falta de Nexo Causal," "Hecho De Un Tercero," "Las condiciones derivadas de la autorización para la liberación y en consecuencia la escrituración para la transferencia del apartamento 503 (objeto de controversia), por parte de Scotiabank Colpatria S.A. se encuentran superadas," "No hay lugar a realizar afectación y/o lesión alguna a Scotiabank Colpatria S.A. por cuenta de los hechos y pretensiones objeto de controversia"* y *"La genérica."*[5]

---

[3] Archivo: 029Anexos.pdf
[4] Archivo: 103AutoOrdenaVincular.pdf
[5] Archivo: 128Anexos.pdf

III.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 3 de octubre de 2023[6] la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera, negó las pretensiones de la demanda y declaró probadas las siguientes excepciones: *"HECHO SUPERADO"* y *"LAS CONDICIONES DERIVADAS DE LA AUTORIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN Y EN CONSECUENCIA LA ESCRITURACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DEL APARTAMENTO 503 (OBJETO DE CONTROVERSIA), POR PARTE DE SCOTIABANK COLPATRIA S.A. SE ENCUENTRAN SUPERADAS."*

Así mismo, dispuso *"que en caso de que los gastos por Escrituración sean mayores a los pagados en su momento por la demandante, $4.503.538,oo M/cte., estos deberán ser asumidos por la Sociedad Fiduciaria con su propio patrimonio por las razones indicadas en la motiva de la presente sentencia."*

Para llegar a la anterior determinación puso de presente que no era procedente acceder a las pretensiones en tanto el incumplimiento alegado no impide que se ejecute el objeto contractual y *"la jurisprudencia ha enseñado que su resolución es un remedio extremo y procede solamente en casos cuando resulta insalvable su ejecución o cuando el evento es insuperable."*

Agregó que, de conformidad con la Circular 024 de 2016, *"En los negocios cuyo objeto sea la promoción y consecución de interesados en adquirir participaciones fiduciarias, resulta fundamental que haya*

[6] Archivo: 155SentenciaEscritaNiega.pdf

suficiente claridad, información y revelación acerca de la gestión a desarrollar por la sociedad fiduciaria, así como de aspectos como: (…) 3.4.7.3.4. Si se prevé la adquisición de crédito para la financiación del proyecto, los mecanismos destinados a su pago y los riesgos de impago de dichas obligaciones."

Y en el presente asunto, Acción Sociedad Fiduciaria omitió su deber de analizar, estudiar e informar las actividades a su cargo de cara a estos mecanismos de pago, pues *"de haber sido diligente la sociedad fiduciaria, previsiva y haber dado estricto acatamiento a las circulares aquí señaladas, así como el adoptar conducta ingentes, conducentes, prudentes, es evidente pudo evitar el suceso causado materia de discusión, situación a través de la cual incluso, podría verse compelido dado este actuar a resarcir el daño con su propio patrimonio."*

Señaló que, del impago del crédito constructor dan cuenta el mandamiento de pago proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Girardot Cundinamarca en cuantía de $1.946.409.717,69 y el acuerdo de pago del 7 de febrero de 2022 por cuantía de $2.092.723.675,oo, sin que se observara frente a ello un actuar diligente y profesional de la demandada.

Refirió que *"(i) la sociedad fiduciaria conoció la existencia del crédito constructor para el apalancamiento del proyecto, ya que suscribió documentos en este sentido como deudora principal y garante bajo la administración y vocería del patrimonio que administra y objeto de análisis; (ii) no hizo el examen de riesgo que conducía esta situación por un eventual impago como tampoco estableció el servicio de la deuda*

de este crédito o constituyó una garantía suficiente que evitara ese suceso, o por lo menos aquí no lo probó; (iii) se convino a este suceso incierto, es decir, no previó lo previsible, que con esta constitución de garantía hipotecaria sumada a un posible y futuro no pago del crédito, podría causarse frente a quienes honrarían sus obligaciones completamente una afectación al no poder detentar el bien con titularidad completa a propósito de los beneficios de área (inmuebles) a los cuales se vincularon; y (iv) desconoció con su actuar la obligación indelegable y de resultado contenida en el numeral 7 del artículo 1234 del C. de Co., esto conlleva a que no es posible colegir nada diferente a que fue su propia conducta la causal de la situación, y por consecuencia, sin más elucubraciones a la realidad que condujo a este proceso siendo incluso compelida a resarcir tal evento con cargo de su propio patrimonio, (art. 1243 del C. de Co. en cc. Sent. SC2879 de 2022).”

Por último, adujo que la demandada podía verse comprometida a responder con su propio patrimonio cuando en ejercicio de su objeto social como consecuencia de sus propias obligaciones, desborda los contratos celebrados y genera daños a los constituyentes o cuando actúa con dolo y/o culpa.

IV.- LA APELACIÓN

Inconforme con la anterior determinación, la parte demandada la recurrió, por las siguientes razones:[7]

---

[7] Archivo: 09AMPLIACIÓNSUSTENTACIÓNDELRECURSODEAPELACIÓNFIDEICOMISORECURSOSPROYECTOEVAGIRARDOTETAPAIDDACARMENCRISTINAESPITIAROSSO.pdf

- En tanto el primer y el segundo reparo hacen referencia a que la sociedad Construcciones Inteligentes Eva S.A.S., es la obligada a pagar la diferencia que pudiera existir en los gastos de escrituración, se estudiaran de manera conjunta. Como sustento, la convocada afirmó que en la declaración rendida por el representante legal de la constructora expuso que dicha sociedad *"asumiría con recursos propios los gastos de escrituración adicionales que pudieran o llegasen a causarse"* y que estos no fueron sufragados por la actora al fideicomiso.

- El tercer reproche atinente a la ausencia de solidaridad entre la fiduciaria, el fideicomiso y la fideicomitente lo sustentó tras argumentar que le corresponde a la actora *"demostrar la existencia del perjuicio sufrido y el monto del mismo derivado de las actuaciones de Acción Fiduciaria en nombre propio y como vocera del patrimonio autónomo FIDEICOMISO RECURSOS PROYECTO EVA GIRARDOT ETAPA I. Dicho perjuicio, claro está, debe ser cierto, personal, directo, cuantificado y antijurídico y, en todo caso, relacionado causalmente con el comportamiento del Fideicomiso."*

V.- CONSIDERACIONES

1) PRESUPUESTOS PROCESALES:

Se advierte la presencia de los presupuestos procesales necesarios para considerar válidamente trabada la relación jurídico-procesal. En efecto, le asiste competencia al juez de primer grado para conocer del proceso y al tribunal para resolver la alzada. Las personas enfrentadas en la litis ostentan capacidad para ser parte y procesal, dada su condición de personas naturales y jurídicas en ejercicio de sus derechos; por último, la demanda reúne los requisitos mínimos de ley. Por lo demás, no se vislumbra vicio de nulidad que afecte la tramitación, supuestos estos que permiten decidir de mérito.

Adicionalmente, la competencia de la Sala se limita al examen de los puntos específicos objeto del recurso expuesto por la convocada, en aplicación a lo consagrado en el artículo 328 del Código General del Proceso, según el cual *"El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley."*

2) CASO CONCRETO:

En el presente asunto el juez de primera instancia dispuso en el numeral 4° de la sentencia recurrida que *"en caso de que los gastos por Escrituración sean mayores a los pagados en su momento por la demandante, $4.503.538,oo M/cte., estos deberán ser asumidos por la Sociedad Fiduciaria"* y en razón a que los reparos al fallo se refieren a esta determinación, a ello se limitará el estudio de la Sala.

Se advierte la necesidad de confirmar la decisión apelada, por las razones que se exponen a continuación:

En lo que hace al primer y segundo reproches, atinentes a que la eventual diferencia en los gastos de escrituración deben ser asumidos por la sociedad Construcciones Inteligentes Eva S.A.S., vale la pena precisar que según el artículo 1226 del Código de Comercio *"Son deberes **indelegables** del fiduciario, además de los previstos en el acto constitutivo, los siguientes: 1) Realizar diligentemente todos los actos necesarios para la consecución de la finalidad de la fiducia."* y *"7) Transferir los bienes a la persona a quien corresponda conforme al acto constitutivo o a la ley, una vez concluido el negocio fiduciario."* (Destacado propio)

Se sigue de lo expuesto que, como administradora y vocera del fideicomiso, le asiste a la convocada la obligación de transferir los bienes construidos en el proyecto inmobiliario y, en este asunto, no cumplió con su deber de escriturar oportunamente el apartamento 503 de la unidad residencial Eva Punta Arena Etapa I a favor de Carmen Cristina Espitia Rosso, tal como fue reconocido por ambos extremos procesales.

Así las cosas, al margen de lo depuesto por el representante legal de la sociedad Construcciones Inteligentes Eva S.A.S., no le asiste razón a la convocada al afirmar que dichos gastos deben ser cancelados por la fideicomitente, pues ello no la exonera de cumplir con sus cargas como profesional en el negocio fiduciario cuyo objeto consiste precisamente en la construcción y posterior transferencia de

dominio de un proyecto inmobiliario, que a voces de la norma en cita son indelegables.

Aunado a lo anterior, pese a que la declaratoria de incumplimiento no fue objeto de reproche en esta instancia, téngase en cuenta que la demandada no obedeció las obligaciones a su cargo, pues del mandamiento de pago del 20 de enero de 2021 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Girardot Cundinamarca librado en favor del Banco Scotiabank Colpatria S.A. en contra de Acción Sociedad Fiduciaria S.A. en calidad de vocera y administradora del fideicomiso antes mencionado, se extrae que era esta última la obligada y la propietaria de los inmuebles hipotecados para garantizar el crédito constructor.

En ese mismo sentido, el representante legal del Banco Scotiabank Colpatria S.A. afirmó en su declaración que el obligado principal del crédito es el Fideicomiso Proyecto Eva Girardot Etapa I, administrado por Acción Sociedad Fiduciaria S.A.

Así las cosas, en ejercicio de su deber de diligencia también debía estar al tanto del pago del crédito hipotecario y de la posterior transferencia de dominio de los bienes construidos en el inmueble fideicomitido.

En consecuencia, este reproche no tiene vocación de prosperidad.

Ahora, en punto del último reparo, debe memorarse que el artículo 1226 del Código de Comercio define la fiducia como "*un negocio jurídico en virtud del cual una persona llamada fiduciante o fideicomitente, transfiere uno o más bienes especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario.*"

En este orden, se tiene que el fiduciario responde hasta la culpa leve en el cumplimiento de su gestión, en los términos del artículo 1243 de la Ley Mercantil que en su tenor literal establece que *"El fiduciario responderá hasta de la culpa leve en el cumplimiento de su gestión."*

Respecto de la responsabilidad del fiduciario, la Corte Suprema de justicia ha señalado lo siguiente:

> *"El principal llamado a responder civilmente por las repercusiones económicas de la gestión encomendada es el mismo patrimonio autónomo, así como también es quien se beneficia de sus utilidades. Sin embargo, aun cuando excepcional, la responsabilidad del fiduciario normalmente se configura ante una extralimitación de sus funciones o una omisión de sus deberes, eventos frente a los cuales, ha dicho la Corte, «el fiduciario compromet[e] su responsabilidad y, por ende, sus propios bienes, frente a los afectados por su obrar ilícito, responsabilidad que en el ordenamiento jurídico patrio no es extraña, en la medida, en que el que con su dolo o culpa causa un daño está llamado a*

indemnizarlo, siendo contractual el fundamento de esa responsabilidad, si es que esa conducta activa u omisiva se dio en desarrollo de un negocio jurídico de esa naturaleza, o extracontractual, en el caso contrario». Frente a tales eventualidades cobra especial relevancia la profesionalidad del fiduciante; no porque de ella se origine un régimen de responsabilidad civil particular, sino porque la especial diligencia y los precisos conocimientos que ese agente tenía -o debía tener- sobre el contexto en el que se habría ocasionado el daño, especifican los matices del factor de imputación (subjetivo) que regirá el estudio –retrospectivo de su comportamiento y, por contera, caracterizan los linderos del patrón de conducta que deberá probar haber cumplido, para liberarse del reproche de culpabilidad."[8]

Conforme al anterior precedente, para casos como el que demanda la atención del Tribunal, para efectos de deducir una responsabilidad en cabeza de la fiduciaria, era preciso demostrar que ésta incumplió obligaciones y cargas que de conformidad con el contrato de fiducia y la ley debía observar, asunto que fue decantado en el fallo de instancia y que no se discutió por la sociedad recurrente.

Obsérvese que, a juicio del juzgador de instancia *"(i) la sociedad fiduciaria conoció la existencia del crédito constructor para el apalancamiento del proyecto, ya que suscribió documentos en este sentido como deudora principal y garante bajo la administración y vocería del patrimonio que administra y objeto de análisis; (ii) no hizo el*

[8] SC2879 de 2022.

examen de riesgo que conducía esta situación por un eventual impago como tampoco estableció el servicio de la deuda de este crédito o constituyó una garantía suficiente que evitara ese suceso, o por lo menos aquí no lo probó; (iii) se convino a este suceso incierto, es decir, no previó lo previsible, que con esta constitución de garantía hipotecaria sumada a un posible y futuro no pago del crédito, podría causarse frente a quienes honrarían sus obligaciones completamente una afectación al no poder detentar el bien con titularidad completa a propósito de los beneficios de área (inmuebles) a los cuales se vincularon; y (iv) desconoció con su actuar la obligación indelegable y de resultado contenida en el numeral 7 del artículo 1234 del C. de Co., esto conlleva a que no es posible colegir nada diferente a que fue su propia conducta la causal de la situación, y por consecuencia, sin más elucubraciones a la realidad que condujo a este proceso siendo incluso compelida a resarcir tal evento con cargo de su propio patrimonio."

Entonces, establecido el incumplimiento de la demandada, cuya declaratoria por parte del *a-quo* no fue objeto de reproche alguno, así como las consecuencias que desencadenó la desatención de sus obligaciones es procedente que la convocada asuma el pago de la diferencia que pudiera haber en el evento de que los gastos de escrituración sean mayores a los pagados por la señora Carmen Cristina Espitia Rosso, condena que no deviene de solidaridad alguna sino de la desatención de las obligaciones que legal y contractualmente le asisten.

En consecuencia, ningún reparo merece la orden atinente a que la demandada sufrague la diferencia que pudiera existir en los gastos

de escrituración del apartamento 503 de la unidad residencial Eva Punta Arena.

Lo anterior es así, pues si bien en principio la responsabilidad de la sociedad fiduciaria deviene excepcional es lo cierto que, en el presente asunto quedó acreditado que el incumplimiento de sus obligaciones desencadenó en la falta de transferencia de la titularidad del bien objeto de este litigio, tal como reconoció el *a-quo* al poner de presente que: *"los gastos sufragados por la demandante por concepto de escrituración deben ser tenidos en cuenta para la nueva escrituración, es decir, no se deberán cobrar ante un nuevo valor por esta tarea en la cuantía que la aquí demandante pagó $4.503.538 pesos m/cte. Conforme da cuenta el anexo 11 del escrito de demanda primigenio derivado 000, y frente a este último aspecto, como atrás se expusiera y dada la conducta de la fiduciaria la cual ya se identificó, de encontrarse mayores valores a los sufragados por la actora sobre dicho monto se vería compelida a asumir este dinero adicional que se causare de cara al nuevo trámite de escrituración con su propio patrimonio, orden que se emite conforme las facultades que consagra el numeral 9° del artículo 58 de la Ley 1480, y el principio de reparación integral que trae el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 283 del Código General del Proceso."*

Ahora bien, es cierto que no existe solidaridad entre la fiduciaria, el fideicomitente y el fideicomiso, sin embargo, la apelante siendo profesional en el negocio tenía la obligación de actuar con especial diligencia a fin de que se llevara a cabo el objeto del encargo fiduciario, que no era otro que la construcción del proyecto inmobiliario y posterior trasferencia a los beneficiarios de área, carga a la que no se

allanó y dicho incumplimiento es el que ocasionó la condena que aquí se reprocha.

Así las cosas, corresponde confirmar la sentencia de primera instancia, sin que sea necesario realizar consideración adicional.

VI.- DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., en Sala Segunda Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Constitución y la Ley,

RESUELVE:

Primero.- Confirmar la sentencia el 3 de octubre de 2023, por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera, por lo brevemente expuesto.

Segundo.- Se condena en costas al extremo demandado, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 365 del Código General del Proceso. Como agencias en derecho la Magistrada Sustanciadora fija la suma de un salario mínimo mensual legal vigente.

Tercero.- Devuélvase el expediente a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera para lo de su trámite y competencia.

Notifíquese y Cúmplase,

(firma electrónica)

STELLA MARÍA AYAZO PERNETH

Magistrada

(firma electrónica)

JAIME CHAVARRO MAHECHA

Magistrado

(firma electrónica)

MARÍA PATRICIA CRUZ MIRANDA

Magistrada

Firmado Por:

Stella Maria Ayazo Perneth
Magistrada
Sala 04 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Maria Patricia Cruz Miranda
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Dirección Ejecutiva De Administración Judicial

División De Sistemas De Ingenieria
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Jaime Chavarro Mahecha
Magistrado
Sala Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 3f0ef3bfabf4483bbc16842cfc9e8413862a07ffdc16c9b4fecf466a45804e60
Documento generado en 29/02/2024 04:15:19 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.

Sala Civil de Decisión

Magistrada Sustanciadora

SANDRA CECILIA RODRÍGUEZ ESLAVA

Veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

003 2021 00306 01

Se pone en conocimiento de las partes las comunicaciones remitidas por Casa y Vista Bella del Mar S.A.S. y La Previsora S.A.

En firme este proveído, hágase el ingreso de las presentes diligencias al Despacho.

NOTIFÍQUESE,

SANDRA CECILIA RODRÍGUEZ ESLAVA

Magistrada

(2)

Firmado Por:

Sandra Cecilia Rodriguez Eslava

Magistrada

Sala Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **fa75f675b0dd2848d0ea536ad1f0dd673d4b4b6895599da2266b859a844e6764**
Documento generado en 29/02/2024 04:28:38 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

MEMORIAL PARA REGISTRAR DRA RODRIGUEZ ESLAVA RV: *** DESCORRO DECRETO DE PRUEBA OFICIOSA ***** // CASA Y VISTA BELLA DEL MAR EN LIQUIDACIÓBN S.A.S. CONTRA LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, GRUPO PODER S.A. RADICADO 11001310300320210030600.**

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C.
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Lun 12/02/2024 16:36

Para:2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (299 KB)

DESCORRO DECRETO DE PRUEBA OFICIOSA TRIBUNAL SUPERIOR (Febrero 12 de 2024).pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DRA RODRIGUEZ ESLAVA

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Miguel Angel Marceles Insignares <mmarceles@hotmail.com>
Enviado: lunes, 12 de febrero de 2024 16:26
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: Miguel Angel Marceles Insignares OFICINA <oficinammarceles@gmail.com>; Gerencia@servijuridico.com <Gerencia@servijuridico.com>; info@dejud.com <info@dejud.com>
Asunto: ***** DESCORRO DECRETO DE PRUEBA OFICIOSA ***** // CASA Y VISTA BELLA DEL MAR EN LIQUIDACIÓBN S.A.S. CONTRA LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, GRUPO PODER S.A. Y ESPERANZA IGNACIA JIMENEZ BELTRAN. RADICADO 11001310300320210030600.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
SALA CIVIL DE DECISIÓN
Atte. H.M. SANDRA CECILIA RODRÍGUEZ ESLAVA
Magistrada Sustanciadora
secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co
Bogotá, D.C.

REFERENCIA: PROCESO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DE CASA Y VISTA BELLA DEL MAR S.A.S. EN LIQUIDACION CONTRA LA PREVISORA

S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS; GRUPO PODER S.A. Y ESPERANZA IGNACIA JIMENEZ BELTRAN

RAD: 11001310300320210030600

- **DESCORRO DECRETO DE PRUEBA OFICIOSA. CONTRATO DE TRANSACCIÓN SUSCRITO ENTRE LA DEMANDADA LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y LA DEMANDANTE CASA BELLA Y VISTA DEL MAR S.A.S.**

MIGUEL ANGEL MÁRCELES INSIGNARES, mayor de edad y también de esta vecindad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.153.573 de Barranquilla y portador de la Tarjeta Profesional No. 133.874 del Consejo Superior de la Judicatura, con domicilio y residencia en la carrera 43#84-33 de la ciudad de Barranquilla, Departamento del Atlántico, con correo electrónico mmarceles@hotmail.com, en mi condición de apoderado del señor **CARLOS GONTOVNIK HOBRECHT**, mayor y vecino de Barranquilla, identificado con cédula de ciudadanía número 8.666.459, quien actúa en calidad de representante legal de la sociedad **CASA Y VISTA BELLA DEL MAR S.A.S. EN LIQUIDACIÓN**, NIT. 802.018.365-1, sociedad con domicilio en la calle 73 VIA 40 -190, correo de notificaciones judiciales: masapi28@hotmail.com, estando dentro del término legal y sin perjuicio de la solicitud de nulidad por perdida de competencia, pendiente de resolver por parte del despacho, me permito descorrer la solicitud de prueba oficiosa contentiva de aportar los contratos de transacción suscritos entre las partes reseñadas en el epígrafe de la presente.

Halagado de observar la certeza que desea tener el Tribunal respecto de la ocurrencia de los hechos, así como las pruebas practicadas, debemos ratificar lo sustentando en los reparos hechos a la sentencia de primera instancia.

Dentro de un proceso de reclamación con aseguradores, una vez se cumple con los dispuesto en el inciso primero del art. 1077 del C. de Com., procede la aceptación por parte de estas del pago, conforme las coberturas, la suficiencia de suma asegurada y la aplicación de un deducible, en caso de estar pactado. Para ello, los aseguradores, previo el pago de la indemnización, obligan a los tomadores/asegurados a suscribir un contrato de transacción al cual denominan FINIQUITO DE INDEMINZACIÓN, mediante el cual la parte contractual (art. 1036 del C. de Com.) declara recibir la liquidación hecha por el asegurador (ajustador de seguros) y renunciar a cualquier tipo de acción legal por los mismos hechos.

Para el caso de marras, LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, contrató los servicios de un ajustador de seguros (ENLACE LTDA.) quien, además de encontrar cobertura de los hechos siniestrales, halla un infraseguro sobre la suma asegurada, lo cual conllevó a que el asegurado recibiera un menor valor de la indemnización por aplicación de la regla proporcional.

Ante este hecho, LUIS ALBERTO TORRES en su calidad de ajustador, se reúne con el asegurado, explica la liquidación final y transa con él, la aceptación de esta y suscriben el acuerdo transaccional bajo el documento denominado FINIQUITO DE INDEMNIZACIÓN. (audible y visible en la declaración de este testigo, visible dentro del expediente).
Muy a pesar de que los contratos de transacción han sido solicitados de manera oficiosa, debemos insistir en que hacen parte del expediente (visible de folios 86 a 93 del cuaderno de anexos de la demanda)

Ahora bien, debemos ratificar los siguiente:

Considera el despacho en su sentencia:

> *"Así, el mismo se circunscribe a las liquidaciones realizadas por el ajustador de la Previsora S. A. (demandada), copia de la reclamación realizada ante dicho asegurado y de la póliza de seguro suscrita con la misma. Lo que conlleva a determinar, que pretende el demandante que el pago de los daños aquí reclamados se de sí o sí como fruto del ajuste otrora realizado por la entidad demandada en el giro normal de su actividad aseguraticia, como si la misma constituyera una promesa de pago, situación que no está contemplada en la ley.*
>
> *Ahora bien, es menester señalar que si bien es cierto una vez se presentó la reclamación del siniestro que finalmente suscitó la presente demanda, se intentó realizar un acuerdo transaccional entre la parte demandante y la aseguradora aquí demandada, al punto que se tramitó y se envió el finiquito de los eventos reclamados con posterioridad al 30 de enero de 2017. Sin embargo, en aplicación de lo señalado en el artículo 1088 del Código de Comercio, la aseguradora se retractó de la propuesta generada. Con todo, la aseguradora demandada finalmente optó por objetar el siniestro reclamado, alegando que no se tenían los antecedentes que permitieran validar la cuantía y los daños reclamados por el demandante. En adición, se señaló que respecto al siniestro acaecido el 22 de julio de 2017, operó la prescripción ordinaria. Y así concluyó, que al no ser claras las circunstancias del modo en que ocurrieron los eventos que en consecuencia permitieran calcular la perdida alegada.*
>
> ***Lo anterior, resulta de gran importancia, toda vez que es necesario determinar que no existió transacción previa entre las partes respecto del siniestro previo acudir a la instancia judicial**."*

Esto es completamente contrario a lo declarado por el representante legal de LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

Dado que el asegurador haría un pago muy por debajo de la tasación de los perjuicios, debió TRANSAR con el asegurado para evitar un futuro litigio, tal y como lo define el art. 2469 del C.C. y fue lo que encomendaron al ajustador tal y como lo declaró.

Esto fue corroborado especialmente por declaración del representante legal de LA PREVISORA S.A. quien a pregunta del apoderado judicial de GRUPO PODER S.A. y ESPERANZA IGNACIA JIMENEZ, autorizado por la señora juez al no haber solicitado la prueba de interrogatorio de parte, respondió ***"a título de declaración"*** (visible y audible desde el minuto 1:28 en adelante del archivo de declaración del señor **JHON FREDY ALVAREZ CAMARGO** en su calidad de representante legal de LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS):

"¿PREVISORA SEGUROS EN ALGUN MOMENTO FIRMÓ CONTRATOS DE TRANSACCIÓN CON EL DEMANDANTE PARA INDEMNIZARLO?

CONTESTÓ: Si hubo algo firmado conforme se indica, hubo algo así. Se firmó un contrato con el cual se llegó a un acuerdo".

Insiste el apoderado judicial en confirmar su duda y pregunta:

PREGUNTO EN CONCRETO. ¿FIRMARON UN CONTRATO DE TRANSACCIÓN SI O NO?

CONTESTÓ: SI, en el momento sí.

Una vez más insiste:

¿Y ESE CONTRATO DE TRANSACCIÓN ESTA EN EL EXPEDIENTE?

CONTESTÓ: Yo creo que si debe estar en el expediente.

En atención a esa duda del declarante, una vez más insiste el apoderado de GRUPO PODER y pregunta, por tercera vez:

¿ENTONCES LO QUE ESTA DICIENDO FUDAMENTALMENTE ES QUE NO SE SUSCRIBIÓ UN CONTRATO DE TRANSACCIÓN O SÍ?
CONTESTÓ: PERO YA LE HABÍA CONTESTADO DOCTOR. YO NO ESTOY CONTRADICIÉNDOME DOCTOR.

DIJE QUE SI HAY UN CONTRATO QUE ESTÁ EN EL EXPEDIENTE.

La afirmación hecha por el despacho *"Lo anterior, resulta de gran importancia, toda vez que* ***es necesario determinar que no existió transacción previa entre las partes respecto del siniestro previo acudir a la instancia judicial****"* no hace parte del juicio de valor del operador judicial; por el contrario, fue una declaración que reposa en el expediente hecha por el mismo representante legal de la demandada, en la cual AFIRMÓ en cuatro (4) ocasiones que entre mi representada y LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, **SÍ** se firmaron CONTRATOS DE TRANSACCIÓN, lo cual es negado asombrosamente por el *A quo*.

En los anteriores términos presentamos el descorro de la prueba oficiosa.

De la señora magistrada.

Atentamente,

MÁRCELES, VENGAL & ASOCIADOS

Profesionales en Derecho de Seguros

MIGUEL ANGEL MÁRCELES INSIGNARES
Especialista en Derecho de Sociedades
Derecho de Seguro
Socio
Carrera 43 # 84 - 33 Piso 2
correo: mmarceles@hotmail.com
Celular: 3007123233
Barranquilla - Atlántico - Colombia.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
SALA CIVIL DE DECISIÓN
Atte. H.M. SANDRA CECILIA RODRÍGUEZ ESLAVA
Magistrada Sustanciadora
secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co
Bogotá, D.C.

REFERENCIA: **PROCESO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DE CASA Y VISTA BELLA DEL MAR S.A.S. EN LIQUIDACION CONTRA LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS; GRUPO PODER S.A. Y ESPERANZA IGNACIA JIMENEZ BELTRAN**

RAD: 11001310300320210030600

DESCORRO DECRETO DE PRUEBA OFICIOSA. CONTRATO DE TRANSACCIÓN SUSCRITO ENTRE LA DEMANDADA LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y LA DEMANDANTE CASA BELLA Y VISTA DEL MAR S.A.S.

MIGUEL ANGEL MÁRCELES INSIGNARES, mayor de edad y también de esta vecindad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.153.573 de Barranquilla y portador de la Tarjeta Profesional No. 133.874 del Consejo Superior de la Judicatura, con domicilio y residencia en la carrera 43#84-33 de la ciudad de Barranquilla, Departamento del Atlántico, con correo electrónico mmarceles@hotmail.com, en mi condición de apoderado del señor **CARLOS GONTOVNIK HOBRECHT**, mayor y vecino de Barranquilla, identificado con cédula de ciudadanía número 8.666.459, quien actúa en calidad de representante legal de la sociedad **CASA Y VISTA BELLA DEL MAR S.A.S. EN LIQUIDACIÓN**, NIT. 802.018.365-1, sociedad con domicilio en la calle 73 VIA 40 -190, correo de notificaciones judiciales: masapi28@hotmail.com, estando dentro del término legal y sin perjuicio de la solicitud de nulidad por perdida de competencia, pendiente de resolver por parte del despacho, me

permito descorrer la solicitud de prueba oficiosa contentiva de aportar los contratos de transacción suscritos entre las partes reseñadas en el epígrafe de la presente.

Halagado de observar la certeza que desea tener el Tribunal respecto de la ocurrencia de los hechos, así como las pruebas practicadas, debemos ratificar lo sustentando en los reparos hechos a la sentencia de primera instancia.

Dentro de un proceso de reclamación con aseguradores, una vez se cumple con los dispuesto en el inciso primero del art. 1077 del C. de Com., procede la aceptación por parte de estas del pago, conforme las coberturas, la suficiencia de suma asegurada y la aplicación de un deducible, en caso de estar pactado. Para ello, los aseguradores, previo el pago de la indemnización, obligan a los tomadores/asegurados a suscribir un contrato de transacción al cual denominan FINIQUITO DE INDEMINZACIÓN, mediante el cual la parte contractual (art. 1036 del C. de Com.) declara recibir la liquidación hecha por el asegurador (ajustador de seguros) y renunciar a cualquier tipo de acción legal por los mismos hechos.

Para el caso de marras, LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, contrató los servicios de un ajustador de seguros (ENLACE LTDA.) quien, además de encontrar cobertura de los hechos siniestrales, halla un infraseguro sobre la suma asegurada, lo cual conllevó a que el asegurado recibiera un menor valor de la indemnización por aplicación de la regla proporcional.

Ante este hecho, LUIS ALBERTO TORRES en su calidad de ajustador, se reúne con el asegurado, explica la liquidación final y transa con él, la aceptación de esta y suscriben el acuerdo transaccional bajo el

documento denominado FINIQUITO DE INDEMNIZACIÓN. (audible y visible en la declaración de este testigo, visible dentro del expediente). Muy a pesar de que los contratos de transacción han sido solicitados de manera oficiosa, debemos insistir en que hacen parte del expediente (visible de folios 86 a 93 del cuaderno de anexos de la demanda)

Ahora bien, debemos ratificar los siguiente:

Considera el despacho en su sentencia:

> *"Así, el mismo se circunscribe a las liquidaciones realizadas por el ajustador de la Previsora S. A. (demandada), copia de la reclamación realizada ante dicho asegurado y de la póliza de seguro suscrita con la misma. Lo que conlleva a determinar, que pretende el demandante que el pago de los daños aquí reclamados se de sí o sí como fruto del ajuste otrora realizado por la entidad demandada en el giro normal de su actividad aseguraticia, como si la misma constituyera una promesa de pago, situación que no está contemplada en la ley.*
>
> *Ahora bien, es menester señalar que si bien es cierto una vez se presentó la reclamación del siniestro que finalmente suscitó la presente demanda, se intentó realizar un acuerdo transaccional entre la parte demandante y la aseguradora aquí demandada, al punto que se tramitó y se envió el finiquito de los eventos reclamados con posterioridad al 30 de enero de 2017. Sin embargo, en aplicación de lo señalado en el artículo 1088 del Código de Comercio, la aseguradora se retractó de la propuesta generada. Con todo, la aseguradora demandada finalmente optó por objetar el siniestro reclamado, alegando que no se tenían los antecedentes que permitieran validar la cuantía y los daños reclamados por el demandante. En adición, se señaló que respecto al siniestro acaecido el 22 de julio de 2017, operó la prescripción ordinaria. Y así concluyó, que al no ser claras las circunstancias del modo en que ocurrieron los eventos que en consecuencia permitieran calcular la perdida alegada.*
>
> ***Lo anterior, resulta de gran importancia, toda vez que es necesario determinar que no existió transacción previa entre las partes respecto del siniestro previo acudir a la instancia judicial**."*

Esto es completamente contrario a lo declarado por el representante legal de LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

Dado que el asegurador haría un pago muy por debajo de la tasación de los perjuicios, debió TRANSAR con el asegurado para evitar un futuro

litigio, tal y como lo define el art. 2469 del C.C. y fue lo que encomendaron al ajustador tal y como lo declaró.

Esto fue corroborado especialmente por declaración del representante legal de LA PREVISORA S.A. quien a pregunta del apoderado judicial de GRUPO PODER S.A. y ESPERANZA IGNACIA JIMENEZ, autorizado por la señora juez al no haber solicitado la prueba de interrogatorio de parte, respondió ***"a título de declaración"*** (visible y audible desde el minuto 1:28 en adelante del archivo de declaración del señor **JHON FREDY ALVAREZ CAMARGO** en su calidad de representante legal de LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS):

> **"¿PREVISORA SEGUROS EN ALGUN MOMENTO FIRMÓ CONTRATOS DE TRANSACCIÓN CON EL DEMANDANTE PARA INDEMNIZARLO?**
>
> **CONTESTÓ: Si hubo algo firmado conforme se indica, hubo algo así. Se firmó un contrato con el cual se llegó a un acuerdo".**

Insiste el apoderado judicial en confirmar su duda y pregunta:

> **PREGUNTO EN CONCRETO. ¿FIRMARON UN CONTRATO DE TRANSACCIÓN SI O NO?**
>
> **CONTESTÓ: SI, en el momento sí.**

Una vez más insiste:

> **¿Y ESE CONTRATO DE TRANSACCIÓN ESTA EN EL EXPEDIENTE?**
>
> **CONTESTÓ: Yo creo que si debe estar en el expediente.**

En atención a esa duda del declarante, una vez más insiste el apoderado de GRUPO PODER y pregunta, por tercera vez:

> **¿ENTONCES LO QUE ESTA DICIENDO FUDAMENTALMENTE ES QUE NO SE SUSCRIBIÓ UN CONTRATO DE TRANSACCIÓN O SÍ?**
> **CONTESTÓ: PERO YA LE HABÍA CONTESTADO DOCTOR. YO NO ESTOY CONTRADICIÉNDOME DOCTOR.**

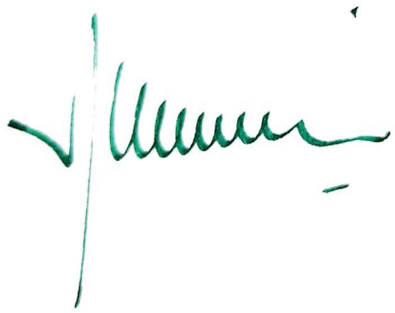
DIJE QUE SI HAY UN CONTRATO QUE ESTÁ EN EL EXPEDIENTE.

La afirmación hecha por el despacho *"Lo anterior, resulta de gran importancia, toda vez que* ***es necesario determinar que no existió transacción previa entre las partes respecto del siniestro previo acudir a la instancia judicial****"* no hace parte del juicio de valor del operador judicial; por el contrario, fue una declaración que reposa en el expediente hecha por el mismo representante legal de la demandada, en la cual AFIRMÓ en cuatro (4) ocasiones que entre mi representada y LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, **SÍ** se firmaron CONTRATOS DE TRANSACCIÓN, lo cual es negado asombrosamente por el *A quo*.

En los anteriores términos presentamos el descorro de la prueba oficiosa.

De la señora magistrada.

Atentamente,



MIGUEL ANGEL MARCELES INSIGNARES
CC. 72.153.573 de Barranquilla
TP. 133.874 del C.S. de la J.

MEMORIAL PARA REGISTRAR DRA RODRIGUEZ ESLAVA RV: MEMORIAL PRÁCTICA PRUEBA DE OFICIO RAD. 11001310300320210030600

Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C.
<secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mar 13/02/2024 11:03

Para:2 GRUPO CIVIL <2grupocivil@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (158 KB)

MEMORIAL PRUEBA DE OFICIO RAD. 2021-00306.pdf;

MEMORIAL PARA REGISTRAR DRA RODRIGUEZ ESLAVA

Cordial Saludo,

OSCAR FERNANDO CELIS FERREIRA
Secretario Sala Civil
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Avenida Calle 24 N° 53-28 Torre C Oficina 305
Teléfono 423 33 90 Extensión 8349
Email: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Zulinma Velasquez <zulinmavelasquez@yahoo.com>
Enviado: martes, 13 de febrero de 2024 10:00
Para: Secretario 02 Sala Civil Tribunal Superior - Bogotá - Bogotá D.C. <secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: mmarceles@hotmail.com <mmarceles@hotmail.com>; Gerencia Servijuridico <gerencia@servijuridico.com>; MARCO ANDRES MENDOZA BARBOSA <marco.mendoza@dejud.com>
Asunto: MEMORIAL PRÁCTICA PRUEBA DE OFICIO RAD. 11001310300320210030600

Señores:
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
SALA CIVIL
Atte. H.M. SANDRA CECILIA RODRÍGUEZ ESLAVA
Magistrada Sustanciadora
secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co
E.S.D.

PROCESO: VERBAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
RADICADO : 11001310300320210030600
DEMANDANTE: CASA Y VISTA BELLA DEL MAR S.A.S. – EN LIQUIDACION
DEMANDADOS: GRUPO PODER S.A.- ESPERANZA IGNACIA JIMENEZ BELTRAN Y LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
ASUNTO: PRÁCTICA PRUEBA DE OFICIO

RITA ZULINMA VELÁSQUEZ MEZÚ, identificada como aparece al pie de mi firma, actuando en mi calidad de apoderada judicial suplente de **LA PREVISORA S.A.** Sociedad de Economía Mixta del Orden Nacional, sometida al

régimen de empresas comerciales e industriales del Estado, acudo ante usted en forma respetuosa con la finalidad memorial respecto a la práctica de la prueba de oficio solicitada por el despacho.

Atentamente,

Rita Velásquez Mezú
Apoderada suplente Previsora S.A.

Señores:
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
SALA CIVIL
Atte. H.M. SANDRA CECILIA RODRÍGUEZ ESLAVA
Magistrada Sustanciadora
secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co
E.S.D.

PROCESO :	VERBAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
RADICADO :	11001310300320210030600
DEMANDANTE:	CASA Y VISTA BELLA DEL MAR S.A.S. – EN LIQUIDACION
DEMANDADOS:	GRUPO PODER S.A.- ESPERANZA IGNACIA JIMENEZ BELTRAN Y LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
ASUNTO:	PRÁCTICA PRUEBA DE OFICIO

RITA ZULINMA VELÁSQUEZ MEZÚ, identificada como aparece al pie de mi firma, actuando en mi calidad de apoderada judicial suplente de **LA PREVISORA S.A.** Sociedad de Economía Mixta del Orden Nacional, sometida al régimen de empresas comerciales e industriales del Estado, acudo ante usted en forma respetuosa con la finalidad de hacer manifiesto que, no es posible aportar el documento del contrato de transacción, en razón a su **inexistencia del documento aludido**, teniendo en cuenta lo siguiente:

Como bien se dijo en el memorial en el cual descorrió el recurso de apelación presentado por el apoderado judicial de la parte actora, se resaltó que, de las testimoniales solicitadas por la parte demandante, quienes acudieron el señor **LUIS ALBERTO TORRES CAMERO** y la señora **ELIZABETH JARAMILLO**, hicieron manifiesto de lo siguiente:

Respecto a la **TESTIMONIAL DEL SEÑOR TORRES CAMERO**, quien fungió en el presente caso como ajustador, manifestó que mediante su informe del siniestro por daños, en el cual tenía cobertura para la fecha, la existencia infraseguro por el 40% respecto al contrato de seguro que se pretendía hacer efectivo y de la no ocurrencia del fenómeno de la prescripción puesto que el siniestro ocurrió el 19 de junio de 2017 y además, manifestó que el hecho generador del daño fue ocasionado el 30 de enero de 2017, y fecha de presentación de reclamo el 02 de febrero de 2017; para así, concluir que, no se tuvo certeza del origen del hecho que generó el daño ni de su la cuantificación.

Respecto a la **TESTIMONIAL DE LA SEÑORA ELIZABETH JARAMILLO,** en su calidad de intermediaria entre el asegurado y la compañía aseguradora, conoció del caso en concreto, manifestó de manera contundente que, **no hubo contrato de transacción entre el asegurado y la aseguradora con el fin de dar lugar al reconocimiento y pago de los**

Contacto
+51(1) 3017864685
51(1) 3015373484
marco.mendoza@dejud.com
caterine.gonzalez@dejud.com
info@dejud.com

daños generados por el siniestro.

Ahora bien, respecto a las documentales aportadas en la exhibición de documentos prueba decretada por el despacho de primera instancia, se aportó en su totalidad, el expediente del caso en concreto. **Por lo que se manifestó, la inexistencia del contrato de transacción entre el asegurado y mi representada para el reconocimiento de la cuantía de los daños,** en razón a la indeterminación de la ocurrencia del siniestro y la configuración del fenómeno prescripción.

Es pertinente resaltar que, cuando se descorrió el traslado del recurso de apelación, se dijo en su momento lo siguiente:

"(…) lo alegado por la parte demandante en su escrito de recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito, en cuanto a la presunta confesión realizada por el representante legal de la entidad en la cual se está ejerciendo la debida defensa, no tiene vocación de prosperidad puesto que, según el artículo 195 del C.G.P., la confesión realizada por representante legal de una entidad pública no será válida, además sin perjuicio que la parte demandante desconoció tal prohibición, por lo cual debió de solicitar por ser una de las demandadas una entidad de economía mixta, dentro del término procesal oportuno. Por ende, lo manifestado y enfatizado en este aspecto por el extremo activo, no tiene incidencia en revocar el fallo de primera instancia el cual negó las pretensiones de la demanda."

Lo anterior, es corroborado por el apoderado judicial de la parte recurrente en su escrito de fecha del 12 de febrero del hogaño. Por tanto, mi representada dio cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 96 inciso final, lo concerniente al aporte de todos los documentos aludidos al caso en concreto, siendo concordante el cumplimiento de lo estipulado en el artículo 78 respecto a los deberes de las partes y sus apoderados.

Por lo anterior, no es posible aportar la prueba de oficio decretada por el despacho debido a su **inexistencia,** más no a la renuencia de mi prohijado para allegar tal documento, sin perjuicio de la aplicación del artículo 195 C.G.P.

Con toda mi consideración y respeto honorable magistrada.

Atentamente;

RITA ZULINMA VELÁSQUEZ MEZÚ
C.C. 29.678.798 de Palmira (V)
T.P. 195.130 del C.S.J.

Contacto
+51(1) 3017864685
51(1) 3015373484
marco.mendoza@dejud.com
caterine.gonzalez@dejud.com
info@dejud.com

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.

Sala Civil de Decisión

Magistrada Sustanciadora

SANDRA CECILIA RODRÍGUEZ ESLAVA

CLASE DE PROCESO	Verbal
DEMANDANTE	Casa y Vista Bella del Mar S.A.S. – En liquidación
DEMANDADO	Grupo Poder S.A. y otros
RADICADO	11001 31 03 003 2021 00306 01
PROVIDENCIA	Interlocutorio 15
DECISIÓN	Resuelve nulidad
FECHA	Veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Se procede a resolver sobre la nulidad invocada por la demandante Casa y Vista Bella del Mar S.A.S.

I. ANTECEDENTES

1. El Juzgado 3º Civil de Circuito de esta ciudad profirió sentencia de 29 de junio de 2023, por medio de la cual declaró probada la excepción denominada "*nexo causal*"; en consecuencia, negó las pretensiones del libelo genitor.

2. Tras notificarse la citada decisión, la parte accionante invocó la nulidad de que trata el artículo 121 del Código General del Proceso, al amparo de lo dilucidado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 845-2022 de 25 de mayo de 2022.

Advirtió que para que opere la pérdida de la competencia del artículo 121 del C.G.P. debe encontrarse vencido el plazo máximo de duración del proceso sin que sea resuelta la instancia, la cual debe invocarse ante el juez o magistrado con antelación a su proferimiento. A la par, le corresponde a alguno de los extremos alegarla pues en caso de no hacerlo se entenderá saneada o convalidada la irregularidad.

Señaló que en el presente asunto se superó el plazo del canon citado y por esa razón solicitó en dos oportunidades, de manera antelada, la preclusión de la competencia.

Adicionalmente, afirmó que se vulneró el inciso 5º del artículo 373 *ibidem,* por no indicar el sentido del fallo en la audiencia de instrucción y juzgamiento ni haber emitido la decisión dentro de los diez días siguientes a la celebración de ésta.

3. Esperanza Ignacia Jiménez Beltrán y Grupo Poder S.A. expresaron que no pueden acogerse los argumentos invocados por el nulidicente, porque se presentaron dificultades técnicas, logísticas y administrativas, tanto para las partes, como para la juez, sin que tuviesen incidencia en el trámite del proceso.

Precisaron que debe prevalecer el principio de realidad sobre las formas y arguyeron que el propósito del demandante es buscar otro juzgador para repetir las actuaciones de las que salió vencido.

La Previsora S.A. Compañía de Seguros explicó que la nulidad de la sentencia de primera instancia por configuración del término del artículo 121 del C.G.P. no puede declararse porque fue notificada conforme a la ley procesal, fue tempestiva y el resultado resultó adverso a lo pretendido por la demandante.

II. CONSIDERACIONES

1. Es asunto averiguado que sobre la previsión 121 del Código General del Proceso la Corte Constitucional en sentencia de Constitucionalidad C-443 de 25 de septiembre de 2019 declaró inexequible la expresión "*de pleno derecho*" y condicionó el resto del párrafo "*en el entendido de que la nulidad allí prevista debe ser alegada antes de proferirse la sentencia"*, asimismo, que se estima saneable a la luz de los artículos 132 y

subsiguientes del estatuto adjetivo.

En su sentir, de la Alta Corporación del Orden Constitucional es incompatible con la Carta Política por no contribuir de manera eficaz con la materialización del derecho a una justicia oportuna y ser un obstáculo para ese propósito. Además, de comportar una disminución en las garantías asociadas a un debido proceso y de justicia material, por "*compeler a los jueces resolver los trámites a su cargo dentro de los plazos legales, incluso si ello implica cercenar los derechos de las partes o afectar el desenvolvimiento natural de los mismos, y al dar lugar al traslado de las controversias a operadores de justicia que carecen de las condiciones y de los elementos de juicio para adoptar una decisión apropiada»*"[1].

Sobre su saneamiento, expuso que no puede desatenderse la voluntad del legislador plasmada en la aludida codificación, tendiente a determinar "*(...) que los vicios deben ser saneados en cada etapa procesal, de suerte que, en general no se pueden alegar en las fases subsiguientes (art. 132 y 133), ni tampoco por quien dio lugar al hecho que la origina o por quien después de ocurrida actúa en el proceso sin proponerla (art. 135), que la nulidad debe ser declarada judicialmente, y que se entiende saneada cuando no fue propuesta en la oportunidad debida, cuando la actuación fue convalidada, y cuando a pesar del vicio, el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa (art. 136).*" (Se destaca).

A tono con lo enunciado, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia SC845 de 25 de mayo de 2022, precisó que la configuración de la aludida pérdida de competencia requiere *(i)* del vencimiento del plazo máximo de duración del proceso sin obtener resolución de fondo y *(ii)* que una de las partes la invoque ante el juez de la causa, con antelación a esa decisión. En igual sentido, concluyó que podía convalidarse la nulidad derivada de ese actuar siempre que se cumplan las exigencias del artículo 136 *ibidem*, por no proponerse

[1] Corte Constitucional, Sentencia C-443 de 2019

oportunamente y cumplir su finalidad el acto, esto es, dictar sentencia.

2. Desde esa perspectiva se aprecia que el libelo genitor fue repartido el 2 de agosto de 2021 y su admisión se efectuó mediante proveído el 24 de septiembre siguiente, es decir, ocho días hábiles después de los 30 que exige el inciso 6º del canon 90 de la codificación evocada.

Por tanto, fue superado el lapso anual con el que contaba la juzgadora para resolver la litis, el cual inició el día siguiente de la fecha en que fue presentada la demanda, esto es, el 3 de agosto de 2021 y culminó el mismo día del año 2022, a la luz de lo preceptuado en el inciso 1º de la regla 121 *ídem* y en concordancia con el precepto citado en el párrafo que precede, sin que pueda pasarse inadvertido que la sentencia de primera instancia fue proferida el 29 de junio de 2023.

Memórese que durante la actuación el mandatario de la accionante imploró en el correo de 9 de marzo de 2022 el impulso procesal y se advirtió que estaba cercana la fecha en que se perdería la competencia. Por ello, solicitó se resolviera sobre la fecha en que se llevaría a cabo la audiencia del artículo 372 del C.G.P. pues no había actuación desde el 11 de noviembre de 2021[2]. Petición similar se formuló el 21 de abril postrero, para prevenir que el ingreso al despacho había acaecido el día 7 de ese mes y año[3].

El 3 de junio de aquella anualidad, se tuvo por notificados a los demandados, se reconoció personería a sus procuradores judiciales, quienes contestaron la demanda y se precisó que también había sido descorrido el traslado de las excepciones interpuestas[4].

Dieciocho días después, la actora pidió celeridad en el proceso[5]. De la misma forma, lo hizo el 9 y 29 de septiembre posteriores[6], elevó

[2] PDF 22MemorialSolicitudImpulsoProcesal y 23MemorialImpulso.
[3] PDF 24MemorialImpulso2.
[4] PDF 27AutoReconocePersoneríaOtros.
[5] PDF 28MemorialSolicitudImpulsoProcesal.
[6] PDF 22MemorialImpulsoProcesal.

nuevamente esa solicitud para que se conociera la época en que se llevaría a cabo la audiencia.

Valga anotar que, a pesar de haber fenecido el año para poner fin a la instancia, el demandante no alegó la nulidad, pues tan sólo impetró los impulsos procesales descritos.

Ahora bien, el 6 de octubre de 2022, se fijó fecha para celebrar la vista pública contemplada en la regla 372 del C.G.P.[7] y contra esa determinación no se enfiló censura alguna. Es más, tras la identificación de las partes, no se dijo nada respecto de la pérdida de competencia y menos aún que las actuaciones estuvieran viciadas de nulidad[8]. Incluso, se llevaron a cabo la etapa de conciliación[9], los interrogatorios a las partes[10], la fijación del litigio[11], el decreto de pruebas[12] y se señaló la fecha para continuar con la etapa de instrucción y juzgamiento[13], sin invocarse el motivo de invalidez del que ahora se duele el solicitante.

Añádase a lo dicho, que se siguieron los demás actos procesales y fue hasta el 20 y 26 de junio de 2023, cuando la parte accionante alegó la pérdida de la competencia, al amparo del canon 121 del C.G.P.[14], momento para el cual ya se encontraba saneada la actuación por parte de ambos extremos, conforme lo dispone el articulo 136 *ídem,* específicamente conforme a la causal prevista en el numeral 1º: "*Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó sin proponerla".*

De otra parte, la juzgadora de primera instancia resolvió en el auto de 26 de junio de 2023 que:

[7] PDF 31AutoSeñalaFecha-08-02-2023.
[8] MP4 40AudArt372P1; Min. 12"50'".
[9] MP4 41AudArt372P2: Min 00"47'".
[10] MP4 43AudArt372P4: Min 1'27"28'".
[11] MP4 43AudArt372P4: Min 1'34"52'".
[12] MP4 43AudArt372P4: Min 1'40"50'".
[13] MP4 43AudArt372P4: Min 1'52"40'".
[14] PDF 76MemorialPerdidaCompetencia.

"Así, en principio, pudiera pensarse esa nulidad por falta de competencia ocurrió el 2 de agosto de 2022. Sin embargo, con lo que se observa y de lo documentado en autos, se tiene que el hoy proponente parte demandante del proceso actuó sin proponerla en oportunidad, más aún si no se reparó en dicho sentido en ninguna de las audiencias aquí adelantadas y menos en la etapa del control de legalidad.

Resulta importante precisar en la figura que consagra el artículo 121 del estatuto procesal civil vigente, se interpreta de manera sistemática y completa, no aislada, por ende, la nulidad y apartamiento de la competencia deben interpretarse en forma conjunta."[15].

3. En lo que concierne a la solicitud de invalidez comentada en que se vulneró el inciso 5º del artículo 373 del Código General del Proceso, por no indicar el sentido del fallo en la audiencia de instrucción y juzgamiento ni haber emitido la decisión dentro de los diez días siguientes a la celebración de ésta, baste con advertir que ninguna de las situaciones aducidas se encuentra prevista como causal de nulidad dentro de la enunciación taxativa que trae el artículo 140 *ibidem*, como tampoco en el precepto especial, que para el caso sería el invocado por el nulidicente -art. 373 *ejusdem -.*

4. De modo que no puede salir airoso el alegato enarbolado por el promotor, dada la convalidación de la actuación después de acaecido el motivo de invalidez que adujo en la alzada y sobre el cual ya se había pronunciado el *a quo*.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, **el Tribunal Superior de Bogotá,**

RESUELVE

PRIMERO: **NEGAR** la nulidad planteada por la parte demandante.

SEGUNDO: En firme esta decisión, por secretaría efectúese el ingreso del expediente al Despacho, a fin de proveer lo que en derecho corresponda.

[15] PDF 79AutoDecideArt.121CGP.

NOTIFÍQUESE

SANDRA CECILIA RODRÍGUEZ ESLAVA

Magistrada

(2)

Firmado Por:

Sandra Cecilia Rodriguez Eslava

Magistrada

Sala Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **460fe16f630aec1dc50c935af455a69a6e5142d789c30d28dfee30d3347c430d**

Documento generado en 29/02/2024 04:24:57 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

R.I. 16365

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ - SALA CIVIL

11001310300220120041001

16365 - 002 2012 00410 01 (T)

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

Sería del caso decidir el recurso de apelación interpuesto por Falconery Cortes Castillo, heredera del demandado Luis Antonio Kuremn Solórzano (q.e.p.d.), contra la sentencia proferida el 25 de mayo de 2022, por el Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogotá D.C., dentro del proceso de la referencia, si no fuera porque se observa que lo actuado en primera instancia adolece de nulidad, conforme se explica a continuación.

Con miras a facilitar que las personas (determinadas o indeterminadas) se enteren de la existencia de procesos tramitados en su contra, o de su respectivo causante, el legislador previó tanto el mecanismo del emplazamiento como del registro único de personas emplazadas. Además, cuando se trata de acciones de pertenencia también se ordenó el registro de procesos para que todos los que se crean con derechos sobre el inmueble pretendido puedan conocerlo, dado el carácter *erga omnes* de la declaración de pertenencia. Estos registros son públicos y tienen la finalidad de permitir *"la consulta de la información del registro"* (art. 108 parágrafo 1) y que puedan *"contestar la demanda las personas emplazada*s" (art. 375 num. 7 inc. 6).

En el Acuerdo No. PSAA14-10118 de 2014, por medio del cual se crean y organizan los Registros Nacionales de Personas Emplazadas, de Procesos de Pertenencia, Bienes Vacantes o Mostrencos, y de Procesos de Sucesión, el Consejo Superior de la Judicatura dispuso que *"[l]os Registros Nacionales reglamentados mediante este Acuerdo estarán disponibles al público en general a través de la página web de la Rama Judicial: www.ramajudicial.gov.co, para facilitar su acceso, consulta y disponibilidad de la información en todo momento."*[1]

A su turno, el 20 de febrero de 2015, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial expidió los manuales *"DE USO DE LOS REGISTROS NACIONALES (RN) PARA DESPACHOS JUDICIALES"*, y el *"DE USO PARA LA CONSULTA DE PERSONAS EMPLAZADAS Y LOS REGISTROS NACIONALES (RN)."*

El primero de ellos señala que el registro se compone de 4 secciones, en las que se quiere destacar la información del sujeto, donde van los "Datos del demandante(s), demandado(s) y/o emplazados", y la del predio, para los "Datos del predio"; además, otro aparte de "consulta del ciudadano" en el que expresamente se consignó que el ingreso será por el portal de la Rama Judicial en la sección de Ciudadano, el enlace denominado "Consulta Personas Emplazadas y Registros Nacionales."

El segundo indica que el ciudadano debe tener acceso a la consulta por "Datos del proceso, Datos del ciudadano emplazado, Identificación de un predio", y en esta última opción "es viable consultar por cualquiera" de los siguientes registros "número de matrícula inmobiliaria" y "cédula catastral" para visualizar los datos del registro.

---

[1] Artículo 3 del Acuerdo No. PSAA14-10118 de 2014.

De esto se desprende que el mencionado registro lo gobiernan las características de publicidad y acceso a la información completa sobre el sujeto emplazado, el despacho que lo requiere y las partes del litigio, así como la información concerniente al predio pretendido en pertenencia; ingreso fácil a la plataforma en la que se encuentra la información y, lo más relevante, el ciudadano emplazado, o cualquier interesado en el inmueble, puede ubicar directamente, desde cualquier lugar, el trámite en el que es convocado a juicio, o donde se persigue un bien determinado, con lo que se le garantizan los derechos fundamentales a la contradicción y defensa (artículo 29 de la Constitución Política).

En el caso concreto, se advierte que, en el registro público mencionado no se incluyó el emplazamiento de la convocada ni de las personas indeterminadas, y no se puede acceder a la información en la página web diseñada para la consulta ciudadana del mencionado registro, pues al ingresar por el proceso se obtiene la siguiente advertencia: *"no se encontraron registros"*[2] Y al intentar la consulta por sujetos y el predio tampoco se visualiza ninguna información.



2 https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/justicia21/Administracion/Ciudadanos/frmConsulta.aspx?opcion=emplazados
Consultada: 29/02/2024

En consecuencia, el emplazamiento no se surtió de la manera debida, pues la norma expresamente señala que sólo *"se entenderá surtido quince (15) días después de publicada la información de dicho registro"* (inciso 6° del artículo 108 del CGP).

Así las cosas, se estructuró la nulidad regulada en el numeral 8° del artículo 133 del Código General del Proceso, por no practicarse en legal forma ***"el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas"*** respecto del bien objeto de la pertenencia, la cual no pueden tenerse como saneada en la medida en que se refiere a los terceros que no han sido debidamente convocados y que por esa misma razón estarían en imposibilidad de alegarla o proponerla, y porque quienes hubieren tenido interés en el predio no hayan conocido los datos del mismo, para solicitar pruebas en su favor.

En consecuencia, se impone declarar la nulidad de lo actuado a partir de la inclusión en el Registro de Personas Emplazadas de la demandada, las personas indeterminadas y de Procesos de Pertenencia, en su lugar, se ordenará que se haga la corrección para que la información allí contenida sea pública o la omitida se incorpore, y cumplido el término establecido en el inciso 6° del artículo 108, proceda a designar nuevamente curador *ad litem* de los emplazados y que transcurra el previsto en el inciso 6° del numeral 7° del artículo 375, para que puedan contestar la demanda.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., Sala Civil,

RESUELVE

Primero. - Declarar la nulidad de lo actuado a partir del Registro de Personas Emplazadas de la demandada, las personas indeterminadas y de Procesos de Pertenencia y, en su lugar, el *a quo*

dispondrá que la información allí contenida se haga pública, no privada, para proceder luego en la forma indicada.

Tomar las medidas de saneamiento pertinentes según lo ordenado en el párrafo final de la parte considerativa.

Segundo. La prueba practicada en esta actuación conservará validez y eficacia respecto de quienes pudieron controvertirla, tal como lo dispone el inciso segundo del artículo 138 del Código General del Proceso.

Notifíquese y Cúmplase,

(firma electrónica)

STELLA MARÍA AYAZO PERNETH

Magistrada

Firmado Por:
Stella Maria Ayazo Perneth
Magistrada
Sala 04 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **6bc80833f4e50e7b698a4c6e578ad92954eb812a36f154a9d00a840c4ce35cbc**
Documento generado en 29/02/2024 12:17:34 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.

SALA CIVIL

MARTHA ISABEL GARCÍA SERRANO
Magistrada Ponente

Bogotá D. C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Proceso: Verbal – Acción por Competencia Desleal
Radicación N.°: 11001319900120224155801
Demandante: German José Cassiani Lora
Demandado: Jairo Enrique González Ávila.

ADMITIR el recurso de apelación formulado por la parte demandante de la referencia contra la sentencia proferida en audiencia el 6 de diciembre de 2023, por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las previsiones del artículo 12 de la Ley 2213 de 2022.

Por lo anterior, **CONCEDER** al recurrente el término de cinco (5) días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia para que proceda a **SUSTENTAR** los reparos concretos que formuló ante la autoridad de primera instancia; transcurrido dicho lapso, se **CORRERÁ TRASLADO** a la contraparte por el mismo plazo, para que, si a bien lo tiene, efectúe la réplica.

Advertir al recurrente que, en ese **lapso y en ésta instancia deberá sustentar los reparos concretos que formuló ante el *a quo* o manifestar si se tiene como sustentación el escrito que presentó ante el juez de instancia, pues en caso de guardar silencio, se declarará desierto el recurso de alzada, como dispone el artículo citado**. Para todos los efectos, el **ÚNICO** correo institucional habilitado para recibir el escrito de sustentación es secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

Finalmente, **PRORROGAR** en seis (6) meses el término para decidir la apelación, dado el alto número de recursos asignados al Despacho.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

MARTHA ISABEL GARCÍA SERRANO
Magistrada

Firmado Por:

Martha Isabel Garcia Serrano

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Sala 009 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **bbb8a2f52a050e3c18981a2adbd866199ffa76946b854c94969ba4c08a549e96**

Documento generado en 29/02/2024 03:43:05 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.

Sala Civil de Decisión

Magistrada Sustanciadora

SANDRA CECILIA RODRÍGUEZ ESLAVA

CLASE DE PROCESO	Verbal
DEMANDANTE	John Alexander Florián Peña y otras
DEMANDADO	Julián Andrés Florián herrera y otros
RADICADO	11001 31 03 001 2019 00461 01
PROVIDENCIA	Interlocutorio 17
DECISIÓN	Declara nulidad
FECHA	Veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Sería del caso resolver sobre la admisión del recurso planteado, de no ser porque se vislumbra un motivo de invalidez que lo impide, a la luz del numeral 8º del canon 133 del Código General del Proceso.

El citado proveído dispone que es inválida la actuación en todo o en parte del proceso "*[c]uando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado*.".

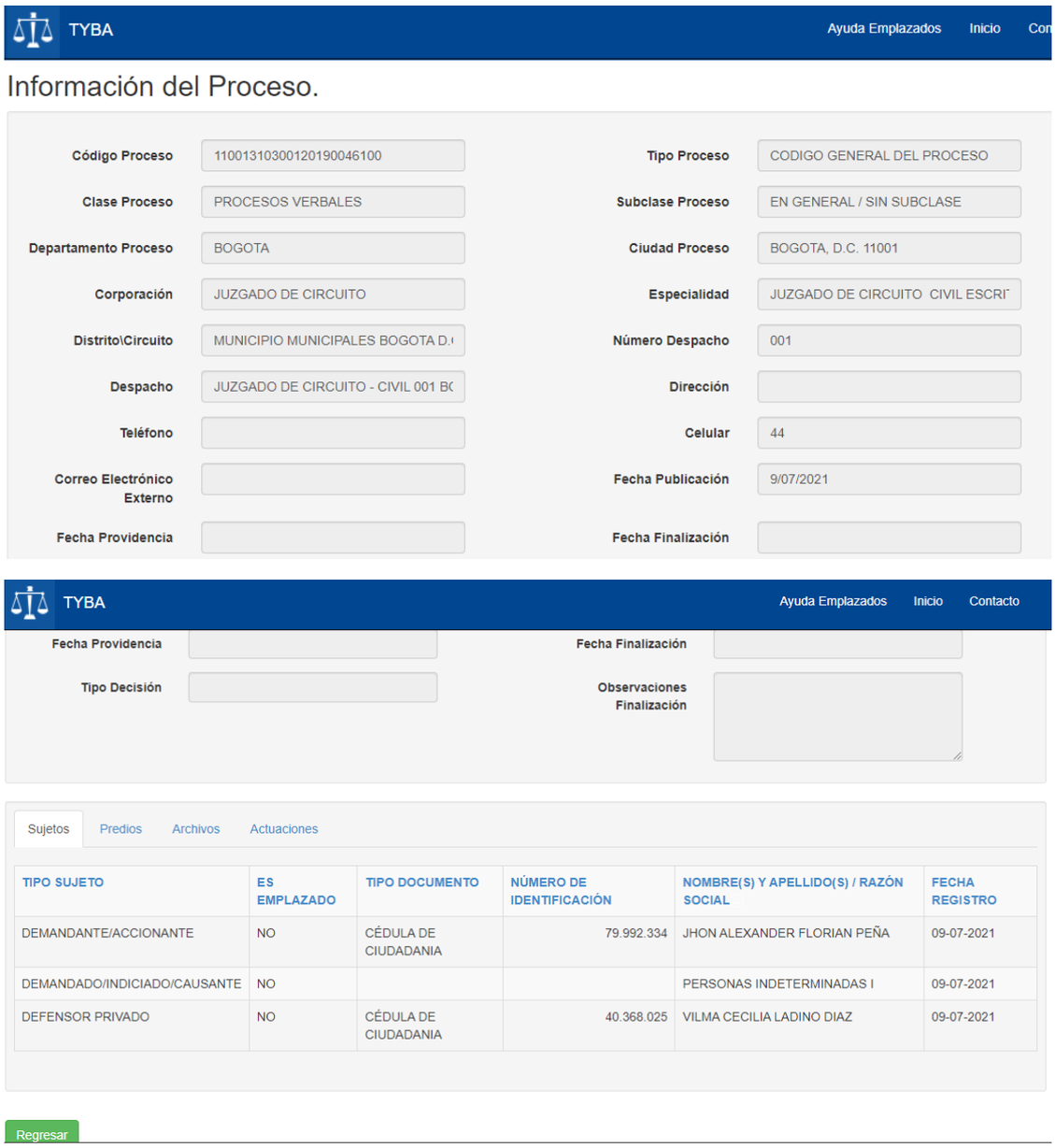
Precepto que se torna aplicable en consideración a que Marisol, Yannette, John Alexander y Yolanda Florián Peña convocaron a

Clemencia Florián Sánchez, Lilian Herrera Valencia, Julián Andrés Florián Herrera; como herederos determinados de Álvaro Enrique Florián Sánchez (Q.E.P.D.) a Blanca Doris Florián Peña, Yanneth y John Álvaro Florián Contreras, así como a los indeterminados, con el fin de obtener la declaratoria de simulación de las compraventas elevadas a las Escrituras Públicas números 1786 de 1979, 2177 de 1981 y 1115 de 1984, otorgadas en las Notarías 9, 22 y 16 de Bogotá D.C. – respectivamente, que versaron sobre el inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria 50S-294897, junto con la fiducia civil que fue constituida sobre el mismo predio y se solemnizó en el instrumento público No 4688 de 19 de septiembre de 2018 del Despacho Notarial 9º de la misma ciudad.

A la citada actuación fueron vinculados, Rosalba Peña de Florián, en beneficio de la parte actora; mientras que, por la pasiva, de manera indeterminada, los llamados a suceder a José Víctor Martínez Pachón (Q.E.P.D.), María del Carmen Sánchez Torres (Q.E.P.D.) y Álvaro Enrique Florián Sánchez (Q.E.P.D.). Por tanto, debía enterárseles e incluirse en el Registro Nacional de Personas Emplazadas la información prevista en el artículo 108 del C.G.P.

Ahora bien, las publicaciones efectuadas en el Nuevo Siglo atendieron los requisitos del aludido canon, entre ellos, la inclusión del nombre del sujeto emplazado, las partes, la clase de proceso y el juzgado que los requería, en el listado emitido por el diario nacional.

Empero, la información subida a la base de datos de personas emplazadas se hizo de forma incompleta, si en cuenta se tiene que no se especificó quiénes eran esos sujetos indeterminados respecto de los causantes y menos aún si habían sido emplazados o no:



En armonía con lo señalado, los llamados a representar la masa sucesoral de aquellos, son sus causahabientes, en virtud del canon 87 *íbidem*: "*[c]uando se pretenda demandar en proceso*

declarativo o de ejecución a los herederos de una persona cuyo proceso de sucesión no se haya iniciado y cuyos nombres se ignoren, la demanda deberá dirigirse indeterminadamente contra todos los que tengan dicha calidad, y el auto admisorio ordenará emplazarlos en la forma y para los fines previstos en este código. Si se conoce a alguno de los herederos, la demanda se dirigirá contra estos y los indeterminados".

En ese orden, resulta incontestable que esa situación impidió el acceso a la información por parte de las personas indeterminadas, a quienes se les ha hecho el llamado para concurrir al proceso.

Lo anterior contraviene lo previsto en los incisos 5º y 6º del artículo 108 del C.G.P., atinentes a la incorporación en el Registro Nacional de Personas Emplazadas del nombre del sujeto emplazado, su número de identificación, si se conoce, las partes del proceso, su naturaleza y el juzgado que lo requiere, al igual que la consecuencia de entenderse satisfecho luego de quince días de ser publicada.

Bajo ese tenor, es preciso advertir que esa omisión se erige en una indebida notificación de quienes debían ser convocados, la cual no puede ser subsanada con la intimación de la curadora ad litem, en razón a que el único legitimado para alegarla es el afectado que, en este caso, serían los ausentes. Situación que convierte en insaneable el yerro en su emplazamiento y exige del juez su declaración de oficio.

Así lo ha puntualizado la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,

> *"'Concretamente en el caso de la nulidad por indebida notificación o emplazamiento de personas indeterminadas, 'sólo podrá alegarse por la persona afectada' (Art. 143 ib.), es decir, por las personas indebidamente notificadas o emplazadas; en el punto, ha dicho la Corte que '...en lo atañedero a la causal 9 del artículo 140 del C. de P. C., se tiene que si bien es cierto que no puede ser puesta en conocimiento para que los indebidamente citados la convaliden, lo que la convierte virtualmente en insubsanable, no lo es menos que ello no significa que cualquiera de las partes resulte habilitada para alegarla, puesto que en el punto se mantiene inquebrantable la exigencia conforme a la cual sólo puede proponerla quien se encuentre legitimado para ello, es decir, aquel que no hubiere sido citado al proceso, sin perjuicio de que el juez de instancia la decrete dentro de las oportunidades que para ello le otorga la ley' (Casación Civil de 28 de abril de 1995, reiterada, entre otras, por la sentencia del 22 de febrero de 2000).*
>
> *Débese precisar en todo caso, para evitar malos entendidos, que cuando la Corte ha calificado de "virtualmente insubsanable" la nulidad surgida por el indebido emplazamiento de personas indeterminadas, ha querido significar con ello que, por razones obvias, no le es dado al juez, una vez advierta su existencia, ponerla en conocimiento de los afectados, en los términos del art.145 Código de Procedimiento Civil, para que estos se pronuncien sobre su saneamiento. No quiere decirse, por consiguiente, que frente a quien encontrándose comprendido en el llamamiento edictal indebidamente realizado comparece al proceso sin alegar la irregularidad, no se surta el saneamiento, pues, por el contrario, como claramente lo señalara esta Sala en providencia del 8 de mayo 1992, "se trata de una nulidad esencialmente saneable como que es precisamente un motivo anulatorio que mira más bien al interés del indebidamente notificado y éste en consecuencia perfectamente puede convalidar expresa o tácitamente"[1].*

En consecuencia, dado que se configura la causal de nulidad prevista en el numeral 8º del precepto 133 del C.G.P., por no haberse practicado en debida forma el emplazamiento de las personas indeterminadas que deben ser citadas como parte,

[1] Sentencia del 15 de febrero de 2001, exp. 5741.

cuando la ley así lo prevé, se impone su declaratoria de oficio. Se aclara que las pruebas practicadas dentro de la actuación conservan su validez.

Para tal efecto, se ordenará la remisión del expediente al Juzgado de origen a fin de que sea enmendada la incorrección advertida.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá D.C., Sala Civil de Decisión,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de lo actuado a partir de la sentencia proferida el 5 de diciembre de 2023, inclusive.

SEGUNDO: ORDENAR al juez de primer grado que disponga la publicación en el Registro Nacional de Personas Emplazadas con miramiento en las observaciones efectuadas en esta decisión.

TERCERO: **ADVERTIR** que las pruebas allegadas y practicadas conservan su validez y eficacia frente a quienes tuvieron la oportunidad de controvertirlas.

CUARTO: En firme esta providencia envíese el expediente al Juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE,

SANDRA CECILIA RODRÍGUEZ ESLAVA

Magistrada

Firmado Por:

Sandra Cecilia Rodriguez Eslava

Magistrada

Sala Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **f01c5642e6b7673212040bc5d8f1c09626bd77128b1bcaf27c684226a43afbb5**

Documento generado en 29/02/2024 04:24:11 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Asunto: Recurso de Revisión propuesto por la señora Carolina González Estrada contra la sentencia que profirió el Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Bogotá el 17 de mayo de 2022, dentro del Proceso Verbal de Restitución de Inmueble Arrendado con radicado 2017 – 000080 iniciado por Alfonso Arango Hernández contra Inversiones Sabella S.A.S. –En Liquidación- y otros**.**

Expediente: 00 2024 00386 00

Al tenor de lo dispuesto en el numeral 4° del artículo 357 del Código General del Proceso, en concordancia con los artículos 82, 90 y 358 *ibídem,* se **INADMITE** la demanda de revisión, para que, en el término de cinco días, la recurrente la subsane, so pena de rechazo:

1. En el evento que se produzca la diversidad de causales del recurso extraordinario, adecúese el poder indicando la pluralidad de ellas, toda vez que el otorgado se circunscribió únicamente al uso de la enlistada en el numeral 8º del artículo 355 *ibídem.*

2. Diríjase la demanda contra todos los sujetos que intervinieron en el asunto, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 357 *ibídem.* Respecto de la fallecida Carlota Eugenia Estrada Martínez (q.e.p.d.), proceda conforme lo normado en el artículo 86 del Código General ritual.

3. Respecto de los herederos determinados de la aludida obituada, así como de los receptores de los derechos del ente moral liquidado, proceda conforme el artículo 85 de la obra legal citada.

4. En los términos del numeral 4 del artículo 357 de la codificación procesal, narre de manera sucinta los hechos que le sirven de fundamento a la causal 8ª invocada.

Para tal efecto tenga en cuenta que sobre dicho motivo para el recurso, la Corte Suprema de Justicia ha explicado que se estructura siempre y *""cuando en ella [la sentencia] se configura en verdad alguna de las causales de nulidad establecidas por la ley, protegiéndose de esta manera el derecho de defensa del litigante afectado quien, por exigencia del supuesto normativo previsto, sólo podrá tener conocimiento de la irregularidad cuando conoce la*

sentencia" y, en particular, (…)cuando la sentencia presenta irregularidades capaces de constituir nulidad, lo cual sucede, (…) cuando se dicta sentencia en proceso que había terminado por desistimiento, transacción o perención, o cuando se pronuncia estando suspendido el proceso, o cuando en el fallo se condena a quien no ha figurado como parte, o cuando se adopta por un número inferior a magistrados al previsto por la ley, a lo cual cabe agregar el caso de que se dicte la sentencia sin haberse abierto el proceso a pruebas o sin que se hayan corrido los traslados para alegar, cuando el procedimiento así lo exija, de donde se desprende que no cualquier irregularidad en el fallo, o cualquier incongruencia, tiene entidad suficiente para invalidar la sentencia. Ha de tratarse de una irregularidad que pueda caber en los casos específicamente señalados por el legislador como motivos de anulación, puesto que en el punto rige en el procedimiento civil el principio de taxatividad, como es bien conocido", lo cual significa que "los motivos de nulidad procesal de la sentencia son estrictamente aquellos que -a más de estar expresamente previstos en el Código de Procedimiento Civil, dado que campea en esta materia el principio de la taxatividad de las nulidades- se hayan configurado exactamente en la sentencia y no antes; es decir, (…) no se trata, pues, de alguna nulidad del proceso nacida antes de proferir en este el fallo que decide el litigio, la que por tanto puede y debe alegarse antes de esa oportunidad, so pena de considerarla saneada"[1].

Véase que dentro de la narrativa factual se entremezclan diferentes motivos de nulidad procesal -entre otras irregularidades- sin especificar las razones puntuales por las que se predica que éstas acaecieron con el veredicto proferido. Téngase en cuenta sobre el particular que no se trata simplemente de enunciar los hechos de manera somera, sino que deben estar dotados de tal entidad que de su sola lectura brote la ocurrencia de la causal elegida y su incidencia en la decisión objeto de revisión.

Notifíquese,

(firma electrónica)
MARÍA PATRICIA CRUZ MIRANDA
Magistrada
Radicado: 00 2024 00386 00

[1] Corte Suprema de Justicia Sentencia SC5408-2018.

Firmado Por:

Maria Patricia Cruz Miranda

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Dirección Ejecutiva De Administración Judicial

División De Sistemas De Ingenieria

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **6684817c7fa90dc04d4e709109611f7ace36717e2ecf0edaa4cca6bdbe883904**

Documento generado en 29/02/2024 03:18:13 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

ADRIANA SAAVEDRA LOZADA
Magistrada Sustanciadora

Bogotá D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Se decide recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, Jhoan Sebastián Ferro Toro contra el auto proferido el 16 de junio de 2023 por la Directora de Jurisdicción Societaria III de la Superintendencia de Sociedades, mediante el cual se negaron las medidas cautelares solicitadas.

I. ANTECEDENTES

1.- Johan Sebastián Ferro Toro promovió demanda en contra de Mowin Technologies S.A.S. y Edemilson De Mello para que se declare: i) que el accionante suscribió y pagó 500 acciones a la sociedad demandada por un valor de $5.000.000; ii) que se encuentra a paz y salvo en la cancelación del capital suscrito; iii) que las decisiones posteriores al 11 de junio de 2015 y la de excluirlo como socio son ineficaces por no haber sido convocado; y iv) que el administrador es responsable por el impedir el derecho de inspección y no garantizar la publicidad de los estados financieros.

Con apoyo en lo anterior, la parte demandante solicitó como medidas cautelares "(…) *la vigilancia administrativa a la Sociedad Mowin Technologies, así como a su representante legal, en atención a las irregularidades esbozadas en el escrito de demanda, así como los medios de prueba endosados en el presente escrito*"; "(…) *se ordene la*

exhibición de los libros de los socios y accionistas, así como el libro de actas y libros contables en atención a lo previsto en el artículo 268 del C.G.P.” y “(…) *cualquier otra medida que el despacho estime razonable para asegurar los fines a que alude el artículo 590 del Código General del Proceso”.*

2.- La delegada de la Superintendencia de Sociedades negó las medidas cautelares solicitadas, tras considerar que no se demostró la probabilidad de éxito de las pretensiones al no acreditar quienes son los accionistas de la sociedad Mowin Technologies S.A.S. y que se hubiera incurrido en alguna falencia en las convocatorias de asambleas, en la medida en que no se aportaron las decisiones de acta de asamblea de la 03 a la 11, como tampoco el libro de accionistas.

Adicionalmente, que la facultad de vigilancia es de competencia de la Delegatura de Supervisión Societaria de la Superintendencia de Sociedades, conforme al marco normativo.

3.- Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación. Argumentó, en síntesis, que no se tuvieron en cuenta los estatutos, el acta 01 y los estados financieros de 2016 a 2021, aportados con la demanda, en donde se enunció que el capital suscrito fue pagado en su totalidad. Tampoco se valoró el acto de constitución. Se quejó de la imposibilidad de aportar los documentos, que echó de menos la delegada, por la actuación del socio mayoritario.

4.- El juez de primera instancia, el 4 de agosto de 2023, resolvió no revocar su determinación, por lo que concedió el recurso de alzada; razón por la cual, se conoce del proceso en esta instancia.

II.- CONSIDERACIONES

5.- Sea lo primero precisar, que esta instancia es competente para conocer el recurso de apelación incoado al tenor del numeral 8° del

artículo 321 del C.G.P., por lo tanto, resulta viable el estudio por la vía del recurso vertical.

6.- Es del caso señalar primeramente que las medidas cautelares se destacan por "(…) *su carácter eminentemente accesorio e instrumental, sólo busca reafirmar el cumplimiento del derecho solicitado por el demandante…"* (López Blanco, Hernán Fabio. Procedimiento civil, tomo II, pág. 875. 9ª edición. Dupré Editores. Bogotá D.C., 2009) y, preventivamente, en ciertos casos, fuera del proceso, antes o en el curso de este, siempre que se reúnan requisitos.

Respecto de las medidas cautelares innominadas, la Corte Constitucional en Sentencia C-835 de 2013, asentó:

> *"Las medidas innominadas son aquellas que no están previstas en la ley, dada la variedad de circunstancias que se pueden presentar y hacen difícil que sean contempladas todas por el legislador, que pueden ser dictadas por el juez acorde con su prudente arbitrio, para "prevenir que pudiera quedar ilusoria la ejecución del fallo o cuando hubiera fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra"*

Con la entrada en vigencia del Código General del Proceso, algunos doctrinantes han abordado el tema de las cautelas innominadas, reseñando algunos de los requisitos para que se puedan decretar, así:

> *"1. Que lo pretendido por el demandante sea probablemente lo que se acogerá en la sentencia (apariencia de buen derecho), lo cual supone estudiar el derecho material que legitima la pretensión. El juez para hacer esa proyección, debe estudiar juiciosamente la demanda y las pruebas que se hayan acompañado con la demanda.*
>
> *(…)*
>
> *2. Que se pruebe que se producirá un daño si no se toma la medida. Como el juez tiene de acuerdo con inciso 3 de la letra c), la posibilidad de decretar la medida si es necesaria. Calificar la necesidad queda a la ponderación del juez, que debe hacer un test racional si no se toma la medida (indispensable) el daño se produce, en caso contrario la debe negar (…) La prueba debe ejercer regencia sobre la racionalidad del juez para que se represente la imperiosa necesidad de tomar la medida. Podemos afirmar que la libertad del juez para decretarla resulta sitiada por la necesidad.*

3. La efectividad, se toma en el sentido que sea idónea"[1]

Sobre la apariencia de buen derecho la doctrina citada, ha sostenido que el juez:

> *"*(…) *tendrá en cuenta la apariencia de buen derecho (fumus boni juris), es decir, siendo el derecho del demandante más probable que el del demandado. La verosimilitud depende del contenido del derecho material de la "alegación", el cual debe ser identificado con base en la tutela pretendida y en los fundamentos invocados para su obtención. De modo que el derecho a obtener esta participación, no se contenta con la mera constatación de la verosimilitud, como de la mera "alegación" sin contenido, sino que la verosimilitud solamente puede ser comprendida a partir de las diferentes necesidades del derecho material (tipos de tutela y variedad de sus presupuestos)".* [2]

Y en cuanto a la oportunidad, para decretar la media cautelar, "***el juez puede posponer su pronunciamiento, cuando se la ha solicitado con la demanda, hasta que se haya trabado la relación jurídica procesal, con el fin de tener en cuenta lo que diga el demandado, para tener un mayor sustento del fumus boni iuris, pero debe en esta hipótesis tener en cuenta los criterios de necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida****".* (Subrayado y negrilla fuera de texto)[3]

De lo anterior se desprende sin dubitación alguna, que para que la medida cautelar sea decretada por el juez, no basta con la formulación de la demanda y la solicitud de parte, sino que la misma no sea de las que el legislador ha contemplado y nominado para otro tipo de asuntos, pues aceptar otro postulado implicaría desconocer el principio de taxatividad que gobierna la materia.

Sobre el particular la Corte refiere que "*(…) el decreto de cautelas, desde antaño, ha tenido un manejo muy restringido, pues sólo podrán ordenarse las que expresamente autorice el legislador, y en las*

---

[1] PARRA QUIJANO, Jairo., *"Medidas cautelares innominadas, XXXIV CONGRESO COLOMBIANO DE DERECHO PROCESAL, 1ª Edición, Bogotá D.C. Editorial Universidad Libre, 2013*
[2] Ibidem.
[3] Ibid.

oportunidades que el mismo ordenamiento dispone (…) (SC, CSJ. 8 may 2018. AC1813)

7.- Hay que añadir que las medidas cautelares son el instrumento con el que cuenta el demandante para garantizar el cumplimiento de la eventual decisión judicial favorable**.** En ese orden, lo primero que debe hacer el juez, al momento de estudiar una solicitud de preventivas, es verificar si ese objetivo elemental y esencial a la naturaleza de la institución se cumple.

De la lectura de las medidas cautelares se observa que lo anterior no se satisface, ya que la imposición de la vigilancia administrativa a la sociedad demandada y la exhibición de documentos no garantizan a futuro los efectos de una sentencia favorable a las pretensiones del accionante.

Lo dicho, en la medida en que no existe relación de causalidad entre las preventiva reclamadas con el reconocimiento del pago de las acciones, con las consecuencias de la ineficacia de las decisiones de asamblea o con lo derivado de la responsabilidad del administrador ante la presunta inobservancia del derecho de inspección y deber publicidad en las convocatorias a asambleas.

Adicionalmente, para la imposición de una vigilancia administrativa el recurrente puede acudir a los mecanismos institucionales para ello, los son claramente extraprocesales. De otra parte, conseguir la exhibición de documentos podía acudir a las herramientas probatorias que contempla el estatuto procesal y hacer la respectiva solicitud en el escenario que hubiera considerado oportuno. Así, se observa que el demandante erró en el camino utilizado para obtener visto bueno a sus aspiraciones.

Finalmente, no es necesario estudiar la negativa a que la delegada encontrara otra medida que permitiera el objetivo que traza las cautelas, ya que ningún reparó se enfiló en tal sentido.

Según lo expuesto, la omisión en la valoración de los documentales obrantes en el plenario —que el recurrente le imputa a la delegada—

no es suficiente para superar el desacierto anunciado al escoger las medidas cautelares solicitadas. Lo anterior, si se repara que no se puede pasar a la valoración de la acreditación de los requisitos de las presuntas innominadas, si aquellas no corresponden a una verdadera medida que busque garantizar el derecho que se le llegue a reconocer al demandante ante una sentencia favorable.

8.- Así las cosas, la apelación planteada, carece de vocación de prosperidad, por tanto, el Tribunal confirmará el auto cuestionado.

III.- DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C., Sala Civil,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el auto proferido, el 16 de junio de 2023, por la Directora de Jurisdicción Societaria III de la Superintendencia de Sociedades, atendiendo a las consideraciones que se expusieron en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: En firme la decisión, remítase a la delegatura de conocimiento para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA SAAVEDRA LOZADA
Magistrada

ASL/MATE

Adriana Saavedra Lozada

Firmado Por:

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Sala 001 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ab3afb11392d5926a2effef0ab9f25e0a1a7b4605b34ae9f37f22e477b36ad21**

Documento generado en 29/02/2024 11:55:52 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

ADRIANA SAAVEDRA LOZADA

Magistrada Sustanciadora

Bogotá D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Se decide el recurso de apelación interpuesto la demandada Inés Cecilia Delgado Flores contra el auto del 05 de diciembre de 2023, proferido por el Superintendente Delegado de Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades de Bogotá, mediante el cual se rechazó "solicitud especial de nulidad".

I. ANTECEDENTES

1.- La demandada presentó "solicitud especial de nulidad" con el fin de que se revoque el auto 2023-01-886282 del 8 de noviembre de 2023, alegando así, el "defecto procedimental por exceso ritual manifiesto".

En síntesis, adujo que el *Superintendente de conocimiento* incurrió en este defecto al negar de plano por extemporáneo el recurso de reposición y rechazar por improcedente el de apelación interpuestos contra el auto proferido el 15 de septiembre de 2023.

2.- El *Superintendente de conocimiento,* rechazó por improcedente la "solicitud especial de nulidad", tras considerar que, el rechazo del recurso de reposición presentado de manera extemporánea por la señora Inés Cecilia Delgado flores, encuentra apoyo en lo dispuesto en el artículo 117 del Código General del Proceso[1] y en el artículo 109 del mismo estatuto procesal[2]; el cual, "*debe interpretarse con el horario de atención de esta Entidad que es hasta las 5:00 pm*" y que, aceptar cualquier otra tesis supondría una posición permisiva por parte del Despacho para que se puedan radicar memoriales electrónicamente aún después del cierre de atención a usuarios, posición que ha sido confirmada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en diferentes providencias[3]. Además, la causal alegada no es propiamente una de las enunciadas de forma taxativa en el artículo 133 del Código General del Proceso.

3.- Inconforme con la anterior determinación, la parte demandada formuló recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, para tal efecto, reiteró que, la interposición del recurso se excedió "*por sólo seis (6) minutos del horario hábil de la Superintendencia de*

---

[1] "Los términos señalados en este código para la realización de los actos procesales de las partes y los auxiliares de la justicia, son perentorios e improrrogables".

[2] Código General del Proceso.

[3] Cfr. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, providencia del 13 de julio de 2022. Proceso verbal de Gladys Parra de Charry y otro contra Adolfo Charry Martínez y otros; Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, providencia del 19 de octubre de 2021, radicado n.° 11001319900220200016901, M.P. Manuel Alfonso Zamudio Mora; Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, providencia del 12 de agosto de 2022. Proceso verbal de Epsilon Pharma S.A.S. contra Empresa Promotora de Salud Ecoopsos E.S.S.

Sociedades" pero que el mismo fue presentado el día establecido para tal efecto, motivo por el cual, el despacho incurrió en el defecto procedimental de exceso ritual manifiesto al rechazarlo.

Refirió además que "n*o se desconoce que las causales de nulidad son las establecidas expresamente por la ley. Precisamente por ese hecho se expresa que se le está negando a mi poderdante la posibilidad de pronunciarse por excederse por sólo seis (6) minutos del horario hábil de la Superintendencia de Sociedades. Es decir, con lo anterior, se está omitiendo una oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 133 del Código General del Proceso".*

4.- Mediante auto del 19 de enero de dos mil veinticuatro, el fallador de primer grado resolvió confirmar la providencia del 5 de diciembre de 2023 y concedió el recurso de apelación, lo que explica la presencia del proceso en esta instancia.

II.- CONSIDERACIONES

5.- Sea lo primero precisar, que esta instancia es competente para conocer el recurso de apelación incoado al tenor del numeral 6° del artículo 321 del C.G.P., por lo tanto, resulta viable el estudio por la vía del recurso vertical.

6.- Advierte el despacho que el auto atacado será confirmado por las siguientes razones:

i.- Al tenor del artículo del artículo 133 del CGP, el proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los casos allí enlistados, lo que determina el carácter taxativo de las causales de nulidad, sin descartar la existencia de causales previstas en otras disposiciones del mismo código.

ii.- Por su parte el artículo 135 de la misma codificación establece los "***Requisitos para alegar la nulidad.*** *La parte que alegue una nulidad deberá tener legitimación para proponerla,* ***expresar la causal invocada y los hechos en que se fundamenta, y aportar o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer***" y en su inciso final "***El juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este capítulo o en hechos que pudieron alegarse como excepciones previas, o la que proponga después de saneada o por quien carezca de legitimación***" (negrilla y subrayado fuera de texto)

De las normas en cita se colige que, el régimen de nulidades procesales gira en torno a los principios de especificidad, protección y convalidación.

iii.- En el caso concreto, la demandante pretende se declare la nulidad del auto que declaró extemporánea la interposición de un recurso, alegando que la tesis que así lo sostiene, constituye un exceso ritual manifiesto porque tan solo se excedió 6 minutos en su presentación, respecto del horario habitual de la entidad para recibir memoriales.

iv.- Ahora bien, como el hecho que se invoca por la demandante no está consagrado en el texto legal como causal de nulidad, puede decirse que no se encuentra satisfecho en este caso el presupuesto

de especificidad que rige tal institución y, por tanto, era procedente el rechazo de plano de la solicitud dirigida a obtener su declaración, como lo indica el último inciso del artículo 135 ya citado, que ordena proceder así cuando la respectiva petición se funde en causal distinta a las enlistadas.

Así las cosas, la apelación planteada, carece de vocación de prosperidad, por tanto, el Tribunal confirmará el auto cuestionado.

III.- DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C., Sala Civil, **RESUELVE:**

PRIMERO: CONFIRMAR el auto de fecha (05) de diciembre de dos mil veintitrés (2023), proferido por el Superintendente delegado de Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades de Bogotá, atendiendo a las consideraciones que se expusieron en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: En firme la decisión, remítase al Juzgado de conocimiento para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA SAAVEDRA LOZADA

Magistrada

Firmado Por:

Adriana Saavedra Lozada

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Sala 001 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **bfbf1bab49e042b9b133b570de7c0ebe112a4fbd190c241270a0796be2b3ebe8**

Documento generado en 29/02/2024 03:22:49 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ D.C.
Sala Civil

Bogotá D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Ref: Proceso ejecutivo de María Fernanda Ortega Ortiz contra Miguel Antonio Castellanos Avellaneda.

Se resuelve el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados 4º y 5º Civil del Circuito de la ciudad por el conocimiento del proceso de la referencia.

CONSIDERACIONES

1. Es evidente que la Jueza 5ª Civil del Circuito, al rehusar el conocimiento, confundió la saneabilidad de la nulidad con la pérdida de competencia. Que, tras la sentencia C-443 de 2019, la actuación adelantada tras vencerse el plazo de duración del proceso conserve validez si se configura alguno de los eventos previstos en el artículo 136 del CGP, no significa que el juez no tenga el deber de reconocer la pérdida de competencia si alguna de las partes lo solicita y no se ha proferido sentencia.

Al respecto, este Tribunal, en auto de 27 de febrero de 2023, puntualizó que,

> "es asunto averiguado que el artículo 121 del CGP establece cuatro (4) reglas basilares, a saber: (i) que todo proceso en el que se emita auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo, tendrá una duración máxima de un (1) año para que el juez dicte sentencia de primera o única instancia, prorrogable hasta por seis (6) meses más; (ii) que el plazo para resolver la segunda instancia no podrá ser superior a seis (6) meses, ampliable por un término igual; (iii) que vencido ese plazo, el juez o magistrado –por solicitud de parte- perderá competencia para conocer del proceso, y (vi) que será nula la actuación que adelante el juzgador, luego de haber perdido competencia.

También se sabe que la Corte Constitucional, en sentencia C-443 de 2019, declaró "la inexequibilidad de la expresión 'de pleno derecho' contenida en el inciso 6…, y la exequibilidad condicionada del resto de este inciso, **en el entendido de que la nulidad allí prevista debe ser alegada antes de proferirse la sentencia, y de que es saneable en los términos de los artículos 132 y subsiguientes del Código General del Proceso",** previendo, además, "la exequibilidad condicionada del inciso 2…, **en el sentido de que la pérdida de competencia del funcionario judicial correspondiente sólo ocurre previa solicitud de parte, sin perjuicio de su deber de informar al Consejo Superior de la Judicatura al día siguiente del término para fallar, sobre la circunstancia de haber transcurrido dicho término sin que se haya proferido sentencia" (se resalta y subraya).**

Quiere ello decir **(a)** que las partes no pueden alegar la nulidad en cuestión, si ya se profirió sentencia, aunque haya sido apelada; **(b)** que subsiste el deber legal de dictar la decisión respectiva dentro de los plazos referidos; **(c)** que las partes pueden solicitarle al juez que reconozca la pérdida de competencia, aunque hubieran actuado tras vencerse el plazo; **(d)** que el juez, si el término venció y no ha emitido fallo, tiene el deber de pronunciarse positivamente; **(e)** que el juzgador, con independencia de la postura de las partes sobre el particular, siempre debe comunicarle al Consejo Superior de la Judicatura que venció el plazo de duración del proceso, y **(f)** que la saneabilidad de la nulidad en comento no traduce, en modo alguno, que el juez no esté obligado a reconocer que perdió competencia, si una de las partes lo solicita, pues se trata de casos distintos: perder competencia y validar la actuación.

Con otras palabras, la Corte Constitucional dejó claro que la nulidad en cuestión es saneable, pero también hizo hincapié en que la pérdida de competencia por el vencimiento del plazo sigue vigente, mientras el juez no dicte sentencia, sólo que por requerimiento del interesado. No se olvide que una cosa es la nulidad de las actuaciones que el juez adelantó luego de expirar el plazo para emitir el fallo, la cual es saneable si no se alega oportunamente, y otra, de suyo distinta, el deber del juzgador de declarar su pérdida de competencia, previa solicitud de parte, siempre que no se haya dictado la decisión que pone fin a la instancia"[1].

[1] Exp. 000202300417 00.

3. En este caso la revisión del expediente evidencia que (i) el 17 de diciembre de 2020, María Fernanda Ortega Ortiz presentó demanda ejecutiva contra Miguel Antonio Castellanos Avellaneda[2], repartida al Juzgado 4º Civil del Circuito de la ciudad, quien profirió tardío mandamiento de pago el 5 de marzo de 2021[3], notificado al demandado -en la forma prevista por el artículo 8 del Decreto 806 de 2020- el 12 de julio siguiente[4]; (ii) el 8 de junio de 2023, la demandante radicó solicitud de nulidad alegando la pérdida de competencia del juez por haberse superado el término previsto en el artículo 121 el CGP[5]; y (iii) el 1º de julio que sigue el juzgador concedió la última petición y ordenó remitir el expediente al juzgado 5º[6], que se rehusó a tramitar el juicio porque, en su criterio, el proceso siguió su curso después de vencido el plazo en cuestión -18 de diciembre de 2021-, sin protesta de las partes[7].

Desde esta perspectiva, como no se disputa que el plazo de duración del proceso ya venció, se imponía, ante el ruego de parte, la remisión del expediente al juez que sigue en turno, sin que la actuación posterior de los contendientes impida este efecto jurídico, puesto que, se insiste, una cosa es el saneamiento de las eventuales nulidades -que puede hacerse por convalidación- y otra bien distinta la pérdida de competencia.

Por consiguiente, para garantizar el derecho a un debido proceso de duración razonable, se reconocerá la competencia en el Juzgado 5º Civil del Circuito.

3. Así las cosas, el Tribunal Superior de Bogotá,

---

2 01CuadernoPrincipalJuz4CCtoBta, 01Cuaderno1, pdf. 04.
3 01CuadernoPrincipalJuz4CCtoBta, 01Cuaderno1, pdf. 13.
4 01CuadernoPrincipalJuz4CCtoBta, 01Cuaderno1, pdf. 14.
5 01CuadernoPrincipalJuz4CCtoBta, 01Cuaderno1, pdf. 55.
6 01CuadernoPrincipalJuz4CCtoBta, 01Cuaderno1, pdf. 57.
7 02CuadernoJuz5CCtoBta, pdf. 0007.

RESUELVE

Declarar que es la Jueza 5ª Civil del Circuito quien debe seguir conociendo del proceso de la referencia.

Comuníquesele esta decisión al Juez 4º Civil del Circuito de la ciudad.
NOTIFIQUESE,

Firmado Por:
Marco Antonio Alvarez Gomez
Magistrado
Sala 006 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **53d7c599bc249c89a3fd17806d33fc93150caf1373ad6bca92342e2d172c521f**
Documento generado en 29/02/2024 09:47:42 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ D.C.
Sala Civil

Bogotá D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Rdo. 008200200954 03

Para darle cumplimiento a la orden emitida por la Corte Suprema de Justicia – Sala Civil en sentencia de 14 de febrero de 2024, por secretaría córrase traslado -por el término de cinco (5) días- a la parte contraria, de la sustentación que los recurrentes presentaron ante el juzgado de primera instancia[1].

NOTIFÍQUESE

[1] PrimeraInstancia/01CuadernoPrincipal, pdf. 001, p. 444.

Firmado Por:

Marco Antonio Alvarez Gomez

Magistrado

Sala 006 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **9205b452f982a1f40692921b5cc1c62676d5a9d0bb9907c2f0eea08542ae51e5**

Documento generado en 29/02/2024 11:53:30 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

ADRIANA SAAVEDRA LOZADA
Magistrada Sustanciadora

Bogotá D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, Juan Pablo Trujillo Medina contra el auto proferido el 16 de diciembre de 2022 por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá, mediante el cual se rechazó la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.- Juan Pablo Trujillo Medina demandó a Luciano Trujillo Medina para que se decrete la división *ad valorem* del predio identificado con FMI 50C-436054. Luego de subsanados los defectos de la demanda, señalados en auto de 19 de julio de 2021, el juez instructor admitió la demanda el 20 de agosto siguiente.

El demandado se notificó y contestó la demanda, en dicha oportunidad formuló la excepción previa inepta demanda con fundamento en que el poder que se adjuntó con el escrito introductor, no estaba firmado por el accionante, tampoco se confirió mediante mensaje de datos y no se hizo constar que hubiera sido emitido desde el correo del poderdante.

Mediante la providencia cuestionada el juez *a quo* declaró la excepción previa alegada y rechazó la demanda por no haberse subsanado el defecto en el interregno del traslado de la defensa previa.

2.- Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso reposición y en subsidio de apelación. Indicó que el poder aportado con la radicación de la demanda cumplía con los requisitos del Decreto 806 de 2020.

El juez de primera instancia, en providencia del 6 de marzo de 2023, resolvió no revocar su determinación y negó la concesión del recurso de alzada; razón por la cual, la parte demandante presentó remedio de reposición en subsidio queja. El juez *a quo* se mantuvo en su decisión y concedió la queja.

El recurso de queja, el 23 de junio de 2023, fue desatado por esta Magistrada y se determinó mal negada la alzada, por lo que se concedió aquella en el efecto suspensivo, lo que explica la presencia del proceso en esta instancia.

II. CONSIDERACIONES

3.- Sea lo primero precisar, que esta instancia es competente para conocer del recurso de apelación incoado al tenor del numeral 1° del artículo 321 del C.G.P., por tanto, resulta viable el estudio por la vía del recurso vertical.

4.- El problema jurídico a resolver, se circunscribe a determinar, si el juez de primera instancia podía rechazar la demanda ante la existencia de un poder defectuoso.

Ha de partirse por resaltar que la salida que encontró el juez de primera instancia no luce acorde con el marco procesal de la institución de las excepciones previas, pues en ningún momento el juzgador previó el rechazo de la demanda como consecuencia de la prosperidad de la defensa planteada por el demandado.

No se puede evadir que el libelo introductor de la acción tiene tal trascendencia que el juez, únicamente al calificar la demanda y no en otra oportunidad, debe agotar la tarea de verificar que aquella reúna las formalidades a que aluden los artículos 82 y 83 del C.G.P. y estén los anexos previstos en el artículo 84 de la misma obra para

determinar su admisibilidad o inadmisibilidad, al punto que sólo cuando el fallador encuentre cumplidas tales exigencias puede dar trámite a la demanda.

De allí que el artículo 90 del Código General del Proceso consagra que el Juez declarará inadmisible la demanda y señalará los defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el término de cinco días, so pena de rechazo.

De igual forma, no hay duda que cuando el juez de instancia inadmite el libelo y en el término legal no se subsanan los defectos puestos de manifiesto o habiéndose corregido aquellos, considera que la subsanación no se encuentra acorde con lo requerido, puede proceder al rechazo; empero, ha de tenerse presente que ésta decisión - el rechazo - será legal o ajustado a derecho siempre y cuando se encuentre fundado en las causales taxativamente señaladas por el legislador en esa misma disposición, pues no le es permitido al fallador crear *motu proprio*, nuevos motivos de inadmisión.

Quiere decir lo anterior, que si la providencia está apoyada en motivos distintos de los específicamente enlistados por el artículo ya enunciado o se hace en una oportunidad procesal diversa a la calificación de la demanda y el rechazo tuvo su fundamento en alguna de esas dos variantes, no hay duda de que tales actos procesales carecen de legalidad, por cuanto, se reitera, las causales de inadmisión deben ser o estar relacionadas con las precisas enunciadas por la norma en mención, ya que el legislador no autorizó ninguna otra.

5.- Descendiendo al caso bajo estudio, resulta errada la decisión proferida por el Juez *a quo* al rechazar la demanda, toda vez que el legislador no previó esa determinación ante la prosperidad de la excepción previa y se hizo cuando ya se había superado la etapa para inadmitirla.

Lo anterior, es suficiente para revocar la providencia censurada y disponer que continue el trámite de la causa divisoria; sin embargo,

se expondrá que el vicio alegado por la parte demandada no tiene la aptitud para configurar la excepción previa imputada.

Sobre la ineptitud de la demanda la Sala de Casación Civil ha dicho que "(…) *el defecto que debe presentar una demanda para que se le pueda calificar de inepta o en indebida forma, tiene que ser verdaderamente grave, trascendente y no cualquier informalidad superable lógicamente, pues bien se sabe que una demanda cuando adolece de cierta vaguedad, es susceptible de ser interpretada por el juzgador, con el fin de no sacrificar un derecho y siempre que la interpretación no varíe los capítulos petitorios del libelo.*" (SC,CSJ. 18 mar 2002. Exp. 6649)

En otras palabras, la ineptitud de la demanda debe ser de tal entidad que afectaría de forma directa la posibilidad del juez de dictar la sentencia que resuelva el fondo dl asunto sometido a su consideración.

Al verificar el poder aportado con la demanda se observa que no fue otorgado al representante judicial con los requisitos contemplados por el artículo 5 del Decreto 806 de 2020, en la medida en que no se puede corroborar la remisión del mandato mediante mensaje de datos desde el buzón de correo del accionante; sin embargo, dicha falencia no es suficiente para colegir la ineptitud de la demanda por cuanto dicho defecto no tiene la trascendencia para afectarla, como tampoco se puede colegir una indebida representación del señor Juan Pablo, pues no hay carencia total de poder, sino que existe un poder defectuoso en cuanto a requisitos formales, pero no de esencia.

Adoptar la tesis que propuso el *a quo* para rechazar la demanda, sería aceptar que un error de forma en el mandato es justificación suficiente para sacrificar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia del actor, lo que no resulta compatible con los principios constitucionales y los contemplados en el Código General del Proceso.

En suma, no había no lugar a disponer el rechazo del libelo por falta de poder, teniendo en cuenta que el legislador no previó esa

posibilidad ante la prosperidad de la excepción previa del numeral 5 del artículo 100 del C.G.P. y en vista que la misma tampoco se consolidó en el presente asunto. Así, el auto recurrido será revocado y, en su lugar, se ordenará que el juez de primera instancia continúe con el trámite del asunto.

III.- DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C., Sala Civil,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR el auto proferido, el 16 de diciembre de 2022, por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá, atendiendo a las consideraciones que se expusieron en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: ORDENAR al juez de primera instancia que continúe con el trámite de la causa conforme a derecho.

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.

CUARTO: En firme la decisión, remítase al Juzgado de conocimiento para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA SAAVEDRA LOZADA
Magistrada

ASL/MATE

Firmado Por:

Adriana Saavedra Lozada

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Sala 001 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **79500bb0f6f7dc12ee856dbfc41c8a07d0765ff94a6bfe6afe3a7e3d76d270ae**

Documento generado en 29/02/2024 11:56:28 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

ADRIANA SAAVEDRA LOZADA
Magistrada Sustanciadora

Bogotá D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Sería el caso decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, Elvia Espinel de Niño, contra el auto proferido el 3 de agosto de 2023 por la Coordinadora del Grupo de Calificación y Cumplimiento de la Superintendencia Financiera de Colombia, sino fuera porque el asunto es de menor cuantía como pasa a exponerse.

De la revisión de la demanda se logra determinar que se trata, en efecto, de un asunto de esa cuantía en la medida a que las pretensiones de la accionantes ascienden a $55.000.000, cantidad superior a 40 (s.m.l.m.v.) e inferior a 150 (s.m.l.m.v.) – al momento de la radicación de la demanda- que, según el artículo 25 del Código General del Proceso, es el tope de la evocada cuantía.

Visto lo anterior, el recurso debe ser desatado por los jueces civiles del circuito de este distrito. Así, se ordenará la remisión del expediente para que sea repartido a los Jueces Civiles del Circuito.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. Sala Civil, **RESUELVE**

PRIMERO: REMITIR el expediente a la Oficina Judicial para su reparto entre los Jueces Civiles del Circuito de Bogotá, conforme a las razones expuestas.

SEGUNDO: COMUNICAR esta decisión a la autoridad de primera instancia, para lo pertinente.

TERCERA: ENTERAR esta decisión a las partes, intervinientes y vinculados por el medio más expedito.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA SAAVEDRA LOZADA
MAGISTRADA

ASL/MATE

Firmado Por:
Adriana Saavedra Lozada
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 001 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **cc270b882d7db0c18cc77eab9b6c41f074bca2637049050ed73c887f419595fb**
Documento generado en 29/02/2024 11:56:09 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

ADRIANA SAAVEDRA LOZADA
Magistrada Sustanciadora

Bogotá D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Constructora Siglo XXI -Santo Domingo S.A.S. contra el auto proferido el 8 de mayo de 2023 por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá, mediante el cual se negó la petición de nulidad por indebida notificación.

I. ANTECEDENTES

1.- La parte demandada, por conducto de apoderada, presentó solicitud de nulidad fundada en el numeral 8 del artículo 133 del C.G.P., en la que alegó que la notificación no se hizo correctamente, en la medida en que: i) se omitió el trámite previsto en el artículo 291 del C.G.P.; y ii) la notificación electrónica no se hizo en la dirección que ordena el artículo 8 del Decreto 806 de 2020, esta es, la que registra el certificado de existencia y representación - inmsigloxxi2021@hotmail.com.

2.- El juez *a quo* negó la petición de nulidad y condenó en costas, tras considerar que la notificación electrónica efectuada cumplió con los requisitos del Decreto 806 de 2020, en la medida en que fue remitida y entregada a la dirección electrónica que se suministró con el certificado de existencia y representación adjuntado con la subsanación de la demanda. Además, que la notificación con ocasión de la remisión de la citación y el aviso en nada se afectó por el acto de enteramiento subsecuente que se censura. Así, no encontró demostrada el motivo de anulación alegado por la demandada.

3.- Inconforme con la anterior determinación, la parte demandada formuló recurso de reposición y en subsidio el de apelación, para que se acceda a su solicitud. Expuso que, si bien, el ordenamiento establece dos caminos para el enteramiento de las personas que son llamadas a juicio, lo cierto es que dicho acto solo puede hacerse en una dirección especifica cuando las personas a notificar se encuentran inscritas en el registro mercantil, tal como lo indican los artículos 291 del C.G.P y 8 del Decreto 806 de 2020.

Indicó que para la fecha de enteramiento en el certificado de existencia y representación ya había cambiado la dirección de inmsigloxxi@hotmail.com a inmsigloxxi2021@hotmail.com, lo que fue pasado por alto. Así, realizarse el acto en este último buzón electrónico.

4.- El juez de primera instancia, el 16 de junio de 2023, resolvió no revocar su determinación, por lo que concedió el recurso de alzada; razón por la cual, se conoce del proceso en esta instancia.

II.- CONSIDERACIONES

5.- Sea lo primero precisar, que esta instancia es competente para conocer el recurso de apelación incoado al tenor del numeral 6° del artículo 321 del C.G.P., por lo tanto, resulta viable el estudio por la vía del recurso vertical.

6.- El artículo 29 de la Constitución Política, garantiza a todos los habitantes del territorio nacional que no se pueda proferir contra ellos sentencia, sin la observancia plena del debido proceso, lo que implica la prerrogativa de poder ser vinculado al proceso para ser escuchado en aquel.

Así, el régimen procesal vigente contempla que no podrá resolverse la contienda sin la notificación previa del demandado y, de no ser posible ésta por no poderlo ubicar, se le designara un curador previo emplazamiento con sujeción a las formalidades previstas en la disposición adjetiva.

En virtud de lo anterior, el numeral 8, artículo 133 del Código General del Proceso, dispone que el proceso es nulo, en todo o en parte, "(…) *Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas* (…)".

7.- Bajo los contornos expuestos en el recurso, la alzada se circunscribe a debatir los reproches del extremo demandado ante la negativa de decretar la nulidad bajo la causal de indebida notificación.

En el caso concreto, alegó la apelante, en síntesis, que se desestimó que para la fecha de notificación su dirección de notificaciones electrónicas había cambiado y que solo en aquella era posible realizar el acto censurado en la petición de nulidad. No obstante,

como se pasará a exponer lo anterior no es suficiente para tener por demostrada la anulación deprecada.

De la revisión de los anexos de subsanación de la demanda, se observa que la parte demandante aportó el certificado de existencia y representación de la convocada -expedido el 28 de julio de 2021- en donde se registraba como dirección de notificación electrónica inmsigloxxi@hotmail.com, buzón al que fue remitida, el 24 de junio de 2023,la notificación.

Adicionalmente, fue certificada la entrega a la demandada del citatorio para notificación personal -el 25 de febrero de 2022, y el aviso -el 9 de marzo de 2022-. Dichas comunicaciones se remitieron a la carrera 9 No. 127B-16 de Bogotá, dirección que coincide con la referida en el certificado de existencia y representación indicado.

Con esa orientación, se resalta que el argumento que sustentó el recurso no tiene la aptitud para lograr la revocatoria solicitada, en la medida en que la notificación se efectuó con ajuste a los artículos 291 y 292 del C.G.P., respecto de la cual ninguna censura enfiló, y con anterioridad al intento electrónico. En consecuencia, el acto de enteramiento del que se queja la recurrente no alteró la vinculación que ya se había logrado de la ejecutada con anterioridad.

8.- Lo anterior, luce suficiente para confirmar la providencia, sin que sea necesario estudiar si la notificación electrónica fue o no debidamente remitida a la última dirección consignada en el registro mercantil.

Así las cosas, la providencia impugnada debe ser confirmada atendiendo a que las circunstancias advertidas conducen a que la incidentante no acreditó la nulidad alegada.

III.- DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C., Sala Civil, **RESUELVE:**

PRIMERO: CONFIRMAR el auto proferido, el 8 de mayo de 2023, por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: En firme la decisión, remítase al Juzgado de conocimiento para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA SAAVEDRA LOZADA
Magistrada

ASL/MATE

Firmado Por:
Adriana Saavedra Lozada
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 001 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,

conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **b149ef31b7d33c5d9406fb19b43550653b067d68c4a823df6eb82371684d088b**

Documento generado en 29/02/2024 11:56:48 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

ADRIANA SAAVEDRA LOZADA
Magistrada Sustanciadora

Bogotá D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

I.- OBJETO DE LA DECISIÓN

Se decide sobre la concesión del recurso de casación interpuesto por la parte demandante, Luz Edith Bermúdez Rodríguez, Claudia Liliana Morales Pinedo, Sadiluz Calderón Roncancio, Sandra Patricia Guzmán, María Verónica Piñeros Álvarez, Sergio Alexander Sánchez Clavijo, José Gabriel Figueredo Monroy, Olga Yasmin Fula Martin, Paula Andrea Bermúdez Rodríguez, Mary de Jesús Martin Cueva, María Leila Gladys Rodríguez Reuter, Claudia Patricia Martínez Jaramillo, Mónica Martínez Jaramillo, María Victoria Rojas Fajardo, Eduardo Lezaca Cáceres, Angélica María Cortes Calderón, Carmenza Buriticá De Echeverri, Margarita Rodríguez Fonseca, Gerardo Torres Medina y Gerardo Andrés Torres Zarate, contra la sentencia de segunda instancia proferida por esta Corporación dentro del presente asunto el 14 de febrero del año que avanza.

II.- CONSIDERACIONES

1.- El Código General del Proceso dispone que el recurso de casación procede contra las sentencias proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia: (i) en toda clase de procesos declarativos. (ii) en las acciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicción ordinaria y, (iii) en las dictadas para liquidar una condena en concreto. Así mismo, la codificación, prevé que en tratándose de asuntos relativos al estado civil sólo serán susceptibles de casación las sentencias sobre impugnación o reclamación de estado y declaración de unión maritales de hecho.

Como el recurso de casación no es un medio de impugnación común sino excepcional y extraordinario, el legislador lo circunscribió respecto a determinadas y específicas decisiones, pronunciadas en determinado género de procesos, de modo que sólo procede respecto de las emitidas en los litigios taxativamente señalados en el artículo 334 *ibidem*.

2.- En idéntico sentido, el artículo 338 del C.G.P., corregido por el art. 6 del Decreto 1736 de 2012 dispone que, cuando las pretensiones sean esencialmente económicas, el recurso se surtirá cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 s.m.l.m.v.). No obstante, dicho interés para recurrir no aplicara cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones populares y de grupo, y las que versan sobre el estado civil.

3.- Así las cosas, se observa que la impugnación extraordinaria a la sentencia pronunciada en esta instancia se hizo de forma oportuna; la determinación adoptada por esta Sala el 14 de febrero de 2024 le fue adversa a los demandantes, por haber confirmado el fallo de primera instancia que fue adverso a los pedimentos de los actores; y el recurso se enfila contra la decisión que desató la segunda instancia en una acción de grupo. Lo anterior, permite la viabilidad del recurso de casación bajo las luces de lo preceptuado en la norma en comento.

III.- DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C., Sala Civil,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR procedente el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, contra la sentencia emitida por esta Sala el 14 de febrero de 2024, dentro del presente proceso, de conformidad a lo explicado en precedencia.

SEGUNDO: REMITIR el expediente a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia-Reparto, para lo pertinente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA SAAVEDRA LOZADA
Magistrada

ASL/MATE

Firmado Por:
Adriana Saavedra Lozada
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 001 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **8a1cf3ac36002d110e32ae9e70e8a24f401f9e0aab9a561dd9ca1fa0078f4a6f**
Documento generado en 29/02/2024 11:57:07 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

ADRIANA SAAVEDRA LOZADA
Magistrada Sustanciadora

Bogotá D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, Comex Cargo S.A.S. contra el auto proferido, el 4 de agosto de 2022, por el Juzgado Catorce Civil del Circuito, mediante el cual se negó el mandamiento de pago.

I. ANTECEDENTES

1.- Comex Cargo S.A.S., mediante apoderado judicial, solicitó la ejecución de la facturas electrónica FE No. 403[1] por la cantidad de $173.519.701,oo con sus respectivos intereses moratorios, en contra de Mozt de Colombia S.A.S.

El a quo negó el mandamiento de pago, tras considerar que la demandante no aportó la factura de venta, dado que la representación gráfica no se puede confundir con el título valor como tal.

Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación para que se libre ejecución en contra de la demandada en los términos solicitados. Luego de citar un antecedente de esta Corporación en un caso de similares contornos, la recurrente explicó que al representación gráfica de la factura ejecutada reúne los requisitos generales y especiales para librar orden de pago. Además, que dicho título valor fue debidamente inscrito ante

[1] 01DemandaPoderAnesoSecuencia.pdf

la DIAN, lo que se puede verificar al escanear el respectivo código QR y con ello se supera lo referido por el juez de primera instancia.

2.- El juez de primera instancia, el 7 de marzo de 2023, resolvió no revocar su determinación, por lo que concedió el recurso de alzada; razón por la cual, se conoce del proceso en esta instancia.

II. CONSIDERACIONES

3.- Sea lo primero precisar, que el despacho es competente para conocer del recurso de apelación incoado al tenor del numeral 4° del artículo 321 del C.G.P., por tanto, resulta viable el estudio por la vía del recurso vertical.

4.- El juicio ejecutivo ha sido definido como un procedimiento contencioso especial por medio del cual el acreedor pretende el cumplimiento total o parcial de una obligación clara, expresa y exigible, que conste en un acto o documento proveniente del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o administrativa que deba cumplirse, y que el deudor no realizó en su debida oportunidad. De ahí que, debe tener origen en un título que tenga fuerza por sí mismo de plena prueba.

De modo tal, que al tenor del artículo 422 del Código General del Proceso, son dos las condiciones básicas para la existencia de un título ejecutivo, la primera corresponde a la formal, que tiene que ver con la calidad del documento que da cuenta de la existencia de la obligación, es decir, que *"provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184"*.

La segunda, se refiere al requisito material o sustancial, el cual exige que "*el título ejecutivo contenga una prestación en beneficio de una*

persona. Es decir, que establezca que el obligado debe observar a favor de su acreedor una conducta de hacer, de dar, o de no hacer, que debe ser clara, expresa y exigible. Es ***clara*** *la obligación que no da lugar a equívocos, en otras palabras, en la que están identificados el deudor, el acreedor, la naturaleza de la obligación y los factores que la determinan. Es* ***expresa*** *cuando de la redacción misma del documento, aparece nítida y manifiesta la obligación. Es* ***exigible*** *si su cumplimiento no está sujeto a un plazo o a una condición, dicho de otro modo, si se trata de una obligación pura y simple ya declarada".* (CC. T-747/13).

De suerte, que una obligación que no se ajuste a los anteriores presupuestos, no se le puede abrir paso al juicio coactivo, de lo contrario, presentada la demanda "*acompañada de documento que preste mérito ejecutivo*", el funcionario encargado librará la orden de apremio, ordenando al ejecutado que cumpla el mandato en la forma pedida, si así fuere procedente, "*o en la que aquel considere legal*".

Los títulos valores para ser considerados como tal deben reunir unos requisitos generales y otros especiales, los de carácter y estirpe general son aquéllos comunes a todos los títulos valores, a saber: el derecho que el título incorpora y la firma de quién lo crea, consagrados en el artículo 621 del Código de Comercio.

En tanto que los requisitos especiales son aquéllos que la ley señale para cada título valor en particular, en el caso de la factura de venta de acuerdo al artículo 774 sustituido por el artículo 3º de la Ley 1231 de 2008, son los siguientes: a) La fecha de vencimiento. En ausencia de mención expresa en la factura de la fecha de vencimiento, se entenderá que debe ser pagada dentro de los treinta días siguientes a la emisión, b) la fecha de recibo, con la indicación del nombre, o identificación o firma de quien es el encargado de recibirla y c) el emisor o prestador del servicio, deberá dejar constancia en el original de la factura, del estado del pago del precio o remuneración y las condiciones del pago si fuere el caso.

A su turno, precisa el Decreto 1154 de 2020 en su artículo 2.2.2.5.4 que:

> *Aceptación de la factura electrónica de venta como título valor. Atendiendo a lo indicado en los artículos 772, 773 y 774 del Código de Comercio,* ***la factura***

electrónica de venta como título valor, una vez recibida, se entiende irrevocablemente aceptada por el adquirente/deudor/aceptante en los siguientes casos*:*

1. Aceptación expresa: Cuando, por medios electrónicos, acepte de manera expresa el contenido de ésta, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la mercancía o del servicio.

2. ***Aceptación tácita****: Cuando no reclamare al emisor en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles* ***siguientes a la fecha de recepción de la mercancía o del servicio****. El reclamo se hará por escrito en documento electrónico.*

*PARÁGRAFO 1.****Se entenderá recibida la mercancía*** *o prestado el servicio* ***con la constancia de recibo electrónica, emitida por el adquirente/deudor/aceptante, que hace parte integral de la factura, indicando el nombre, identificación o la firma de quien recibe, y la fecha de recibo.***

PARÁGRAFO 2. El emisor o facturador electrónico ***deberá dejar constancia Electrónica de los hechos que dan lugar a la aceptación tácita del título en el RADIAN,*** *lo que se entenderá hecho bajo la gravedad de juramento.*

PARÁGRAFO 3. Una vez la factura electrónica de venta como título valor sea aceptada, no se podrá efectuar inscripciones de notas débito o notas crédito, asociadas a dicha factura. (negrilla fuera del texto)

5.- En el caso que se estudia el *a quo* reprochó que se hubiera aportado la representación gráfica y no la factura de venta propiamente, por lo que en su criterio no se acreditó la existencia del instrumento cobrado.

La Corte Suprema de Justicia sostiene que hay tres formas de acreditar la existencia de las facturas electrónicas: "(…) *a.) el formato electrónico de generación de la factura- XML- y el documento denominado «documento validado por el DIAN», en sus nativos digitales, o b). la representación gráfica de la factura (formatos digital o impreso)*". (CSJ, SC. 27 oct 2023. STC11618) Además, "(…) *que también será admisible como prueba del título el «certificado de existencia y trazabilidad de la factura electrónica de venta como título valor en el RADIAN», contemplado en el numeral 9° del artículo 1° de la Resolución 85 de 4 de abril de 2022. Esto, para aquellas facturas que el emisor haya querido inscribir en el RADIAN* (…)" (*Ibidem*)

Descendiendo a la documental aportada al plenario, se observa que la accionante aportó para incoar la acción ejecutiva la representación gráfica de la factura electrónica, lo cual conforme al precedente es plenamente válido y suficiente para acreditar la existencia de las facturas ejecutadas. De cara a los requisitos, en aquella se constata el

Código Único de Factura Electrónicas -CUFE-[2], elemento propio para esta tipología de documentos electrónicos. De igual manera, se observó en esta: i) el nombre e identificación del facturador y el adquirente; ii) la fecha de emisión; iii) el día de vencimiento; ii) descripción del servicio prestado y iv) el valor unitario y el valor total a cobrar.

En ese orden, la decisión censurada debe ser revocada, por cuanto la parte demandante probó de forma correcta la factura electrónica. Ahora corresponde verificar si dicho título valor fue debidamente remitido a la ejecutada para establecer si fue o no aceptada, lo permitiría establecer si es o no oponible a la convocada.

Sobre el particular, la Sala de Casación Civil ha indicado que que:

> "(…) *si el emisor del documento es facturador electrónico, la factura deberá remitirse de forma electrónica, a). «por correo electrónico a la dirección electrónica suministrada por el adquirente en el procedimiento de habilitación como facturador electrónico, que podrá ser consultada en el servicio informático electrónico de validación previa», o b). por otros medios de «transmisión electrónica», si la entrega no se da de la forma anotada y existe acuerdo entre el facturador electrónico y el adquirente. En ambos casos, el formato electrónico de generación y el documento de validación deben ser incluidos en el contenedor electrónico de la factura, que es «un instrumento obligatorio que se utiliza para incluir la información de la factura electrónica de venta, las notas débito, notas crédito y los demás instrumentos y en general la información electrónica derivada de los sistemas de facturación, junto con la validación realizada por la (…) DIAN, cuando fuere el caso*»" (CSJ, SC. 27 oct 2023. STC11618)

Al revisar los anexos de la demanda se advierte, conforme al reporte del proveedor del software contable y financiero WOnline, la constancia de recibo electrónico; incluso se constata que fue vista y aceptada tácitamente por el destinatario del instrumento.

En atención de lo anterior, se constató que el título valor electrónico aportado digitalmente fue recibido por Mozt de Colombia S.A.S., y aunque con la constancias de recibo no se perfeccionó la aceptación expresa de los servicios, si lo fue tácitamente, en la medida en que no se avizora que hubiera sido rechazada por el extremo convocado, ni

[2] Artículo 6 de la Resolución 016 de 2016.

dentro de los 3 días siguientes a su recepción (inciso 3º del artículo 773 del C.Co, modificado por el artículo 86 de la Ley 1676 de 2013), ni en la oportunidad prevista en el artículo 13 de la Ley 1122 de 2007 (norma especial).

8.- Así las cosas, la providencia impugnada será revocada atendiendo a las circunstancias advertidas y, se ordenará al juez de primera instancia que provea lo que en derecho corresponda respecto de los requisitos formales de la demanda para efectos de determinar su admisibilidad o inadmisibilidad.

III.- DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C., Sala Civil, **RESUELVE:**

PRIMERO: REVOCAR el auto proferido, el 10 de marzo de 2022, por el Juzgado Catorce del Circuito Civil de Bogotá, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

En consecuencia, se ordena a la juez de primera instancia que provea, según corresponda.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: En firme la decisión, remítase al Juzgado de conocimiento para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA SAAVEDRA LOZADA
Magistrada

ASL/MATE

Firmado Por:

Adriana Saavedra Lozada

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Sala 001 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **9b91318df6c8bcd4c4a8bd08fc5a29aa858e7b0a30bbcda70da9de3fdcf10758**

Documento generado en 29/02/2024 11:57:42 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ D.C.
Sala Civil

Bogotá D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Ref.: Proceso de expropiación de la Agencia Nacional de Infraestructura contra el municipio de Acacías

En orden a resolver el recurso de apelación que la parte demandante interpuso contra el auto de 19 de diciembre de 2023, proferido por el Juzgado 30 Civil del Circuito de la ciudad para rechazar la demanda por caducidad, bastan las siguientes,

Consideraciones:

1. Es evidente que la jueza se equivocó al considerar que la acción para expropiar había caducado, pues si esta figura jurídica consiste en la clausura de la oportunidad para ejercer cierto derecho que sólo se reconoce dentro del respectivo plazo, resulta incontestable que el término previsto en el numeral 2° del artículo 399 del Código General del Proceso no tiene ese específico alcance, como lo reconoció el mismo legislador en dicha norma al señalar, para que no quedara duda, que de no radicarse la demanda dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha en la que causa firmeza la resolución que ordena la expropiación, esta –y las respectivas inscripciones- perderán fuerza ejecutoria, que es el concepto adecuado para tales casos, si se repara en que no es posible sostener, en modo algún, que al Estado le caduca, con los efectos que le son propios a la caducidad, la posibilidad de expropiar.

Ahora, si el punto es determinar la tempestividad de la demanda, con el fin de establecer las consecuencias legales referidas, basta revisar la

trazabilidad de su recepción[1] para constatar que fue radicada el 23 de noviembre de 2023, a través del portal habilitado por la Rama Judicial. Luego, si la resolución No. 20236060008625 del 14 de julio de 2023[2] quedó ejecutoriada el 24 de agosto siguiente[3], es claro que aquella fue oportuna.

2. Puestas de este modo las cosas, se revocará el auto apelado para que la juzgadora proceda a la admisión (CGP, art. 90). No se impondrá condena en costas, por la prosperidad del recurso.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, revoca el auto de 19 de diciembre de 2023, proferido por el Juzgado 30 Civil del Circuito de la ciudad dentro del proceso de la referencia. La juzgadora proceda a la admisión.

NOTIFÍQUESE,

[1] Cuaderno 001, pdf. 005, pág.3
[2] Cuaderno 001, pdf.004, pág.10
[3] Cuaderno 001, pdf.004, pág.18

Firmado Por:

Marco Antonio Alvarez Gomez

Magistrado

Sala 006 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **61c71b89f5c4a28a549fc8214be1b46889ef0ff234fc6dfe7b8d061a63ae4c24**

Documento generado en 29/02/2024 09:05:18 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

ADRIANA SAAVEDRA LOZADA
Magistrada Ponente

Bogotá D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

(Rad n° 1100131030-27-2017-00391-02)

Se admite en el efecto devolutivo[1] el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Juzgado 27 Civil del Circuito de Bogotá el 7 de noviembre de 2023.

Conforme el artículo 12 de la ley 2213 de 2022, ejecutoriado este auto córrase traslado a la parte apelante por el término de cinco (05) días, para que sustente el recurso o manifieste si la sustentación corresponde al escrito presentado ante el *A quo*, so pena de declararlo desierto si guarda silencio.

Si el apelante allega escrito o manifiesta atenerse a los reparos presentados ante la primera instancia descórrase el mismo a las demás partes por idéntico término, de lo contrario ingrese el expediente al Despacho.

En uso de la prerrogativa del artículo 121 del CGP, debido a la alta carga laboral y para precaver la pérdida automática de competencia, se prorroga el término para decidir la instancia por seis (6) meses más, contados a partir del vencimiento[2].

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA SAAVEDRA LOZADA
Magistrada

ASL/GD

---

[1] Artículo 323 del CGP.
[2] Teniendo en cuenta que la radicación en el Tribunal es del 28 de febrero de 2024.

Firmado Por:

Adriana Saavedra Lozada

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Sala 001 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **5dcbb548a3cf0ce7cfa7ad7d7ebb0e770943e21ecf5fdcc242d20a9f9b967f80**

Documento generado en 29/02/2024 12:00:01 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

ADRIANA SAAVEDRA LOZADA
Magistrada Ponente

Bogotá D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

(Rad n° 1100131030-16-2021-00444-01)

Revisado el expediente se advierte que la alzada que formuló el extremo demandado se concedió en un efecto que no corresponde, dado que no se dan los presupuestos del artículo 323 del C.G.P., para que la apelación se otorgara en el efecto suspensivo. En consecuencia, se dispone:

Admitir en el efecto devolutivo[1] el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Juzgado 16 Civil del Circuito de Bogotá en audiencia del 29 de noviembre de 2023.

Conforme el artículo 12 de la ley 2213 de 2022, ejecutoriado este auto córrase traslado a la parte apelante por el término de cinco (05) días, para que sustente el recurso o manifieste si la sustentación corresponde al escrito presentado ante el *A quo*, so pena de declararlo desierto si guarda silencio.

Si el apelante allega escrito o manifiesta atenerse a los reparos presentados ante la primera instancia descórrase el mismo a las demás partes por idéntico término, de lo contrario ingrese el expediente al Despacho.

En uso de la prerrogativa del artículo 121 del CGP, debido a la alta carga laboral y para precaver la pérdida automática de competencia, se prorroga el término para decidir la instancia por seis (6) meses más, contados a partir del vencimiento[2].

---

[1] Artículo 323 del CGP.
[2] Teniendo en cuenta que la radicación en el Tribunal es del 28 de febrero de 2024.

OFÍCIESE al Juez *a quo* informándole lo aquí resuelto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA SAAVEDRA LOZADA
Magistrada

ASL/GD

Firmado Por:
Adriana Saavedra Lozada
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 001 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **3ee1a83f25460697162ac3579276b98d57f4a5e60370d858212e55c5d0a5e09d**
Documento generado en 29/02/2024 11:59:42 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá, D.C., veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro.

Radicado: 11001 31 03 031 2023 00318 01 - Procedencia: Juzgado 31 Civil del Circuito.
Verbal: Carlos González Cardozo. **Vs.** Carlos Edgar González Varhas.
Asunto: **Apelación de auto que rechazó demanda.**

Se resuelve la apelación interpuesta por el demandante contra el auto de 21 de septiembre de 2023, por medio del cual el Juzgado 31 Civil del Circuito rechazó la demanda tras considerar que no se subsanó la causal de inadmisión relativa a la acreditación *"del agotamiento del requisito de conciliación prejudicial"*.[1]

Para ese efecto basta señalar:

1. Primero, en la demanda radicada no se solicitó el decreto de medidas cautelares, por lo que la petición que en ese sentido se incluyó en el escrito de subsanación no podría activar la excepción consagrada el parágrafo 1° del artículo 590 Cgp.

En ese orden, no podría avalarse que, en un inicio, al presentarse la demanda, la parte actora **no** estimara necesario pedir medidas cautelares, y que solo hasta la subsanación, y luego de advertido el defecto formal de falta de demostración de la exigencia de conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad, sí acudiera a una solicitud de cautelas.

Es evidente, entonces, que la parte demandante pretendió sustraerse de la subsanación del referido defecto bajo la novedosa solicitud que vino a introducir en el escrito con el que se pretendió subsanar lo señalado en la providencia inadmisoria, cuestión que no es de recibo por el Tribunal. Y es que, en realidad, no podría revocarse ni modificarse la decisión de un juez, en este caso circunscrita a la calificación de la demanda, con

[1] Alzada concedida el 19 de febrero de 2024

fundamento en aspectos que no hacían parte del escrito planteado desde el inicio, de modo que en tales circunstancias la subsanación solo era posible con la aportación de los documentos que demostraran el cumplimiento de tal conciliación prejudicial.

Lo anterior impone ratificar el rechazo dispuesto por el a-quo.

DECISIÓN

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, **CONFIRMA** el auto apelado, proferido el 21 de septiembre de 2023 por el Juzgado 31 Civil Circuito de Bogotá.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE
El Magistrado,

GERMÁN VALENZUELA VALBUENA
11001 31 03 031 2023 00318 01

Firmado Por:
German Valenzuela Valbuena
Magistrado
Sala 019 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **f4e032cc3aed21a5bbb1c6d9f1ad79d2f1bbd32e94e591426cbda9b5900bcff8**
Documento generado en 29/02/2024 04:59:52 p. m.

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ D.C.
Sala Civil

Bogotá D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Rdo. 034201500320 01

Se admite el recurso de apelación que la parte demandada interpuso contra la sentencia de 27 de noviembre de 2023, proferida por el Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogotá dentro del proceso de la referencia.

Oportunamente, retorne el proceso al Despacho.

NOTIFÍQUESE

Firmado Por:
Marco Antonio Alvarez Gomez
Magistrado
Sala 006 Civil
Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **a114a47055ea44957983ed012dabdc7218612a58de1e3e6d41ec7c3255b80f4e**
Documento generado en 29/02/2024 09:15:43 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

ADRIANA SAAVEDRA LOZADA
Magistrada Sustanciadora

Bogotá D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, Ángel Arturo López Pantoja contra el auto proferido el 28 de junio de 2023, por el Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogotá, mediante el cual se negó el mandamiento de pago acumulado.

I. ANTECEDENTES

1.- Ángel Arturo López Pantoja, mediante apoderado judicial, solicitó la ejecución de Martha Cecilia Salamanca Murillo, la Constructora Nelekonar S.A.S. y Ricardo Rozo Salamanca, por las cantidades de $450.000.000; $300.050.000; $150.000.000; $150.000.000; $150.000.000; y $150.000.000 -con sus correspondientes intereses moratorios-. representadas en los pagarés No. 28022018; 30102018; 21161850; 21161850; 21161850; y 21161850.

2.- La *a quo*, luego de inadmitir la demanda, negó el mandamiento de pago, tras considerar que el poder aportado con la subsanación no era suficiente para que el representante judicial solicitara la ejecución de los títulos valores 28022018 y 30102018. Además, que el pagaré 21161850 ya es objeto de ejecución en la demanda principal y no se puede determinar si aquel es distinto a los cuatro que se pretenden cobrar en la demanda acumulada.

3.- Inconforme con esa decisión, el accionante interpuso recurso de reposición en subsidio el de apelación para que se libre ejecución en contra de los demandados en los términos solicitados. El recurrente, luego de recordar los deberes del juez, explicó que en el expediente obran dos poderes que se complementan y habilitan a su abogado para solicitar la ejecución de los pagarés referidos en la demanda. Además, si se puede establecer la diferencia entre cada título valor y no se lo puede castigar porque aquellos tengan la misma fecha de vencimiento y valor.

4.- El juez de primera instancia, el 15 de agosto de 2023, resolvió no revocar su determinación, por lo que concedió el recurso de alzada; razón por la cual, se conoce del proceso en esta instancia.

II. CONSIDERACIONES

5.- Sea lo primero precisar, que esta instancia es competente para conocer del recurso de apelación incoado al tenor del numeral 4° del artículo 321 del C.G.P., por tanto, resulta viable el estudio por la vía del recurso vertical.

6.- El juicio ejecutivo ha sido definido como un procedimiento contencioso especial por medio del cual el acreedor pretende el cumplimiento total o parcial de una obligación clara, expresa y exigible, que conste en un acto o documento proveniente del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o administrativa que deba cumplirse, y que el deudor no realizó en su debida oportunidad. De ahí que, debe tener origen en un título que tenga fuerza por sí mismo de plena prueba.

De modo tal, que al tenor del artículo 422 del Código General del Proceso, son dos las condiciones básicas para la existencia de un título ejecutivo, la primera corresponde a la formal, que tiene que ver con la calidad del documento que da cuenta de la existencia de la obligación, es decir, que *"provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía*

aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184".

La segunda, se refiere al requisito material o sustancial, el cual exige que "*el título ejecutivo contenga una prestación en beneficio de una persona. Es decir, que establezca que el obligado debe observar a favor de su acreedor una conducta de hacer, de dar, o de no hacer, que debe ser clara, expresa y exigible. Es* ***clara*** *la obligación que no da lugar a equívocos, en otras palabras, en la que están identificados el deudor, el acreedor, la naturaleza de la obligación y los factores que la determinan. Es* ***expresa*** *cuando de la redacción misma del documento, aparece nítida y manifiesta la obligación. Es* ***exigible*** *si su cumplimiento no está sujeto a un plazo o a una condición, dicho de otro modo, si se trata de una obligación pura y simple ya declarada"*. (CC. T-747/13).

De suerte, que una obligación que no se ajuste a los anteriores presupuestos, no se le puede abrir paso al juicio coactivo, de lo contrario, presentada la demanda "*acompañada de documento que preste mérito ejecutivo*", el funcionario encargado librará la orden de apremio, ordenando al ejecutado que cumpla el mandato en la forma pedida, si así fuere procedente, "*o en la que aquel considere legal*".

7.- En el caso que se estudia el *a quo* reprochó que el apoderado no estaba facultado para solicitar la ejecución de los pagarés 28022018 y 30102018 en contra de los demandados, por falta de mandato especial. Además, que no se evidenció que los pagarés distinguidos con el consecutivo 21161850 sean diferentes entre sí y el que ya se cobró en la demanda principal.

Antes de abordar el estudio de la decisión censurada se debe dar claridad sobre el alcance de esta. La juez de primera instancia, en la parte considerativa, sostuvo que la subsanación del poder -solicitado en la inadmisión- no fue suficiente para habilitar al abogado para cobrar los pagarés 28022018 y 30102018, lo que conllevaría a que "*se*

rechazara el mandamiento de pago"; pero en la resolutiva negó el mandamiento.

De la lectura de la providencia se observa que lo pretendido implícitamente por la juzgadora no era negar el mandamiento de pago frente a esos títulos valores, sino disponer el rechazo de la demanda por no haberse superado los defectos de la demanda alertados en la providencia que inadmitió el libelo introductor, ya que nunca se estudiaron los requisitos formales y materiales de aquellos.

De otra parte, expuso que la razón para negar la orden pago frente a los cartulares individualizados con el consecutivo 21161850 obedeció a que no se podían identificar plenamente si eran diferentes entre sí, y que en todo caso ya se ejecutaba uno con el mismo número en la demanda principal, lo cual luce como una consistente motivación para negar la orden de apremio, pero exclusivamente sobre estos documentos.

Así, la providencia censurada implícitamente dispuso el rechazo de una fracción de la demanda, y negó la orden compulsiva respecto de otra. Bajo ese sendero se procederá al estudio de los reparos formulados por el demandante, aclarando que ambas decisiones son apelables conforme a los numerales 1 y 4 del artículo 321 del Código General del Proceso.

8.- Para desatar el primer problema planteado, se ha de verificar si la parte demandante subsanó o no la demanda y el alcance de los poderes que obran en el plenario. De la revisión del mandato anexado con la demanda se observa que se facultó al mandatario para obtener el pago de la señora Martha Cecilia Salamanca Murillo frente a los pagarés No. 28022018; 30102018; 21161850; 21161850; 21161850; y 21161850, por las cantidades de $450.000.000; $300.050.000; $150.000.000; $150.000.000; $150.000.000; y $150.000.000; mientras que el poder allegado con la subsanación del escrito inicial refirió que se encomendada al abogado para que cobrara a Martha Cecilia Salamanca Murillo, la Constructora Nelekonar S.A.S. y Ricardo Rozo Salamanca el pagaré 21161850 por la suma de $150.000.000.

En efecto, si se compara la orden dada por la juez en la primera en el numeral primero del auto de 29 de mayo de 2023 -inadmisión-[1] con el poder aportado en cumplimiento de dicha disposición, sin duda no se supera el escenario alertado por la juez en la primera oportunidad. Ello, si se repara que pese a mencionar a los demás demandados, lo cierto es que el mandato no cumple con la especificidad necesaria para colegir que el abogado puede perseguir el cobro de la totalidad de las pretensiones de la demanda al no referir la totalidad de los pagarés que se buscan satisfacer.

Esa falencia sin duda permite compartir el análisis de la juez de primera instancia, pero exclusivamente frente a la Constructora Nelekonar S.A.S. y Ricardo Rozo Salamanca, ya que el primer poder es suficientemente claro frente a su alcance contra la demandada Martha Cecilia Salamanca Murillo.

Ha de recordarse que el artículo 430 de la ley adjetiva impone al juez el deber de librar el mandamiento de pago no solo como la parte demandante lo pida -si fuere procedente-; sino como la considere legal.

El artículo 632 del Código de Comercio consagra la solidaridad de la obligación cuando dos o más personas suscriben un título valor, en ese orden los demandados son obligados en ese grado respecto de los cartulares que se ejecutan, por lo que es plenamente factible que la obligación pueda ser solventada por uno, algunos o todos los deudores. En este asunto se presenta un litis consorcio facultativo según el canon 60 del Código General del Proceso.

Bajo ese sendero y con el de una interpretación de la demanda que abogue por el acceso efectivo a la administración de justicia del accionante, la juez de primera instancia podía plenamente haber librado la orden compulsiva frente a Martha Cecilia Salamanca

---

[1] "(…) *ACLARAR Y/O APORTAR el poder para demandar a la sociedad CONSTRUCTORA NELEKONAR S.A.S. y al señor NELSON RICARDO ROZO SALAMANCA, de acuerdo con lo narrado en los hechos 11 al 16 de la demanda, en la forma en que señala el último inciso del artículo 5 de la Ley 2213 de 2022, esto es, como mensaje de datos desde la dirección de correo electrónico inscrita para recibir notificaciones judiciales, de la persona jurídica que pretenden demandar, o con las formalidades previstas en el inciso segundo del artículo 74 del Código General del Proceso.*" 04AutoInadmiteDemanda.pdf

Murillo, en la medida que el abogado si contaba con el encargo suficiente para representar al accionante contra aquella.

No existe reparo frente a la aptitud ejecutiva de los pagarés 28022018 y 30102018, por lo que se revocará la orden frente a estos, pero exclusivamente respecto de Martha Cecilia Salamanca Murillo. De otra parte, se modificará el numeral primero en lo que concierne a los demás ejecutados para indicar que se rechaza la demanda frente a estos.

Superado el primer problema jurídico, se analizará si los cuatros pagarés identificados con el consecutivo 21161850 y con vencimientos de 28 de febrero de 2018 son el mismo instrumento que se ejecuta en la demanda principal y si son diferentes entre sí para poder identificar si existen derechos autónomos e independientes que habiliten al demandante a buscar la satisfacción de cada uno de ellos.

De la revisión de los cinco instrumentos no se desconoce que presentan una complejidad importante para su diferenciación, porque tienen el mismo consecutivo y fecha de vencimiento.

La única forma de poder establecer diferencias entre uno y otros es revisándolos pormenorizadamente en sus detalles. Para tal efecto y con fines de claridad se comprarán gráficamente cada uno.



ESTADOS AL DIA S.A.S Abogados

PAGARÉ

Lugar y fecha de Firma: Bogotá, 20 de Junio de 2.016
Pagaré Número: 21161850
Valor: CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS. ($150.000.000. oo)
Interés de mora: [ ]
Interés durante el plazo: [ ]
Lugar donde se efectuará el pago: Bogotá
Fecha de vencimiento de la obligación: 28 de Febrero del [illegible]
Deudor (es): **MARTHA CECILIA SALAMANCA MURILLO. C.C. No. 21.161.850 de Bogotá. CONSTRUCTORA NELEKONAR S.A.S. NIT. No. 830018034-4 y NELSON RICARDO ROZO SALAMANCA, C.C. No. 19.445.115 de Bogotá** Declaramos **Primera – Objeto:** Que por virtud del presente título valor pagaré(mos) incondicionalmente, a la orden de: **ANGEL ARTURO LOPEZ PANTOJA Y/O ANGELA PATRICIA LOPEZ CASTELLANOS Y/O BETSY LUCELLY LOPEZ CASTELLANOS** o a quien represente sus derechos, en la ciudad y dirección indicados, en los fechas de amortización por cuotas señaladas en la cláusula tercera de este pagaré, la suma de **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($150.000.000.oo). Segunda Intereses:** Que sobre la suma debida reconoceré (mos) intereses equivalentes al [ ] por ciento ([ ]%) mensual, sobre el capital o su saldo insoluto. En caso de mora reconoceré (mos) intereses a la tasa máxima legal autorizada. **Tercera – Plazo:** El pagaré (mos) el capital indicado en la cláusula primera y los intereses mediante cuotas mensuales y sucesivas correspondientes cada una a la cantidad de [ ]. El primer pago lo efectuaré (mos) el día [ ] Del mes de [ ] del año [ ] y así sucesivamente en ese mismo día de cada mes. **Cuarta – Cláusula aceleratoria:** El tenedor podrá declarar vencidos la totalidad de los plazos de esta obligación, sumo las cuotas que constituyan el saldo de lo debido y exigir su pago inmediato, sea judicial o extrajudicial, cuando el (los) deudor (es) entre (n) en mora o incumpla (n) una cualquiera de las obligaciones derivadas del presente documento. **Quinta – Impuesto de Timbre:** El impuesto de timbre de este documento si se causare será carga única y exclusivamente de el (los) deudor (es).

En constancia de lo anterior, se suscribe este documento el día VEINTE (20) del mes de JUNIO del año dos mil Dieciséis (2.016).

Email: angelaortiz@gmail.com
Kra 80 A No. 25 C – 90 TEL: 2631216 CEL: 315 3256880 Bogotá - Colombia

ESTADOS AL DIA S.A.S Abogados

OTORGANTES

Deudor

MARTHA CECILIA SALAMANCA MURILLO
C.C. No. 21.161.850 de Bogotá

Deudor

CONSTRUCTORA NELEKONAR S.A.S.
NIT. No. 830018034-4

NELSON RICARDO ROZO SALAMANCA
C.C. No. 19.445.115 de Bogotá

Codeudor

C.C./Nit No.

Codeudor

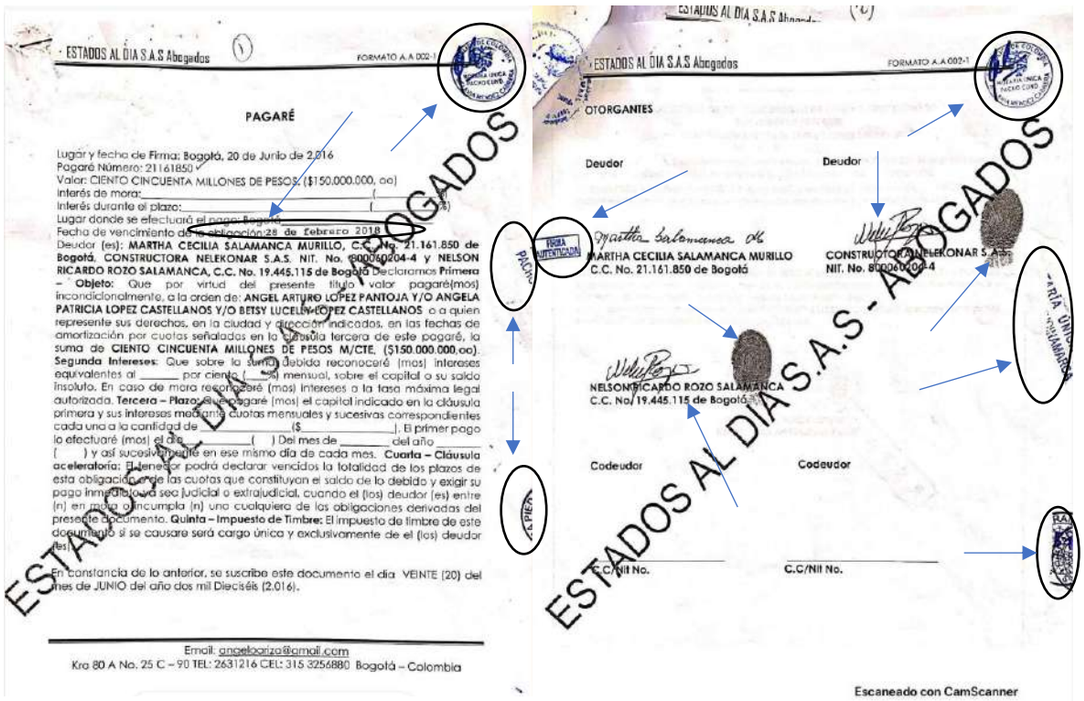
C.C./Nit No.

Email: angelaortiz@gmail.com
Kra 80 A No. 25 C – 90 TEL: 2631216 CEL: 315 3256880 Bogotá - Colombia

ESTADOS AL DIA S.A.S - ABOGADOS

Pagaré demanda principal[2]

[2] 01.PODER-ANEXOS-DEMANDA-ACTA DE REPARTO – INFORME DE ENTRADA.pdf Fls. 2-3.


ESTADOS AL DIA S.A.S Abogados

FORMATO A.A 002-1

PAGARÉ

Lugar y fecha de Firma: Bogotá, 20 de Junio de 2.016
Pagaré Número: 21161850
Valor: CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS. ($150.000.000, oo)
Interés de mora: _____ ( )
Interés durante el plazo: _____ ( )
Lugar donde se efectuará el pago: Bogotá
Fecha de vencimiento de la obligación: 28 de febrero 2018
Deudor (es): **MARTHA CECILIA SALAMANCA MURILLO, C.C. No. 21.161.850 de Bogotá, CONSTRUCTORA NELEKONAR S.A.S. NIT. No. 800060204-4 y NELSON RICARDO ROZO SALAMANCA, C.C. No. 19.445.115 de Bogotá** Declaramos **Primera – Objeto:** Que por virtud del presente título valor pagaré(mos) incondicionalmente, a la orden de: **ANGEL ARTURO LOPEZ PANTOJA Y/O ANGELA PATRICIA LOPEZ CASTELLANOS Y/O BETSY LUCELLY LOPEZ CASTELLANOS** o a quien represente sus derechos, en la ciudad y dirección indicados, en las fechas de amortización por cuotas señaladas en la Cláusula tercera de este pagaré, la suma de **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($150.000.000,oo). Segunda Intereses:** Que sobre la suma debida reconoceré (mos) intereses equivalentes al _____ por ciento (_____%) mensual, sobre el capital o su saldo insoluto. En caso de mora reconoceré (mos) intereses a la tasa máxima legal autorizada. **Tercera – Plazo:** El pagaré (mos) el capital indicado en la cláusula primera y sus intereses mediante cuotas mensuales y sucesivas correspondientes cada una a la cantidad de _____($_____). El primer pago lo efectuaré (mos) el día _____( ) Del mes de _____ del año _____ ( ) y así sucesivamente en ese mismo día de cada mes. **Cuarta – Cláusula aceleratoria:** El tenedor podrá declarar vencidos la totalidad de los plazos de esta obligación, exigir las cuotas que constituyan el saldo de lo debido y exigir su pago inmediato, ya sea judicial o extrajudicial, cuando el (los) deudor (es) entre (n) en mora o incumpla (n) una cualquiera de las obligaciones derivadas del presente documento. **Quinta – Impuesto de Timbre:** El impuesto de timbre de este documento si se causare será cargo única y exclusivamente de el (los) deudor (es).

En constancia de lo anterior, se suscribe este documento el día VEINTE (20) del mes de JUNIO del año dos mil Dieciséis (2.016).

Email: angelaoriza@gmail.com
Kra 80 A No. 25 C – 90 TEL: 2631216 CEL: 315 3256880 Bogotá – Colombia

ESTADOS AL DIA S.A.S Abogados

FORMATO A.A 002-1

OTORGANTES

Deudor

MARTHA CECILIA SALAMANCA MURILLO
C.C. No. 21.161.850 de Bogotá

Deudor

CONSTRUCTORA NELEKONAR S.A.S.
NIT. No. 800060204-4

NELSON RICARDO ROZO SALAMANCA
C.C. No. 19.445.115 de Bogotá

Codeudor

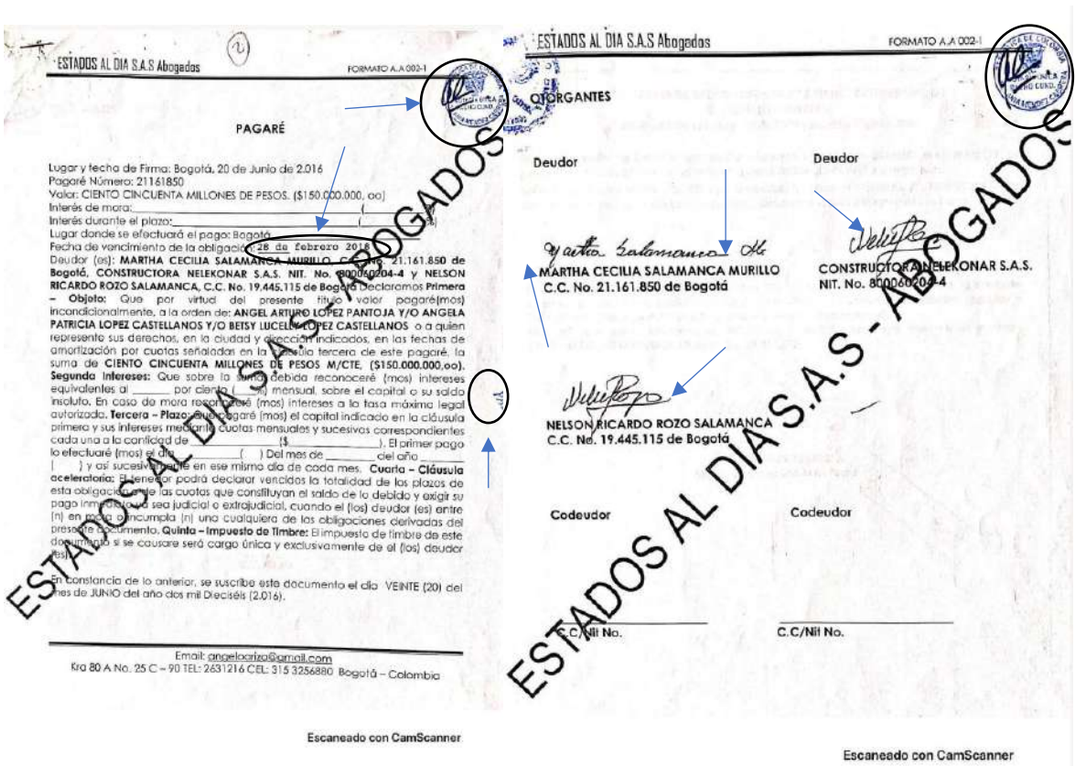
C.C/Nit No.

Codeudor

C.C/Nit No.

Escaneado con CamScanner

Primer pagaré acumulada[3]


ESTADOS AL DIA S.A.S Abogados

FORMATO A.A 002-1

PAGARÉ

Lugar y fecha de Firma: Bogotá, 20 de Junio de 2.016
Pagaré Número: 21161850
Valor: CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS. ($150.000.000, oo)
Interés de mora: _____ ( )
Interés durante el plazo: _____ ( )
Lugar donde se efectuará el pago: Bogotá
Fecha de vencimiento de la obligación: 28 de febrero 2018
Deudor (es): **MARTHA CECILIA SALAMANCA MURILLO, C.C. No. 21.161.850 de Bogotá, CONSTRUCTORA NELEKONAR S.A.S. NIT. No. 800060204-4 y NELSON RICARDO ROZO SALAMANCA, C.C. No. 19.445.115 de Bogotá** Declaramos **Primera – Objeto:** Que por virtud del presente título valor pagaré(mos) incondicionalmente, a la orden de: **ANGEL ARTURO LOPEZ PANTOJA Y/O ANGELA PATRICIA LOPEZ CASTELLANOS Y/O BETSY LUCELLY LOPEZ CASTELLANOS** o a quien represente sus derechos, en la ciudad y dirección indicados, en las fechas de amortización por cuotas señaladas en la Cláusula tercera de este pagaré, la suma de **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($150.000.000,oo). Segunda Intereses:** Que sobre la suma debida reconoceré (mos) intereses equivalentes al _____ por ciento (_____%) mensual, sobre el capital o su saldo insoluto. En caso de mora reconoceré (mos) intereses a la tasa máxima legal autorizada. **Tercera – Plazo:** El pagaré (mos) el capital indicado en la cláusula primera y sus intereses mediante cuotas mensuales y sucesivas correspondientes cada una a la cantidad de _____($_____). El primer pago lo efectuaré (mos) el día _____( ) Del mes de _____ del año _____ ( ) y así sucesivamente en ese mismo día de cada mes. **Cuarta – Cláusula aceleratoria:** El tenedor podrá declarar vencidos la totalidad de los plazos de esta obligación, exigir las cuotas que constituyan el saldo de lo debido y exigir su pago inmediato, ya sea judicial o extrajudicial, cuando el (los) deudor (es) entre (n) en mora o incumpla (n) una cualquiera de las obligaciones derivadas del presente documento. **Quinta – Impuesto de Timbre:** El impuesto de timbre de este documento si se causare será cargo única y exclusivamente de el (los) deudor (es).

En constancia de lo anterior, se suscribe este documento el día VEINTE (20) del mes de JUNIO del año dos mil Dieciséis (2.016).

Email: angelaoriza@gmail.com
Kra 80 A No. 25 C – 90 TEL: 2631216 CEL: 315 3256880 Bogotá – Colombia

Escaneado con CamScanner

ESTADOS AL DIA S.A.S Abogados

FORMATO A.A 002-1

OTORGANTES

Deudor

MARTHA CECILIA SALAMANCA MURILLO
C.C. No. 21.161.850 de Bogotá

Deudor

CONSTRUCTORA NELEKONAR S.A.S.
NIT. No. 800060204-4

NELSON RICARDO ROZO SALAMANCA
C.C. No. 19.445.115 de Bogotá

Codeudor

C.C/Nit No.

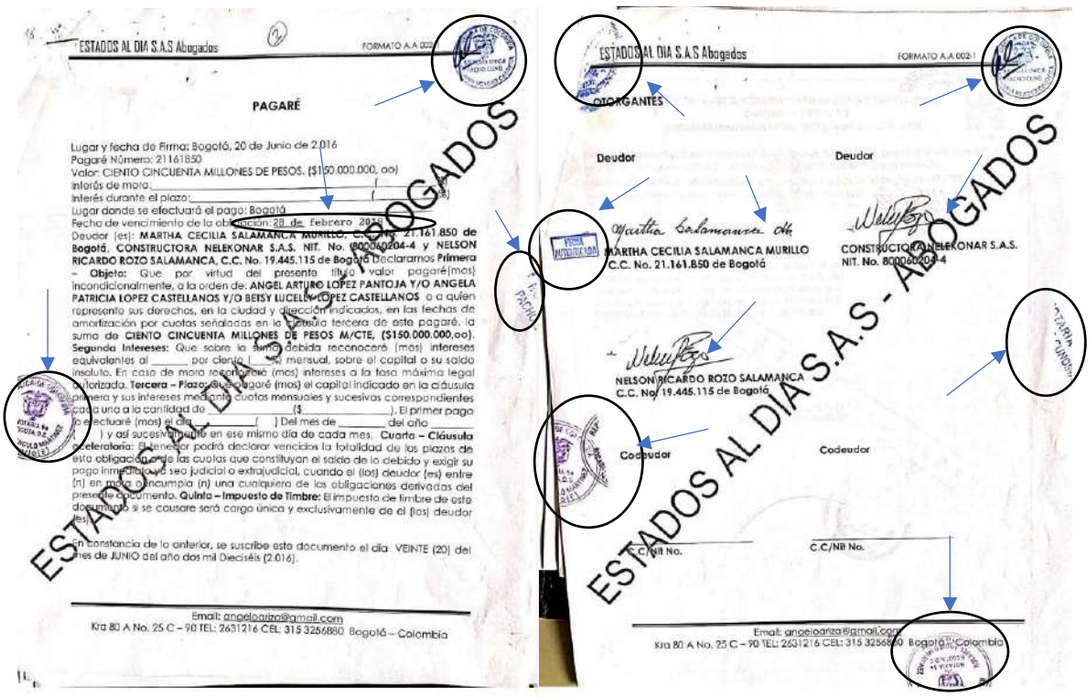
Codeudor

C.C/Nit No.

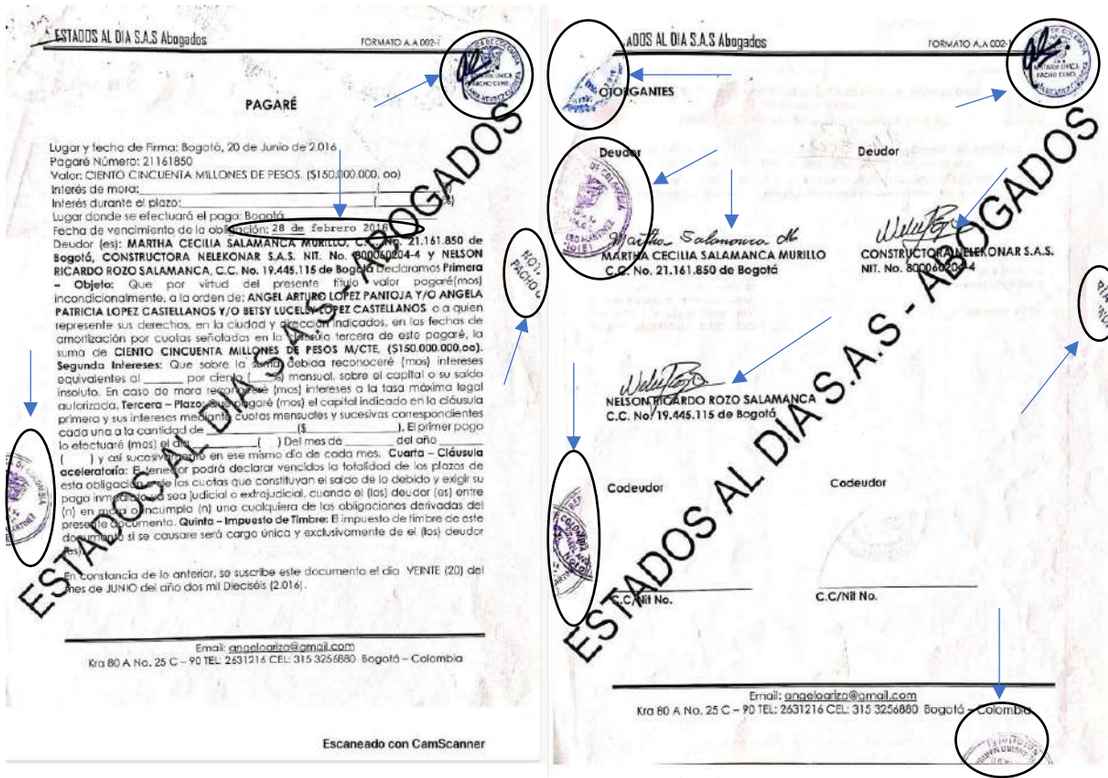
Escaneado con CamScanner

[3] 01DemandaAnexos.pdf Fls. 24-25.

Segundo pagaré acumulada[4]



Tercer pagare acumulada[5]



Cuarto pagaré acumulada[6]

[4] Ibidem. Fls. 29-30.
[5] Ibid. Fls. 34-35.
[6] Id. Fls. 40-41.

9.- De los anteriores gráficos se observa que si existían signos distintivos en los sellos, firmas y diligenciamiento de las fechas de vencimiento para poder colegir que se trataban de instrumentos autónomos y diferentes que representan derechos crediticios independientes entre cada uno de ellos, por lo que la tesis presentada en la providencia censurada debe ser revocada, dado que no es cierto que el título valor 21161850 sea uno solo, sino que existen cinco diferentes, uno cobrado en la demanda principal y los demás en la acumulada que se estudia. En ese orden, se revocará la providencia en lo concerniente a este instrumento y a la demandada Martha Cecilia Salamanca Murillo.

10.- Así las cosas, la providencia impugnada será modificada frente a la Constructora Nelekonar S.A.S. y Ricardo Rozo Salamanca. Mientras que será revocada respecto de Martha Cecilia Salamanca Murillo, atendiendo a las circunstancias advertidas. Por lo anterior, se ordenará a la juez *a quo* proveer lo que derecho corresponda conforme a los parámetros brindados.

III.- DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C., Sala Civil,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR el numeral primero del auto proferido, el 28 de junio de 2023, por el Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogotá, atendiendo a las consideraciones que se expusieron en la parte motiva de este proveído, el cual quedará así "RECHAZAR la demanda formulada por Ángel Arturo López Pantoja contra la Constructora Nelekonar S.A.S. y Ricardo Roso Salamanca".

SEGUNDO: REVOCAR el auto proferido, el 28 de junio de 2023, por el Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogotá, atendiendo a las consideraciones que se expusieron en la parte motiva de este proveído frente a la demandada Martha Cecilia Salamanca Murillo.

En consecuencia, se ordena a la juez de primera instancia que provea, según corresponda.

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.

CUARTO: En firme la decisión, remítase al Juzgado de conocimiento para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA SAAVEDRA LOZADA
Magistrada

ASL/MATE

Firmado Por:

Adriana Saavedra Lozada

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Sala 001 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **4eb05bc4169690c041157f443272a13fcab142ce0fe228b9c04d062d50855831**

Documento generado en 29/02/2024 12:13:28 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

ADRIANA SAAVEDRA LOZADA
Magistrada Sustanciadora

Bogotá D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante[1] contra el numeral segundo del auto proferido el 8 de junio de 2023 por el Juzgado Cincuenta y Cinco Civil del Circuito de Bogotá, mediante el cual se negó la medida cautelar innominada solicitada.

I. ANTECEDENTES

1.- La parte demandante inició demanda en contra de Acción Sociedad Fiduciaria SA. -en nombre propio y como vocera del Fideicomiso Lote Complejo Bacatá-, Fideicomiso Bacatá Área Comercial Fase 1 y BD Promotores Colombia SAS en liquidación, para que se declare la inexistencia de los contratos de vinculación "Fideicomiso Bacatá Área Comercial Fase 1" celebrados por las partes. Además, que se reconozca que el extremo accionado es solidariamente responsable por los perjuicios derivados de la anterior declaración.

En subsidio, formularon las siguientes pretensiones: i) que se declare la resolución de los negocios jurídicos mencionados; y ii) que se

[1] Armen Ruby Nocua Gauna, José Rafael Aguilar Villaquiran, Jorge Sebastián Zea Martelo, Rosa María Zea Martelo, Camilo Carlos García Santaella, Esperanza Santaella de García, Diego Fernando García Santaella, Julián Mauricio García Santaella, Oscar Hernando Morales Casallas, Carlos Andrés Rocha Penagos y Vilma Stella Barbosa Hernández

declare la extinción de los contratos. Ambas, con las correspondientes condenas consecuenciales y en costas.

La parte demandante solicitó como medida cautelar, entre otras,

> "(…) *ordenar a ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A., en su calidad de vocera y de administradora del Patrimonio autónomo denominado "FIDEICOMISO LOTE COMPLEJO BACATÁ", identificado con Nit. 805.012.921-0 y del patrimonio autónomo denominado "FIDEICOMISO AREAS COMERCIALES FASE 1", identificado con Nit. 805.012.921-0, depositar las sumas de dinero que reciba por concepto de los cánones de arrendamiento mensuales del "total de 42 espacios destinados para arrendamiento" (AREAS COMERCIALES FASE 1), del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 50C-1979470 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá, ubicado en la AVENIDA CALLE 19 # 5-30/52/62 SECTOR CENTRO COMERCIAL COMPLEJO BD BACATA PROPIEDAD HORIZONTAL de Bogotá, D.C., que forma parte del "FIDEICOMISO LOTE COMPLEJO BACATÁ", en "un fondo de inversión para que produzcan rendimientos, en tanto se produce su distribución", tal como así lo anunció ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A., a los partícipes, en el documento "INFORME ÁREAS COMERCIALES – COMPLEJO BD BACATÁ", según el cual, "Desde el 03 de abril de 2017 el Centro Comercial del Complejo BD Bacatá, abrió sus puertas al público* (…)".

2.- El juez de instancia, negó el decreto de la medida cautelar innominada, tras considerar que los elementos de juicio recopilados hasta el momento no eran suficientes para colegir que la duración del proceso pudiera llegar a comprometer la satisfacción de las acreencias cuyo reconocimiento se pretende. Tampoco consideró que las obligaciones demandadas fueran razonablemente plausibles en su existencia, exigibilidad y extensión por el momento.

3.- Inconforme con la anterior decisión, los demandantes interpusieron recurso de reposición y en subsidio apelación. Alegaron, en síntesis: i) que la solicitud de medida cautelar innominada cumple con los requisitos del literal c) del numeral 1 del artículo 590 del Código General del Proceso y existen en el proceso medios probatorios para verificar su procedencia; ii) El juez no indicó cuáles fueron los requisitos que no se cumplieron para acceder a la petición y, por el contrario, hizo alusión a la duración del litigio, cuando tal aspecto no

está contemplado en la normativa, iii) la medida cautelar de inscripción de la demanda sobre los inmuebles no es suficiente, porque ya recaen sobre ellos embargos en otros litigios y iv) está demostrado que el predio identificado con FMI 50C-1979470 se encuentra arrendado.

4.- El juez de primera instancia, el 28 de junio de 2023, resolvió no revocar su determinación, por lo que concedió el recurso de alzada; razón por la cual, se conoce del proceso en esta instancia.

II.- CONSIDERACIONES

5.- Sea lo primero precisar, que esta instancia es competente para conocer el recurso de apelación incoado al tenor del numeral 8° del artículo 321 del C.G.P., por lo tanto, resulta viable el estudio por la vía del recurso vertical.

6.- Es del caso señalar primeramente que las medidas cautelares se destacan por "(…) *su carácter eminentemente accesorio e instrumental, sólo busca reafirmar el cumplimiento del derecho solicitado por el demandante…"*[2] y, de manera preventiva, en ciertos casos, por fuera del proceso, antes o en el curso del mismo, siempre y cuando se reúnan ciertos requisitos.

En la censura se discute la procedencia del depósito de dineros recaudados por concepto de arrendamiento de las áreas comerciales en un fondo de inversión para que generen rendimientos, en tanto se produce su distribución, como medida cautelar innominada.

Para emprender, entonces, el estudio de la alzada es menester traer las bases doctrinales de las medidas cautelares innominadas y los requisitos para su procedibilidad.

La Corte Constitucional en Sentencia C-835 de 2013, asentó:

---

[2] López Blanco, Hernán Fabio. Procedimiento civil, tomo II, pág. 875. 9ª edición. Dupré Editores. Bogotá D.C., 2009

"Las medidas innominadas son aquellas que no están previstas en la ley, dada la variedad de circunstancias que se pueden presentar y hacen difícil que sean contempladas todas por el legislador, que pueden ser dictadas por el juez acorde con su prudente arbitrio, para "prevenir que pudiera quedar ilusoria la ejecución del fallo o cuando hubiera fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra"

Con la entrada en vigencia del Código General del Proceso, algunos doctrinantes han abordado el tema de las cautelas innominadas, reseñando algunos de los requisitos para que se puedan decretar, así:

"1. Que lo pretendido por el demandante sea probablemente lo que se acogerá en la sentencia (apariencia de buen derecho), lo cual supone estudiar el derecho material que legitima la pretensión. El juez para hacer esa proyección, debe estudiar juiciosamente la demanda y las pruebas que se hayan acompañado con la demanda.

(…)

2. Que se pruebe que se producirá un daño si no se toma la medida. Como el juez tiene de acuerdo con inciso 3 de la letra c), la posibilidad de decretar la medida si es necesaria. Calificar la necesidad queda a la ponderación del juez, que debe hacer un test racional si no se toma la medida (indispensable) el daño se produce, en caso contrario la debe negar (…) La prueba debe ejercer regencia sobre la racionalidad del juez para que se represente la imperiosa necesidad de tomar la medida. Podemos afirmar que la libertad del juez para decretarla resulta sitiada por la necesidad.

3. La efectividad, se toma en el sentido que sea idónea"[3]

Sobre la apariencia de buen derecho la doctrina citada, ha sostenido que el juez: "(…) *tendrá en cuenta la apariencia de buen derecho (fumus boni juris), es decir, siendo el derecho del demandante más probable que el del demandado. La verosimilitud depende del contenido del derecho material de la "alegación", el cual debe ser identificado con base en la tutela pretendida y en los fundamentos invocados para su obtención. De modo que el derecho a obtener esta participación, no se contenta con la mera constatación de la verosimilitud, como de la mera "alegación" sin contenido, sino que la verosimilitud solamente puede ser*

[3] PARRA QUIJANO, Jairo., *"Medidas cautelares innominadas, XXXIV CONGRESO COLOMBIANO DE DERECHO PROCESAL, 1ª Edición, Bogotá D.C. Editorial Universidad Libre, 2013*

comprendida a partir de las diferentes necesidades del derecho material (tipos de tutela y variedad de sus presupuestos)".

Y en cuanto a la oportunidad, para decretar la media cautelar, "***el juez puede posponer su pronunciamiento, cuando se la ha solicitado con la demanda, hasta que se haya trabado la relación jurídica procesal, con el fin de tener en cuenta lo que diga el demandado, para tener un mayor sustento del fumus boni iuris, pero debe en esta hipótesis tener en cuenta los criterios de necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida****".* (Subrayado y negrilla fuera de texto)

De lo anterior se desprende sin dubitación alguna, que para que la medica cautelar sea decretada por el juez, no basta con la formulación de la demanda y la solicitud de parte, sino que la misma no sea de las que el legislador ha contemplado y nominado para otro tipo de asuntos, pues aceptar otro postulado implicaría desconocer el principio de taxatividad que gobierna la materia.

Sobre el particular la Corte refiere que "(…) *el decreto de cautelas, desde antaño, ha tenido un manejo muy restringido, pues sólo podrán ordenarse las que expresamente autorice el legislador, y en las oportunidades que el mismo ordenamiento dispone* (…) (SC, CSJ. 8 may 2018. AC1813)

6.- Ahora bien, si nos ceñimos al tenor literal de la medida deprecada, encuentra el Tribunal que aquella no resulta viable por el sendero escogido por los demandantes –artículo 590 CGP-, si se repara que lo pretendido por aquellos es lograr la retención de los dineros que la demandada reciba por los eventuales cánones que genere la zona comercial de una fracción del proyecto inmobiliario, lo que en otras palabras se traduce en un embargo de dineros, siendo ésta una cautela propia y exclusiva de los procesos de naturaleza ejecutiva, sin que el hecho de que sean depositados en un fondo de inversión la convierta en una medida innominada.

En consecuencia, no había necesidad de verificar el cumplimiento de los requisitos que prescribe el literal c) del numeral 1 del artículo 590 del C.G.P., sino su procedencia frente a la naturaleza las pretensiones del proceso.

Por tanto, se confirmará el proveído apelado, pero por las razones expuestas.

III.- DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en Sala Civil,

IV. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el numeral 2° del auto proferido, el 8 de junio de 2023, por el Juzgado Cincuenta y Cinco Civil del Circuito de Bogotá, pero atendiendo a las consideraciones que se expusieron en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: En firme la decisión, remítase al Juzgado de conocimiento para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA SAAVEDRA LOZADA
Magistrada

ASL/MATE

Firmado Por:

Adriana Saavedra Lozada

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Sala 001 Civil

Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **3fc7714db570ae98732c626ea857b56181cf5fe496bbc6979d8a828023c08be8**

Documento generado en 29/02/2024 11:59:24 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica